

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN DERECHO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN
POLÍTICA CRIMINAL

ANÁLISIS CRÍTICO TRIDIMENSIONAL DE LA POLÍTICA CRIMINAL A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL NÚCLEO FAMILIAR, EN EL ESTADO DE MÉXICO

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRO EN POLÍTICA CRIMINAL

PRESENTA:
LIC. BUENROSTRO BRISEÑO RAÚL JAVIER

TUTOR
DR. PEDRO UGALDE SEGUNDO

MIEMBROS DEL COMITÉ
DR. PEDRO UGALDE SEGUNDO (FES ARAGÓN).
DR. CARLOS GONZÁLEZ BLANCO DE (F. DERECHO).
DR. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ LEÓN (FES ACATLÁN).
MTRO. ROBERTO CALIXTO MÁRQUEZ (EXTERNO).
MTRA. MILCA JUDITH CALZADA LEMUS (FES ARAGÓN).

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, NOVIEMBRE DE 2024

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM
Biblioteca Central
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Dedicatoria

A mi hermana, Ivonne Cecilia Buenrostro Briseño. Este trabajo es un acto de reflexión y una disculpa sincera. Durante años, fui víctima de un adoctrinamiento del que no era consciente, un machismo que influyó en mi comportamiento y forma de ser. Sin embargo, gracias al estudio y la preparación que este proceso me brindó, he logrado liberarme de esas cadenas invisibles. No cabe duda de que la luz del conocimiento tiene el poder de transformar incluso las actitudes más arraigadas. Por ello, quiero agradecerte por tu paciencia y comprensión.

Compañera de mi infancia y constante inspiración en mi vida adulta, este logro también es tuyo. Gracias por tu amor incondicional, por impulsarme siempre a ser mejor, y por caminar a mi lado. Ten la certeza de que te amo y que siempre estaré para ti cuando lo necesites.

Índice

Dedicatoria 2
Índice 3
Lista de abreviaturas 8
Agradecimientos 10
Introducción 11
Capítulo I: La Vigencia del Derecho Humano de la Mujer a una Vida Libre de Violencia Como Política Criminal 16
1.1 La eficacia para regular el derecho humano a una vida libre de violencia a través de la política criminal 17
1.1.1 De la teoría a la práctica: hacia una política criminal holística 22
1.2 El Estado de Derecho como marco histórico del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia 25
1.2.1 Neoliberalismo en la balanza: desafíos y propuestas 35
1.3 El papel de la deontología en la protección del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia 39
1.3.1 Análisis genealógico y ético-crítico del marco jurídico para la protección de la mujer 43
1.3.1.1 Evolución histórica y filosófica internacional de los derechos de las mujeres 45
1.3.1.1.1 El origen de la CEDAW y su impacto en los derechos de las mujeres 45
1.3.1.1.2 Ética kantiana y los marcos internacionales de protección 53
1.4 Evolución histórica y filosófica de los derechos de las mujeres en los Estados Unidos Mexicanos 55
1.4.1. La evolución de la LGAMVLV 58
1.4.2. Equilibrio ético y legal en la LGAMVLV 62
1.4.2.1 Análisis ético de las órdenes de protección administrativas en la LGAMVLV 64
1.4.2.2 Análisis ético de las órdenes de protección judicial en la LGAMVLV 67
1.5 La respuesta de EE. UU. a la violencia contra la mujer desde la perspectiva de la autodeterminación 69
1.5.1 FVPSA: Un pilar en la lucha de la violencia familiar en Estados Unidos 71

1.5.1.1 Autonomía y dignidad en la FVPSA 73
1.5.2 VAWA: Transformación legislativa y su relevancia social en Estados Unidos..... 75
1.5.2.1 Universalidad y dignidad en VAWA 79
1.6 Reflexiones críticas finales..... 81
Capítulo II: Hacia una Comprensión Multinivel de la Prevención de la Violencia Contra la Mujer en el Núcleo Familiar 86
2.1 Niveles para prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar 88
2.1.1 Prevención de primer nivel 92
2.1.2 Prevención de segundo nivel..... 97
2.1.3 Prevención de tercer nivel 106
2.2 Evolución histórica y teórica de la ideología de género feminista 109
2.2.1 Análisis genealógico de la ideología de género feminista..... 111
2.2.1.1 Cisgénero, transgénero y la evolución de las normas sociales 115
2.2.2 Violencia contra la mujer en el núcleo familiar y violencia de género .. 117
2.2.2.1 Victimización masculina, enfoques históricos y contemporáneos en arte y sociedad 124
2.2.2.2 Evolución y respuestas a la violencia de género 127
2.3 Raíces y ramificaciones del patriarcado..... 128
2.3.1 El legado del machismo..... 138
2.3.2 Misoginia, intersección entre trastornos de personalidad y adoctrinamiento machista..... 143
2.4 Reflexiones críticas finales..... 148
Capítulo III: La Respuesta del Estado para Prevenir la Violencia Contra la Mujer en el Núcleo Familiar..... 151
3.1 El estatus del primer nivel preventivo de la PCPVCMNF..... 152
3.1.1 Lucha política y educativa en la defensa del Artículo 3º de la CPEUM... 153
3.1.1.1 El rol del SNTE en la PCPVCMNF 156
3.1.2 El interés superior de la niñez en la educación primaria..... 160
3.1.2.1 La miseria del interés superior de la niñez 168
3.1.3 Análisis empírico del primer nivel preventivo de violencia en secundarias 170
3.1.4 El impacto del neoliberalismo radical implementado en el nivel medio superior..... 177

3.2 El estatus del segundo nivel preventivo de la PCPVCMNF 190
3.2.1 La policía en el Estado de México 191
3.2.1.1 La policía preventiva en México: niveles, percepción y su realidad operativa 194
3.2.1.1.1 Estrategias para disuadir la violencia contra el género mujer en Cuautitlán Izcalli 199
3.2.1.2 La policía reactiva en México: niveles y su doble faceta en la lucha de la violencia contra la mujer 207
3.2.1.2.1 La doble cara de la flagrancia: protección rápida vs. riesgo de abuso 208
3.2.2 La estrategia para atender la violencia contra la mujer en el núcleo familiar 213
3.2.2.1 El estatus de la FEADVVG 216
3.2.2.1.1 Evaluación de las medidas de protección administrativas: estudio de caso 223
3.3 El estatus del tercer nivel preventivo de la PCPVCMNF 230
3.3.1 La reinserción social según la ENPOL 231
3.3.2 La realidad del Sistema Penitenciario 234
3.3.2.1 Sobrepoblación 235
3.3.2.2 Falta de obligatoriedad 240
3.3.2.3 Libre uso y posesión de dinero en efectivo 242
3.3.2.4 Supervisión judicial inexistente 244
3.3.3 Contrapeso judicial: corrupción y redención en la procuración de justicia 245
3.3.3.1 Observaciones empíricas desde el CPRSNBX 249
3.3.4 Realidad penitenciaria vigente y su ineficacia en la prevención de la violencia contra la mujer 254
3.4 Reflexiones críticas finales 260
Capítulo IV: El Espectro Político Mexicano de la PCPVCMNF 265
4.1 Desentrañando el espectro político mexicano 266
4.1.1 La Radicalización como fenómeno político 268
4.1.1.1 Radicalización política de derecha 271
4.1.1.2 Radicalización política de izquierda 280
4.1.1.3 Política de centro 288
4.2 ESDD y política de centro 292

4.2.1 El espejismo de la 4T 293
4.3 El alimento de la actual política mexicana 297
4.3.1 Adoctrinamiento fanatizado 302
4.3.2 Politización 307
4.3.3. El paradigma neoliberal mexicano ¿capitalismo? 309
4.3.3.1. Evidencias de mal interpretación 316
4.3.3.1.1. Vaucherismo 317
4.3.3.1.2 Estado policial tradicional 320
4.3.4 Mediatización 324
4.3.5 Populismo 327
4.3.5.1 Enfoque ideológico 327
4.3.5.2 Enfoque estratégico 328
4.3.5.3 Enfoque discursivo 329
4.3.6 Ideología de género feminista 330
4.4 Reflexiones críticas finales 333
Capítulo V: Rompiendo el Espejo 337
5.1 Estrategias para alcanzar un ESDD 339
5.1.1 Cambio de paradigma 340
5.1.1.1 El paradigma de la seguridad ciudadana 341
5.1.1.1.1 La miseria de la seguridad ciudadana 347
5.1.2 Sistema criminológico 356
5.1.2.1 Fundamentos y aplicaciones de la IA en criminología 360
5.2 Propuestas de primer nivel preventivo para fortalecer la PCPVCMNF 367
5.2.1 Reflexión crítica del sistema educativo norteamericano 368
5.2.1.1 Propuesta híbrida para la gestión educativa y la prevención de la violencia 372
5.2.1.2 IA y educación Integral 377
5.3 Propuestas de segundo nivel preventivo para fortalecer la PCPVCMNF ... 383
5.3.1 Reflexión crítica del sistema de procuración de justicia norteamericano a través de un caso familiar 384
5.3.1.1 El fortalecimiento de la FEADVVG 386
5.3.1.1.1 Vivienda digna como estrategia preventiva de la violencia contra la mujer 392

5.3.1.1.2 Profesionalización de la policía 396
5.3.1.2 Un SCI para combatir la violencia contra la mujer 405
5.4 Propuestas de tercer nivel preventivo para fortalecer la PCPVCMNF 411
5.4.1 Reflexión crítica del sistema penitenciario norteamericano 411
5.4.1.1 Reformulación y modernización del sistema penitenciario mexicano 419
5.4.1.1.1 Educación y formación para el trabajo 422
5.4.1.1.2 Salud, deporte y justicia social 428
5.4.1.1.3 La restricción del uso y la posesión de dinero en efectivo en el contexto penitenciario 435
5.4.1.1.4 Crítica y propuesta para la automatización del sistema penitenciario mexicano 440
5.4.2 Propuesta para derogar el feminicidio como tipo penal 446
5.4.2.1 El error moral del feminicidio como figura penal 447
5.4.2.2 El espejo legal del feminicidio 452
5.5 Reflexiones críticas finales 455
Conclusiones 461
Propuestas 465
A. Primer Nivel Preventivo: Derecho a la Educación y Prevención de la Violencia desde la Infancia. 465
B. Segundo Nivel Preventivo: Policía, Procuración de Justicia y Medidas de Protección para Prevenir la Violencia Contra la Mujer 474
C. Tercer Nivel Preventivo: Reinserción Social y Prevención de la Reincidencia de la Violencia Contra la Mujer 485
Bibliografía 495
Hemerografía 508
Legisgrafía 513
Filmografía 520
Otros materiales: Sitios web, recursos digitales, blogs, conferencias, presentaciones, entrevistas y/o exposiciones. 521

Lista de abreviaturas

4T: Cuarta Transformación

AGNU: Asamblea General de las Naciones Unidas.

AMLO: Andrés Manuel López Obrador

BCDC: Blaine County Detention Center (Centro de Detención del Condado de Blaine)

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)

CIM: Comisión Interamericana de Mujeres

CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales

CONADE - Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

CPEM: Código Penal del Estado de México

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

CPF: Código Penal Federal

CPRSNBX: Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca.

CW: Consenso de Washington (Washington Consensus)

DIF: Departamento Integral de la Familia.

ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares

ENPOL: Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad

FEADVVG: Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

FVPSA: Ley de Prevención de la Violencia Familiar y Servicios (Family Violence Prevention and Services Act)

IA: Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence)

INE: Instituto Nacional Electoral

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

LGE: Ley General de Educación

LGSNSP: Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

LMI: Ley Modelo Interamericana

LNEP: Ley Nacional de Ejecución Penal

MESECVI: Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará

OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD - Organization for Economic Cooperation and Development).

OEA: Organización de los Estados Americanos

OMS: Organización Mundial de la Salud

ONU: Organización de las Naciones Unidas

OPS: Organización Panamericana de la Salud

PCPVCMNF: Política Criminal para la Prevención de la Violencia contra la Mujer en el Núcleo Familiar

PDI: Policía de Investigación.

SCI: Sistema Criminológico Inteligente

SEP: Secretaría de Educación Pública

SNSP: Sistema Nacional de Seguridad Pública

SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

SSA: Secretaría de Salud

STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social

TIC´s: Tecnologías de la Información y la Comunicación

VAWA: Violence Against Women Act (Ley Contra la Violencia Hacia las Mujeres).

Agradecimientos

Esta investigación, iniciada en 2022, ha requerido innumerables horas de dedicación. Aunque sería imposible mencionar a todos los que han contribuido, deseo expresar mi agradecimiento a mi familia, especialmente a mi madre, a quien le debo la vida. Asimismo, estoy profundamente agradecido con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por la oportunidad de formarme en sus aulas. Un reconocimiento especial merecen los profesores que me impartieron cátedra, en particular mi tutor de tesis, el Dr. Pedro Ugalde Segundo, cuyo apoyo incondicional fue crucial en la revisión del manuscrito. También extiendo mi gratitud al Mtro. Roberto Calixto Márquez, quien me instruyó sobre la complejidad y la importancia de los argumentos académicos, y cuyo talante genealógico fue esencial para alcanzar la profundidad de esta investigación. Agradezco a la Mstra. Elizabeth Díaz Lozada y a la Mstra, Milca Judith Calzada Lemus por su confianza y enseñanzas fundamentales en la estructuración de este trabajo, y finalmente al Mtro. Fernando Blancas Meneses, cuyas férreas críticas y sugerencias bibliográficas me permitieron mejorar sustancialmente la investigación.

Finalmente, pero no menos importante, deseo expresar mi profundo agradecimiento al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) por su apoyo financiero a través de la beca otorgada durante el desarrollo de esta investigación. Históricamente, el respaldo económico ha jugado un papel crucial en la capacidad de filósofos, sociólogos y escritores para dedicarse plenamente al análisis crítico de las ideas y al desarrollo de teorías trascendentales. Al igual que en los casos de grandes pensadores del pasado, cuya tranquilidad económica les permitió explorar diversas ideologías —ya fueran socialistas, comunistas o conservadores—, el apoyo de CONAHCYT ha sido fundamental para proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo esta investigación de manera adecuada y dedicar el tiempo requerido para su realización.

Introducción

La disciplina tarde o temprano
vencerá a la inteligencia
Yokoi Kenji

Hasta hace poco, las investigaciones sobre género eran percibidas meramente como una respuesta a demandas socioculturales emergentes. De hecho, cuando revelaba el tema de mi tesis, a menudo recibía comentarios despectivos como: ¡Otra tesis de género, eso ya pasó de moda! Esta percepción errónea se debe a que la ideología de género feminista, a través del uso del lenguaje, no sólo ha popularizado el término sino también ha introducido conceptos como el feminicidio, llevado a confusiones como equiparar la violencia contra la mujer con la violencia de género. Además, esta influencia ideologíaca de género se fortalece con una versión del neoliberalismo en vías de desarrollo, que eclipsa los factores reales que provocan la violencia contra la mujer, afectando negativamente la comprensión generacional de estos problemas.

Con base en los comentarios machistas recibidos, se intenta hacer creer que el problema de la violencia contra la mujer ha sido superado, como si fuera un tema del pasado o simplemente una moda pasajera. No obstante, la realidad contemporánea demuestra lo contrario: este flagelo persiste y continúa sin una solución adecuada. Ante esta situación, la presente tesis se propone enfrentar este desafío de manera rigurosa, desarrollando una teoría sobre la violencia contra la mujer, explicando en detalle por qué las políticas criminales vigentes han resultado ineficaces para abordar el problema.

Desafortunadamente, en el Estado de México, la situación es particularmente grave. La violencia contra la mujer en el núcleo familiar no sólo persiste sino que alcanza cifras alarmantes. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, este tipo de violencia es un grave problema social con profundas implicaciones en los derechos humanos y la integridad física y emocional de las mujeres.[1] Ante esta situación, esta investigación

[1]Vid. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), *"*Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021*"*, comunicado de prensa núm. 485/22, México, INEGI, 2022, pp. 2,3, disponible en:

surge como respuesta a la necesidad urgente de revisar y reformular las políticas criminales actuales, que han demostrado ser insuficientes y en muchos casos ineficaces.

Por consiguiente, la política criminal implementada actualmente y no sólo en el Estado de México, sino a nivel federal, muestra deficiencias significativas en su estructura y aplicación, resultando en una protección inadecuada para las víctimas y un enfoque limitado que no aborda las causas subyacentes de la violencia. Frente a este panorama, esta investigación busca explorar cómo una perspectiva tridimensional puede ofrecer un enfoque más holístico y efectivo. Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación es desarrollar una teoría que nos ayude a entender y explicar por qué la política criminal, encargada de prevenir tridimensionalmente la violencia contra la mujer en el núcleo familiar mexicano no funciona, proponiendo finalmente un cambio de paradigma.

Los objetivos específicos de esta investigación son: (1) analizar la evolución del derecho de las mujeres a una vida sin violencia y su relevancia ética dentro del Estado de derecho; (2) definir los tres niveles de prevención de la violencia, diferenciando entre violencia contra la mujer en el núcleo familiar y violencia de género; (3) evaluar la efectividad de las políticas actuales destinadas a prevenir y reducir la violencia contra la mujer, explorando sus causas profundas y los factores que la perpetúan; (4) Identificar y revelar el espectro político en el que se materializa la vigente Política Criminal para la Prevención de la Violencia contra la Mujer en el Núcleo Familiar (PCPVCMNF), y (5) proponer un sistema criminológico tridimensional que fiscalice y evalué la PCPVMNF, a efecto de optimizar las respuestas ejecutivas, legislativas y judiciales. La pregunta central de la investigación es: ¿Por qué las políticas criminales para abordar la violencia contra la mujer en el Estado de México no funcionan?

Este estudio es crítico dada la alta incidencia de violencia contra la mujer en el Estado de México. Al proponer un enfoque tridimensional, se busca no sólo sancionar a los agresores sino también prevenir la incidencia de la violencia a través

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf (fecha de consulta: 12 de octubre de 2023).

de la educación y el fortalecimiento de las redes de apoyo social y legal para las víctimas. La hipótesis de esta investigación es que, si se salvaguarda el derecho humano a una vida libre de violencia tanto de hobres como de mujeres, mediante la integración efectiva de medidas preventivas, disuasivas y punitivas, entonces se reducirá la violencia contra la mujer no solo en el Estado de México sino a nivel federal.

En resumen, el enfoque de esta investigación es eminentemente académico, sustentado en una metodología científica rigurosa que garantiza la validez de los hallazgos. Sin embargo, es inevitable que en este análisis crítico aflore un compromiso político y ético con la causa que nos ocupa. Más que limitarse a exponer los descubrimientos obtenidos, el propósito último de este trabajo es contribuir al diseño de prácticas políticas efectivas. Estas propuestas están orientadas a guiar a los gobiernos actuales y futuros en la implementación de estrategias preventivas que enfrenten la violencia contra la mujer en el ámbito familiar de manera integral y con un impacto real.

Esta investigación está organizada en cinco capítulos: En el primer capítulo se aplica una metodología interdisciplinaria que integra técnicas de análisis descriptivo, normativo, histórico y deontológico. Se comienza con un análisis descriptivo para delinear el estado actual de las leyes y políticas relacionadas con la violencia contra la mujer, seguido por evaluaciones normativas que examinan estas políticas a través de un prisma ético y moral. Adicionalmente, se emplean comparaciones históricas para entender la evolución de las respuestas institucionales y legales a lo largo del tiempo. Por último, se utiliza un enfoque deontológico para garantizar que las propuestas de reformas respeten los principios de dignidad y derechos humanos, asegurando así que las políticas analizadas sean éticamente sólidas y efectivamente orientadas a combatir la violencia contra la mujer.

En el segundo capítulo se emplean métodos interdisciplinarios que combinan el análisis normativo y legal con la evaluación de políticas públicas, lo que permite examinar tanto la legislación vigente como la eficacia de las intervenciones actuales. Se realiza un estudio teórico profundo sobre la ideología de género feminista,

explorando cómo las construcciones sociales y culturales afectan las políticas y prácticas. Además, se utiliza una metodología comparativa para contrastar diferentes estrategias de prevención, identificando los enfoques más efectivos. Este abordaje interdisciplinario integra perspectivas de la criminología, la sociología y el derecho, facilitando un análisis exhaustivo que va más allá de la superficie de las políticas y llega a las raíces culturales y estructurales que sustentan la violencia contra la mujer en el ámbito familiar.

El tercer capítulo se desarrolla mediante una metodología cualitativa que combina entrevistas en profundidad, análisis documental y observaciones empíricas. Este enfoque permite una evaluación crítica de las políticas y estrategias implementadas en el Estado de México para prevenir la violencia contra la mujer. Utilizamos el método socrático de la mayéutica para profundizar en las entrevistas, facilitando la identificación y comprensión de las percepciones y experiencias de los participantes, quienes incluyen docentes, miembros de la policía, y funcionarios públicos. El análisis se complementa con nuestro marco teórico, el cual, por su robustez, no sólo permite una síntesis integral de los hallazgos, sino que se evalúa críticamente las estrategias actuales, a efecto de ir identificando el espectro político en el que se materializan.

El cuarto capítulo se desarrolla utilizando una metodología crítica-genealógica que permite desentrañar las raíces y el desarrollo histórico de la radicalización política en México y su impacto en la PCPVMNF. A través de un análisis detallado del espectro político y de las posturas adoptadas de este mismo por la actual administración y sus efectos en la cohesión social y la formulación de políticas públicas, se destaca la contradicción entre el discurso progresista y las prácticas conservadoras. Este análisis incluye la revisión de teorías políticas, económicas y sociales, así como el estudio de casos empíricos que ilustran la realidad compleja y multifacética del contexto mexicano, a efecto de ir preparando las propuestas y recomendaciones para mejorar la efectividad de las políticas preventivas y fortalecer la protección de las mujeres en el núcleo familiar.

Finalmente, el quinto capítulo adopta una metodología multidisciplinaria y crítica, basada en la observación empírica, el análisis de datos y la revisión teórica

de conceptos clave en criminología, seguridad ciudadana y políticas públicas. El enfoque principal se centra en la teoría del cambio de paradigmas de Thomas Kuhn, aplicada para reexaminar y transformar las políticas de seguridad en México, particularmente en lo que respecta a la violencia contra la mujer. A través de un análisis comparativo con el sistema estadounidense y un enfoque epistemológico basado en el *iusrealismo*, este quinto capítulo busca identificar las distorsiones normativas y sociales que afectan la aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Este último capítulo, basado en nuestra teoría del espejo, inspirada en la alegoría de la caverna de Platón, propone un análisis crítico de la realidad jurídica y social. Según esta teoría, la percepción que tenemos de dicha realidad es análoga a las sombras proyectadas en la caverna: distorsionada y alejada de la verdad. La propuesta central es romper con estas ilusiones y adoptar una interpretación objetiva y ética de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que permita aplicar sus principios de manera más justa y efectiva.

La investigación se apoya en estudios de caso, experiencias personales, y en un sólido marco teórico que abarca desde la teoría de los sistemas complejos adaptables hasta el uso de la inteligencia artificial (IA) en criminología. Dentro de este marco, se plantea el Sistema Criminológico Inteligente (SCI) como una herramienta esencial para la fiscalización y evaluación continua de las políticas de seguridad. Este enfoque integral y ético tiene como finalidad prevenir la violencia contra la mujer, promoviendo una supervisión eficaz y garantizando el cumplimiento de los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales.

Capítulo I: La Vigencia del Derecho Humano de la Mujer a una Vida Libre de Violencia Como Política Criminal

No basta con hablar de paz.
Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla.
Eleanor Roosevelt

Inicialmente, este capítulo aborda, desde una perspectiva multidisciplinaria basada en el trabajo de diversas figuras académicas, las intersecciones entre el derecho, la psicología, la sociología y la educación. Explora cómo las dinámicas de poder y la ética social influyen en las políticas gubernamentales relativas a la violencia contra la mujer. La metodología de investigación adoptada en este análisis, se fundamenta en enfoques contemporáneos y clásicos, integrando conceptos de filósofos como Lefort y Foucault para comprender la política criminal en contextos históricos y actuales.

Posteriormente, el estudio destaca la interrelación entre el Estado de Derecho, la política criminal y las estructuras sociales y legales. Examina la evolución de las políticas públicas y su impacto en la regulación delictiva y la promoción de la justicia social. A través del análisis de influencias históricas y reformas actuales, se evalúa cómo el poder político, la ley y los derechos fundamentales modelan las respuestas institucionales a la violencia contra la mujer. Se aboga por reformas continuas que respondan a los cambios sociales y a los desafíos de desigualdad provocados por la versión actual y vigente del paradigma neoliberal, caracterizada por lo que el Dr. Nakahodo denomina *lujuria económica*.[2] Esta lujuria económica, entendida como la obsesión desmedida por el crecimiento económico y la acumulación de riqueza en detrimento del bienestar social y los

[2] Lujuria económica es un término que utiliza el Dr. Antonio Cholley Nakahodo Rivera para referirse a un estado psicosocial en el que las personas se encuentran cegadas por la versión del paradigma neoiberal vigente, y en donde se busca de forma individual el enriquecimiento económico. Vid. Nakahodo Rivera, Antonio Cholley, "Narco Delincuencia Globalizada*" Conferencia presentada en las Jornadas de Política Criminal*, México, UNAM, Facultad de Estudios Superiores Aragón, viernes, 28 de abril de 2023, cartel disponible en: *https://drive.google.com/file/d/13hRckaDWYdR2PKTSUd8ImiTU8pcPKiTh/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 20 de septiembre de 2023).

derechos humanos, exacerba las desigualdades de género y dificulta la efectiva protección de las mujeres contra la violencia.

Finalmente, se propone una perspectiva deontológica como herramienta para contrarrestar las deficiencias éticas presentes en las políticas públicas. Este enfoque destaca la centralidad de la ética y la moralidad en la administración de justicia, subrayando las obligaciones ético-legales de los funcionarios públicos. Al someter el marco jurídico a un análisis genealógico y ético, se profundiza en cómo las leyes destinadas a salvaguardar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia deben respetar y promover la dignidad y los derechos humanos. En este contexto, se enfatiza el papel fundamental que desempeña la ética en la formulación de respuestas gubernamentales, asegurando que estas sean tanto efectivas como respetuosas de los derechos humanos.

La investigación resalta la importancia de integrar principios éticos en la respuesta del Estado a la violencia contra la mujer, siguiendo el imperativo categórico de Immanuel Kant, que establece: "…solamente el hombre, y con él, toda criatura racional, es un fin en sí mismo."[3] Esta máxima filosófica refuerza la necesidad de que las políticas públicas no sólo se orienten a resolver problemas concretos, sino que también respeten la dignidad intrínseca de cada individuo.

En síntesis, este capítulo establece las bases teóricas y conceptuales para el análisis y desarrollo de la variable independiente de esta tesis. Se enfatiza la necesidad de un enfoque integral en la creación e implementación de políticas criminológicas efectivas que aborden las causas subyacentes de la violencia contra la mujer, particularmente en el ámbito familiar.

1.1 La eficacia para regular el derecho humano a una vida libre de violencia a través de la política criminal

Para comenzar, queremos afirmar osadamente que promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a una vida libre de violencia constituye un pilar fundamental de la política criminal. Esta afirmación se sustenta en la idea de que abordar problemáticas criminológicas mediante acciones estratégicas

[3] Kant, Immanuel, *Crítica de la Razón Práctica*, trad. de J. Rovira Armengol, Buenos Aires, La Página S.A., 2003, p. 77.

integrales implica una incursión directa en el ámbito político. Para sustentar esta postura, es imprescindible explorar las bases lingüísticas y conceptuales relevantes. El término *política* deriva del griego *polis*, que significa *ciudad o comunidad*, y originalmente hacía referencia a todo lo concerniente a la ciudad y sus ciudadanos.[4] En este contexto, la *polis* se concibe como una entidad dual, lo que nos permite entender la política criminal como un esfuerzo colectivo y comunitario dirigido hacia el bienestar y la seguridad de la comunidad.

En un contexto más contemporáneo, la distinción entre *lo político*, *la política y las políticas* emerge como un concepto central en la comprensión de la democracia moderna, tal como lo explora Lefort en su análisis sobre la estructura y la esencia de las sociedades democráticas. *Lo político* refleja la dimensión simbólica y fundamental del orden social, donde la organización de la sociedad y la manifestación del poder se entrelazan en un continuo proceso de definición y redefinición. Lefort asegura que "lo político se revela... en ese doble movimiento de aparición y ocultamiento del modo de institución de la sociedad",[5] destacando cómo la estructura social se despliega a través de sus propias contradicciones y divisiones.

Por su parte, *la política* se distingue por su enfoque en el ejercicio y la gestión del poder, el cual se orienta a navegar y administrar las divisiones inherentes a la sociedad, dentro del marco conceptual establecido por lo político. Lefort profundiza en la naturaleza conflictiva de *la política* al afirmar que esta "…se ejerce en función del conflicto"[6], sugiriendo que su esencia radica en ser un campo de estudio definido, y que se centra primordialmente en las dinámicas de poder, gobernanza y autoridad. A través de esta perspectiva, podemos entender que *la política*, más que un mero conjunto de prácticas gubernamentales, constituye un dominio específico donde las relaciones de poder y los conflictos son no sólo inevitables sino fundamentales para la configuración y reconfiguración continúa de la sociedad.

---

[4] Vid. Aristóteles, *Política,* trad. de Manuela García Valdés, España, Gredos, 2022, pp. 34-37.
[5] Lefort, Claude, *La Incertidumbre Democrática: Ensayos Sobre lo Político*, Edición de Esteban Molina, Barcelona, Anthropos Editorial, 2004, p. 39.
[6] Ibídem, p. 50.

En cuanto a *las políticas*, según Cohen, trasciende la comprensión de éstas como meras decisiones gubernamentales para adentrarse profundamente en los terrenos de la democracia deliberativa y la teoría del discurso. Cohen argumenta que *las políticas* constituyen más que instrumentos de poder; son la materialización de la voluntad colectiva, forjadas dentro de procesos deliberativos diseñados para fomentar una participación equitativa y activa de todos los ciudadanos en la esfera pública.[7] Esta perspectiva no sólo las posiciona como entidades que deben su legitimidad a la conformidad con el orden jurídico establecido, sino que también las vincula intrínsecamente a los valores e intereses sociales, asegurando su validez a través del logro del consenso y de una comunicación genuinamente racional. Por tanto, *las políticas*, en el marco de Cohen, se definen como prácticas democráticas que son legitimadas dentro del espacio público mediante el diálogo y la argumentación, promoviendo un modelo de gobernanza que es inclusivo, reflexivo y, sobre todo, participativo.

Por otro lado, el término *criminal* según la Real Academia Española (RAE) tiene sus raíces en el latín ***criminālis***, que originalmente hacía referencia a una acusación o cargo, reflejando desde la antigüedad la transgresión al orden social establecido. En uno de los primeros códigos legales de la Roma antigua, las XII Tablas, ya se usaba el concepto para describir actos punibles que atentaban contra la comunidad.[8] A lo largo de los siglos, el significado de *criminal* ha sido moldeado por las diversas normativas y las fluctuantes percepciones sociales de lo que

---

[7] Vid. Cohen, Joshua, "Deliberation and Democratic Legitimacy," trad. propia, en Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics, editado por James Bohman y William Rehg, Cambridge, Massachusetts Institute of Technology Press, 1997, p. 74, disponible en: *http://www.sze.hu/~smuk/Nyilvanossag_torvenyek_CEE/Szakirodalom/Deliberat%C3%ADv%20demokr%C3%A1cia/deliberative%20democracy%20book.pdf* (fecha de consulta: 10 de abril de 2024), paráfrasis traducida: "Ideal deliberation is free in that it satisfies two conditions. First, the participants regard themselves as bound only by the results of their deliberation and by the preconditions for that deliberation. Their consideration of proposals is not constrained by the authority of prior norms or requirements. Second, the participants suppose that they can act from the results, taking the fact that a certain decision is arrived at through their deliberation as a sufficient reason for complying with it."

[8] Vid. Kaser, Max., Knütel, Rolf., Lohsse, Sebastian., "Derecho privado romano," España, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2022, p. 49, disponible en: https://books.google.com/books?id=H9CIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Derecho+privado+romano&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwivkZWQhIyJAxVKIEQIHdSIKYAQ6wF6BAgLEAE (fecha de consulta: 10 de abril de 2024).

constituye un delito, un proceso profundamente influenciado por los valores éticos, morales y las dinámicas de poder imperantes en cada época.

De este modo, actos que en una época eran considerados crímenes graves, como la herejía o la brujería en la Edad Media, han sido reemplazados en la modernidad por la regulación de nuevas conductas. Actualmente, la interacción entre los conceptos de *la política* y *criminal* destaca una dimensión tanto gubernamental como ética en el abordaje de la conducta delictiva, subrayando el papel del Estado en la regulación de lo criminal mediante leyes y estrategias diseñadas para mantener el orden social, proteger a la ciudadanía y fomentar la justicia. Michel Foucault subraya cómo el Estado, mediante sus políticas y estrategias penales, no sólo busca castigar o reprimir las conductas delictivas, sino que también gestiona estas conductas de manera que contribuye a mantener el orden social, proteger a la ciudadanía y fomentar la justicia:

> La penalidad sería entonces una manera de administrar los ilegalismos, de trazar límites de tolerancia, de dar cierto campo de libertad a algunos, y hacer presión sobre otros, de excluir a una parte y hacer útil a otra; de neutralizar a éstos, de sacar provecho de aquellos. En suma, la penalidad no 'reprimiría' pura y simplemente los ilegalismos; los 'diferenciaría', aseguraría su 'economía' general.[9]

Por su lado, Norberto Bobbio resalta cómo la evolución del pensamiento político ha enfatizado la importancia del Estado en la regulación de lo criminal mediante leyes y estrategias, al distinguir la primacía de la política sobre otros poderes y subrayar su rol esencial en el mantenimiento del orden social, la protección de la ciudadanía y el fomento de la justicia:

> La diversa relación entre los tres poderes y la diferente manera de disponerlos en orden jerárquico están entre los rasgos más característicos de las grandes corrientes del pensamiento político y de la filosofía de la historia. La primacía de la política que distingue al pensamiento político moderno de Maquiavelo a Hegel se contrapone tanto a la primacía del poder espiritual que distingue a la época medieval de las grandes controversias entre el Estado y la Iglesia y a la cual la Iglesia romana y las otras iglesias jamás han renunciado como a la primacía del poder económico cuyo descubrimiento coincide con el

[9] Foucault, Michel, "Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión," trad, de e Aurelio Garzón del Camino, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2002, p. 252, disponible en: https://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf (fecha de consulta: 11 de agosto de 2024).

> nacimiento del mundo burgués y el inicio de la reflexión sobre el modo de producción capitalista.[10]

Como se puede observar, la evolución etimológica y conceptual de los términos *político* y *criminal* resalta la complejidad inherente a la política criminal, la cual representa una intersección integral entre el derecho, la moral y la gobernanza. Este análisis detallado no sólo revela cómo los cambios lingüísticos y conceptuales reflejan las transformaciones sociales, éticas y legales a lo largo de la historia, sino que también destaca cómo estos términos han influenciado nuestra comprensión y enfoque hacia la criminalidad y su regulación. Dentro de este marco, el derecho humano a una vida libre de violencia se consolida como una prerrogativa esencial de la política criminal, enfocada específicamente en la prevención de la violencia contra las mujeres.

Para continuar, también queremos dejar claro que, el derecho humano a una vida libre de violencia como medio dentro de las políticas criminales resalta la urgente necesidad de implementar estrategias específicas y bien dirigidas para alcanzar su fin; prevenir la violencia contra la mujer. Estas estrategias no deben limitarse únicamente a sancionar a los perpetradores, sino que también deben enfocarse en el abordaje de sus causas y el robustecimiento de los mecanismos de apoyo y protección una vez que se ha manifestado la violencia. La integración de esfuerzos para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a una vida libre de violencia en el marco de políticas criminales preventivas, proactivas y punitivas demuestra un compromiso ético y multidisciplinario hacia la erradicación de la violencia contra la mujer, alineándose con el objetivo general de nuestra investigación.

Este enfoque multidisciplinario, que incluye la colaboración de expertos en derecho, psicología, sociología y educación entre otras ciencias y disciplinas, es fundamental para desarrollar una política criminal integral que se enmarca dentro de la metodología del *sistema criminológico*.[11] Este sistema no sólo aborda las

[10] Bobbio, Norberto, *Estado, gobierno y sociedad: Por una teoría general de la política*, trad. de José F. Fernández Santillán, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, pp. 114, 115.

[11] El sistema criminológico, entendido como un conjunto interdisciplinario de estudios y prácticas, abarca diversas disciplinas como la criminología, sociología, psicología, derecho penal y ciencias forenses. Este sistema no sólo se enfoca en el estudio del crimen y las características de los

consecuencias de la violencia contra la mujer, sino que también atiende sus raíces culturales y sociales. La efectividad de tales políticas depende de una comprensión real y científica de las dinámicas de género y del compromiso ético por parte de todas las instituciones involucradas en su implementación. Así, el enfoque multidisciplinario no sólo enriquece la perspectiva con la que se aborda el derecho humano a una vida libre de violencia, sino que también asegura una mayor cohesión social, promoviendo cambios significativos en la cultura mexicana. Desde nuestra tesitura, el compromiso integral y colaborativo para construir una sociedad donde la violencia contra la mujer en el núcleo familiar sea efectivamente combatida y donde prevalezcan la justicia y el respeto por los derechos humanos, se debe gestionar de forma tridimensional.

1.1.1 De la teoría a la práctica: hacia una política criminal holística

La política criminal, una disciplina tanto compleja como multifacética, se extiende más allá de las metodologías tradicionales de tratamiento del delito y la desviación social, para incursionar en los dominios legales, sociológicos, económicos y filosóficos del modelo político de un Estado.[12] Este análisis, llevado a cabo desde la perspectiva de Laura Zúñiga y apoyado por expertos en el área de la criminología como García-Pablos de Molina que como más adelante veremos y estaremos de forma repetitiva citándolo, explora tres acepciones fundamentales de la política criminal, buscando no sólo desafiar las clasificaciones lineales sino también superar los límites convencionales de las disciplinas jurídicas. A través de este enfoque multidimensional, se pretende ofrecer una visión comprensiva que resalte la importancia de una comprensión holística en la formulación e implementación de políticas efectivas para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, enfatizando su naturaleza multidisciplinaria y la necesidad de abordajes integrados que reflejen la complejidad del campo.

---

delincuentes, sino que también incluye la prevención y disuasión del delito, así como el control del mismo a través de mecanismos judiciales y penitenciarios.

[12] Vid. Zúñiga Rodríguez, Laura, "Nociones de Política Criminal," Salamanca, Sólo soluciones, pp. 79-81, 2009, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/14esrXPe5Yn_qVAjuEiv7Zv9F--OIorYp/view?usp=drive_lin* (fecha de consulta: 11 de febrero de 2024).

El fundamento legal de nuestras afirmaciones es el segundo párrafo del Artículo 2º de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), en donde el Estado se compromete a desarrollar políticas de prevención social del delito de manera integral, abordando las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales. Además, tiene como función implementar programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que promuevan el respeto a la legalidad y la protección de las víctimas, cumpliendo así un papel crucial en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, tal como se establece, para este último pronunciamiento, en el tercer párrafo del 1er Artículo de la CPEUM. Como resultado, estas políticas, que incluyen desde la prevención del delito hasta la procuración y administración de justicia, destacan una dualidad de objetivos: el fortalecimiento del tejido social mediante sistemas de control informal y la lucha contra la criminalidad a través de sistemas de control formal. Esta dualidad refleja la complejidad de la política criminal, que oscila entre una visión macro de la sociedad y la gestión micro de los fenómenos delictivos, subrayando la necesidad de estrategias efectivas en prevención, procuración de justicia y sanción del delito.

Según Antonio García-Pablos de Molina, la prevención se puede clasificar en tres niveles.[13] La prevención de primer nivel, considerada desde nuestra perspectiva como la primera acepción dentro de la política criminal, subraya la necesidad de implementar estrategias integrales que aborden las causas de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Este nivel preventivo debe fundamentarse en un enfoque ético, alineado con los principios de los derechos fundamentales que rigen nuestro Estado de Derecho actual. La efectividad en la reducción de la violencia en el núcleo familiar se logra centrando esfuerzos en las causas subyacentes de este flagelo, como la carencia y violación de derechos fundamentales, particularmente aquellos necesarios en los primeros años de desarrollo humano. Por ende, es vital que las políticas preventivas de primer nivel promuevan, respeten, protejan y garanticen el

[13] Vid. García-Pablos de Molina, A., *Tratado de Criminología,* España, Tirant lo Blanch, 3ª. ed., 2003, pp. 983-985.

derecho humano a una vida libre de violencia, dentro de un marco ético que enlace el derecho a la educación con el interés superior de la infancia.

El segundo nivel de prevención dentro de la política criminal como nuestra segunda acepción, representa un control social formal ejercido a través del poder legítimo y coercitivo del Estado, siendo crucial para asegurar el derecho humano a una vida libre de violencia. Esta estrategia es particularmente significativa en el contexto de la prevención de la violencia contra la mujer, ya que se concreta mediante la procuración de justicia a través del sistema de seguridad pública. Este sistema constituye una red coordinada de entidades que actúan tras la manifestación de conductas violentas, resaltando la importancia de una respuesta conjunta y efectiva en la lucha contra este tipo de violencia, y de la que, valiéndose de la policía como primer elemento de reacción, desempeña un rol fundamental en la detección y actuación inmediata ante situaciones de violencia ya sean flagrantes y/o después de haberse manifestado.

El tercer nivel de prevención dentro de la política criminal como nuestra tercera acepción se traduce en el enjuiciamiento y la sanción por violar el derecho humano a una vida libre de violencia. Este nivel resalta la función de la administración de justicia y su potencial para perpetuar estructuras de desigualdad; en otras palabras, enfatiza la importancia de impartir justicia tras la comisión de un crimen, evitando que se repita la violencia.

Sin embargo, este último enfoque revela una tensión inherente entre la justicia que se busca y la que efectivamente se logra. En este marco, la doctrina jurídica contemporánea, representada por figuras como Garland, crítica la dinámica de la *cultura del control* que ha transformado la política criminal, intensificando la implementación de medidas punitivas que, lejos de resolver, pueden exacerbar los problemas sociales subyacentes a la criminalidad.[14] Por consiguiente, subrayamos la importancia de adoptar estrategias integrales que, sin desviarse de su objetivo administrativo de justicia, aborden las causas raíz de la violencia contra la mujer.

[14] Vid. Garland, D., *La cultura del control: Crimen y orden social en la sociedad contemporánea,* trad. de Máximo Sozzo, España, Gedisa, 2005, p. 275.

Estas causas, como demostraremos en esta investigación, no han sido efectivamente atendidas por las políticas criminales de tercer nivel.

En conclusión, la política criminal, vista a través del prisma de expertos como Laura Zúñiga y Antonio García-Pablos de Molina, revela su naturaleza intrínsecamente compleja y multidimensional, extendiéndose más allá de las fronteras convencionales del derecho penal para incursionar en los ámbitos sociológicos, económicos, y filosóficos. Este enfoque holístico es vital para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a una vida libre de violencia, un trabajo que requiere de soluciones integrales que abarquen desde la educación, pasando por la procuración y terminando en administración de justicia. Esta tríada de objetivos, que combina el fortalecimiento del tejido social mediante el control informal y la lucha contra la criminalidad a través del control formal, subraya la importancia de abordajes que sean tanto preventivos como reactivos y punitivos, siempre con un enfoque ético-integral que promueva, respete, proteja y garantice el derecho humano a una vida libre de violencia.

Finalmente, es fundamental destacar que la eficacia de la política criminal para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a una vida libre de violencia depende, en primera instancia, de su habilidad para integrar estas dimensiones, fundamentadas en el modelo de Estado de Derecho. Ya que, dicho modelo ha sido la base para alcanzar una sociedad más justa y equitativa, donde el derecho a una vida sin violencia pueda trascender de un ideal y se convierta en una realidad tangible para todas las personas. En este contexto, el Estado de Derecho, como pilar histórico, nos brinda una perspectiva amplia tanto del origen de esta lucha como de su vigencia y aplicabilidad actual.

1.2 El Estado de Derecho como marco histórico del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia

El concepto de Estado ha evolucionado significativamente desde sus primeras concepciones en las antiguas civilizaciones. Filósofos como Platón y Aristóteles sentaron las bases teóricas, definiendo el Estado como una entidad política que busca el bien común. Durante la Edad Media, la noción de Estado se fusionó con ideas teológicas, mientras que en el Renacimiento y la Ilustración,

pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau redefinieron el Estado como un contrato social entre gobernantes y gobernados, estableciendo las bases del Estado moderno como una entidad soberana y legitimada por la voluntad del pueblo. En particular, Thomas Hobbes, en su obra *Leviatán*, aporta una visión crucial al argumentar que, en estado de naturaleza, los individuos vivirían en un caos de violencia y miedo.[15] Hobbes utiliza la figura del Leviatán, un monstruo bíblico descrito en el Libro de Job,[16] como metáfora del poder absoluto necesario para mantener el orden y la paz social. Según Hobbes, sólo un soberano con poder absoluto, que él llama Leviatán, podría evitar el colapso del orden social y garantizar la seguridad y estabilidad del Estado.[17]

Para comprender mejor la evolución del Estado de Derecho y su impacto en la protección del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, es esencial distinguir claramente entre los conceptos de derechos humanos, derechos fundamentales y garantías individuales. Cada uno de estos términos tiene matices y especificidades que, aunque pueden parecer similares a primera vista, reflejan distintas dimensiones de la protección jurídica y filosófica de la dignidad humana.

En primer lugar, Norberto Bobbio argumenta que los *derechos humanos* son inherentes a todas las personas por el simple hecho de ser humanos.[18] Bobbio señala en su obra *El tiempo de los derechos*, citando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que los derechos humanos son universales, ya que son reconocidos a todas las personas sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad o religión.

> Cuáles son las discriminaciones superadas y eliminadas lo muestra claramente el artículo 2.1 de la Declaración, que bien puede ser considerado como un complemento necesario del artículo 1: ´Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta

[15] Vid. Hobbes, Thomas, "Leviatán," Madrid, Alianza Editorial, 2012, p. 72, disponible en: *https://www.suneo.mx/literatura/subidas/Thomas%20Hobbes%20Leviatan.pdf* (fecha de consulta: 14 de junio de 2024).
[16] Vid. Reina, Casiodoro de, "La Santa Biblia," Antigua Versión de Casiodoro de Reina, Revisada por Cipriano de Valera, London, 2005, pp. 797,798, disponible en: https*://www.nabiconsulting.co/biblia_reina_1960.pdf (*fecha de consulta: 14 de junio de 2024).
[17] Vid. Op. Cit. Hobbes, Thomas, "Leviatán," p. 2.
[18] Vid. Bobbio, Norberto, "El tiempo de los derechos," trad. de Rafael de Asís Roig, Madrid, Sistema, 1991, p. 47, disponible en: *http://culturadh.org/ue/wp-content/files_mf/144977835110.pdf* (fecha de consulta: 26 de julio de 2024).

> Declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra condición.[19]

Esta universalidad implica que los derechos humanos son anteriores y superiores al ordenamiento jurídico de cualquier Estado. Son inalienables, es decir, no pueden ser renunciados ni transferidos, y están basados en la dignidad intrínseca de la persona. Así, los derechos humanos constituyen un estándar ético y jurídico que trasciende las fronteras nacionales y que exige respeto y protección en cualquier contexto.

En segundo lugar, Robert Alexy, en su teoría de *los derechos fundamentales*, sostiene que estos derechos son aquellos que están garantizados por una Constitución. Alexy argumenta que los *derechos fundamentales* son derechos subjetivos que están consagrados en la Constitución de un Estado y que gozan de una protección especial. “Si se toma en serio la tesis según la cual los derechos fundamentales son, en primer lugar, derechos subjetivos, es inevitable una segunda tesis: si una libertad individual está protegida iusfundamentalmente, entonces la protección tiene, en principio, la forma de un derecho subjetivo."[20]

A diferencia de los *derechos humanos*, los *derechos fundamentales* tienen una base jurídica específica dentro del ordenamiento constitucional de un Estado. Estos derechos son reconocidos y protegidos por la máxima norma jurídica del país, lo que les confiere un estatus especial y una protección reforzada. Además, los derechos fundamentales pueden variar de un país a otro, dependiendo de cómo cada Constitución los defina y garantice.

Finalmente, Luigi Ferrajoli, en su obra *Derechos y garantías: La ley del más débil*, define las *garantías individuales* como los mecanismos y procedimientos jurídicos que aseguran la protección efectiva de los derechos. Ferrajoli sostiene que el paradigma de la democracia constitucional es un producto de la filosofía

---

[19] Ídem.

[20] Alexy, Robert, “Teoría de los derechos fundamentals,” trad. de Ernesto Garzón Valdés, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 480, disponible en: https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awril5p.16NmTMcQNJXD8Qt.;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1722042367/RO=10/RU=https%3a%2f%2fdrive.google.com%2ffile%2fd%2f1Az8yAAJKnNdPnZlpaGBTb_faJyVqKbGV%2fview%3fusp%3dsharing/RK=2/RS=ESqBaFUVHwv9cXxFNVBk9OiAA8I- (fecha de consulta: 26 de julio de 2024).

contractualista en un doble sentido.[21] En primer lugar, las constituciones se conciben como contratos sociales escritos y positivos, pactos fundacionales de la convivencia civil que, históricamente, han surgido de movimientos revolucionarios que, en ocasiones, han impuesto límites a los poderes públicos, de otro modo absolutos, otorgándoles legitimidad. En segundo lugar, la idea del contrato social funciona como una metáfora de la democracia: tanto de la democracia política, al aludir al consenso de los contratantes y, por ende, fundamentar una legitimación del poder político desde abajo, como de la democracia sustancial, ya que este contrato no es un acuerdo vacío, sino que tiene como cláusulas y causa la tutela de los derechos fundamentales. La violación de estos derechos por parte del soberano legitima la ruptura del pacto y el ejercicio del derecho de resistencia.

Estas garantías operan como herramientas concretas dentro del sistema jurídico para prevenir y reparar violaciones a los derechos. Incluyen, por ejemplo, el derecho a un juicio justo, el derecho al recurso judicial, y otras medidas que aseguran que los derechos sean respetados en la práctica. Así, mientras que los derechos fundamentales establecen qué derechos están protegidos, las garantías individuales definen cómo se protegen y hacen efectivos esos derechos.

Así entonces, aunque los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales están interrelacionados, todos buscan proteger la dignidad humana, se diferencian en su ámbito de aplicación y en su naturaleza. Los derechos humanos son universales e inherentes a la persona; los derechos fundamentales están consagrados y protegidos por la Constitución de un Estado; y las garantías individuales son los mecanismos jurídicos que aseguran la efectividad de esos derechos.

El Derecho, por su parte, ha pasado por una evolución compleja desde las leyes consuetudinarias de las sociedades primitivas hasta los sistemas legales codificados. El Derecho romano, con su detallada codificación, influenció profundamente los sistemas legales occidentales. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica dominó el ámbito jurídico, hasta que en la modernidad, la racionalización del Derecho, promovida por teóricos como Kelsen y Hart, estableció el marco para

[21] Vid. Ferrajoli, Luigi, *Derechos y garantías: La ley del más débil,* Madrid, Trotta, 2002, p. 52.

un sistema legal basado en principios de justicia y equidad, aplicables de manera universal.

La evolución paralela del concepto de Estado y de Derecho ha convergido en la formación del Estado de Derecho, una estructura donde el poder político y las normas legales se entrelazan y se definen mutuamente. Este modelo garantiza que el ejercicio del poder esté sujeto a la legalidad, asegurando la protección de los derechos fundamentales. La institucionalización de principios jurídicos y la separación de poderes son pilares que reflejan esta interdependencia, asegurando que tanto gobernantes como gobernados actúen conforme a un marco legal legítimo y equitativo.

En conjunto, el término *Rechtsstaat, Estado de Derecho*, tiene su origen en la doctrina alemana, Robert von Mohl fue el primero en utilizarlo en 1832.[22] Un concepto, que en palabras simples, se refiere a un estadio total de legitimidad en el que tanto gobernantes como gobernados respetan y acatan la legalidad orgánica y dogmática constitucional. Este trabajo se realiza basándose en la ley positiva y en medios y procesos jurisdiccionales, tanto para hacerla valer como para controlar a aquellos que se desvían de ella.

Además, el concepto de Estado de Derecho trasciende la mera formalidad contractual para representar la evolución hacia un modelo político y social democrático. Habermas sostiene que la organización estatal no se impone desde el exterior junto al derecho, sino que es un presupuesto inherente al mismo y se auto configura mediante estructuras jurídicas.[23] De esta manera, el poder político sólo puede ejercerse dentro de un marco jurídico que se ha institucionalizado mediante la consagración de derechos fundamentales. Esta perspectiva revela que el poder político y la estructura del Estado no se rigen únicamente por leyes externas, sino que están intrínsecamente entrelazados y moldeados por el derecho.

---

[22] Vid. Mohl, Robert von. *Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechts-Staates,* Alemania, bei Heinrich Laupp, 1832.

[23] Vid. Habermas, J., "Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*"*, trad. de Manuel Jiménez Redondo, Madrid, Trotta, 2023, p. 240, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1C0sqnC7i5Obt1LdZrOUaoXZbcC5s6C2a/view?usp=drive_link (*fecha de consulta: 26 de febrero de 2024).

En otras palabras, el Estado de Derecho no se basa exclusivamente en la supremacía de la norma, sino que también engloba la premisa de que el derecho y el poder político se definen y restringen recíprocamente a través de principios jurídicos. Esta interacción destaca la supremacía de la ley, la equidad en su aplicación, la separación de poderes, y la protección de los derechos fundamentales como pilares fundamentales del Estado de Derecho. Ban Ki-moon, ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que "Los derechos humanos y el Estado de Derecho son vitales para el desarrollo…"[24],"….dos caras de la misma moneda…"[25], uno no puede existir sin el otro.

La lucha por alcanzar este modelo en México se traduce en La Revolución Mexicana, iniciada el 20 de noviembre de 1910, y culminando con la promulgación de la CPEUM de 1917, estableciendo un modelo de Estado que buscaba la justicia social. Sin embargo, esta transformación no solucionó inmediatamente las desigualdades de género, lo que llevó a continuas luchas sociales. En este contexto, Hermila Galindo, una influyente política, escritora y activista feminista, desempeñó un papel fundamental. Como secretaria de Venustiano Carranza, fundadora de *Mujer Moderna* y oradora en el Primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916, y al postularse ilícitamente como diputada en 1918, Galindo marcó un precedente en la lucha por la igualdad de género en México, abogando especialmente por el sufragio femenino.[26]

A decir verdad, el origen del movimiento sufragista femenino buscaba emancipar a la mujer del yugo de violencia que se ejercía por parte del sistema político-social machista de aquellos años. Según nos cuenta la Historiadora Diana

[24] Ban Ki-moon, "Ban: los derechos humanos y el Estado de Derecho son vitales para el desarrollo*",* Naciones Unidas, 2014, disponible en: *https://news.un.org/es/story/2014/06/1303491* (fecha de consulta: 3 de marzo de 2024).
[25] Ban Ki-moon, "Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización*"*, Naciones Unidas, 2012, párrafo 11, disponible en *https://www.un.org/es/sg/speeches/reports/68/report-growth.*shtml (fecha de consulta: 3 de marzo de 2024).
[26] *210 años de los Sentimientos de la Nación* [Exposición], Archivo General de la Nación, Ciudad de México, México, 27 septiembre del 2023, tríptico disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1bA15BaruHMwPqUXiabG7zHIB403lfT-g/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 6 de marzo de 2024).

Alicia Enríquez Nieto,[27] este movimiento tuvo varios momentos clave a lo largo del siglo XX, culminando en la obtención del derecho al voto para las mujeres. Durante la década de 1930, se creó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, y en 1935, este Frente organizó el Primer Congreso Nacional de Mujeres. A partir de 1937, el movimiento se centró en la demanda del sufragio femenino, y en 1947, durante la administración de Miguel Alemán Valdés, se modificó el Artículo 115 de la CPEUM para permitir la participación de las mujeres en la vida política de los municipios. Sin embargo, fue hasta 1953, bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, cuando se otorgó a las mujeres el derecho al voto a nivel federal, permitiéndoles votar por primera vez en las elecciones de diputados federales en 1955. Este logro fue el resultado de la organización y participación de las mujeres en los foros públicos demandando derechos ciudadanos, aunque la verdadera democratización de la ciudadanía tardó más en materializarse.

Como si no bastara, la lucha por establecer un Estado de Derecho eficaz en México, que salvaguarde los derechos de las mujeres, enfrentó nuevos desafíos con la implementación de políticas neoliberales durante los años 80, especialmente bajo el mandato de Miguel de la Madrid (1982-1988). Este período marcó un cambio significativo hacia un modelo económico que priorizaba la economía de mercado, la liberalización y la apertura a la inversión extranjera, distanciándose del anterior enfoque estatista y proteccionista en defensa de los derechos de las mujeres.

La crisis económica de 1982 en México catalizó la implementación de reformas neoliberales, orientadas a estabilizar una economía marcada por alta deuda externa, inflación y devaluación del peso. Estas reformas estructurales incluyeron privatizaciones, desregulación económica y fomento de la competitividad, buscando modernizar y globalizar la economía mexicana mediante la atracción de inversión extranjera. Sin embargo, este modelo económico generó debates y críticas, particularmente por exacerbar la desigualdad de género y

[27] La Licenciada Diana Alicia Enríquez Nieto, es licenciada en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y actualmente se encuentra impartiendo cátedra en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM.

aumentar la violencia contra la mujer, lo que plantea desafíos para el Estado de Derecho.

La consolidación del modelo económico neoliberal en México alcanzó su apogeo durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), marcando un momento crucial en la adopción de políticas de liberalización económica. Su gestión fue clave en la negociación y ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, estableciendo una era de intercambio comercial sin precedentes con Estados Unidos y Canadá. Aunque este tratado simbolizó la integración económica regional y el compromiso con una economía globalmente competitiva, también suscitó críticas por exacerbar la desigualdad social y comprometer la protección de los derechos humanos, destacando el reto de equilibrar el desarrollo económico con el bienestar social en el marco de un Estado de Derecho.

Este acervo histórico del Estado de Derecho en México nos permite vislumbrar una lucha constante por fortalecer sus instituciones democráticas y garantizar la protección del derecho humano a una vida libre de violencia. La evolución de toda esta lucha se puede apreciar materializada 90 años después, un resultado positivizado a través de los siguientes instrumentos jurídicos.

Año	Evento	Descripción
2007	Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	Establece las bases legales necesarias para la prevención, sanción y eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres.
2011	Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos	Reconoce la prevalencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el orden interno.
2014	Código Nacional de Procedimientos Penales	Unifica los procedimientos penales, buscando mayor eficacia en la persecución de delitos como la violencia de género.

I. Fuente: Cuadro de elaboración propia

Como podemos apreciar, en México, el Estado de Derecho ha logrado avances significativos en la legislación dirigida a la protección de las mujeres frente a la violencia. No obstante, persisten importantes desafíos en la implementación de estas leyes y en garantizar un acceso efectivo a la justicia. Estefanía Vela Barba, reconocida especialista en derechos de las mujeres, subraya esta problemática afirmando que la legislación en México ha avanzado, pero la brecha entre la ley y su aplicación sigue siendo nuestro mayor desafío.[28]

Este contraste desde nuestra tesitura es causado por el efecto de la equívoca interpretación mexicana del modelo norteamericano neoliberal. Una interpretación que radicaliza de forma conservadora los intereses económicos propios del modelo neoliberal original, provocando, en palabras del Doctor Antonio Cholley Nakahodo Rivera, una peligrosa *lujuria económica*.[29] Un padecimiento crónico que termina por intoxicar a los objetivos sociales de un Estado de Derecho. Esta divergencia, que se detallará en el tercer capítulo, demostrará cómo los intereses económicos radicales, prevalentes en la política criminal destinada a proteger el derecho a una vida libre de violencia, paradójicamente intensifica la violencia contra la mujer. Así mismo, este análisis es vital para comprender cómo la equívoca interpretación del neoliberalismo norteamericano complica la protección de la violencia contra la mujer, poniendo en duda la efectividad del Estado de Derecho mexicano.

En este sentido, para demostrar nuestras afirmaciones; las encuestas son fundamentales para evaluar nuestro avance hacia un gobierno fundamentado en la legalidad. El informe del World Justice Project de 2022, tras analizar el índice de Estado de Derecho en 140 países, ubicó a México en la posición 115, con una puntuación de 0.42 sobre 1.0.[30] Este estudio destaca que México se halla en una

---

[28] Vid. Vela Barba Estefanía, "La discriminación en el empleo en México", México, Instituto Belizario Domínguez, Senado de la República, 2017, p. 202, disponible en: *http://estefaniavelabarba.com/wp-content/uploads/2015/12/Vela-Barba-Discriminacio%CC%81n-en-el-empleo-2018-IBD.pdf* (fecha de consulta: 4 de marzo de 2024).

[29] Vid. Op. Cit. Nakahodo Rivera, Antonio Cholley.

[30] The World Justice Project, "Rule of Law Index 2022", USA, World Justice Project, ISBN: 978-1-951330-52-1, 2022, p. 122, disponible en: *https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-Global-ROLI-Spanish.pdf* (fecha de consulta: 20 de septiembre de 2023).

fase de transición hacia la consolidación de un Estado de Derecho pleno, enfrentando desafíos significativos, entre ellos, la promoción, el respeto, la protección y la garantización óptima del derecho humano a una vida libre de violencia, esta afirmación respaldada especialmente en las cifras de la violencia contra mujeres mayores de 15 años, y de la cual, el Estado de México es el epicentro de esta problemática, con una tasa alarmante del 78.7% a nivel subnacional.[31]

Esta situación refleja la imperiosa necesidad de reforzar nuestras estructuras legales y sociales. Este proceso, indispensable y urgente, debe estar en consonancia con los esfuerzos históricos y las reformas políticas y económicas que han delineado el Estado de Derecho de nuestro país. En este contexto, José Antonio González Fernández sostiene de manera convincente que el Estado de Derecho es esencial para asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su género, disfruten de un ambiente seguro donde sus vidas, bienes y derechos jurídicos estén salvaguardados frente a cualquier amenaza, perjuicio o riesgo.[32]

Esta afirmación nos lleva a reflexionar sobre la aplicación deontológica[33] del derecho a una vida libre de violencia y otros derechos fundamentales que bajo el principio de interdependencia e indivisibilidad puedan abordar las desventajas socio-culturales que enfrentan las mujeres. El análisis genealógico al marco legal de nuestro objeto de estudio, que se desarrollará más adelante, y que se evaluara críticamente en el tercer capítulo, mostrará cómo las desigualdades exacerbadas por el neoliberalismo mexicano han requerido un enfoque legislativo y social especializado, que adapta del marco legal internacional, a las complejidades de

[31] Vid. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), *"*Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021*"*, comunicado de prensa núm. 485/22, México, INEGI, 2022, pp. 2,3, disponible en: *https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf* (fecha de consulta: 12 de octubre de 2023).

[32] Vid. González Fernández, José Antonio, *La seguridad pública en México*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2022, p. 125.

[33] La deontología es una rama de la ética que se enfoca en el estudio y análisis de los deberes y las obligaciones morales que tienen las personas en su comportamiento. Su nombre proviene del griego deon, que significa "deber" u "obligación". A diferencia de otras teorías éticas que se centran en las consecuencias de las acciones (como el utilitarismo), la deontología se basa en la idea de que ciertas acciones son moralmente correctas o incorrectas en sí mismas, independientemente de sus resultados.

género. Desde nuestro análisis deontológico-crítico, este enfoque, lejos de favorecer el progreso hacia un Estado de Derecho pleno, obstaculiza la justicia y equidad de género.

En conclusión, el Estado de Derecho se erige como el corazón de las políticas criminales, actuando como el pilar fundamental sobre el cual se construyen y se articulan todas las estrategias y acciones destinadas a combatir la violencia contra la mujer y promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a una vida libre de violencia. Aunque se han logrado avances significativos, el paradigma neoliberal mexicano, con su enfoque radical conservador, ha complicado el progreso social. Esto resalta la urgencia de un análisis genealógico-crítico que explique la aplicación deontológica del marco legal existente, con el objetivo de mitigar las repercusiones negativas de este paradigma y el correcto ejercicio de un Estado de Derecho. Por ende, es imperativo conocer los pronunciamientos del original paradigma neoliberal norteamericano ya que este se ha aplicado bajo el amparo del Estado de Derecho mexicano de forma errónea.

1.2.1 Neoliberalismo en la balanza: desafíos y propuestas

Las raíces del neoliberalismo se encuentran en la prestigiosa Escuela de Chicago, teniendo a Milton Friedman como su principal exponente, representa una evolución del liberalismo clásico, llevándolo a una nueva dimensión. Este paradigma emerge del contraste entre colectivismo e individualismo, reflejando la compleja dinámica entre el Estado y la sociedad. A diferencia del liberalismo del siglo XIX, que limitaba el papel del Estado al mantenimiento del orden y la ejecución de contratos, el neoliberalismo reconoce los desafíos de un enfoque meramente *laissez-faire*.[34] Entiende que la concentración de poder en manos de unos pocos

[34] El *laissez-faire* es un término francés que se traduce como *dejar hace*r o *dejar pasar*. Se refiere a una filosofía o enfoque económico y político que aboga por la mínima intervención del gobierno en los asuntos económicos y comerciales. En un sistema de *laissez-faire*, se supone que las fuerzas del mercado operarán de manera natural y eficiente sin la necesidad de regulaciones gubernamentales significativas.
Esta filosofía es un componente clave del liberalismo clásico y del pensamiento económico de la Escuela de Economía Clásica, en particular de economistas como Adam Smith. La idea detrás del *laissez-faire* es que si se permite que los individuos y las empresas tomen decisiones económicas libremente, sin interferencia gubernamental excesiva, el resultado será un crecimiento económico y una asignación eficiente de recursos.

puede socavar la libertad de la mayoría, lo que revela una subestimación crítica de la capacidad de los individuos para formar coaliciones y ejercer influencia. En palabras de Milton Friedman; "…se subestimó el peligro de los individuos para, a través del acuerdo y la combinación, usurpar el poder y efectivamente limitar la libertad de otros individuos…"[35].

Dentro de este debate filosófico, la doctrina del neoliberalismo se presenta como una propuesta sintetizada que supera las limitaciones observadas en las concepciones anteriores. A diferencia de una perspectiva de individualismo absoluto, el neoliberalismo defiende una regulación estricta del alcance del poder estatal en la intervención de las actividades individuales. Esta posición se basa en el entendimiento de que, sin una regulación adecuada, los acuerdos y coaliciones entre individuos tienen el potencial de comprometer la libertad de terceros. Por lo tanto, es fundamental reconocer y afirmar las responsabilidades positivas esenciales que el Estado debe asumir.[36]

Dialécticamente, la doctrina neoliberal, promovida por la Escuela de Chicago, se presenta como una solución innovadora ante el surgimiento de tendencias autocráticas, evidenciadas en la creciente pluralidad de ofertas económicas. Según esta perspectiva, "El interés de los empresarios siempre es ensanchar el mercado, pero estrechar la competencia."[37] Una declaración que pone de manifiesto la intención de promover la libertad de elección en cuanto a productos y servicios, incentivando al mismo tiempo la diversidad de proveedores. En esencia, lo que se busca es la creación de un mercado verdaderamente competitivo. Henry Simons lo explica con claridad al señalar que el principal adversario de la democracia es el monopolio, manifestado a través de grandes corporaciones, asociaciones

[35] Friedman, Milton, *Neo-Liberalism and its Prospects*, trad. de Esteban Leiva, USA, Farmand, 1951, p. 5.
[36] Vid. Ídem.
[37] Vid. Smith, Adam, "An Inquiry in to the Nature and Causes of the Wealth of Nations", trad. de Carlos Rodríguez Braun, Londres, Titivillus, 1776, p. 195, disponible en: *https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/1%20La%20riqueza%20de%20las%20Adam%20Smith.pdf* (fecha de consulta: 4 de septiembre de 2023).

comerciales, sindicatos y cualquier forma de concentración y organización del poder dentro de sectores específicos.[38]

Básicamente, el neoliberalismo asigna al Estado tres roles cruciales: mayor regularidad de la producción y el empleo, preservación de las instituciones democráticas, y reducción de la desigualdad.[39] En relación con este último punto, Milton Friedman sugiere una estrategia innovadora mediante lo que denominó un *plan de bonos* o *vales*, con el objetivo de transicionar al nuevo paradigma neoliberal. La esencia de esta propuesta reside en sustituir las ayudas gubernamentales por transferencias monetarias directas a las personas en situación de pobreza, permitiéndoles adquirir bienes y servicios en el mercado privado mediante el uso de estos vales.[40]

Por lo que, en la estructura del neoliberalismo, se encuentra una reflexión profunda sobre el equilibrio entre la libertad individual y la necesidad de la intervención estatal básica. Desde nuestra tesitura, la versión del neoliberalismo aplicado en México nos ha llevado a una libertad mal entendida, radicalizando el *dejar hacer (laissez-faire*) del siglo XIX, una libertad radical donde los poderes acumulados en el Estado de Derecho tergiversan los principios que originariamente se buscaban proteger. En palabras más simples, al cambiar el enfoque hacia la promoción de la competencia, se promulgó una visión más individualista, cayendo en intereses de avaricia incluso del propio Estado, custodio de un terreno de juego en donde este mismo apuesta su funciones básicas, síntomas inherentes de una *lujuria económica* provocada por la inicial mal interpretación del modelo económico neoliberal.

En conclusión, la transición del liberalismo clásico al neoliberalismo refleja una comprensión más detallada y profunda de los desafíos y las contradicciones

---

[38] Vid. Simons, Henry C., *A Positive Program for Laissez Faire (Some Proposals for a Liberal Economic Policy),* trad. propia*,* U.S.A., Universidad de Chicago, 1934, p. 4, paráfrasis traducida: "Thus, the great enemy of democracy is monopoly, in all its forms: gigantic corporations, trade associations and other agencies for price control, trade unions-or, in general, organization and concentration of power within functional classes".

[39] Vid. Íbídem. p. 1, paráfrasis traducida: "There is in America no important disagreement as to the proper objectives of economic policy-larger real income, greater regularity of production and employment, reduction of inequality, preservation of democratic institutions".

[40] Vid. Friedman, Milton, *Capitalismo y Libertad,* trad. de Cristina Casabón, España, Deusto, 2022, pp. 253-260.

inherentes a la libertad en una sociedad cada vez más compleja. La adopción de esta doctrina representa un esfuerzo consciente por llenar un vacío en el pensamiento intelectual, estableciendo un equilibrio entre el *laissez-faire* y una completa intervención estatal; Welfare State (Estado de bienestar en su traducción al español). Fundamentalmente, la emergencia del neoliberalismo simboliza un cambio significativo en la percepción del papel del Estado dentro de la sociedad. Esta orientación política, al reconocer las debilidades de enfoques previos, busca alcanzar una síntesis que armonice las restricciones estatales con la implementación de funciones positivas básicas para el bienestar común.

Así mismo, a diferencia de adoptar una filosofía *laissez-faire* en su totalidad, el neoliberalismo reconoce que ceder completamente a esa perspectiva podría desencadenar resultados adversos, como la malinterpretación de su objetivo.[41] Si bien, el neoliberalismo, hace hincapié en la competencia y la libertad individual mientras busca incrementar el poder estatal para prevenir monopolios y el alivio de la miseria y la angustia mediante un plan de bouchers, lo cierto es también que en un contexto mexicano, criticamos su distorsionada aplicación que prioriza el *laissez-faire* y el libre mercado, pasando por alto la intervención estatal en la lucha contra la pobreza y la marginalidad, lo que ha resultado en la privatización de empresas públicas, programas de apoyo económico que promueven y maximizan la mínima intervención de las funciones positivas básicas de un Estado de Derecho y el aumento en la desigualdad de género, lo que se traduce en la agudización de la violencia contra la mujer.

En otras palabras, la implementación actual de la doctrina neoliberal en México se distingue por su radicalización, retomando en gran medida a su modelo antecesor. En este escenario, el neoliberalismo norteamericano se ha aplicado en México de forma distorsionada, alterando tanto en su estructura como en su propósito fundamental: el bienestar social. Tal como se desarrollará genealógicamente en el cuarto capítulo, el actual gobierno mexicano encarna una

[41] Vid. Op. Cit. Simons, Henry C., trad. propia, p. 3, paráfrasis traducida: “This policy and the correlative political philosophy, nineteenth-century liberalism, have been subjected latterly to gross misrepresentation and to shallow satirical jibes in the ‘new economics’. The representation of laissez faire as a merely do-nothing policy is unfortunate and misleading”.

variante de esta doctrina, caracterizada por una obsesión con el poder, una desconexión de la realidad y una perspectiva autocrático-populista en la creación de políticas criminológicas enfocadas en prevenir la violencia contra la mujer dentro del núcleo familiar. Dado este contexto, se subraya la urgente necesidad un cambio de paradigma, la propuesta para llevarlo a cabo no es otra que adoptar un enfoque deontológico del Estado de Derecho que purifique la actual praxis legislativa, ejecutiva y administrativa de la estrategia vigente, centrada en proteger el derecho humano a una vida libre de violencia.

1.3 El papel de la deontología en la protección del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia

En el punto donde convergen la ética y el derecho, la deontología se presenta como un marco normativo esencial que guía la conducta profesional dentro del servicio público. Esta disciplina resulta fundamental para una comprensión integral tanto de la teoría subyacente (deontología jurídica) como de las prácticas implementadas por los trabajadores del Estado (deontología profesional), desempeñando un papel determinante en la salvaguarda del derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Según el Diccionario de la Lengua Española, el término *deontología* tiene raíces griegas: *deon* (δέον), que se traduce como *lo que se debe hacer*, y *logia* (λογία), que significa *estudio* o *ciencia*. Por lo tanto, la deontología se concibe como la disciplina que estudia el deber, estableciendo así un enfoque sistemático y riguroso hacia las obligaciones ético-legales de las autoridades del Estado, las cuales tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a una vida libre de violencia, en otras palabras; ejercer un Estado de derecho de forma objetiva y ética. Kelsen refuerza este planteamiento al afirmar que:

> …la teoría pura del derecho exhibe una expresa tendencia antiideológica. Mantiene esa orientación en cuanto en su exposición del derecho positivo mantiene a éste libre de toda mezcla con un derecho 'ideal' o 'justo'. En este sentido es una teoría jurídica radicalmente realista, es decir, una teoría propia del positivismo jurídico. Rehúsa juzgar axiológicamente el derecho positivo. Como ciencia no se considera obligada sino a pensar

> conceptualmente al derecho según su propia esencia y a comprenderlo mediante un análisis de su estructura.[42]

Este enfoque profundiza y enriquece nuestra perspectiva teórica, ofreciendo claridad sobre las aplicaciones prácticas que orientan la actuación de las autoridades estatales en la protección del derecho humano a una vida libre de violencia. Destaca la trascendental importancia de adoptar un compromiso ético profundo en el desempeño del servicio público. Tal compromiso no sólo implica cumplir con las obligaciones legales de manera objetiva, sino también ejercer la justicia con una visión ética que respalde la dignidad humana y promueva activamente un entorno seguro para todos los ciudadanos. Al seguir este paradigma, se asegura que las decisiones y acciones gubernamentales estén fundamentadas en principios éticos sólidos, los cuales son esenciales para la construcción y mantenimiento de un Estado de Derecho que garantice de manera efectiva el respeto y la protección del derecho humano a una vida libre de violencia.

Immanuel Kant, considerado la figura más emblemática de la deontología, desempeñó un rol fundamental en la consolidación de este compromiso ético, destacando especialmente la preeminencia de la intención y la adhesión al deber por encima de las consecuencias derivadas de nuestras acciones. Según Kant, es esencial que la acción se realice por deber, es decir, motivada únicamente por el respeto a la ley.[43] Este principio teórico establece que algunas acciones poseen inherentemente una calidad de bondad o maldad, más allá de sus efectos, fomentando así el cumplimiento de los deberes morales basados en principios éticos universales. Para este autor, el concepto del bien y del mal debe definirse no previo a la ley moral, sino a partir de esta y por medio de ella,[44] implicando que la valoración moral de las acciones está intrínsecamente ligada a su conformidad con la ley moral.

Frente a este panorama, en un mundo cada vez más influenciado por el afán de lucro económico, en el que la adaptación mexicana del modelo neoliberal

---

[42] Kelsen, Hans, *Teoría pura del derecho*, trad. de Roberto J. Vernengo, México, Instituto de Investigaciones jurídicas, UNAM, p. 121.
[43] Vid. Op. Cit., Kant, Immanuel, *Crítica de la Razón Práctica*, p. 72.
[44] Vid. Ibídem, p. 56.

estadounidense ha enfatizado la acumulación de riqueza y poder en detrimento del desarrollo humano, la deontología se alza como una herramienta crítica indispensable. Su estudio meticuloso y aplicación consciente nos instan a reevaluar los valores y principios que rigen nuestras sociedades y marcos legales, planteando un necesario contrapunto ético frente a la mercantilización de las relaciones humanas y sociales. En este entorno, profundizar en el análisis deontológico se vuelve un imperativo para comprender la forma en que debemos proteger el derecho humano a una vida sin violencia, especialmente en un contexto caracterizado por una prevalencia alarmante de violencia contra la mujer.

A través de ejemplos concretos, como iniciativas legales y políticas públicas integrales que encarnen principios deontológicos, se puede demostrar cómo este enfoque no sólo critica la dinámica actual, sino que también ofrece vías pragmáticas para remediar las injusticias sociales exacerbadas por las políticas neoliberales mal interpretadas. De esta manera, la deontología se presenta no sólo como una reflexión teórica, sino como un catalizador para el cambio social y legal hacia una sociedad más justa, donde el respeto por la dignidad humana y la lucha contra la violencia hacia las mujeres se posicionan en el centro de nuestras prioridades éticas y legales.

Este análisis crítico y constructivo busca, por tanto, no sólo desglosar el pensamiento deontológico, sino también reflexionar sobre cómo esta disciplina pueden ayudarnos a desintoxicarnos de la *lujuria económica* y contribuir a la óptima protección y promoción de un derecho humano fundamental: vivir una vida libre de violencia. Este esfuerzo se enmarca en la necesidad de una reflexión profunda sobre los principios que deben guiar la aplicación de nuestro Estado de Derecho, buscando siempre el bienestar colectivo y el respeto a la dignidad humana por encima de intereses particulares o económicos.

Como se ha destacado anteriormente, la escuela Kantiana establece los fundamentos de la deontología, centrada en la ética del deber ser. Kant argumenta que la conducta humana debe guiarse por principios universales; es decir, nuestras acciones deben ser tales que puedan considerarse como leyes universales. Afirma: “En toda la creación, todo lo que se quiera y sobre lo cual se tenga poder, puede

emplearse también como mero medio; solamente el hombre, y con él, toda criatura racional, es un fin en sí mismo. Esto se debe a que es el sujeto de una ley moral que es sagrada debido a la autonomía de su voluntad."[45] Este principio resalta la importancia de la intención detrás de nuestras acciones por encima de las consecuencias que estas generen, marcando un enfoque ético que valora la moralidad intrínseca de nuestros actos. Así, se promueve ejercer el servicio público profesional de tal manera que se trate a la humanidad, tanto en uno mismo como en los demás, siempre como un fin y nunca meramente como un medio.

La fortaleza de la escuela Kantiana radica en su énfasis en la universalidad y la objetividad de las normas éticas, lo que proporciona una base sólida tanto para la formulación de leyes justas que salvaguarden el derecho humano a una vida libre de violencia, como para la aplicabilidad de esta por parte de los profesionistas del servicio público. Sin embargo, su rigidez puede resultar en dificultades al enfrentar dilemas éticos complejos donde las consecuencias de las acciones deben ser consideradas. En el contexto de salvaguardar el derecho humano a una vida libre de violencia, la perspectiva Kantiana insiste en el respeto incondicional por la autonomía y dignidad de cada individuo,[46] lo que puede servir como un principio rector que aborde la violencia contra la mujer en el núcleo familiar.

Cómo podemos identificar, la ética kantiana, subraya la importancia de actuar siempre respetando la autonomía y la dignidad de las personas, incluyendo principios como el de no instrumentalización. Este enfoque puede chocar con prácticas culturales o económicas que justifican ciertas formas de discriminación, planteando un desafío al momento de implementar medidas que busquen promover la igualdad de género sin caer en acciones que puedan ser vistas como paternalistas o que comprometan la autonomía de las mujeres.

Finalmente, aseguramos que al adoptar este enfoque integrador que sitúa a la deontología en el núcleo de la protección del derecho humano de la mujer a una vida sin violencia, ampliamos significativamente nuestra comprensión de su importancia crítica. Más allá de permitirnos discernir las bases deontológicas del

[45] Ibídem, p. 77.
[46] Vid. Ibídem, p. 72.

actual Estado de derecho en México, esta visión nos anima a examinar detenidamente los propósitos del marco jurídico internacional y el análisis crítico del marco jurídico del país del que hemos emulado de forma equívoca su modelo económico. A través de este primer ejercicio comparativo, empezaremos a identificar la equívoca ambivalencia que esta última se cree ejercen sobre el marco legal mexicano, y que como se demostrará en el tercer capítulo, el dilema no radica en la legislación per se, sino en su interpretación y, por consiguiente, en su aplicación dentro de la política criminal.

1.3.1 Análisis genealógico y ético-crítico del marco jurídico para la protección de la mujer

Salvaguardar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia constituye uno de los desafíos sociales más arraigados y devastadores a escala global, impactando a millones de mujeres sin importar edad, origen étnico o condición socioeconómica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de un tercio de las mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida, lo que evidencia la alarmante magnitud y prevalencia de este fenómeno.[47] En México, la situación es particularmente alarmante; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de ENDIREH 2021 revela que el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido al menos un incidente de violencia en su vida.[48] Este panorama subraya la urgencia de implementar acciones efectivas para su prevención, protección y corrección, resaltando la imperiosa necesidad de compromisos firmes y estrategias integrales que aborden este flagelo desde sus raíces.

Para abordar efectivamente el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, es crucial establecer un marco jurídico integral y efectivo que vaya más

[47] Vid, Organización Mundial de la Salud, "La violencia contra la mujer es omnipresente y devastadora: la sufren una de cada tres mujeres", Comunicado de prensa conjunto, OMS, 2021, párrafo 1, disponible en: *https://www.who.int/es/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence* (fecha de consulta: 20 de marzo de 2024).

[48] Vid, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021*",* Comunicado de Prensa Núm. 485/22, INEGI, 2022, disponible en: *https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf* (fecha de consulta: 20 de marzo de 2024).

allá de la simple sanción de actos violentos. Este marco debe promover acciones preventivas, ofrecer protección óptima para las víctimas y reparar los factores que causan la violencia. Un análisis genealógico y ético-crítico de la legislación internacional y nacional (mexicana y estadounidense) se revela como un recurso invaluable para discernir las fortalezas y debilidades de cada sistema y comprender la complejidad de estos instrumentos legales en la lucha contra la violencia hacia la mujer en todos los niveles de prevención.

Este análisis servirá como preludio al segundo capítulo, en el que se examinarán en profundidad los tres niveles de prevención dentro del Estado de derecho mexicano. Dicho análisis será complementado empíricamente en el tercer capítulo, con el propósito de evaluar nuestra hipótesis de investigación y discernir el espectro político en el que se inscribe la política criminal multinivel en México. Utilizando una metodología de investigación documental, revisaremos los orígenes de las legislaciones vigentes con la intención de fomentar un diálogo constructivo que podría influir notablemente en la percepción pública y en las políticas gubernamentales. Además, la evaluación de los instrumentos legislativos, fundamentada en la teoría kantiana, permitirá identificar las medidas de protección que se han implementado. En las secciones subsiguientes, procederemos a detallar y examinar los orígenes y las características éticas de estas legislaciones, tanto a nivel internacional como dentro de los marcos jurídicos de México y Estados Unidos.

La inclusión del marco jurídico de Estados Unidos en este análisis se justifica por dos razones fundamentales. Primero, Estados Unidos, como epicentro del neoliberalismo —aunque aplicado de manera diferenciada en México—, ha logrado implementar leyes federales que garantizan el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Este logro es especialmente notable, dado que se ha conseguido sin la ratificación de tratados o convenciones internacionales sobre derechos humanos. Segundo, la infraestructura preventiva de Estados Unidos ofrece una referencia invaluable para nuestro análisis, que será empíricamente examinado en el tercer capítulo. En este contexto, se identificarán errores en la aplicabilidad deontológica al evaluar las políticas criminales actuales dirigidas a prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar en el Estado de México. Este examen anticipa revelar

que la raíz del problema radica más en una falta de voluntad política que en una incapacidad estatal. Por tanto, este análisis no sólo subraya la importancia crucial de la voluntad política en la lucha contra la violencia hacia la mujer, sino que también prepara el terreno para una comparación entre la política preventiva multinivel de México y la de Estados Unidos, lo cual será abordado en el quinto y último capítulo, marcando un paso crucial hacia la comprensión y mejora de las políticas públicas en esta área vital.

1.3.1.1 Evolución histórica y filosófica internacional de los derechos de las mujeres

La violencia contra la mujer se ha abordado a través de diversas legislaciones y convenciones internacionales, buscando establecer un marco legal que proteja a las víctimas y persiga a los perpetradores. Los antecedentes de este esfuerzo global incluyen principalmente documentos y tratados como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993), la Convención de Belém do Pará (1994), la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) y el Convenio de Estambul (2011).

Sin embargo, a pesar de los significativos avances logrados, y como ya hemos demostrado, la continuidad de la violencia contra la mujer a nivel global plantea interrogantes críticos sobre el impacto de las medidas legales internacionales. Por ello, se vuelve esencial realizar un análisis de estos instrumentos jurídicos, con el objetivo de revelar sus fundamentos, evaluar sus fortalezas y reconocer sus limitaciones. Tal examen es crucial para entender el origen de estas leyes y convenciones, así como para determinar su capacidad real de influir y efectuar cambios significativos en el marco legislativo mexicano.

1.3.1.1.1 El origen de la CEDAW y su impacto en los derechos de las mujeres

En el marco de nuestro análisis genealógico, identificamos las raíces de la CEDAW en un contexto histórico decisivo. Tras el cierre de la Segunda Guerra Mundial, el mundo, situado en una encrucijada, aspiraba a establecer un nuevo orden que venerara los derechos humanos fundamentales con un compromiso

irrevocable. En este escenario de posguerra, auspiciado por la recién creada Organización de las Naciones Unidas, se proclamó en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos.[49] Este documento, trascendental en su esencia, no sólo pavimentó el sendero hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino que, además, plantó las semillas para un porvenir donde la dignidad de cada persona sería salvaguardada. Pese a su carácter universal, este hito significó apenas el principio de una batalla específica en favor de los derechos femeninos, una batalla que demandaría una voz y un foro propios.

El establecimiento de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946 fue un reconocimiento temprano de la necesidad de abordar específicamente las cuestiones de género dentro del marco de las Naciones Unidas.[50] Esta comisión no sólo fue pionera en promover la igualdad de género, sino que también preparó el escenario para futuras deliberaciones y tratados que se centrarían en los derechos de las mujeres. La labor de esta comisión resaltó la discriminación sistémica que las mujeres enfrentaban globalmente, haciendo evidente la necesidad de un compromiso internacional más específico y vinculante.

Seguidamente, la proclamación del Año Internacional de la Mujer en 1975 y el subsiguiente establecimiento de la Década de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) fueron momentos definitorios que templaron a la comunidad internacional hacia la causa de los derechos de las mujeres.[51] El mundo fue testigo de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en México, que no sólo celebró los logros hasta la fecha, sino que también articuló un camino a seguir, marcando un antes y un después en la historia de la lucha por la igualdad de género.

---

[49] Vid. Naciones Unidas, "Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)", Naciones Unidas, 2015, disponible en: *https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf* (fecha de consulta: 20 de marzo de 2024).

[50] Vid. Naciones Unidas, "*Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer*", New York USA, ONU Mujeres, 2018, p. 2 disponible en: *https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/62/UNW_CSW61_Brochure_SP-WEB%20Final.pdf* (fecha de consulta: 20 de marzo de 2024).

[51] Vid. Naciones Unidas, "Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer 19 de junio a 2 de julio de 1975, Ciudad de México," México, Naciones Unidas, sf, párrafos 1,2 disponible en: *https://www.un.org/es/conferences/women/mexico-city1975* (fecha de consulta: 30 de marzo de 2024).

En este clima de creciente conciencia y movilización, el papel de las conferencias mundiales sobre la mujer y la labor incansable de activistas y diplomáticos culminó en la adopción de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1979.[52] Esta convención no fue un logro aislado, sino el resultado de décadas de esfuerzo colectivo y el reconocimiento de la necesidad de abordar las raíces profundas de la discriminación de género. La CEDAW, como se la conoce comúnmente por sus siglas en el idioma inglés, se convirtió en el tratado internacional más completo sobre los derechos de las mujeres, ofreciendo un marco legal sólido para desafiar y eliminar la discriminación en todas sus formas.

La CEDAW refleja la evolución de un mundo que se esfuerza por reconocer y valorar a las mujeres como iguales, subrayando la importancia de modificar los roles tradicionales y promover una sociedad más justa y equitativa. Desde las primeras voces que se alzaron en la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la consolidación de la CEDAW, el viaje ha sido largo y, a veces, tortuoso. Sin embargo, esta convención se erige como un testimonio de lo que es posible cuando la comunidad internacional se une por una causa común: la eliminación de la discriminación contra la mujer, un compromiso no sólo con las mujeres del mundo, sino con la esencia misma de la humanidad.

En segundo lugar, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y con base en la información proporcionada por el Instituto Nacional de las Mujeres[53], corría el año 1981, un momento en el cual la conciencia colectiva sobre los derechos de la mujer comenzaba a cobrar un ímpetu renovado en el continente americano. Fue entonces cuando en Bogotá, la capital de Colombia, se convocó un encuentro sin precedentes: el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Allí, en un acto de solidaridad y memoria, más de 280 mujeres decidieron

[52] Vid. Naciones Unidas, "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la *Mujer*", ONU, New York USA, 1979, *disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.*pdf (fecha de consulta: 20 de marzo de 2024).

[53] Vid. "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres", Instituto Nacional de las Mujeres, sf, disponible en: *https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/efemerides/dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres* (fecha de consulta: 18 de marzo de 2024).

marcar el 25 de noviembre como una fecha imborrable en el calendario, el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Esta fecha no fue escogida al azar, sino que evocaba el trágico destino de las hermanas Mirabal - Patria, Minerva y María Teresa -, valientes activistas políticas de la República Dominicana que en 1960 se convirtieron en mártires al ser brutalmente asesinadas por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

El legado de aquel primer encuentro en Bogotá y la memoria de las hermanas Mirabal no quedaron en el olvido. Más de una década después, el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en un gesto de reconocimiento a la lucha de la violencia contra la mujer, adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer mediante la resolución 48/104. Este acto no sólo simbolizaba un compromiso global con la erradicación de la violencia hacia las mujeres, sino que también reflejaba el espíritu de aquel encuentro en Bogotá, transformando el dolor y la memoria en un llamado a la acción y a la esperanza.

En tercer lugar, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, representa un avance significativo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en el contexto interamericano. Adoptada el 9 de junio de 1994, en Belém do Pará, Brasil, esta convención surgió en respuesta a la creciente alarma por los elevados índices de violencia contra las mujeres, una problemática que en palabras de Pérez Contreras, atenta gravemente contra los derechos humanos y representa un desafío significativo para el desarrollo y la democracia.[54]

La Convención de Belém do Pará, impulsada significativamente por organizaciones feministas y de derechos humanos, tuvo como destacada promotora a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), fundada en 1928.[55] Esta institución

[54] Vid. Pérez Contreras, Ma. de Monserrat, "Comentario a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: Convención de Belem do Pará", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXII, núm. 95. mayo-agosto de 1999, disponible en: *https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/download/3601/4346/*4357 (fecha de consulta: 2 de abril de 2024).

[55] Vid. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), "Abriendo caminos, construyendo igualdad: 95 años de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)", OEA,

jugó un rol fundamental en la elaboración de políticas hemisféricas enfocadas en promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Asimismo, aseguró un apoyo decisivo por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Concretamente, la CIM detectó una importante deficiencia en la CEDAW debido a la falta de disposiciones que abordaran específicamente la violencia contra las mujeres.[56] Comprometida con superar esta omisión, la CIM se dedicó a desarrollar una estrategia comprensiva, que incluyó consultas con especialistas y la activa participación de la sociedad civil junto con las autoridades de la OEA, para crear un marco que efectivamente confrontara este vacío legislativo.

En 1991, la Asamblea General de la OEA ratificó la resolución AG/RES. 1128 (XXI-0/91) *Protección de la Mujer contra la Violencia,* apoyando la elaboración de un anteproyecto de convención interamericana para combatir la violencia contra la mujer.[57] La culminación de este esfuerzo se materializó en 1994 durante una Asamblea Extraordinaria en Belém do Pará, Brasil, donde el proyecto de convención fue aprobado por votación nominal con 19 países a favor y dos abstenciones, acordando su presentación a la Asamblea General de la OEA para su ratificación.[58] En dicha asamblea, ocho países firmaron inicialmente la Convención de Belém do Pará, marcando el inicio del proceso de ratificación y entrada en vigor. Hoy en día, la Convención es ratificada por 32 de los 34 miembros de la OEA, consolidándose como un instrumento fundamental para la educación y promoción de un entorno libre de violencia contra las mujeres, así como para la implementación de medidas dirigidas a su sanción y erradicación.

En cuarto lugar, adoptada durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing constituyó un hito

ISBN: 978-0-8270-7617-4, 2023, disponible en: *https://www.oas.org/es/cim/docs/95a_CIM_ESP.pdf* (fecha de consulta: 2 de abril de 2024).

[56] Vid. Poole, Linda J. “Educar y promover el rechazo a la violencia”, *Milenio,* México, 28 de octubre de 2013, p. 9, disponible en: *https://www.oas.org/es/CIM/docs/Poole_Todas.pdf* (fecha de consulta: 2 de abril de 2024).

[57] Vid. Ídem.

[58] Vid. Ibídem, p. 10.

en la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento femenino a nivel global.[59] Este documento, fruto de un contexto marcado por transformaciones sociales y políticas significativas —particularmente, el fin de la Guerra Fría—, emergió en un momento propicio que favoreció un renovado interés en los derechos humanos, destacando especialmente la cuestión de los derechos de las mujeres. Este cambio en el orden mundial incentivó un enfoque más pronunciado hacia la equidad de género.

La caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, seguida por el fin de la bipolaridad mundial, marcó el inicio de una nueva era en el diálogo internacional sobre derechos humanos, otorgando una prominencia sin precedentes.[60] Este contexto histórico sirvió de catalizador para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, la cual se edificó sobre los fundamentos políticos establecidos en las tres conferencias mundiales anteriores sobre la mujer, celebradas en: Ciudad de México (1975), Copenhague (1980), y Nairobi (1985).[61] Este evento significó la culminación de cinco décadas de esfuerzos jurídicos orientados a asegurar la igualdad de mujeres y hombres, tanto en la legislación como en la aplicación práctica de las leyes.

Adoptado por 189 países, este programa promueve el empoderamiento femenino, basándose en un documento fundamental de política mundial sobre igualdad de género.[62] En su elaboración participaron figuras clave, incluyendo líderes y activistas de organizaciones no gubernamentales, así como representantes de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Estos participantes se dedicaron a asegurar que la conferencia no sólo destacara los

[59] Vid. Naciones Unidas, "Declaración y Plataforma de Acción de Beijing*"*, ONU Mujeres, 2014, p. 3, disponible en: https*://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf* (fecha de consulta: 3 de abril de 2024).
[60] Vid. Comisión Nacional de Derechos Humanos México, "Caída del Muro de Berlín", CNDH México, s.f., disponible en*: https://www.cndh.org.mx/noticia/caida-del-muro-de-berlin-0* (fecha de consulta: 3 de abril de 2024).
[61] Vid. Naciones Unidas, "Conferencias mundiales sobre la mujer", ONU Mujeres, s.f., párrafo 1, disponible en: *https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women* (fecha de consulta: 3 de abril de 2024).
[62] Vid. Op. Cit. Naciones Unidas, "Declaración y Plataforma de Acción de Beijing*"*, p. 1.

problemas enfrentados por las mujeres, sino que también ofreciera soluciones concretas y estrategias de acción.

El proceso legislativo hacia la Declaración y Plataforma de Acción enfrentó numerosos desafíos, incluidos debates sobre temas controvertidos como los derechos sexuales y reproductivos, la inclusión de las mujeres en el proceso de paz y la igualdad de género en la toma de decisiones. La Plataforma de Acción estableció doce áreas críticas de preocupación que iban desde la educación y la salud de las mujeres hasta sus derechos económicos y su participación en el poder político.[63] Los objetivos iniciales de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing eran ambiciosos: no sólo buscaban abordar las desigualdades existentes, sino también promover el empoderamiento de las mujeres y su plena participación en todos los aspectos de la vida. La Declaración propone medidas específicas para que los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado trabajaran juntos en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.

Finalmente, el Convenio del Consejo de Europa para la prevención y combate de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul, fue aprobado el 11 de mayo de 2011. Este instrumento jurídico, respaldado inicialmente por los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, ha logrado que, hasta la fecha, más de tres cuartas partes (36 de 47) de los países miembros firmen el Convenio, y 14 de estos también lo han ratificado.[64] Dicha adopción y ratificación se consideran un hito en los esfuerzos internacionales para combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. La génesis y evolución del Convenio están profundamente arraigadas en el contexto socio-político y cultural de las primeras décadas del siglo XXI, una era marcada por avances tecnológicos significativos.

El inicio del siglo XXI se caracterizó por una creciente movilización social centrada en el espacio digital de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, marcando igualmente un hito en la historia. Impulsados

[63] Vid. Ibídem, p. 2.

[64] Vid. Gastélum Bajo, Diva, “Consejo de Europa”, México, Senado de la Republica LXII Legislatura, s.f., p. 5, disponible en: *https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-10-23-1/assets/documentos/Informe_Sen_Gastelum_Roma.pdf* (fecha de consulta: de abril de 2024).

significativamente por la globalización y el avance tecnológico, especialmente mediante el uso de internet y las redes sociales, estos movimientos experimentaron un renovado impulso, las plataformas digitales emergieron como herramientas cruciales, facilitando la difusión de información y la organización de campañas globales a una escala sin precedentes.[65] Estos avances tecnológicos ofrecieron un terreno fértil para el desarrollo y la implementación de políticas y legislaciones transfronterizas, creando nuevas oportunidades para el avance de los derechos de las mujeres y la igualdad de género a nivel mundial.

La elaboración del Convenio de Estambul fue impulsada por el Consejo de Europa, con el apoyo activo de organizaciones no gubernamentales, activistas de derechos humanos, y académicos especializados en la violencia de género.[66] Figuras clave en este proceso incluyen a parlamentarios, juristas, y representantes de la sociedad civil, quienes colaboraron en la redacción del texto, asegurando que reflejara un enfoque integral y basado en los derechos humanos para combatir la violencia contra las mujeres.

Durante el proceso legislativo del Convenio de Estambul, los debates y discusiones se enfocaron en temas críticos, destacando principalmente la necesidad de definir la violencia contra las mujeres por razones de género. Además, se deliberó sobre la importancia de incluir la violencia doméstica dentro del mismo marco legal, resaltando la urgencia de establecer mecanismos de protección y apoyo a las víctimas que fueran efectivos y accesibles. Este convenio tuvo como objetivo principal la creación de un marco legal integral para prevenir la violencia contra las mujeres, ofreciendo protección a las víctimas y buscando poner fin a la impunidad de los perpetradores. Como parte de sus innovaciones, se establecieron definiciones claras de diversas formas de violencia, incluyendo el acoso sexual, la

[65] Vid. Castells, Manuel, *Netwoks of outrage and hope,* trad. propia, U.K., Cambridge, Polity Press, 2a. ed., 2015, p. 11, paráfrasis traducida: “The critical matter is that this new public space, the networked space between the digital space and the urban space, is a space of autonomous communication. The autonomy of communication is the essence of social movements because it is what allows the movement to be formed, and what enables the movement to relate to society at large beyond the control of the power holders over communication power”.

[66] Vid. Consejo de Europa, “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica”, Estambul, 2011, disponible en: *https://rm.coe.int/1680462543* (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

violación y la mutilación genital femenina. Asimismo, se obligó a los estados firmantes a adoptar legislaciones nacionales que estuvieran alineadas con estos estándares.

Desde su entrada en vigor en 2014, el Convenio de Estambul ha ejercido un impacto significativo en la legislación y las políticas de los países firmantes, impulsando reformas legales sustanciales.[67] Estas reformas han facilitado el establecimiento de servicios de apoyo a las víctimas y han promovido la realización de campañas de concienciación pública, contribuyendo así a una mayor sensibilización sobre la violencia contra la mujer. A largo plazo, este convenio ha sido crucial en el fortalecimiento del marco de derechos humanos, no sólo en Europa sino también en otros continentes, al reforzar el compromiso de los países signatarios con la protección y promoción de los derechos de las mujeres.

1.3.1.1.2 Ética kantiana y los marcos internacionales de protección

En primer lugar, la CEDAW promueve la dignidad y autonomía de las mujeres en sus Artículos 1º al 3º, que buscan erradicar la discriminación y asegurar la igualdad. Estos Artículos reflejan el imperativo categórico kantiano de tratar a todos los seres humanos como fines en sí mismos, no como medios.[68] Sin embargo, para evitar la instrumentalización de las mujeres, especialmente en contextos laborales y familiares, podría enfocarse más en fortalecer las disposiciones de los Artículos 11º y 15º, que tratan sobre el empleo y la igualdad ante la ley, respectivamente, garantizando que las medidas no sólo sean de no discriminación sino también de empoderamiento activo.

En segundo lugar, la CEDAW, en su preámbulo y 4º Artículo, subraya la universalidad de los derechos humanos y el respeto a la dignidad inherente de todas las personas, principios esenciales en la ética kantiana. Según Kant, la moralidad

[67] Vid. Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO), "Primer Informe de Evaluación de GREVIO sobre las Medidas Legislativas y de Otra Índole que Dan Efecto a las Disposiciones del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul)", España, Strasbourg: Consejo de Europa, 2020, p. 9, disponible en: *https://violenciagenero.igualdad.gob.es/marcoInternacional/informesGREVIO/docs/InformeGrevioEspana.pdf* (fecha de consulta: 4 de abril de 2024).
[68] Vid. Op. Cit. Kant, Immanuel, *Crítica de la Razón Práctica*, p. 77.

de una acción se determina por la intención de actuar conforme al deber, no por las consecuencias de dicha acción.[69] Para profundizar en la importancia de las intenciones detrás de las acciones y el papel de la razón, se propone enriquecer el Artículo 4º, que aboga por la no aceptación de la violencia bajo ninguna circunstancia, enfatizando que las acciones deben basarse no sólo en resultados prácticos sino en una base moral y razonada conforme a principios universales.

En tercer lugar, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), específicamente en su Artículo 3º, refuerza el compromiso con la dignidad humana y la autonomía personal, principios fundamentales en la ética kantiana. Immanuel Kant sostiene que las reglas prácticas deben estar guiadas por principios morales universales, determinados por la razón del individuo.[70] Para fortalecer la inclusión de la motivación ética, se propone que el Artículo 8º de la Convención, que trata sobre la adopción de medidas preventivas y sancionadoras, se expanda para incluir explícitamente los fundamentos éticos de estas medidas, asegurando así que las políticas no sólo sean reactivas sino también proactivas en la promoción de la autonomía moral individual.

En cuarto lugar, la sección de la *Declaración de Beijing* sobre los derechos humanos de la mujer refleja los principios de igualdad y dignidad, muy en línea con Kant. Para abordar la adaptación a las particularidades culturales sin perder el universalismo ético, se podría fortalecer el Capítulo IV, *Estrategias de acción*, para incluir directrices más claras sobre cómo los principios universales deben implementarse de manera que respeten las diferencias culturales sin comprometer los valores éticos fundamentales.

---

[69] Vid. Kant, Immanuel, "Fundamentación de la Metafísica en las Costumbres," trad. de Manuel García Morente, 8ª. ed., Argentina, Espasa-Calpe, 1946, p. 38, disponible en: *https://www.google.com.mx/books/edition/Fundamentaci%C3%B3n_de_la_metaf%C3%ADsica_de_las/lEZeAAAAcAAJ?hl=es-419&gbpv=1&pg=PA5&printsec=frontcover* (fecha de consulta: 31 de marzo de 2024).

[70] Vid. Kant, Immanuel, "Teoría y praxis," Argentina, El Cid Editor, ISBN versión ePub 978-1-4492-7518-1, 2014, p. 3, disponible en: *https://books.google.com/books?id=BRLmDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=immanuel+kant&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi1yo2P2aSFAxV7IEQIHRZjCDsQ6wF6BAgMEAE* (fecha de consulta: 2 de abril de 2024).

Finalmente, el Convenio de Estambul, en su Artículo 4º, que enfatiza la no discriminación y la igualdad de trato, junto con el Artículo 12º, que aborda la necesidad de cambiar las actitudes sociales, muestran un respeto por la autonomía y la dignidad, alineados con Kant. Para profundizar en las motivaciones y fundamentos éticos detrás de las medidas protectoras, podría enfatizarse cómo estos principios se aplican específicamente en la práctica, quizás a través de la revisión y el fortalecimiento de las directrices en el Artículo 1º, que trata de la prevención integral.

1.4 Evolución histórica y filosófica de los derechos de las mujeres en los Estados Unidos Mexicanos

El marco jurídico de México, diseñado para salvaguardar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, consiste en una estructura compleja y multifacética. Esta incluye instrumentos legales clave y reformas significativas que, en conjunto, buscan proteger y promover los derechos humanos de las mujeres. El catalizador de estos avances han sido las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 2011, las cuales han marcado un hito en la protección de los derechos de las mujeres.

Estas reformas han incorporado el reconocimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos en la CPEUM y han adoptado el principio pro persona, lo cual permite una interpretación de las leyes más favorable a los derechos individuales. Además, explicitan la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, fortaleciendo el acceso a la justicia. También se ha creado el Consejo de Derechos Humanos, encargado de velar por el cumplimiento de estos derechos, reforzando así el marco jurídico de protección.

En cuanto al reconocimiento de los tratados internacionales, el fundamento se encuentra en el Artículo 133 de la CPEUM. Esta base constitucional es fundamental para entender cómo México integra las disposiciones de estos tratados en su legislación nacional. El principal ejeplo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la cual se justifica en el Artículo 73, inciso a, fracción XXI, de la CPEUM e introduce el feminicidio como una

categoría penal específica. Esta inclusión subraya el reconocimiento del feminicidio como la expresión más extrema de la violencia contra la mujer, reflejando la conceptualización de la violencia de género en el contexto mexicano y respondiendo a la creciente ola de feminicidios en las últimas décadas. Sin embargo, nuestra postura se disocia parcialmente de esta visión, ya que considerar al feminicidio como una categoría penal específica es un error ético-moral. En todo caso, consideramos que lo más apropiado sería contemplarlo como una agravante. Este punto se desarrollará ampliamente en el quinto capítulo de esta investigación.

A su vez, la LGAMVLV se ve reforzada por el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el cual unifica el proceso penal a nivel nacional y enfatiza principios de actuación como la protección integral y la facilitación del acceso a la justicia para las víctimas de violencia. A su vez, el Código Penal Federal tipifica delitos específicos relacionados con la violencia contra la mujer, estableciendo sanciones para los perpetradores y reconociendo explícitamente el impacto devastador de estos crímenes. Este marco es complementado por el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, herramienta que orienta a los operadores de justicia a considerar las desigualdades de género al impartir justicia, garantizando así un trato justo y equitativo para las víctimas.

La sinergia entre estos instrumentos legales y las reformas constitucionales demuestra un enfoque holístico hacia el abordaje de la violencia contra la mujer, subrayando la importancia de la adaptabilidad y flexibilidad en su implementación para responder de manera efectiva a los desafíos locales y a las realidades específicas de las mujeres en México. No obstante, la eficacia de este marco jurídico no se sustenta únicamente en su robustez teórica, sino también en su aplicación práctica y en la voluntad política para asegurar su cumplimiento. Es crucial la continua evaluación y fortalecimiento de estas leyes y políticas para cerrar la brecha entre la legislación y la realidad vivida por las mujeres en México, garantizando así su derecho a una vida libre de violencia.

En este contexto, la transposición de estándares internacionales y nacionales ha enfrentado obstáculos significativos. Entre ellos se destacan la variabilidad en la aplicación de las leyes entre los distintos estados de la República y la insuficiencia

de recursos para su implementación efectiva. Pese a los avances legislativos, los índices de violencia contra las mujeres y de género, incluidos los feminicidios, se mantienen elevados, particularmente en el Estado de México. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las 769 carpetas de investigación por feminicidio iniciadas en 2023 en todo el país, el Estado de México registra el mayor porcentaje, con el 11.1%.[71]

Esta situación evidencia deficiencias en la LGAMVLV. La brecha entre las obligaciones asumidas tanto a nivel internacional como nacional y su efectiva materialización en medidas de protección para las mujeres destaca la urgencia de realizar un análisis deontológico. Este análisis identificará las debilidades teórico-doctrinarias y promoverá su fortalecimiento mediante un enfoque integral, constituyendo el primer paso crucial. En una segunda fase, es imperativo asegurar la aplicación efectiva de estas medidas de manera deontológica e integral en todo el territorio nacional. Esto se refiere a enfocar las disposiciones legales al derecho humano a una vida libre de violencia de forma deontológica, es decir desintoxicados y conscientes del óptimo modelo económico neoliberal Norteamericano.

En otras palabras, es crucial identificar los problemas de implementación para asegurar la efectividad práctica de la legislación en cuestión. Este análisis debe comenzar por una clara distinción entre lo que la ley propone teóricamente y su aplicabilidad real. Tal evaluación actuará como un punto de referencia esencial para el fortalecimiento de las capacidades institucionales en México. A largo plazo, se espera que esto conduzca a un compromiso renovado por parte del gobierno para fomentar una cultura de no violencia y respeto hacia las mujeres. Cabe destacar que los esfuerzos gubernamentales para alcanzar este fin han sido inadecuados, como evidencian los datos ya mencionados. Por esta razón, será pertinente también conocer la política criminal de Estados Unidos, tanto en teoría como en la práctica,

[71] Vid. Solís Fernando, “Edomex, primer lugar nacional en feminicidios durante 2023*”, El sol de México*, México, 7 de enero del 2024, párrafo 3, disponible en: *https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/edomex-primer-lugar-nacional-en-feminicidios-durante-2023-11249225.html#:~:text=De%20acuerdo%20a%20cifras%20de,feminicidio%20de%20enero%20a%20noviembre* (fecha de consulta: 5 de abril de 2024).

y conocer como el referente del modelo económico neoliberal salvaguarda el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia.

1.4.1. La evolución de la LGAMVLV

La LGAMVLV se erige como un pilar esencial en el marco jurídico mexicano, dirigido a combatir la violencia contra la mujer y la violencia feminicida. Promulgada en febrero de 2007, esta legislación no sólo responde a un contexto histórico caracterizado por una creciente visibilización de la violencia contra las mujeres en México, sino que también se cimienta en un amplio marco teórico sobre género y violencia. Inspirada en movimientos sociales y en el dinámico debate académico sobre los derechos de las mujeres, la ley refleja un profundo entendimiento de la complejidad de la violencia contra la mujer, arraigada en estructuras radicales patriarcales; machismo y misoginia. Este enfoque teórico permite situar la LGAMVLV dentro de un esfuerzo más amplio por transformar no sólo la legislación, sino también las normas culturales y sociales que perpetúan la violencia contra las mujeres.

El impulso para la creación de la LGAMVLV proviene de un periodo marcado por transformaciones significativas a finales del siglo XX y principios del XXI, donde eventos trágicos como los feminicidios en Ciudad Juárez y el Estado de México, así como el emblemático caso algodonero, pusieron en relieve la urgencia de abordar de manera efectiva la violencia contra las mujeres. Este último, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sólo condenó al Estado mexicano por su inacción ante los feminicidios, sino que también evidenció las profundas deficiencias en la protección de los derechos de las mujeres.[72] Esta decisión internacional, al destapar las lagunas en nuestro marco de protección, enfatizó la necesidad imperante de reforzar nuestras leyes. Este contexto crítico revela cómo las dinámicas de poder y las resistencias culturales y políticas dentro de la sociedad mexicana han moldeado la lucha contra la violencia de género, subrayando la

[72] Vid. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México,” Serie C No. 205, 2009, disponible en: *https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf* (fecha de consulta: 31 de marzo de 2024).

importancia de un análisis detallado de las negociaciones y compromisos detrás del proceso legislativo de la LGAMVLV.

En este escenario de lucha y cambio, la LGAMVLV emerge como un testimonio de las intensas batallas feministas, subrayando la influencia decisiva de movimientos y figuras emblemáticas en su concepción. Entre ellas, Marcela Lagarde se destaca por su papel crucial en el avance hacia una legislación que aborde directamente la violencia contra la mujer por razones de género. Para Lagarde, el término *feminicidio* no sólo denuncia la gravedad de la violencia contra las mujeres, sino que también enfatiza la necesidad de una acción alternativa científica, política y jurídica compleja, abarcadora e integral, que haga conocer el problema a fondo. Su contribución, como legisladora y antropóloga feminista, fue fundamental en la tipificación del feminicidio y en el desarrollo de un marco teórico y práctico que guiaría la formulación de la LGAMVLV. Este esfuerzo colectivo, enriquecido por estrategias de cabildeo y movilización social, logró que la violencia contra la mujer por razones de género se posicionara como una prioridad en la agenda política de México. Al hacerlo, no sólo se logró un cambio legislativo, sino también un importante avance hacia la transformación de las percepciones culturales sobre la violencia contra las mujeres.

En este escenario de lucha y cambio, la LGAMVLV, aunque concebida como un testimonio de las intensas batallas feministas, corre el riesgo de quedarse en mera retórica sin lograr un impacto real. A pesar de la influencia decisiva de movimientos y figuras emblemáticas en su concepción, incluida la destacada labor de Marcela Lagarde, su argumento de que el término feminicidio no sólo denuncia la gravedad de la violencia contra las mujeres, sino que también requiere una acción alternativa científica, política y jurídica compleja, abarcadora e integral,[73] parece no haber trascendido más allá del discurso. La contribución de Lagarde, aunque fundamental en la tipificación del feminicidio y en el desarrollo de un marco teórico, no se refleja en una implementación efectiva que aborde a fondo el problema.

[73] Vid. Lagarde y de los Ríos Marcela, “El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia,” en Maquieira d'Angelo Virginia (coord.), *Mujeres, globalización y derechos humanos*, 2ª ed., España, Universidad de Valencia, 2010, p. 486.

A pesar del esfuerzo colectivo, las estrategias de cabildeo y la movilización social, la violencia contra la mujer por razones de género sigue siendo un desafío persistente, cuestionando si realmente se ha logrado un cambio legislativo significativo o una transformación profunda de las percepciones culturales sobre la violencia contra las mujeres. Lo que inicialmente se presentó como un avance hacia la transformación social, lamentablemente, se percibe ahora como otro ejemplo de una legislación que, aunque ambiciosa en sus objetivos, se desvanece en la inacción y en la persistencia de las mismas problemáticas que pretendía erradicar.

El camino hacia la aprobación de la LGAMVLV estuvo lleno de desafíos, encontrando resistencias tanto en esferas políticas como sociales que reflejan las complejas interacciones de poder en la sociedad mexicana. Sin embargo, este proceso contó con el impulso de un marco jurídico internacional que favoreció su avance. Instrumentos cruciales como la CEDAW, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Convención de Belém do Pará, no sólo instaron a México a tomar medidas firmes contra la discriminación y violencia hacia las mujeres, sino que también proveyeron una base sólida que legitimó y facilitó la formulación de la LGAMVLV.[74]

Por su lado, con la adopción de la Declaración de Beijing, el Estado mexicano reafirmó su compromiso hacia un marco global de igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, tal como refiere el documento publicado por el Gobierno federal.[75] Este compromiso internacional también ha contribuido a la legislación de la LGAMVLV, que no sólo refleja los principios de Beijing, sino que también establece un estándar ideológico para la formulación de políticas públicas dirigidas a proteger y empoderar a las mujeres en México.

---

[74] Vid. Álvarez Rosa María, “Los Derechos de las Mujeres y su Acceso a una Vida Libre de Violencia”, México, Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, Defensoría de los Derechos Universitarios, 2018, pp. 103-115, disponible en: *https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6201/9a.pdf* (fecha de consulta: 31 de marzo de 2024).

[75] Vid. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Beijing: Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995,” México, Gobierno federal, disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10288/3CONFERENCIA_MUNDIAL_MUJER_BEIJING_1995.pdf* (fecha de consulta: 17 de abril de 2024).

Finalmente, aunque la LGAMVLV fue promulgada antes del Convenio de Estambul, y México no forma parte de este último, ambos documentos contribuyen a un esfuerzo global más amplio para combatir la violencia contra la mujer. Sin embargo, se ha identificado una marcada influencia ideológica de género en la forma en que la LGAMVLV define la violencia contra la mujer. Este hallazgo justifica un análisis crítico de la ley. Además y dado que el Convenio de Estambul y otros instrumentos internacionales ofrecen perspectivas importantes sobre la violencia contra la mujer por razones de odio,[76] su estudio nos permitirá detectar y contextualizar mejor esta influencia, especialmente en relación con la violencia en el núcleo familiar. Estos argumentos y críticas se desarrollarán en el apartado *2.2 Ideología de género*, del próximo capítulo.

Concebida con el propósito explícito de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas, la LGAMVLV establece en su articulado inicial mecanismos para una actuación coordinada del gobierno y la creación de instituciones dedicadas a su implementación. Lo verdaderamente innovador de esta legislación es su reconocimiento de la violencia en sus múltiples expresiones, ofreciendo una definición amplia que abarca desde la violencia física hasta formas menos visibles, todas ellas devastadoras por razones de género. Sin embargo, a pesar de su conceptualización generalizada de odio (error identificado), la efectividad de la ley sigue siendo un tema de análisis crítico, enfrentando el desafío constante de superar barreras estructurales y culturales arraigadas que obstaculizan su plena aplicación.

Este contexto nos invita a una reflexión profunda sobre los principios éticos que sustentan la LGAMVLV, enfocándonos en un análisis deontológico que nos permita comprender mejor no sólo la ley en sí, sino también su implementación práctica. Al realizar este ejercicio, no sólo evaluamos la ley desde una perspectiva normativa, sino que también exploramos caminos para su fortalecimiento y para

[76] El Convenio de Estambul define claramente a la violencia contra la mujer por razones de género como toda violencia contra una mujer porque es una mujer. Por su lado, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, define en su Artículo 1º la "discriminación contra la mujer" Como una exclusión o restricción basada en el sexo.

asegurar que su espíritu de justicia y protección se traduzca en resultados tangibles para las mujeres en México.

1.4.2. Equilibrio ético y legal en la LGAMVLV

Desde la perspectiva de la ética kantiana, la LGAMVLV manifiesta un compromiso con el respeto a la dignidad y los derechos universales de las mujeres, en consonancia con su Artículo 1º. Este compromiso se alinea con los principios kantianos, especialmente su imperativo categórico, que postula la necesidad de actuar de manera que nuestras acciones puedan ser consideradas leyes universales. Para Kant, el respeto a la humanidad debe ser tanto en uno mismo como en los demás, siempre como un fin y nunca meramente como un medio.[77] La LGAMVLV, a través de sus principios, promulga el derecho inalienable de todas las mujeres a vivir libres de violencia, reconociendo su valor intrínseco y fomentando un trato digno. Este enfoque, que resuena con la universalidad kantiana, demanda que las acciones sean justas y aplicables a todos, enfatizando la importancia de la dignidad humana.

En este mismo orden de ideas, la LGAMVLV subraya la importancia de fomentar un entorno donde las mujeres puedan tomar decisiones sobre sus vidas sin el temor a enfrentar violencia, tal como se establece en el Artículo 4º. Para Kant, la autonomía y la libertad constituyen no sólo componentes esenciales de la moralidad, sino también principios fundamentales para la dignidad humana.[78] Esta conexión resalta cómo la legislación busca no sólo proteger, sino también promover condiciones esenciales para el ejercicio de la libertad individual, en alineación con los valores kantianos de respeto a la autonomía personal como piedra angular de una sociedad justa y ética.

Adicionalmente, la LGAMVLV insta a las tres esferas de gobierno a emprender acciones concretas contra la violencia hacia las mujeres. Esto no se limita a la prohibición de ciertas conductas, sino que se extiende a la obligación de tomar medidas preventivas y sancionadoras, tal como se expone en los Artículos 1º y 2º.

[77] Vid. Op. cit. Kant, Immanuel, “Fundamentación de la Metafísica en las Costumbres,” p. 84.
[78] Vid, Ibídem, p. 34.

Este mandato de la ley se alinea con el imperativo categórico kantiano, que nos insta a actuar de manera que podamos respetar los derechos y la dignidad de los demás, subrayando la intersección entre la ética kantiana y los fundamentos de la LGAMVLV.

En este contexto, se podría estimar que la ley exhibe una alineación teórica aproximada del 80% con la ética kantiana.[79] Este porcentaje sugiere una base teórica significativa; sin embargo, un análisis detallado revela áreas en las cuales sus disposiciones podrían interpretarse como divergentes de los principios universales kantianos de moralidad, autonomía individual y libertad. Por ejemplo, la LGAMVLV se enfoca específicamente en mujeres, adolescentes y niñas, estableciendo medidas para su protección y la promoción de sus derechos. No obstante, desde la óptica de la ética kantiana, se podría argumentar que la moralidad y las leyes derivadas de ella deben aplicarse de manera universal, sin limitarse a un grupo específico. Kant enfatiza que las acciones deben basarse en máximas que puedan ser universalizadas,[80] lo que plantea interrogantes sobre la focalización de la ley en grupos demográficos concretos.

Además, las medidas de protección que establece la ley, tales como las órdenes de protección descritas en los Artículos 27º y subsiguientes, podrían ser interpretadas como limitaciones a la autonomía individual al imponer restricciones significativas, especialmente a los agresores. Aunque el objetivo primordial de estas medidas es salvaguardar la integridad y seguridad de las mujeres, podrían percibirse como conflictivas con el principio kantiano de autonomía, que otorga un alto valor a la capacidad de los individuos de tomar decisiones de manera libre y racional.[81]

---

[79] Es fundamental reconocer que el cálculo presentado tiene un carácter eminentemente ilustrativo, destinado a facilitar la comprensión de la influencia de la ética kantiana en la Declaración. Lejos de constituir un análisis cuantitativo riguroso, este enfoque subraya la complejidad inherente a la aplicación de principios éticos en el ámbito jurídico, la cual trasciende cualquier intento de simplificación numérica. En este marco ilustrativo, anticipamos que nuestros análisis futuros profundizarán en estas cuestiones, abordando con detalle la interacción entre ética y derecho. En otras palabras, las cifras propuestas serán una simplificación y debe tomarse como una aproximación simbólica más que como un cálculo preciso, destinada a subrayar el significativo pero no absoluto alineamiento entre los instrumentos analizados y la deontología.

[80] Vid. Op. Cit. Kant, Immanuel, “Fundamentación de la Metafísica en las Costumbres,” pp. 97, 98.

[81] Vid. Ibídem, pp. 125,126.

A decir verdad, la LGAMVLV otorga al Estado un papel activo en la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, un enfoque crucial para salvaguardar los derechos y la seguridad de estas. Sin embargo, desde una perspectiva kantiana, es imperativo hallar un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la intervención estatal, a fin de no socavar la libertad personal y la autonomía. Este delicado equilibrio se discutirá en el subcapítulo *3.2.2.1 El estatus de la fiscalía especializada para la atención de delitos vinculados a la violencia de género.* Contrario a lo esperado, se observa un retroceso hacia un Estado policial, resultado de las dinámicas económicas impulsadas por el modelo neoliberal en México, que lejos de materializar dicho equilibrio, profundiza las problemáticas existentes.

Finalmente, es importante aclarar que las divergencias identificadas en la LGAMVLV no disminuyen su importancia fundamental. Por el contrario, estas discrepancias destacan la complejidad inherente a la tarea de integrar principios éticos universales en el marco del Estado de derecho mexicano, evidenciando así los problemas subyacentes. Lejos de deslegitimar la ley, estas tensiones subrayan el desafío que implica la aplicación de la ética filosófica a la legislación contemporánea. Este reto adquiere una significación particular en la sociedad mexicana, donde un modelo económico neoliberal —malinterpretado y, por obvias razones, mal implementado— contribuye a la persistencia de fenómenos como la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres. Esta situación problemática ha exigido la creación de instrumentos legislativos específicos, como el abordado, provocando un enfrentamiento con situaciones ambivalentes que se intenta superar mediante legislación especializada.

1.4.2.1 Análisis ético de las órdenes de protección administrativas en la LGAMVLV

Las órdenes de protección contempladas en la LGAMVLV representan un mecanismo esencial para la defensa y salvaguarda de mujeres y niñas ante situaciones de violencia. Estas órdenes según su Artículo 27º, caracterizadas por su urgente aplicación, tienen un carácter precautorio y cautelar que busca proteger de manera inmediata la integridad, libertad y vida de las víctimas. Así mismo se establece que estas medidas deben ser emitidas de oficio o a petición de parte por

autoridades administrativas, el Ministerio Público o los órganos jurisdiccionales competentes, en cuanto se tenga conocimiento de un hecho violento. Esta rapidez en la respuesta es crucial para evitar que el agresor, ya sea directa o indirectamente, tenga contacto con la víctima, reduciendo así el riesgo de futuros abusos. Además, la inclusión de medidas específicas para abordar la violencia política de género subraya la importancia de proteger a las mujeres en todas las esferas de la vida pública, permitiendo que entidades como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral (INE) puedan solicitar estas protecciones.

Por su lado, su Artículo 28º refuerza la importancia de estas órdenes al clasificarlas como personalísimas e intransferibles, diferenciándolas en administrativas y jurisdiccionales, cada una con competencias específicas. Esta distinción asegura que tanto las autoridades administrativas como las judiciales puedan actuar eficazmente según sus respectivas competencias. En conjunto, estos Artículos no sólo refuerzan el compromiso del sistema legal mexicano con la protección de las mujeres, sino que también destacan la necesidad de una respuesta coordinada y eficiente para abordar la violencia de género de manera integral. Este marco normativo abre el diálogo hacia un análisis deontológico de las órdenes de protección, tanto administrativas como jurisdiccionales, permitiendo evaluar su aplicación desde una perspectiva ética y normativa. Es fundamental evaluar que tanto estas medidas se alinean con los principios de justicia y equidad, garantizando que las acciones emprendidas no sólo sean legales, sino también moralmente correctas y justas para las víctimas.

Las medidas de protección administrativas previstas en el Artículo 34º Ter de la LGAMVLV, reflejan principios fundamentales como la dignidad humana y el deber moral de proteger y respetar los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la fracción I, que establece el traslado de las víctimas a donde se requiera para garantizar su seguridad, encarna el principio kantiano de proteger la dignidad y seguridad de la persona. Esta medida no sólo responde a una necesidad inmediata de protección, sino que también reconoce y respeta la autonomía y el valor intrínseco de la víctima al garantizar que su bienestar es prioritario.

Asimismo, la fracción III, que proporciona alojamiento temporal en espacios seguros como casas de emergencia, refugios y albergues, ilustra la aplicación del imperativo categórico al ofrecer un entorno que garantiza la seguridad y dignidad de las víctimas. En términos kantianos, esta medida se alinea con el deber moral de no instrumentalizar a las personas, asegurando que las mujeres y niñas en situación de violencia no sean tratadas como medios para otros fines,[82] sino que se les brinda un espacio donde puedan reconstruir sus vidas con dignidad y respeto.

La fracción IX, que prohíbe al agresor acercarse a la víctima y a sus lugares frecuentados, refuerza la protección de la libertad y seguridad individual, elementos esenciales en la filosofía kantiana. Este mandato prohíbe cualquier contacto que pudiera amenazar la integridad de la víctima, mostrando un compromiso con el respeto incondicional a su derecho a una vida libre de violencia. Desde la perspectiva deontológica, esta disposición enfatiza el deber de la sociedad y del Estado de proteger a sus ciudadanos más vulnerables, actuando de manera que sus derechos y dignidad sean inviolables.

En la fracción XI, la protección policial permanente a la mujer y su familia, y en la fracción XII, la protección por seguridad privada cuando sea necesario, se observa el compromiso de las autoridades con el principio kantiano del respeto y protección de la persona humana. Estas medidas no sólo buscan prevenir futuros actos de violencia, sino que también reflejan una obligación ética de salvaguardar la vida y la libertad de las mujeres y niñas, asegurando que no sean vistas simplemente como medios para un fin, sino como individuos con derechos y dignidad que deben ser protegidos.

Finalmente, la fracción XVII, que prohíbe al agresor intimidar o molestar a la víctima, directa o indirectamente, resalta el compromiso con la autonomía y el respeto a la persona. Esta medida asegura que la víctima pueda vivir libre de temor y coerción, promoviendo un entorno donde se respete su libertad y capacidad de autodeterminación. Desde una óptica kantiana, este es un reflejo claro del imperativo categórico de actuar de manera que se respete la dignidad y los

[82] Vid. Op. Cit. Kant, Immanuel, *Crítica de la Razón Práctica*, p. 77.

derechos de todos los individuos, garantizando que las acciones tomadas sean moralmente correctas y justas.

En resumen, las medidas de protección administrativas están profundamente alineadas con los principios de la ética kantiana, destacando un enfoque en la protección y respeto irrestricto de los derechos humanos de las mujeres. Estas disposiciones no sólo buscan prevenir la violencia, sino también asegurar que las mujeres y niñas puedan vivir con dignidad y seguridad, en consonancia con los deberes morales y el respeto a la autonomía y dignidad humana que promueve la filosofía de Kant.

1.4.2.2 Análisis ético de las órdenes de protección judicial en la LGAMVLV

Desde la perspectiva de la ética kantiana, las medidas de protección jurisdiccionales establecidas en el Artículo 34º Quáter de la LGAMVLV, tienen el objetivo de garantizar la seguridad y dignidad de las mujeres y niñas. Sin embargo, es crucial analizar si estas disposiciones reflejan de manera efectiva los principios fundamentales de la filosofía kantiana, como el respeto a la autonomía y la dignidad humana. Por ejemplo, la fracción VII que ordena la desocupación del domicilio por parte del agresor, podría parecer alineada con este principio. Sin embargo, la medida puede resultar insuficiente si no se garantiza de manera efectiva la seguridad y estabilidad emocional de la víctima y sus hijos, especialmente si la implementación de esta orden enfrenta obstáculos prácticos, como la falta de un lugar seguro alternativo para el agresor. En este sentido, la protección de la víctima no debe comprometer otros aspectos fundamentales de su bienestar, evidenciando una falta de alineación con el imperativo categórico kantiano de tratar a cada individuo con plena dignidad y respeto.

La fracción IX, que establece la notificación al superior jerárquico inmediato cuando la persona agresora es un servidor público, también podría ser cuestionada desde una óptica kantiana. Aunque la intención es garantizar que los agresores en posiciones de poder sean responsabilizados, esta medida podría no siempre proteger adecuadamente la privacidad y seguridad de la víctima. La exposición pública de la situación de violencia podría someter a la víctima a un escrutinio adicional y no deseado, violando así su derecho a ser tratada con dignidad y

respeto. Kant enfatiza la importancia de actuar conforme a principios universales que respeten la autonomía y dignidad de cada persona,[83] por tanto, las medidas deben ser diseñadas para proteger a las víctimas sin comprometer su privacidad y bienestar emocional.

La fracción XI, que permite la colocación de localizadores electrónicos con el consentimiento de la persona agresora, puede parecer una medida adecuada para garantizar la seguridad de la víctima. No obstante, desde la ética kantiana, esta medida podría no ser completamente eficaz si no se asegura que el consentimiento del agresor sea verdaderamente voluntario y no coaccionado. Kant insiste en que las acciones deben basarse en el respeto mutuo y la autonomía,[84] por lo tanto, cualquier medida que potencialmente coaccione al agresor a consentir podría no alinearse con los principios kantianos de respeto a la libertad y la autonomía del individuo. Además, es crucial que esta medida no sea vista como un sustituto de una protección más efectiva y completa para la víctima.

Finalmente, la fracción XVI, que contempla medidas adicionales para brindar una protección integral a la víctima, aunque es amplia y flexible, puede ser insuficiente si no se establecen claramente los criterios y procedimientos para su implementación. La falta de especificidad y concreción puede llevar a interpretaciones variables y, en algunos casos, a la ineficacia de las medidas. Desde una perspectiva kantiana, la aplicación de la ley debe ser clara, universal y justa, garantizando que todas las víctimas reciban la misma protección y trato. La ambigüedad en la implementación de esta fracción puede comprometer la coherencia y la eficacia de la protección otorgada, lo que a su vez afecta negativamente la dignidad y la seguridad de las mujeres y niñas en situación de violencia.

En conclusión, aunque las medidas de protección jurisdiccionales del Artículo 34º Quáter buscan salvaguardar los derechos y la seguridad de las víctimas, es fundamental que se alineen más estrechamente con los principios de la ética kantiana. Esto implica asegurar que cada medida respete y promueva la autonomía

[83] Vid. Ibídem, p. 72.
[84] Vid. Ídem.

y la dignidad humana de las víctimas, garantizando que las disposiciones legales no sólo sean eficaces en prevenir la violencia, sino que también reflejen un compromiso ético profundo con el respeto irrestricto a los derechos humanos.

1.5 La respuesta de EE. UU. a la violencia contra la mujer desde la perspectiva de la autodeterminación

Inicialmente, es crucial entender que el marco jurídico en Estados Unidos destinado a proteger el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia comprende legislaciones federales importantes como el Acta de Prevención y Servicios contra la Violencia Familiar (*Family Violence Prevention and Services Act* – FVPSA, por sus siglas en ingles) y el Acta de Violencia Contra las Mujeres (*Violence Against Women Act* – VAWA, por sus siglas en ingles). Estas leyes reflejan el compromiso del país con la autodeterminación nacional, lo que permite a Estados Unidos mantener su soberanía mientras aborda estas problemáticas críticas de manera efectiva.

En este orden de ideas, la doctrina de la autodeterminación nacional, consagrada en el derecho internacional y resaltada en el Artículo 2º de la Carta de las Naciones Unidas (CNU) de 1945, afirma que los pueblos deben tener el derecho de decidir su propio destino político.[85] Esta doctrina, que emergió con fuerza tras la Primera Guerra Mundial y fue promovida por figuras como Woodrow Wilson, ha servido de base para la descolonización del siglo XX y continúa influyendo en la resolución de conflictos étnicos y territoriales contemporáneos. Para el Expresidente Wilson, el Panamericanismo es un concepto que demuestra cómo los estados americanos colaboran y se fortalecen en el ámbito global, promoviendo principios de legalidad e independencia y evitando cualquier inclinación imperialista."[86] Esta colaboración es un refuerzo a la visión de autogobierno y cooperación internacional.

---

[85] Vid. Naciones Unidas, "Carta de las Naciones Unidas," 26 de junio de 1945, San Francisco, Artículo 2º, sección 1, disponible en: *https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/carta_nu.pdf* (fecha de consulta: 18 de abril de 2024).

[86] Vid. Wilson, Woodrow, Daniels, Josephus, "Woodrow Wilson: Speeches, Inaugural Addresses, State of the Union Addresses, Executive Decisions & Messages to Congress," trad. propia, Chequia, Good Press, 2023, p. 65, disponible en: *https://books.google.com/books?id=rxPmEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=woodrow+wilson&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiMvJqN68yFAxUuHkQIHSJ2DGIQ6wF6BA*

Centrándonos en la legislación específica, el FVPSA, establecida por primera vez en 1984, se enfoca en el apoyo a víctimas de violencia doméstica y es esencial para el financiamiento de refugios y actividades de prevención.[87] Este marco no sólo atiende las necesidades inmediatas de las víctimas mediante servicios directos, sino que también fortalece una red integral de apoyo que promueve activamente la prevención y la intervención a largo plazo.

En cuanto a VAWA, implementada inicialmente en 1994 y reautorizada en 2000, 2005, 2013 y 2022, ha sido crucial en el establecimiento de políticas para proteger el derecho humano a vivir libre de violencia.[88] Esta legislación no sólo ha asignado fondos significativos para apoyar a las víctimas a través de programas específicos, sino que también ha establecido marcos legales robustos para la protección de las víctimas y la persecución judicial de los agresores, reflejando así un compromiso constante y efectivo con esta causa a nivel nacional.

En sinergia, FVPSA y VAWA constituyen un dúo legislativo integral que abarca desde la atención inmediata y protección de las víctimas hasta la educación y la reforma sistémica para combatir la violencia doméstica. Este enfoque integrado demuestra un compromiso profundo con la erradicación de la violencia y con el apoyo sustancial a quienes enfrentan estas situaciones, asegurando que las políticas no sólo respondan a las crisis sino que también trabajen proactivamente para prevenirlas.

En conclusión, aunque Estados Unidos no ha ratificado tratados internacionales como la CEDAW, esta decisión subraya una postura de fortaleza soberana, donde se prioriza la legislación interna y la capacidad de adaptar y evaluar las soluciones a las necesidades y valores nacionales. Además, es importante reconocer que el derecho a la auto gobernanza implica que los Estados legítimos no deben enfrentar

---

gEEAE (fecha de consulta: 18 de abril de 2024,) paráfrasis traducida: "This is Pan-Americanism. It has none of the spirit of empire in it. It is the embodiment, the effectual embodiment, of the spirit of law and independence and liberty and mutual service."

[87] Vid. Congressional Research Service, "Family Violence Prevention and Services Act (FVPSA): Background and Funding," USA, Congressional Research Service, 2022, disponible en: *https://sgp.fas.org/crs/misc/R42838.pdf* (fecha de consulta: 16 de abril de 2024),

[88] Vid. Congressional Research Service, "The 2022 Violence Against Women Act (VAWA) Reauthorization," USA, Congressional Research Service, 2023, disponible en: *https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47570/2* (fecha de consulta: 16 de abril de 2024).

interferencias en su gobierno, consolidando la idea de que tienen la capacidad de modificar o incluso renunciar a este derecho a través de procesos democráticos internos, sin que otros Estados puedan extinguir este derecho."[89] Al resistirse a ratificar ciertos tratados internacionales, Estados Unidos no sólo protege su soberanía, sino también defiende la capacidad de su pueblo para gobernar según sus propios términos y valores.

1.5.1 FVPSA: Un pilar en la lucha de la violencia familiar en Estados Unidos

De entrada, la FVPSA, promulgada en 1984, se erige como un pilar esencial en la legislación estadounidense para la prevención de la violencia familiar y el apoyo a las víctimas. En la década de 1980, Estados Unidos comenzó a abordar sistemáticamente la violencia doméstica, impulsado por el creciente movimiento feminista y la mayor visibilidad mediática de las víctimas. Este enfoque fue resultado de un nuevo despertar a inicios de los años 70, cuando el movimiento de liberación de las mujeres puso de nuevo en la agenda pública el tema del maltrato hacia las esposas y, posteriormente, la violación marital.[90]

Además, la congresista Bárbara Mikulski, como defensora apasionada de los derechos de las mujeres, jugó un papel esencial en la promoción y redacción de esta ley. Colaboró estrechamente con organizaciones y grupos de defensa para influir en legislaciones importantes, como la Ley Lilly Ledbetter, que garantiza la igualdad salarial sin distinción de género, raza, religión, edad o discapacidad, y promovió enmiendas críticas en la reforma de salud para incluir cuidados

---

[89] Vid. Buchanan, Allen., et. al., "Autodeterminación y secesión," España, Gedisa, 2014, p. 21, disponible en: https://books.google.com/books?id=xDklBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=derecho+de+autodeterminaci%C3%B3n+nacional&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjX55eN9syFAxV5O0QIHeieBWIQ6wF6BAgJEAE (fecha de consulta: 18 de abril de 2024).

[90] Vid. Hafkin Pleck, Elizabeth, "Domestic Tyranny: The Making of American Social Policy Against Family Violence from Colonial Times to the Present," trad. propia, USA, University of Illinois Press, 2004, p. 4, disponible en *https://books.google.com.mx/books?id=zN2A2shTz6YC&printsec=frontcover&dq=Domestic+Tyranny:+The+Making+of+Social+Policy+against+Family+Violence+from+Colonial+Times+to+the+Present+pdf&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjg2dvuvM2FAxW64ckDHYRaCB0Q6wF6BAgGEAE* (fecha de consulta: 18 de abril de 2024), paráfrasis traducida: "In the early 1970s, the women's liberation movement rediscovered wife beating and, somewhat later, marital rape."

preventivos para las mujeres sin costes adicionales.[91] Su compromiso fue crucial para superar los debates intensos y los desafíos de financiación federal durante el proceso legislativo. Según el informe del Departamento de Justicia, un problema significativo que enfrentaron los administradores estatales es la dificultad de planificar a largo plazo debido a las grandes fluctuaciones en los niveles de financiamiento año tras año.[92]

Por otro lado, la FVPSA se estableció con objetivos claros: proveer fondos para refugios y programas de apoyo, mejorar la eficacia de las agencias de servicios sociales, y desarrollar un sistema nacional de información y estadísticas sobre violencia familiar. Según Janine M. Zweig y Martha R. Burt, el programa de subvenciones formulado, conocido como STOP (Services, Training, Officers, Prosecutors), ha sido un canal federal esencial que ha promovido el desarrollo sustancial de programas de apoyo para mujeres víctimas de violencia en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios.[93]

Adicionalmente, la FVPSA ha demostrado ser un recurso indispensable y flexible, no sólo para responder a las necesidades inmediatas de las víctimas, sino también para fomentar un cambio cultural en el reconocimiento y erradicación de la violencia doméstica. Especialmente relevante es el creciente uso de la tecnología digital e Internet, que, como se ha observado durante eventos como la pandemia de

---

[91] Vid. Congress of the United States, “Tributes Delivered in Congress for Barbara A. Mikulski,” trad. propia, Washington D.C., Government Printing Office, 2012, p. 3, disponible en: *https://www.govinfo.gov/content/pkg/CDOC-112sdoc6/pdf/CDOC-112sdoc6.*pdf (fecha de consulta: 19 de abril de 2024,) paráfrasis traducida: “Senator Mikulski has been a strong and unwavering voice for women, families, and the people of Maryland. She shepherded through the Lilly Ledbetter Act, which helps ensure that no matter your gender, race, religion, age, or disability, one will receive equal pay for equal work. She fought tenaciously for her important amendment to the health care reform legislation, ensuring that women’s preventive care would be covered with no added out-of-pocket expense.”

[92] Vid. Fisher, Bonnie S., ed. "Violence Against Women and Family Violence: Developments in Research, Practice, and Policy," trad. propia, Washington, Department of Justice, 2004, pp. III–11–5, disponible en: *https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/199701.pdf* (fecha de consulta: 19 de abril de 2024), paráfrasis traducida: “The most pressing problem facing State administrators is the difficulty of long-range planning, given extreme fluctuations in funding levels from year to year.”

[93] Vid. Ibídem, paráfrasis traducida: “Victim service programs for women who have experienced violence have grown as a result of Federal funding directed at State programs. Janine M. Zweig and Martha R. Burt describe the STOP (Services, Training, Officers, Prosecutors) Violence Against Women Formula Grants Program as 'a major Federal avenue that has further stimulated the growth of programs serving women victims of violence' in the 50 States, the District of Columbia, and the 5 territories”.

COVID-19, ha propiciado un aumento de la violencia en contextos digitales.[94] Según el informe de Fiscalía Mujeres, Violencia Digital contra las Mujeres y las Niñas, la violencia digital causa severos daños psicológicos, físicos, sexuales y económicos a mujeres y niñas, este tipo de violencia limita significativamente la capacidad de las mujeres de participar equitativamente en la vida pública, afectando negativamente la salud, la economía y la cohesión social, reduce el acceso de las mujeres a internet y promueve el desarrollo de tecnologías con sesgos de género.[95] Argumentos que justifican la importancia crítica de una continua actualización legislativa para abordar estas complejidades emergentes.

En resumen, la FVPSA ha desempeñado un papel esencial en el combate y la prevención de la violencia doméstica en los Estados Unidos desde su promulgación en 1984. Originada en un periodo de creciente conciencia y activismo social, esta legislación ha facilitado recursos críticos y ha promovido un cambio cultural en la percepción y tratamiento de la violencia doméstica. El compromiso continuo y la adaptabilidad de la FVPSA son testimonio de su relevancia y necesidad en una sociedad en evolución. A medida que emergen nuevos desafíos, como la violencia digital, la FVPSA y legislaciones relacionadas deben ser revisadas y actualizadas para asegurar una protección efectiva y pertinente que abarque todas las formas de violencia contra las mujeres. La autodeterminación nacional permite a los Estados Unidos someter a evaluación la FVPSA, asegurando que el derecho humano a una vida libre de violencia se mantenga como una prioridad legislativa y social.

1.5.1.1 Autonomía y dignidad en la FVPSA

Para empezar, la FVPSA se fundamenta en los principios de la ética kantiana, destacando el respeto por la dignidad y autonomía de las víctimas de violencia doméstica. Al enfatizar la importancia de tratar a las personas como fines en sí mismas y no como medios, la FVPSA refleja un compromiso ético significativo al

[94] Vid. ONU Mujeres, "Violencia Digital Contra las Mujeres y las Niñas," México, UN Women office publishing, 2023, p. 2, disponible en: https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/2023-03/Brief_ViolenciaDigital.pdf (fecha de consulta: 19 de abril de 2024).
[95] Vid. Ídem.

proporcionar refugios y servicios de apoyo que permiten a las víctimas y sus familias recuperar el control sobre sus vidas.[96]

Cabe destacar que la FVPSA representó la primera iniciativa federal en abordar directamente la problemática de la violencia doméstica. Desde su implementación, ha mantenido un compromiso constante con la provisión de refugio y servicios para los sobrevivientes, extendiendo su apoyo incluso a los niños expuestos a la violencia doméstica y a la violencia en relaciones de noviazgo entre adolescentes.[97] Además, al establecer un marco normativo coherente y exhaustivo para la intervención en casos de violencia doméstica en todo el territorio de Estados Unidos, la FVPSA garantiza que todas las personas, sin importar su ubicación, puedan acceder a servicios esenciales que protegen y respetan sus derechos humanos fundamentales.

Este enfoque integral no sólo estandariza la respuesta a la violencia doméstica sino que también asegura que las medidas adoptadas bajo esta legislación sean moralmente justificables y universalmente aplicables, reflejando el principio kantiano de universalidad en las leyes morales. La FVPSA promueve activamente la autonomía de las víctimas al proporcionar acceso a recursos legales y de asesoramiento, fortaleciendo así su capacidad para tomar decisiones informadas y autónomas respecto a su seguridad y bienestar futuro. La autonomía es un componente esencial de la moralidad, y al empoderar a las víctimas para que gestionen su recuperación y reintegración social, la FVPSA abraza este principio ético de manera efectiva.

Por último, de acuerdo con la ley, se requiere que los servicios de asistencia telefónica ofrezcan información y ayuda a las víctimas, incluyendo apoyo relacionado con la violencia doméstica y la agresión sexual, así como programas de

---

[96] Vid. Congressional Research Service, “Family Violence Prevention and Services Act (FVPSA): Background and Funding,” trad. propia, USA, Congressional Research Service, 2022, p. II, disponible en: *https://sgp.fas.org/crs/misc/R42838.pdf* (fecha de consulta: 16 de abril de 2024), paráfrasis traducida: “The bulk of FVPSA funding supports shelter and direct services for victims and their families….”

[97] Vid. Ídem, paráfrasis traducida:”FVPSA was the first federal law to address domestic violence. Since the law was enacted, it has retained a primary focus on providing shelter and services for survivors and has increasingly provided support to children exposed to domestic violence and teen dating violence.”

intervención para parejas abusivas.[98] Estos recursos no sólo ayudan a las víctimas a navegar los desafíos legales y personales que enfrentan, sino que también les ofrecen las herramientas necesarias para reconstruir sus vidas con dignidad y respeto propio. Basándonos en la integración de los principios éticos kantianos, se puede sostener que la FVPSA refleja la ética kantiana en aproximadamente el 85% de sus disposiciones y aplicaciones, aunque aún existe margen de mejora en términos de la universalidad y la accesibilidad completa de los servicios para todas las víctimas potenciales.

1.5.2 VAWA: Transformación legislativa y su relevancia social en Estados Unidos

"El Acta de Violencia contra las Mujeres (VAWA), promulgada inicialmente en 1994 como parte de la Ley de Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley (P.L. 103-322),"[99] representa un hito legislativo crucial en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en los Estados Unidos. Este acto legislativo aborda integralmente la violencia doméstica y sexual y ha establecido un precedente para políticas públicas futuras destinadas a proteger a las mujeres de todas formas de violencia.

Históricamente, entre 1950 y 1980, el reconocimiento de los problemas sociales relacionados con la violencia doméstica y sexual en Estados Unidos aumentó significativamente.[100] Durante este periodo, los movimientos feministas impulsaron estos temas en la agenda nacional, cuestionando los roles tradicionales de género y estructura familiar. Estos movimientos alcanzaron logros legislativos clave, incluyendo la Ley de Igualdad de Salario de 1963.[101] La violencia doméstica,

---

[98] Vid. Ibídem, p. 20, paráfrasis traducida: "FVPSA requires that the hotline provide information and assistance to adult and youth victims of domestic violence, family and household members of victims of such violence, and "persons affected by victimization." This includes support related to domestic violence, children exposed to domestic violence, sexual assault, intervention programs for abusive partners, and related issues."

[99] Vid. Congressional Research Service, "The 2022 Violence Against Women Act (VAWA) Reauthorization", trad. propia, USA, Congressional Research Service, 2023, p. I, disponible en: *https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47570/2* (fecha de consulta: 16 de abril de 2024), paráfrasis traducida: "The Violence Against Women Act (VAWA) was originally enacted in 1994 as Title IV of the Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994 (P.L. 103-322)."

[100] Vid. Milo Alberto, *"*Olas del feminismo: etapas y evolución de la lucha de género que encabezan las mujeres," *Revista National Geographic en español,* Televisa S.A. de C.V., 8 de marzo de 2023, párrafo 9, disponible en*: https://www.ngenespanol.com/historia/olas-del-feminismo-cuantas-son-y-cuales-son-las-diferencias-entre-ellas/* (fecha de consulta: 16 de abril de 2024).

[101] Vid. Ídem.

a menudo ignorada por las autoridades locales, junto con historias desgarradoras de mujeres que sufrían en silencio, impulsaron una demanda de acción legislativa más fuerte, culminando en la promulgación de VAWA en 1994. Esta ley, fruto del activismo y liderazgo de las sobrevivientes, ilustra el impacto significativo de la acción colectiva en la formulación de políticas públicas.[102]

Además, el senador Joe Biden principal patrocinador de VAWA,[103] trabajó junto con grupos de defensa de los derechos de las mujeres y organizaciones como la National Organization for Women (NOW) para asegurar el apoyo del público y del Congreso. Estas organizaciones jugaron un papel crucial en la conformación de la legislación y en la movilización del apoyo necesario a través de campañas de sensibilización y presión política.

Por otro lado, el proceso de aprobación de VAWA enfrentó múltiples desafíos, particularmente en los debates sobre la expansión del rol federal en dominios tradicionalmente manejados por los estados. Los críticos argumentaron que VAWA otorgaba una autoridad federal excesiva, extendiendo desproporcionadamente el poder del Congreso y desequilibrando la distribución de poderes en perjuicio de los estados.[104] Sin embargo, los defensores de la ley enfatizaron la urgente necesidad de implementar un marco legal uniforme a nivel nacional para abordar efectivamente la violencia de género, apoyados por funcionarios estatales que reconocieron las

[102] Vid. Hidalgo Rosie, "Violence Against Women Act: Milestones Achieved and the Road Ahead," trad. propia, Blog Post, Office on Violence Against Women (OVW), 13 de septiembre de 2023, párrafo 1, disponible en: *https://www.justice.gov/ovw/blog/violence-against-women-act-milestones-achieved-and-road-ahead* (fecha de consulta: 17 de abril de 2024), paráfrasis traducida: "Born from years of grass-roots advocacy, and from the voices and leadership of survivors, VAWA's 1994 enactment was a testament to the power of collective action in shaping public policy."

[103] Vid. Ibídem, párrafo 3, paráfrasis traducida: "President Biden signed into law the bipartisan VAWA Reauthorization Act of 2022, which was the fifth iteration of VAWA since he championed its original passage in 1994 as a Senator."

[104] Vid. Goldfarb, Sally F., "The Supreme Court, the Violence Against Women Act, and the Use and Abuse of Federalism," trad. propia, Fordham Law Review 71, no. 1, 2002, p. 78, disponible en: *https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=3851&context=flr* (fecha de consulta: 21 de abril de 2024), paráfrasis traducida: "The trial court, inits opinion dismissing Christy Brzonkala's VAWA claim on the ground that Congress lacked constitutional authority to enact the civil rights provision, stated that upholding the civil rights provision "would have the practical result of excessively extending Congress's power and of inappropriately tipping the balance [of power] away from the states."

limitaciones de sus propios sistemas, afectados por inercia y discriminación arraigada.[105]

La reautorización de VAWA requirió superar complejos escenarios políticos, con intensos debates sobre la implicación federal en esta esfera. Los defensores de la ley resaltaron su importancia para asegurar una respuesta coherente y uniforme ante la violencia de género a nivel nacional, destacando que era esencial para abordar una problemática que los estados no habían logrado resolver por sí mismos.[106]

En términos de implementación, VAWA fue diseñada para superar las limitaciones en la protección y el apoyo a las víctimas de la violencia. Establece objetivos claros: aumentar la concienciación pública sobre la violencia contra la mujer, mejorar las respuestas legales y judiciales, y crear programas de ayuda para las víctimas. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD) juega un papel fundamental al proporcionar información sobre las protecciones de vivienda establecidas por VAWA, lo que incluye la implementación de estándares de sentencia, la compensación para las víctimas y la definición de derechos específicos para los sobrevivientes en programas federales.[107]

De igual manera, el impacto inmediato de VAWA fue un mayor reconocimiento y una respuesta más estructurada frente a la violencia contra las mujeres. Desde el inicio de la Administración Biden-Harris, la Oficina de Violencia contra las Mujeres del Departamento de Justicia ha invertido casi mil millones de dólares en su implementación en diversos estados y territorios.[108] A largo plazo,

---

[105] Vid. Ibídem, pp. 140, 141, paráfrasis traducida: "In the case of gender-motivated violence, there was indisputable evidence that the states were systemically incapable of responding effectively to the problem because of a combination of inertia and entrenched discrimination."

[106] Vid. Ibídem, p. 141, paráfrasis traducida: "Significantly, the admission of state incompetence as well as the call for federal intervention came from state officials themselves."

[107] Vid. U.S. Department of Housing and Urban Development, "Housing Needs of Survivors of Human Trafficking Study," trad. propia, USA, Office of Policy Development and Research, 23 de febrero de 2024, p. 1, disponible en: https://www.huduser.gov/portal/portal/sites/default/files/pdf/Housing-Needs-of-Survivors-of-Human-Trafficking-Study.pdf (fecha de consulta: 17 de abril de 2024, paráfrasis traducida: "VAWA established sentencing standards, victim compensation, and rights for survivors in federal programs."

[108] Vid. White House, "Release of the National Plan to End Gender-Based Violence: Strategies for Action," trad. propia, *Informe,* Washington DC, White House, 2023, párrafo 12, disponible en: *https://www.whitehouse.gov/gpc/briefing-room/2023/05/25/release-of-the-national-plan-to-end-gender-based-violence-strategies-for-action/* (fecha de consulta: 17 de abril de 2024), paráfrasis

VAWA ha contribuido a una notable disminución de la violencia doméstica y a la mejora de los recursos disponibles para las víctimas.

Finalmente, en respuesta a críticas sobre la necesidad de una mayor inclusión de mujeres de comunidades marginadas, la reautorización de VAWA ha ampliado significativamente los servicios y el apoyo para sobrevivientes de comunidades subrepresentadas, incluyendo a individuos LGBTQ+ que enfrentan violencia doméstica.[109] Se han asignado fondos adicionales para potenciar organizaciones comunitarias que ofrecen servicios de recuperación adaptados culturalmente, y se ha aumentado el apoyo para iniciativas en comunidades rurales. Este refuerzo en la financiación incluye 7.5 millones de dólares destinados a treinta convenios de cooperación para apoyar a organizaciones comunitarias que trabajan con grupos específicos culturalmente, garantizando servicios sensibles al trauma y relevantes culturalmente.[110]

En resumen, VAWA constituye un hito legislativo esencial que ha influido profundamente en la política y la sociedad estadounidenses, protegiendo el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia. A lo largo de los años, VAWA ha ofrecido protecciones esenciales y recursos a las víctimas, induciendo un cambio cultural significativo en la percepción y el manejo de la violencia contra la mujer. Las sucesivas reautorizaciones y mejoras de esta ley demuestran un compromiso sostenido con la evaluación de políticas que abordan integralmente el problema. VAWA es un claro reflejo del principio de igualdad soberana, que al final impacta en

---

traducida: "Since the start of the Biden-Harris Administration, the Justice Department's Office on Violence Against Women (OVW) has administered close to a billion dollars (approximately $480 million and 750 awards in both FY 2021 and FY 2022) to implement the Violence Against Women Act (VAWA) across states and territories to reduce and address domestic violence, dating violence, sexual assault, and stalking by strengthening services to victims and holding offenders accountable".

[109] Vid. Ibídem, párrafo 26, paráfrasis traducida: "The Administration is swiftly implementing the new and strengthened VAWA, including targeted actions to support…improving access to sexual assault medical forensic examinations, and enhancing grant programs to support LGBTQI+ survivors…"

[110] Vid. Ibídem, párrafo 8, paráfrasis traducida: "In addition to allocating increased funding for existing FVPSA programs, the OFVPS is publishing four new competitive discretionary notice of funding opportunities in May 2023. This includes $7.5 million to fund thirty cooperative agreements to support Culturally Specific Domestic Violence and Sexual Assault grants for community-based organizations to build and sustain organizational capacity in delivering trauma-informed, developmentally sensitive, culturally relevant services for children, individuals, and families affected by sexual assault and domestic violence."

una legislación integral que salvaguarda el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia.

1.5.2.1 Universalidad y dignidad en VAWA

La Ley de Violencia Contra las Mujeres (VAWA), integra principios éticos fundamentales de la filosofía de Immanuel Kant, destacando especialmente el imperativo categórico que promueve la universalización de las acciones. Esta ley establece normativas consistentes y universales a nivel federal para proteger a las mujeres contra la violencia, mostrando un esfuerzo por desarrollar legislación aplicable a todos y que respeta la dignidad y los derechos individuales.

Además de establecer estas normativas, con la reautorización de VAWA en 2022, se ha ampliado la jurisdicción criminal tribal para abarcar delitos como el asalto al personal de justicia tribal, violencia infantil, obstrucción de la justicia y trata de personas.[111] Esta expansión refleja una iniciativa para adaptar y extender la protección legal en un contexto más amplio y diverso, alineada con los principios kantianos de universalidad y justicia.

Reflejando estos cambios legislativos, el principio kantiano de tratar a las personas como fines en sí mismos y no como medios se manifiesta en VAWA, que ofrece servicios esenciales y apoyo a las víctimas, reconociendo su valor intrínseco y derecho a ser tratadas con respeto y dignidad. Programas como el de Servicios de Asalto Sexual (Sexual Assault Services Program - SASP) y el Programa de Subvenciones para Detener la Violencia Contra la Mujer (Services, Training, Officers, Prosecutors - STOP), proporcionan recursos que respetan la autonomía y la dignidad de las víctimas, fomentando su capacidad de tomar decisiones informadas sobre su seguridad y bienestar.[112]

---

[111] Vid. Congressional Research Service, "The 2022 Violence Against Women Act (VAWA) Reauthorization," trad. propia, USA, Congressional Research Service, 2023, p. 9, disponible en: *https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47570/2* (fecha de consulta: 16 de abril de 2024), paráfrasis traducida: "VAWA 2022 added the following offenses to tribal criminal jurisdiction over non-Indian offenders: assault of tribal justice personnel, child violence, 35 obstruction of justice, and sex trafficking."

[112] Vid. Ibídem, p. 8, paráfrasis traducida: "The eligible applicants for this program are also the states, territories, and Washington, DC. These grants are intended to provide "direct intervention and related assistance for victims of sexual assault," for example by supporting rape crisis centers."

Un fundamento clave dentro de VAWA que se puede vincular con la Ley de Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act - ESEA) es el Programa de Subvenciones para Detener la Violencia Contra la Mujer (Services, Training, Officers, Prosecutors - STOP). Este programa financia esfuerzos para la formación de maestros y personal escolar en la identificación y respuesta a la violencia de género, la implementación de programas educativos que enseñen sobre igualdad de género y relaciones saludables, y el apoyo directo a estudiantes víctimas de violencia. Al integrar los recursos y la formación proporcionados por STOP, las escuelas pueden crear entornos más seguros y de apoyo, alineados con los objetivos de ESEA y los principios kantianos de dignidad y respeto. Además, al vincular VAWA con ESEA, se refuerza el derecho humano a la educación y se promueve el interés superior de la niñez, asegurando que todos los estudiantes puedan acceder a una educación de calidad en un entorno libre de violencia y discriminación. Esto no sólo protege la dignidad y los derechos de las víctimas, sino que también fomenta un ambiente educativo propicio para el desarrollo integral de todos los niños y niñas.

En este contexto de mejora continua, los esfuerzos por mejorar VAWA a través de reautorizaciones y ajustes legislativos reflejan un compromiso proactivo para alcanzar ideales éticos más altos, alineados con la búsqueda kantiana de una ley universal más perfecta. Un ejemplo es la inclusión en VAWA 2022 de un programa piloto que extiende la jurisdicción criminal tribal especial a hasta cinco aldeas nativas de Alaska por año calendario, abordando una omisión previa que no incluía a estas comunidades.[113] Este programa piloto no sólo promueve la justicia y protección de los derechos fundamentales de las mujeres en estas comunidades, sino que también homóloga y acata el derecho humano a la educación y el interés superior de la niñez. Al asegurar que las aldeas nativas de Alaska tengan acceso a recursos y formación para prevenir la violencia y apoyar a las víctimas, VAWA contribuye a crear entornos seguros y propicios para la educación. De esta manera, se garantiza que todos los niños y niñas en estas comunidades puedan ejercer su

[113] Vid. Ibídem, p. 10, paráfrasis traducida: "The prior expansion of tribal jurisdiction did not include Alaska Native Villages. VAWA 2022 established a pilot program to expand the special tribal criminal jurisdiction to include up to five Alaska Native Villages per calendar year".

derecho a una educación de calidad en un entorno libre de violencia, alineándose con los principios kantianos de dignidad y respeto, así como con los objetivos de ESEA de promover el bienestar y desarrollo integral de la niñez.

Finalmente, estimamos que VAWA incorpora los principios de la ética kantiana en un grado significativo, aproximadamente un 85%, enfatizando su compromiso con la protección de la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres, así como con la promoción de una justicia universal. Además, al integrar aspectos clave como el derecho humano a la educación y el interés superior de la niñez, VAWA refuerza su alineación con estos principios éticos al garantizar entornos seguros y de apoyo tanto en contextos educativos como en comunidades vulnerables. No obstante, todavía hay espacio para mejorar en cuanto a la implementación efectiva y la ampliación de estos principios a todas las víctimas, asegurando que cada individuo pueda ser tratado con el respeto y la dignidad que merecen, en todas las áreas de sus vidas.

1.6 Reflexiones críticas finales

En conclusión, en este primer capítulo hemos alcanzado nuestro primer objetivo específico: Analizar la evolución y el objetivo deontológico del derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia dentro del Estado de derecho, con las siguientes reflexiones críticas finales:

En primer lugar, en la intersección entre la política criminal y los derechos humanos, surge la necesidad crítica de reconfigurar las estrategias de intervención frente a la violencia, especialmente aquella dirigida hacia las mujeres en el ámbito familiar. Aunque se reconoce la importancia de un enfoque multidimensional y preventivo, es evidente que tales esfuerzos serán insuficientes sin un compromiso firme por parte del Estado para reformar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. En consecuencia, el verdadero reto no se limita únicamente a la implementación de políticas, sino que también exige la creación de una cultura de legalidad y justicia fundamentada en un Estado de Derecho sólido y equitativo. Por lo tanto, la política criminal debe ir más allá de su función de control social, convirtiéndose en un motor de transformación social capaz de erradicar las raíces profundas de la violencia. De esta manera, se podrá construir una sociedad en la

que el derecho a una vida libre de violencia deje de ser un ideal abstracto y se convierta en una realidad tangible para todas las personas.

Por otro lado, el Estado de Derecho, concebido como la base para la protección de los derechos humanos, enfrenta un desafío crucial en el contexto mexicano, donde la distorsión del paradigma neoliberal norteamericano ha exacerbado las desigualdades y perpetuado la violencia de género. A pesar de los avances legislativos logrados, la brecha entre la ley y su implementación efectiva subraya la necesidad de un replanteamiento profundo. Asimismo, la radicalización conservadora del neoliberalismo ha socavado los principios de justicia y equidad que deberían guiar las políticas criminales y de protección a las mujeres.

La crítica a la errónea implementación del paradigma neoliberal norteamericano en México puede ser analizada a la luz del trabajo teórico de Thomas Kuhn, especialmente en cuanto a cómo los paradigmas científicos y económicos influyen en la percepción y solución de problemas dentro de una sociedad. Kuhn sostiene que los paradigmas determinan qué preguntas son relevantes y qué métodos son adecuados para abordarlas.[114] En el caso de la versión neoliberal implementada en México, esta ha priorizado la competencia y la minimización de la intervención estatal, interpretando la libertad económica de manera que ha exacerbado la desigualdad y la violencia contra la mujer.

Desde una perspectiva kuhniana, la acumulación de anomalías, como el aumento de la pobreza y la violencia contra la mujer, indica que la versión del paradigma neoliberal implementado en México está en crisis. Estas anomalías revelan la incapacidad del paradigma para resolver problemas críticos de la sociedad, sugiriendo la necesidad de una revolución paradigmática. Esta nueva visión debe reconciliar la libertad económica con una intervención estatal efectiva que garantice la justicia social y proteja los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. Tal como Kuhn describe, este proceso no será lineal ni

[114] Vid. Kuhn, Thomas S., “La estructura de las revoluciones científicas,” trad. de Agustín Contin, 1ª ed. en español, México, Fondo de Cultura Económica, 1971, p. 86, disponible en: *https://materiainvestigacion.files.wordpress.com/2016/05/kuhn1971.pdf* (fecha de consulta: 22 de junio de 2024).

acumulativo,[115] sino que requerirá un cambio radical en la forma de concebir el papel del Estado y el mercado, promoviendo un enfoque que priorice el bienestar común sobre los intereses individualistas y mercantiles.

Por consiguiente, es imperativo adoptar un enfoque deontológico que rescate la esencia del Estado de Derecho. Este enfoque debe garantizar que las políticas criminales no sólo se limiten a sancionar, sino que también estén orientadas a prevenir y erradicar las causas estructurales de la violencia. En conclusión, la verdadera transformación del Estado de Derecho en México requiere una revisión crítica de las políticas actuales, acompañada de un compromiso renovado con la justicia social y la equidad de género. Sólo mediante un enfoque integral, que abarque tanto la reforma estructural como el fortalecimiento de la ética en la política criminal, se podrá construir un sistema que proteja de manera efectiva los derechos humanos de todas las personas.

En el complejo entramado de la política criminal y la protección de los derechos humanos, la deontología emerge como un pilar fundamental que guía la actuación ética del Estado. En este contexto, donde la interpretación distorsionada del paradigma neoliberal norteamericano ha desvirtuado la función del Estado de Derecho mexicano, es esencial rescatar los principios kantianos. Estos principios sitúan la dignidad y la autonomía de las personas en el centro de las acciones estatales. Así pues, la política criminal, en lugar de limitarse a la sanción punitiva, debe adoptar un enfoque preventivo y ético que promueva de manera integral el respeto a los derechos humanos. En consecuencia, este replanteamiento de la deontología no sólo fortalecerá la justicia y la equidad en la protección de las mujeres, sino que también servirá como un contrapeso necesario ante la mercantilización de las relaciones sociales. De esta forma, se devolverá al Estado su papel legítimo como garante de los derechos fundamentales, asegurando que el bienestar de los ciudadanos prevalezca sobre los intereses económicos.

El análisis crítico del marco jurídico mexicano revela una paradoja: a pesar de los avances legislativos, como la promulgación de la LGAMVLV y las reformas constitucionales de 2011, la protección efectiva de los derechos de las mujeres

[115] Vid. Ibidem, p. 111.

sigue siendo un desafío persistente. Esta discrepancia entre la teoría y la práctica pone de manifiesto la necesidad de un enfoque deontológico que alinee la legislación con principios éticos universales, garantizando que los derechos no sólo se reconozcan en el papel, sino que también se materialicen en la vida diaria de las mujeres mexicanas. Además, el debate sobre la categorización del feminicidio subraya la urgencia de repensar cómo la política criminal aborda la violencia de género, buscando soluciones que no sólo sancionen, sino que también prevengan y erradiquen las causas estructurales de esta violencia. Por ende, la transformación del Estado de Derecho en México dependerá de un compromiso renovado con la justicia social y de la voluntad política para cerrar la brecha entre la ley y la realidad, asegurando que el derecho a una vida libre de violencia sea una realidad tangible para todas las mujeres.

Por lo demás, el enfoque de Estados Unidos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, reflejado en legislaciones como el FVPSA y el VAWA, evidencia un compromiso profundo con la autodeterminación y la soberanía, aspectos que son cruciales para la formulación de políticas eficaces y adaptadas a las realidades nacionales. No obstante, la verdadera fortaleza de este enfoque radica en su capacidad para evolucionar y responder a nuevos desafíos, como la violencia digital, y en su enfoque integral que abarca desde la atención inmediata hasta la reforma sistémica. Este marco legal no sólo protege a las víctimas, sino que también promueve la dignidad y la autonomía de las mujeres, reflejando una filosofía política que prioriza los derechos humanos en un contexto de soberanía nacional. Para asegurar la continuidad de este compromiso, es necesario mantener una evaluación crítica y constante de las leyes, garantizando que sigan siendo pertinentes y efectivas en un mundo en constante cambio. Así, el equilibrio entre la autodeterminación y la responsabilidad global se convierte en un desafío que Estados Unidos debe seguir abordando con una visión ética y pragmática.

Con estos fundamentos éticos y estructurales claramente establecidos, este primer capítulo concluye, subrayando la necesidad de un enfoque deontológico en la política criminal y la urgente transformación del Estado de Derecho en México. En el siguiente capítulo, profundizaremos en la aplicación práctica de un enfoque

multidisciplinario integral para la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Continuaremos explorando cómo la ideología de género feminista, desde sus raíces filosóficas hasta sus implicaciones en las políticas públicas, ha influido en la percepción social y en la estructuración de políticas educativas y legales. Este análisis más detallado permitirá no sólo criticar las estrategias actuales, sino también proponer reformas legislativas y programas de intervención que aborden las causas subyacentes de la violencia de manera más eficaz. Así, el capítulo siguiente no sólo expandirá el marco teórico establecido, sino que también ofrecerá un enfoque más práctico para enfrentar los desafíos actuales en la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar.

Capítulo II: Hacia una Comprensión Multinivel de la Prevención de la Violencia Contra la Mujer en el Núcleo Familiar

Creo que debemos entender que
cuando hablamos de los derechos de las mujeres,
no sólo estamos hablando de chicas,
estamos hablando de la igualdad de género.
Malala Yousafzai

En este capítulo, profundizamos en la aplicación del enfoque multidisciplinario integral para la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, inicialmente explorado en el primer capítulo. Desarrollaremos una comprensión tridimensional de los niveles preventivos, distinguiendo entre medidas proactivas y reactivas para abordar desde las causas estructurales hasta las intervenciones específicas frente a actos de violencia contra la mujer. A través de un análisis criminológico detallado, definiremos los tres niveles de prevención: primario, centrado en eliminar las condiciones que fomentan la desigualdad y la violencia; secundario, que interviene en situaciones de riesgo ya identificadas; y terciario, que busca la reinserción social del agresor y la prevención de la reincidencia. En cada sección del primer subcapítulo se analizarán las limitaciones y fortalezas de las estrategias actuales, para finalmente proponer reformas legislativas y la integración de nuevos apartados en el marco jurídico mexicano para mejorar la eficacia de las políticas públicas y programas de intervención.

También, se explora cómo la ideología de género, desde sus fundamentos teóricos hasta sus implicaciones prácticas, influye en la estructuración de políticas educativas y legales dirigidas a combatir la violencia contra la mujer. Comenzaremos con un análisis genealógico de la ideología de género, donde examinaremos la evolución del término desde sus raíces filosóficas hasta su aplicación en los discursos modernos sobre los roles de género, destacando las contribuciones de teóricos clave y su impacto en la percepción social. Enfocándonos particularmente en cómo la identidad *cisgénero*, ha reformulado las normas sociales y las expectativas legales, abriendo debates sobre la equidad y la inclusión. También, abordaremos la violencia contra la mujer y la violencia de género,

delineando sus diferencias y criticando como estas se homologan según las bases de la ideología de género y que finalmente se reflejan en las políticas criminales de segundo y tercer nivel. A través de un estudio detallado, discutiremos cómo los enfoques históricos y contemporáneos hacia la victimización masculina en las artes y la sociedad han quedado eclipsada. Este análisis proporcionará una comprensión profunda de cómo las concepciones ideológicas feministas no persiguen en el fondo una verdadera equidad de género, pero sobre todo, dejando su teoría de un sistema patriarcal opresor de las mujeres, falseada.

Así mismo, se profundiza en el análisis del patriarcado, un sistema de organización social que ha sido señalado por la ideología de género feminista como el principal opresor de la mujer. Sin embargo, este sistema no sólo ha influido en las dinámicas de poder y subordinación hacia el género mujer, sino que también ha moldeado las interacciones sociales y legales afectando a los hombres. Este análisis comienza con una exploración de las raíces del patriarcado, seguido por el estudio del machismo, una de sus manifestaciones más arraigadas. Se examina cómo las actitudes y comportamientos machistas se han perpetuado a lo largo de generaciones, influyendo en la construcción de identidades tanto masculinas como femeninas. Finalmente, se analiza el impacto bidireccional de estas dinámicas, destacando cómo han perpetuado la discriminación y la violencia contra las mujeres, al tiempo que condicionan las expectativas sociales sobre los hombres.

Seguidamente, avanzaremos hacia un análisis crítico de la misoginia, demostrando cómo esta se entrelaza con ciertos trastornos de la personalidad, exacerbados por un adoctrinamiento machista persistente. Esta parte de la investigación profundiza en cómo estas interacciones complejas contribuyen a perpetuar como resultado final la violencia *feminicida*. A través de este análisis, proponemos una reflexión sobre las formas en que las estructuras patriarcales no sólo son sostenidas por tradiciones y normas, sino también por una ideología de género feminista que la legitima, una perversa estrategia de control social que aseguramos, es la razón por la que actualmente y con evidencia científica la violencia contra la mujer lejos de erradicarla se ha agudizado.

En síntesis, este capítulo establece las bases teóricas y conceptuales para el análisis y desarrollo de la variable dependiente de esta tesis. Se enfatiza la necesidad de una reestructuración tanto legislativa como de políticas criminológicas integrales que aborden las causas subyacentes de la violencia contra la mujer, a efecto de transformar el sentido disuasivo y coercitivo con el que se ejecutan actualmente.

2.1 Niveles para prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar

Si nos enfocamos en el significado etimológico de la palabra *prevención*, según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), su origen proviene del latín *praeventio*, y se refiere a la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Esto implica un trabajo proactivo para prevenir la manifestación de lo que se quiere evitar. En el contexto de la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, esto significa etiológicamente, que el Estado debe actuar anticipadamente para evitar la aparición del fenómeno delictivo, es decir, enfocándose en las causas y no en los resultados. Agustín Pérez Carrillo asegura que la importancia de este enfoque integral radica en abordar las causas fundamentales en lugar de los síntomas.[116] Estamos seguros, este enfoque permite una mayor eficacia en las políticas públicas y programas de intervención, al centrarse en los factores que originan la violencia y no sólo en sus consecuencias.

Así entonces y dejando claro el correcto enfoque etiológico de la política preventiva, actualmente se observa una distorsión en la comprensión del término *prevención*. En lugar de asociarse con una estrategia proactiva, integral y multidimensional, comúnmente se limita a la intervención policial. La Dra. Carme Jiménez Huertas, filóloga especializada en ingeniería lingüística, argumenta que esta tergiversación no es casual, sino que proviene de las altas esferas del poder

[116] Vid. Pérez Carrillo, Agustín, at. el., *La Prevención Delictiva en un Ambiente de Conflicto Social, en Seguridad Pública Tres puntos de vista convergentes*, México, Coyoacán, 2006, p. 112.

como una perversa estrategia para manipular las respuestas emocionales, ejercer control social y consolidar creencias a través del discurso público.[117]

Por otro lado, la teoría de los tres niveles preventivos del delito se atribuye comúnmente a la criminología y la política criminal moderna, sin estar vinculada a un teórico específico. Sin embargo, en un esfuerzo por adaptar y ampliar el concepto de política preventiva, Antonio García-Pablos de Molina propone en su tratado de Criminología una adaptación que aplica estos niveles a la prevención de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar. Describe la prevención de primer nivel como la adopción de medidas preventivas antes de que ocurra cualquier acto de violencia.[118] Este nivel se enfoca en abordar las causas estructurales y sociales que perpetúan la desigualdad de género y fomentan la violencia, vinculando directamente la teoría con nuestro objeto de estudio.

Este enfoque incluye la promoción de una educación que no sólo sea accesible (forma), sino que también integre valores de igualdad de género y respeto mutuo desde una edad temprana (fondo). Además, asegurar el acceso a servicios de salud, ofrecer un entorno seguro, y garantizar una alimentación, son fundamentales. Estos derechos básicos no sólo mejoran la calidad de vida, sino que y entendiendo el efecto ideológico del neoliberalismo, también reducen las tensiones socioeconómicas que pueden llevar a comportamientos violentos. Al fortalecer estos factores, la prevención de primer nivel no sólo mitiga los efectos inmediatos del delito, sino que también sienta las bases para una sociedad más justa y equitativa, reduciendo la incidencia de violencia a largo plazo.[119]

Este enfoque aboga por la promoción de una educación que no sólo sea accesible, sino que también inculque valores de igualdad de género y respeto mutuo desde una edad temprana. Además, es crucial asegurar el acceso a servicios de salud, ofrecer un entorno seguro, adecuada alimentación, agua, deporte,

---

[117] Vid. Educación Humana Coaching Integral, “Desmontando la agenda oculta desde el lenguaje, con Carmen Jiménez Huertas, Carlos Senra & Luis Palacios,” [Video], 5 de marzo de 2021, min 37:20, disponible en: Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=VQd1RqlDB7M, (fecha de consulta: 13 de mayo de 2024)

[118] Vid. García Pablos de Molina, Antonio, *Tratado de Criminología*, Valencia, Tirant lo Blanch, 3ª Ed., 2003, p. 984.

[119] Vid. Ídem.

actividades culturales y transporte escolar. Estos servicios esenciales no sólo mejoran la calidad de vida, sino que también, al considerar el impacto ideológico del neoliberalismo, ayudan a mitigar las tensiones socioeconómicas que pueden derivar en la deserción académica. Al fortalecer estos elementos, la prevención de primer nivel no sólo alivia los efectos inmediatos de la criminalidad, sino que también establece las bases para una sociedad más justa y equitativa, disminuyendo la incidencia de violencia a largo plazo.

Por su lado, la prevención de segundo nivel se enfoca en intervenir una vez que se han identificado situaciones de riesgo o signos de violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Esta prevención secundaria, actúa en momentos en que los actos violentos son evidentes, ya sea en flagrancia o después de su ocurrencia, dejando huellas físicas o psicológicas. Las medidas y estrategias aplicadas en este nivel buscan proteger a las víctimas e incluyen la atención integral, el asesoramiento jurídico, el apoyo psicológico, las redes de atención y el acceso a la justicia. En este contexto, se analizan aspectos clave como la legislación vigente en materia de violencia contra la mujer.

Es crucial entender, que este nivel de intervención no aborda las causas iniciales del conflicto criminal, sino que responde una vez que este se ha manifestado. Se implementan medidas de protección específicas dirigidas especialmente a mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia. Según explica García-Pablos de Molina, estas incluyen políticas legislativas penales, acciones policiales, programas específicos de prevención policial, ordenación urbana, y el uso del diseño arquitectónico para autoprotección en áreas vulnerables.[120] El objetivo principal es proteger a las víctimas y prevenir la reincidencia. Esto se logra ajustando el entorno y la política criminal para responder de manera efectiva y rápida a la manifestación del delito, enfocados tanto en la prevención general como en la específica.

Finalmente, la prevención de tercer nivel tiene como objetivo la reinserción a la sociedad del sentenciado y prevenir la reincidencia de la violencia. Este nivel aplica medidas y estrategias diseñadas para garantizar que no se repita la conducta

[120] Vid. Ibídem, p. 485.

violenta, mediante la sanción efectiva de los agresores y la reparación del daño a las víctimas. En este contexto, se analiza el sistema penitenciario, los procedimientos judiciales adecuados, las penas aplicadas y las medidas de seguridad para los victimarios, con un enfoque especial en su rehabilitación y reinserción social. Según Antonio García-Pablos de Molina, aunque la prevención terciaria está enfocada en los individuos ya condenados, con el objetivo explícito de evitar la reincidencia, enfrenta limitaciones significativas, ya que actúa de manera tardía y se centra exclusivamente en los penados, siendo insuficiente para neutralizar las causas profundas del problema criminal.[121] Este enfoque punitivo y reactivo se refleja actualmente en los altos índices de reincidencia, lo que evidencia un déficit en la capacidad de estos programas para abordar las raíces etiológicas del comportamiento delictivo, investigación empírica realizada y que revelara los factores que vuelven a este nivel de prevención ineficaz en el tercer capítulo de esta tesis.

Así mismo, la teoría de los cambios paradigmáticos de Thomas Kuhn es particularmente relevante para entender la necesidad de una transformación profunda en las políticas de prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Según Kuhn, los paradigmas científicos se transforman a través de revoluciones, un proceso que puede aplicarse igualmente a las políticas públicas.[122] La persistencia de altos índices de violencia contra la mujer sugiere que las estrategias actuales están obsoletas y requieren un cambio paradigmático.

Este nuevo paradigma debe integrar un enfoque multidisciplinario y holístico, que combine la psicología, la sociología, el derecho y la educación, promoviendo una comprensión integral del problema y soluciones innovadoras que trasciendan las prácticas tradicionales. La prevención de la violencia debe ser vista no sólo como una serie de acciones reactivas, sino como una transformación estructural y cultural en la sociedad, similar a cómo Kuhn describe los cambios científicos revolucionarios.

[121] Vid. Ídem.
[122] Vid. Op. Cit. Kuhn, Thomas S., “La estructura de las revoluciones científicas,” p. 2.

Este enfoque integral implica no sólo la implementación de medidas reactivas y punitivas, sino también la adopción de estrategias proactivas que aborden las causas subyacentes de la violencia, como las desigualdades de género y las normas culturales perjudiciales. Un cambio de paradigma en la política criminal y la prevención de la violencia permitirá no sólo una reducción efectiva de la incidencia de violencia, sino también la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

2.1.1 Prevención de primer nivel

La prevención de primer nivel de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar se basa etiológicamente en la convicción de que debe comenzar desde la raíz, abordando los factores sociales, culturales y económicos que contribuyen a la perpetuación de la violencia. En este sentido, la CPEUM establece un ESDD que promueve, respeta, protege y garantiza derechos fundamentales como la educación, la igualdad de género, la alimentación, la salud, el acceso al agua, un medio ambiente sano, la vivienda digna, la identidad de género, el deporte, el empleo y la movilidad.

En esencia, la prevención de primer nivel la encontramos en los Artículos 3º, 4º y 123 de la CPEUM. La educación, según estipula el artículo 3º de la CPEUM, debe basarse en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque en derechos humanos y de igualdad sustantiva. Esta disposición es esencial para una prevención de primer nivel, ya que alinea la educación con los principios kantianos de tratar a cada individuo como un fin en sí mismo. Integrar de manera obligatoria y universal el acceso a la educación básica contribuirá significativamente a disminuir la incidencia de la violencia contra la mujer en el futuro. Además de la universalidad, los derechos fundamentales que el interés superior de la niñez previstos en el noveno párrafo del Artículo cuarto constitucional garantizan que cada niño y niña se desarrolle de forma óptima, sin discriminación ni exclusión, factores que igualmente previenen que se opte por desertar de la escuela y al final repetir el ciclo de la violencia contra la mujer.

Por otro lado, reconocer a las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, subraya la importancia de que el personal docente esté adecuadamente capacitado en temas de género y violencia contra la

mujer. Al ser la educación pública, gratuita, laica y obligatoria, se facilita que estos educadores no sólo impartan conocimientos, sino que también actúen como modelos a seguir y agentes de cambio social. Están capacitados para identificar signos de violencia y fomentar un ambiente de respeto y equidad en el aula, lo que es crucial para construir una sociedad que valore la igualdad y el respeto mutuo, principios fundamentales tanto desde una perspectiva kantiana como constitucional.

Así mismo, la inclusividad y equidad en la educación son fundamentales para asegurar el acceso a la educación de niñas y mujeres jóvenes, particularmente aquellas provenientes de comunidades marginadas o en situaciones de vulnerabilidad. Este enfoque se alinea con el imperativo kantiano de tratar a las personas no meramente como medios para un fin, sino como fines en sí mismos, promoviendo así una educación que empodera a las mujeres y las niñas al proporcionarles herramientas para defender sus derechos y promover la igualdad de género. Estos principios son cruciales para prevenir y reducir las condiciones que permiten la violencia contra la mujer, fomentando una cultura de respeto y dignidad universal. Además, la garantía del derecho a la educación, tanto en su forma como en su contenido, según se interpreta de la CPEUM, debe ser uniforme en todo el territorio nacional. Esto es vital para proteger las regiones más aisladas y empobrecidas, donde prácticas culturales pueden perpetuar la visión de las mujeres como propiedad del hombre (machismo).

Por su lado, la reforma del Artículo 3º de la CPEUM, que hizo obligatoria la educación hasta el nivel medio superior en febrero de 2012, responde no sólo a un imperativo nacional sino también a las recomendaciones internacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Esta organización ha promovido consistentemente la educación obligatoria como un pilar fundamental para el desarrollo económico y social. Inspirada en estas directrices, la reforma busca mejorar la competitividad global de México y responder a desafíos internos como la desigualdad y la violencia. El informe de la OCDE *Education at a Glance 2011* evidencia que los países con altas tasas de educación obligatoria suelen

exhibir mayores índices de cohesión social y menores tasas de desigualdad.[123] Con base en estas observaciones, México adoptó la reforma para fortalecer su sistema educativo y promover una sociedad más informada, equitativa y pacífica.

La implementación de la educación obligatoria en México se concibe como una respuesta a la necesidad de preparar a la juventud para los retos del siglo XXI, tales como la creciente integración económica global y los rápidos avances tecnológicos. Esta reforma apunta a desarrollar un capital humano que no sólo contribuya efectivamente a la economía, sino que también participe activamente en la mejora de su entorno social y político, fundamentado en principios de igualdad y respeto mutuo. Así, la obligatoriedad del Artículo 3º de la CPEUM refleja un compromiso no sólo nacional sino también alineado con estándares internacionales. Esta estrategia busca transformar estructuralmente la sociedad mexicana, integrando respeto mutuo y equidad como normas vivas y efectivas, elementos cruciales para el desarrollo integral del país. Al incorporar estos principios en el sistema educativo, se garantiza que cada ciudadano posea las herramientas necesarias para enfrentar desafíos contemporáneos y contribuir a la construcción de un México más justo y competitivo en el ámbito global.

Siguiendo el mandato del Artículo 3º de la CPEUM, que establece que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, podemos construir un puente hacia el noveno párrafo del Artículo 4º del mismo precepto legal, el cual protege la alimentación, salud, educación y un sano esparcimiento. Este enfoque de interés superior no sólo garantiza que cada joven tenga las mismas oportunidades educativas, sino que también se enmarca dentro de una perspectiva de interseccionalidad, abordando múltiples factores de vulnerabilidad que afectan a distintos grupos. Por estas razones, se ha identificado la necesidad de integrar

[123] Vid. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), "Education at a Glance 2011: OECD Indicators," trad. propia, OECD Publishing, 2011, p. 293, disponible en: *https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2011-en.pdf?expires=1714341302&id=id&accname=guest&checksum=168832849713E899B104171497C4535F,* (fecha de consulta: 28 de abril de 2024), paráfrasis traducida: "Tertiary education programmes are generally associated with better access to employment and a higher likelihood of remaining employed during economic downturns, as well as earning higher incomes and better social outcomes, such as greater social engagement and self-reported better health."

factores también previstos en el Artículo 4º de la CPEUM, como el agua, la cultura, el deporte y la movilidad.

La inclusión de acceso al agua potable y a instalaciones deportivas no sólo promueve una mejor salud física y un estilo de vida activo, sino que también impulsa la participación y el compromiso cívico de los estudiantes. La cultura enriquece la experiencia educativa, ampliando la comprensión del entorno social, lo cual es crucial para el desarrollo cognitivo y social. Finalmente, la movilidad asegura el acceso a todo lo demás, ya que como factor de acceso, este sirve como el puente con el que el Estado elimina todo factor que pudiera impedir el derecho a la educación. Estos componentes, integrados en un enfoque educativo interseccional, aseguran un desarrollo equitativo y completo, preparando a los jóvenes para enfrentar y transformar la sociedad de manera positiva y consciente.

Así mismo, el compromiso del Estado para promover el desarrollo integral de las personas jóvenes, como lo estipula el último párrafo del 4º Artículo de la CPEUM, se manifiesta a través de políticas públicas con un enfoque multidisciplinario. Estas políticas buscan la inclusión activa de los jóvenes en todos los ámbitos de la vida nacional: político, social, económico y cultural. Esta estrategia nos une igualmente como un puente que se conecta al derecho a un trabajo digno y socialmente útil, que es fundamental no sólo para garantizar una sociedad más justa y equitativa, sino también para la prevención de la criminalidad desde una perspectiva de primer nivel.

Así, el Artículo 123 de la CPEUM, que regula las relaciones laborales y garantiza derechos como un salario justo, jornadas laborales reguladas y condiciones dignas de trabajo, juega un papel crucial en la estructura socioeconómica del país. Esta normativa es esencial para asegurar que las personas accedan a empleos formales y bien remunerados, abordando uno de los factores más críticos que pueden inducir al fenómeno criminal: la desigualdad económica y la escasez de oportunidades. Un empleo estable no sólo provee los medios económicos necesarios para una vida digna, sino que también fomenta un sentido de propósito y pertenencia, elementos disuasorios contra la participación en actividades delictivas.

En el fondo, el Artículo 123 de la CPEUM constituye una base legal imprescindible para la prevención primaria de la criminalidad, asegurando que las políticas laborales no sólo fomenten la equidad y la justicia social, sino que además actúen como un escudo efectivo contra las condiciones que propician el crimen. Al garantizar condiciones laborales justas y dignas, se fortalece el tejido social y se promueve un entorno más seguro y estable para todos los ciudadanos.

Efectivamente, la prevención primaria de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar se configura, como la estrategia más efectiva y genuina, ya que aborda las causas raíz de esta problemática. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos significativos debido a su naturaleza a medio y largo plazo. Esta modalidad de prevención requiere de prestaciones sociales robustas y una activa intervención comunitaria, aspectos que van más allá de políticas punitivas y que exigen una inversión sostenida en tiempo y recursos. Lüderssen critica la tendencia societal y gubernamental de inclinarse por soluciones inmediatas y a menudo represivas, motivadas por ciclos electorales y una opinión pública impulsada por una propaganda interesada, lo cual socava los esfuerzos de prevención a largo plazo.[124] En este sentido, es crucial que los actores sociales y políticos reconozcan y se comprometan con el enfoque de prevención primaria, ya que se estaría invirtiendo en la creación de una sociedad más justa y segura, donde los esfuerzos actuales se reflejen en beneficios futuros para todos, una triste y contraria realidad que se verá expuesta igualmente en el capítulo tercero de esta tesis.

En resumen, el primer nivel para prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, al enfocarse en las condiciones subyacentes que propician la violencia, constituye una estrategia etiológica, integral y profunda que busca más que sólo la reacción a los actos delictivos. Según Brantingham y Faust, la prevención primaria del delito se enfoca en identificar las condiciones sociales y físicas que generan oportunidades o precipitan actos delictivos.[125] El propósito es

---

[124] Vid. Lüderssen, Klaus, "Einführung in die Probleme", *Kriminologie*, Alemania, Baden-Baden Nomos, 1984, p. 151, citado en García Pablos de Molina, Antonio, *Tratado de Criminología*, Valencia, Tirant lo Blanch, 3ª, ed., 2003, p. 984.

[125] Vid. Brantingham, P. J., & Faust, F. L., "A conceptual model of crime prevention," *Sage journal*, in Crime & Delinquency, 22(3), 1976, 284–296, disponible en: https://doi.org/10.1177/001112877602200302, (fecha de consulta: 27 de abril de 2024), citado en:

erradicar estas condiciones para prevenir la violencia contra la mujer, asegurando así la protección de los derechos fundamentales y reduciendo las causas. Este enfoque demanda la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales como paradigma de la seguridad ciudadana,[126] y requeridos para un verdadero cambio estructural en la sociedad.

Como reflexión final, el desarrollo de este subcapítulo que comenzó con nuestro objeto de estudio, concluye argumentando que el primer nivel preventivo, al ser considerado una estrategia fundamental, no puede especializarse debido a su naturaleza sistémica. Según la teoría de sistemas, las entidades interactúan como un todo coordinado, similar al binomio de fuerzas de atracción donde un polo atrae al otro.[127] Esta interacción es comparable a la ética kantiana del imperativo categórico, que propone que nuestras acciones deben ser diseñadas para funcionar como leyes universales.[128] Este marco teórico subraya la importancia de diseñar estrategias preventivas que sean aplicables de manera universal y coherente, reflejando la interdependencia y la universalidad de nuestras decisiones éticas, pero sobre todo, subrayan el error de abordar la violencia contra la mujer, desde una ideología de género, la cual a su vez y como más adelante desarrollaremos, se ha enfocado en desarrollar política criminal preventiva de segundo y tercer nivel, dejando al primer nivel en letra muerta.

2.1.2 Prevención de segundo nivel

Desde una perspectiva etimológica, el término *disuasión* resulta ser la expresión más idónea para describir la prevención de segundo nivel. Derivado del

---

Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), "Parte 2 – Clasificaciones, tipologías y modelos clave en la prevención del delito", *UNODC*, párrafo 7, disponible en: *https: //www.unodc.org/e4j/es/crime-prevention-criminal-justice/module-2/key-issues/2--key-crime-prevention-typologies.html,* (fecha de consulta: 27 de abril de 2024).

[126] De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la seguridad ciudadana se define como una situación social donde las personas gozan de la libertad de ejercer sus derechos fundamentales, Vid. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Organización de los Estados Americanos (OEA). ISBN 978-0-8270-5431-8, 2009, p. 101, disponible en: https: //drive.google.com/file/d/1GsTwMyISBa-rET9HITYVHpq14CxIKcQM/view?usp=drive_link, (fecha de consulta: 12 de mayo de 2024).

[127] Vid. Holland, John H., *El Orden Oculto: De cómo la adaptación crea la complejidad*, trad. de Alexander Esteban Torres, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 27.

[128] Vid. Op. Cit. Kant, Immanuel, "Teoría y praxis," p. 3.

latín *disuasio*, que literalmente significa acción de apartar o alejar, el concepto nos introduce a la noción de disuadir a individuos de involucrarse en comportamientos delictivos mediante la presencia activa y las acciones de las fuerzas de seguridad. En este marco, la disuasión no sólo se configura como una táctica de intimidación, sino también como una estrategia de cuidado, que busca generar un efecto de rechazo o inhibición en aquellos sujetos con potenciales intenciones de lastimar, incitándoles a abandonar o desistir de sus acciones violentas. Esta comprensión etimológica y funcional del término proporciona un sólido punto de partida para explorar cómo la disuasión se integra dentro de los mecanismos de seguridad pública y las políticas dirigidas a atender la violencia contra la mujer, especialmente en contextos donde se busca proteger su vulnerabilidad.

El modelo de actividad rutinaria propuesto por Cohen y Felson es esencial para entender la integración de la disuasión en la prevención de segundo nivel de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Según este modelo, un delito ocurre cuando convergen tres elementos: un agresor motivado, un objetivo susceptible y la ausencia de un guardián efectivo. Cohen y Felson argumentan que los cambios en los patrones de actividad rutinaria pueden influir en las tasas de delitos al modificar la convergencia espacio temporal de estos elementos esenciales para delitos de contacto directo: delincuentes motivados, objetivos potenciales y la falta de guardianes competentes.[129] Este enfoque resalta la importancia de comprender los patrones de comportamiento social y su impacto en la disuasión de la violencia, lo cual es crucial para la implementación efectiva de este nivel preventivo.

Materialmente hablando, se trata de la implementación de estrategias específicas como la presencia activa y visible de las fuerzas de seguridad. Esta presencia no sólo cumple con el rol de un guardián capaz, crucial en la teoría de la actividad rutinaria de Cohen y Felson, sino que también sirve como un poderoso

[129] Vid. Cohen, L. E. & Felson, M., "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach," trad. propia, USA. American Sociological Review, 1979, 44(4), p. 589, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1cLRVFoqF0B4pBEUjhvEytr5b7WW8JCNl/view?usp=drive_link,* (fecha de consulta: 30 de abril de 2024), paráfrasis traducida: "We argue that structural changes in routine activity patterns can influence crime rates by affecting the convergence in space and time of the three minimal elements of direct-contact predatory violations: (1) motivated offenders, (2) suitable targets, and (3) the absence of capable guardians against a violation."

elemento de cuidado, asesoramiento y guía para las víctimas. Al incrementar la percepción de riesgo entre los posibles delincuentes, la visibilidad de las fuerzas de seguridad reduce la probabilidad de ocurrencia de la violencia. Esta estrategia demuestra cómo la aplicación práctica de principios teóricos puede evitar eficazmente la materialización de delitos.

Bajo esta perspectiva, la disuasión puede concebirse como un plan B, que actúa como medida de seguridad adicional en caso de que el primer nivel de prevención falle por incapacidad o ineptitud gubernamental. Este plan extra, considerado una póliza de seguro, se activa para disuadir conductas antisociales. Este enfoque implica una respuesta directa y contundente, presidida ya no por parte de las instituciones sociales, sino por las de seguridad pública, en términos de Erwin Goffman "Instituciones totales."[130]

Desde lo general, el Artículo 21º de la CPEUM establece explícitamente las bases para la prevención de segundo nivel en la lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres, como una función intrínseca de las instituciones de seguridad pública. Este Artículo crucial no sólo aborda la disuasión del delito, sino que también incluye su investigación y persecución, enfatizando la necesidad de una vigilancia constante y una ejecución estratégica. Bajo la conducción del Ministerio Público, la policía lleva a cabo estas acciones para intervenir efectivamente donde se detecte o se haya registrado violencia, garantizando así una respuesta oportuna y adecuada a estos incidentes.

Además, se reconoce que la seguridad pública tiene el deber fundamental de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas,

[130] Erving Goffman describe las *instituciones totales* como lugares donde se controlan de manera extensa las vidas de las personas que residen y trabajan allí, separándolas del exterior por largos periodos. Aplicado al contexto de las instituciones de seguridad pública mexicanas, como prisiones o centros de detención, este concepto se refiere a entornos donde todos los aspectos de la vida de los internos se desarrollan en un mismo lugar bajo regulaciones estrictas y la supervisión constante de una autoridad única. Las actividades diarias están altamente regimentadas, diseñadas para cumplir con los objetivos de la institución, lo que incluye mantener el orden y la seguridad. Estas condiciones impactan profundamente en la identidad personal de los internos y en las interacciones sociales dentro de la institución. Vid. Goffman, Erving, "Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales," trad. de María Antonia Oyuela de Grant, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2001, p. 13, disponible en: *https: //drive.google.com/file/d/15p4AWvZl4WEGa7tX3fMhq8RwwYeTVRfP/view?usp=drive_link,* (fecha de consulta: 30 de abril de 2024).

implicando así una responsabilidad directa en la protección contra cualquier forma de violencia. Esta responsabilidad no se limita a acciones disuasivas; también abarca medidas correctivas y de emergencia, lo que garantiza una respuesta integral y continua ante las amenazas de violencia, particularmente en contextos donde las mujeres son vulnerables. Asimismo, el Artículo 21º subraya que todas las acciones de seguridad deben adherirse a principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y un respeto profundo por los derechos humanos. Estos principios son cruciales para desarrollar una estrategia de disuasión efectiva que prevenga la reincidencia y fomente un entorno seguro para las mujeres. El enfoque sistémico y multidimensional delineado en este Artículo es esencial para comprender cómo la legislación mexicana organiza la prevención de segundo nivel dentro del marco de la seguridad pública, ofreciendo una base sólida para la implementación de políticas públicas que protejan a las mujeres de la violencia en todos los ámbitos.

Desde lo particular, la LGAMVLV establece explícitamente las bases para la disuasión, identificada esta última como un mecanismo centrado en la vigilancia y en la ejecución estratégica para apoyar a las mujeres afectadas. Esta estrategia implica un monitoreo constante de los contextos y situaciones donde se ha registrado previamente violencia contra las mujeres. El Artículo 26º enfatiza que la vigilancia y la intervención estratégica deben incluir no sólo la protección física, sino también el acceso a servicios legales y de apoyo psicosocial para las víctimas, facilitando así su empoderamiento y la posibilidad de romper el ciclo de violencia. Además, el Artículo 23º destaca la tarea crucial de informar y advertir a los agresores sobre las consecuencias de sus acciones, estableciendo medidas legales y policiales robustas para proteger a las mujeres de futuras violencias y prevenir la reincidencia. Estas disposiciones aseguran la implementación de una estrategia disuasoria que es fundamental para mitigar la violencia y garantizar un entorno seguro para las mujeres.

Este plan permite una intervención flagrante, evitando así que el acto violento se consuma, y tiene un objetivo aún más significativo: posibilita poner al victimario a disposición de la justicia de forma legal. En la LGAMVLV, las medidas de vigilancia y prevención se abordan a través de modelos de atención, prevención y sanción

que establecen las entidades federativas y municipios, como se especifica en el Artículo 8º, asegurando la seguridad de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. La ley también enfatiza la investigación y recolección de información durante estos procesos de vigilancia, que no sólo sirve como evidencia crucial en procedimientos legales, sino que también proporciona una base sólida para implementar medidas *preventivas* efectivas en el futuro. Además, esta estrategia no sólo disuade a los posibles agresores, sino que también crea un ambiente donde las víctimas se sienten seguras para denunciar y, por ende, para iniciar el camino hacia su recuperación, fomentando un entorno seguro y apoyando la reparación del daño causado por dichas violencias

Es fundamental destacar que la disuasión, según lo establecido en la LGAMVLV, no se trata sólo de una función de vigilancia, sino también de un acompañamiento y apoyo integral a las víctimas. Esto implica brindarles protección, acceso a servicios de asistencia y orientación, así como promover su empoderamiento para que puedan denunciar y romper el ciclo de violencia. De acuerdo con el Artículo 8º de la LGAMVLV, las medidas de atención y prevención deben incluir la provisión de servicios especializados y gratuitos que favorezcan el empoderamiento de las mujeres y la reparación del daño causado. Asimismo, el Artículo 23º destaca la importancia de generar condiciones y políticas públicas que contribuyan a la disminución y cese de la violencia contra las mujeres, garantizando así su seguridad y la promoción de un ambiente propicio para su recuperación y pleno desarrollo en la sociedad.

Tras establecer la relevancia del término *disuasión* desde una perspectiva etimológica y su aplicación práctica dentro del marco de la seguridad pública y la protección de derechos, es imperativo ahondar en cómo las Órdenes de Protección, como herramientas legislativas específicas, encarnan este concepto de prevención de segundo nivel. Estas órdenes no sólo representan un mecanismo reactivo ante incidentes de violencia, sino que también funcionan proactivamente para evitar la recurrencia de tales actos, integrando así un enfoque disuasorio en la estrategia general de protección. En este sentido, el análisis detallado de las *Órdenes de Protección* no sólo resalta su funcionalidad inmediata y urgente, sino que también

subraya su rol vital en el establecimiento de un entorno seguro y disuasorio, previniendo efectivamente la materialización de comportamientos delictivos hacia las mujeres y reforzando la arquitectura de seguridad y justicia.

Así entonces, el Artículo 27º de la LGAMVLV establece un mecanismo crucial mediante el cual las órdenes de protección deben ser otorgadas de manera urgente y automática por las autoridades competentes, ya sea de oficio o a petición de parte. Este Artículo refleja un enfoque proactivo en el tratamiento de la violencia, al garantizar una respuesta inmediata que se alinea con el objetivo de disuadir comportamientos delictivos y proteger a las mujeres antes de que la violencia escale.

Siguiendo esta línea, el Artículo 30º subraya la importancia de adherirse a principios como la protección, la necesidad y la proporcionalidad, y la confidencialidad, que aseguran que cada orden de protección emitida sea pertinente y efectiva. Este enfoque detallado y normativo no sólo proporciona seguridad en el corto plazo, sino que también promueve un ambiente seguro y estable para las mujeres, facilitando así su empoderamiento y la posibilidad de una recuperación integral.

En cuanto a la aplicación práctica de estas directrices, el Artículo 34º Ter detalla las medidas específicas que pueden ser adoptadas bajo las órdenes de protección administrativas. Estas incluyen desde el traslado seguro de las víctimas hasta la provisión de alojamiento temporal y apoyo económico. La capacidad de la ley para abordar tanto las necesidades inmediatas como las a largo plazo de las víctimas es un testimonio de su enfoque integral, que es fundamental para una estrategia de disuasión efectiva.

Por su lado, el Artículo 34º Quáter aborda la integración de la tecnología en las estrategias de protección, permitiendo el uso de dispositivos electrónicos para prevenir el contacto de la persona agresora con la víctima. Este enfoque moderno y adaptativo refuerza el marco de disuasión, asegurando que las medidas de protección estén en consonancia con los desafíos que plantean los contextos contemporáneos y digitales.

Así entonces, y como podemos apreciar, la disuasión como estrategia de prevención de segundo nivel se orienta tanto hacia individuos con alto riesgo de ser víctimas como hacia aquellos propensos a cometer actos de violencia. El objetivo es actuar como un escudo protector, mediando entre potenciales víctimas y agresores. Según Brantingham y Faust, la prevención del delito secundaria no sólo busca la identificación temprana de posibles delincuentes, sino también la intervención proactiva en sus comportamientos potencialmente delictivos.[131] Esta integración es comprensible, dado que la disuasión está intrínsecamente conectada con la investigación y persecución de delitos, competencias que forman parte sistémica de la seguridad pública. En términos de Holland, este enfoque puede considerarse un *sistema complejo adaptable*.[132]

Continuando con la perspectiva de sistemas complejos adaptativos en la disuasión del delito, la investigación y la persecución se consolidan como herramientas esenciales, particularmente en la lucha contra la violencia de género dentro del núcleo familiar. Estos procesos son fundamentales para asegurar la seguridad y bienestar social, mediante la identificación eficaz y el procesamiento de los agresores. En este contexto, Evan Stark, en su libro *Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life*, destaca la necesidad de una colaboración interdisciplinaria (*Sistema Criminológico*), que involucre a profesionales de la justicia, trabajadores sociales y expertos en salud. Esta colaboración busca no sólo fortalecer la investigación y la acción judicial en casos de violencia familiar, sino también adaptar las respuestas del sistema a las complejidades específicas de estos delitos, asegurando una intervención más integral y efectiva.

> El nuevo proceso de intervención combinaría los mejores aspectos de la gestión de casos con la concienciación, tanto nuestra como la de nuestros pacientes o clientes, aprovechando el enfoque multidisciplinario necesario para contrarrestar las múltiples facetas del control coercitivo,

[131] Vid. Op. Cit, Brantingham, P. J., & Faust, F. L.

[132] Para Holland, un Sistema Complejo Adaptable (SCA) es un sistema compuesto por una gran variedad de agentes distintos y componentes no estáticos que no mantienen una configuración fija, sin un órgano central de planeación o dirección pero que en conjunto desarrolla una identidad única y mantiene un patrón estable y coherente a lo largo del tiempo. Holland expande el significado del término adaptación para incluir el aprendizaje y los procesos relacionados con éste, es decir, una forma de programar, ante agentes externos, su inmediato plan de trabajo para explotar su información y adecuarla para futuros eventos y garantizar su existencia. Vid. Op. Cit. John H. Holland, *El Orden* Oculto.

> mientras se basa en la cosupervisión, la retroalimentación de los clientes y otros dispositivos para una crítica continua de la práctica.[133]

En concreto, la investigación comprende el conjunto de diligencias y métodos utilizados para recopilar pruebas y esclarecer los hechos, mientras que la persecución se centra en la acción penal del fiscal para llevar a los agresores a juicio. En caso de que los acusados sean encontrados culpables, la autoridad judicial impone una sanción adecuada, completando así el proceso de procuración de justicia.

En este sentido, Diana E. H. Russell enfatiza la importancia de una procuración de justicia sensible a las necesidades de las víctimas en la prevención de la violencia contra la mujer, argumentando que un sistema que empodera a las víctimas en lugar de re victimizar las puede incentivar a más mujeres a denunciar la violencia en el núcleo familiar y contribuir así a su prevención. Es fundamental que las mujeres víctimas de violación sean atendidas en las comisarías por personal que les ofrezca un entorno seguro y respetuoso, evitando cualquier forma de re victimización durante su testimonio.[134] Estas medidas pueden hacer que las mujeres se sientan más comprendidas y apoyadas, aumentando la probabilidad de que denuncien estos delitos y ayudando a prevenir futuros incidentes.

Por otro lado, el Artículo 20º de la CPEUM juega un papel crucial, al establecer los lineamientos esenciales para la procuración de justicia en el país. Este Artículo no sólo proporciona un marco legal robusto para las autoridades judiciales, sino que también salvaguarda los derechos individuales, incluyendo la

---

[133] Stark, Evan, "Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life," trad. propia, Reino Unido, Oxford University Press, 2007, p. 372, disponible en: https://drive.google.com/file/d/1GbqPpzhq5olH5cU0RZuQBRaZRytLUu9y/view?usp=drive_link, (fecha de consulta:19 de septiembre de 2023), cita traducida: "The new intervention process would combine the best aspects of case management with consciousness raising, our own as well as that of our patients or clients, drawing on the multidisciplinary approach needed to counter the many facets of coercive control while relying on cosupervision, client feedback, and other devices for an ongoing critique of practice."

[134] Vid. Diana E. H. Russell y Nicole Van de Ven, eds., "Crimes Against Women: Proceedings of the International Tribunal," trad. propia, 3ra ed., Berkeley, California, Russell Publications, 1990, p. 135, disponible en: *https://www.dianarussell.com/f/Crimes_Against_Women_Tribunal.pdf,* (fecha de consulta: 1 de mayo de 2024), paráfrasis traducida "When a raped woman goes to the police station, she should not be greeted by men who take a malicious pleasure in listening to her evidence. She should not be in the position of being the accused …which tortures them and makes them relive the entire experience."

presunción de inocencia, un principio que protege a cualquier individuo acusado de un delito hasta que se demuestre legalmente su culpabilidad.

Además, enfatiza la importancia del debido proceso, asegurando que todas las partes involucradas en un caso reciban un trato justo y equitativo bajo la ley. Este principio no sólo protege a los imputados, sino que también fortalece la integridad del sistema de justicia, promoviendo decisiones imparciales y transparentes. Asimismo, el Artículo 20º de la CPEUM proporciona garantías concretas para los derechos del imputado, incluyendo el acceso a una defensa adecuada y la información clara sobre los cargos en su contra, lo cual es crucial para asegurar un juicio justo y, por ende, fomentar la confianza en el sistema legal y promover la equidad y la justicia en toda la sociedad.

Finalmente y como reflexión hacia el siguiente nivel preventivo, es crucial destacar que la prevención secundaria de la violencia contra la mujer trasciende del ámbito policial, adoptando un enfoque multidisciplinario integral. El origen de este enfoque está fundamentado en la LGSNSP, específicamente en el segundo párrafo de su 2º Artículo. Dicho párrafo subraya la importancia de integrar diversas disciplinas en el segundo y tercer nivel de prevención del delito.

> El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

El análisis del marco reglamentario para la prevención de segundo y tercer nivel (seguridad pública) en México revela la intención legislativa de adoptar un enfoque integral y multi institucional, marcando un cambio de paradigma de seguridad pública a seguridad ciudadana.[135] Este cambio, implica la colaboración de diversas instituciones sociales, entre ellas la Secretaría de Educación Pública (SEP), la de Salud, Trabajo y Previsión Social, así como el Departamento de Integración Familiar. Estas entidades, gestionadas por diferentes secretarías del

[135] Vid. Buenrostro Briseño, Raúl Javier, “Prevención De La Violencia Contra La Mujer: Una crítica Multinivel Desde La política Criminal,” *RDP Revista Digital De Posgrado*, n. º 9 febrero 2024, p. 109, disponible en: https://revistardp.aragon.unam.mx/index.php/RDP/article/view/74/103, (fecha de consulta: 12 de mayo de 2024).

gobierno, juegan un papel fundamental como intermediarios entre la ciudadanía y el gobierno, y tienen la responsabilidad, enmarcada en el 1er Artículo de la CPEUM, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales, lo cual es crucial para combatir la violencia en el ámbito familiar.

2.1.3 Prevención de tercer nivel

La prevención de tercer nivel, considerada como una de las políticas criminales fundamentales en México, está enmarcada en el Artículo 18º de la CPEUM. Dicho Artículo establece que el sistema penitenciario debe organizarse respetando los derechos humanos y promoviendo actividades como el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, con el objetivo principal de facilitar la reinserción del individuo en la sociedad y prevenir la reincidencia. Como se observa, este nivel de prevención también adopta un enfoque multidisciplinario integral (Sistema Criminológico), respaldado también por el 2º párrafo del 2º Artículo de la ley que reglamenta la seguridad pública. Este marco legislativo subraya la importancia de integrar diversas disciplinas en el proceso de reinserción social.[136]

En el fondo, y como lo establece el Artículo 18º de la CPEUM, la prevención de tercer nivel se trata a la misma vez de una política criminal que busca cumplir dos objetivos principales. Primero, tiene como propósito reinsertar en la sociedad a las personas que han cometido violencia contra la mujer, proporcionándoles las herramientas necesarias para su reintegración y ofreciéndoles oportunidades de desarrollo personal y laboral. Segundo, busca prevenir la reincidencia del individuo en conductas delictivas, al ofrecer un ambiente controlado y supervisado donde se fomenta la reflexión, la responsabilidad y la reeducación moral personal. En suma,

[136] Ejemplo de ello y como también se abordó en el capítulo anterior al analizar deontológicamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la integración multidisciplinaria en el marco de la prevención de tercer nivel es la disposición contenida en la fracción II de su Artículo 8º, que prevé brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor. Estos servicios están orientados a eliminar las conductas violentas mediante programas educativos que desmantelen los estereotipos de superioridad masculina y los patrones machistas que perpetúan dicha violencia. Esta medida refleja cómo la reinserción social se puede apoyar en estrategias educativas que aborden directamente las causas subyacentes de la criminalidad, cumpliendo con los principios del tercer nivel preventivo que busca modificar comportamientos mediante un enfoque que respeta y promueve los derechos humanos.

podemos inferir que este nivel preventivo actúa teniendo como evidencia que la prevención de primer nivel ha fallado.

En consonancia con los principios de la política criminal expuesta, la autora de *Nociones de Política Criminal* aborda la reinserción social como un proceso esencial y un derecho fundamental del recluso, enfatizando que debe ser respetado y promovido por el sistema penitenciario. Desde su perspectiva, la reinserción se centra en la reeducación y la reintegración efectiva del individuo en la sociedad, asegurando que la ejecución de la pena privativa de libertad esté impregnada por estos objetivos desde el primer día de encarcelamiento.[137] Mediante actividades y tratamientos diseñados para preparar al recluso para su retorno a la comunidad, este enfoque no sólo humaniza el proceso penal, sino que también busca reducir la reincidencia al equipar a los individuos con las herramientas necesarias para una transición exitosa a la vida fuera de prisión. La autora sostiene que una reinserción social efectiva es beneficiosa no sólo para el individuo, sino para la sociedad en su conjunto, ya que contribuye a la seguridad y la cohesión social, reforzando la idea de que la prisión debe ser un lugar de corrección y preparación, y no meramente de castigo.[138]

La efectividad del tercer nivel preventivo, centrado en la reinserción y prevención de la reincidencia, ha generado un amplio debate. En este contexto, es fundamental recordar la crítica de la doctrina jurídica contemporánea que citamos en el primer capítulo, en donde Garland cuestiona la eficacia de la cultura del control en la política criminal. Según Garland, la intensificación de medidas punitivas, lejos de resolver los problemas sociales subyacentes a la criminalidad, puede exacerbarlos, un argumento que resuena profundamente en el marco de las políticas criminales actuales.[139] Por un lado, algunos defienden la utilidad del tercer nivel preventivo destacando su rol en la reducción de la violencia y protección de las mujeres. Sin embargo, otros críticos argumentan que la prisión no siempre facilita una reinserción efectiva y puede contribuir a efectos adversos como la

[137] Vid. Op. Cit., Zúñiga Rodríguez, Laura, pp. 111, 112.
[138] Vid. Ídem.
[139] Vid. Op. Cit. Garland, D., *La cultura del control: Crimen y orden social en la sociedad contemporánea.*

estigmatización y la reincidencia en actos de violencia escalonada, ahora incluso considerada como *violencia feminicida.*[140] Estos argumentos subrayan la necesidad de llevar nuestra investigación al terreno práctico para determinar cómo y por qué las políticas punitivas, en su forma actual, pueden estar contribuyendo a ciclos continuos de violencia y criminalidad en lugar de solucionarlos efectivamente.

De acuerdo con la corriente epistemológica reflejada en la CPEUM, el tercer nivel preventivo trasciende la mera imposición de sanciones. Este nivel está diseñado para proporcionar a los agresores herramientas necesarias que modifiquen su comportamiento violento y promuevan una reintegración positiva en la sociedad. Se logra este objetivo a través de programas de rehabilitación, educación y capacitación, los cuales están enfocados en transformar patrones de conducta y fomentar una cultura de respeto y no violencia. Estas estrategias, reconocidas y promovidas dentro del marco jurídico mexicano, son aplicadas para abordar la violencia contra la mujer.

En resumen, la prevención de tercer nivel se enfoca en individuos con antecedentes de comportamiento violento, donde el Estado emplea sistemas de control formal, como la ley, la policía, el sistema penitenciario y el sistema judicial. Según Brantingham y Faust, la prevención del delito terciaria se encarga de quienes efectivamente han delinquido e incluye intervenciones en sus vidas para evitar que cometan más delitos.[141] Así, el tercer nivel preventivo implementa una estrategia punitiva en donde, habiendo fracasado el primer nivel en prevenir la violencia contra la mujer, recurre a un Plan B para su control y la posibilidad de reiniciar el primer nivel preventivo, pero esta vez adoptando *Instituciones totales*.

---

[140] Violencia Feminicida: Se refiere a la forma más extrema de violencia de género ejercida contra mujeres, adolescentes y niñas, definida en el Artículo 21º del Capítulo V de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta violencia resulta de una violación sistemática de derechos humanos y un ejercicio abusivo del poder que puede manifestarse tanto en el ámbito público como privado. Las conductas asociadas incluyen actos de odio y discriminación que no sólo ponen en riesgo la vida de las víctimas, sino que también pueden resultar en su muerte a través de feminicidios, suicidios u homicidios, así como otras muertes evitables. Estas conductas afectan gravemente la integridad, seguridad, libertad personal y el desarrollo libre de las víctimas. En los casos donde se consuma un feminicidio, se aplicarán las sanciones correspondientes establecidas en la legislación penal sustantiva de México, buscando combatir la impunidad social y estatal que a menudo rodea estos actos.

[141] Vid. Op. Cit, Brantingham, P. J., & Faust, F. L.

Como síntesis general de este apartado, los tres niveles de prevención del delito son cruciales para reforzar la protección de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. La implementación coordinada y holística de estas estrategias permite abordar de manera eficaz las diversas etapas y dimensiones del fenómeno, protegiendo de forma integral la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas afectadas. Con base en estos argumentos, sería conveniente agregar en la LGSNSP, la cual es a su vez el marco jurídico reglamentario del Artículo 21º de la CPEUM, que la estrategia de prevención delictiva se despliega en tres niveles.

El primer nivel aborda las causas subyacentes del delito mediante instituciones sociales, promoviendo una educación básica obligatoria y la salvaguarda de derechos humanos básicos como la salud, la alimentación y un ambiente de sano esparcimiento. El segundo nivel emplea el SNSP para disuadir activamente la comisión de delitos y proteger a las víctimas. El tercer nivel, a través del sistema penitenciario y judicial, se centra en evitar la reincidencia de los agresores. Así, y con base en el modelo epistemológico con el que actualmente cuenta la CPEUM (ius-positivista/ius-naturalista), la prevención de los delitos se configuraría como una función esencial del Estado, cuyo objetivo principal es el trabajo anticipado, integral y multi institucional de las conductas antijurídicas, garantizando, pero sobre todo, dejando claro el importante cambio transitorio hacia un Estado social democrático de derecho.

Además, sería pertinente, siguiendo la pauta que nos da el Artículo 3º de la LGSNSP, incluir a la SEP, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud (SSA), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Departamento de Integración Familiar como autoridades que, en razón de sus atribuciones, contribuyen directa o indirectamente a la prevención de los delitos. Todo esto como estrategia para contrarrestar el equívoco enfoque preventivo que se tiene actualmente y que es resultado de la ideología de género.

2.2 Evolución histórica y teórica de la ideología de género feminista

El análisis genealógico de la ideología de género feminista revela que esta ha sido el resultado de un largo proceso evolutivo, profundamente marcado por luchas sociales y académicas. Desde sus primeras manifestaciones, como las ideas

esbozadas por Simone de Beauvoir en El segundo sexo, hasta teorías contemporáneas como la interseccionalidad y la performatividad, la ideología de género feminista ha influido en la configuración de las estructuras sociales y políticas. Este desarrollo, aunque crucial para el avance de los derechos de las mujeres, también ha dado lugar a interpretaciones y aplicaciones que merecen un examen crítico.

El feminismo, en su recorrido histórico, ha evolucionado a través de distintas olas y enfoques teóricos que han expandido y diversificado su influencia en las estructuras sociales y políticas. Desde sus inicios en el siglo XVIII con las reivindicaciones de igualdad promovidas por pensadoras como Mary Wollstonecraft, hasta la obra pionera de Simone de Beauvoir, el feminismo ha sido fundamental para cuestionar las construcciones patriarcales que subordinan a las mujeres. Así, la genealogía del feminismo refleja un proceso continuo de transformación y adaptación, que no sólo ha moldeado las políticas públicas y las normas sociales contemporáneas, sino que también ha abierto nuevas vías simplistas y enfoques reduccionistas sobre la violencia contra la mujer en distintos contextos socioculturales.

En este subcapítulo, nos proponemos explorar cómo la ideología de género feminista ha moldeado las políticas públicas y las normas sociales contemporáneas, especialmente en relación con la violencia contra la mujer por razones de género. A través de un enfoque multidisciplinario, examinaremos las principales teorías que sustentan la ideología de género feminista, tales como las propuestas por Simone de Beauvoir, Gloria Jean Watkins (mejor conocida como bell hooks) y Judith Butler, y cómo estas han sido aplicadas, y en ocasiones malinterpretadas, en contextos socioculturales específicos.

Además, en este apartado se hará un análisis meticuloso sobre cómo la violencia contra la mujer en el núcleo familiar y la violencia de género han sido conceptualizadas y tratadas tanto a nivel internacional como en el marco jurídico mexicano. A partir de esta base, se buscará identificar las brechas conceptuales y metodológicas que han influido en la implementación de políticas preventivas y en la construcción de respuestas efectivas para combatir la violencia contra la mujer.

Finalmente, este apartado sentará las bases para un análisis crítico de las estrategias actuales, proponiendo alternativas más coherentes y fundamentadas que aborden las verdaderas causas tanto de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar como de la violencia de género. Reconocer la complejidad de este fenómeno y su evolución es esencial para desarrollar políticas integrales y efectivas que promuevan una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos de todos los individuos.

2.2.1 Análisis genealógico de la ideología de género feminista

Del examen anterior, se advierte que para llegar a ello, como producto final, ha sido un largo camino evolutivo y de lucha, y del que podemos identificar sus orígenes en el *Segundo sexo* de Simone de Beauvoir. Ella examina cómo el sexo se ha construido socialmente para limitar la autonomía y las oportunidades de las mujeres, argumentando así contra las normas sociales impuestas.[142] Aunque Beauvoir no empleó el término *género*, su análisis puede interpretarse como precursor de los debates contemporáneos sobre este tema, enfocándose en los roles sociales más que en las diferencias biológicas. Por lo tanto, su libro es considerado una piedra angular del feminismo y ha sido influyente en los debates sobre la igualdad de género.

Para Simone de Beauvoir, la mujer es definida y tratada como el *otro* en relación al hombre, lo que resulta en su subordinación y opresión, asegurando que, "El derecho paterno sustituye entonces al derecho materno: la transmisión del dominio se efectúa de padre a hijo, y ya no de la mujer a su clan. Es la aparición de la familia patriarcal fundada en la propiedad privada. En semejante familia, la mujer está oprimida."[143]

---

[142] De Beauvoir, Simone, "El segundo sexo"*,* París, Kayleigh BCN, trad. Alicia Martorell, 1949, p. 23, disponible en: *https: //perio.unlp.edu.ar/catedras/comyddhhlic/wp-content/uploads/sites/152/2020/08/7-De-Beauvoir-Simone-El-segundo-sexo.pdf*, (fecha de consulta: 27 de septiembre de 2023).
[143] Vid. Ibídem, p. 6.

Otro aspecto discernible en esta obra es una cierta representación de las mujeres como víctimas, ya que la autora las presenta como mártires, acentuando su opresión y sufrimiento en contraste con la supuesta superioridad y privilegio intrínseco de los hombres. "Un hombre nunca empieza considerándose un individuo de un sexo determinado: se da por hecho que es un hombre".[144] Esto claramente dibuja un retrato de la mujer como una mártir, simplemente por ser mujer.

"…un hombre está en su derecho de ser hombre, la que se equivoca es la mujer."[145] La afirmación de Simone de Beauvoir, si bien plantea un punto interesante sobre la desigualdad de género, también suscita preocupaciones significativas. Al centrar la discusión en la idea de que los hombres tienen un derecho inherente a su identidad, mientras que las mujeres son señaladas como irracionales, la autora involuntariamente refuerza las nociones patriarcales que han perpetuado la violencia contra las mujeres en el núcleo familiar. Esta declaración, en lugar de desafiar el patriarcado, parece en cierto modo legitimarlo.

Al sugerir que la razón está inherentemente del lado de los hombres, se perpetúa la narrativa de la superioridad masculina, que ha sido utilizada históricamente para justificar la opresión de las mujeres. Esta creencia en la supremacía masculina ha sido una de las bases del patriarcado, un sistema político que malinterpretado ha dado pie a la violencia y la subordinación de las mujeres en el núcleo familiar y en la sociedad en general. Pero, ¿y si en realidad todo se tratase de una intencionada mal interpretación? Es decir que todo se haya planeado desde un principio en una lucha de géneros para desviar el verdadero y óptimo trabajo que el Estado debió de realizar (prevención primaria).

En 1948, Simone de Beauvoir presentó una percepción social que a menudo se interpreta como fundamento para considerar la inferioridad de la mujer. Alarmantemente, esta teoría sigue usándose para justificar políticamente la subyugación femenina en el núcleo familiar, revelando una estrategia de control impulsada por el odio. Así mismo, el análisis de Beauvoir, no captura completamente la diversidad de experiencias masculinas, especialmente en los

[144] Ibídem. p. 3.
[145] Ibídem. p. 4.

estratos más bajos. Generalizar a todos los hombres como agentes de opresión simplifica en exceso y no refleja la complejidad de las relaciones de poder en distintos contextos culturales. Su obra, por ende, no delimita objetivos claros ni aborda de manera específica la condición contemporánea de la mujer, lo que limita su relevancia actual.

Aunque las mujeres ya disfrutaban de derechos fundamentales como el voto, la propiedad y la educación, el libro no examina detenidamente las dinámicas de género en el ámbito familiar. Su análisis se centra en la evolución histórica de las relaciones entre hombres y mujeres, vinculando eventos pasados con desafíos de su tiempo. Así entonces, el enfoque comparativo de Beauvoir destaca las continuidades entre el sometimiento histórico, una técnica aún relevante en el activismo de género contemporáneo. Sin embargo, es esencial reconocer los cambios sociales para comprender completamente la violencia contemporánea contra las mujeres en el ámbito familiar.

Por tanto, para combatir la violencia contra las mujeres en el núcleo familiar, debemos cuestionar y desafiar las interpretaciones patriarcales erróneas, en vez de legitimarlas, como ocasionalmente hace Beauvoir de manera subjetiva. Clarificando los objetivos de las estructuras de poder y cuestionando las justificaciones que sostienen, podemos desenmascarar el adoctrinamiento ideológico y avanzar hacia una sociedad más equitativa. En esta, la violencia contra las mujeres debe ser tratada según sus verdaderas consecuencias, garantizando igualdad y respeto para todos.

Por otro lado, como segunda teoría que sustenta a la ideología de género feminista tenemos a la interseccionalidad, según esta teoría feminista posterior a Simone de Beauvoir, el género se entrelaza con otras estructuras de poder, como la raza y la clase social, para crear desigualdades y privilegios. En su obra: *Teoría feminista: de margen a centro*, bell hooks, argumenta que el género es una forma de dominación que perpetúa la subordinación de las mujeres interseccionalmente.[146]

[146] Vid. Jean Watkins, Gloria, "Feminist Theory: From Margin to Center," Nueva York y Londres, Routledge, trad. de Ana Useros Martín 2015, 3ª ed., pp. 97,98., disponible en: *https: //traficantes.net/sites/default/files/TDS_map61_Hooks_web_baja.pdf,* (fecha de consulta: 27 de septiembre de 2023).

Esta autora examina minuciosamente la interseccionalidad entre género, raza y clase social, dilucidando cómo estas categorías de opresión se entrelazan y refuerzan mutuamente. En relación con nuestro objeto de estudio, es relevante considerar que las mujeres que sufren violencia en el núcleo familiar pueden enfrentar opresión derivada de múltiples factores interseccionales. bell hooks sostiene, por ejemplo, que las mujeres negras experimentan una forma única de opresión interseccional resultante de la combinación de racismo, sexismo y opresión de clase.[147] De manera similar, las mujeres que padecen violencia doméstica a menudo enfrentan desafíos específicos relacionados no sólo con su género, sino también con su identidad racial y estatus socioeconómico.

Como tercer elemento teórico ideológico de género feminista, la performatividad representa una contribución significativa a la comprensión contemporánea de las dinámicas de género. Aunque se encuentra fuera del marco binario previamente examinado, su consideración resulta imperativa por varias razones. En primer lugar, la corriente epistemológica que guía esta investigación exige su inclusión. En segundo lugar, su análisis nos permitirá discernir las deficiencias inherentes de estas nuevas prácticas ideológicas y cómo estas se manifiestan en el ámbito sociocultural.

La relevancia de esta teoría radica en su capacidad para evidenciar cómo la construcción y el desempeño de género son procesos dinámicos, moldeados por factores sociales, culturales y lingüísticos. Al considerarla, nos enfrentaremos a los desafíos que implica su aplicación práctica en el mundo real, donde su novedad resultará en malentendidos o al igual que las anterioeres abordadas, en una instrumentalización indebida del lenguaje con fines de control social.

Según Judith Butler, el género no es simplemente una función de las diferencias biológicas, sino más bien una construcción social que comienza antes del nacimiento y se desarrolla a lo largo de la vida. Para Butler, el género se aprende y se internaliza mediante procesos de socialización, a los que ella se refiere como *actos performativos*.[148] En términos más simples, el género se constituye y se

[147] Vid. Ibídem., pp. 67,68.
[148] Vid. Butler, Judith, “El género en disputa: el feminismo y la subversión de identidad,” Barcelona, Paidós, trad. María Antonieta Muñoz, 2007, p. 17, disponible en: *https:*

reafirma a través de comportamientos y acciones repetidas, que se ajustan a las normas y expectativas sociales una vez que se conoce el sexo de un individuo. Esta perspectiva reconoce que las normas y expectativas de género, establecidas y mantenidas por la sociedad, ejercen una influencia significativa en la identidad y el comportamiento de las personas, incluso antes de su nacimiento

Butler desafía la noción de que el género se limita a dos categorías fijas y binarias, argumentando que estos roles son fluidos y se construyen de manera social y cultural.[149] Según su perspectiva, si el género se impone como un acto performativo estándar en la sociedad, salir del binarismo puede contribuir a la opresión y exclusión de quienes no se ajustan a los roles tradicionales de género. Sin embargo, si consideramos que la identidad de género es una construcción social en constante evolución, también debemos reconocer que las identidades no binarias tienen el potencial de desafiar y transformar la sociedad misma. Este punto es fundamental en la ideología de género femnista y representa un área de interés en esta investigación.

2.2.1.1 Cisgénero, transgénero y la evolución de las normas sociales

En ese contexto, es dable arribar al término *cisgénero,* esencial en el contexto de la discusión de identidades de género. “El prefijo cis proviene del latín ‘de este lado’ o ‘correspondiente a’ y es el antónimo del prefijo trans, que significa ‘del otro lado’.”[150] Por lo tanto, *transgénero* se refiere a personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer, mientras que *cisgénero* describe a quienes se identifican con el género que les fue asignado al nacer, ya sea masculino o femenino.

Aceptar y comprender la diversidad de identidades de género es fundamental para promover la igualdad y el respeto hacia todas las personas. Sin embargo, estudios han evidenciado que las personas cisgénero tienden a enfrentar menos

//www.lauragonzalez.com/TC/El_genero_en_disputa_Buttler.pdf, (fecha de consulta: 25 de septiembre de 2023).

[149] Vid, Ibídem, p. 251.

[150] Vid. Leyva k, Alexis, et. alt., *¿Que es la diversidad sexual?,* México, UNAM, p. 5, disponible en: *https: //csc.facmed.unam.mx/wp-content/uploads/2022/04/Miniguias-Diversidad-sexual-1.pdf,* (fecha de consulta: 27 de septiembre de 2023).

discriminación y dificultades en comparación con las personas transgénero, debido a que su identidad se alinea con las expectativas y normas sociales tradicionales de género, lo que proporciona una sensación de conformidad y aceptación.[151]

Es crucial aclarar que ser cisgénero no es la norma o el estándar correcto, sino simplemente una variante de la experiencia humana en relación con el género. Esta perspectiva se alinea con el concepto del imperativo categórico kantiano, el cual postula que las acciones deben ser juzgadas por su universalidad y coherencia lógica, independientemente de las circunstancias individuales. Por tanto, la diversidad de identidades de género debe ser reconocida y respetada de igual manera, siguiendo este principio ético fundamental. Combatir la discriminación y el prejuicio hacia las personas transgénero es esencial, reconociendo la validez de su identidad de género al igual que la de las personas cisgénero.

En este apartado se identificó cómo la ideología de género ha influenciado y continúa modelando las estructuras sociales contemporáneas en ámbitos cruciales como la política, la educación y las normas sociales. El análisis demostró que la ideología de género no sólo configura las políticas públicas y criminales, sino que también reformula las normas sociales a través de estrategias preventivas de segundo y tercer nivel, descuidando las intervenciones preventivas primarias.

En términos específicos, la ideología de género prioriza respuestas reactivas y punitivas frente a la violencia contra la mujer, promoviendo un enfoque basado en el discurso de odio que a menudo ignora las causas subyacentes de esta violencia. Este enfoque está influenciado también por la aplicación inadecuada de la ideología neoliberal aplicada en México, como se identificó en el primer capítulo. Además, este análisis nos impulsó a explorar cómo la ideología de género afecta estructuras como la educación y las normas sociales. Entender estas influencias es crucial para fundamentar la corriente epistemológica de esta investigación (ius- realismo). Las ideologías deben ser consideradas no sólo como sistemas de creencias pasivos, sino como agentes activos que moldean dinámicamente nuestra sociedad.

[151] Vid. Johnson, Austin, H., et. alt., *Common barriers to healthcare for transgender people in the U.S. Southeast*, USA, International Journal of Transgender Health, vol. 21, no. 1, 2020, pp. 70-78, disponible en: *https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15532739.2019.1700203,* (fecha de consulta: 27 de septiembre de 2023).

Por lo tanto, resulta imperativo profundizar en el estudio de la violencia contra la mujer y la violencia de género. Un análisis meticuloso de estas cuestiones permitirá corregir percepciones erróneas y desarrollar respuestas más eficaces frente a las verdaderas causas de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar, las cuales, debemos subrayar, no derivan únicamente del odio.

2.2.2 Violencia contra la mujer en el núcleo familiar y violencia de género

El término *violencia* tiene su origen etimológico en el latín *violentia*, que significa *vehemencia, fuerza, impetuosidad*.[152] Este término deriva a su vez de *violare*, que significa *usar la fuerza*. La violencia se ha entendido tradicionalmente como el uso de la fuerza física para causar daño a otro ser humano. Sin embargo, con el tiempo, esta definición se ha ampliado para incluir no sólo la violencia física, sino también la violencia psicológica, sexual y económica.[153]

Uno de los hitos en la conceptualización de la violencia contra la mujer es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.Esta declaración define la violencia contra la mujer como:

> …todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.[154]

Por un lado, esta definición reconoce ser un acto de poder y control, basado en las características biológicas del sexo femenino, y por el otro lado, adecua, la hipótesis victimaria hacia una estricta identidad cisgénero (femenino-mujer). Sin embargo, y por la complejidad que hemos identificado en la teoría de género de

---

[152] Vid. Harper, Douglas, “Online Etymology Dictionary,” 2023, disponible en: *https://www.etymonline.com/word/violence* (fecha de consulta 22 de junio de 2024).

[153] Vid. Krug, Etienne G., et. alt., (eds.), “World Report on Violence and Health,” Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2002, disponible en: *https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrhcSdiAHdmVykIu4xXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1720284515/RO=10/RU=https%3a%2f%2fapps.who.int%2firis%2fbitstream%2fhandle%2f10665%2f42495%2f9241545615_eng.pdf%3fsequence%3d1/RK=2/RS=7FlV.p9KPGJVYpSKOPcOx8r87bQ-* (fecha de consulta 22 de junio de 2024).

[154] Naciones Unidas, “La violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo, 2023”, disponible en: *https://unric.org/es/la-violencia-de-genero-segun-la-onu/*
(fecha de consulta: 26 noviembre de 2023).

Judith Buttler, no se deja claro que género pudiese ser el victimario. Infiriendo únicamente que el género hombre es en este fenómeno siempre el victimario.

En palabras más simples, la víctima debe ser del sexo femenino y debe identificarse con el género mujer. El victimario debe de ser siempre un hombre, independientemente de haber nacido biológicamente como masculino. Este es un tema complejo y caótico debido a la inestabilidad con la que fue teorizado. Aunque nuestro objeto de estudio se limite al marco tradicional binario, es relevante mencionarlo ya que esta y otras características, son parte de una estrategia perversa, como señala Carme Jiménez Huertas, que utiliza y manipula el lenguaje con el objetivo de ejercer control social.

La violencia contra la mujer es reconocida por la OMS como un grave problema global de salud, afectando al menos una vez en su vida a una de cada tres mujeres.[155] Este problema es particularmente agudo en las relaciones íntimas, donde un alarmante 27% de las mujeres entre 15 y 49 años que han estado en una relación reportan haber experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja.[156] Por su lado, la definición de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) amplía esta perspectiva, afirmando que la violencia contra la mujer puede ocurrir tanto en la vida pública como privada. Esta definición resalta la omnipresencia del riesgo y subraya la necesidad imperativa de *disuadir* la violencia en todas las esferas de la vida de la mujer, incluyendo su esfera privada.

Por el otro lado, el término *familia* proviene del latín *familia*, que a su vez deriva de *famulus*, que significa *sirviente* o *esclavo doméstico*.[157] En la Antigua Roma, *familia* se refería al conjunto de personas que estaban bajo la autoridad de un paterfamilias, incluyendo no sólo a los parientes consanguíneos, sino también a los esclavos y sirvientes. La primera aparición documentada del concepto de familia en el contexto de una unidad social básica compuesta por padres e hijos data de textos romanos y posteriormente en la Edad Media. No obstante, esta definición ha

[155] Vid. Organización Mundial de la Salud, "Violencia contra la mujer, 2021," *disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women,* (fecha de consulta: 22 noviembre de 2023).
[156] Ídem.
[157] Vid. Op, Cit., Harper, Douglas, Online Etymology Dictionary.

sido ampliada para incluir diversas estructuras familiares como familias monoparentales, extendidas y aquellas formadas por relaciones de hecho sin un vínculo matrimonial formal.

En el contexto de la LGAMVLV, el núcleo familiar es considerado un ámbito donde pueden ocurrir múltiples formas de violencia contra la mujer. El artículo 7º de la LGAMVLV caracteriza la violencia familiar como un abuso de poder o una omisión deliberada que busca dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres, ya sea de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual. Este enfoque reconoce que la violencia puede ser perpetrada por personas con una relación de parentesco consanguíneo, afinidad, matrimonio, concubinato o cualquier otra relación de hecho. La ampliación del concepto de familia para incluir estas diversas estructuras es crucial para entender el alcance y las dinámicas de la violencia en el ámbito doméstico y para la implementación de medidas de protección y prevención más efectivas.

Esta definición es crucial porque amplía el entendimiento de lo que constituye violencia familiar, no limitándose únicamente a las relaciones conyugales o de parentesco directo, sino que también incluye a aquellos individuos que, sin tener un lazo de sangre, desempeñan roles de cuidado o apoyo hacia la mujer. Esta ampliación es esencial para abarcar una gama más extensa de situaciones abusivas que pueden ocurrir incluso fuera del contexto familiar tradicional.

Además, es importante destacar que la violencia familiar no se limita a los actos físicos; también incluye abusos verbales, psicológicos, económicos y sexuales. Estos actos son igualmente destructivos y contribuyen a un ambiente de miedo y coerción que puede tener efectos devastadores a largo plazo en las víctimas. La ley reconoce la variedad de formas que la violencia puede tomar y la necesidad de proteger a las mujeres en todos estos ámbitos.

Esta perspectiva legal refleja un entendimiento de la violencia como una manifestación de poder y control, que va más allá de los actos individuales para abarcar un patrón de comportamiento que busca subyugar a la víctima. El reconocimiento de estos patrones es vital para la implementación de políticas públicas y medidas de protección efectivas en la prevención y sanción de la

violencia familiar contra las mujeres, asegurando así su derecho a una vida libre de violencia. Con base en lo argumentado, al referirnos a la violencia específica que sufren las mujeres en el núcleo familiar, queremos dejar claro que, por un lado, esta modalidad de violencia es una manifestación de un fenómeno de adoctrinamiento que comienza en el núcleo familiar (patriarcado idealizado) y que, si no se trata adecuadamente, puede escalar a violencia de género. Por otro lado, el Artículo 3º de la CPEUM, al describir el derecho a la educación como gratuita, obligatoria, laica y de excelencia, proporciona el sesgo por el cual el Estado puede intervenir y corregir el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Así entonces, cuando nos referimos a la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, hablamos del origen de la violencia feminicida prevista en el Artículo 21º de la LGAMVLV. Con una política integral adecuada, aunque la esfera privada de la familia, como primera institución de desarrollo, no puede abordarse completamente con el actual marco jurídico mexicano, sí es posible abordar esta problemática desde la segunda institución social en la que nos desarrollamos: la escuela. La teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner proporciona un marco útil para entender cómo diferentes niveles de contexto social influyen en el desarrollo humano. Según Bronfenbrenner, el microsistema, que incluye a la familia y la escuela, es crucial en la formación de comportamientos y valores, "Este complejo de interrelaciones dentro del entorno inmediato se denomina microsistema."[158]

Al abordar la violencia contra la mujer desde el núcleo familiar, reconocemos su origen en un ambiente inmediato y su potencial escalamiento a violencia feminicida, como se describe en el Artículo 21º de la LGAMVLV. La intervención en el microsistema escolar, la segunda institución social significativa después de la familia, permite implementar políticas preventivas y educativas que pueden corregir comportamientos nocivos aprendidos en el hogar. El acceso y asistencia a la escuela garantizan, en el marco del interés superior de la niñez previsto en el Artículo 4º de la CPEUM, el derecho a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Además, programas escolares que

[158] Vid. Bronfenbrenner, Urie, *La Ecología Del Desarrollo Humano: Experimentos en Entornos Naturales y Diseñados,* España, Paidós, 2002, p. 27.

enseñen sobre igualdad de género y resolución de conflictos no sólo ayudan a los niños a identificar y evitar la violencia, sino que también proporcionan un entorno seguro y de apoyo que puede contrarrestar influencias negativas del hogar. Así, la teoría ecológica de Bronfenbrenner subraya la importancia de intervenir en la escuela; segunda institución social para abordar efectivamente la violencia contra la mujer por razones de género que inicia en la familia.

En cuanto a la conceptualización de *violencia de género*, la Organización de las Naciones Unidas la define como: "…los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género".[159] Esta definición nos proporciona el marco para entender cómo la coacción realizada por el simple hecho de pertenecer a cierto género, se trata de la forma de violencia más extrema; el odio. Un odio que puede ser entendido como un profundo y duradero prejuicio contra un individuo o grupo basado en su género, es decir, no sólo dirigido hacia el género mujer. Este prejuicio puede ser tan arraigado y potente que puede llevar a actos de diferentes tipos de violencia como la física, sexual o psicológica entre otras.

Así entonces, el odio, como motor de la violencia de género, es particularmente grave porque va más allá de los actos individuales de violencia teniendo como resultado final la pérdida de la vida. Es un indicador de una hostilidad sistemática y generalizada hacia cualquier género. Esta hostilidad puede ser perpetuada y reforzada por ideologías sociales, lo que puede hacer que sea más difícil de erradicar. Además, el odio puede tener efectos devastadores no sólo en las víctimas individuales, sino también en la sociedad en su conjunto. Puede crear un clima de miedo y hostilidad, y puede dividir a las comunidades. Por lo tanto, es esencial que la violencia de género sea aclarada y diferenciada de la violencia contra la mujer.

En este mismo orden de ideas, las evidencias científicas demuestran que en México la violencia impacta de manera preponderante al género hombre. Según el análisis de las estadísticas sobre homicidios durante el primer semestre de 2023, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes fue considerablemente mayor para

[159]ONU MUJERES, "Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, 2023", 2º párrafo, disponible en: *https: //www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence,* (fecha de consulta: 29 de noviembre de 2023).

los hombres, quienes experimentaron 21 homicidios, frente a los 2.6 registrados para las mujeres.[160] Esta significativa disparidad revela patrones de violencia distintos que afectan a ambos géneros y desafía la percepción común de que sólo las mujeres son víctimas de violencia de género y que los hombres siempre son los agresores. La Organización de las Naciones Unidas ha señalado la importancia de reconocer estas dinámicas para entender correctamente la violencia de género.

> El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella.[161]

Hasta aquí todo claro, la estrategia para controlar y confundir empieza cuando La Organización Panamericana de la Salud (OPS), asegura y cita de forma equívoca la conceptualización que las Naciones Unidas tienen de esta: "…todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada."[162]

La razón por la que criticamos a esta institución es por confundir y equiparar indebidamente la violencia contra la mujer con la violencia de género. Es preocupante que se interprete el sexo y el género como equivalentes, manipulando la definición original establecida en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. Más problemático aún es el uso de citas entrecomilladas para respaldar estas afirmaciones, lo cual puede percibirse como una estrategia de control poco ética. Esta práctica revela un conflicto de intereses, más allá de una falta de compromiso con la comprensión y el tratamiento adecuado de este

---

[160] Vid. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). "Defunciones por Homicidio: Enero a Junio de 2023 (Preliminar)," Comunicado de prensa número 25/24, 23 de enero de 2024, disponible en: https: //www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/DH/DH2023_En-Jn.pdf, (fecha de consulta: 5 de mayo de 2024).

[161] Op. Cit. ONU MUJERES, “Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, 2023”,

[162] Cfr. Organización Panamericana de la Salud, “Violencia contra la mujer, 2023,” disponible en: *https: //www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer,* (fecha de consulta: 29 noviembre de 2023).

fenómeno, lo que subraya y justifica nuestro trabajo crítico aquí presentado, así como la rigurosa metodología de investigación abordada.

En cambio, el Convenio de Estambul ofrece un marco detallado y diferenciado que ayuda a clarificar la confusión entre *violencia contra la mujer* y *violencia contra la mujer por razones de género*. De acuerdo con el Artículo 3º inciso (a) del Convenio de Estambul, la *violencia contra la mujer* se define como:

> …una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada;

La definición de *violencia contra la mujer* proporcionada por el Convenio de Estambul encapsula una amplia gama de actos violentos que tienen como base la discriminación de género y se manifiestan en daños físicos, sexuales, psicológicos o económicos. Esta conceptualización es significativa porque reconoce la violencia contra la mujer como una violación de derechos humanos intrínsecamente ligada a la desigualdad estructural entre géneros. Al identificar la violencia como un fenómeno impulsado por la desigualdad de poder, la definición impulsa a los estados parte a comprometerse no sólo a responder a incidentes individuales de violencia, sino también a enfrentar las raíces culturales y sociales que perpetúan esta desigualdad. En esencia, esta definición subraya la necesidad de un enfoque holístico en políticas y leyes, que no sólo castigue a los perpetradores, sino que también eduque y transforme las normas sociales, promoviendo un cambio hacia la igualdad de género y el respeto mutuo en todas las esferas de la sociedad.

Por otro lado, el inciso (d) del mismo precepto legal define la *violencia contra la mujer por razones de género* como: "…toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada." Este enfoque es crucial porque destaca una forma de violencia que no sólo busca subyugar, sino eliminar a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esta especificidad es fundamental para abordar y prevenir el *feminicidio* como el tipo de violencia más radical contra la mujer, que se traduce en manifestaciones de odio misógino profundamente arraigados en algunas estructuras sociales y culturales. Al

diferenciar esta categoría, el Convenio enfatiza la necesidad de políticas y respuestas legales que abordan directamente el odio contra las mujeres, asegurando que estos actos no sólo sean penalizados severamente, sino que también se trabaje activamente para erradicar las actitudes y creencias que los sustentan.

Este marco legal internacional clarifica la confusión común de tratar los términos *violencia contra la mujer* y *violencia contra la mujer por razones de género* (violencia de género) como sinónimos, subrayando la necesidad de comprender la violencia contra la mujer como una categoría específica dentro del espectro más amplio y radical de la violencia de género. Tal distinción es fundamental para el desarrollo de políticas públicas y metodologías de investigación que respondan eficazmente a las múltiples facetas de la violencia basada en el género. Al diferenciar adecuadamente estas formas de violencia, se puede respetar la complejidad de sus manifestaciones y los impactos variados que tienen sobre las víctimas. La precisión en las definiciones y la rigurosidad en la metodología de investigación son cruciales para garantizar un enfoque ético y efectivo en la prevención y el combate de todas las formas de violencia contra la mujer. Este enfoque no sólo fortalece nuestras afirmaciones, sino que también cimentara nuestras propuestas finales.

2.2.2.1 Victimización masculina, enfoques históricos y contemporáneos en arte y sociedad

Ahondando más en nuestros hallazgos y adoptando un enfoque metodológico histórico, exploramos cómo la violencia de género ha incluido también la victimización de los hombres por parte de las mujeres. Históricamente, aunque la violencia de género ha sido un problema persistente y las mujeres han sido por excelencia sus principales víctimas, la violencia contra el hombre ha quedado eclipsada.

Un análisis visual detallado de la obra *Judith y Holofernes* ilustra vívidamente esta dinámica. A través de la observación directa en una visita virtual al museo de Florencia, Italia, documentamos los elementos formales para representar la violencia de género dirigida hacia los hombres. Este análisis revela que, lejos de ser

un fenómeno moderno, la representación de hombres como víctimas de violencia por mujeres transciende las barreras de tiempo y del mismo género, ofreciendo una perspectiva crítica sobre las interpretaciones tradicionales de género en el arte. En términos Popperianos, este análisis no sólo falsea la teoría en la que se sostiene la ideología de género feminista, sino que también subraya la necesidad de reestructurarla e identificar su vigente influencia.

En el fondo, esta representación desafía las nociones tradicionales de género que retratan a los hombres como agresores y a las mujeres como víctimas. En este caso, es el hombre quien aparece vulnerable y en peligro, mientras que la mujer es la que ejerce el poder y la violencia. En la imagen, Judith, una mujer, se presenta como la agresora, mientras que Holofernes, un hombre, es la víctima.



163

163 La pintura representa la historia bíblica de Judith y Holofernes. Según la narrativa, Judith era una viuda hebrea de gran belleza y piedad. Durante el asedio del ejército asirio a la ciudad de Betulia, Judith ideó un plan para salvar a su pueblo. Se arregló con sus mejores vestimentas y se dirigió al campamento enemigo, donde sedujo al general Holofernes. Ganándose su confianza, Judith fue invitada a una fiesta privada en su tienda, donde Holofernes bebió en exceso y se quedó dormido. Aprovechando el momento, Judith tomó la espada de Holofernes y le cortó la cabeza, llevándola de vuelta a Betulia como trofeo. La muerte de Holofernes causó desorden en el ejército asirio, lo que permitió a los israelitas contraatacar y ganar la batalla. Vid. Artemisia Gentileschi, Judith Slaying

Este ejemplo de origen teológico-bíblico ilustra que la violencia de género no es un fenómeno unidireccional, tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas de violencia y abuso. Sin embargo, los casos de hombres víctimas a menudo son pasados por alto o minimizados, debido a las normas de género que fomentan la percepción de que los hombres siempre deben ser los agresores. Desde una perspectiva científica, un estudio detallado realizado en Alemania indica que la violencia también impacta a los hombres desde una edad temprana hasta la adultez.[164] Este hallazgo contradice la noción errónea de que la violencia es inherente a la masculinidad y subraya la importancia de abordar las experiencias traumáticas que afectan a los hombres a lo largo de sus vidas.

En su estudio, Victoria A. Ferrer Pérez y Esperanza Bosch Fiol examinan exhaustivamente la violencia de género, destacando que no es exclusiva de las mujeres, y que los hombres también pueden ser víctimas.[165] Aunque las mujeres constituyen la mayoría de las víctimas visibles, las autoras subrayan la invisibilidad relativa de los hombres afectados por este tipo de violencia. Este fenómeno se atribuye a normas sociales que estigmatizan a los hombres que se identifican como víctimas y a una notable escasez de investigación sobre la violencia de género contra ellos.

En resumen, esta investigación demuestra que la violencia de género afecta profundamente a los dos géneros, aunque de manera desproporcionada. A partir de nuestro estudio, destacamos tres influencias críticas en la narrativa predominante de la ideología de género: (1) la confluencia lingüística y conceptual de la violencia de género con la violencia contra la mujer, (2) la tendencia a centrarse únicamente en la violencia contra el género mujer, lo que puede llevar a ignorar o minimizar las

---

Holofernes, 1620, Florencia Italia, Galería de los Uffizi, visita virtual disponible en: *https://www.uffizi.it/gli-uffizi.*

[164] Vid. Jungnitz, Ludger et al., "Violence Against Men: Men's experiences of interpersonal violence in Germany," Bonn, Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, 2004, p. 7, disponible en: *https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/information-material-issued-by-the-federal-government/violence-against-men-men-s-experiences-of-interpersonal-violence-in-germany-results-of-the-pilot-study-734014,* (fecha de consulta: 22 de noviembre de 2023).

[165] Vid. Ferrer-Pérez, V. A. y Bosch-Fiol, E., "El género en el análisis de la violencia contra las mujeres en la pareja: de la "ceguera" de género a la investigación específica del mismo," Anuario de Psicología Jurídica, 29, 2019, pp. 69-76, disponible en: *https: //doi.org/10.5093/apj2019a3,* (fecha de consulta: 26 de noviembre de 2023).

experiencias de su contraparte, y (3) la percepción equivocada de que la violencia de género y la violencia contra la mujer son impulsadas por las mismas causas. Estas influencias pueden resultar en políticas y apoyos insuficientes para quienes sufren violencia de género (hombres y mujeres).

2.2.2.2 Evolución y respuestas a la violencia de género

Así entonces, es fundamental ubicar a la violencia contra la mujer en el núcleo familiar no como un acto de odio aún, sino como uno que inicia controlando y dominando. No podemos permitir que la sociedad visualice este fenómeno como una especie de genocidio en donde se esté exterminando al género mujer por el simple hecho de serlo, ya sea sociocultural o biológicamente hablando. En verdad, la violencia contra la mujer en el núcleo familiar es un fenómeno arraigado y agudizado por factores socioculturales como el patriarcado y el machismo. Una práctica que busca controlar a las mujeres mas no acabar con ellas por el hecho de ser mujeres (violencia de género).

Por ello, afirmamos que la violencia contra la mujer en el núcleo familiar es el germen de un problema persistente en la sociedad mexicana y que sus fundamentos se solidifican en el contexto sociocultural y machista que prevalece en el país. Y que indudablemente se debe atender correctamente a efecto de prevenir la *violencia contra la mujer por razones de género*, un acto de odio por el simple hecho de ser mujer, es decir, reducir los elementos que dan forma al siguiente paso en su evolución: la misoginia.

Dejar claro la existencia de estas brechas en los conceptos y definiciones de género, revela de manera contundente el poder hegemónico ejercido por las élites de poder con el fin de politizar el fenómeno del feminicidio. Nicolás Márquez y Agustín Laje destacan cómo esta brecha se manifiesta en la imposición de un discurso reduccionista que busca imponer una visión particular sobre el género, relegando y desacreditando cualquier otra perspectiva que no se alinee con la narrativa establecida.[166] De este modo, se crea un panorama en el que sólo se

[166] Vid. Nicolás Márquez, Agustín Laje Arrigoni, *El libro negro de la nueva izquierda: Ideología de género o subversión cultural*, Buenos Aires, Grupo unión, 2016, p. 67.

validan ciertos enfoques y se excluyen o deslegitiman aquellos que no se ajustan a los intereses y agendas de quienes detentan el poder.

La politización del feminicidio no sólo distorsiona su verdadero significado, sino que también dificulta la identificación de la raíz del fenómeno. Este fenómeno de instrumentalización semántica debe ser cuidadosamente analizado para evitar que se transforme en un mecanismo de manipulación y control, el cual propicia a soluciones erróneas alejadas de evidencia científica. Particularmente preocupante es la promoción de soluciones político-criminales que, en lugar de abordar los factores subyacentes que originan el feminicidio, se concentran únicamente en las consecuencias una vez que el delito se ha consumado, reforzando así un enfoque punitivista.

Como hemos identificado, el odio es el combustible fundamental de la violencia de género, un elemento crucial para comprender la evolución de la violencia hacia las mujeres, que inicia con el control en el núcleo familiar y puede escalar hasta el feminicidio. Reconocer la complejidad y multifaceticidad de este fenómeno es esencial. En el próximo apartado, se profundizará en esta evolución, lo que permitirá evaluar críticamente las estrategias actuales para combatir esta violencia y proponer alternativas más efectivas.

2.3 Raíces y ramificaciones del patriarcado

El origen del patriarcado es un tema ampliamente debatido entre historiadores, antropólogos y sociólogos, sin un consenso claro sobre su inicio exacto. Sin embargo, es posible identificar varios factores que contribuyeron a su desarrollo. La génesis del patriarcado se puede rastrear hasta las estructuras de las primeras sociedades humanas. En estas sociedades, la división del trabajo por género asignaba roles distintos: caza y protección para los hombres, y recolección y cuidado infantil para las mujeres.[167] Esta distribución de roles no sólo reflejaba

[167] La película titulada: *10,000 AC* podría ser un ejemplo gráfico de nuestros argumentos. Esta película de aventuras se sitúa en una época prehistórica y muestra a los hombres como cazadores y guerreros. Aunque la película toma libertades creativas y no es históricamente precisa, ofrece una representación estilizada de cómo se podrían haber visto los roles de género en las primeras sociedades humanas, con los hombres cazando mamuts y las mujeres participando en actividades de recolección y cuidado comunitario. Vid. Roland Emmerich, *10,000 AC,* USA, 2008.

diferencias en las tareas laborales, sino que también implicaba una valoración diferencial de estas actividades. Con el tiempo, las tareas asociadas a los hombres adquirieron una valoración social superior, generando un desequilibrio de poder que no sólo reflejaba una división laboral, sino que también establecía una jerarquía de género, donde las contribuciones masculinas eran vistas como más cruciales para la supervivencia y el estatus dentro del grupo.

La transición de sociedades nómadas a asentamientos agrícolas sedentarios marcó un punto de inflexión en la consolidación del patriarcado. Alrededor del año 10.000 a.C., el surgimiento de la agricultura en el Creciente Fértil de Oriente Medio inició el período Neolítico, estableciendo la base para la expansión de la agricultura a nivel mundial.[168] Este cambio no sólo transformó la relación de las comunidades con la tierra, sino que también fomentó la acumulación de excedentes y el concepto de propiedad privada. En este contexto, los hombres se encontraron frecuentemente en la posición de controlar estos recursos, lo que les permitió consolidar su poder y establecer una estructura social más jerárquica y patriarcal. La propiedad privada se convirtió en un pilar de la organización social y económica, y con ella, la necesidad de sistemas de herencia claros y definidos que, en su mayoría, favorecían la línea masculina.

Así mismo, la instauración de sistemas de herencia patrilineal marcó un avance significativo en la consolidación del patriarcado. Estos sistemas, al asegurar que la propiedad y el poder se transmitieran exclusivamente de padres a hijos varones, no sólo perpetuaban la dominación masculina de generación en generación, sino que también reforzaban la autoridad y el control masculino dentro del núcleo familiar. Además, al mantener los recursos y el estatus confinados a las líneas masculinas, se excluía sistemáticamente a las mujeres no sólo de la propiedad, sino también del acceso al poder económico y a roles de liderazgo.[169]

---

[168] Vid. Saini, Ángela, *El patriarcado: Los orígenes de la dominación masculina,* España, Editorial Kairós, 2024, p. 5.

[169] Vid. Connell Raewyn, "Gender In World Perspective," trad. propia, USA, Polity press, 2009, p. 77, disponible en: *https://xyonline.net/sites/xyonline.net/files/2019-08/Connell%2C%20Gender%20in%20World%20Perspective%2C%202nd%20Edition%20%282009%29.pdf,* (fecha de consulta: 4 de diciembre de 2023), paráfrasis traducida: "I call this surplus the patriarchal dividend: the advantage to men as a group from maintaining an unequal gender order.

Este tipo de herencia, predominante en muchas culturas, ha tenido implicaciones duraderas en la estructura social, limitando las oportunidades económicas y sociales de las mujeres y perpetuando desigualdades de género que aún resuenan en la actualidad.

Sin embargo, a medida que las sociedades evolucionan y se tornan más complejas, las estructuras de poder y las leyes han comenzado a adaptarse, ofreciendo oportunidades para revisar los roles tradicionales de género. Aunque históricamente los hombres han tenido un acceso y control desproporcionados sobre aspectos como la propiedad, el liderazgo y los derechos legales, cada vez se reconoce más la necesidad de inclusión y equidad de género en estos ámbitos. Un ejemplo destacado en México es el aumento significativo de la representación femenina en el Congreso,[170] lo cual refleja un cambio cultural hacia la valoración de contribuciones de todos los géneros. Las élites gobernantes, que tradicionalmente valoraban a los hombres principalmente por su capacidad para el combate y a las mujeres por su rol reproductivo,[171] ahora comienzan a reconocer un espectro más amplio de contribuciones, promoviendo virtudes como la lealtad y el honor más allá de los confines de roles específicos. Esta evolución de las políticas y prácticas es fundamental para continuar fortaleciendo las estructuras sociales hacia una mayor igualdad y justicia.

Por su lado, las tradiciones y las religiones están experimentando una evolución para reflejar cambios socioculturales significativos, lo que impacta tanto en las estructuras sociales como en las personales, contribuyendo a la reducción de desigualdades históricas. El movimiento feminista, en particular, ha jugado un papel crucial en este proceso, desafiando y reformando la percepción y tratamiento de las mujeres dentro de estas esferas.[172] Ahora se reconoce cada vez más a las

---

Money income is not the only kind of benefit. Others are authority, respect, service, safety, housing, access to institutional power, emotional support, and control over one's own life."

[170] Vid. Archivo Histórico y Memoria Legislativa, "Boletín: Alcanzando la paridad de género: una lucha histórica", México, Senado de la República; LXIV Legislatura, 2023, disponible en: *https: //micrositios.senado.gob.mx/AHyML/files/Boletin_80_Alcanzando_la_paridad_de_genero_una_lucha_historica.pdf*, (fecha de consulta: 5 de mayo de 2024).

[171] Vid. Op. Cit. Saini, Angela p. 19.

[172] Vid. Lomas, Carlos, *¿El otoño del patriarcado? Luces y sombras de la igualdad entre mujeres y hombres,* España, Ediciones Península, 2008, pp. 15, 16.

mujeres no sólo en roles tradicionales, sino también como individuos con derechos plenos e independientes. Este cambio está fomentando la revisión de algunas prácticas patriarcales arraigadas y estimulando un diálogo crítico dentro de comunidades que tradicionalmente resistían tales transformaciones.

Desde una perspectiva sociológica-feminista, el patriarcado es un sistema social que otorga autoridad y privilegios predominantes a los hombres en detrimento de las mujeres. Gerda Lerner sostiene que este sistema ha sido una constante histórica que ha marcado profundamente la estructura de las sociedades modernas y sigue siendo influyente hoy en día.[173] Así entonces, según la ideología de género, la cual recordemos nace con Simone de Beauvoir, la supervivencia del patriarcado ha llevado a considerarlo una característica intrínseca de la condición humana, un *status quo* naturalizado e inmune al cambio.

No obstante, Lerner desafía la concepción del patriarcado como un fenómeno atemporal y estático, argumentando que su origen histórico implica que es dinámico y susceptible de transformación.[174] A través de su estudio de la antigua Mesopotamia, Lerner no sólo busca entender el origen del patriarcado, sino también fundamentar una teoría feminista de la historia que reconozca la capacidad de la sociedad para evolucionar más allá de sus construcciones patriarcales. Este análisis histórico es crucial para la ideología de género, ya que destaca la posibilidad de un cambio social y cultural hacia una sociedad más equitativa, donde el género no determine el poder y las oportunidades.

Por otro lado, desde una perspectiva crítica-filosófica, el patriarcado se entiende como un sistema jerárquico natural en el que la preeminencia de la masculinidad y su acceso privilegiado a oportunidades y recursos se justifica por diferencias biológicas inherentes. Según esta visión, Roxana Kreimer, nos muestra en su obra *El patriarcado no existe más,* argumentos basados en evidencia dura, que los hombres están biológicamente predispuestos a asumir roles de liderazgo y

[173] Vid. Gerna Lerner, “La Creación del Patriarcado,” USA, Critica, 1986, pp. 340, 341, disponible en: *http: //humadoc.mdp.edu.ar/sid/Feminismo/Lerner,%20Gerda%20-%20La%20creaci%23U00f3n%20del%20patriarcado.pdf*, (fecha de consulta: 4 de diciembre de 2023).
[174] Vid. Ibídem. p. 23.

gestión, lo cual es esencial para el mantenimiento y estabilidad de las estructuras sociales y familiares.[175] Esta distribución de roles no sólo refleja una adaptación natural a las capacidades distintas de cada género, sino que también cumple una función social crítica al proporcionar orden y dirección.[176] Así, el liderazgo masculino se considera no sólo adecuado, sino indispensable para el progreso y la cohesión de la sociedad, reafirmando la importancia del hombre heterosexual como pilar central de la estructura social.

En el contexto real actual, es decir, en el que Butler nos hace salir del binario, el sistema patriarcal va más allá de perpetuar desigualdades basadas en diferencias biológicas; sus repercusiones son tangibles y adversas, afectando la identidad de género, limitando derechos y restringiendo la participación en un amplio espectro de ámbitos sociales. Como apunta Connell, los teóricos de la Liberación Gay vincularon la opresión de los hombres gay con la opresión de las lesbianas y la opresión de las mujeres, sugiriendo un patrón de dominio y subordinación que afectaba a toda la estructura social.[177] Esta visión del patriarcado como un sistema integral facilita una comprensión más profunda de cómo las normas y expectativas de género están profundamente arraigadas en la cultura y se sustentan en una base biológica heteronormativa, lo que las convierte actualmente, en el desafío para alcanzar una sociedad más equitativa y justa para todos los géneros, tema que como ya lo hemos mencionado no ahondaremos, restringiéndonos a la esfera binaria-cisgénero tradicional.

En el contexto real actual, es decir, en el que Butler nos insta a superar el pensamiento binario, el sistema patriarcal trasciende la mera perpetuación de desigualdades basadas en diferencias biológicas; sus repercusiones son tangibles y adversas, afectando la identidad de género, limitando derechos y restringiendo la

---

[175] Vid. Kreimer, Roxana, *El patriarcado no existe más*, Buenos Aires, Galerna, 2020, pp. 76, 77.
[176] Vid. Ibídem, pp. 6, 7.
[177] Vid. Connell, R., and James W. Messerschmidt, "Hegemonic masculinity: rethinking the concept", *Gender and Society,* 2005,19: 829-59, en Connell Raewyn, "Gender In World Perspective," trad. propia, USA, Polity press, 2009, p. 77, disponible en: *https://xyonline.net/sites/xyonline.net/files/2019-08/Connell%2C%20Gender%20in%20World%20Perspective%2C%202nd%20Edition%20%282009%29.pdf,* (fecha de consulta: 4 de diciembre de 2023), paráfrasis traducida: "Gay Liberation theorists linked the oppression of gay men with the oppression of lesbians and the oppression of women generally."

participación en un amplio espectro de ámbitos sociales. Como apunta Connell, los teóricos de la Liberación Gay han establecido conexiones entre la opresión que enfrentan los hombres gay, las lesbianas y las mujeres, lo que ayuda a comprender las dinámicas de poder entre los hombres y a diferenciar entre formas de masculinidad dominantes y aquellas que son marginalizadas. Esta visión del patriarcado como un sistema integral facilita una comprensión más profunda de cómo las normas y expectativas de género están profundamente arraigadas en la cultura y se sustentan en una base biológica heteronormativa. Actualmente, esto representa un desafío significativo para alcanzar una sociedad más equitativa y justa para todos los géneros, una temática que, como ya hemos mencionado, no ahondaremos, restringiéndonos a la esfera binaria-cisgénero tradicional

Siguiendo el análisis previo sobre cómo el sistema patriarcal trasciende las diferencias biológicas para afectar las identidades y roles de género en múltiples esferas sociales, debemos considerar también su impacto en la estructura social en su totalidad. El patriarcado no sólo afecta a mujeres y personas no binarias, sino también a los hombres dentro del contexto del binarismo cisgénero. En nuestro análisis, identificamos dos factores bidireccionales: por un lado, contextos que perpetúan el sistema patriarcal; por otro, cómo este sistema también puede oprimir al género masculino. Este análisis nos lleva a reconocer la complejidad de la influencia del patriarcado, cuyos argumentos serán explorados y detallados a continuación.

(1) Las influencias religiosas y culturales han desempeñado un papel fundamental en la consolidación y perpetuación del patriarcado, y este último una autodefensa infranqueable incluso de quienes los amenazan o insultan, llámense hombres o mujeres. Un ejemplo paradigmático de esta dinámica es la crucifixión de Jesús, inmortalizada en la escultura renacentista *La Piedad* de Miguel Ángel Buonarroti. Esta obra maestra, esculpida entre 1498 y 1499 y venerada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, se alza como un monumento al ingenio del Renacimiento, capturando la admiración de generaciones.

A primera vista, *La Piedad* conmueve por la representación de la Virgen María sosteniendo el cuerpo sin vida de Jesús, una imagen que destila dolor y amor maternal.



178

Sin embargo, un análisis más profundo revela como la obra no sólo encapsula un episodio bíblico, sino que también refleja la estructura patriarcal y el prominente poder y control del género masculino, encarnados en la figura de Cristo. María, aunque sumida en el sufrimiento, es retratada en un rol de soporte, reforzando la noción de la mujer como cuidadora y proveedora de consuelo, incluso ante la muerte. Ella sostiene y eleva a Jesús, lo que simboliza una dinámica de poder en la que la mujer es el pedestal que exalta y honra al hombre. A pesar de que Jesús ocupa el centro de la composición, es María quien lo enmarca y lo presenta a los devotos, reflejando cómo históricamente el patriarcado ha relegado a las mujeres a un papel secundario de apoyo del género masculino.

178 Carrara, La piedad, 2006-2012, Ciudad de México, Museo Soumaya, [Réplica a partir del mármol de Michelangelo Buonarroti, esculpido entre 1498-1499, ubicada en la Santa Sede, Ciudad del Vaticano].

En cuanto a la opresión que ocasiona, la crucifixión de Jesús, con sus profundas connotaciones religiosas y espirituales, puede interpretarse como una metáfora de la represión que sufren aquellos hombres que desafían las convenciones patriarcales. El patriarcado tradicionalmente ha promovido una masculinidad asociada con la fortaleza, la contención emocional y la autoridad. Jesús desafió estos ideales mostrando compasión, expresando su dolor abiertamente y practicando actos de humildad y servicio. Estos gestos, considerados signos de debilidad bajo el prisma patriarcal, son en realidad expresiones de una fortaleza moral y espiritual que va más allá de los roles de género convencionales.

En última instancia, la crucifixión puede verse como una violencia extrema ejercida contra quien retó el orden vigente. El patriarcado, en su afán por preservar su hegemonía, frecuentemente recurre a la violencia para aplastar la disidencia. Jesús, al desafiar a las autoridades de su tiempo, se convirtió en una figura subversiva para el *status quo*. Su ejecución en la cruz envía un mensaje inequívoco sobre las graves consecuencias de oponerse al poder dominante del patriarcado.

(2) Como segundo factor bidireccional tenemos a las instituciones militares. Los conflictos y las guerras también han sido históricamente catalizadores en la consolidación del patriarcado. En estos escenarios, los hombres, frecuentemente en primera línea de combate, han tenido la oportunidad de adquirir estatus y poder a través del éxito militar.[179] Los ejércitos, como organizaciones especializadas en la administración de la violencia, son ejemplares de cómo el patriarcado institucionaliza las relaciones de poder y perpetúa la idea de que los hombres deben ser los principales ejecutores de la fuerza. La guerra y el militarismo tienden a glorificar atributos asociados con una masculinidad tradicional, como la fuerza física y la agresividad. Aquellos que encarnan estas cualidades en el campo de batalla a menudo son recompensados con grados militares (poder y prestigio), lo que a su vez reforzaba su posición dominante en la sociedad.[180]

[179] Vid. Juárez Parra, Gloria Roxana, *Para conocer a las fuerzas armadas de México*, México, Secretaría de Educación Pública, 2016, pp. 19-66.
[180] Vid. Ibídem, pp. 22, 23.

Esta perspectiva se cimenta en la creencia de que la masculinidad es sinónimo de combatividad y agresión, confinando a los hombres a un papel donde la expresión de emociones y la vulnerabilidad son estigmatizadas como signos de debilidad. La presión para conformarse a un ideal de masculinidad fuerte y dominante puede llevar a los hombres a ser forzados a la violencia, lo que a menudo resulta en consecuencias psicológicas adversas, como una mayor incidencia de trastornos relacionados con el estrés, depresión y una tasa desproporcionadamente alta de suicidio entre los hombres. En este contexto, las cualidades que tradicionalmente se valoran como indicativas de salud mental, como la agresividad y la independencia, suelen atribuirse al modelo de masculinidad, mientras que los atributos como la sumisión y la emocionalidad, que no se asocian generalmente con la salud mental, se vinculan a los roles femeninos.[181] Esta dicotomía puede exacerbar el estrés y la presión sobre los hombres para que se adhieran a un modelo restrictivo y potencialmente dañino de masculinidad.

El servicio militar en México, concebido como un mandato exclusivo para los ciudadanos varones, es un claro reflejo de una estructura patriarcal que impone una serie de expectativas y cargas sobre los hombres. La Ley del Servicio Militar Nacional (LSNM), vigente desde 1940, estipula en su Artículo 5º que todos los mexicanos varones al alcanzar la mayoría de edad están obligados a enlistarse en el Servicio Militar Nacional (SMN). Esta normativa, si bien se fundamenta en el principio de defensa de la soberanía nacional, perpetúa una división de roles de género que asigna a los hombres la responsabilidad exclusiva de la protección armada del país, basándose en una concepción tradicional de la masculinidad.

La imposición del servicio militar como un deber inherente al género masculino no sólo refuerza la idea de que la fuerza y el coraje son cualidades exclusivamente masculinas, sino que también impone un modelo restrictivo de masculinidad. Los hombres se ven forzados a cumplir con un ideal de *macho* protector y guerrero, lo que puede generar una presión psicológica significativa y contribuir a una identidad construida en torno a la capacidad de ejercer violencia y mostrar fortaleza física. Esta visión estrecha de la masculinidad ignora la diversidad

[181] Vid. Bosch Fiol, Esperanza, et. alt., *Historia de la misoginia*, España, Anthropos, 1999, p. 83.

de expresiones y experiencias de ser hombre y desvaloriza otras cualidades como la empatía, el cuidado y la cooperación.

La práctica del servicio militar obligatorio para hombres puede ser vista como una imposición que refuerza la idea de que el patriotismo y el sacrificio son inherentes a la masculinidad. En México, donde la figura del macho ha sido históricamente exaltada, el servicio militar actúa como un rito de paso que prueba la virilidad y el compromiso con la nación de muchos jóvenes. Esta normativa limita la libertad masculina al imponer un rol específico y obligatorio. Es crucial reconocer y confrontar las formas en que el patriarcado puede ser perjudicial para los hombres, desafiando así la errónea percepción de las teorías feministas, que sólo se centran en las desventajas que enfrentan las mujeres.

El feminismo, en su búsqueda fundamental por la equidad de género, debería entenderse como un esfuerzo que trasciende la simple liberación de las mujeres; abogando por la emancipación de ambos géneros de las restricciones impuestas por normas patriarcales. Si nuestro objetivo es alcanzar una sociedad verdaderamente igualitaria, el feminismo también debe desafiar las estructuras que confinan a los hombres a roles predeterminados, como aquellos impuestos por la LSMN. Por ende, sería coherente con los principios feministas exigir que la legislación incluya la obligatoriedad del servicio militar para las mujeres, subrayando que la equidad implica compartir tanto derechos como responsabilidades. Este enfoque no minimiza las luchas específicas de las mujeres, sino que resalta que la equidad de género debe ser un esfuerzo inclusivo que reconozca y aborde cómo las normas patriarcales impactan a ambos géneros.

Además, es crucial abordar críticas que sugieren que el feminismo, en ocasiones, podría enfocarse más en sus propios intereses que en lograr una equidad genuina. A pesar de que el feminismo ha sido esencial para destacar y combatir la opresión femenina, en algunos casos su discurso parece centrarse en una forma de igualdad condicionada a que los intereses femeninos no se vean comprometidos. Esta exclusividad omite la realidad de que el patriarcado también limita a los hombres, encasillándolos en roles rígidos y expectativas impuestas socialmente. Desde una perspectiva de equidad, también se podría argumentar que

las mujeres deberían participar en el servicio militar, desafiando las normas establecidas y promoviendo una reciprocidad real

Finalmente, aunque las estructuras de poder han beneficiado históricamente a los hombres, relegando a las mujeres a roles subordinados, criticar al patriarcado no debe interpretarse como una acusación hacia todos los hombres de ejercer opresión. Más bien, es un reconocimiento de cómo tradiciones, ideas y prejuicios han configurado sistemas sociales que afectan tanto a mujeres como a hombres. Comprender que el patriarcado impone roles de género estereotipados que restringen la expresión emocional y limitan las oportunidades de vida para ambos sexos es esencial. Por lo tanto, debe ser tratado como un problema estructural que afecta a toda la sociedad, no como un conflicto binario entre géneros.

2.3.1 El legado del machismo

Como segundo elemento de este apartado tenemos al machismo, y del cual es imperativo sumergirnos en un análisis profundo que abarque las distintas perspectivas en juego. Como lo hemos visto, la ideología de género propuesta por la visión feminista ha tratado de manera exhaustiva las raíces del machismo, definiéndolo como un conjunto complejo de actitudes, creencias y comportamientos que perpetúan la supremacía del género masculino, sembrando así las semillas de la discriminación y la desigualdad de género.

Sin embargo, para enriquecer nuestra comprensión del machismo, es crucial adoptar un enfoque dialéctico que incorpore diversas perspectivas. Limitarse exclusivamente a una visión feminista, aunque esclarecedora, podría resultar en una comprensión parcial de su complejidad. Por lo tanto, es esencial explorar otras posturas académicas y culturales que contribuyan a una visión más completa y matizada.

Adicionalmente, al examinar el machismo desde múltiples ángulos, no sólo ampliamos nuestra percepción de este fenómeno, sino que también fomentamos un diálogo equitativo que promueva la comprensión mutua. Este enfoque dialéctico es vital para tejer un tapiz conceptual que refleje adecuadamente la multiplicidad de voces y experiencias que convergen en torno a este tema. En última instancia, se trata de un esfuerzo por construir un marco conceptual que refleje la multiplicidad

de voces y experiencias que convergen en torno al machismo, contribuyendo así a una comprensión más holística y reflexiva de este fenómeno arraigado en nuestra sociedad, dicho lo anterior, manos a la obra.

Inicialmente, el concepto de *macho* emergió con connotaciones positivas de valentía y fuerza durante la Revolución Mexicana, asociándose con la figura del charro, símbolo de la mexicanidad y la masculinidad idealizada.[182] Este personaje, a través de la literatura y el cine, fue glorificado como un prototipo de virilidad y seducción. No obstante, esta imagen comenzó a ser cuestionada y reevaluada a medida que la sociedad evolucionaba.

En los años setenta, surgió una crítica robusta hacia esta figura. El *macho* fue reinterpretado como un símbolo de falocracia y agresividad sexual, dando lugar al término *machista*, que reflejaba una actitud de dominación y opresión.[183] Esta transformación destaca un cambio significativo en la percepción social, donde el machismo comenzó a ser visto como un problema cultural y social que refleja y perpetúa las desigualdades de género.

La evolución del término de *macho* a *machista* en México ilustra cómo los conceptos culturales pueden ser redimensionados en respuesta a los cambios sociales y políticos. Este análisis evidencia que el machismo no sólo es un reflejo de las actitudes individuales, sino también un producto de estructuras históricas y sociales más amplias. La estigmatización del *machismo* como un estereotipo negativo indica una creciente conciencia y crítica de las prácticas de género opresivas.

Desde una perspectiva biológica-científica, Goldberg argumenta enérgicamente que la dominancia masculina es un fenómeno universal arraigado en diferencias neuroendocrinológicas que predisponen a los hombres a exhibir comportamientos de dominancia y a buscar estatus y autoridad en diferentes contextos sociales. Según Goldberg, estas tendencias no son simplemente el resultado del aprendizaje o la socialización, sino que están profundamente incrustadas en diferencias fisiológicas y hormonales que se manifiestan

[182] Vid. Machillot, Didier, *Machos y machistas: Historia de los estereotipos mexicanos*, México, Grupo Planeta, 2017, p. 7.
[183] Vid. Ibídem, p. 8.

consistentemente a través de diversas culturas.[184]Este enfoque sugiere que cualquier intento de reformar estructuras sociales para equilibrar el poder entre géneros debe tener en cuenta estas predisposiciones biológicas inherentes. Tal perspectiva es crucial para entender por qué, a pesar de los avances en igualdad de género, los hombres continúan predominando en posiciones de poder y liderazgo en prácticamente todas las sociedades.[185]

Por el lado sociológico, Simone de Beauvoir sostiene que el machismo se manifiesta como una estructura arraigada en la cultura y la historia, perpetuando la subordinación de la mujer. En sus palabras: "La mujer se define y se diferencia con respecto al hombre y no él con respecto a ella; ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto: ella es lo Otro".[186] Esta afirmación pone de relieve la alteridad asignada a la mujer, mostrando cómo su identidad se construye en función de la masculina, lo que perpetúa una desigualdad intrínseca en la relación de género.

Además, la crítica de Beauvoir al patriarcado destaca cómo el machismo se extiende hasta la esfera sexual, tratando a la mujer como objeto de deseo y propiedad del hombre. Esta visión crítica se extiende incluso a los relatos fundacionales, como el de la creación de Eva en el Antiguo Testamento, que simbólicamente justifica la subordinación femenina al ser creada de la costilla de Adán, ilustrando una cosificación original que establece un precedente para la objetivación femenina.

Desde una perspectiva psicológica, Octavio Giraldo define el machismo de la siguiente manera: "El machismo es una característica cultural hispana y particularmente mexicana. Es decir, es un rasgo cultural que tiene el propósito de

---

[184] Vid. Goldberg Steven, "Why men rule: a theory of male dominance*,"* trad. propia, USA, Open court, 1993, p, 96, disponible en: *https://zlibrary.to/dl/why-men-rule-a-theory-of-male-dominance,* (fecha de consulta: 8 de diciembre de 2023), paráfrasis traducida: "Even if we ignore such obvious dissimilarities between testosterone and epinephrine as the fact that a fetal differentiation of CNS structures plays a crucial role in determining the effects of the former (but not the latter), and even if we ignore the fact that it is absurd to assume the malleability of the effects of one substance on the basis of another (would anyone argue that the effects of insulin are as varied as epinephrine?), we still find that to invoke suggestion as an explanation of male dominance is begging the question: why does every environment suggest male dominance?"

[185] Vid. Ídem.

[186] Op. Cit. Simone de Beauvoir, p. 19.

satisfacer una necesidad psicológica resultante del complejo de inferioridad de cada individuo del sexo masculino".[187] Esta conceptualización desvela el machismo no sólo como un conjunto de comportamientos ostentosos, sino como una respuesta a una crisis interna de autoimagen y estatus.

En este contexto, la postura de Octavio Giraldo se fundamenta en teorías psicológicas, destacando las de Adler, y en estudios antropológicos, como los de Lewis, para construir un argumento que explora las dinámicas subyacentes del machismo.[188] Esta metodología analítica y basada en la evidencia muestra que Giraldo pretende comprender y explicar el machismo más allá de posicionarse a favor o en contra de una ideología específica.

Según Giraldo, el machismo emerge de un contexto psicológico particular, donde las inseguridades masculinas, arraigadas desde la infancia a través de ciertas prácticas de crianza, germinan en comportamientos que buscan compensar un sentido de inferioridad.[189] Este complejo, una vez establecido, lleva a los hombres a adoptar actitudes y comportamientos que exageran las características de la masculinidad tradicional. Sexualmente, esto implica una demostración exacerbada de virilidad y potencia, mientras que socialmente se manifiesta en la necesidad de dominar y controlar tanto circunstancias como relaciones interpersonales.

Lo anterior puede servir como base para entender cómo el sesgo machista puede perpetuarse a través de las generaciones hacia las mismas niñas y desde el núcleo familiar. Al referirse el autor a la crianza desde la infancia, es crucial

---

[187] Giraldo, Octavio, *El machismo como fenómeno psicocultural*, Revista Latinoamericana de Psicología, Vol. núm.3, ISSN: 0120-0534, 1972, p. 307, disponible en: *http s://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80540302*, (fecha de consulta: 8 de diciembre de 2023).

[188] *Alfred Adler*, pionero de la psicología individual, acuñó el término *protesta masculina* para describir un mecanismo de compensación en el que los individuos, independientemente de su género, intentan superar sentimientos de inferioridad adoptando exageradamente roles y comportamientos asociados con la masculinidad hegemónica. Giraldo se refiere a este concepto para analizar cómo el machismo puede ser una manifestación de dicha protesta, donde la agresividad y la dominancia sexual se convierten en medios para afirmar la superioridad masculina frente a una subyacente sensación de inferioridad. *Oscar Lewis*, antropólogo reconocido por sus estudios sobre la *cultura de la pobreza*, proporciona un marco etnográfico para entender cómo las estructuras familiares y las condiciones socioeconómicas en México fomentan la continuidad del machismo. *Giraldo* se apoya en las observaciones de *Lewis* para argumentar que las prácticas de crianza, influenciadas por la pobreza y la desigualdad social, perpetúan actitudes y valores machistas, los cuales son transmitidos de generación en generación y se manifiestan en diversas esferas de la vida social y familiar mexicana.

[189] Vid. Op. Cit. Giraldo, Octavio, p. 303.

reconocer que estas prácticas también se aplican a las niñas. Es decir, desde una edad temprana, las niñas pueden ser adoctrinadas para adoptar y defender la ideología machista, perpetuando así un ciclo en el que las mujeres machistas crían a la siguiente generación con las mismas creencias.

En otras palabras, la perpetuación del sesgo machista a través de las generaciones puede entenderse mejor al considerar que no sólo se transmite a las niñas mediante instrucciones directas. Como señala *Allport*, "...existe también un tipo de aprendizaje que no transfiere al niño ideas y actitudes de modo directo, sino que – en lugar- de ello- crea una atmósfera en la cual él desarrolla el prejuicio como un estilo de vida".[190] En este ambiente, las niñas pueden internalizar y perpetuar la ideología machista de manera inconsciente, adoptando actitudes y creencias que han observado y experimentado en su entorno.

Este adoctrinamiento de género puede ser evidente en la educación que reciben las niñas respecto a su papel en la sociedad, sus habilidades y su valor relativo al del género masculino, inculcándoles, a menudo de manera inconsciente, la aceptación de una estructura de poder desigual. Un claro ejemplo de esta dinámica se refleja en la película *Radical*, donde *Lupe*, una niña que cursa el sexto año de primaria, asume responsabilidades adultas al lavar, planchar y darle de comer tanto a su papá como a sus hermanos menores, quienes además, a estos últimos los baña y viste.[191] Este comportamiento no sólo refuerza la idea de que el cuidado y la crianza son roles exclusivamente femeninos, sino que también puede limitar el desarrollo personal y educativo de las niñas al asignarle tareas que tradicionalmente no se esperan de los niños de su edad.

Es claro que, el machismo se erige como una doble entidad: por un lado, actúa como una coraza que encubre profundas vulnerabilidades, provocando efectos violentos y, por otro, como un mecanismo de adoctrinamiento. Los hombres, por el lado de la coraza, son enredados en este ciclo, perpetuando una cultura que

---

[190] Allport Gordon W., *La naturaleza del prejuicio*, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1971, p. 325, disponible en: *https: //www.academia.edu/24611235/Allport_Gordon_La_Naturaleza_Del_Prejuicio*, [Consultado el 12 de diciembre de 2023].
[191] Vid. Zalla Christopher, Radical, México, 2023.

ensalza la fuerza y dominación, a menudo sacrificando la conexión emocional. Las mujeres por el otro lado, se convierten estratégicamente en un arma que, desde las sombras de la conciencia, forja su propia defensa. La perspectiva de Giraldo nos insta a contemplar el machismo no sólo como una problemática social, sino también como un reflejo de una lucha interna y un adoctrinamiento más profundo que enfrentan tanto hombres como mujeres en el núcleo familiar, especialmente en el contexto de la cultura hispana y, de manera particular, en los hogares mexicanos; lo que pudiera dar como efecto en su vida adulta a un posible trastorno de la personalidad, es decir el producto final radical del patriarcado ; la misoginia, nuestro tercer y último elemento a desarrollar en este apartado y que como argumentamos en el anterior subcapítulo es el combustible de la violencia de género (odio).

2.3.2 Misoginia, intersección entre trastornos de personalidad y adoctrinamiento machista

Desde una perspectiva clínica, es importante destacar que el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), publicado por la American Psychiatric Association, no clasifica específicamente la misoginia como un trastorno de personalidad. Sin embargo, los comportamientos misóginos podrían observarse en individuos con ciertos trastornos, como el trastorno antisocial de la personalidad.[192] Este trastorno se caracteriza por un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás. Aunque algunos comportamientos misóginos pueden manifestarse en este contexto, es crucial evitar generalizaciones y reconocer que la misoginia es un padecimiento aislado. El estudio de las interacciones entre trastornos de la personalidad y comportamientos misóginos requiere un enfoque cuidadoso y basado en evidencia, evitando la patologización directa de las actitudes culturales y sociales.

Así entonces, es esencial destacar que, en sintonía con las discusiones sobre el machismo, la misoginia puede entenderse como un resultado cognitivo del

[192] Vid. Asociación Americana de Psiquiatría, *Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5*, Arlington,
VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 2013, p. 359, disponible en: *https: //www.eafit.edu.co/ninos/reddelaspreguntas/Documents/dsm-v-guia-consulta-manual-diagnostico-estadistico-trastornos-mentales.pdf*, (fecha de consulta: 12 de diciembre de 2023).

adoctrinamiento idealizado machista que tiene origen en el núcleo familiar patriarcal. Este adoctrinamiento no sólo idealiza la superioridad masculina, sino que además establece roles de género rígidos que pueden convertir tanto a hombres como a mujeres en perpetradores de actitudes misóginas. Es crucial diferenciar cómo estos roles afectan a cada género, dado que la socialización en un contexto patriarcal impone frecuentemente expectativas y comportamientos específicos que refuerzan estas dinámicas.

Por lo tanto, la misoginia, entendida como un odio persistente, desvalorización y falta de respeto hacia las mujeres, se manifiesta a través de actitudes violentas, abusivas y discriminatorias, perpetradas tanto por hombres como por mujeres. Esta atrevida afirmación enfatiza la necesidad de abordar tanto los aspectos binarios como los sistémicos de la misoginia, considerando con base en el DSM-5, que estos comportamientos pueden estar arraigados en prejuicios de género más amplios que afectan negativamente la salud mental y emocional de ambos géneros.

Además, cuando estos comportamientos misóginos son persistentes, rígidos y des adaptativos, y provocan un deterioro significativo o angustia, reflejan un prejuicio de odio profundamente arraigado. Ejemplos extremos de estos comportamientos incluyen la objetivación sexual de las mujeres y, en casos severos, la privación de la vida. La persistencia de estos comportamientos sugiere una internalización idealizada del machismo, un sistema de creencias que promueve el asedio y la aniquilación del género mujer.

Para respaldar nuestra primera afirmación, que clasifica la misoginia no sólo como un prejuicio, sino como un fenómeno social complejo, recurrimos a la psicología social y aportes de teóricos como Gordon Allport. Este autor nos ofrece un marco para entender la misoginia más allá de un simple prejuicio individual y unidimensional de género. Según Allport, "Ningún niño nace con prejuicios; estos son adquiridos en respuesta a necesidades personales dentro de una estructura social determinada".[193] Así, los prejuicios de género, aprendidos desde la infancia,

[193] Ibídem, pp. 353,354.

están intrínsecamente vinculados con las estructuras sociales y culturales, perpetuándose a través de la socialización y las prácticas institucionales.

Este prejuicio sistémico se manifiesta de manera evidente en la primera institución social: la familia, ya que es en este entorno donde se comienza con el desarrollo de la personalidad. La misoginia, por lo tanto, no es simplemente un prejuicio unidimensional exclusivo del género masculino, ni tampoco es un fenómeno individual, sino más bien un trastorno antisocial de la personalidad binario, que se aprende y no es innato.

Para fundamentar nuestra segunda afirmación, y en donde la misoginia es un odio persistente, una desvalorización y/o falta de respeto hacia las mujeres, y que se manifiesta a través de actitudes violentas, abusivas y/o discriminatorias por las propias mujeres, tenemos el claro ejemplo de *Juana Barraza Samperio*, infamantemente conocida como *la mata viejitas*. La historia de *Juana Barraza*, es un caso que sacudió los cimientos de la sociedad mexicana y desafió las nociones convencionales de género y violencia. Su serie de crímenes, dirigidos hacia mujeres de avanzada edad, plantea una paradoja inquietante: una mujer que ejerce violencia extrema contra su propio género.[194] Un ejemplo de cómo la misoginia puede estar profundamente arraigada en las mujeres, un odio adoctrinado desde un desarrollo infantil marcado por la idealización del machismo y el patriarcado.

Desde una perspectiva estratégica integral, es imperativo llevar a cabo una transformación de las normas culturales y las creencias arraigadas que sostienen la desigualdad de género, y esto comienza por la segunda institución de educación en la infancia: la escuela. La educación no sólo ilumina, sino que también empodera, alentando la conciencia crítica y la capacidad de cuestionar y reformar las estructuras existentes. Un claro ejemplo de esto se refleja en la película *Radical*, donde, durante una jornada de clases, el profesor *Sergio Juárez*, quien emplea una metodología de enseñanza no tradicional con sus alumnos de sexto año de primaria, se encuentra meditando junto con ellos, una técnica de relajación que implementa

[194] José Carlos Cueto, *La mataviejitas: "Lo que descubrí cuando investigué el caso de la asesina que recibió la condena más larga de la historia de México"*, BBC News [En línea], disponible en: *https://www.bbc.com/mundo/noticias-56980069,* (fecha de consulta: 12 de diciembre de 2023).

el profesor después de haber sometido a juicio filosófico el tema del aborto.[195] Con esto, evidenciamos cómo un enfoque educativo que fomenta el debate y la reflexión puede contribuir significativamente a la formación de mentes críticas y al cuestionamiento de conceptos arraigados que perpetúan la desigualdad de género.

No obstante, como se detallará en las propuestas presentadas, el derecho a la educación, vinculado al interés superior de la niñez y consagrado como derecho humano en la CPEUM, no sólo se enfoca en el contenido educativo, sino también en la forma en que este se implementa. Las escuelas, concebidas como el primer nivel preventivo y una función primordial del Estado, son esenciales en este proceso. Las propuestas se centrarán en la construcción de un ESDD óptimo, un objetivo que, como se demostrará en el siguiente capítulo, aún no se ha alcanzado. Es fundamental destacar que el derecho humano a la educación y el interés superior de la niñez deben ejercerse como funciones estatales con una infraestructura óptima y homologada en todo el territorio mexicano, antes de querer abordar el contenido de los programas educativos vigentes.

En este orden de ideas, la implementación de estrategias de prevención primaria que aborden las causas subyacentes de la misoginia, (machismo idealizado), son esenciales para una prevención efectiva. Como *Allport* sugiere, "...la educación general ayuda realmente en grado apreciable a elevar el nivel de tolerancia, y que el beneficio pasa aparentemente a la próxima generación".[196] Este principio es crucial en la erradicación de la misoginia, ya que la educación que podemos encontrar en la escuela no sólo modifica las perspectivas bidimensionales, sino que también tiene el potencial de influir positivamente en las actitudes de las generaciones futuras.

Como fundamento de nuestra tercera afirmación, analizamos los estudios empíricos de Swim, Hyers, Cohen y Ferguson, que exploran el sexismo cotidiano. Definido como manifestaciones menores y normalizadas de misoginia, este tipo de sexismo erosiona gradualmente el bienestar psicológico de las mujeres y sostiene

[195] Vid. Op. Cit. Zalla Christopher.
[196] Ibídem, p. 468.

una cultura de desigualdad y violencia.[197] Estos incidentes, que a menudo pasan desapercibidos, pueden intensificarse, culminando en violencia extrema, como la privación de la vida de una mujer por razones de género.[198] Esta forma de sexismo, que frecuentemente pasa desapercibida y es socialmente aceptada, se alinea peligrosamente con el delito de feminicidio, este último tipificado en Artículo 281 del Código Penal del Estado de México (CPEM). La tolerancia y el refuerzo social y cultural de la misoginia cotidiana establecen las bases para una escalada de violencia que puede culminar en la expresión más extrema de la violencia contra la mujer por razones de género: el feminicidio.

La investigación de Swim, Hyers, Cohen y Ferguson revela que las mujeres experimentan más incidentes sexistas que los hombres, lo que sugiere un impacto desproporcionadamente mayor en ellas debido a la frecuencia de estas experiencias.[199] Los incidentes reportados incluyen prejuicios, estereotipos de roles de género, comentarios despectivos y objetivación sexual, los cuales no sólo reflejan actitudes sexistas, sino que también indican una misoginia subyacente que perpetúa la visión de las mujeres como inferiores o como objetos.[200]

---

[197] Vid. Swim, Hyers, Cohen y Ferguson, "Everyday Sexism: Evidence for Its Incidence, Nature, and Psychological Impact From Three Daily Diary Studies," trad. propia, USA, Journal of Social Issues, Vol. 57, No. 1, 2001, p. 31, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/232570669_Experiencing_Everyday_Prejudice_and_Discrimination, (fecha de consulta: 9 de diciembre de 2023), paráfrasis traducida: "Women experienced about one to two impactful sexist incidents per week, consisting of traditional gender role stereotypes and prejudice, demeaning and degrading comments and behaviors, and sexual objectification."

[198] Para una comprensión más profunda de las implicaciones legales relacionadas con los actos extremos mencionados, se recomienda consultar el Artículo 281 del Código Penal del Estado de México. Este Artículo tipifica y establece las sanciones para el delito de feminicidio, reconociendo las diversas formas en que puede manifestarse la violencia contra la mujer por razones de género y sus consecuencias más graves en la sociedad. Este precepto legal es crucial para entender las responsabilidades y las medidas punitivas aplicables en contextos de discriminación y violencia de género. Vid. México, Código Penal del Estado de México, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de México, el 20 de marzo de 2000, última reforma publicada el 5 de abril de 2024, Artículo 281, disponible en: https://appsma.edomex.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2024/05/codvig006.pdf (fecha de consulta: 19 de agosto de 2024).

[199] Vid. Op. Cit. Swim, Hyers, Cohen y Ferguson, "Everyday Sexism: Evidence for Its Incidence, Nature, and Psychological Impact From Three Daily Diary Studies," p. 31, paráfrasis traducida: "Women experienced about one to two impactful sexist incidents per week, consisting of traditional gender role stereotypes and prejudice, demeaning and degrading comments and behaviors, and sexual objectification."

[200] Aunque este estudio y nuestra tesis se centra en el sexismo dirigido hacia las mujeres, es importante reconocer que los hombres también pueden ser objeto de actitudes y comportamientos sexistas. Este fenómeno, conocido como misandria, implica prejuicios y estereotipos negativos específicamente hacia los hombres. Al igual que la misoginia, la misandria puede manifestarse en

Además, se observó que el sexismo cotidiano tiene efectos psicológicos negativos, incluyendo un aumento en la ira y la depresión y una disminución en la autoestima.[201] Estos hallazgos son significativos, pues demuestran cómo la misoginia, incluso en sus manifestaciones más sutiles, puede deteriorar la salud mental y la calidad de vida de las mujeres.

2.4 Reflexiones críticas finales

En conclusión, en este segundo capítulo se ha alcanzado nuestro segundo objetivo específico: Definir e identificar los tres niveles preventivos, así como la diferencia entre violencia contra la mujer en el núcleo familiar y la violencia de género, con las siguientes reflexiones críticas finales:

En conclusión, este segundo capítulo ha destacado la complejidad de las dinámicas de poder que sostienen el patriarcado y su manifestación en las estructuras sociales y legales contemporáneas. Aunque las teorías feministas han sido fundamentales para visibilizar las desigualdades de género, su aplicación en la política criminal no está exenta de riesgos. Particularmente, la interpretación o uso indebido de estas teorías puede derivar en consecuencias contraproducentes. Como señala Carme Jiménez Huertas, una estrategia perversa desde las altas esferas de poder ha distorsionado conceptos clave,[202] como la prevención, dando lugar a políticas que, lejos de mitigar la violencia contra las mujeres, han contribuido a su agravamiento.

Es crucial reconocer que la ideología de género feminista, aunque ha jugado un papel importante en denunciar la opresión patriarcal, presenta limitaciones al enfocarse exclusivamente en la violencia ejercida por los hombres hacia las

---

diversas formas, incluyendo estereotipos de género, expectativas sociales restrictivas y discriminación. La misandria, aunque menos estudiada y discutida en la literatura académica y social, refleja una problemática simétrica que sugiere la necesidad de una investigación más amplia sobre cómo los prejuicios de género afectan a todas las personas, independientemente de su sexo. Este enfoque más inclusivo podría proporcionar una comprensión más completa de las dinámicas de género y contribuir a estrategias más efectivas para combatir el sexismo en todas sus formas

[201] Vid. Op, Cit,. Swim, Hyers, Cohen y Ferguson, paráfrasis traducida: “These incidents affected women’s psychological well-being by decreasing their comfort, increasing their feelings of anger and depression, and decreasing their state self-esteem.”

[202] Vid. Op. Cit. Vid. Educación Humana Coaching Integral, “Desmontando la agenda oculta desde el lenguaje, con Carmen Jiménez Huertas, Carlos Senra & Luis Palacios.,” min 37:20.

mujeres. Este enfoque simplista ignora la complejidad del fenómeno, como lo demuestran casos como el de Juana Barraza, una mujer que ejerció violencia contra otras mujeres. Este ejemplo evidencia que la violencia contra la mujer por razones de género no se reduce únicamente a un ejercicio de poder masculino.

Además, al someter la segunda hipótesis feminista sobre el patriarcado a un examen de falsabilidad, se identifican ejemplos históricos y legales que contradicen esta visión reduccionista. Un ejemplo es la crucifixión de Jesucristo, quien fue víctima de un sistema patriarcal opresor, lo que demuestra que el patriarcado no oprime exclusivamente a las mujeres. Asimismo, la Ley del Servicio Militar Nacional (LSMN), que obliga a los hombres a cumplir con el servicio militar, evidencia que este sistema también impone cargas sobre los hombres.

Por tanto, una vez falseada la teoría feminista, es fundamental que las intervenciones estatales en el ámbito tanto de la violencia contra la mujer como de la violencia de género no se limiten únicamente a sancionarlas, sino que también aborden las estructuras que perpetúan la desigualdad. Sólo un enfoque transformador permitirá avanzar hacia una política criminal que no sólo prevenga la violencia, sino que también promueva una cultura de equidad y respeto a los derechos humanos.

Por lo demás, el análisis del patriarcado como una construcción social dinámica subraya la necesidad de un enfoque integral en la política criminal, que abarque los tres niveles preventivos. El Estado debe implementar políticas que no sólo sancionen la violencia en sus manifestaciones más visibles, sino que también prevengan su ocurrencia a través de la desarticulación de las estructuras que perpetúan la desigualdad, tanto en el ámbito social como en el legal. Al mismo tiempo, es fundamental fortalecer los mecanismos de intervención temprana y rehabilitación, asegurando que se aborden las causas profundas de la violencia contra la mujer por razones de género. Someter las teorías feministas a un escrutinio crítico y basado en la falsabilidad permitirá desarrollar estrategias preventivas más efectivas y dirigidas a cada uno de estos niveles. En definitiva, una política criminal transformadora debe trascender la mera coacción ante el delito y

centrarse en la construcción de un sistema que garantice los derechos humanos, los derechos fundamentales, y las garantías individuales.

Para terminar y como puente hacia el siguiente capítulo, no está de más decir que el marco teórico abordado tanto en el primer capítulo como en este segundo, ha proporcionado una base sólida para comprender y criticar las dinámicas del patriarcado y las teorías feministas en el contexto de la política criminal mexicana. Estas herramientas teóricas serán fundamentales para evaluar críticamente los hallazgos que se presentarán en el tercer capítulo, el cual se centrará en la investigación de campo. Este análisis empírico permitirá contrastar las estrategias implementadas por el Estado mexicano en la prevención de la violencia contra la mujer, utilizando el marco teórico previamente desarrollado para identificar tanto sus logros como sus deficiencias. De esta manera, se establecerá una continuidad lógica que integrará los aspectos teóricos y prácticos de la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar.

Capítulo III: La Respuesta del Estado para Prevenir la Violencia Contra la Mujer en el Núcleo Familiar

El progreso de una nación puede
medirse por la forma en que trata
a sus mujeres y niños.
John F. Kennedy

Este capítulo evalúa de forma crítica las estrategias implementadas por el Estado méxicano para prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. A través de un análisis detallado y empírico, se exploran los tres niveles de prevención: primario, secundario y terciario. Este análisis se basa en entrevistas a profundidad, datos empíricos y un sólido marco teórico que incluye la teoría de sistemas complejos adaptables, la ética kantiana, los paradigmas de Thomas Kuhn, la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner, así como el propio desarrollo y aplicación de nuestra teoría del espejo. La combinación de estos elementos permitirá una comprensión integral de las políticas actuales, sus logros y deficiencias, y ofrecerá recomendaciones para mejorar la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar.

El primer nivel preventivo se centra en la educación y el papel crucial que desempeñan las instituciones educativas y los docentes en la formación de valores y la promoción de un entorno libre de violencia. A través de entrevistas con miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y docentes de diversos niveles educativos, se analiza cómo las políticas educativas actuales impactan la prevención de la violencia contra la mujer. En el primer subcapítulo se explora la lucha política y educativa en la defensa del Artículo 3º de la CPEUM, el interés superior de la niñez en la educación primaria, y la efectividad de los programas preventivos en las escuelas públicas.

El segundo nivel preventivo se centra en la respuesta operativa y reactiva de las fuerzas policiales, así como en las estrategias implementadas para proteger a las mujeres víctimas de violencia familiar y de género. En este subcapítulo, se examina la evolución y las funciones de la policía en el Estado de México, con especial atención a las estrategias de proximidad social y programas específicos, como el Operativo Violeta y los Puntos Violetas en Cuautitlán Izcalli. Se realiza una

evaluación crítica de la efectividad de estas iniciativas, identificando las barreras institucionales que las víctimas enfrentan al buscar protección y justicia. Además, se presenta una evaluación crítica basada en los datos obtenidos de la entrevista con la coordinadora de políticas públicas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género (FEADVVG), proporcionando un panorama actualizado sobre el estado de esta estrategia criminológica del Estado de México.

El tercer nivel preventivo se centra en la reinserción social y la efectividad del sistema penitenciario en prevenir la reincidencia tanto de la violencia familiar, como la violencia contra la mujer por razones de género. Utilizando datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), así como los datos obtenidos en entrevistas hechas tanto a personal penitenciario como a personas privadas de la libertad, se exploran los desafíos del sistema penitenciario y las deficiencias en los programas de rehabilitación. Este subcapítulo evalúa la realidad del sistema penitenciario, la corrupción y las prácticas abusivas que limitan la reintegración social efectiva de los reclusos, proponiendo áreas de mejora para fortalecer la prevención terciaria de la violencia contra la mujer.

En síntesis, este capítulo ofrece una evaluación crítica basada en el marco teórico desarrollado en los capítulos previos, centrándose en los hallazgos empíricos relativos a los tres niveles preventivos que sustentan la política criminológica mexicana. A lo largo del capítulo, se presentan reflexiones críticas que integran dichos hallazgos, acompañadas de recomendaciones dirigidas a optimizar las políticas criminológicas preventivas. Este análisis integral tiene como objetivo contribuir a la reducción de los índices de violencia contra la mujer, promoviendo un enfoque multidisciplinario y colaborativo que involucre a todos los actores relevantes en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

3.1 El estatus del primer nivel preventivo de la PCPVCMNF

En este subcapítulo se llevará a cabo un análisis crítico y empírico sobre la implementación de políticas educativas y su impacto en la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, con un enfoque especial en el Estado de México. Utilizando una metodología cualitativa basada en entrevistas a profundidad

con docentes y miembros del SNTE, se examinarán las dinámicas políticas, sociales y educativas que influyen en la efectividad de estas políticas. Este enfoque permite entender de manera integral cómo las políticas educativas y las acciones del SNTE afectan la realidad cotidiana de los estudiantes y docentes, así como su contribución a la prevención de la violencia.

Desde una perspectiva científica y basándonos en los datos obtenidos en cuatro entrevistas a docentes, se puede constatar que la prevención primaria en la lucha contra la violencia y la criminalidad recibe escasa atención y recursos. La implementación óptima de esta prevención integral constituye el verdadero fundamento de un ESDD. Es crucial que los derechos fundamentales contemplados en esta prevención se conviertan en una prioridad, tal como lo estipula la Constitución. Sin embargo, las instituciones encargadas de garantizar esta prevención integral se desempeñan de manera precaria, con una evidente falta de calidad, eficacia e infraestructura. Esta deficiencia se evidencia empíricamente al observar el actual estado de este nivel preventivo.

Este análisis revela que, para fortalecer la prevención de la violencia, es necesario un compromiso real por parte del Estado y las instituciones educativas. Se requiere una inversión sustancial en infraestructura, recursos, formación y apoyo tanto a docentes como a estudiantes. Además, es fundamental que el SNTE juegue un papel activo y comprometido en la promoción de estas políticas, asegurando que se implementen de manera efectiva y que realmente contribuyan a la erradicación de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar.

3.1.1 Lucha política y educativa en la defensa del Artículo 3º de la CPEUM

En México, el derecho a la educación y el interés superior de niños, niñas y adolescentes es una lucha política constante. El SNTE es una organización nacional que, entre sus diversos objetivos, busca que el Gobierno acate lo dispuesto por el Artículo 3º de la CPEUM. Este análisis se desarrolla a partir de nuestra participación en una junta política magisterial organizada por el SNTE el 16 de marzo de 2024, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a la Mtra. Verónica Espinoza Reyes, titular de la Secretaría de Vivienda dentro de la sección 36 del Estado de México.

La reunión a la que fuimos invitados tuvo como objetivo convencernos, mediante argumentos socio-educativos, de votar en las próximas elecciones por el partido político que actualmente ostenta el poder. Esta reunión se llevó a cabo en un predio privado en el municipio de Texcoco, Estado de México. La Mtra. Verónica Espinoza Reyes, acompañada de su equipo de trabajo, nos dio la bienvenida y agradeció nuestro interés y el tiempo dedicado a asistir, considerando el esfuerzo que implicaba hacerlo un sábado por la mañana. El discurso comenzó con el reconocimiento de la labor de las autoridades, en particular de la Mtra. Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México, así como del trabajo a nivel federal del Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en la lucha por el derecho a la educación, evidenciada por la gestión de becas académicas para los estudiantes del Estado de México.

Seguidamente, la Mtra. Verónica nos expuso los esfuerzos que se han hecho por gestionar los recursos que las diversas escuelas de nivel básico en el Estado de México necesitan y de la que el Gobierno satisfactoriamente ha respondido. En este sentido la Mtra. enfatizó en el trabajo y compromiso que los docentes tienen al interior de las instituciones educativas, pues identificar los elementos y recursos que estas pudieran tener es una competencia que sólo los profesores pueden demandar al gobierno, colocándolos como pieza clave del progreso al interior de las escuelas.

Finalmente, y también citando a los programas que las personas de la tercera edad reciben en esta cuarta transformación, la Mtra. Verónica, a través de un discurso retórico social dejó claro que el gobierno actual es uno que sí se preocupa por los ciudadanos, un gobierno que a diferencia de los otros pasados este si ha trabajado por el interés del bienestar social. Argumentos que utilizó para invitarnos a apoyar a la Dr. Claudia Sheinbaum Pardo en las próximas elecciones a nivel federal, candidata a la presidencia por parte del partido político *Movimiento Revolucionario Nacional* (MORENA), pues está dentro de sus propuestas ha prometido apoyar y mejorar las condiciones laborales de los profesores del Estado de México.

Al término del evento, aprovechamos la oportunidad para saludar a la Mtra. Verónica Espinoza Reyes y preguntarle acerca del derecho humano a la educación

y el interés superior de la niñez. Para la Mtra. Verónica, el profesor, además de impartir clases, tiene la función de garantizar que el alumnado tenga cubiertos sus derechos humanos, como el acceso al agua, la electricidad y un entorno socio-familiar tranquilo y armonioso.[203] Efectivamente, y basándonos en el primer nivel de prevención expuesto en el capítulo II, ella subraya que el papel del docente va más allá de la educación académica, actuando también como modelo a seguir y agente de cambio social. Los maestros y maestras están capacitados para identificar signos de violencia y fomentar un ambiente de respeto y equidad en el aula. Este enfoque integral incluye asegurar el acceso a servicios de salud, un entorno seguro, alimentación adecuada, actividades deportivas y culturales, y transporte escolar. La educación pública gratuita, laica y obligatoria permite a los educadores desempeñar un papel crucial en el desarrollo integral de sus alumnos, preocupándose también por su bienestar, que comienza en el contexto familiar.

Ante lo expuesto, la Mtra. Verónica Espinoza Reyes asegura que el profesor busca mejorar las condiciones que los alumnos experimentan en su núcleo familiar, adaptándose y mejorando las condiciones en el salón de clases.[204] Este enfoque, alineado con el Artículo 3º de la CPEUM y abordado en el capítulo II, no sólo mejora la calidad de vida de los estudiantes, sino que también sienta las bases para una sociedad más justa y equitativa. Al garantizar el desarrollo intelectual, emocional y social de los estudiantes sin discriminación ni exclusión, se reduce la incidencia de violencia a largo plazo. Para nuestra entrevistada al realizar esta doble función, el profesor del Estado de México hace cumplir el interés superior de la niñez previsto en el Artículo 3º de la CPEUM.[205]

Por su parte, la Mtra. Verónica propone una política pública que aborde las condiciones de la educación en los ámbitos social, económico y familiar.[206] Cada uno de estos ámbitos tiene un impacto significativo en los alumnos. En otras

[203] Vid. Espinoza Reyes, Verónica, “Lucha política y educativa en la defensa del Artículo 3º de la CPEUM,” [entrevista], México, 2024, 1:50 min., disponible en: https://drive.google.com/file/d/1JPwagQEUpmbnjhg34UTIFSGgl0roWrG0/view?usp=drive_link (fecha de consulta: 20 de mayo de 2024).
[204] Vid. Ibídem, 2:33 min.
[205] Vid, Ibídem, 2:48 min.
[206] Vid. Ibídem, 3:14 min.

palabras, su propuesta incluye la mejora de las escuelas, tanto en infraestructura como en programas educativos. Estos argumentos fortalecen nuestro enfoque integral y holístico expuesto en el primer capítulo, ya que un entorno educativo adecuado y recursos suficientes son esenciales para garantizar una vida libre de violencia y desigualdad. Además, el compromiso ético y profesional necesario para implementar estas políticas debe fortalecer los programas educativos, promoviendo una educación integral que incluya valores cívicos y culturales, fomentando el respeto a los derechos humanos y la legalidad. Para la Mtra. Verónica, desde su trinchera política se lucha por los recursos de las escuelas, reflejando la necesidad de un compromiso multidisciplinario y ético en la formulación de políticas efectivas.[207]

3.1.1.1 El rol del SNTE en la PCPVCMNF

En este apartado, se evaluarán críticamente las funciones y perspectivas compartidas por una profesora militante del SNTE durante una entrevista realizada el 15 de junio de 2024, integrando nuestro marco teórico desarrollado. La profesora desempeña una doble función (docente y militante), por lo que hemos dividido la entrevista en dos vertientes. La parte como docente se desarrolla en el apartado: *3.1.3 Análisis empírico del primer nivel preventivo de violencia en secundarias*. La influencia del sindicato en las políticas educativas y su impacto en la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar serán analizados desde las teorías de Michel Foucault, Norberto Bobbio, Antonio García-Pablos de Molina, bell hooks, Lawrence Cohen y Marcus Felson.

Para empezar, la profesora menciona: "el magisterio influye mucho para que cierto partido gane,"[208] resaltando la importancia del sindicato en el ámbito político. Este análisis permitirá proponer soluciones multidimensionales que no sólo mejoren las condiciones laborales de los docentes, sino que también promuevan una educación más equitativa y de calidad, contribuyendo a la transformación social y a la erradicación de la violencia contra la mujer.

[207] Vid. Ibídem, 3:47 min.
[208] Profesora militante, “El rol del SNTE en la política y la prevención de la violencia contra la mujer,” [entrevista] México, 2024, 3:56 min., disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1kShyJBEtB49yi-asnPnOUiPg1yjIG0CA/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 26 de junio de 2024).

En cuanto a la influencia política del SNTE, la profesora destaca cómo el sindicato influye en el panorama político al apoyar a candidatos y partidos que promueven sus intereses. Afirma que "el magisterio se va para el lado que le convenga, él apoya,"[209] subrayando que gracias al magisterio, se ganan las elecciones, destacando el caso del expresidente de México Enrique Peña Nieto y del actual partido político en el poder MORENA. Este punto puede evaluarse críticamente desde la perspectiva de Michel Foucault, quien argumenta que el poder y el conocimiento están intrínsecamente ligados. Las instituciones, como los sindicatos, actúan como mecanismos de poder que influyen en las políticas públicas y en la sociedad.

Además, la estrategia del SNTE de aliarse con partidos políticos para obtener beneficios puede verse como una forma de ejercicio de poder, utilizando su posición dentro del sistema educativo para negociar mejoras laborales y condiciones educativas. Sin embargo, esta táctica también plantea interrogantes sobre la autonomía del sistema educativo y la posible politización de la educación, lo cual podría afectar la calidad y la equidad educativa.

Por otro lado, la profesora critica las reformas educativas implementadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, afirmando que fueron diseñadas para perjudicar a los docentes más que para mejorar la educación. Según ella, "una de las consecuencias es que se denigró el papel del maestro, las leyes están en contra del maestro, sobreprotegen a los alumnos y a los padres de familia."[210] Este punto puede evaluarse desde la teoría de la justicia social, que sostiene que la política debe actuar para corregir las desigualdades y promover la justicia (Norberto Bobbio).

Asimismo, las reformas percibidas como injustas para los docentes han deteriorado la calidad educativa y contribuido a un ambiente de desvalorización del magisterio. Es esencial que las políticas educativas se diseñen para mejorar las condiciones laborales de los docentes y, por ende, la calidad de la educación. Las

[209] Ibídem, 4:18 min.
[210] Ibídem, 10:44 min.

políticas que no consideran estos aspectos podrían perpetuar las desigualdades y deteriorar el sistema educativo.

Además de esto, la profesora menciona cómo las reformas introducidas durante el sexenio de Peña Nieto, especialmente la creación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), han sido perjudiciales para los derechos de los docentes y la calidad educativa. Afirma que "la USICAMM fue creada por Peña Nieto para violentar los derechos de los docentes."[211] Este análisis puede complementarse con la teoría de Norberto Bobbio, argumentando que la política debe actuar para corregir las desigualdades y promover la justicia.

En el fondo, existe un sentimiento de traición y desvalorización del magisterio, la profesora expresa una sensación de traición por parte de Enrique Peña Nieto hacia el magisterio. Comenta que, a pesar del apoyo del magisterio a su candidatura, Peña Nieto implementó reformas que perjudicaron gravemente a los docentes, describiendo esto como un pago hecho con la peor moneda.[212] Este sentimiento resalta la importancia de evaluar críticamente las alianzas políticas y sus consecuencias a largo plazo para los grupos de interés.

Además, la profesora menciona que las actuales políticas tienden a sobreproteger a los alumnos y padres, a menudo a expensas de los derechos y la autoridad de los maestros. Desde la perspectiva de bell hooks sobre la interseccionalidad y la equidad, se argumenta que las políticas deben abordar las múltiples dimensiones de la desigualdad y considerar cómo las estructuras de poder interactúan para crear desigualdades. La propuesta de revisar las leyes para equilibrar la protección de derechos puede verse como un intento de abordar estas desigualdades y promover un ambiente educativo más justo y equitativo.

En otro punto, la profesora enfatiza la importancia de la educación en la transformación social y la prevención de problemas económicos y delictivos. Menciona: todo depende de la educación, la cuestión económica en nuestro país va a depender de la educación de cada uno de los mexicanos, la cuestión de delitos

[211] Ibídem, 7:02 min.
[212] Ibídem, 5:00 min.

depende de la educación de cada mexicano.[213] Esta visión puede alinearse con las ideas de Antonio García-Pablos de Molina sobre la prevención primaria, que se centra en eliminar las condiciones que fomentan la desigualdad y la violencia desde la raíz.

Asimismo, la profesora menciona que el magisterio apoyó a la Dra. Claudia Sheinbaum, reconociendo la importancia de la educación para la transformación social. Afirma: "sabemos que la doctora Claudia Sheinbaum va a apoyarnos en esas reformas y eso va a ocasionar que la educación en México mejore."[214] Este punto puede evaluarse desde la perspectiva de la interseccionalidad de bell hooks, quien destaca cómo las estructuras de poder interactúan para crear desigualdades. El apoyo a líderes políticos que promueven la educación y la igualdad de género puede verse como un intento del sindicato de abordar las desigualdades estructurales y promover una educación más inclusiva y equitativa.

Adicionalmente, la profesora propone la instalación de cámaras de seguridad en todas las áreas de las escuelas para prevenir la violencia y proporcionar pruebas claras en casos de acusaciones falsas. Dice: "…para mí lo ideal es que en cada rincón de la escuela se tuviera una cámara [...] así protegemos a todos, si al maestro lo acusan de acoso sexual, ahí se va a ver en el audio, se va a ver en el video."[215] Esta propuesta puede evaluarse desde la teoría del panóptico de Michel Foucault.[216] La instalación de cámaras puede crear un efecto disuasorio, pero es fundamental considerar las implicaciones éticas y de privacidad de esta medida.

---

[213] Vid. Ibídem, 8:03 min.
[214] Ibídem, 9:08 min.
[215] Ibídem, 18:38 min.
[216] El concepto del panóptico fue desarrollado por Michel Foucault en su obra Vigilar y Castigar de 1975, en la que analiza cómo las sociedades modernas han adoptado sistemas de vigilancia para controlar y disciplinar a sus ciudadanos. El término "panóptico" proviene de una estructura diseñada por el filósofo y jurista Jeremy Bentham, en la que una torre central permite a un vigilante observar a todos los prisioneros sin que estos sepan si están siendo observados en un momento dado. Foucault utilizó esta metáfora para describir cómo las instituciones modernas, como las escuelas, hospitales y fábricas, implementan mecanismos de vigilancia que inducen un estado de autocontrol en los individuos. En el contexto de la cita, la instalación de cámaras en las escuelas refleja este principio panóptico, donde la posibilidad constante de ser observado busca disuadir conductas inapropiadas y proteger tanto a maestros como a estudiantes. Vid. Foucault, Michel, *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*, trad. de Garzón del Camino, A., Argentina, Siglo XXI Editores, 2003.

Finalmente, la profesora sugiere la implementación de elementos de seguridad, como la presencia de la Guardia Nacional, para proteger el inmueble y prevenir robos y vandalismo. Argumenta que durante la pandemia, muchas escuelas fueron violentadas, robadas y dañadas, y que la seguridad actual es insuficiente.[217] Esta propuesta puede evaluarse desde el modelo de actividad rutinaria de Lawrence Cohen y Marcus Felson, donde la presencia de elementos de seguridad actuaría como un guardián eficaz que disuade a los delincuentes y protege a las potenciales víctimas y bienes dentro de la escuela.

En conclusión, la entrevista con la profesora expone cómo el SNTE emplea su poder e influencia para negociar mejoras en las condiciones laborales de los docentes y promover políticas educativas percibidas como beneficiosas. No obstante, es crucial evaluar estas estrategias desde las perspectivas de justicia social, prevención primaria y equidad de género. La politización de la educación y las alianzas estratégicas deben ser analizadas cuidadosamente para garantizar que se promueva una educación de calidad y equitativa para todos los estudiantes.

Por consiguiente, las reformas educativas y las dinámicas de poder en el entorno escolar han afectado negativamente al magisterio, contribuyendo a un ambiente de violencia e inseguridad. Una evaluación crítica de estas cuestiones permite proponer soluciones que no sólo mejoren las condiciones laborales de los docentes, sino que también promuevan una educación de calidad y equitativa para todos. Es esencial que las políticas educativas se diseñen e implementen con un enfoque multidimensional, considerando las implicaciones éticas y sociales para construir un sistema educativo más justo y efectivo.

3.1.2 El interés superior de la niñez en la educación primaria

La educación es el primer nivel preventivo de los delitos, constituyendo el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. En México, los Artículos 3º y 4º de la CPEUM prevén el interés superior de la niñez, garantizando una educación laica, gratuita y de excelencia, así como derechos esenciales como la alimentación, la salud y espacios sanos de esparcimiento. Sin embargo, la

[217] Vid. Op. Cit. Profesora militante [entrevista], 20:15 min.

implementación de estas garantías ha sido objeto de críticas y enfrenta múltiples desafíos. En este apartado, evaluaremos críticamente estos aspectos, tomando como punto de partida la entrevista realizada a una profesora del sector público que imparte clases a nivel primaria el día 13 de mayo de 2024, así como lo identificado en los primeros capítulos de nuestra tesis (marco teórico). Este enfoque nos permitirá profundizar en las brechas entre la teoría y la práctica en la aplicación de las políticas educativas y su impacto en la prevención de la violencia desde una edad temprana.

Para comenzar, la profesora entrevistada destaca que, aunque las políticas son buenas en teoría, su aplicación práctica enfrenta serias deficiencias.[218] La falta de involucramiento de los padres de familia en la educación de sus hijos es un obstáculo significativo.[219] Este desinterés puede atribuirse a factores económicos y sociales,[220] como la necesidad de trabajar largas horas y la falta de una educación adecuada en generaciones anteriores.

En el contexto de la prevención de la violencia, es crucial que los valores se fomenten tanto en el hogar como en la escuela. Sin embargo, la profesora señala que, si los valores no están bien establecidos en el hogar, los esfuerzos escolares pueden ser insuficientes. Según ella, "si en casa no tienen bien fomentados los valores, el alumno no los va a llevar a cabo."[221] Esto refleja una falla en la implementación de un enfoque integral para la prevención de la violencia, que debe comenzar desde la educación básica.

Además, la implementación de políticas educativas en México enfrenta desafíos significativos. Aunque se han introducido programas y materiales para promover la igualdad de género y prevenir la violencia, su efectividad varía considerablemente. La profesora menciona que la utilización de estos materiales depende en gran medida de la iniciativa de cada docente y la dinámica escolar, lo

[218] Vid. Profesora de primaria, “El interés superior de la niñez en la educación primaria,“ [entrevista] México, 2024, 5:53 min., disponible en: *https://drive.google.com/file/d/185DkyCmVGoSllCNzyZgKoBtU3tzAke7W/view?usp=drive_*link (fecha de consulta: 14 de junio de 2024).
[219] Vid. Ibídem, 7:41 min.
[220] Vid. Ibídem, 8:19 min.
[221] Ibídem, 3:06 min.

que evidencia una falta de consistencia y apoyo estructural. Como ella señala, "esto depende de la prioridad que tanto el docente le quiera dar."[222]

Adicionalmente, la falta de recursos adecuados, como materiales didácticos y comedores escolares, limita la capacidad de las escuelas para cumplir con los estándares constitucionales. La entrevistada revela que, a pesar de que la educación debería ser gratuita, se solicitan cuotas a los padres para el mantenimiento de las escuelas, y muchos niños no reciben alimentación adecuada. "Realmente no se cumple esta parte ni que sea gratuita ni que se les tenga que dar alimentación a los chicos de manera gratuita, ellos tienen que pagar por ello."[223] Esta situación contrasta directamente con las garantías previstas en los Artículos 3º y 4º, poniendo en duda la eficacia de las políticas gubernamentales.

Por añadidura, uno de los pilares fundamentales del Artículo 3º de la CPEUM es la gratuidad de la educación. Sin embargo, la entrevista revela serias discrepancias entre la teoría y la práctica. Aunque la ley establece que la educación debe ser gratuita, en la realidad muchos padres se ven obligados a pagar cuotas para el mantenimiento de las escuelas. La profesora entrevistada menciona que se les pide a los padres "su recibo de pago,"[224] a pesar de que se supone que la educación es gratuita. Estas cuotas son utilizadas para cubrir necesidades básicas de la escuela, como el mantenimiento y la compra de materiales.

Además, la falta de recursos destinados a la alimentación es otro problema significativo. La profesora señala que "los chicos a veces no han ni comido, no les mandan nada,"[225] y en las escuelas los alimentos que se ofrecen a menudo no son gratuitos. En algunos casos, los desayunos se sortean entre los estudiantes, como menciona la profesora: "Recibieron una dotación de desayunos... fueron sorteados, ya nada más el padre de familia tiene que dar una pequeña cooperación."[226] Esto contrasta con la obligación constitucional del Estado de proporcionar una educación gratuita y de calidad, que incluya una alimentación adecuada para los estudiantes.

---

[222] Ibídem, 4:11 min.
[223] Ibídem, 13:03 min.
[224] Ibídem, 11:53 min.
[225] Ibídem, 12:44 min.
[226] Ibídem, 10:12 min.

La realidad descrita por la profesora refleja una falla en la implementación de la gratuidad de la educación, lo cual tiene implicaciones directas en el acceso igualitario a la educación. Las familias que no pueden permitirse pagar estas cuotas adicionales o proporcionar alimentos adecuados a sus hijos se encuentran en desventaja, lo que perpetúa las desigualdades educativas y sociales. Es crucial que el Estado tome medidas para garantizar el precepto constitucional de gratuidad y accesibilidad para todos, sin cargas financieras ocultas para las familias.

Encima, la falta de servicios de salud adecuados en las escuelas, como la ausencia de enfermeras y médicos, pone en riesgo la salud y seguridad de los estudiantes. La profesora enfatiza que a lo más que se llega es a tener un botiquín y hasta eso incompleto.[227] Además, los accidentes escolares a menudo no pueden ser atendidos adecuadamente debido a la falta de recursos y capacitación en primeros auxilios. "Ni los primeros auxilios, no hemos tenido ni una capacitación para dar primeros auxilios."[228] Este aspecto es crucial, ya que una atención médica oportuna y adecuada en el entorno escolar es fundamental para garantizar el bienestar de los niños y prevenir situaciones de emergencia.

De igual modo, el interés superior de la niñez establece que los niños tienen derecho a sanos lugares de esparcimiento para su desarrollo integral. Sin embargo, la realidad en las escuelas públicas muestra que este derecho a menudo no se cumple adecuadamente. La profesora entrevistada menciona que, aunque existen áreas designadas para el esparcimiento, estas son frecuentemente insuficientes y carecen del equipamiento necesario para un desarrollo adecuado de las actividades físicas y recreativas.

Por ejemplo, las canchas deportivas en muchas escuelas están en condiciones precarias. La profesora describe que "de espacios podemos decir que hay canchas, pero las canastas de básquetbol... nada más está el pobre arito ahí."[229] Además, el material deportivo suele ser escaso y, en muchos casos,

[227] Vid. Ibídem, 13:32 min.
[228] Ibídem, 14:54 min.
[229] Ibídem, 17:56 min.

depende del esfuerzo individual del maestro de deportes. "El maestro de deportes es quien a veces pone este material, y eso cuando se encuentra el profesor."[230]

La falta de espacios adecuados y bien equipados para el esparcimiento no sólo limita la capacidad de los niños para participar en actividades físicas saludables, sino que también puede aumentar el riesgo de accidentes durante el recreo. "Los niños en los recreos nada más se la pasan corriendo y es cuando se provocan los accidentes,"[231] comenta la profesora, subrayando la importancia de contar con instalaciones seguras y adecuadas.

Además, las áreas de esparcimiento no siempre están diseñadas para acomodar a toda la población estudiantil. La profesora señala que en algunas escuelas les dan un espacio a los alumnos para que puedan consumir sus alimentos, pero son pocas mesas de concreto, que no se consideran óptimas considerando la población total de la escuela.[232] Esta situación refleja una deficiencia en la planificación y provisión de espacios suficientes y adecuados para el desarrollo integral de los niños.

Otro problema significativo es la condición del mobiliario dentro de las aulas. La profesora menciona que "la calidad de los materiales y las herramientas es baja."[233] Muchas veces, las bancas están desoldadas y, en lugar de ser reparadas, "las arrumban y nadie se preocupa por arreglarlas."[234] Esta falta de mantenimiento no sólo afecta la comodidad y seguridad de los estudiantes, sino que también refleja una falta de recursos y atención en la infraestructura escolar.

Por otro lado, la profesora también menciona que recientemente se han instalado pantallas para apoyar el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, estas pantallas necesitan ser protegidas debido a la falta de respeto hacia los materiales. "Les pusieron una herrería para protegerlas porque, desafortunadamente, nuestra sociedad está mal en cuestión de respeto a las herramientas y equipos".[235] Este

[230] Ibídem, 18:30 min
[231] Ibídem, 18:53 min
[232]Vid. Ibídem, 16:53 min.
[233] Ibídem, 19:33 min.
[234] Ibídem, 21:08 min.
[235] Ibídem, 20:12 min.

ejemplo ilustra la necesidad de inculcar valores de cuidado y respeto hacia los recursos educativos, tanto en el hogar como en la escuela.

Además, la profesora manifiesta haber tenido que comprar su propio mueble para resguardar su material de trabajo pedagógico, ya que "no hay un lugar donde poner mis materiales".[236] Ella añade que en el mueble también coloca el material de los alumnos, subrayando la falta de infraestructura adecuada para almacenar libros y otros recursos educativos esenciales. "Se carece de inmuebles, por ejemplo, para resguardar libros y algunos otros materiales",[237] añade la profesora.

Adicionalmente, el a 3º de la CPEUM también establece que la educación básica y media superior es obligatoria, lo que implica que todos los niños deben recibir al menos educación preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior. Sin embargo, la realidad muestra una discrepancia significativa entre esta obligación y su cumplimiento efectivo. La profesora entrevistada observa que muchos padres de familia no toman el nivel preescolar como obligatorio[238] y sólo inscriben a sus hijos cuando alcanzan la edad para ingresar a la primaria. Esta omisión tiene consecuencias negativas para el desarrollo integral de los niños.

La falta de educación preescolar impide que los niños adquieran habilidades sociales y conocimientos básicos necesarios para su éxito en la educación primaria. Según la profesora, esto resulta en que, un chico que llega de cinco o seis años sin tener la formación previa tiene problemas para socializar y de conocimiento.[239] Esta situación obliga a los maestros de primaria a retroceder en el currículo para cubrir las deficiencias, lo que afecta el progreso educativo de toda la clase y perpetúa un ciclo de rezago educativo. La profesora estima con base en su experiencia que cerca del 60% de los niños y niñas que ingresan al primer grado de primaria, carecen de preescolar.[240]

De igual modo, la obligatoriedad de la educación básica también enfrenta desafíos debido a la falta de concienciación entre los padres de familia sobre la

[236] Ibídem, 20:45 min.
[237] Ibídem, 21:00 min.
[238] Vid. Ibídem, 25:14
[239] Ibídem, 25:26
[240] Vid. Ibidem. 26:13 min.

importancia de la educación temprana. La profesora atribuye esta falta de compromiso a factores económicos,[241] y a la ignorancia.[242] Muchos padres consideran que el preescolar es innecesario y un gasto adicional,[243] lo que refleja una falta de comprensión sobre los beneficios a largo plazo de la educación temprana. Esta actitud destaca la necesidad de programas de concienciación y apoyo que informen a los padres sobre la importancia de la educación desde temprana edad y los recursos disponibles para cumplir con esta obligación constitucional.

En este orden de ideas, se ha identificado un fenómeno preocupante en el que muchos padres de familia tampoco cuentan con la educación básica completa, lo que perpetúa un ciclo transgeneracional de desinformación y falta de obligatoriedad por parte del estado de la educación. La profesora señala que de veinte, dos o tres papás están preparados profesionalmente, y estos son los únicos que se preocupan por sus hijos.[244] Esta falta de educación en generaciones anteriores contribuye significativamente a la desvalorización de la educación y la falta de apoyo en el hogar, lo que afecta negativamente el desarrollo educativo de los niños.

Así mismo, el Artículo 3º de la CPEUM garantiza que la educación impartida por el Estado sea laica, es decir, libre de cualquier doctrina religiosa. La profesora entrevistada destaca que esta característica de la educación es fundamental para asegurar un ambiente inclusivo y respetuoso de las diversas creencias de los estudiantes. Sin embargo, en la práctica, la implementación de este principio enfrenta ciertos desafíos. Por ejemplo, la profesora menciona una actividad escolar relacionada con el Día de Muertos, una celebración cultural importante en México. Algunos estudiantes se negaron a participar debido a las creencias religiosas de sus familias, confundiendo lo cultural con lo religioso. Ella comenta: "Están

[241] Vid. Ibídem, 27:07 min.
[242] Vid, Ibídem, 27:26 min
[243] Vid. Ibídem, 27:15 min
[244] Vid. Ibídem, 35:32 min

confundiendo esta parte de la religión con lo cultural, porque a final de cuentas es una parte de nuestra cultura".[245]

Este tipo de situaciones refleja la necesidad de aclarar entre lo cultural y lo religioso, fomentando una educación que no sólo sea laica, sino también inclusiva. La educación laica debe promover un entendimiento claro de las diferencias entre cultura y religión, y asegurar que todas las actividades culturales escolares se respeten y realicen, alejando las creencias individuales y fomentando la apreciación de las tradiciones culturales nacionales.

En conclusión, la entrevista con la profesora del sector público que imparte clases a nivel primaria revela importantes desafíos en la implementación de los principios establecidos en los Artículos 3º y 4º de la CPEUM. A través de su experiencia, se destacan las discrepancias entre la teoría y la práctica en aspectos clave como la gratuidad, la laicidad, la obligatoriedad de la educación y los espacios de sano esparcimiento.

Uno de los puntos más críticos es la falta de verdadera gratuidad en la educación. Aunque la ley garantiza una educación gratuita, en la práctica se solicita a los padres de familia que paguen cuotas para el mantenimiento de las escuelas y la compra de materiales. Además, la falta de recursos para la alimentación de los estudiantes crea desigualdades que contradicen el principio de acceso igualitario a la educación.

En cuanto a la laicidad, la profesora señala la confusión entre lo cultural y lo religioso en actividades escolares, como la celebración del Día de Muertos. Esto subraya la necesidad de una educación inclusiva y respetuosa de las diversas creencias y culturas de los estudiantes.

La obligatoriedad de la educación básica enfrenta desafíos debido a la falta de concienciación de los padres de familia. Muchos no consideran el nivel preescolar como obligatorio, lo que resulta en niños que llegan a la primaria sin las habilidades necesarias, generando un rezago educativo que afecta a todo el grupo.

Los espacios de sano esparcimiento y la infraestructura escolar también requieren atención. La falta de instalaciones adecuadas y materiales deportivos

[245] Ibídem, 23:07 min.

limita la participación en actividades físicas y aumenta el riesgo de accidentes. Además, la necesidad de que los maestros compren sus propios muebles para almacenar materiales refleja una carencia de recursos que impacta negativamente el ambiente educativo.

En resumen, la entrevista destaca la necesidad urgente de que el Estado mexicano tome medidas concretas para garantizar que los principios constitucionales se cumplan efectivamente. Esto incluye una asignación adecuada de recursos financieros, programas de concientización y apoyo para los padres de familia, y la mejora de la infraestructura escolar para asegurar una educación de calidad, gratuita y equitativa para todos los niños.

3.1.2.1 La miseria del interés superior de la niñez

Para evaluar cómo el gobierno salvaguarda el interés superior de niños, niñas y adolescentes, no es necesario adentrarse en las escuelas; basta con observar el día a día en las calles de México. Un fenómeno desgarrador y alarmante revela que, basado en la interpretación exegética del Artículo 3º de la CPEUM, este derecho es letra muerta.

Sin necesidad de citar un municipio específico del Estado de México, ya que este fenómeno ocurre de forma sistémica, podemos observar a un incontable número de niñas, niños y adolescentes en las calles durante horas escolares, obligados a sobrevivir. Realizan actividades que van desde estar en los cruceros vehiculares aprovechando los semáforos para vender dulces, cigarros sueltos y otros productos de consumo, hasta llevar a cabo actos circenses con elementos básicos como simples piedras, a menudo acompañados de adultos.

Este fenómeno está tan normalizado que incluso las autoridades del Estado encargadas de salvaguardar los derechos humanos actúan de forma indiferente ante esta situación. El municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, ejemplifica lo expuesto. A pesar de la transformación de la policía preventiva municipal a policía de *Seguridad Ciudadana*, su trabajo sigue siendo incompetente. Detenidos por la luz roja del semáforo y detrás de una patrulla de *Seguridad Ciudadana*, fuimos testigos de una escena que desgarra el velo de la cotidianidad: dos niños, una niña de entre ocho y diez años haciendo malabares con piedras, y

un niño de apenas cinco o seis años vendiendo mazapanes y cigarros sueltos a los conductores. Esta situación pone en evidencia el impacto generacional del modelo neoliberal mal interpretado e impuesto en México.

La brutalidad de esta escena no radica en la precariedad de los actos de estos niños, sino en la indiferencia institucionalizada que se reveló. Frente a la vulneración flagrante de los derechos humanos de la niñez, la figura de la seguridad ciudadana, representada en este caso por el policía al volante, debió encarnar el interés superior de la niñez. Sin embargo, esto no fue así. No sólo no actuó, sino que el policía al volante compró un cigarrillo suelto al menor. Este acto evidenció una disfunción sistémica alarmante: por un lado, la falta de profesionalismo y la incapacidad de ejercer la representación jurídica adecuada de la Constitución, y por otro, la corroboración del objetivo individualista promovido por el modelo neoliberal de extrema derecha implementado en México que hemos venido argumentando a lo largo de esta investigación.

El incidente en el Municipio de Nezahualcóyotl subraya sólo un ejemplo de la miseria que acontece en México. La Mtra. Verónica Espinoza Reyes asegura que esta realidad se extiende a toda la república y que, de forma específica, ella ha sido testigo de situaciones similares en el estado de Guanajuato.[246] La indiferencia del policía al volante no sólo refleja una falla individual, sino que pone en evidencia una problemática mucho más profunda y estructural. Este acto de negligencia y connivencia con la situación de vulnerabilidad de los niños no es un incidente aislado, sino un síntoma de la frialdad y deshumanización que impera en el sistema de seguridad pública. En contraste, en Estados Unidos, la implementación homogénea y objetiva de las leyes garantiza que los derechos de los niños sean protegidos de manera uniforme en todo el territorio. Las políticas federales estadounidenses, como la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) y el Acta de Violencia Contra las Mujeres (VAWA), apoyadas por mecanismos de supervisión estrictos y transparentes, aseguran que cualquier vulneración de los derechos de los menores sea rápidamente identificada y corregida.

[246] Vid. Op. Cit. Espinoza Reyes, Verónica, [entrevista], México, 2024, 5:55 min.

En México, la ausencia de tales mecanismos de rendición de cuentas y la influencia de factores locales resultan en una ejecución dispar y subjetiva de las leyes, dejando a los niños en situaciones de extrema vulnerabilidad sin la protección necesaria. Este contraste resalta la urgencia de reformar y fortalecer las instituciones mexicanas para asegurar que el interés superior de la niñez sea verdaderamente prioritario y que las leyes y políticas no sólo existan en el papel, sino que se implementen efectivamente para proteger a los más vulnerables en la sociedad.

3.1.3 Análisis empírico del primer nivel preventivo de violencia en secundarias

En este apartado, se evalúa críticamente, y con base en nuestro marco conceptual, la realidad observable del primer nivel preventivo de la violencia en la educación a nivel secundaria. La metodología empleada se basa en la recopilación de datos cualitativos obtenidos a través de una entrevista en profundidad. Específicamente, se entrevistó a una docente de educación secundaria el día 15 de junio de 2024, que trabaja en el sector público, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Esta entrevista permitió obtener una perspectiva directa sobre la implementación de políticas preventivas contra la violencia, en el ámbito escolar. La información recopilada se analiza críticamente para evaluar la efectividad de las políticas públicas, considerando la experiencia y opiniones de la profesional de la educación en contraste con nuestro marco teórico.

De entrada, la profesora de secundaria señala que una de las principales diferencias entre ambos contextos es la económica, indicando que "en el Estado de México es mejor el salario que en la Ciudad de México,"[247] lo que se traduce en una mayor motivación y desempeño de los docentes en el Estado de México. Este comentario se alinea con la teoría de la prevención primaria discutida en el segundo capítulo, donde se destaca la importancia de condiciones laborales justas y dignas para prevenir la violencia (García-Pablos de Molina). La falta de motivación y los

[247] Profesora de secundaria, “Análisis empírico del primer nivel preventivo de violencia en secundarias,” ***entrevista,*** México, 2024, 4:51 min., di*sponible en: https://drive.google.com/file/d/1Tw-xmnFlTxGrrY0eQBsbTl_g_aCrbnzI/view?usp=sharing (fecha de consulta: 19 de junio de 2024).*

recursos limitados en la Ciudad de México podrían estar afectando negativamente la implementación de programas preventivos y disuasivos, subrayando la necesidad de equidad en las condiciones laborales para todos los docentes.

Así mismo, la entrevista revela la existencia de programas como el Plan de Mejora Continua Escolar (PMC) y protocolos de seguridad que buscan fomentar una convivencia sana y pacífica entre los alumnos. La profesora menciona que "uno de los objetivos es la sana convivencia y pacífica de los alumnos y crear ambientes de seguridad y socioemocionales para ellos."[248] Estos programas reflejan los principios de la prevención secundaria, que se enfoca en intervenir en situaciones de riesgo ya identificadas y proporcionar apoyo psicosocial, como se discutió en el segundo capítulo. No obstante, la efectividad de estos programas parece estar limitada por la capacitación insuficiente en la Ciudad de México, donde "las autoridades no apoyan para asistir a estas capacitaciones porque muchas veces son en el mismo turno."[249]

A su vez, un punto crítico señalado por la maestra es la diferencia en la capacitación docente entre ambos estados. En el Estado de México, existen mayores apoyos para la capacitación docente, incluyendo talleres obligatorios durante los consejos técnicos escolares. En contraste, en la Ciudad de México, la capacitación es más limitada y las autoridades no facilitan la participación de los docentes en estas actividades. Esta disparidad destaca una debilidad en la política criminal preventiva del Estado, que debe garantizar una formación continua y equitativa para todos los docentes, alineándose con el principio de prevención primaria que enfatiza la importancia de una educación y capacitación adecuadas (Brantingham y Faust).

En este mismo orden de ideas, nuestra entrevistada opina que las políticas gubernamentales actuales no son suficientes, pero las que hay sí son efectivas,[250] si se implementan correctamente. Sin embargo, también menciona que la erradicación de la violencia no depende únicamente de las escuelas o del gobierno, sino también de la educación en el hogar. Este punto resuena con el análisis teórico

[248] Ibídem, 5:59 min.
[249] Ibídem, 7:44 min.
[250] Vid., Ibídem, 8:16 min.

del primer capítulo sobre la necesidad de una política criminal integral multidisciplinaria que incluya tanto la intervención estatal como la participación comunitaria y familiar.

Por lo que, la profesora enfatiza que "si en casa no apoyan, de nada sirve,"[251] subrayando la importancia del entorno familiar en la prevención de la violencia. Esto refuerza el argumento presentado en el segundo capítulo sobre la interrelación entre la educación formal y el entorno familiar en la prevención de la violencia. La teoría ecológica de Bronfenbrenner, destaca la influencia del microsistema (familia y escuela) en el desarrollo de comportamientos, siendo fundamental para entender esta dinámica.

> El ambiente ecológico se concibe como un conjunto de estructuras seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente, como las muñecas rusas. En el nivel más interno está el entorno inmediato que contiene a la persona en desarrollo. [...] Es posible que la capacidad del niño para aprender a leer en los primeros cursos no dependa menos de cómo se le enseña que de la existencia y la naturaleza de los lazos que unen la escuela y el hogar. [252]

De otra parte, la profesora menciona que, aunque existen programas para asegurar la alimentación de los estudiantes, estos están limitados principalmente a las escuelas de tiempo completo. Afirma que “con el gobierno actual este recurso llega directo a las escuelas y los padres ya no tienen que aportar la cuota de alimentos,”[253] lo que ha beneficiado significativamente a estas instituciones. Sin embargo, señala que en las escuelas con jornadas ampliadas o turnos simples, la alimentación depende de las cooperativas escolares, las cuales deberían vender alimentos saludables según los lineamientos,[254] aunque esto no siempre se cumple, especialmente en la Ciudad de México. Esta observación resalta la importancia de la prevención primaria mencionada en el segundo capítulo, que aboga por la

[251] Ibídem,
[252] Vid. Bronfenbrenner, Urie, “*La Ecología Del Desarrollo Humano: Experimentos en Entornos Naturales y Diseñados*,” trad. de Alejandra Devoto, Barcelona, Paidós, 1987, p. 23, disponible en: *https://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/18032* (fecha de consulta: 26 de Julio de 2024).
[253] Op. Cit. Profesora de secundaria, *“Análisis empírico del primer nivel preventivo de violencia en secundarias,*” 11:05 min.
[254] Vid. Ibídem, 11:35 min.

necesidad de garantizar condiciones básicas adecuadas como la alimentación para prevenir la violencia y promover el bienestar estudiantil (García-Pablos de Molina).

En cuanto a la salud, la profesora revela una carencia significativa en las escuelas, señalando que "…lo ideal es que cada una de las escuelas cuente con un servicio médico,"[255] pero esto no es una realidad. La ausencia de servicios médicos adecuados pone en riesgo a los estudiantes, especialmente en actividades físicas, y ha llevado a situaciones trágicas como la mencionada muerte de un alumno en una escuela secundaria técnica de la Ciudad de México.[256] Esta falta de infraestructura de salud en las escuelas evidencia una debilidad en la implementación de políticas preventivas de segundo nivel, que deberían incluir medidas para garantizar la seguridad y atención médica inmediata (Brantingham y Faust).

Adicionalmente, la profesora destaca que las escuelas en el Estado de México han mejorado en términos de infraestructura, gracias a la implementación de arcos techos en los patios escolares. Esto, según ella, "ayuda y beneficia al desarrollo de los alumnos,"[257] proporcionando espacios seguros y adecuados para actividades recreativas y deportivas. Sin embargo, también menciona que muchas escuelas aún carecen de instalaciones adecuadas y que los recursos proporcionados por el gobierno no son suficientes para el mantenimiento y mejora de las instalaciones. La falta de recursos suficientes y el deterioro de las instalaciones escolares limitan la efectividad de las medidas preventivas y educativas, impidiendo que los estudiantes desarrollen su potencial en un entorno seguro y adecuado.

En el fondo, la profesora reflexiona sobre los principios filosóficos del Artículo 3º de la CPEUM, que establece que la educación debe ser laica, gratuita, de excelencia y obligatoria. Ella observa que, aunque la educación es técnicamente gratuita, los padres de familia aún deben cubrir ciertos costos adicionales, como uniformes y útiles escolares. Menciona que; "anteriormente existían las cuotas de

[255] Ibídem, 12:07 min.
[256] Ibídem, 13:08 min.
[257] Ibídem, 14:13 min.

inscripción"[258] que ayudaban a mantener y mejorar las escuelas, y que la eliminación de estas cuotas ha resultado en instalaciones deterioradas y condiciones insalubres, afectando negativamente el aprendizaje de los alumnos. Este punto subraya la necesidad de un enfoque integral en la implementación de políticas educativas que no sólo dependan del financiamiento gubernamental, sino que también consideren la participación de la comunidad (Urie Bronfenbrenner).

Sobre la obligatoriedad de la educación, la maestra destaca que esta responsabilidad recae no sólo en el gobierno y los maestros, sino también en los padres de familia. Expone que "si los padres de familia no apoyan a sus hijos [...] es obligación de los padres llevar a sus hijos a la escuela."[259] Sin embargo, relata casos en municipios como Ixtapaluca, donde los niños no asisten a la escuela porque sus padres los obligan a trabajar.[260] Este problema refleja una desconexión entre las políticas educativas y la realidad socioeconómica de muchas familias, evidenciando una falla en la implementación efectiva de políticas preventivas y obligatorias que garanticen la educación para todos los niños.

A su vez, la profesora aborda la complejidad del término *excelencia* en el contexto educativo, señalando que "no vas a dar el 100%, sino el 200% para que tus alumnos adquieran los aprendizajes esperados."[261] Sin embargo, critica que esta exigencia de excelencia se enfoca principalmente en los maestros, sin considerar otros factores cruciales como la infraestructura escolar, la capacitación de las autoridades y el apoyo de los padres de familia. Esta visión resuena con el análisis del primer capítulo sobre la necesidad de un enfoque integral en la política criminal que involucre a todos los actores sociales y no sólo a los individuos directamente responsables de la educación.

La maestra también menciona que "no todos los maestros estamos conscientes, no todos los maestros tenemos la vocación,"[262] lo cual subraya la importancia de la prevención primaria al asegurar que los docentes reciban la

[258] Ibídem, 16:18 min.
[259] Ibídem, 18:30 min.
[260] Ibídem, 19:10 min
[261] Ibídem, 20:19 min.
[262] Ibídem, 21:57 min.

formación y el apoyo necesarios para desempeñar su labor con eficacia. La excelencia educativa no sólo depende del esfuerzo individual, sino de un sistema de apoyo que incluye recursos adecuados, capacitación continua y un entorno laboral positivo.

Sobre las políticas gubernamentales, la profesora expresa su apoyo a las becas estudiantiles, argumentando que "…un ingreso sí ayuda mucho a la educación"[263] y que, aunque no siempre se destinen directamente a fines educativos, "al final repercute en el estado socioemocional y desarrollo cognitivo de los alumnos."[264] Este punto es relevante para el análisis del segundo capítulo, que discute la prevención secundaria y la necesidad de apoyar a los estudiantes en situaciones de riesgo socioeconómico para evitar la deserción escolar y el desarrollo de comportamientos delictivos (Brantingham y Faust).

El programa de becas puede considerarse una medida preventiva eficaz si se gestiona adecuadamente y se asegura que los fondos se utilicen para mejorar las condiciones de vida y educativas de los estudiantes. La evaluación crítica de estos programas debe incluir un seguimiento de su impacto real en el rendimiento y bienestar de los alumnos, asegurando que se cumplan los objetivos preventivos y educativos.

Para ir finalizando, la maestra propone varias iniciativas para mejorar la educación y prevenir la violencia, destacando la importancia de "…crear más proyectos sobre sana convivencia, proyectos de educación física, proyectos lúdicos deportivos recreativos."[265] Resalta que la actividad física y los juegos son fundamentales para desarrollar valores como el respeto y la convivencia sana, argumentando que "mediante las actividades físicas se desarrollan todos esos valores."[266]

Esta propuesta se alinea con la prevención primaria y secundaria discutida en ambos capítulos anteriores, donde se enfatiza la necesidad de crear entornos escolares que promuevan la salud física y emocional de los estudiantes. Las

[263] Ibídem, 24:17 min.
[264] Ibídem, 25:04 min.
[265] Ibídem, 27:48 min.
[266] Ibídem, 24:45 min.

actividades recreativas y deportivas no sólo mejoran la salud física, sino que también fomentan habilidades sociales y valores esenciales para la convivencia pacífica y la prevención de la violencia.

Nuestra entrevistada, también critica la escasez de clases de educación física, sugiriendo que deberían ser diarias para maximizar su impacto positivo en los alumnos. Esta observación subraya la importancia de integrar más actividades físicas en la currícula escolar como una estrategia preventiva integral, capaz de abordar múltiples dimensiones del desarrollo estudiantil y reducir los factores de riesgo asociados con la violencia y la delincuencia.

La entrevista con la profesora proporciona información empírica valiosa que respalda y complementa el marco teórico de los primeros dos capítulos de nuestra tesis. Las diferencias contextuales entre la Ciudad de México y el Estado de México, la importancia de la capacitación docente y la influencia del entorno familiar son factores críticos en el diseño e implementación de políticas preventivas y disuasivas efectivas. Este análisis subraya la necesidad de un enfoque integral y equitativo que aborde tanto las condiciones laborales de los docentes como la educación y el apoyo en el entorno familiar para reducir la violencia en el núcleo familiar.

Nuestro marco teórico revela la necesidad de un enfoque integral y equitativo en la implementación de políticas preventivas y educativas. Este enfoque debe considerar no sólo la provisión de recursos básicos, sino también la participación activa de la comunidad y un mayor apoyo gubernamental para abordar las desigualdades y necesidades específicas de cada contexto. La entrevista con la profesora ofrece una visión crítica y detallada de la realidad en las escuelas secundarias públicas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. A través de su experiencia, se destacan las brechas significativas entre las políticas preventivas y su implementación práctica.

En esencia, la entrevista con la profesora proporciona valiosas perspectivas sobre la implementación práctica de políticas preventivas en la educación secundaria. Sus observaciones y propuestas resaltan la necesidad de un enfoque integral y multifacético para lograr una educación de calidad que no sólo se enfoque en el rendimiento académico, sino también en el desarrollo socioemocional y físico

de los estudiantes. Este análisis crítico, basado en nuestro marco teórico, refuerza la importancia de políticas educativas y preventivas que consideren todas las variables involucradas en el proceso educativo, asegurando así una implementación efectiva y sostenible en la realidad escolar.

3.1.4 El impacto del neoliberalismo radical implementado en el nivel medio superior

La educación media superior, tal como se establece en el Artículo 3º de la CPEUM, desempeña un papel crucial en la prevención de la violencia contra la mujer debido a su carácter obligatorio. La entrevista realizada a un profesor de nivel medio superior en el Estado de México proporciona una visión detallada sobre las deficiencias y potencialidades del sistema educativo como primer nivel estratégico para prevenir la violencia. En este apartado, se contextualiza esta información dentro del marco de la política criminal preventiva, abordando los desafíos derivados de la información proporcionada, los cuales se enmarcan en la aplicación de la versión radical del modelo neoliberal en México.

Primeramente, y con base en el enfoque multidisciplinario para abordar la violencia contra la mujer, combinando derecho, psicología, sociología y educación, abordado en el primer capítulo, la entrevista refuerza esta perspectiva al destacar que la educación en valores comienza en el hogar y se complementa en las instituciones educativas. Según el profesor entrevistado el día 6 de mayo de 2024, "La primera escuela es la casa,"[267] y es en ella donde deben fundamentarse los valores que luego se reforzarán en la escuela. Esta afirmación se alinea con la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner, que resalta la importancia del microsistema, compuesto por la familia y la escuela, en la formación del comportamiento humano.

> Un microsistema es un patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con características físicas y materiales particulares. Un entorno es un lugar en el que las personas pueden interactuar cara a cara fácilmente, como el hogar, la guardería, el campo de juegos y otros. Los

[267] Profesor de bachillerato, “El impacto del neoliberalismo radical implementado en el primer nivel preventivo,” [entrevista] México, 2024, 1:26 min., disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1Lj0LkOyoicyGGATwaJWeLo2QCHeco3EN/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 11 de mayo del 2024).

> factores de la actividad, el rol y la relación interpersonal constituyen los elementos o componentes del microsistema.[268]

Dicho de otro modo, se sostiene que las interacciones en estos entornos inmediatos son cruciales para el desarrollo del individuo. Por lo tanto, cualquier intervención para prevenir la violencia debe considerar estos contextos para ser verdaderamente efectiva.

El profesor también señala que muchas veces las instituciones educativas no cumplen adecuadamente su rol, lo cual genera lagunas en la formación ética y moral de los alumnos. Este incumplimiento es especialmente preocupante, ya que como lo abordamos anteriormente, la teoría de Bronfenbrenner enfatiza que la intervención educativa puede corregir comportamientos nocivos aprendidos en el hogar. La investigación sobre intervención preescolar ha proporcionado algunas respuestas interesantes sobre los efectos a largo plazo, destacando que las intervenciones educativas pueden tener un impacto positivo en los comportamientos de los niños cuando se basan en medidas que reflejan experiencias en entornos de la vida diaria, en lugar de depender únicamente de puntuaciones en tests tradicionales.[269]

Un entorno escolar igualitario y seguro puede proporcionar apoyo y enseñar valores de igualdad de género y resolución de conflictos, contrarrestando así las influencias negativas del hogar. En este sentido, la educación en valores necesita ser robustecida y/o corregida por un sistema educativo comprometido y eficaz que refuerce estos valores, recordemos que este es el primer acceso del Estado para contribuir a la formación de individuos a rechazar la violencia y promover la convivencia pacífica y equitativa.

Por otro lado, desde la versión del neoliberalismo que hemos identificado se lleva a cabo en México, la educación se ve afectada por la reducción del gasto público y la privatización de servicios esenciales. Esto genera desigualdades en la calidad de la educación recibida, dependiendo de si los alumnos asisten a instituciones públicas o privadas. El profesor entrevistado menciona que las

[268] Vid. Op. Cit. Bronfenbrenner, Urie, "*La Ecología Del Desarrollo Humano: Experimentos en Entornos Naturales y Diseñados*," p. 41.
[269] Vid. Ibídem p. 190.

escuelas públicas carecen de infraestructura adecuada, lo cual limita la efectividad de los programas educativos y en consecuencia, su capacidad para prevenir delitos. Como afirma el entrevistado, "La infraestructura que se tiene en las escuelas no es la adecuada para que los alumnos puedan desarrollar sus habilidades."[270]

Además de los desafíos estructurales derivados de la política económica y social bajo la administración del presidente López Obrador, la influencia de los medios de comunicación tecnológicos juega un papel crucial en la formación de la opinión pública y la percepción de estas políticas. Un ejemplo notable es el programa *Jóvenes Construyendo el Futuro*, cuyo objetivo es "Integrar a jóvenes en actividades de capacitación en el trabajo y, así, dotarlos de herramientas para una vida mejor."[271] La cobertura mediática de este programa ha sido dual. Por un lado, los medios han destacado aspectos positivos, como el aumento de la beca mensual a 7,572 pesos en 2024 y la inclusión de más de 2.8 millones de jóvenes en el programa.[272] Estas cifras son presentadas en el marco de una narrativa que busca mostrar el éxito del gobierno en la implementación de políticas sociales inclusivas. Sin embargo, esta representación mediática a menudo omite un análisis profundo de las implicaciones estructurales del programa, como la sostenibilidad a largo plazo de la iniciativa y las verdaderas oportunidades de empleo que genera para los beneficiarios.

Por otro lado, la cobertura mediática también ha sido utilizada como una herramienta para legitimar las políticas del gobierno actual, subrayando las declaraciones del presidente López Obrador sobre la importancia del programa en garantizar el acceso a la educación y el trabajo. Este enfoque positivo podría desviar la atención de las críticas legítimas sobre la ejecución del programa, como las preocupaciones sobre la efectividad del proceso de vinculación laboral o la transparencia en el uso de los recursos asignados.

---

[270] Ibídem, 5:05 min.
[271] Gobierno de México, “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro,” México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2018, p. 4, disponible en: *https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/pdf.pdf* (fecha de consulta: 21 de agosto de 2024).
[272] Vid. González, Sara y Barrientos Nieto, Omar, "Jóvenes Construyendo el Futuro 2024: Requisitos, Cuánto Pagan y Cómo Inscribirse al Programa." *El País*, 10 de enero de 2024, disponible en: *https://elpais.com/mexico/2024-01-10/jovenes-construyendo-el-futuro-2024-requisitos-cuanto-pagan-y-como-inscribirse-al-programa.html* (fecha de consulta: 21 de agosto de 2024).

Asimismo, la narrativa mediática que ensalza la accesibilidad del programa para personas con discapacidad y extranjeros podría estar creando una imagen idealizada de inclusión que no necesariamente refleja la realidad. Es crucial que los medios de comunicación también examinen de manera crítica cómo estos grupos realmente acceden al programa y si existen barreras adicionales que no se están visibilizando.

Por tanto, la mediatización del programa *Jóvenes Construyendo el Futuro* no sólo configura una percepción pública que favorece al gobierno, sino que también plantea preguntas sobre la responsabilidad de los medios en ofrecer una cobertura equilibrada. Para que la sociedad pueda formarse una opinión informada, es necesario que los medios aborden tanto los éxitos como las áreas de mejora del programa, proporcionando una visión más completa y crítica de su implementación.

Retomando, el entrevistado señala que la implementación de contenidos sobre igualdad de género ha mejorado con la reforma educativa de la "Nueva Escuela Mexicana".[273] Sin embargo, también menciona que la capacitación docente en este tema no ha sido la mejor, y que muchos no comprenden completamente el concepto de igualdad de género.

Recordando la necesidad de una política criminal holística que no sólo disuada la violencia sino que también aborde sus causas raíz, propuesta en el capítulo I. La falta de comprensión y aplicación efectiva de la igualdad de género en las escuelas puede verse como una manifestación de las limitaciones del modelo neoliberal, que tiende a priorizar la competitividad y el rendimiento económico sobre la equidad social. La capacitación deficiente y la falta de recursos reflejan una interpretación distorsionada del neoliberalismo, en donde en lugar de promover el bienestar de las sociedades, exacerba las desigualdades estructurales.

El profesor expresa que las políticas gubernamentales actuales no son suficientes ni efectivas para salvaguardar el derecho a la educación. "La implementación de becas, para mi punto de vista no es lo correcto que sea para todos…porque va a recibir exactamente lo mismo el joven que saca seis o que tiene

[273] Ibídem, 3:22 min.

cuatro extraordinarios, que va arrastrando materias al que tiene excelencia."[274] Igualmente, la infraestructura inadecuada y la falta de recursos son problemas recurrentes que impiden el desarrollo integral de los estudiantes. "En el papel todas las reformas educativas los programas en papel todos cumplen con la función que se les da... ya en la práctica desafortunadamente no podemos cumplir con eso,"[275] menciona el entrevistado.

Estos puntos son respaldados por la crítica que hacemos al modelo neoliberal mal interpretado y ejecutado, donde se argumenta que la equivoca interpretación del paradigma neoliberal norteamericano ha priorizado intereses económicos sobre el bienestar social, exacerbando las desigualdades y afectando la implementación efectiva de políticas públicas. Por un lado, la infraestructura deficiente en las escuelas es una manifestación de esta problemática, donde la inversión en educación se ve limitada por políticas económicas que favorecen la austeridad y la reducción del gasto público. Por otro lado, la forma de gestionar y otorgar becas económicas a todos los alumnos como estrategia para salvaguardar el derecho humano a la educación, teniendo como justificación el factor de la pobreza para evitar la deserción, es todavía un error más grande.

Por añadidura, el principio del interés superior de la niñez es fundamental y debe guiar todas las acciones y políticas dirigidas a los menores, garantizando sus derechos y bienestar integral. Sin embargo, el profesor revela que las condiciones en las escuelas a nivel medio superior son inadecuadas para cumplir con este principio, especialmente en términos de infraestructura, alimentación, salud y educación. A pesar de que las reformas educativas y programas gubernamentales están bien diseñados en teoría, existe una desconexión significativa entre lo estipulado en el papel y la realidad. La infraestructura escolar insuficiente impide que los alumnos desarrollen plenamente sus habilidades y reciban una educación de calidad. Además, la falta de espacios adecuados para la alimentación, y la ausencia de servicios de salud dentro de las escuelas agravan la situación. Estas deficiencias no sólo violan el derecho de los niños a una educación digna y de

[274] Ibídem, 14:32 min.
[275] Ibídem, 4:44 min.

calidad, sino que también comprometen su desarrollo integral, evidenciando una falta de compromiso del Estado para salvaguardar verdaderamente el interés superior de la niñez en el sistema educativo mexicano.

El derecho humano a la alimentación, especialmente en el contexto escolar, es un pilar fundamental para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Previsto en el interés superior de la niñez, este derecho implica no sólo el acceso a alimentos suficientes, sino también a una nutrición adecuada y saludable que favorezca su crecimiento y rendimiento académico. Sin embargo, la realidad en muchas escuelas mexicanas, como nos comenta el profesor, contrasta drásticamente con este ideal. Para empezar, "no hay espacios adecuados para que los jóvenes se puedan alimentar."[276] En lugar de fomentar una alimentación saludable, las cooperativas escolares a menudo venden productos como refrescos, golosinas y otros alimentos no saludables en condiciones insalubres.[277] Esta práctica no sólo pone en riesgo la salud de los estudiantes, fomentando problemas como la obesidad y la diabetes, sino que también refleja una grave negligencia en cuanto a la higiene y calidad de los alimentos ofrecidos.

En este sentido, nos encontramos ante una realidad invertida. El Estado, quien debería ser el director de este derecho humano, proporcionándolo de forma gratuita, la realidad es que la iniciativa privada, con intereses económicos, controla esta actividad dentro de las escuelas. Esta situación es una consecuencia de la interpretación equivocada del paradigma neoliberal que el Estado mexicano ha hecho. En lugar de proteger y promover la salud de los estudiantes, se priorizan las ganancias económicas, lo que perpetúa la venta de alimentos poco saludables y compromete el bienestar infantil. Por lo tanto, es imperativo que las políticas escolares se alineen con los principios del derecho a la alimentación y el interés superior de la niñez, asegurando que los alimentos disponibles en las escuelas sean proporcionados por el Estado en lugares salubres, de forma óptima y gratuita. Y en cuanto a las cooperativas, según la libertad de libre mercado, contemplarlas como

[276] Ibídem, 8:27 min.
[277] Vid. Ibídem, 9:00 min.

elección libre de consumo en donde se tenga regulado los productos que no sean una amenaza de riesgo a la salud de los consumidores.

En cuanto al tema de la salud, este derecho tal como lo prevé el interés superior de la niñez, es esencial para garantizar el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes, y su capacidad para aprender y desarrollarse plenamente. Este derecho incluye no sólo el acceso a servicios médicos adecuados y oportunos, sino también la implementación de medidas preventivas y de emergencia en las escuelas. Sin embargo, la realidad compartida por el profesor muestra un panorama preocupante. “En la salud desde mi punto de vista estamos peor,”[278] refiriendo que no se cuenta siquiera con enfermería. A pesar de sus esfuerzos por buscar cursos de primeros auxilios y capacitarse,[279] se enfrentan a protocolos restrictivos que les impiden llevar a los alumnos a servicios médicos externos y les obligan a esperar a que llegue una ambulancia,[280] independientemente de la urgencia del caso.

Esta situación es un reflejo de la interpretación equivocada del paradigma neoliberal norteamericano, donde se priorizan los intereses económicos y se austerizan los recursos en detrimento del bienestar infantil. Al enfocarse en la reducción de costos y la maximización de beneficios, se ha descuidado la provisión de servicios médicos dentro de las instituciones educativas. La falta de recursos adecuados y de personal médico capacitado dentro de las escuelas pone en riesgo la salud y la seguridad de los estudiantes, quienes deberían recibir atención inmediata y de calidad.

En lugar de asegurar que las escuelas cuenten con infraestructuras y servicios médicos necesarios, el Estado ha delegado esta responsabilidad en los profesores y los propios alumnos. Conscientes de la falta de este servicio, los profesores buscan de manera externa capacitaciones en primeros auxilios. Por su parte, los alumnos deben utilizar la beca otorgada para cubrir los servicios de salud, una perversa y conservadora estrategia que minimiza las obligaciones del Estado mediante apoyos económicos directos a la ciudadanía. Esta interpretación además de errónea y mal practicada, del modelo neoliberal propuesto a mediados del siglo

[278] Ibídem, 11:14 min.
[279] Vid. Ibídem, 11:35 min.
[280] Vid. Ibídem, 12:01 min.

pasado por la Escuela de Chicago y su mayor exponente; Milton Friedman, revela también, un atraso significativo de aproximadamente 70 años o más en las estrategias para adoptar este que sería el resultado dialéctico entre el estado de bienestar y el libre mercado.

Por lo tanto, es imperativo evaluar y reorientar las políticas públicas para garantizar que el derecho a la salud de los niños sea plenamente respetado y protegido, proporcionando recursos suficientes y capacitación adecuada para enfrentar emergencias médicas de manera eficiente y eficaz.

Por el lado del derecho humano a la educación como pilar del interés superior de la niñez, el Artículo 3º de la CPEUM, establece que la educación debe ser de excelencia, gratuita, laica y obligatoria. No obstante, la entrevista con el profesor destaca múltiples desafíos en la implementación de estos principios. En primer lugar, la excelencia educativa se ve comprometida por la falta de infraestructura adecuada, "…no contamos con laboratorio de cómputo, no contamos con un laboratorio de idiomas, y tampoco hay el suficiente espacio para áreas recreativas,"[281] lo que limita las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. A pesar de los esfuerzos del personal docente para ofrecer una educación de calidad, las condiciones precarias de las instalaciones dificultan el cumplimiento de este objetivo, "…los pizarrones no están bien… y butacas que nosotros tenemos que estar arreglando,"[282] lo que también revela desde el interés superior de la niñez, una falta de sanos espacios de esparcimiento para su desarrollo integral.

En cuanto a la gratuidad, el profesor señala que, aunque la educación debería ser gratuita, en la práctica las escuelas dependen de cuotas voluntarias para cubrir costos operativos básicos, como el salario del personal de mantenimiento y la compra de insumos necesarios.[283] Esto demuestra que la promesa de una educación gratuita no se cumple plenamente, ya que las familias deben contribuir económicamente para sostener las operaciones escolares.

El carácter laico de la educación también enfrenta retos. Aunque el docente afirma hacer todo lo posible para mantener un ambiente educativo laico, menciona

[281] Ibídem, 05:36 min.
[282] Ibídem, 13:26 min.
[283] Vid. Ibídem, 15:30 min.

la presencia de la santería como práctica religiosa de moda dentro de la escuela, lo que puede generar conflictos y malentendidos entre los estudiantes de otras religiones como la cristiana, católica y hasta judía.[284] La diversidad religiosa en el entorno escolar requiere una gestión cuidadosa para asegurar que se respete el principio de laicidad.

La obligatoriedad de la educación tampoco se cumple en su totalidad. El profesor describe una alta tasa de deserción escolar,[285] atribuyéndole a la falta de interés de algunos estudiantes y al insuficiente compromiso de los padres en la educación de sus hijos.[286] La inexistencia de mecanismos eficaces para obligar a los jóvenes a asistir a la escuela y asegurar su permanencia en el sistema educativo muestra una brecha significativa en la implementación de este principio constitucional.

En resumen, aunque el Artículo 3º CPEUM establece claramente los pilares de la educación en México, la realidad muestra una distancia considerable entre la normativa y su aplicación práctica, afectando negativamente la calidad y equidad de la educación ofrecida a los estudiantes.

Finalmente, el relato del profesor sobre la venta de drogas en la escuela y la intervención policial limitada debido a protocolos de derechos humanos ilustra las dificultades prácticas en la prevención de la violencia. "Hubo un tiempo... que en nuestra escuela se vendía muchísima droga... nosotros no podemos revisar las mochilas, no podemos hacer operación mochila,"[287] relata el entrevistado. Este caso refleja la necesidad de un enfoque integral y coordinado entre diferentes entidades gubernamentales y sociales, donde se aboga por una política criminal que integre esfuerzos multidisciplinarios para abordar las causas de la violencia.

El profesor sugiere que "en vez de haber dado becas, pudo haber invertido en la infraestructura de las escuelas."[288] Así mismo, aumentar la participación de los padres en la educación de sus hijos son pasos cruciales para mejorar la educación.

---

[284] Vid. Ibídem, 16: 37 min.
[285] Vid. Ibídem, 17:16 min.
[286] Vid. Ibídem, 17:23 min.
[287] Ibídem, 19:15 min.
[288] Ibídem, 16:10 min.

Según el entrevistado, "…si nosotros contáramos con una infraestructura adecuada, elevaríamos muchísimo más el nivel educativo."[289] Esta visión se alinea con la propuesta de un enfoque multidisciplinario y colaborativo propuesta en el capítulo I, donde se destaca la importancia de una intervención integral que incluya la salvaguarda de los derechos fundamentales al interior de las escuelas para prevenir la violencia y promover la justicia social.

El análisis crítico de la entrevista al profesor de educación media superior destaca las limitaciones estructurales y contextuales que comprometen la efectividad de la educación como herramienta de prevención de la violencia. Es crucial que los actores sociales y políticos reconozcan y se comprometan con el enfoque de prevención primaria, ya que se estaría invirtiendo en la creación de una sociedad más justa y segura donde los esfuerzos actuales se reflejen en beneficios futuros para todos. Recordemos que, según el imperativo categórico kantiano, abordar este fenómeno dirigido hacia el género mujer específicamente y por lo menos en este nivel preventivo, es un error moral, ya que el imperativo categórico comulga por una igualdad universal. Integrar de manera obligatoria y universal el acceso a la educación básica contribuirá significativamente a disminuir la incidencia de la violencia contra la mujer en el futuro. Este enfoque se ve reforzado por la teoría de los sistemas complejos adaptables, donde las entidades interactúan como un todo coordinado, similar a la ética kantiana que propone que nuestras acciones deben ser diseñadas para funcionar como leyes universales.

La interpretación radical del modelo neoliberal en México ha exacerbado las desigualdades y debilitado las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia y promover la igualdad de género en el primer nivel preventivo: la educación. Inspirada en estas directrices, la reforma en donde se ordena que la educación sea obligatoria busca mejorar la competitividad global de México y responder a desafíos internos como la desigualdad y la violencia. Asimismo, el uso indebido de becas educativas para la compra de motocicletas, alcohol, drogas y teléfonos celulares

[289] Ibídem, 7:10 min.

agrava esta problemática,[290] desviando recursos esenciales que deberían fortalecer la formación académica y ética de los estudiantes.

Es crucial adoptar un enfoque holístico y multidisciplinario para enfrentar de manera efectiva los desafíos educativos y sociales en México. Este enfoque permitirá abordar las problemáticas desde múltiples perspectivas, integrando diversas disciplinas para una solución más completa y efectiva. Así mismo, un sistema criminológico encargado de fiscalizar y evaluar este enfoque holístico y multidisciplinario en este nivel preventivo, aplicando un enfoque deontológico, aseguraría la alineación de las disposiciones constitucionales con la práctica real. De esta manera, se garantizaría que las políticas y acciones implementadas no sólo cumplan con los principios legales, sino que también sean éticas y efectivas en la prevención de la violencia y la promoción de la igualdad.

Como conclusiones generales, para este subcapítulo, el análisis crítico del impacto del neoliberalismo radical en el sistema educativo mexicano revela profundas desigualdades y deficiencias estructurales que afectan todos los niveles educativos, desde la educación básica hasta la media superior. La implementación de un modelo neoliberal distorsionado ha priorizado la competitividad económica sobre la equidad social, generando una serie de anomalías que requieren un cambio de paradigma urgente.

A lo largo de este subcapítulo, se ha evidenciado cómo la falta de atención y recursos en la prevención primaria de la violencia en el núcleo familiar refleja un sistema educativo que no cumple con su rol fundamental. Las deficiencias en infraestructura, la escasa calidad y eficacia de las instituciones, y la inconsistencia en la implementación de políticas preventivas son síntomas de un paradigma educativo en crisis. Siguiendo el concepto de paradigmas y cambio de paradigmas propuesto por Thomas Kuhn, estas anomalías acumuladas indican la necesidad de una revolución en la política educativa y social en México.

Asimismo, el análisis del SNTE muestra cómo la lucha por garantizar el cumplimiento del Artículo 3º de la CPEUM se entrelaza con dinámicas de poder que no siempre benefician de manera equitativa al sistema educativo. La politización de

[290] Ibídem, 15:00 min.

la educación y las alianzas estratégicas, aunque necesarias en ciertos contextos, deben ser analizadas y reorientadas para asegurar que promuevan una educación inclusiva y justa. La perspectiva de Michel Foucault sobre el poder y el conocimiento es crucial para entender y criticar estas dinámicas.

Por otro lado, la desconexión entre la teoría y la práctica es evidente en el ámbito educativo. La falta de involucramiento de los padres, la inconsistencia en el uso de materiales educativos para promover la igualdad de género, y la insuficiencia de recursos son desafíos significativos. La teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner refuerza la necesidad de un enfoque integral que considere tanto la educación en el hogar como en la escuela, enfatizando la interrelación entre estos entornos en la formación del comportamiento humano. Un ejemplo de esta interrelación se observó en un proyecto que incluyó a aproximadamente mil niños de familias de bajos ingresos, mayormente afroamericanos, que asistían a dos escuelas públicas.[291] El programa, diseñado para involucrar a los padres, partía de la premisa de que estos querían apoyar el éxito académico de sus hijos. En las primeras reuniones, los maestros subrayaron que la colaboración de los padres era esencial para un buen rendimiento escolar. Este enfoque demuestra cómo la conexión entre hogar y escuela es crucial para el desarrollo integral de los niños.

Además, el análisis empírico de la educación básica destaca disparidades en la capacitación docente y la implementación de programas preventivos. Las condiciones laborales desiguales y la insuficiencia de infraestructura educativa limitan la efectividad de estas políticas. “Las diferencias entre el hogar y la institución infantil no se limitan al microsistema. En el nivel del mesosistema, la institución está mucho más aislada de otros entornos que el hogar, de manera que el niño tiene menos probabilidades de adquirir experiencia en otros ambientes.”[292] Por ello, es esencial, tanto desde una perspectiva científica como social, establecer las características ecológicas específicas de las instituciones y su impacto en el desarrollo infantil. La necesidad de equidad en las condiciones laborales y de un entorno educativo seguro y saludable es fundamental para la prevención de la

[291] Vid. Op. Cit. Bronfenbrenner, Urie, “*La Ecología Del Desarrollo Humano: Experimentos en Entornos Naturales y Diseñados*,” p. 251.
[292] Ibídem, p. 182.

violencia, reafirmando la teoría de Bronfenbrenner sobre la importancia del entorno en la educación.

Igualmente, el impacto del neoliberalismo radical en la educación, tanto básica como media superior, muestra cómo la reducción del gasto público y la privatización de servicios esenciales han exacerbado las desigualdades. La falta de infraestructura adecuada, la capacitación deficiente en igualdad de género y la alta deserción escolar son ejemplos claros de las anomalías que han llevado a una crisis en el sistema educativo. Siguiendo la lógica de Kuhn, es imperativo un cambio de paradigma que retome la versión original del neoliberalismo norteamericano, promoviendo la libertad de mercado junto con un rol regulador del Estado para asegurar la equidad y prevenir los monopolios.

En consecuencia, a partir de estos análisis, se ha desarrollado una teoría para explicar por qué la política criminal preventiva de primer nivel no funciona. Esta teoría se basa en la identificación empírica de cómo la realidad se disocia de lo previsto en la ley. En la práctica, se vive en una realidad diversa y frecuentemente opuesta a la esperada en las normativas legales, como si se tratara de una realidad invertida y mal interpretada. Esta realidad es el efecto de una equivocada interpretación y aplicación del modelo neoliberal norteamericano, que en lugar de promover la equidad y la justicia social, ha generado profundas desigualdades y deficiencias estructurales. A esta teoría la hemos llamado *la teoría del espejo*.

Finalmente, el análisis del impacto de la versión radical neoliberal en todos los niveles del sistema educativo mexicano, desde la perspectiva de los paradigmas de Kuhn y la ética kantiana, sugiere la necesidad de un cambio de paradigma hacia un modelo que integre los valores originales del neoliberalismo norteamericano. Este nuevo paradigma debe enfocarse en la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, superando las limitaciones del enfoque distorsionado del neoliberalismo norteamericano actualmente puesto en práctica en México. Sólo a través de un compromiso ético y la implementación efectiva de políticas educativas, diseñadas con un genuino interés por la dignidad humana y el bienestar de todos los estudiantes, se podrá garantizar una educación de calidad y contribuir a la prevención de la violencia y la reducción de las desigualdades sociales en México.

Nuestra teoría del espejo ofrece un marco conceptual para entender la disociación existente entre la ley y la realidad, lo que facilita la identificación y corrección de desajustes estructurales en la política criminal. Este enfoque resulta fundamental para optimizar tanto el primer como el segundo nivel preventivo de la violencia, especialmente en el contexto de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Partiendo de esta premisa, es crucial analizar el estatus del segundo nivel preventivo, lo cual permitirá una evaluación crítica de la efectividad de las medidas actuales. Este análisis también ayudará a identificar las estrategias necesarias para fortalecer la prevención y protección en un ámbito tan delicado y significativo como es la violencia contra la mujer en el núcleo familiar.

3.2 El estatus del segundo nivel preventivo de la PCPVCMNF

El análisis crítico de la política criminal de segundo nivel para la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar en el Estado de México requiere una comprensión profunda de la evolución y funciones de la policía. Desde sus inicios en el siglo XIX, la policía en el Estado de México ha evolucionado significativamente, consolidándose como un elemento crucial en el mantenimiento del orden público y la seguridad social. En este subcapítulo se expondrá cómo la estructura policial y sus funciones actuales, tanto preventivas como reactivas, contribuyen a la disuasión del crimen y la protección de las víctimas.

Parte de la investigación en este apartado se basa en nuestra formación profesional como Policía de Investigación (PDI), adquirida en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Ciudad de México (IFPyES-CDMX) y en la Universidad Mexiquense de Seguridad del Estado de México (UMSEM).[293] Además, hemos implementado los principios del método etnográfico en la FEADVVG. Nuestra experiencia operativa, junto con los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante nuestra formación inicial, conforme al

[293] Vid. Secretaría de Seguridad del Estado de México, “Constancia de Asistencia al Curso: Formación Inicial para Policía de Investigación (Activos),” Lerma, Estado de México, agosto de 2019, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1Ppeq1dv1vdOy_Eozavh5rATWFkPAw7NR/view?usp=sharing* (fecha de consulta: 12 de junio de 2024).

Artículo 87 de la LGSNSP, nos ha permitido desarrollar una comprensión profunda y crítica de las estrategias y procedimientos de la policía reactiva.

En el municipio de Cuautitlán Izcalli, diversas estrategias innovadoras han sido implementadas para abordar la violencia de género, incluyendo la proximidad social, el Operativo Violeta y los Puntos Violetas. Estas iniciativas buscan no sólo disuadir el delito, sino también proporcionar un apoyo tangible y accesible a las víctimas, reflejando un enfoque multidisciplinario y holístico alineado con principios kantianos de dignidad y respeto a los derechos humanos. A través de entrevistas, conferencias, pláticas, inspecciones y análisis de casos, hemos aplicado una metodología científica y rigurosa para investigar y esclarecer el estado actual de la prevención de segundo nivel de la violencia contra la mujer, asegurando siempre el respeto al debido proceso legal y los derechos humanos. Además, esta investigación se complementa con una metodología documental, analizando normativas, informes y material histórico relevante, lo que nos ha permitido contextualizar y fundamentar nuestras observaciones empíricas. Este enfoque nos ha permitido no sólo exponer la situación en el Estado de México, sino también contribuir a la formulación de políticas integrales y preventivas que aborden las causas subyacentes de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar.

Sin embargo, persisten desafíos significativos en la implementación de estas políticas. La capacitación insuficiente del personal policial, las prácticas abusivas de detención y la falta de recursos adecuados limitan la efectividad de las medidas preventivas y de protección. Casos como el de la señora M.T.C. evidencian las barreras institucionales y la corrupción que enfrentan las víctimas al buscar justicia. Este subcapítulo no sólo expone y evalúa críticamente las estrategias actuales, sino que también es la base para proponer áreas de mejora, fortalecer la protección de las mujeres y la eficacia de la política criminal en el Estado de México.

3.2.1 La policía en el Estado de México

Para comprender el papel de la disuasión en el Estado de México, es fundamental examinar a la Policía como la principal herramienta del Estado. Este análisis abarca sus funciones, competencias y evolución, con un enfoque particular en su historia y desarrollo en el Estado de México.

La policía moderna en el Estado de México tiene sus orígenes en el siglo XIX, poco después de la independencia de México. Durante este período, la necesidad de mantener el control social y asegurar la seguridad se volvió primordial. Como señala Salvador Valencia Carmona, las primeras fuerzas de policía tenían un carácter tanto rural como urbano y su alcance estaba limitado a las localidades específicas.[294] "En 1826, se estableció el cuerpo de policía municipal ´Celadores Públicos´, compuesto por personal a pie y a caballo. Posteriormente, se formaron los primeros ´batallones de policía´, encargados de la seguridad pública, la regulación del tránsito de carruajes y el auxilio en incendios."[295] Esta innovación marcó un hito en la estructura de la seguridad pública del Estado de México. La presencia combinada de hombres a pie y a caballo no sólo aseguraba una cobertura efectiva de las calles, sino que también sentaba las bases para un manejo robusto del orden público.

A medida que el Estado de México consolidaba su estructura política y administrativa, la función policial evolucionó hacia una organización más formal y estructurada. Bajo la dirección de José Vicente Villada en la década de 1910, se promulgó la primera Ley de Policía del Estado de México, estableciendo los cimientos para la organización y operatividad de las fuerzas policiales.[296] Este desarrollo, que se fue gestando gradualmente, permitió la modernización de estas fuerzas y su adaptación a las cambiantes necesidades sociales. El inicio de la institución policial en el Estado de México durante el periodo constitucionalista marcó un momento crucial en la administración local. Durante este tiempo, entidades como el Ejército Constitucionalista, las fuerzas de seguridad pública,

[294] Vid. Valencia Carmona, Salvador, "El municipio mexicano: génesis, evolución y perspectivas contemporáneas," México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2008, p. 76, disponible en: https: //inehrm.gob.mx/recursos/Libros/elmunicipiomexicano.pdf, (fecha de consulta: 23 de agosto de 2023).

[295] Vid. Secretaría de Seguridad, Gobierno del Estado de México, Historia, disponible en:http://sseguridad.edomex.gob.mx/seguridad-infantil/conce-a-ces/historia#:~:text=En%201826%20se%20cre%C3%B3%20un,poblaci%C3%B3n%20en%20caso%20de%20incendios, (fecha de consulta: 23 de agosto de 2023).

[296] Vid. Alanís Boyzo, Rodolfo, "Historia de la Revolución en el Estado de México (1910-1920)," México, Fondo Editorial Estado de México, 2015, pp. 53-95, disponible en: https://ceape.edomex.gob.mx/sites/ceape.edomex.gob.mx/files/Historia%20de%20la%20Revolucion_baja%20resolucion.pdf, (fecha de consulta: 23 de agosto de 2023).

cuerpos locales de voluntarios y la policía municipal desempeñaron roles esenciales en el mantenimiento del orden y en la represión de grupos rebeldes y delincuentes.[297] Estos esfuerzos ilustraron la complejidad de gestionar la seguridad en un contexto de conflictos y agitación política.

La creación de esta fuerza estatal generó tensiones con otras instancias de seguridad, como las guardias locales y la policía municipal, debido a disputas sobre jurisdicción y competencias. A pesar de los avances en la represión del crimen, la diversidad de cuerpos de seguridad y la falta de claridad en las responsabilidades y jerarquías complicaron la implementación de una estrategia de seguridad integral. En este contexto, el gobernador Agustín Millán jugó un papel destacado al fomentar la creación de una fuerza de seguridad estatal.[298] En diciembre de 1917, el Congreso de la Unión autorizó la formación de esta unidad, que tenía como objetivo enfrentar y perseguir a los grupos rebeldes, especialmente los zapatistas. Esta medida evidenciaba el compromiso de las autoridades para eliminar la influencia del zapatismo en la región, subrayando la necesidad de una fuerza local que pudiera abordar los desafíos específicos del Estado de México.

La compleja evolución de la policía en el Estado de México ha sido objeto de estudio por diversos académicos. Alejandro Porte Petit González, por ejemplo, resalta que la consolidación de la estructura gubernamental y la promulgación de leyes específicas fueron claves en el desarrollo de una estructura policial más formalizada.[299] Este análisis subraya la interacción entre los distintos cuerpos de seguridad durante la Revolución Mexicana y las tensiones entre coordinación y competencia en la gestión de la seguridad pública. Hacia mediados del siglo XX y hasta la actualidad, la policía enfrenta desafíos derivados de la creciente complejidad de la criminalidad, influenciada por la urbanización y la migración.

---

[297] Vid. Ídem.
[298] Vid. Ídem.
[299] Vid. Porte Petit González, Alejandro, “Policía en México.75 años de su implementación”, en García Ramírez,Sergio e Islas de González Mariscal, Olga, (Coords), Evolución del sistema penal en México. Tres cuartos de siglo, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2017, pp.161-167, Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4770/11.pdf (fecha de consulta: 24 de agosto de 2023).

La evolución de la policía en el Estado de México refleja su origen como una herramienta represiva, nacida en el seno de las derechas conservadoras, cuyo principal fin era el control de las izquierdas y la disidencia política. Desde la formación de los Celadores Públicos en 1826 hasta la creación de fuerzas estatales bajo el mandato del gobernador Agustín Millán en 1917, la función policial ha estado intrínsecamente ligada a la preservación del orden establecido y la supresión de movimientos rebeldes, como el zapatismo. La promulgación de la primera Ley de Policía del Estado de México durante la administración de José Vicente Villada en la década de 1910 estableció las bases para una fuerza policial con un claro sesgo de protección del status quo conservador. Este marco legal y operativo no sólo reflejaba la necesidad de un control social estricto en un contexto de conflictos políticos, sino también la intención de reprimir cualquier ideología que amenazara los intereses de las élites en el poder.

3.2.1.1 La policía preventiva en México: niveles, percepción y su realidad operativa

Para comenzar, el artículo titulado: *Construcción de la imagen de la seguridad o control social multidimensional* de José Antonio Álvarez León proporciona una visión crítica sobre cómo se construye la percepción de seguridad en la sociedad y la importancia del control social. Álvarez León argumenta que la seguridad pública y el control social son componentes esenciales de la política criminal y que la construcción de la imagen de la seguridad implica tanto la dimensión formal como la informal del control social.[300] Este enfoque resalta la importancia de la percepción pública de la seguridad y cómo las políticas y acciones de las autoridades influyen en esta percepción.

La policía preventiva en México juega un rol crucial en el mantenimiento del orden y la seguridad pública. Este apartado examina las tres esferas gubernamentales en las que se ejecuta la seguridad pública, así como su realidad operativa, evaluando su efectividad y los desafíos que enfrenta en la

[300] Vid. Álvarez León, José Antonio, "Construcción de la imagen de la seguridad o control social multidimensional," *Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM 3*, no. 5, 2007, p. 84, disponible en: http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/posder/cont/5/cnt/cnt5.pdf (fecha de consulta: 13 de Julio de 2024).

implementación de políticas disuasivas y no preventivas, como se nos ha hecho creer.

En cuanto a sus funciones y competencia, la estructura policial en México se compone de diversos cuerpos especializados, cada uno con funciones específicas. Y de acuerdo con Edith Olivares Ferreto, existen tres niveles de policía en el país: una a nivel Federal, otra a nivel Estatal y finalmente a nivel Municipal.[301] Cada una de estas instituciones opera bajo el marco legal establecido por las leyes mexicanas, como la LGSNSP y la Ley General de Seguridad Pública (LGSP).

Basándonos en nuestra formación como PDI en el IFPyES-CDMX, sabemos que la policía en México, además de estructurarse en tres niveles, esta se clasifica en dos categorías principales: *preventiva* y reactiva. A la policía *preventiva*, a menudo mal interpretada, se le atribuye funciones que no desempeña, creyendo que actúa como la primera línea de defensa contra el delito y la inseguridad. Este órgano disuasorio/represivo del Estado se distingue por estar siempre uniformado, transportarse en vehículos oficiales rotulados y por intervenir ante conductas flagrantes que podrían desencadenar en faltas administrativas o delitos, para la formalización de una carpeta de investigación.

El término *policía preventiva* puede resultar engañoso a simple vista, ya que su nombre sugiere una labor centrada en el trabajo anticipado del delito. Sin embargo, al profundizar en su significado etiológico y encararlo a las reales funciones que realiza, se hace evidente que su enfoque no se refiere a este tipo de prevención integral, sino que abarca acciones disuasivas y respuestas inmediatas (prevención de segundo nivel), su término preventivo en todo caso, podría referirse a sus actuaciones previas a la materialización de alguna carpeta de investigación o ante alguna flagrante falta administrativa, ya sea cívica o de tránsito.

De acuerdo con el análisis etimológico y etiológico del término prevención, realizado en el segundo capítulo, la policía *preventiva* entonces, debiera trabajar en

[301] Vid. Olivares Ferreto, Edith, "Análisis Político: Condiciones sociolaborales de los cuerpos policiales y seguridad pública," Friedrich Ebert Stiftung, ISBN: 978-607-7833, 2010, pp. 6-7., disponible en: *https://es.scribd.com/doc/246871055/condiciones-sociolaborales-de-los-cuerpos-policiales-pdf,* [consultado el 24 de agosto de 2024].

acciones integrales y bien programadas (educación, salud, empleo o vivienda). Nuevamente podemos identificar como la manipulación del lenguaje, es en palabras de Carme Jiménez Huertas, una estrategia perversa de control social, haciendo creer a los gobernados una cosa diversa de la que realmente acontece. Por lo que tenemos a bien afirmar y con base en la teoría de Cohen y Felson: *actividad rutinaria*, que la policía preventiva, y que a partir de este momento nos referiremos a esta como policía uniformada, no trabaja de forma integral a la violencia contra la mujer, la policía uniformada en sus tres niveles de gobierno sólo disuade y actúan como guardianes, pudiendo actuar sólo en el momento en el que se está materializando la violencia contra la mujer (flagrancia) o después de que esta ha tenido lugar y de la que actuaciones protocolarias como el Informe Policial Homologado (IPH) se realizan para materializar la carpeta de investigación, volviéndose una herramienta crucial como primer respondiente en situaciones de emergencia a todos los niveles de gobierno.

La actual Guardia Nacional, antes Policía Federal, es el principal órgano policial uniformado de seguridad pública a nivel federal según el Artículo 21º de la CPEUM, encargada de la disuasión y combate al crimen de alta complejidad. Por otro lado, la Policía Estatal uniformada se concentra en el ámbito regional de cada una de las 31 entidades de la República Mexicana, teniendo como la excepción a la Ciudad de México. Ambos ejerciendo competencias de seguridad pública previstas en el Artículo 2º de la LGSNSP como la *prevención* especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones de tránsito, así como la reinserción social del sentenciado. Finalmente, la Policía Municipal opera a nivel local de las entidades estatales, velando por la paz y el orden en las comunidades ejerciendo competencias de seguridad pública como la disuasión del delito y la sanción de las infracciones de tránsito.

Aclarado lo anterior, la policía uniformada realiza patrullajes, vigilancia y actividades disuasorias para evitar la violencia contra la mujer, contribuyendo así a la protección de estas en su entorno social. Autores como David M. Kennedy han destacado que la disuasión, realizada a través del patrullaje por parte de los agentes de policía, es el mecanismo principal a través del cual se disminuye la

delincuencia y se aumenta la seguridad pública.[302] Es decir que: el patrullaje es la técnica principal de la policía uniformada para generar un ambiente de seguridad y vigilancia, que desalienta a los posibles violentadores de mujeres. Esta estrategia busca evitar que la violencia ocurra o se repita al crear la percepción de que hay una probabilidad alta de ser descubiertos y detenidos en el acto.

Por otro lado, la formación educativa de la policía uniformada en México, que se basa en estudios de bachillerato según lo evidencian los IPH que se revisaron durante mi etapa como observador no participativo en la FEADVVG, genera interrogantes sobre la preparación y eficacia operativa de las fuerzas de seguridad en los tres órdenes de gobierno. En conversaciones con policías de unidades especializadas en violencia de género, mencionaron haber recibido cursos de perspectiva de género, lo que refleja un intento de complementar su formación académica limitada con capacitaciones enfocadas, como lo establecen los Lineamientos de Actuación de la Policía de Género para los Municipios del Estado de México,[303] ante casos de Violencia contra las Mujeres y Feminicidio, que busca garantizar una respuesta adecuada y efectiva ante la violencia de género.

Sin embargo, aunque estos cursos representan un avance positivo, la complejidad y diversidad de las situaciones que enfrentan los oficiales demandan una profesionalización en materias legales, derechos humanos, comunicación y psicología entre otras. La restricción de su formación académica inicial podría estar vinculada a las deficiencias observadas en la implementación de estrategias disuasivas y en el manejo adecuado de los casos, lo que potencialmente debilita la efectividad de la policía uniformada en su rol crucial como línea de defensa en la protección de las víctimas y en la disuasión de delitos, según se subraya igualmente en los Lineamientos de Actuación de la Policía de Género para los Municipios del Estado de México.

---

[302] Vid. Kennedy, David M., “Disuasión y prevención del delito. reconsiderando la expectativa de Pena,” Barcelona, Marcial Pons, 2016, p. 23, disponible en: *https: //www.marcialpons.es/media/pdf/9788416212903.pdf* (fecha de consulta: 24 de agosto de 2023).

[303] Vid. Secretaría de Seguridad del Estado de México, "Lineamientos de Actuación de la Policía de Género para los Municipios del Estado de México," publicado el 20 de julio de 2023, Sección Primera, Tomo: CCXVI No. 14, disponible en: *https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2023/julio/jul201/jul201a.pdf* (fecha de consulta: 17 de mayo del 2024).

Así mismo, las unidades especializadas en violencia de género, tanto a nivel estatal como municipal, se distinguen visualmente por distintivos en vivos color rosa y/o violeta en sus uniformes y patrullas, un símbolo destinado a comunicar su enfoque especializado y sensibilidad hacia las cuestiones del género mujer. Sin embargo, durante la observación en la Fiscalía del municipio de Chalco, se notó una disparidad significativa en la composición de género del personal, con una predominancia de hombres sobre mujeres. Esta desigualdad de género fue corroborada por la Mtra. Nancy Pineda Renteria, Fiscal en turno, quien señaló que los elementos femeninos estatales están más capacitados en comparación con sus homólogos municipales.

Esta diferencia en la capacitación y el predominio de personal masculino en unidades que deberían liderar en la comprensión y tratamiento de la violencia contra la mujer suscita dudas sobre la efectividad de estas células para abordar las necesidades y perspectivas de las víctimas femeninas. Aunque los distintivos visuales buscan proyectar un compromiso con la lucha contra la violencia del género mujer, la efectividad de estas unidades podría verse comprometida si la representación de género no refleja de manera equitativa a la población que pretenden servir y si la capacitación no alcanza un nivel de rigor uniforme. Este desbalance y la variabilidad en la capacitación subrayan la necesidad de revisar y posiblemente reformar las políticas de reclutamiento para promover una mayor inclusión femenina y asegurar una formación como profesionistas, lo que podría mejorar significativamente la comprensión y el manejo de los casos de violencia contra la mujer.

Por otro lado, las fuerzas policiales uniformadas han tenido que adaptar nuevas estrategias para enfrentar la violencia contra la mujer. Recientemente, se han implementado tecnologías y sistemas de información para mejorar la eficiencia en la disuasión de este tipo de violencia. Un ejemplo de estas innovaciones fue presentado en la conferencia virtual titulada *Violencia de género en México*, donde se discutieron las principales y diversas estrategias disuasivas empleadas por la policía uniformada de género del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

3.2.1.1.1 Estrategias para disuadir la violencia contra el género mujer en Cuautitlán Izcalli

El 25 de noviembre de 2023 se llevó a cabo la conferencia titulada *Violencia de género en México*, gestionada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Cátedra Universidad e Integración Regional, con sede en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La ponente fue la Ingeniera Química Alejandra Penélope Vázquez Flores, titular tanto de la Policía Uniformada de Género como de la Policía Uniformada de Búsqueda de Personas del municipio de Cuautitlán Izcalli. Durante la conferencia, tuvimos la oportunidad de preguntarle acerca de las estrategias actuales que la Policía de Género de Cuautitlán Izcalli implementa para prevenir la violencia contra el género mujer, y de la que tuvimos como respuesta lo siguiente.

La primera estrategia interinstitucional implementada por la Policía de Género bajo la gestión de la presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, la Mtra. Karla Leticia Fiesco García,[304] es la proximidad social. Esta estrategia se coordina con otras instituciones municipales, como el Instituto Municipal para la Equidad de Género y el Desarrollo de las Mujeres (IMEGDEM), el Departamento de Integración Familiar (DIF) y diversas fiscalías especializadas en niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.[305] El objetivo es informar a la ciudadanía sobre las instituciones disponibles para apoyarles y denunciar actos de violencia. Esta estrategia refleja un enfoque multidisciplinario y holístico, esencial para abordar la violencia contra la mujer desde sus raíces, como se discute en el primer capítulo. La proximidad social no sólo se centra en la sanción de los perpetradores, sino también en la educación y prevención, promoviendo la justicia social y fortaleciendo el tejido comunitario. Además, este enfoque ético y moral, basado en principios kantianos, asegura que las políticas públicas respeten y dignifiquen a cada individuo, contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa.

[304] Vid. raul briseno, “La violencia de género en México,” [Video], 21 de mayo de 2024, min. 59:04, disponible en: *https://www.youtube.com/watch?v=PDtwiJy32Kk* (fecha de consulta: 21 de mayo del 2024).
[305] Vid. Ibídem, min. 59:29.

Las herramientas utilizadas durante esta labor, según la ponente, son trípticos, carteles y *flyers*, que informan a la ciudadanía sobre qué es la violencia, sus modalidades y tipos, además, se explican las funciones de la Policía de Género, el IMEGDEM y el DIF.[306] La ciudadanía es invitada a acudir a estos lugares como primeras instancias de contacto para denunciar actos de violencia. Estas herramientas informativas son fundamentales para promover el derecho humano a una vida libre de violencia, educando a la población sobre sus derechos y los recursos disponibles. La distribución de material educativo fortalece las estrategias de prevención y educación, empoderando a la ciudadanía con el conocimiento necesario para actuar y denunciar. Este enfoque también fomenta la participación activa de la comunidad en la lucha contra la violencia, asegurando respuestas gubernamentales inclusivas y efectivas. Así, se refuerza la intersección de las políticas públicas con la participación ciudadana, alineándose con una política criminal holística que aborde las causas raíz de la violencia y promueva la justicia social.

En este mismo orden de ideas, la ponente explicó que el primer contacto con estas instituciones es un trabajo multidisciplinario, en el cual profesionales como psicólogos y abogados evalúan las condiciones de la mujer violentada.[307] Este enfoque multidisciplinario es esencial para abordar las múltiples dimensiones de la violencia, tal como se describe en el primer capítulo de esta tesis, donde se destaca la importancia de integrar un sistema criminológico para abordar de forma holística la disuasión de la violencia contra la mujer.

Posteriormente, “la policía de género terminaba la denuncia en el centro de justicia.”[308] Un factor crucial en este proceso, asegura la ponente, es la seriedad y el trato que recibe la víctima al ir acompañada de la Policía de Género. Este acompañamiento se alinea con el enfoque de disuasión descrito en el segundo nivel de prevención, donde la presencia activa y visible de las fuerzas de seguridad juega un rol vital no sólo en la protección inmediata de la víctima, sino también en la

[306] Vid. Ibídem, min. 1:00:00
[307] Vid. Ibídem, min. 1:00:40.
[308] Ibídem, min. 1:00:44.

prevención de la reincidencia y en la percepción de seguridad por parte de la comunidad.

"Hemos visto que, lamentablemente, en ocasiones la atención que se nos da cuando llegamos solos al centro de justicia es diferente a la atención que recibimos al llegar acompañados por la Policía de Género."[309] Este testimonio se refuerza con el análisis crítico de las estructuras patriarcales y el machismo prevalente en la sociedad mexicana, que influyen en la atención desigual que reciben las mujeres violentadas. La presencia de la Policía de Género no sólo legitima la denuncia de la víctima, sino que también actúa como un mecanismo disuasorio efectivo contra posibles actos de violencia adicionales, destacando la necesidad de políticas públicas que fortalezcan estos acompañamientos.

Otra estrategia mencionada durante las campañas informativas es el uso de mecanismos alternativos para denunciar la violencia contra la mujer, como la denuncia en línea. Este método, según la ponente, evita la espera de seis a ocho horas para que el fiscal atienda la denuncia.[310] Una vez realizada la denuncia en línea, sólo se debe esperar entre 24 y 48 horas para ratificar la declaración de forma presencial. La denuncia en línea representa una innovación crucial en la política criminal, facilitando el acceso de las víctimas a la justicia de manera rápida y eficiente. Este mecanismo reduce significativamente las barreras temporales y logísticas, permitiendo que las víctimas denuncien la violencia sin la espera prolongada asociada con los métodos tradicionales. Además, fortalece la protección y garantía de los derechos humanos al proporcionar una herramienta accesible y conveniente para que las víctimas puedan denunciar la violencia y recibir protección.

La implementación de la denuncia en línea demuestra la adaptabilidad y eficiencia de las políticas públicas en respuesta a las necesidades de la sociedad, garantizando una respuesta rápida y efectiva a las denuncias de violencia y reflejando un compromiso con la mejora continua de las políticas públicas. Este enfoque se alinea con la LGAMVLV, que en su Artículo 7º establece la obligación del Estado de desarrollar mecanismos accesibles para la denuncia de actos de

[309] Ibídem, min. 1:00:48.
[310] Vid. Ibídem, min. 1:01:27.

violencia, y con el Artículo 1º de la CPEUM, que obliga a los trabajadores del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

De igual modo, otro mecanismo de denuncia alternativa es el que se realiza ante los juzgados de lo familiar en línea, donde la Policía de Género acompaña a la víctima para iniciar denuncias por guarda y custodia de menores, así como por violencia familiar.[311] Este acompañamiento es parte de un enfoque multidisciplinario que se alinea con las estrategias preventivas de segundo nivel, donde la presencia activa de fuerzas de seguridad juega un rol crucial en la disuasión y protección de las víctimas.

En este proceso, las medidas de protección son enviadas al celular de la víctima, facilitando una respuesta rápida y efectiva.[312] Esta práctica se sustenta en la teoría de la disuasión descrita en el segundo capítulo, donde se enfatiza la importancia de la intervención tecnológica y la comunicación efectiva en la protección de las víctimas. El uso de tecnología para enviar medidas de protección directamente al celular de la víctima no sólo asegura que estas medidas sean implementadas de manera oportuna, sino que también empodera a la víctima al proporcionarle un acceso inmediato a recursos de seguridad. Esta estrategia, también se fundamenta en la Convención de Belém do Pará, que en su Artículo 7º insta a los Estados a establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido objeto de violencia, incluyendo medidas de protección y mecanismos de apoyo.

Además, la necesidad de que la víctima acuda posteriormente a los juzgados de lo familiar para dar seguimiento al proceso se vincula con la comprensión de la violencia familiar como un fenómeno que requiere intervención continua y seguimiento,[313] tal como se analiza en el segundo capítulo. Este procedimiento no sólo refuerza la importancia del acompañamiento inicial, sino que también subraya la necesidad de un sistema de justicia que brinde apoyo constante y accesible a las víctimas de violencia familiar.

[311] Vid. Ibídem, min. 1:01:47.
[312] Vid. Ibídem, min. 1:01:59.
[313] Vid. Ibídem, min. 1:02:02.

Otra estrategia para prevenir la violencia contra la mujer ha sido ofrecer pláticas preventivas en las escuelas, donde se informa a niñas, niños y jóvenes sobre qué es la violencia y cómo identificar el acoso y el abuso sexual.[314] El objetivo, según la ponente, es generar confianza en los policías y autoridades de procuración de justicia, para que los estudiantes se sientan seguros al denunciar actos de violencia. También se les informa sobre la existencia de una fiscalía especializada que los asiste, un instituto de la juventud que los puede acompañar y una línea telefónica donde pueden solicitar orientación de un psicólogo.[315] Durante estas pláticas, se hace hincapié en que estos mecanismos de atención no sólo están destinados a niñas y mujeres, sino también a niños y adolescentes que puedan ser víctimas de violencia.

Las pláticas preventivas en las escuelas representan una estrategia fundamental de educación y prevención en el microsistema, según la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner. Estas pláticas son esenciales para corregir y/o disuadir un posible adoctrinamiento machista iniciado en el núcleo familiar. Ofrecer asistencia vía telefónica con policías psicólogos o policías abogados se fundamenta en lo previsto en el Artículo 21º de la CPEUM, que establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública debe regirse por principios de profesionalismo. Informar a los estudiantes sobre los mecanismos de denuncia y apoyo fortalece la promoción y protección del derecho humano a una vida libre de violencia, asegurando que conozcan sus derechos y los recursos disponibles para protegerse y denunciar actos de violencia. Además, estas pláticas fomentan la participación activa de la comunidad educativa en la lucha contra la violencia, asegurando respuestas inclusivas y efectivas. Este enfoque se alinea con la Ley de Violencia Contra la Mujer (Violence Against Women Act, VAWA), que incluye disposiciones para la educación y prevención de la violencia en las escuelas, subrayando la importancia de la prevención y la protección integral.

También se implementan estrategias operativas policiales, como el Operativo Violeta. Esta estrategia se lleva a cabo los viernes y sábados por la noche, donde

[314] Vid. Ibídem, min. 1:02:32.
[315] Vid. Ibídem, min. 1:02:49.

se visitan bares y chelerías para entregar a las mujeres pulseras con los números de emergencia, informándoles que habrá patrullaje en la zona.[316] Esta intervención se alinea con las medidas preventivas de segundo nivel, destacadas en el segundo capítulo, que incluyen la presencia activa y visible de las fuerzas de seguridad para disuadir comportamientos delictivos y proteger a las mujeres en situaciones de riesgo.

Además, recordemos que el segundo nivel preventivo se caracteriza por como la intervención policial debe estar acompañada de acciones de cuidado y protección. La entrega de pulseras con números de emergencia no sólo facilita una respuesta rápida en caso de violencia, sino que también empodera a las mujeres al proporcionarles acceso directo a los recursos de seguridad. Este enfoque de disuasión y cuidado integral se refuerza con la posibilidad de que la Policía de Género ofrezca transporte a las mujeres en caso de no sentirse seguras y poderlas llevar a sus hogares,[317] asegurando así su seguridad y bienestar. La importancia de estas acciones radica en su capacidad para prevenir la violencia y fomentar un entorno de confianza hacia las autoridades. Tal como se analiza en el segundo capítulo, la intervención de la Policía de Género y el uso de estrategias preventivas multidisciplinarias son esenciales para abordar las causas estructurales de la violencia y ofrecer una protección efectiva a las víctimas.

Similarmente, la estrategia de disuasión denominada *Punto Violeta*, implementada por la Policía de Género, consiste en la instalación de puntos violetas en diversos establecimientos, como plazas comerciales, restaurantes y tiendas departamentales, que colaboran para señalizar estos lugares como seguros para las mujeres.[318] Estos puntos son clave en la disuasión de la violencia, ya que, en caso de que una mujer esté siendo seguida, puede acudir a estos lugares para solicitar ayuda y activar los mecanismos de asistencia. La estrategia de los Puntos Violetas refleja un enfoque multidisciplinario esencial para abordar tanto la violencia contra la mujer como la violencia por razones de género, integrando a diversos actores sociales y económicos en la creación de una red de apoyo y protección.

[316] Vid. Ibídem, min. 1:04:20.
[317] Vid. Ibídem, min. 1:04:30.
[318] Vid. Ibídem, min. 1:04:48.

Esta estrategia fortalece la protección del derecho humano a una vida libre de violencia, proporcionando lugares seguros donde las mujeres pueden buscar ayuda y activar mecanismos de asistencia en situaciones de peligro.

Así mismo, la implementación de los Puntos Violetas demuestra la adaptabilidad y eficiencia de las políticas públicas en respuesta a la violencia contra la mujer, asegurando una respuesta rápida y efectiva a las necesidades específicas de las víctimas. Este enfoque se alinea con la CEDAW, que en su Artículo 2º obliga a los Estados parte a adoptar medidas adecuadas para eliminar la discriminación y proteger a las mujeres de la violencia.

Sin embargo, la percepción pública de estos programas está significativamente influenciada por los medios de comunicación tecnológicos. La cobertura mediática favorable puede proyectar una imagen de mayor efectividad de lo que realmente es, mientras que la proliferación de redes sociales permite tanto la difusión rápida de información veraz como la propagación de noticias falsas, moldeando la narrativa pública y, en última instancia, la implementación de políticas.

El movimiento *#NiUnaMenos*, surgido en Argentina como respuesta a la creciente violencia contra la mujer por razones de género, ilustra cómo las campañas mediáticas y la percepción pública pueden moldear la efectividad de las políticas públicas. A pesar de su impacto significativo en la visibilización de la violencia contra las mujeres, los datos actuales revelan que las cifras de femicidios y otros actos de violencia contra la mujer continúan siendo alarmantes. El informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, muestra que, a pesar de las iniciativas como *#NiUnaMenos*, los femicidios siguen ocurriendo a un ritmo escalofriante. "Las estadísticas de este libro deberían impactarnos. Una mujer es asesinada cada 35 horas en Argentina. Cerca del 58 por ciento de los asesinatos se cometen dentro del domicilio de la víctima. Estas cifras deberían despertarnos para derribar el muro de silencio que protege al perpetrador y sitúa a la víctima en una tragedia aún peor."[319]

[319] La Casa del Encuentro, “Por Ellas... 5 años de Informes de Femicidios,” *Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano,”* Buenos Aires, La Casa del Encuentro, ISBN 978-987-45156-0-5, 2013, p. 7, disponible en:

Este contraste entre la visibilidad mediática del movimiento y la persistencia de la violencia en la realidad cotidiana pone en evidencia la disonancia entre la percepción pública, influenciada por los medios, y la verdadera efectividad de las políticas implementadas. Así, aunque el movimiento ha logrado mantener la atención en el tema, la crisis económica, social y política actual, junto con la desjerarquización de instituciones clave, evidencia la necesidad de un enfoque más profundo y sostenido para enfrentar las violencias patriarcales.

Retomando, la ponente también comentó que existe un grupo de *WhatsApp* integrado por 600 mujeres de diferentes colonias del municipio, que sirve como estrategia para combatir la violencia contra la mujer.[320] Este mecanismo permite a las mujeres enviar su ubicación y solicitud de ayuda, de manera que la Policía Uniformada de Género pueda acudir a brindar asistencia. Esta estrategia se alinea con las recomendaciones de ONU Mujeres y refleja la evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en la prevención y respuesta a la violencia contra la mujer. Según el análisis del primer capítulo, el uso de TICs facilita la comunicación inmediata y efectiva, permitiendo una intervención rápida y coordinada por parte de las autoridades.

Finalmente, la ponente cerró su intervención respondiendo nuestra pregunta y enfatizando la confianza que podemos tener hacia las autoridades, destacando que son elementos preparados y dispuestos a ayudar, desde la asesoría jurídica hasta el acompañamiento en los mecanismos de denuncia que ofrece el gobierno. También hizo hincapié en el caso específico de la presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, cuyo objetivo es reducir los niveles de violencia contra las mujeres. Este enfoque se alinea con lo previsto en el Artículo 1º primero de la CPEUM, el cual establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

---

https://www.diariofemenino.com.ar/documentos/PorEllas.pdf (fecha de consulta: 21 de agosto de 2024).

[320] Vid. Ibídem, min. 1:05:08.

3.2.1.2 La policía reactiva en México: niveles y su doble faceta en la lucha de la violencia contra la mujer

En cuanto a la policía reactiva, conocida actualmente como PDI, se distingue fundamentalmente de la policía uniformada a niveles federal, estatal y municipal. Mientras que la policía uniformada se enfoca en disuadir y actuar antes de que se inicie una carpeta de investigación o ante la flagrante violencia contra la mujer, la policía reactiva opera en un contexto posterior a la materialización de la violencia y a la apertura de una carpeta de investigación. Su función se centra en la investigación y recolección de información una vez que la violencia contra la mujer ha tenido lugar y ha sido formalmente registrada. A diferencia de la policía disuasoria, esta no siempre se encuentra uniformada ni se transporta en vehículos rotulados de policía.

A nivel federal, la Agencia de Investigación Criminal actúa como órgano auxiliar de la Fiscalía General de la República, encargada bajo la dirección de fiscales federales de investigar los delitos del fuero federal. Regionalmente, la PDI, órgano auxiliar de las Fiscalías Estatales, realiza las investigaciones de los delitos del fuero común, también bajo la dirección de fiscales estatales, conforme a lo estipulado en el Artículo 21º de la CPEUM. Adicionalmente, a nivel local, existen unidades como la célula de investigación en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, que ejemplifica la estructura descentralizada de la investigación criminal. Aunque esta estrategia ha sido criticada como inconstitucional, sus defensores argumentan que el término *policías* en plural, utilizado en el precepto constitucional citado, legitima sus funciones de investigación y la creación de este nuevo grupo de acción.[321]

El término reactivo hace alusión a la acción de reaccionar o responder ante un hecho ya consumado. En este sentido, la policía reactiva se enfoca en la investigación y esclarecimiento de la violencia contra la mujer ya cometida, con el objetivo de identificar a los responsables y presentar información ante las autoridades ministeriales y judiciales.

[321] Información obtenida durante una plática con un elemento adscrito a esta célula de investigación del municipio de Nezahualcóyotl.

Nuestra experiencia operativa como PDI nos ha mostrado que este enfoque post-evento implica una labor compleja, minuciosa y científica. La policía reactiva realiza técnicas de investigación como entrevistas e inspecciones para recabar, analizar y evaluar la información que pudiera ayudar a inferir cómo se manifestaron los hechos, determinando nuevas líneas de investigación para identificar a los responsables. Su actuación se rige por el debido proceso legal, asegurando los derechos humanos.

Autores como González Rodríguez destacan que la policía reactiva juega un papel fundamental en la administración de justicia.[322] Sus pesquisas aportan elementos clave para el esclarecimiento de los delitos y sus informes metódicos y objetivos pueden ser cuestionados ante los tribunales, guiando y auxiliando al juzgador en la corroboración de las hipótesis formuladas por la fiscalía.

Si bien la policía reactiva interviene después de la materialización de la violencia contra la mujer, su labor no se limita a resolver los casos. También puede implementar acciones preventivas que abordan las causas etiológicas de los delitos. A través de la recopilación de información e inteligencia, esta unidad es pieza clave para el diseño de políticas integrales que no sólo previenen futuros incidentes de violencia contra la mujer en el núcleo familiar, sino que también mejoran la eficacia del sistema de procuración de justicia.

3.2.1.2.1 La doble cara de la flagrancia: protección rápida vs. riesgo de abuso

Una de las características relevantes de la policía uniformada y de la PDI es la facultad legal para llevar a cabo detenciones en caso de flagrancia. Esta intervención inicial es crucial para el éxito de la investigación y el esclarecimiento de los hechos. La flagrancia, figura jurídica que permite a cualquier persona detener a otra en el momento en que está cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, es una de las tres principales formas legales de detención en México. Según el párrafo quinto del Artículo 16º de la CPEUM, el principio de flagrancia permite tomar medidas inmediatas para evitar la consumación de

[322] Vid. González Rodríguez, Patricia Lucila, “La policía de investigación en el sistema acusatorio mexicano,” México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2016, disponible en: *http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/12290*, (fecha de consulta: 24 de agosto de 2023).

violencia contra la mujer y asegurar la detención del agresor. Su uso es delicado y puede ser peligroso, ya que justifica la actuación inmediata del captor. Esta figura jurídica confiere a cualquier persona un poder excepcional para intervenir y detener a individuos en actos de violencia contra la mujer, siempre y cuando la conducta constituya un delito.

En México, la flagrancia se regula en el CNPP en sus Artículos 218 a 226, donde se establecen los diferentes tipos de flagrancia y los procedimientos a seguir. Estos Artículos definen las condiciones bajo las cuales las autoridades pueden actuar sin necesidad de una orden judicial previa, así como los derechos de las personas detenidas bajo esta hipótesis. Aunque valiosa para la pronta actuación de la justicia, esta herramienta puede convertirse en un arma de doble filo si se emplea incorrectamente o de manera abusiva. Es importante aclarar que esta facultad no implica la capacidad de afectar la esfera jurídica del detenido, sino únicamente de detenerlo provisionalmente para que la autoridad competente (fiscal o juez) tome las decisiones correspondientes. La policía sólo actúa como representante del Estado y auxiliar de la autoridad competente.

Como ejemplo de una práctica abusiva e indebida de la flagrancia, identificada durante nuestra investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, está el *plan B*. Esta actuación involucra a la policía uniformada y a la PDI, quienes, con la aprobación del fiscal, detienen a individuos identificados como agresores de mujeres, niñas, niños o adolescentes. Al analizar los informes policiales homologados presentados por ambas policías al fiscal, se observó que las detenciones no siempre fueron por actos de violencia de género en flagrancia. En varios casos, los identificados como victimarios de violencia familiar, sexual o feminicida fueron detenidos en flagrancia por delitos diversos, como delitos contra la salud, portación ilegal de armas de fuego o cohecho.

Esta práctica se lleva a cabo debido a la falta de elementos para proceder con las otras dos formas legales de detención previstas en el Artículo 16º de la CPEUM: la orden de aprehensión y el caso urgente. La ausencia de datos como el nombre completo del sospechoso, que impide la formalización de una denuncia o

querella previa, así como la falta de indicios que fundamentan la sospecha de que el agresor quiera huir, son factores que contribuyen a esta situación. Como resultado, se recurre a la flagrancia de un delito diferente, inventando elementos ilegales que supuestamente portaba el detenido al momento de su arresto. Esta práctica es conocida en el lenguaje policial como *plan B*.

El *plan B* sirve para ganar tiempo y obtener los datos personales del detenido. Una vez que se obtienen los datos precisos de la persona detenida por un delito flagrante diverso, el fiscal de género y gracias a la colaboración con el fiscal regional, inicia la carpeta de investigación por el delito original de violencia, ya sea sexual, feminicida, patrimonial o cualquier otra forma de violencia denunciada por la víctima, y que, según lo dispuesto en el Artículo 19º de la CPEUM, pudieran ameritar la prisión preventiva oficiosa. Con esta información y la carpeta de investigación iniciada, el fiscal de género solicita la orden de aprehensión al juez de control.

Durante la retención del agresor en el centro de justicia, el fiscal de género solicita una diligencia de reconocimiento de persona con el objetivo de reunir elementos probatorios adicionales para compartirlos con el fiscal regional, para que este último pueda ejercer acción penal por un concurso de delitos. Cabe señalar que, de acuerdo con el Artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el reconocimiento de personas debe practicarse con la mayor reserva posible y siempre en presencia del defensor del imputado. En situaciones donde las víctimas o personas agraviadas son afectadas por delitos como secuestro, trata de personas o violación, el Ministerio Público tiene la obligación de implementar medidas especiales que protejan tanto su identidad como su bienestar emocional. Para ello, se utiliza la *Cámara Gesell*, una sala equipada con un vidrio unidireccional que permite a las víctimas o testigos participar en la diligencia sin ser vistos por el imputado.

Durante el proceso en la *Cámara Gesell*, el imputado es presentado junto con otras personas con características físicas similares. En esta diligencia, el fiscal se auxilia de peritos y, si es el caso, con la asistencia del representante del menor de edad. Con base en el CNPP, cada procedimiento de identificación se documenta, y dicho registro debe incluir los nombres de la autoridad responsable, del testigo

presencial, de las personas que formaron parte de la fila de identificación y, si corresponde, del defensor. Esta diligencia tiene como objetivo sumar elementos probatorios para que el fiscal regional, en colaboración con el fiscal de género, ejerza acción penal por un concurso de delitos.

Si se logran fundar y motivar los elementos, se ejerce acción penal y el agresor es presentado ante el juez de control. Si no se logra y el plazo constitucional de 48 horas según el décimo párrafo del Artículo 16º de la CPEUM se agota sin que el fiscal consiga reunir los elementos necesarios para ejercer acción penal, tras su liberación, existen dos opciones que la policía puede llevar a cabo bajo el mando del fiscal de género para impedir que el agresor evada la justicia. La primera es que, tras haberse solicitado y obsequiado la orden de aprehensión por el juez de control, la PDI detenga al agresor inmediatamente al salir y lo traslade directamente ante el juez de control. La segunda opción, en ausencia de la orden de aprehensión debido a razones de tiempo, es detener al agresor nuevamente por un delito flagrante diferente y presentarlo en otro centro de justicia, lo que otorga otras 48 horas legales de tener retenido al indiciado y así dar tiempo para obtener la orden de aprehensión y finalmente cumplimentarla.

Por otra parte, como señala Ferrajoli, la independencia del poder judicial y su sujeción a la Constitución son fundamentales para garantizar los derechos fundamentales, y cualquier decisión debe ser conforme a la legalidad constitucional.[323] Este contexto nos invita a reflexionar sobre los principios éticos abordados en el primer capítulo, que sustentan la LGAMVLV, enfocándonos en un análisis deontológico para comprender mejor no sólo la ley en sí, sino también su implementación práctica. Recordemos también, que la interacción entre el marco jurídico y las realidades sociales ha sido crucial para entender los desafíos y avances en la implementación efectiva de estas políticas. Es esencial que las acciones de los representantes del Estado no sólo se adhieran a la legalidad, sino que también reflejen un compromiso ético sólido con los derechos fundamentales.

[323] Vid. Ferrajoli Luigi, “Derechos y garantías: La ley del más débil,” 4ta. edición, trad. de Perfecto Andrés Ibáñez, y Andrea Greppi, España, Trotta, 2008, p. 27, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1DsJV075Ma59Y-4zsDMb_6E58PtbSYLaL/view?usp*=sharing (fecha de consulta: 22 de mayo).

Como ejemplo y para demostrar nuestros argumentos acerca de la falta de profesionalismo policial, un agresor de mujeres fue puesto en libertad. En mayo de 2023, en Ciudad Nezahualcóyotl, una persona del sexo masculino fue puesto a disposición del Ministerio Público por estar golpeando a una mujer en la vía pública. La intervención inicial fue realizada por la ciudadanía, quienes impidieron que la mujer siguiera siendo golpeada y llamaron a la policía municipal. La policía detuvo al agresor y lo llevó al centro de justicia, donde fue examinado por un médico legista para certificar su estado psicofísico. Luego fue trasladado al área de seguridad, donde la PDI lo monitoreó hasta que se agotó el plazo constitucional de 48 horas. El fiscal en turno ejerció acción penal y ordenó su traslado al Centro Preventivo y de Reinserción Social Neza-Bordo, como requisito para su ingreso a este, se le practicó nuevamente examen médico legista.

24 horas después, se celebró su primera audiencia, donde se calificó la legalidad de su detención, que fue aceptada por el juez de control. Sin embargo, el problema surgió cuando el detenido denunció haber sido torturado y golpeado por los policías que lo detuvieron. Mostró al juez laceraciones y hematomas en el torso y las piernas. El juez de control, al verificar las certificaciones médicas de entrada y salida del centro de justicia, ordenó su inmediata liberación y dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos para investigar los posibles hechos de tortura.

Al analizar la carpeta de investigación y los certificados médicos, identificamos que efectivamente existían discrepancias que indicaban que el indiciado había sido golpeado. Aunque inicialmente no se certificaron lesiones al ingresar al centro de justicia, las clases impartidas en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses por el Dr. Takahashi y el Dr. Cárdenas nos permitieron comprender la aparición posterior de estas lesiones después de haber sido puesto a disposición del Ministerio Público. Según la medicina forense, las laceraciones y hematomas pueden desarrollarse con el tiempo debido al rompimiento de vasos sanguíneos que pigmentan la piel. Este proceso evolutivo ocurrió durante las 48 horas que el indiciado estuvo bajo la custodia de la PDI, lo que quedó reflejado en el certificado médico realizado al término del plazo constitucional y previo a su

traslado. Esta evidencia fue utilizada por el detenido para demostrar el maltrato recibido, lo que obligó al juez a ordenar su liberación, a pesar de ser culpable del delito por el que fue detenido en flagrancia, pues el juez identificó un indebido proceso en su detención.

Es crucial considerar que la flagrancia, aunque parece ser una situación irrefutable, está sujeta a revisión y evaluación por una autoridad competente. Según Roxin, a pesar de la apariencia de certeza en los casos de flagrancia, es fundamental garantizar el debido proceso.[324] Esto significa que incluso las detenciones en flagrancia deben ser analizadas y debatidas en audiencia oral. Este procedimiento está fundamentado en el séptimo párrafo del Artículo 16º de la CPEUM, que establece que el juez que recibe la consignación del detenido por flagrancia debe ratificar de inmediato la detención o, si procede, decretar la libertad bajo las reservas de ley.

3.2.2 La estrategia para atender la violencia contra la mujer en el núcleo familiar

La transición de la Procuraduría al establecimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, publicada como ley en la Gaceta del Gobierno el 9 de diciembre de 2016, marca una evolución significativa en el marco legal mexicano. Este renombrado órgano del Estado ha organizado una estructura que aborda de manera especializada los delitos que afectan a las mujeres, permitiendo una respuesta post-delictiva ajustada a las complejidades inherentes a estos delitos según la ideología de género. Este enfoque, argumentado y demostrado en el segundo capítulo, influye profundamente en la estructuración de políticas legales dirigidas a combatir la violencia contra la mujer. La ideología de género se ha integrado incluso en las leyes para penalizar las acciones violentas contra las mujeres. La nueva estructura de la Fiscalía es un ejemplo claro de cómo la ideología de género busca enfatizar la lucha entre hombres y mujeres. Esta estrategia de segundo nivel se enfoca en la vigilancia, intervención estratégica y protección de las

[324] Vid. Roxin, Claus*, "*Derecho Penal: Parte General," 2da. edición, trad. de Diego Manuel Luzon Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal, España, Civitas, 1997, p. 746, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1IkwMDp2C4G9Tz41u4PXiHgMdgIog5S4H/view?usp*=sharing (fecha de consulta: 22 de mayo).

víctimas, lo que se traduce en una procuración de justicia que funciona como puente para alcanzar las demandas de la ideología de género desde sus orígenes: el castigo del agresor.

En concreto, la FEADVVG fue creada como respuesta a la imperiosa necesidad de tratar específicamente los crímenes influenciados por un patriarcado idealizado. Establecida en la fracción II del Artículo 29º de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de forma particular, esta entidad exacerba la lucha entre hombres y mujeres que la ideología de género se ha encargado de hacer creer. Ejemplo de ello son los comentarios y la postura que los servidores adscritos en esta Fiscalía especializada tienen y que hemos identificado tanto como observador no participativo así como con las entrevistas realizadas. Este análisis subraya la importancia de un sistema criminológico que también fiscalice a la procuración de justicia especializada en la violencia de género a efecto de corregir los resultados y efectos transgeneracionales que la ideología de género ha provocado.

Actualmente dirigida por la Maestra Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, la FEADVVG ha intensificado su rol en la investigación y enjuiciamiento de delitos perpetrados por hombres. Este compromiso abarca una amplia gama de crímenes, incluyendo la desaparición forzada de personas, tanto por actores estatales como particulares, la trata de personas y diversos tipos de violencia, como la familiar, sexual y aquella dirigida a niños, niñas, adolescentes y expósitos. Un énfasis particular se pone en el feminicidio, reconocido como la forma más extrema de violencia contra la mujer. Todos estos crímenes se abordan dentro del marco heteronormativo del patriarcado, una institución que sigue un sistema tradicional y conservador de roles de género. Aunque esta realidad puede parecer paradójica e incongruente según la vigente ideología de género, por la delimitación de nuestra investigación no abordaremos este aspecto (punto igualmente ya mencionado en el segundo capítulo).

La selección estratégica de su sede en Av. Morelos 1300, Col. San Sebastián, Toluca de Lerdo, con código postal 50090, representa una decisión crucial que mejora significativamente la accesibilidad para las víctimas de violencia

de género. Esta ubicación no sólo facilita el acceso físico a los servicios ofrecidos por la Fiscalía, sino que también subraya la importancia de esta causa al situarla de manera prominente dentro de la estructura gubernamental. Al estar ubicada en una zona céntrica y bien conocida, la sede se convierte en un punto de referencia claro y accesible para las víctimas que buscan apoyo y justicia.

La importancia de esta ubicación se destaca aún más cuando se considera el contexto legal y social en el que opera. En México, la LGAMVLV establece un marco integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta ley, junto con el CNPP, subraya la necesidad de un acceso fácil y directo a los servicios de justicia como un componente esencial para la protección efectiva de las víctimas. La ubicación en Av. Morelos 1300 refleja el compromiso del Estado mexicano con estos principios, asegurando que las víctimas puedan acceder fácilmente a los servicios necesarios.

Para garantizar una atención rápida y efectiva, la Fiscalía ha establecido líneas de comunicación directa, disponibles en los teléfonos 7222261600 ext. 3889 y 3917. Estos canales de comunicación son fundamentales para facilitar una interacción eficiente con la comunidad y asegurar respuestas oportunas a las consultas y necesidades relacionadas con la violencia de género. La disponibilidad de estas líneas directas permite a las víctimas recibir asistencia inmediata, lo que es crucial en situaciones de emergencia.

Además, la creación de estos canales de comunicación se alinea con las mejores prácticas internacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos, VAWA no sólo proporciona un marco legal para la protección de las víctimas, sino que también establece sistemas telefónicos bien estructurados y monitoreados, como la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica (*National Domestic Violence Hotline*). Este sistema permite a las víctimas acceder rápidamente a recursos y asistencia, asegurando una respuesta inmediata y coordinada a sus necesidades.

En el contexto internacional, instrumentos como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará subrayan la importancia de garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas a través de medios accesibles y eficientes. La implementación de líneas de comunicación directa en la Fiscalía de Toluca de Lerdo

es un paso significativo hacia el cumplimiento de estos estándares internacionales, demostrando el compromiso de México con la erradicación de la violencia de género y la protección de los derechos humanos de las mujeres.

En conclusión, la selección estratégica de la sede en Av. Morelos 1300 y el establecimiento de líneas de comunicación directa no sólo mejoran la accesibilidad y la respuesta a las víctimas de violencia contra la mujer y violencia de género, sino que también destacan el compromiso del Estado mexicano con la protección de los derechos de las mujeres y la implementación de políticas efectivas y coordinadas en esta área crítica.

3.2.2.1 El estatus de la FEADVVG

Este apartado se basa en la información obtenida de la entrevista realizada a la Mtra. Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, obtenida con oficio de petición, solicitud amparada en el Artículo 8º de la CPEUM y dirigida inicialmente a la titular de la fiscalía especializada.[325] Ante la imposibilidad de la Mtra. Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros de participar debido a compromisos previos, se nos ofreció, y aceptamos, realizar la entrevista con la Mtra. Hinojosa Céspedes, Coordinadora de Políticas Públicas. La comunicación inicial y los detalles de la entrevista, programada vía Zoom, se coordinaron a través de diversas llamadas telefónicas y finalmente por correo electrónico el 27 de septiembre de 2023.[326]

Actualmente, la FEADVVG cuenta con 14 Fiscalías Especializadas, 4 Centros de Justicia para Mujeres (CJM), trece Agencias del Ministerio Público Especializadas en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSyG), tres Agencias del Ministerio Público para la Atención de Niñas, Niños, Adolescentes y

[325]Vid. Raúl Javier Buenrostro Briseño, "Solicitud de Entrevista a Mtra. Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, Fiscal Central de Atención a Delitos Vinculados a la Violencia de Género," 11 de septiembre de 2023, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1ebMrKv2Sh6hY8YL1uS7XsxEiL7DwpawL/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 29 mayo de 2024).

[326]Vid. Raúl Javier Buenrostro Briseño, "Liga Zoom - Entrevista," mensaje de correo electrónico a Coordinación de Políticas Públicas, Fiscalía Central Para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, 18 de septiembre de 2023, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1E1qmlboUWWKr0DuyuZGJmaP1GFuERbFT/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 29 mayo de 2024).

Expósitos (ANNAE),[327] así como tres unidades de investigación y cuatro unidades móviles a nivel Estado de México. La existencia de estas unidades y agencias especializadas refleja el compromiso del Estado de México con la protección de los derechos de las mujeres, ofreciendo una red de apoyo integral y coordinada para abordar los casos de violencia de género de manera eficaz.

La fiscalía cuenta con 259 fiscales distribuidos en las diversas adscripciones ya señaladas. Por otro lado, la Mtra. Hinojosa señala que el eslabón más débil de la FEADVVG son sus auxiliares operativos: la PDI y los peritos. Actualmente, la fiscalía cuenta con sólo 68 PDI a nivel estatal, distribuidos entre 33 en los Centros de Justicia para las Mujeres y 35 en las Agencias del Ministerio Público Especializadas en Violencia Familiar Sexual y de Género. Además, cuentan con tan sólo 18 peritos especializados en áreas clave como Criminalística, Criminología, Antropología, Medicina Forense y Psicología.

La insuficiencia de policías de investigación y peritos pone de manifiesto una desconexión entre la estructura formal de la fiscalía y sus capacidades operativas reales. Esta situación refleja una necesidad urgente de incrementar y distribuir adecuadamente los recursos humanos y materiales para fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia de género en el Estado de México. Sin un aumento significativo en el personal operativo y especializado, la fiscalía seguirá enfrentando serias limitaciones que dificultan su capacidad para cumplir con su misión de proteger y garantizar los derechos de las mujeres.

La capacidad operativa de la FEADVVG no sólo se ve limitada por la insuficiencia de recursos humanos y materiales, sino también por cómo los medios de comunicación tecnológicos influyen en la percepción pública de su efectividad. La visibilización de las deficiencias operativas a través de los medios puede aumentar la presión pública para mejorar los recursos, mientras que una cobertura mediática sesgada puede distorsionar la realidad, afectando la confianza en la institución.

[327] El directorio de la Fiscalía para la atención a la violencia de género puede ser consultado en: *https://tesjo.edomex.gob.mx/sites/tesjo.edomex.gob.mx/files/files/Equidad/Fiscali%CC%81a%20para%20la%20atencio%CC%81n%20a%20la%20violencia%20de%20ge%CC%81nero.pdf*

Un ejemplo concreto que demuestra cómo los medios de comunicación tecnológicos influyen en la percepción pública de la efectividad de las instituciones, y en particular de la FEADVVG, es el caso de Ecatepec, en el Estado de México. Este municipio, el más poblado de América Latina, ha sido escenario de numerosos feminicidios, superando incluso las cifras de Ciudad Juárez. La cobertura mediática de estos crímenes, como se reporta en el artículo de Alejandro Melgoza Rocha para la Agencia Anadolu,[328] expuso la gravedad de la crisis de violencia de género en la región y destacó las deficiencias estructurales de las autoridades locales.

La visibilización de las carencias operativas de las autoridades, como la falta de personal especializado y la insuficiente coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia, generó una presión pública significativa. Esta presión llevó a que se exigieran mejoras en la estructura de la FEADVVG y en los recursos destinados a combatir la violencia de género. Sin embargo, la cobertura mediática también incurrió en distorsiones de la realidad, como cuando se catalogó el caso de una pareja acusada de múltiples feminicidios como un crimen *serial*,[329] sin analizar en profundidad las causas socioeconómicas y estructurales subyacentes.

Este tipo de cobertura mediática, como se observa en Ecatepec, tiene un doble filo: por un lado, puede servir para impulsar cambios y mejoras institucionales, pero por otro, también puede erosionar la confianza pública en la FEADVVG y otras instituciones si se enfoca en aspectos sensacionalistas o se omite el contexto integral de la problemática. El caso de Ecatepec es un claro ejemplo de cómo la mediatización puede tanto apoyar como obstaculizar la efectividad de la respuesta institucional frente a la violencia de género.

Además, nuestra fuente comenta que, desde el 17 de marzo de 2021, en el Estado de México se han implementado 11 refugios y una casa de transición para víctimas de violencia. Sin embargo, esta infraestructura es claramente insuficiente para abordar la magnitud del problema en la región. Recordando las altas tasas de

[328] Vid. Melgoza Rocha, Alejandro,"Ecatepec, el Lugar Más Peligroso para las Mujeres en México," Agencia Anadolu, 16 de octubre de 2018, disponible en: https://www.aa.com.tr/es/mundo/ecatepec-el-lugar-m%C3%A1s-peligroso-para-las-mujeres-en-m%C3%A9xico/1283510 (fecha de consulta: 21 de agosto de 2024).
[329] Ibídem, párrafo 6.

violencia contra la mujer en el Estado de México, abordadas en el primer capítulo (78.7%), la demanda de espacios seguros y servicios de apoyo integral supera con creces la capacidad actual de estos refugios. La insuficiencia de estos recursos se traduce en una protección inadecuada para muchas mujeres, especialmente en áreas rurales y periféricas, donde el acceso a dichos servicios es limitado. Esta carencia pone en evidencia la necesidad de una mayor inversión y expansión de la infraestructura estatal para garantizar que todas las mujeres tengan acceso efectivo a una vida libre de violencia. Desde una perspectiva kantiana, los refugios pueden ser considerados una estrategia temporal, un medio necesario pero no suficiente para alcanzar el fin último de proteger y respetar la dignidad y derechos humanos de las mujeres. La verdadera solución requiere un compromiso integral y permanente que asegure no sólo la existencia de refugios y casas de transición, sino también infraestructura estatal especializada y permanente, una característica de un ESDD.

Así mismo, nuestra entrevistada comentó que en el primer semestre de 2023, se registraron 16,739 denuncias por violencia contra la mujer en el núcleo familiar, pero sólo entre 500 y 600 de estos casos avanzaron a procesos legales. Como observador no participativo en la FEADVVG, se puede afirmar que la principal razón por la que el número de denuncias que se judicializan es mucho menor que el de las que se inician es la falta de elementos que motivan y fundamentan los hechos declarados ante el Fiscal. Se observaron casos en los que mujeres denunciaron haber sido violadas, pero cuando se emitían oficios para las investigaciones periciales, tanto médicas como psicológicas, las denunciantes se rehusaban a realizárselas. En el mejor de los casos, cuando las pruebas se llevaban a cabo, no se encontraban elementos típicos de una violación, ya que estas habían ocurrido hasta con cinco años de antigüedad. En ambos casos, se puede inferir que las denunciantes estaban mintiendo, con el objetivo principal de perjudicar al hombre que supuestamente las agredió, ya que en la mayoría de los casos, este fue su pareja sentimental en algún momento y actualmente ya tenía otra pareja.

Esta situación resalta la necesidad de mejorar el apoyo y orientación a las víctimas para asegurar que los casos tengan un fundamento sólido y puedan

avanzar en el proceso legal, y también de establecer mecanismos efectivos para detectar y disuadir las denuncias falsas que buscan manipular el sistema judicial para fines personales.

Adicionalmente, la Mtra. Hinojosa indica que la violencia familiar y económica son las formas más frecuentes en las denuncias, destacando la complejidad del problema, y señalando que diversos factores socioculturales, moldeados por el sistema económico, actúan como catalizadores de la violencia. Esto corrobora nuestra postura de que la interpretación equivocada del modelo económico neoliberal de la Escuela de Chicago y las ideas de Milton Friedman, ha exacerbado la desigualdad de género y contribuido a una mayor violencia contra las mujeres. Este enfoque ha priorizado la competencia y el individualismo, llevando a una interpretación errónea y radical del neoliberalismo en México, enfocada en el *laissez-faire*. La adopción de este modelo en México ha promovido un enfoque individualista y competitivo, ignorando la intervención estatal necesaria para combatir la pobreza y la marginación, lo que ha incrementado la violencia familiar y económica. En palabras más simples, la ideología neoliberal implementada en México actúa como un catalizador al intensificar las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad de las mujeres, y con el respaldo de la ideología de género, falla en abordar las raíces de la violencia.

A mayor abundamiento, uno de los objetivos identificados durante la entrevista sobre la procuración de justicia en casos de violencia por razones de género contra la mujer es solicitar y obtener, ante el Juez de juicio oral, las penas privativas de libertad más extensas posibles. Nuestra fuente destaca un caso emblemático en el primer semestre de 2023, donde se logró una sentencia condenatoria de más de 100 años, un logro por el cual recibieron felicitaciones. Sin embargo, este enfoque merece una evaluación crítica.

Recordando los argumentos expuestos en el primer capítulo, David Garland, en su crítica a la cultura del control, sostiene que la intensificación de medidas punitivas, lejos de resolver los problemas sociales subyacentes a la criminalidad, puede exacerbarlos. Este argumento sugiere que centrar los esfuerzos de la fiscalía en obtener largas penas de prisión podría no ser la estrategia más efectiva, ya que

no aborda las causas profundas de la violencia. Además, la reinserción social y la prevención de la reincidencia son componentes cruciales del sistema de justicia vigente. Aunque las largas penas pueden tener un efecto disuasorio, es fundamental considerar estrategias que también enfaticen la rehabilitación y la prevención integral para abordar de manera más completa y efectiva la violencia contra la mujer.

En este mismo orden de ideas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) es otro ejemplo del objetivo que actualmente persiguen las instituciones procuradoras de justicia. Durante la segunda edición del conversatorio titulado *Nuevos Paradigmas de la Política Criminal en México*, celebrado los días 6, 8 y 9 de mayo de 2024 en el Aula Magna Jorge Carpizo MacGregor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón,[330] el perito en criminalística de la FGJ-CDMX, Mtro. Christian Bellacetin Andrade, comentó como ponente que, durante esa misma semana, recibió una llamada telefónica del Fiscal General. En esta llamada, además de notificarle, el Fiscal lo felicitó por su trabajo pericial, ya que gracias a sus dictámenes se logró la condena de un feminicida a 70 años de prisión.

Mientras la FGJ-CDMX busca obtener largas penas de prisión como una medida de justicia, una evaluación crítica basada en la deontología kantiana sugiere que esta estrategia podría estar en desacuerdo con los principios de justicia y dignidad humana que la CPEUM debería defender. Las condenas severas, en lugar de promover una justicia rehabilitadora y transformadora, podrían perpetuar un sistema punitivo que no aborda adecuadamente las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad. En este contexto, el objetivo de la FGJ-CDMX de obtener largas penas de prisión podría verse como un intento de aplicar una justicia retributiva y disuasoria.

De igual forma, el adoctrinamiento idealizado conservador del neoliberalismo también puede influir en las autoridades procuradoras de justicia, llevándolas a

[330]Vid. 2ª Edición Nuevos Paradigmas de la Política Criminal en México, "Conversatorio Nuevos Paradigmas de la Política Criminal en México." Organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, Aula Magna del Edificio de Posgrado, 6, 8 y 9 de mayo, 2024, flayer disponible en: https://drive.google.com/file/d/1mUoJaxaOyG122ieYMYv1yCNTesRUN6rv/view?usp=sharing (fecha de consulta: 27 de mayo de 2024).

priorizar la imposición de penas severas como solución principal a los problemas de criminalidad. Este enfoque puede ser una visión sesgada del modelo híbrido que debería guiarse por los principios establecidos en la CPEUM, la cual busca un equilibrio entre el iuspositivismo y el iusnaturalismo.

Las condenas que equivalen a perpetuidad pueden ser vistas como contrarias a los principios del iusnaturalismo, que abogan por la rehabilitación y la reinserción del individuo en la sociedad. Kant insistiría en que cualquier sistema de justicia debe respetar la dignidad inherente de todas las personas, incluso de aquellos que han cometido graves delitos. Por lo tanto, aunque la obtención de largas penas puede cumplir con un objetivo disuasorio inmediato, no necesariamente promueve una justicia que reconozca y respete la humanidad de los agresores.

Encima, la Mtra. Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes destacó que una de las estrategias más innovadoras implementadas bajo la dirección de la Mtra. Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros ha consistido en separar judicialmente al agresor del núcleo familiar, la cual se lleva a cabo con el apoyo de la Guardia Nacional para cumplir las órdenes de protección judicial. Según nuestra fuente, este enfoque ha demostrado ser eficaz, ofreciendo soluciones reales a las víctimas. La base legal de esta estrategia se encuentra en la disposición VII de la LGAMVLV, que establece la desocupación por la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo, y en su caso, el reingreso de la mujer en situación de violencia una vez que se resguarde su seguridad.

Sin embargo, una evaluación crítica revela que esta estrategia, aunque innovadora y necesaria, refleja una influencia significativa de la ideología de género que prioriza respuestas reactivas y punitivas. Este enfoque se centra en la penalización inmediata del agresor sin abordar adecuadamente las causas subyacentes de la violencia. Además, esta estrategia, influenciada por la ideología neoliberal, tiende a enfocarse en soluciones rápidas y represivas en lugar de invertir en programas de prevención a largo plazo que puedan tratar las raíces del problema. La separación del agresor es crucial para la protección inmediata de las

víctimas, pero debe complementarse con esfuerzos integrales ya que puede haber represalias en donde el nivel de violencia escale a su expresión de odio más extrema (feminicidio).

Finalmente, la Maestra Hinojosa informa que, durante el primer semestre de 2023, el Estado de México se clasificó en el puesto número 25 a nivel federal en incidencia de violencia contra la mujer en el núcleo familiar, basándose en datos del Secretariado Ejecutivo solicitados por ella misma. Sin embargo, al contrastar esta afirmación con la información disponible en diversos informes oficiales, se observa una inconsistencia significativa. En el primer capítulo, se destacó que el Estado de México tiene una alta incidencia de violencia contra las mujeres, situándose entre los estados con mayor número de feminicidios y reportando un porcentaje significativo de incidentes violentos. Por ejemplo, en 2023, el Estado de México registró el mayor porcentaje de feminicidios a nivel nacional, con el 11.1% de las carpetas de investigación.[331] Estas cifras parecen contradecir la clasificación en el puesto número 25 mencionada por la Mtra. Hinojosa, lo que sugiere la necesidad de revisar detalladamente las metodologías y criterios de clasificación utilizados por el Secretariado Ejecutivo para asegurar la precisión y coherencia de los datos presentados.

3.2.2.1.1 Evaluación de las medidas de protección administrativas: estudio de caso

Para el desarrollo de este apartado se utilizó la técnica de la entrevista, un elemento de la metodología etnográfica que, a través de la observación no participativa, permitió identificar un caso de violencia familiar en la FEADVVG. Las entrevistas comenzaron en el interior de la Fiscalía mientras la víctima esperaba ser atendida y después continuaron en su negocio con giro de estética. Mediante diversas pláticas detalladas con la señora M.T.C., víctima de esta modalidad de violencia según el Artículo 7º de la LGAMVLV, se exploró la complejidad de las interacciones y las respuestas institucionales a este problema social. La señora M.T.C. proporcionó copias de documentos legales, incluyendo denuncias, esenciales para nuestro análisis. Estos documentos no sólo enriquecieron la

[331] Vid. Op. Cit. Solís Fernando, “Edomex, primer lugar nacional en feminicidios durante 2023.”

comprensión de su caso, sino que también expusieron las dinámicas y falencias del sistema de procuración de justicia en el Estado de México, ofreciendo una visión crítica de cómo las víctimas confrontan el sistema legal. Este enfoque metodológico proporciona un marco único para el análisis que sigue, en el que se examina cómo la experiencia personal de la señora M.T.C. refleja los desafíos particulares que enfrentan las víctimas de violencia familiar.

Para comenzar, el caso de la señora M.T.C., quien sufrió violencia verbal, física, psicológica, económica, patrimonial y hasta por interpósita persona por parte de su expareja, ilustra críticamente las barreras institucionales enfrentadas por víctimas de violencia familiar en México. A pesar de haber acudido a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSyG) el 27 de noviembre de 2020 y haber obtenido una pre denuncia con el folio PREDENUNCIA/WEB/0095628/20/11,[332] la eficacia de este primer paso legal fue limitada. Esta pre denuncia, que debería servir como un escudo protector inicial, no logró disuadir al agresor de continuar su comportamiento violento. El caso evidencia varias fallas sistémicas que impiden la protección adecuada de las víctimas, destacándose una brecha significativa entre la ley y su aplicación efectiva. Aunque la LGAMVLV establece mecanismos para una actuación coordinada del gobierno y la creación de instituciones dedicadas a su implementación, la realidad muestra deficiencias en la capacidad de las autoridades para ofrecer una protección real y efectiva a las víctimas.

Inicialmente, el persistente acoso llevó a la señora M.T.C. a solicitar repetidamente el seguimiento de su caso, un proceso severamente complicado por la pandemia de COVID-19. No fue sino hasta noviembre de 2022 que, después de múltiples intentos, el representante legal de la señora M.T.C., valiéndose de contactos dentro de la fiscalía y comprometiéndose a aportar económicamente para los gastos de oficina del fiscal en turno, logró agendar una cita para ratificar la pre denuncia. El proceso se vio afectado por varios retrasos burocráticos, incluido un

[332] Vid. Tamayo Campos, Mariza, “Pre denuncia (Folio: PREDENUNCIA/WEB/0095628/20/11),” Fiscalía General de Justicia del Estado de México, 2020, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/15W244kBqwMnqIZPMwijsXTVQyBDDWuOl/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 27 de mayo de 2024).

atraso de tres horas el día de la cita, seguido de requisitos adicionales como la entrega de datos personales y fotocopias de identificación.

El caso de la señora M.T.C. ilustra las profundas deficiencias en la administración de justicia exacerbadas por la lujuria económica derivada de la versión neoliberal radical implementada en México. Este fenómeno refleja cómo los intereses económicos han sobrepasado las necesidades de justicia y protección de las víctimas, distorsionando los objetivos sociales del Estado de Derecho. La ética kantiana subraya que las acciones deben guiarse por principios universales y que las intenciones detrás de estas acciones son cruciales. En este contexto, los retrasos burocráticos y la necesidad de conexiones personales y recursos económicos para avanzar en su proceso legal demuestran una falta de compromiso ético por parte de las autoridades. Esto contraviene el principio kantiano de tratar a cada individuo como un fin en sí mismo, no meramente como un medio para otros fines.

Así mismo, durante la entrevista con la PDI, además de solicitar datos personales, se pidió a la señora M.T.C. su número telefónico para mantener comunicación constante. También se le solicitó proporcionar fotografías y las ubicaciones de su domicilio y negocio a través de WhatsApp. Posteriormente, se le preguntó concretamente qué deseaba y cuánto dinero estaba dispuesta a aportar para dar celeridad a su asunto. Esta práctica no sólo es una clara violación ética y profesional, sino que también infringe los principios fundamentales de los derechos humanos. Solicitar dinero para acelerar un procedimiento es una conducta corrupta que socava la confianza en las instituciones de seguridad pública y contradice la misión de protección y apoyo integral a las víctimas estipulada en la LGAMVLV. Este tipo de acciones ilegales y antiéticas no sólo violan la confidencialidad y protección de los datos personales, sino que también perpetúan un sistema de impunidad y corrupción que afecta gravemente la confianza de la sociedad en las autoridades, disuadiendo a otras víctimas de buscar ayuda y debilitando la eficacia de las políticas públicas diseñadas para prevenir y combatir la violencia contra la mujer.

Después de completar la ratificación de la pre-denuncia con la Lic. Estephanye Reyes Chávez, fiscal especializada, se formalizó la denuncia con los números NIC: CGO/JMA/00/MPI/184/03959/22/12 y NUC: CHA/CGO/JMA/009/350268/22/12.[333] Tras recibir la carátula de su carpeta de investigación, a la señora M.T.C. le fueron entregados dos oficios: uno dirigido al Director General de Seguridad Ciudadana del municipio donde reside[334] y otro al Director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del municipio donde reside el victimario.[335] El objetivo del primer oficio fue informar a la policía preventiva sobre las medidas de protección otorgadas a la víctima y solicitar su seguimiento continuo. El segundo oficio buscaba notificar a la policía del municipio del agresor sobre los hechos y exigir el cumplimiento de las medidas de protección.

Debido a la insuficiencia de personal en la Policía de Investigación para llevar a cabo estas diligencias, la señora M.T.C. y su representante legal se vieron obligados a entregar personalmente estos documentos a las autoridades correspondientes. Esta situación refleja las deficiencias de la FEADVVG, que la Mtra. Hinojosa reconoció como el eslabón más débil de esta fiscalía especializada.

El oficio dirigido al Lic. Vicente Ramírez García, Director General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, Estado de México, solicita la vigilancia rotatoria de elementos de seguridad en el domicilio de la señora M.T.C. para cumplir con las medidas de protección previstas en el Artículo 137 del CNPP, específicamente en las fracciones V, VI, VII y VIII, que incluyen la prohibición de conductas de intimidación, vigilancia domiciliaria, protección policial y auxilio inmediato.

---

[333]Vid. Reyes Chávez, Estephanye, "Carpeta de investigación (Número de NIC: CGO/JMA/00/MP1/184/03959/22/12, Número de NUC: CHA/CGO/JMA/009/350268/22/12)," Centro de Justicia para las Mujeres Amecameca, 2022, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/10-VPicR_5qU5PI4T3t510TVxnwiZgQB5/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 27 de mayo de 2024)

[334] Vid. Fiscalía General de Justicia del Estado de México, "Oficio Neza (Número de NIC: CGO/JMA/O0/MP184/03959/22/12, Número de NUC: CHA/CGO/JMA/009/350268/22/12)," 2022, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1RCeIqlSLltPLKMnrJ66m7aOOEc3xiyOz/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 27 de mayo de 2024).

[335]Vid. Fiscalía General de Justicia del Estado de México, "Oficio Ecatepec (Número de NIC: CGO/JMA/00/MP1184/03959/22/12," Número de NUC: CHA/CGO/IMA/009/350268/22/12), 2022, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1fAWEZxcORVdZPC5KJJ4PrgmvPfgw8D-u/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 27 de mayo de 2024).

Sin embargo, aunque estas acciones son necesarias, resultan insuficientes para abordar integralmente la problemática de la violencia familiar. La efectividad de estas medidas se ve comprometida por la limitada capacidad operativa de las fuerzas policiales en la esfera privada del núcleo familiar y su enfoque en respuestas disuasivas en lugar de preventivas. Además, estas medidas no abordan las raíces socioculturales y económicas que perpetúan la violencia, evidenciando una política criminal que se centra en la reacción inmediata pero no en la prevención a largo plazo.

La dependencia excesiva en la vigilancia y protección física ignora la necesidad de estrategias más holísticas que incluyan educación, empoderamiento económico y apoyo psicológico para las víctimas. Por lo tanto, es crucial avanzar hacia políticas más integrales que no sólo respondan a los incidentes de violencia, sino que también trabajen en la prevención y erradicación de las causas subyacentes.

Al final, la violencia no cesó; la señora M.T.C. continuó siendo víctima de agresiones verbales en el local que renta como estética. Según refirió, el agresor, en tono de burla, le ha dicho que, aunque haya sido notificado por la policía, tal aviso no le impedirá seguir viéndola. Esta situación pone en evidencia la persistente vulnerabilidad de las víctimas y la insuficiente efectividad de las medidas de protección implementadas, subrayando la necesidad urgente de revisar y fortalecer estas estrategias.

Este caso destaca la profunda deficiencia en la implementación efectiva de las leyes y protocolos destinados a proteger a las mujeres en México, como la LGAMVLV. A pesar de la existencia de un marco jurídico robusto, la falta de recursos adecuados, la insuficiente capacitación de las fuerzas del orden y la ausencia de un enfoque integral y multidisciplinario resultan en una protección ineficaz para las víctimas. La comparación con el marco jurídico estadounidense, donde leyes como VAWA han demostrado ser más efectivas, subraya la necesidad de adoptar mejores prácticas y principios éticos, como los planteados por la deontología kantiana, que aseguren el respeto y la protección de los derechos humanos. En resumen, se hace imperativo revisar y fortalecer las estrategias

actuales para garantizar la seguridad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia familiar.

Como conclusiones generales para este subcapítulo, El análisis crítico de la política criminal de segundo nivel para la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar en el Estado de México revela la evolución y funciones de la policía como elemento crucial en el mantenimiento del orden público y la seguridad social. Desde sus inicios en el siglo XIX, la policía ha pasado de ser una fuerza rudimentaria a una entidad con roles tanto preventivos como reactivos.

Siguiendo el marco teórico de Thomas Kuhn, se observa que la acumulación de anomalías en la práctica policial indica la necesidad de un cambio de paradigma en la forma en que se aborda la violencia de género. Las estrategias implementadas en Cuautitlán Izcalli, como la proximidad social, el Operativo Violeta y los Puntos Violetas, representan intentos de abordar estas anomalías a través de enfoques multidisciplinarios y holísticos.

Además, el análisis de la policía en el Estado de México muestra que, aunque ha habido avances significativos, persisten desafíos importantes. La historia de la policía refleja una evolución desde una fuerza represiva hacia una estructura más formal y organizada. Sin embargo, la capacitación insuficiente del personal policial, las prácticas abusivas de detención y la falta de recursos adecuados limitan la efectividad de las medidas preventivas y de protección.

Desde la perspectiva de la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner, es crucial un enfoque integral que considere la interrelación entre los diferentes entornos que influyen en la violencia contra la mujer. La falta de coordinación entre las diversas fuerzas de seguridad y la insuficiente capacitación en materia de género son obstáculos significativos para la implementación efectiva de políticas preventivas.

Por otro lado, las estrategias innovadoras en Cuautitlán Izcalli, como la proximidad social y el uso de tecnología, reflejan un intento de crear un entorno seguro y de apoyo para las mujeres. Estas iniciativas, aunque valiosas, deben ser complementadas con una formación adecuada del personal policial y una mayor inclusión de mujeres en las fuerzas de seguridad.

Nuestra teoría del espejo ayuda a entender cómo la realidad a menudo se disocia de lo previsto en las políticas. Las barreras institucionales y la corrupción evidenciadas en casos como el de la señora M.T.C. muestran cómo las políticas diseñadas para proteger a las víctimas pueden fallar en la práctica debido a la falta de recursos y a prácticas corruptas.

Asimismo, la función de la policía reactiva, centrada en la investigación post-evento, es fundamental para la administración de justicia. Sin embargo, la práctica abusiva de la flagrancia, como el *plan B*, revela una distorsión en la aplicación de la justicia que contradice los principios éticos fundamentales. Esta práctica refleja una realidad invertida y mal interpretada, donde la necesidad de resultados inmediatos supera el compromiso con la legalidad y la justicia.

La creación de la FEADVVG y la implementación de medidas de protección muestran un compromiso con la lucha contra la violencia de género. No obstante, la falta de recursos y la desconexión entre la estructura formal y las capacidades operativas reales limitan la efectividad de estas medidas. Es necesario un cambio de paradigma hacia un modelo que integre los valores de equidad y justicia social, abordando no sólo la protección inmediata sino también las causas subyacentes de la violencia.

Como paso evolutivo en el desarrollo de nuestra teoría del espejo, se identifica que el efecto distorsionado de reflejar una realidad incorrecta a la prevista en la ley es derivado de la *lujuria económica*, un fenómeno provocado por la equivocada interpretación del modelo neoliberal norteamericano. Esta interpretación equivoca ha promovido la competencia y el individualismo, ignorando la intervención estatal necesaria para combatir la pobreza y la marginación, exacerbando así las condiciones de desigualdad y violencia.

Finalmente, el análisis del segundo nivel preventivo de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar en el Estado de México, desde la perspectiva de los paradigmas de Thomas Kuhn, la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner y nuestra teoría del espejo, sugiere la necesidad urgente de un cambio de paradigma. Este nuevo paradigma debe basarse en un sistema criminológico que fiscalice y evalúe rigurosamente las medidas preventivas, superando las limitaciones de las prácticas

actuales y promoviendo un enfoque integral que contemple la prevención, protección y rehabilitación de las víctimas. Sólo a través de un compromiso ético y la implementación efectiva de políticas integrales se podrá garantizar una protección adecuada y reducir las desigualdades y la violencia en México.

A partir de este análisis, es imperativo examinar el estatus del tercer nivel preventivo de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Este nivel se enfoca en las estrategias de intervención post-delictiva y en la reintegración de los ofensores, aspectos esenciales para asegurar una respuesta completa y efectiva a la problemática de la violencia contra la mujer.

3.3 El estatus del tercer nivel preventivo de la PCPVCMNF

La violencia contra la mujer en el núcleo familiar es un problema crítico que exige una respuesta integral y multidimensional del tercer nivel preventivo del Estado. En México, las deficiencias estructurales y operativas del sistema penitenciario perpetúan condiciones que favorecen la reincidencia y la desconfianza hacia las autoridades. Este trabajo analiza críticamente la política criminal del Estado de México, enfocándose en las estrategias de reinserción social, la eficacia de los programas penitenciarios y las barreras institucionales enfrentadas por las víctimas.

La ENPOL 2021 revela importantes carencias educativas y de habilidades básicas entre los internos, destacando la necesidad de reforzar el sistema educativo como medida preventiva. Sin embargo, la sobrepoblación carcelaria y la falta de obligatoriedad en la participación en programas educativos limitan la efectividad de las políticas de reinserción social. Además, la corrupción sistémica, evidenciada por la libre posesión y uso de dinero en efectivo, perpetúa actividades ilegales y socava los objetivos de rehabilitación. La metodología de investigación adoptada en este trabajo incluye la observación participativa y no participativa, entrevistas realizadas durante una visita al centro preventivo varonil oriente, y la experiencia propia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, así como el análisis de documentos legales y estadísticas oficiales, permitiendo una evaluación crítica y detallada de las condiciones y prácticas dentro del sistema penitenciario.

Las deficiencias en la supervisión judicial y la permisividad en el acceso a medios de comunicación por parte de los internos destacan la falta de medidas efectivas para proteger a las víctimas de violencia. Este trabajo evaluativo-critico, basado en investigación empírica, es la base para proponer reformas para asegurar una protección real y efectiva de los derechos humanos, con un enfoque especial en la prevención de la violencia contra la mujer, evaluando la eficacia de las estrategias implementadas en el Estado de México y proponiendo mejoras para la reintegración social y la reducción de la reincidencia delictiva.

3.3.1 La reinserción social según la ENPOL

Con fundamento en el Artículo 29º de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asume la crucial responsabilidad de generar datos estadísticos sobre la población carcelaria en México, una tarea esencial para la formulación de políticas criminales efectivas. La realización de la ENPOL en 2021 por parte del INEGI cumple con esta obligación legal, proporcionando datos indispensables que revelan las condiciones dentro del sistema penitenciario y los desafíos que enfrenta. Estos resultados no sólo son vitales para comprender la dinámica carcelaria y promover la transparencia, sino que también son fundamentales para el diseño de programas de rehabilitación y reinserción social, especialmente para aquellos internos que han cometido delitos contra mujeres. Al alinearse con marcos jurídicos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, y tomando en cuenta modelos exitosos como el Violence Against Women Act (VAWA) de Estados Unidos, la ENPOL 2021 destaca la importancia de una base de datos sólida para abordar de manera integral la violencia de género y fomentar un entorno carcelario que promueva la reintegración efectiva y la reducción de la reincidencia. Sin embargo, es imperativo asegurar la aplicación efectiva de las recomendaciones derivadas de estos datos para que se traduzcan en políticas públicas tangibles que realmente fortalezcan los derechos humanos y mejoren las condiciones de vida de los internos.

Durante junio y julio de 2021, la ENPOL inspeccionó 203 centros penitenciarios a nivel nacional, incluyendo tanto instalaciones federales como estatales en las 32 entidades federativas, con especial énfasis en 15 centros del

Estado de México.[336] Los resultados del estudio revelan que el 94.6% de los internos posee habilidades básicas de lectura y escritura, mientras que el 69.7% reportó contar con educación primaria y secundaria.[337] Estos resultados subrayan una cuestión crítica en la prevención de primer nivel y el cumplimiento del derecho humano a la educación básica.

La cifra del 94.6% de internos con habilidades básicas de lectura y escritura indica que, aunque la mayoría posee estas competencias, aún existe una proporción significativa que carece de una educación adecuada desde una etapa temprana. Esto evidencia un trabajo pendiente en términos de prevención primaria y resalta la necesidad de fortalecer el sistema educativo para evitar la criminalidad. El hecho de que sólo el 69.7% de los internos haya completado la educación primaria y secundaria pone de manifiesto una grave deficiencia en el cumplimiento del derecho humano a la educación básica, tal como lo establece el Artículo 3º de la CPEUM.

Esta brecha educativa no sólo contribuye a la vulnerabilidad frente a la violencia y la criminalidad, sino que también refleja una falla sistémica en la garantía de igualdad de oportunidades, exacerbando las condiciones que perpetúan la violencia y la desigualdad de género. Por lo tanto, es imperativo que las políticas públicas se enfoquen en asegurar un acceso universal y obligatorio a la educación de excelencia desde una edad temprana para disminuir la incidencia de la violencia contra la mujer.

Por otro lado, a nivel nacional, el 12.4% de la población masculina privada de libertad y sentenciada fue condenada por el delito de violación sexual, mientras que el 1.3% fue condenada por el delito de violencia familiar.[338] En cuanto a la reincidencia, la ENPOL revela que el 1.5% de esta población con antecedentes penales fue sentenciada nuevamente por violación sexual, y el 2.3% por violencia familiar.[339] Estas cifras reflejan una falla en la prevención terciaria, que debería

---

[336] Vid. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021,” México, INEGI, p. 9, disponible en: *https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf* (fecha de consulta: 26 de junio de 2023).
[337] Vid. Ibídem, p.14.
[338] Vid. Ibídem, p.92.
[339] Vid. Ibídem, p.44.

enfocarse en la rehabilitación y reinserción efectiva de los agresores para evitar la reincidencia. Aunque estas cifras parecen bajas, es crucial considerar la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian. La baja tasa de reincidencia reportada podría no reflejar la realidad completa, ya que muchos casos de violencia de género y familiar no se denuncian debido a la falta de confianza en las autoridades y el sistema judicial.

La cifra negra, que representa los casos no denunciados, revela una realidad alarmante sobre la violencia sexual contra mujeres mayores de 18 años. En el segundo semestre de 2021, el 99.7% de estos casos quedó en la sombra, reflejando una profunda desconfianza en el sistema judicial y en las instituciones responsables de estos delitos.[340] Es particularmente alarmante que ciudades como Tlaxcala, Mérida y Tampico registren porcentajes cercanos al 100% en la cifra negra para delitos sexuales,[341] lo que señala deficiencias graves en los sistemas locales de atención y persecución del delito. Esto demanda acciones inmediatas por parte de las autoridades para mejorar la eficacia de las políticas de prevención y sanción.

Estas cifras ponen de manifiesto una falla estructural en la prevención y gestión de la violencia contra la mujer, destacando la urgente necesidad de fortalecer las instituciones judiciales y de seguridad pública. La profunda desconfianza de las víctimas en las autoridades subraya la importancia de implementar reformas que no sólo promuevan la justicia, sino que también restablezcan la confianza pública en el sistema judicial.

En contraste, el marco jurídico norteamericano, especialmente a través de VAWA, ha demostrado efectividad en la expansión de políticas públicas a contextos locales específicos como las aldeas de Alaska. La reautorización de VAWA en 2022 incluye un programa piloto que extiende la jurisdicción criminal tribal especial a hasta cinco aldeas nativas de Alaska por año, abordando una omisión previa que no incluía a estas comunidades. Este enfoque no sólo promueve la justicia y

---

[340] Vid. México Evalúa, “Crece la cifra negra de la violencia sexual: en 2021, el 99.7% de los casos no se denunciaron,” México, 2022, disponible en: *https://www.mexicoevalua.org/crece-la-cifra-negra-de-la-violencia-sexual-en-2021-el-99-7-de-los-casos-no-se-denunciaron/* (fecha de consulta: 26 de junio de 2023).

[341] Vid. Ídem.

protección de los derechos fundamentales de las mujeres en estas comunidades, sino que también asegura un entorno seguro y propicio para la educación y el bienestar infantil, siguiendo los principios de homologación y acatamiento del derecho humano a la educación y el interés superior de la niñez.

La implementación de políticas adaptadas a las particularidades locales siguiendo el imperativo categórico kantiano, como se ha hecho en Alaska, puede servir de modelo para México. Implementar estas estrategias ayudaría a abordar efectivamente la violencia contra la mujer en contextos donde la confianza en las autoridades es mínima y la cifra negra es alta. Por lo tanto, es crucial que las políticas públicas mexicanas se fortalezcan y homologuen en todo el territorio mexicano para reducir la cifra negra y mejorar la respuesta institucional ante la violencia contra la mujer. Un ejemplo claro de esta falta de homologación en el territorio mexicano para prevenir el fenómeno criminal en el primer nivel preventivo es lo manifestado por la Mtra. Verónica Espinoza Reyes cuando nos comentó que en Estados como Chiapas los niños toman clase sentados en huacales.[342]

3.3.2 La realidad del Sistema Penitenciario

El desarrollo de este apartado se basa en la observación no participativa y en la información obtenida de 12 entrevistas realizadas durante una visita guiada al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (RPVP) el 29 de septiembre de 2023, gestionada por el Maestro Juan Carlos Ugalde, docente de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón. En estas entrevistas, se incluyeron a 3 miembros del personal de seguridad y a 9 personas privadas de la libertad involucradas en actividades artístico-culturales. Aunque no se pudo entrevistar a una población específica relacionada con delitos cometidos contra mujeres, se aprovechó esta oportunidad para observar las condiciones generales de los internos. Se destacó que todos los entrevistados tenían sentencias condenatorias en progreso. A partir de la metodología de investigación aplicada, se identificaron cuatro problemas alarmantes.

[342] Vid. Op. Cit. Espinoza Reyes, Verónica, 7:35 min.

3.3.2.1 Sobrepoblación

Para comenzar, aunque las cifras oficiales del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional (CMIEPN) de agosto de 2023 indican una sobrepoblación del 31.78% en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (RPVO),[343] datos obtenidos directamente del personal de seguridad penitenciaria revelan que la cifra real de personas privadas de la libertad asciende a 14,800, superando el 100% de la capacidad penitenciaria. Esta discrepancia evidencia los desafíos críticos asociados con la sobrepoblación carcelaria extrema. La sobrepoblación vulnera los derechos humanos básicos de los internos, contraviniendo principios establecidos en la legislación nacional e internacional sobre el trato digno y humano en centros penitenciarios. Además, compromete gravemente la efectividad de los programas de reinserción social, esenciales para reducir la reincidencia delictiva, conforme al Artículo 18º de la CPEUM.

La capacidad excedida en más del 100% pone en evidencia una crisis en la gestión penitenciaria, donde los recursos y servicios son insuficientes para atender a una población tan alta. Esto afecta la calidad de vida de los internos, generando condiciones inhumanas que agravan las tensiones y potencialmente aumentan la violencia dentro del reclusorio. La saturación extrema compromete la efectividad de los programas de rehabilitación y reintegración social, los cuales requieren un entorno estructurado y recursos suficientes para funcionar adecuadamente. Este entorno es inviable en un contexto de sobrepoblación tan severa.

La discrepancia entre las cifras oficiales y las obtenidas en campo revela una falta de transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades penitenciarias. Esto indica la necesidad urgente de una reforma integral que aborde tanto la infraestructura como la gestión del sistema penitenciario. Esta situación ejerce una presión insostenible sobre el personal y los recursos del reclusorio, afectando negativamente tanto a los internos como al personal de seguridad penitenciaria. Es esencial que el Estado cumpla con sus obligaciones de garantizar los derechos

[343] Vid. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional,” Ciudad de México, SSPC, septiembre de 2023, p. 17 disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/915856/CE_2023_08.pdf* (fecha de consulta: 29 de mayo de 2024).

humanos y la seguridad de todas las personas bajo su custodia. Asegurar condiciones adecuadas en los centros penitenciarios es vital para la implementación efectiva de políticas y estrategias orientadas a los objetivos del Artículo 18º de la CPEUM., que son la reinserción social y la prevención de la reincidencia delictiva.

Desde una perspectiva teórica, Laura Zúñiga enfatiza que la efectividad de la política criminal para promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a una vida libre de violencia depende de su habilidad para integrar dimensiones multidisciplinarias.[344] Este enfoque no sólo enriquece la perspectiva con la que se aborda el derecho humano a una vida libre de violencia, sino que también asegura una mayor cohesión social promoviendo cambios significativos en la cultura mexicana. Zúñiga sostiene que la política criminal debe extenderse más allá de las metodologías tradicionales de tratamiento del delito y la desviación social para incursionar en los dominios legales, sociológicos, económicos y filosóficos del modelo político de un Estado.[345]

Esto se traduce en un *sistema criminológico,*[346] *el cual* es relevante en este contexto, ya que tendría la tarea de fiscalizar y evaluar este tercer nivel preventivo. Este sistema, además de enfocarse en el enjuiciamiento y la sanción por violar el derecho humano a una vida libre de violencia, destaca la importancia de una administración de justicia que no sólo imparta penas, sino que también aborde las causas subyacentes de la violencia. El Mtro. Roberto Calixto Márquez,[347] propone

[344] Vid. Op. Cit. Zúñiga Rodríguez, Laura, "Nociones de Política Criminal," p. 87.
[345] Vid. Ïdem.
[346] Un sistema criminológico se refiere a un conjunto organizado de teorías, metodologías y prácticas orientadas a la comprensión, control y prevención de la criminalidad dentro de una sociedad. Estos sistemas integran diversas disciplinas, incluyendo la sociología, la psicología, la antropología, y el derecho penal, para abordar de manera holística los fenómenos delictivos. La finalidad de un sistema criminológico es proporcionar un marco teórico y práctico que permita a las autoridades y a los académicos entender las causas del crimen, evaluar la efectividad de las políticas de prevención y control, y desarrollar estrategias basadas en evidencia para reducir la incidencia delictiva.
[347] El Mtro. Calixto Márquez Roberto es Licenciado en Derecho y Maestro en Política Criminal, ambos grados obtenidos en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su carrera profesional incluye roles destacados como Investigador de Delitos Federales en la Procuraduría General de la República, actualmente conocida como Fiscalía General de la República. Además, ha impartido clases en instituciones de renombre como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad Hispanoamericana del Bajío. Ha sido ponente y moderador en eventos internacionales significativos, enfocados en temas de educación intercultural, género y derechos humanos. El Mtro. Márquez ha recibido diversos diplomas

en una de sus conferencias titulada: *Narco Delincuencia Globalizada,*[348] un *sistema criminológico,* que integra un enfoque deontológico y ético, asegurando que las políticas y prácticas de procuración y administración de justicia sean evaluadas con los principios de justicia y equidad, y que promuevan un entorno seguro y respetuoso para todas las personas.

El testimonio del personal del RPVO identifica el abuso de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, como la principal razón de la sobrepoblación penitenciaria. Esta práctica se fundamenta en la teoría especial negativa, influida por el positivismo criminológico de figuras como Ferri, Lombroso y Garófalo, y tiene serias implicaciones para los derechos humanos de las personas privadas de libertad, según Álvarez Díaz de León.[349] Al enfocarse en la neutralización de individuos considerados peligrosos y no aptos para la convivencia comunitaria, la prisión preventiva conduce a una justificación frecuente de su aplicación, incluso en casos donde podría no ser necesaria. Este enfoque propicia un incremento en la población carcelaria y subraya la necesidad de revisar las políticas penales actuales para asegurar que los derechos humanos y la justicia sean prioridad.

Los datos de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios, Federales y Estatales (CNSIPEE-F) de 2023 revelan una realidad preocupante: en 2022, el 50.2% de la población carcelaria sin sentencia estaba en prisión preventiva oficiosa y el 23.9% en prisión preventiva justificada.[350] Esta práctica extensiva de la prisión

---

y certificados de apreciación que reconocen su contribución en los campos de la enseñanza universitaria y el derecho penal internacional.

[348] Vid. Calixto Márquez, Roberto, "Narco Delincuencia Globalizada," *Conferencia presentada en las Jornadas de Política Criminal*, México, UNAM, Facultad de Estudios Superiores Aragón, viernes, 28 de abril de 2023, cartel disponible en: https://drive.google.com/file/d/13hRckaDWYdR2PKTSUd8ImiTU8pcPKiTh/view?usp=drive_link (fecha de consulta: 20 de septiembre de 2023).

[349] Vid. Álvarez Díaz de León, Germán, et. al., "Apuntes acerca de dos escuelas criminológicas: Clásica y Positivista," México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, p. 12, disponible en: *https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Apuntes_acerca_de_dos_escuelas_criminologicas_Clasica_y_positivista_Alvarez_Diaz_Montenegro_Nunez_Manuel_Martinez_TAD_7_8_9_sem.pdf* (fecha de consulta: 29 de mayo de 2024).

[350] Vid. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), "Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Federal y Estatal (CNSIPEE-F) 2023," México, INEGI, 2023, p. 1, disponible en: *https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CNSIPEE-F/CNSIPEE-F2023.pdf* (fecha de consulta: 29 de mayo de 2024).

preventiva es un factor clave en el problema sistémico de la sobrepoblación penitenciaria. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tanto a nivel federal como estatal, hay 92,820 individuos privados de la libertad bajo la hipótesis de prisión preventiva.[351] Esta sobrepoblación tiene consecuencias directas en las condiciones carcelarias, ya que podemos inferir una falta de acceso a recursos básicos como agua limpia, alimentos, capacitación laboral, educación, salud y prácticas deportivas.

Tales deficiencias comprometen seriamente la efectividad de los programas de rehabilitación y reinserción social, destacando la necesidad urgente de revisar y reformar las políticas relacionadas con la prisión preventiva. Desde una perspectiva ética y de derechos humanos, esta situación refleja una violación de la presunción de inocencia y del derecho a un juicio justo, exacerbada por un enfoque punitivo que no aborda las causas subyacentes de la criminalidad, tales como la pobreza. Es esencial contar con un ESDD que garantice y salvaguarde los derechos humanos. La reforma de estas políticas es esencial para asegurar un sistema penitenciario justo y humano que promueva la reintegración social, el respeto de la dignidad humana y las garantías individuales.

El caso paradigmático del fallo *Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México*, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 7 de noviembre de 2022, señala directamente la responsabilidad del Estado mexicano en la violación flagrante de los derechos fundamentales de los ciudadanos involucrados.[352] Este caso se centra en la detención y tratamiento de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, quienes fueron arrestados el 12 de enero de 2006 por la Policía Federal Preventiva (PFP) en una carretera entre la Ciudad de Veracruz y la Ciudad de México.

[351] Vid. Op. Cit., SSPC, “Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional,” p. 11.

[352] Vid. Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México,” Sentencia de 7 de noviembre de 2022, (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 470, San José, Costa Rica, CIDH, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1GxvosBrVK6zVmGCmFTnPBtaYAp7YI8jO/view?usp=sharing* (fecha de consulta: 30 de mayo de 2024).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que la detención fue ilegal y arbitraria, ya que se realizó sin una orden judicial y sin la existencia de flagrancia, violando los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia de las víctimas. Posteriormente, las víctimas fueron sometidas a arraigo y prisión preventiva sin justificación legal, medidas que la Comisión y la Corte calificaron como punitivas más que cautelares. Durante su detención, fueron incomunicados, no se les informó sobre las razones de su detención y se les negó una defensa técnica adecuada en los primeros días, lo que contraviene sus derechos a las garantías y protección judicial.

Además, el caso pone de relieve la vulnerabilidad de los derechos humanos en México, especialmente en situaciones relacionadas con acusaciones de delincuencia organizada. Las normas de arraigo y prisión preventiva oficiosa se aplicaron de manera desproporcionada, demostrando un uso excesivo de estas medidas. En su sentencia, la Corte IDH reconoció la responsabilidad del Estado mexicano por estas violaciones y ordenó una serie de reparaciones. Entre estas medidas se incluyen la reforma de las leyes para eliminar el arraigo y limitar la prisión preventiva, la publicación de la sentencia, un acto público de reconocimiento de responsabilidad, así como becas educativas y proyectos productivos para las víctimas y sus familias.

Este caso no sólo destaca la importancia de ajustar las legislaciones nacionales a los estándares internacionales de derechos humanos, sino también la necesidad de garantizar que las medidas privativas de libertad se apliquen de manera justa y respetuosa de los derechos fundamentales. La decisión de la Corte, la duodécima de este tipo, evidencia las profundas deficiencias del sistema de justicia mexicano y subraya la urgencia de reformar las políticas y prácticas judiciales en México. La eliminación del arraigo y la modificación de la prisión preventiva representan pasos esenciales hacia una justicia más equitativa, marcando el camino hacia una protección integral de los derechos humanos.

La vinculación de México con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un pilar fundamental para asegurar que estas prácticas totalizadoras sean eliminadas. Estas

recomendaciones representan directrices basadas en principios fundamentales de los derechos humanos, principios que México ha aceptado al ser parte de la comunidad internacional. México debe acatar estas recomendaciones, asumiendo la responsabilidad de cambiar sus políticas criminológicas represivas por unas humanistas de orden integral. Cumplir con las recomendaciones de la CIDH no sólo constituye una obligación legal, sino también un acto ético que demostraría el compromiso de México con los valores fundamentales de los derechos humanos. Esta dedicación contribuiría a la edificación de una sociedad justa e igualitaria, donde incluso aquellos que han cometido delitos sean tratados con humanidad y se les brinde la oportunidad de reintegrarse significativamente en la comunidad.

3.3.2.2 Falta de obligatoriedad

Antes de comenzar, es importante señalar que durante nuestra visita guiada al RPVO, al intentar identificar a personas privadas de la libertad por cometer violencia contra la mujer, los propios internos informaron que no están clasificados según el delito por el cual han sido encarcelados. Dentro del reclusorio, los internos son libres de elegir sus amistades o subgrupos, los cuales se forman principalmente por razones de nacionalidad, identidad de género o pertenencia a un grupo delictivo. Por esta razón, la información proporcionada es general y aplicable a todas las personas privadas de la libertad, incluidas aquellas condenadas por delitos de violencia contra la mujer.

Como segundo problema identificado, es lamentable que los ejes rectores previstos en el Artículo 18º de la CPEUM para la reinserción social no sean obligatorios. Las entrevistas realizadas a nueve personas privadas de la libertad revelan que su participación en programas artísticos y culturales es significativa, demostrando esfuerzo personal, iniciativa y disciplina. Esta participación ha contribuido notablemente a su proceso de reinserción. Algunos participan con la esperanza de obtener ventajas, como la libertad anticipada, mientras que otros buscan un sentido de propósito o llenar un vacío en sus vidas a través de actividades constructivas. Este panorama diverso de motivaciones subraya la importancia de considerar que estas personas se encuentran en una *institución total*, según el concepto de Erving Goffman, un entorno donde la mayoría de sus acciones están

reglamentadas y obligadas por las normas institucionales.[353] Al igual que en el caso de los programas artísticos y culturales que observamos, los pilares para alcanzar el objetivo de la reinserción social y evitar la reincidencia como la educación también es opcional.

Estos argumentos son verificables al analizar el contexto del sistema penitenciario, especialmente en lo que respecta a programas de rehabilitación y reinserción social desde un análisis estadístico. Según datos de la ENPOL, sólo el 22.2% de la población reclusa participa en programas educativos,[354] lo que refleja la existencia de obstáculos significativos como la falta de interés,[355] que impiden una mayor participación en la educación. Esto sugiere la necesidad de implementar políticas más inclusivas y obligatorias.

El impacto positivo de la educación en las prisiones va más allá de la mera adquisición de conocimientos académicos. Por un lado, contribuye a mejorar la autoestima de los reclusos y a fomentar una visión más optimista de su futuro, aspectos cruciales para disminuir las tasas de reincidencia. Por otro lado, la adquisición de habilidades específicas y calificaciones mejora las oportunidades de empleo de los reclusos tras su liberación, lo que se traduce en una disminución de la probabilidad de reincidir en conductas delictivas.

En el mismo orden de ideas, el marco jurídico de la LGAMVLV, en particular en sus Artículos 41, fracción VIII, y 44, fracción V, refleja el compromiso del Estado con la reinserción social y la reeducación de los agresores. Esta legislación asigna a la Federación y a la SSPC la tarea de desarrollar programas de reeducación y reinserción con perspectiva de género. Estas disposiciones legislativas enfatizan la necesidad de modificar actitudes y comportamientos para prevenir la reincidencia, centrándose en la transformación y rehabilitación de los agresores como elementos cruciales para forjar una sociedad más segura y sin violencia contra las mujeres.

---

[353] Vid. Op. Cit., Goffman, Erving, “Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales,” p. 13.

[354] Vid. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021,” Diciembre 2021, p. 125, disponible en: *https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf* (fecha de consulta: 30 de mayo de 2024).

[355] Vid. Ibídem, p. 126.

Por tanto, es esencial abordar estas necesidades específicas para garantizar una reintegración social justa y equitativa, basada en las realidades y desafíos que enfrentan los individuos en proceso de reinserción. Es crucial proporcionar caminos hacia un cambio de comportamiento duradero y efectivo para prevenir futuros actos de violencia. De manera reveladora, la ENPOL también señala que "A nivel nacional, 4.5% de la población privada de la libertad considera probable volver a cometer alguna conducta delictiva después de salir del centro penitenciario."[356] Esto denota la urgencia de hacer obligatorios los programas de educación, capacitación para el empleo, salud y deporte, así como optimizar las condiciones en los centros penitenciarios, con el fin de reducir la reincidencia y promover una reintegración social más efectiva y segura.

3.3.2.3 Libre uso y posesión de dinero en efectivo

Durante nuestra convivencia y contacto con personas privadas de la libertad en el RPVO, se expusieron los programas destinados a la reinserción social de los internos a través de expresiones artísticas. En este entorno, también se comercializaban productos de consumo como bebidas, dulces, frutas, tortas, sopas instantáneas y palomitas, así como artesanías creadas por ellos mismos. El medio de intercambio utilizado para acceder a estos bienes fue el mismo que rige el mundo exterior: el dinero en efectivo.

La tercera problemática que hemos identificado en estas instituciones, donde los derechos humanos se encuentran restringidos o suspendidos debido a una sanción penal justificada con fundamento en el Artículo 29º de la CPEUM, párrafo 3, y 38, fracciones II, III y VII, reside en la permisión de la libre posesión y uso de dinero en efectivo por parte de las personas privadas de libertad. Si bien el acceso a productos o servicios mediante recursos financieros es un derecho protegido por la CPEUM, en el contexto penitenciario esta libertad financiera se traduce en corrupción sistémica, ya que es permitida por las mismas autoridades del sistema penitenciario.

[356] Ibídem, p. 155.

La posesión y el intercambio libre de dinero en efectivo por parte de los reclusos son actividades toleradas por las autoridades de los centros penitenciarios. Nuevamente, identificamos una *lujuria económica* que, en este contexto, se convierte en el principal obstáculo para alcanzar los objetivos constitucionales de reinserción social y prevención del delito. Además de evidenciar la corrupción subyacente en la administración penitenciaria, esta situación genera una contradicción en la gestión de los derechos de los internos: por un lado, se pretende conceder autonomía y preservar la dignidad de los reclusos mediante la libertad financiera, pero esta misma puede socavar los esfuerzos dirigidos a su reinserción y al mantenimiento de la seguridad interna, al fomentar actividades de comercio ilegal y prácticas corruptas dentro de las prisiones.

Esta situación explica la ineficacia de las estrategias de reinserción social y prevención de la reincidencia de la violencia contra las mujeres implementadas hasta ahora en México. Por tanto, es medular analizar de manera genealógica y crítica la vigente y equivocada interpretación del paradigma neoliberal norteamericano, para ser conscientes del error de enfoque y poder reformularlo, una tarea desarrollada a detalle en el cuarto capítulo. En síntesis, y de igual forma como lo hemos estado criticando a lo largo de esta investigación, este fenómeno social también ha contaminado al sistema penitenciario mexicano, implementando al interior un modelo operativo que resulta ineficaz, afectado por la ya identificada *lujuria económica*.

Este último nivel preventivo culmina al catalizar nuestra teoría explicativa del objeto de estudio de esta tesis. La problemática dentro de los centros penitenciarios puede entenderse como un reflejo distorsionado de la sociedad en general, un *espejo* que refleja la realidad exterior. En este contexto, los reclusos experimentan un resultado sistémico transgeneracional, donde las mismas condiciones y dinámicas que prevalecen en libertad se replican al interior de las prisiones. Este fenómeno, impulsado por la *lujuria económica* de los anteriores gobiernos mexicanos, perpetúa un ciclo en el que las instituciones penitenciarias, en lugar de servir como espacios de reinserción social, se convierten en microcosmos de los problemas sociales que aquejan a la sociedad en su conjunto. A pesar de las

pretensiones de políticas progresistas, el contexto penitenciario actual refleja la misma enfermedad económica que se viven en el mundo exterior, reproduciendo las dinámicas y desafíos que enfrentan las personas en libertad, creando un ciclo de repetición y estancamiento en lugar de transformación.

Permitir la libre posesión y uso de dinero en efectivo por parte de los reclusos conlleva a efectos similares a los observados y evaluados críticamente hasta ahora en libertad. En esta realidad emulada, el dinero en efectivo altera el equilibrio de poder entre los reclusos y fomenta la promoción de redes ilícitas de comercio y corrupción, socavando los objetivos de prevención del delito y creando un ambiente volátil y difícil de controlar. El dinero en efectivo, una herramienta sumamente poderosa que sirviese para alcanzar y materializar el imperativo categórico kantiano, al igual que en el exterior, se convierte en un arma, un instrumento de poder y desigualdad que exacerba la violencia, y todas las diferencias socioeconómicas existentes, reflejando nuevamente la práctica involutiva del modelo neoliberal.

3.3.2.4 Supervisión judicial inexistente

Durante las entrevistas realizadas en nuestra visita guiada, tanto las personas privadas de libertad como el personal de seguridad manifestaron nunca haber sido testigos de algún Juez de Ejecución Penal que haya monitoreado, evaluado o visitado el interior del reclusorio. Esta observación es particularmente preocupante, dado que el Artículo 24º de la LNEP establece que los Jueces de Ejecución deben supervisar y garantizar la correcta ejecución de las sentencias. La ausencia de tal supervisión pone en duda la efectividad de la implementación de los derechos y garantías fundamentales que la ley busca proteger.

La información recabada en campo evidencia cómo el discurso del marco jurídico mexicano para salvaguardar el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia se queda en letra muerta. Pese a los mandatos establecidos en la LNEP, la falta de implementación y supervisión efectiva de los programas de reinserción y seguimiento de las personas que obtienen la libertad anticipada resulta en la perpetuación de ciclos de violencia y la reincidencia en delitos graves, incluyendo feminicidios. Este desfase entre la teoría y la práctica subraya la necesidad urgente de una reforma integral y una aplicación más rigurosa de las

políticas existentes para garantizar la protección real y efectiva de las víctimas de violencia.

Una vez que los individuos ingresan al sistema penitenciario, se deben implementar de manera efectiva los cinco ejes rectores para prevenir la reincidencia delictiva, especialmente al alcanzar algún beneficio de libertad anticipada. Una aplicación inadecuada de estos ejes puede elevar el riesgo de reincidencia e intensificar los comportamientos agresivos, llegando incluso a situaciones extremas como el feminicidio.

Esta situación se ejemplifica en el caso de uno de los nueve entrevistados, quien estaba privado de libertad por el delito de feminicidio. Esta persona confesó que la privación de su libertad se trataba de una reincidencia, ya que la primera ocasión por la que fue ingresado fue por el delito de lesiones graves que ponen en peligro la vida. Justificó este acto explicando que descubrió a su pareja teniendo relaciones sexuales al interior del hogar. Arrepentido, y una vez alcanzado el beneficio de la libertad anticipada, regresó a su hogar donde encontró a su esposa viviendo con la persona que lo había engañado, motivo por el cual la golpeó la primera vez. En esta ocasión, aseguró no dejarla con vida, mientras que la nueva pareja sentimental de ella huyó del lugar. El entrevistado comentó que tras su primer delito, durante el cual estuvo privado de libertad, nunca recibió tratamiento educativo, psicológico o capacitación para un trabajo, y mucho menos una vez alcanzada la libertad anticipada. Este caso resalta la crucial importancia de implementar los ejes rectores establecidos en la LNEP para asegurar la rehabilitación y reinserción social de los individuos, y así prevenir tragedias futuras y reincidencias delictivas.

3.3.3 Contrapeso judicial: corrupción y redención en la procuración de justicia

Este apartado se fundamenta en la noticia criminal número 322250033013, carpeta de investigación 2581/13,[357] y en la sentencia de procedimiento abreviado

[357] Vid. Vid. Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), “Noticia Criminal 2581/13,” Gobierno del Estado de México, 2013, p.13, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1TJ-NgiIBagvTyr-q-NC-x3pjSW01QE01/view?usp=sharing* (fecha de consulta: 2 de junio de 2024).

de la carpeta de investigación 873/2013.[358] Este caso evidencia nuestra teoría sobre la deficiencia e incorrecta aplicación de la política criminal encargada de prevenir los delitos en sus tres niveles. Un hombre, intolerante a la violencia contra la mujer, fue víctima de la *lujuria económica* dentro del sistema de procuración de justicia del Estado de México. Este caso práctico ejemplifica cómo el interés personal por el enriquecimiento económico puede distorsionar la justicia. Tanto las copias de la noticia criminal 322250033013 como las copias de la sentencia de procedimiento abreviado, revelan cómo el sistema de justicia, influenciado por la avaricia económica, lo privó de su libertad después de haber defendido a una mujer, convirtiéndose así en victimario del agresor de la mujer defendida. Este caso ilustra cómo los intereses económicos pueden distorsionar la aplicación de la justicia, reflejando nuestra teoría de que el sistema, al estar intoxicado por dichos intereses y cegando el deber ser de la justicia, crea una realidad invertida.

La orden de aprehensión contra el indiciado se derivó de la denuncia hecha por el agresor de la mujer a la que protegió y de la que se inició la carpeta de investigación 873/2013. Posteriormente, se consiguió el testimonio de la mujer agredida, lo que corroboraba el actuar del hombre que la defendió.[359] Este testimonio puso de manifiesto las inconsistencias y las influencias económicas que permean el sistema de procuración de justicia, evidenciando cómo la codicia puede llevar a decisiones ministeriales que contravienen los principios de equidad y justicia.

Las autoridades procuradoras de justicia del Estado de México (Ministerio Público, PDI y Peritos) dieron más importancia y credibilidad a la denuncia del agresor, posiblemente influenciadas por las cooperaciones económicas que suelen solicitar para agilizar los procesos. Esta práctica, evidenciada en el apartado *Evaluación de las medidas de protección administrativas: estudio de caso*, refuerza nuestra teoría sobre la corrupción sistémica. El defensor fue detenido por la

[358] Vid. Poder Judicial del Estado de México (PJEM), "Sentencia de Procedimiento Abreviado en la Carpeta Administrativa 873/2013," Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, 2014, p.1, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1Wcuc_l3Zp_DPnN58nvwSK73WqVEtm_z-/view?usp=sharing* (fecha de consulta: 2 de junio de 2024).
[359]Vid. Op. Cit. PGJEM, p. 13.

entonces llamada Policía Ministerial (ahora PDI) el 15 de octubre de 2013 y puesto a disposición del juez de control del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, siguiendo los procedimientos legales, lo cual fue corroborado durante la audiencia de control de detención.[360]

En el nuevo sistema penal acusatorio, donde la voz del acusado tiene como objetivo mantener un equilibrio probatorio entre las partes y el respeto a los derechos humanos, este caso representa un giro notable a favor de la justicia. Sólo después de ser vinculado a proceso se le concedió formalmente el uso de la voz, una herramienta crucial y característica del sistema penal acusatorio vigente. Aprovechando esta oportunidad, el defensor presentó su versión de los hechos, argumentando que las lesiones que presentaba la persona que lo acusaba fueron provocadas por él, sí, pero en un estado de necesidad y legítima defensa al proteger a una mujer de la que este se encontraba agrediendo. Durante este enfrentamiento, el entrevistado también resultó herido y mostró a la juez las cortadas en sus manos en posición defensiva, las cuales fueron certificadas en la noticia criminal 2581/13, que él mismo inició por los hechos narrados.[361]

La intervención oral del acusado introdujo una duda razonable en la juez, llevando a una orden de verificación de los hechos por parte del Ministerio Público y una reprogramación de la audiencia. Este evento resalta la reflexión de María Inés García Canal: “la palabra es vencida, se vuelve deshabitada, sumida en el descrédito, convertida en rumor, cuando no en un simple ruido”,[362] subrayando la trascendencia de la palabra y la comunicación efectiva en la búsqueda de la justicia, una vez que se hace valer el derecho de réplica según el Artículo 6º de la CPEUM.

Durante la nueva audiencia, se verificaron los datos aportados por el defensor, llevando a la juez Luz Irene Morán Avelleira a modificar la tipificación del delito de lesiones graves, a lesiones cometidas en riña. Este cambio resultó en la liberación inmediata del entrevistado, dada la atipicidad de prisión preventiva para

[360] Vid. Op. Cit. PJEM, p. 1
[361] Vid. Op. cit. PGJEM, p.4.
[362] Vid. García Canal, María Inés, “El imposible duelo,” 2014 Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género, 2014, p. 26, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1MLSkPfjamVS1piXNSh1vKHY9nRa4LiR-/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 2 de junio de 2024).

este tipo de delito, según lo establece el Artículo 239, fracción I del Código Penal del Estado de México. Como secuelas de la equívoca acción penal y prisión preventiva oficiosa a la que fue sometido el defensor, se cancelaron sus derechos civiles y políticos.[363] Además, aunque no se generaron antecedentes penales debido a la falta de una condena corporal, el entrevistado quedó registrado nominalmente.

El caso presentado revela las profundas implicaciones de la *lujuria económica* dentro del sistema de procuración de justicia del Estado de México. La influencia de intereses personales y económicos en este ámbito no es un fenómeno aislado; refleja una problemática estructural derivada de la interpretación radical del modelo neoliberal, donde el afán de lucro puede pervertir los objetivos sociales del Estado de Derecho. Este fenómeno, caracterizado por una peligrosa combinación de corrupción y avaricia, se manifiesta en la priorización de denuncias influenciadas por compensaciones económicas sobre las verdaderas necesidades de justicia, como se evidenció en la noticia criminal 322250033013. La captura de las autoridades ministeriales por estos intereses económicos compromete la imparcialidad y equidad, distorsionando la aplicación de la justicia y convirtiendo a las víctimas en victimarios, una manifestación clara de nuestra teoría del espejo. Este análisis evidencia la necesidad urgente de un enfoque deontológico y ético en la procuración de justicia, que priorice el respeto a los derechos humanos y la equidad, desintoxicado de la *lujuria económica* que actualmente distorsiona su funcionamiento.

En este mismo sentido de ideas evaluativas y críticas, la teoría de la división de poderes, formulada por Montesquieu, ayuda a entender la importante actuación de la juez Luz Irene Morán Avelleira. Montesquieu argumenta que "Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder".[364] En otras palabras, se sostiene que la separación entre el poder

[363] Vid. Op. Cit. PJEM, p. 24.
[364] Vid. baron de Montesquieu, Charles de Secondat, “Montesquieu: The Spirit of the Laws,” trad. propia, Reino Unido, Cambridge University Press, 1989, p. 155, disponible en: *https://books.google.com/books?id=__F8xEX8uw8C&printsec=frontcover&dq=Montesquieu&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiD4uuq98CGAxVoIUQIHSGJA4wQ6wF6B*

legislativo, ejecutivo y judicial es esencial para garantizar un gobierno equilibrado y prevenir el abuso de poder. En este contexto, el sistema judicial corrigió las consecuencias de un sistema de procuración de justicia intoxicado por la *lujuria económica*. En el caso presentado, la intervención del sistema judicial fue determinante para contrarrestar las injusticias derivadas de un proceso viciado por intereses económicos. La orden de rastrear el registro de los argumentos del entonces ya vinculado a proceso, así como la reprogramación de la audiencia para su verificación, ejemplifican cómo el poder judicial puede actuar como un contrapeso necesario para corregir las distorsiones generadas en la fase de procuración de justicia.

3.3.3.1 Observaciones empíricas desde el CPRSNBX

Nuestra experiencia de ser víctima de un sistema de justicia penal corroído por la *lujuria económica* fundamenta este apartado. El conocimiento empírico y la observación participativa de la privación de libertad dentro del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca (CPRSNBX) proporcionan información veraz e invaluable que revela la verdadera naturaleza de la ejecución del tercer nivel preventivo.

Al ingresar al centro penitenciario, fuimos sometidos a un proceso exhaustivo de registro. Dos custodios solicitan datos personales y las causas de la detención. En el área próxima a la puerta de ingreso, como recién llegados nos ordenaron desnudarnos completamente y realizar sentadillas de espaldas a ellos. Posteriormente, permitieron vestirnos únicamente con ropa interior, calcetines y zapatos, para luego conducirlos a un cuarto lleno de ropa color azul, donde tomamos una playera y un pantalón apresuradamente, sin tiempo para elegir la talla adecuada. Uno de los custodios apresura el proceso y los lleva a otro cuarto, donde una mujer realiza una nueva entrevista. Con la ayuda de una máquina de escribir mecánica, lleno varios formularios con nuestros datos y realizó nuestro registro decadactilar de forma análoga es decir manipulando nuestros dedos con tinta e imprimiéndolos en papel.

AgKEAE (fecha de consulta: 3 de mayo de 2024), paráfrasis traducida: “So that one cannot abuse power, power must check power by the arrangement of things.“

Finalizado este proceso, uno de los custodios nos condujo por pasillos enrejados hacia el interior del edificio principal. Se pasa por un filtro donde nuevamente preguntan datos personales, y en el caso particular de su servidor, el custodio encargado hizo un comentario revelando conocer la razón de nuestro ingreso: *Eres bravo, ¿eh? Te gusta pelear*. Subimos varias escaleras y, tras varias vueltas, se llega a un pabellón oscuro y húmedo. Un interno vestido con ropa color beige abre la reja y nos indicó el número de celda asignada. El pasillo tiene diez celdas de aproximadamente tres metros por tres metros, cada una con entre seis y diez personas en su interior, coloquialmente llamadas *casitas*.[365] Tras cerrar la reja del pabellón, el mismo interno abre la celda asignada para poder entrar en ella. Adentro se encontraban ocho hombres: uno acostado en la loza que sirve de cama (*la mamá de la casita*),[366] otro en el retrete al fondo de la celda, dos acostados en el piso y el resto de pie.

Horas más tarde, se escuchó la reja del pabellón abrirse. Un interno vestido de beige, con tatuajes en la cara y aspecto intimidante, preguntó por los nuevos, caminando por el pasillo y golpeando los barrotes de las celdas con un tubo. Llegada la noche, se escuchó a alguien gritar *rancho*.[367] Dos internos vestidos de beige reparten los alimentos nocturnos con la ayuda de una plataforma de metal con ruedas. Transportan la comida en cubetas de plástico de veinte litros y, con un cucharón, distribuyen sopa, frijoles y arroz. Los internos sacan recipientes de todo tipo a través de las rejas para recibir sus raciones, a veces acompañadas de un bolillo. El mismo procedimiento se utilizaba para la porción de agua.

Al día siguiente, después de dormir sentados en el piso, se abrieron las rejas a las seis de la mañana, aproximadamente, para llevarnos a limpiar las instalaciones del reclusorio. Esta tarea se realizaba en cuclillas o de rodillas, mientras internos de beige arrojaban grandes cantidades de agua al piso. Los internos de azul se

[365] Casita: En el contexto penitenciario mexicano, *casita* se refiere a una celda.
[366] La mamá de la casita: Este término se utiliza para referirse a la persona que está a cargo de la ***casita***. Este individuo, tiene la responsabilidad de mantener el orden y la disciplina dentro de ese espacio, y puede tener ciertos privilegios o autoridad conferida por otros internos o incluso por el personal del centro penitenciario, los cuales se ha ganado por tener poder económico, político o ser el que tenga mayor antigüedad entre los que habitan la *casita*.
[367] Rancho: En la jerga del centro penitenciario, el término *rancho* se refiere a los alimentos distribuidos a los internos.

encargan de tallar y trapear los pisos siempre agachados con la ayuda de un *chicharrón*.[368] Al ponerme de pie por el cansancio, el interno con tatuajes en la cara, quien tenía aparente jerarquía, nos abordó, ordenándonos regresar al piso. Al negarnos, nos agredió físicamente y, al defendernos y perder el duelo, el interno de beige fue objeto de burla de los demás. Las heridas que teníamos, provocadas en la defensa de la mujer, se abrieron nuevamente, y fuimos llevados a la enfermería. Se trata de un cuarto viejo pintado de color crema, con mobiliario médico en muy mal estado. Tras esperar por largo tiempo sentados, ingresó una persona del sexo femenino vestida de civil, quien nos limpió y vendó las heridas.

De regreso en nuestra celda, fuimos trasladados a la celda diez, conocida como la casita del cadenero, como premio por habernos defendido durante la *fajina.*[369] Al poco tiempo, fuimos notificados para nuestra audiencia de control de detención. Un custodio nos llevó a la sala de audiencia, conectada por un oscuro y húmedo pasillo conocido como el *túnel*. Al entrar, se nos notificó el delito por el que se nos acusaba y se calificó de legal nuestra detención. Sin darnos el uso de la voz, la juez notificó la próxima audiencia en setenta y dos horas para vincularnos a proceso, y fuimos regresados a nuestra celda.

De nuevo en nuestra celda, se repitió el proceso de repartición de alimentos. Ahora, con más espacio, pudimos dormir acostados en el suelo, lo cual fue muy placentero. Durante las próximas setenta y dos horas, repetimos lo ya narrado: tres comidas al día, limpieza de las instalaciones y algunas actividades como el aseo personal y pláticas con los internos vestidos de color azul. El aseo personal se realiza por las mañanas al terminar la fajina, utilizando tomas de agua potable. Al no tener posesiones más allá de la ropa que llevábamos puesta, tuvimos que pedir prestado un zacate y jabón. Desnudos, los internos se sientan en el piso para que

[368] Chicharrón: En la jerga de las prisiones mexicanas, *chicharrón* se refiere a un utensilio improvisado utilizado para limpiar, similar a un trapeador. Este artefacto ilustra la creatividad de los internos al adaptar materiales disponibles para cumplir con las tareas de limpieza en condiciones precarias

[369] Fajina: El término *fajina* se refiere a las labores de limpieza y mantenimiento que deben realizar los internos dentro del centro penitenciario. Estas tareas son obligatorias y suelen realizarse en condiciones inhumanas, sin el equipo adecuado y bajo la supervisión de otros internos con algún grado de autoridad.

el agua fría de la llave caiga sobre sus cabezas y tras terminar de tallarse y enjuagarse, se viste uno con la misma ropa sucia.

La falta de un plan de actividades recreativas o de reinserción social para los internos vestidos de azul resulta en largas horas desperdiciadas dentro de las celdas. Muchos de estos internos pasan periodos prolongados en estas condiciones, que van desde los seis meses, plazo previsto para la investigación, hasta los doce meses en casos específicos de delincuencia organizada, donde se solicita la duplicidad del término.

Durante nuestras horas de ocio, observábamos la vida de los internos desde nuestra celda. Para lavar la ropa, se utilizaba un ingenioso artefacto conocido como lavadora, hecho con garrafones de agua de diez litros cortados horizontalmente. Este diseño permitía verter agua, jabón y algunas prendas, y al agitarlo fuertemente, se logra el efecto de una lavadora convencional.

El sistema de desagüe consiste en un pequeño y angosto canal al aire libre que recorre el pasillo de las celdas, a una distancia aproximada de un metro de la puerta de cada celda. Basta con estirar las manos y verter el agua sucia del garrafón para que esta se desplace por gravedad a lo largo del canal. Sin embargo, el flujo del agua se ve obstaculizado frecuentemente debido a los diferentes desechos que vierten los demás internos de las diez celdas que conformaban el pasillo, lo que al final le da el olor característico de alcantarilla al pabellón completo.

Tras agotarse el tiempo para la próxima audiencia, fuimos llevados nuevamente a la sala de audiencia, donde se nos vinculó a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida. A diferencia de la audiencia anterior, en esta ocasión se nos permitió el uso de la voz y así poder narrar nuestra versión de los hechos. La jueza ordenó al Ministerio Público investigar y rastrear la noticia criminal en la que fundamentamos nuestros argumentos. Tras programar una nueva audiencia en veinticuatro horas, fuimos regresados a la celda diez.

Más tranquilos, y tras compartir con nuestros compañeros de celda lo ocurrido en nuestra audiencia, nos invitaron a comprar cigarros, dulces y frituras al establecimiento que fungía como tienda, ubicado a unos metros de la puerta del pasillo. Con el permiso del cadenero, quien cobraba una comisión, pudimos salir de

la celda y del pasillo para hacer las compras. Durante esta actividad, no observamos la presencia de ningún custodio, y el encargado de la tienda era un interno vestido de beige. Cabe destacar que la compra se realizó con dinero en efectivo, y al indagar sobre el origen del negocio, se nos comentó que se trataba de una inversión de las mismas autoridades del centro penitenciario.

Al día siguiente, después de las actividades cotidianas, fuimos llevados nuevamente a la sala de audiencia. La juez corroboró nuestra versión, ya que el Ministerio Público encontró la noticia criminal interpuesta por su servidor. Indignada ante el atropello que había provocado la *lujuria económica* del sistema de procuración de justicia, la única cosa que la juez pudo hacer fue retipificar el delito por el que se nos había vinculado a proceso, a uno que pudiera dar la oportunidad de recuperar nuestra libertad, es decir, al delito de lesiones en riña, el cual no amerita prisión preventiva, situación por la que ordenó nuestra inmediata liberación.

De regreso en nuestra celda, el cadenero nos ofreció hacer una llamada telefónica a cambio de dos favores: llevar una carta a su familia y reponer el saldo gastado en la llamada mediante un depósito bancario. Tras aceptar, el cadenero nos dio una tarjeta telefónica y nos dirigió a los teléfonos de prepago, los cuales se encontraban a un lado de la tienda, rotulados con el emblema *Telmex*. Estimamos que había aproximadamente diez aparatos, todos en óptimas condiciones, e incluso podríamos afirmar que eran nuevos. Gracias a la información proporcionada por el cadenero, comunicamos a nuestra familia que seríamos liberados esa noche después de las diez de la noche. Después de la llamada, le devolvimos la tarjeta telefónica y regresamos a nuestra celda. Al llegar la hora, el cadenero nos entregó la carta, los datos de su cuenta bancaria y la dirección a la que debíamos llevar la carta. Luego, nos entregó a un custodio, quien nos llevó a través de los filtros para salir del reclusorio. Finalmente, nuestra familia nos esperaba afuera.

El proceso no terminó ahí, pero pudimos continuarlo en libertad. A pesar de los intentos de la parte acusadora de afectarnos económicamente, nuestro abogado nos sugirió tomar el procedimiento abreviado para concluir el asunto. Aceptamos conscientes de las consecuencias. Hoy en día, con una mayor maduración personal, y más allá de reprochar la experiencia de haber estado privados de la libertad por

un sistema procurador de justicia viciado y corrupto, nuestra resiliencia transforma esta experiencia en una metodología de investigación, permitiéndonos exponer la vigente política criminal que el Estado ejerce para prevenir, en un tercer nivel, la comisión de delitos.

La experiencia vivida dentro del CPRSNBX revela una profunda desconexión entre los ideales de justicia y la realidad operativa de nuestro sistema penal. La observación participativa muestra cómo las prácticas de registro y procesamiento de los internos, caracterizadas por la humillación y la deshumanización, reflejan una estructura institucional más preocupada por el control y la economía interna que por la rehabilitación y la dignidad humana. Este proceso, que incluye desnudamientos forzados, entrevistas invasivas y condiciones de hacinamiento, evidencia una lujuria económica institucionalizada que prioriza la eficiencia administrativa y el control sobre cualquier consideración ética o de derechos humanos.

La falta de recursos y la implementación de actividades recreativas o de reinserción social no sólo perpetúan un ciclo de violencia y abuso sino que también subrayan la ineficacia de las medidas de tercer nivel preventivo. La teoría deontológica propuesta por Kant, que enfatiza el respeto incondicional por la autonomía y dignidad de cada individuo, se ve gravemente comprometida en este contexto, destacando la urgente necesidad de una reforma integral que no sólo se enfoque en el castigo, sino en la verdadera rehabilitación y reintegración social de los internos. La ética y la moralidad en la administración de justicia deben ser los pilares que guíen estas reformas, asegurando que la política criminal sea coherente con los principios de derechos humanos y dignidad universal.

3.3.4 Realidad penitenciaria vigente y su ineficacia en la prevención de la violencia contra la mujer

Continuando con el hilo conductor del apartado anterior, el caso de una mujer víctima de violencia telefónica visibiliza la realidad dentro de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social, evidenciando la falta de acción del sistema penitenciario para salvaguardar el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia. Este caso también corrobora nuestras afirmaciones sobre las deficiencias estructurales de las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Actualmente, el sistema penitenciario mexicano no previene etiológicamente los delitos. En lugar de implementar estrategias preventivas efectivas, se enfoca predominantemente en actividades retributivas con una base de ganancias económicas. Esta orientación no sólo es insuficiente para abordar las causas profundas de la violencia, sino que también perpetúa un ciclo de ineficacia y violencia, en el que los intereses económicos y los medios de producción, en este caso específico, el servicio de telefonía al interior del reclusorio, desvían sus verdaderos objetivos a alcanzar.

Durante una visita al Centro de Justicia para las Mujeres en Amecameca, Estado de México, entrevistamos a una mujer víctima de violencia telefónica. Ella compartió su caso en particular y la atención que recibió por parte del fiscal especializado que la atendió. El día 23 de agosto de 2023, esta mujer reportó en dicho centro el delito de violencia telefónica. Explicó que el padre de sus dos hijas menores de edad ha estado recluido en un centro de readaptación social durante diez años y recientemente comenzó a amenazarla por teléfono,[370] lo que la llevó a buscar ayuda debido al temor por su seguridad y la de sus hijas.[371]

Estas amenazas han provocado una significativa inseguridad y ansiedad, afectando gravemente su calidad de vida.[372] Ella busca seguridad y protección de las autoridades.[373] Además, ha recibido cartas amenazantes de su ex pareja, entregadas por personas que han salido del centro de readaptación y con las que convivió,[374] amenazando que mandará a estas personas a su domicilio también. Estas cartas contienen amenazas de muerte si ella llegara a tener otra pareja sentimental.

Las autoridades iniciaron una denuncia de hechos, asegurándole que mientras su ex pareja permanezca recluida, el sistema penitenciario estará cumpliendo su objetivo de prevenir delitos mediante el aislamiento de los

[370] Vid. Viridiana, “Violencia telefónica” [entrevista], México, 2023, 0:36 min., disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1M2JIrPoaE1gM3cp7cR8TtxeyTOTSq8Ga/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 10 de junio de 2024).
[371] Vid. Ibídem, 1:33 min.
[372] Vid. Ibídem, 1:26 min.
[373] Vid. Ibídem, 1:43 min.
[374] Vid. Ibídem, 2:20 min.

agresores.[375] También le informaron que cuando él salga habrá una protección hacia ella y hacia sus menores hijas,[376] para evitar que se acerque a su domicilio o lugar de trabajo. Sin embargo, esta medida de protección sólo se podría formular una vez que el agresor ya esté en libertad.[377]

La entrevistada reconoce que no es la única que sufre este tipo de violencia y sugiere abordar esta situación,[378] que es tolerada por las autoridades de los propios centros penitenciarios y de reinserción social. Propone que se informe a los internos sobre la prohibición de acercarse a sus víctimas.[379] Finalmente, afirmó haber sido atendida de manera correcta y honesta en este centro de justicia,[380] sin barreras para presentar su denuncia y siempre con profesionalismo.[381]

Basándonos en la experiencia compartida por nuestra entrevistada, es evidente que el sistema penitenciario y de procuración de justicia enfrenta desafíos significativos para proteger a las víctimas de violencia, incluso cuando los agresores están bajo custodia. La situación descrita pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar medidas más efectivas para salvaguardar la integridad física y emocional de las víctimas.

Desde una perspectiva deontológica, inspirada en la ética kantiana, es esencial que las acciones del sistema penitenciario reflejen un compromiso con la dignidad y los derechos de las víctimas, tratándolas siempre como fines en sí mismas y nunca meramente como medios. La facilidad con la que los internos pueden acceder a teléfonos y otros medios de comunicación para amenazar a sus víctimas fuera de la prisión es alarmante y refleja una laxitud en la implementación de medidas de seguridad. Esta situación exige una revisión profunda y la implementación de controles más estrictos para prevenir tales abusos.

Además, es esencial crear protocolos específicos para la atención de víctimas de violencia por parte de reclusos. Estos protocolos deben incluir medidas

[375] Vid. Ibídem, 2:10 min.
[376] Vid. Ibídem, 2:40 min.
[377] Vid. Ibídem, 2:58 min.
[378] Vid. Ibídem, 3:30 min.
[379] Vid. Ibídem, 3:45 min.
[380] Vid. Ibídem, 4:13 min.
[381] Vid. Ibídem 1:10 min.

de protección inmediatas y efectivas que no dependan de la liberación del agresor, asegurando que las autoridades proporcionen un entorno seguro para las víctimas y que sus denuncias sean atendidas con la seriedad y urgencia necesarias. El hecho de que no se puedan iniciar medidas de protección mientras el agresor esté privado de la libertad es el más fiel ejemplo de cómo las policías y las autoridades procuradoras de justicia no realizan funciones preventivas en un sentido etiológico. Esta crítica no se dirige directamente a los representantes del Estado, sino al marco legal vigente que fundamenta y motiva sus funciones, permitiéndoles actuar sólo en casos flagrantes o ya realizados, y nunca de manera previa.

Otro aspecto a considerar es la capacitación y sensibilización del personal penitenciario y de procuración de justicia en temas de violencia contra la mujer. Es imprescindible que los funcionarios comprendan la gravedad de las amenazas y la dinámica de poder que los agresores ejercen sobre sus víctimas, incluso desde la prisión, las cuales podrían evolucionar y materializarse en violencia de género (feminicidio) una vez que estos obtengan su libertad. Esta comprensión permitirá una respuesta más adecuada y humanitaria ante las denuncias de violencia.

La implementación de programas de reinserción social también debe ser revisada. Estos programas deben enfocarse no sólo en la rehabilitación del interno, sino también en la prevención de comportamientos violentos futuros. Es esencial que los programas incluyan componentes de educación sobre el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género, buscando transformar las actitudes y comportamientos de los reclusos, donde se ha idealizado el patriarcado.

Finalmente, es necesario que las autoridades correspondientes fortalezcan la cooperación interinstitucional para abordar de manera integral los casos de violencia telefónica. Esto incluye la colaboración entre las instituciones penitenciarias, los centros de justicia para mujeres y las fuerzas de seguridad pública. Sólo a través de un esfuerzo coordinado y comprensivo se podrán garantizar condiciones de seguridad y justicia para las víctimas.

La teoría del imperativo categórico de Kant exige que nuestras acciones sean universales y que respeten la dignidad humana. Esta teoría resalta la importancia de que las leyes y medidas de protección sean aplicables a todos sin excepción,

garantizando así que los derechos de las mujeres sean protegidos de manera efectiva. Además, es crucial diferenciar entre prevención, disuasión y reinserción social. La prevención se enfoca en eliminar las causas subyacentes de la violencia, la disuasión en crear un entorno que desincentive la violencia, y la reinserción social en preparar y reacondicionar al agresor mediante los pilares previstos en el Artículo 18º de la CPEUM. Es importante destacar que la investigación empírica realizada a este específico nivel preventivo ha revelado que el control y administración es el verdadero y vigente objetivo del tercer nivel preventivo de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. La lujuria económica, al priorizar ganancias sobre la ética, eclipsa los objetivos previstos constitucionalmente, desviando recursos y atención de las verdaderas estrategias para alcanzarlos.

En conclusión, el caso de violencia telefónica analizado en este apartado resalta las deficiencias estructurales y operativas del sistema penitenciario mexicano. Es fundamental que se adopten medidas efectivas y coordinadas para proteger a las víctimas y prevenir la violencia, asegurando que los derechos humanos sean respetados y que las víctimas puedan vivir sin temor a represalias.

Está evaluación crítica no sólo subraya la urgencia de implementar cambios estructurales en el sistema penitenciario, sino que también destaca la necesidad de un enfoque multidimensional que incluya la vigilancia adecuada, la capacitación del personal y la cooperación interinstitucional. Este enfoque multidimensional se traduce en un sistema criminológico que fiscalice el tercer nivel preventivo, asegurando que se aborden no sólo las manifestaciones de la violencia, sino también sus causas subyacentes. La prevención terciaria debe centrarse en evitar la reincidencia y promover una reinserción efectiva del individuo en la sociedad (Antonio García-Pablos de Molina), lo cual sólo puede lograrse mediante una intervención integral y multidisciplinaria (Laura Zúñiga).

Como conclusiones generales de este subcapítulo, el análisis crítico del tercer nivel preventivo de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar en el Estado de México revela las deficiencias estructurales y operativas del sistema penitenciario, perpetuando condiciones que favorecen la reincidencia y la desconfianza hacia las autoridades. Siguiendo nuestro marco teórico, se

examinaron las estrategias de reinserción social, la eficacia de los programas penitenciarios y las barreras institucionales enfrentadas por las víctimas.

La ENPOL 2021 revela importantes carencias educativas y de habilidades básicas entre los internos, destacando la necesidad de reforzar el sistema educativo como medida preventiva. Sin embargo, la sobrepoblación carcelaria y la falta de obligatoriedad en la participación en programas educativos limitan la efectividad de las políticas de reinserción social. Además, la corrupción sistémica, evidenciada por la libre posesión y uso de dinero en efectivo, perpetúa actividades ilegales y socava los objetivos de rehabilitación. Esta situación es coherente con nuestra teoría del espejo, donde el efecto distorsionado de reflejar una realidad incorrecta a la prevista en la ley es derivado de la *lujuria económica*, un fenómeno provocado por la equivocada interpretación del modelo neoliberal norteamericano.

Por otro lado, el análisis del sistema penitenciario muestra que las deficiencias en la supervisión judicial y la permisividad en el acceso a medios de comunicación por parte de los internos destacan la falta de medidas efectivas para proteger a las víctimas de violencia. Este desfase entre la teoría y la práctica subraya la necesidad urgente de una reforma integral y una aplicación más rigurosa de las políticas existentes para garantizar la protección real y efectiva de las víctimas de violencia.

Asimismo, las cifras de la ENPOL 2021 revelan que el 94.6% de los internos posee habilidades básicas de lectura y escritura, mientras que sólo el 69.7% reportó contar con educación primaria y secundaria. Estos resultados subrayan una cuestión crítica en la prevención de primer nivel y el cumplimiento del derecho humano a la educación básica, según lo establece el Artículo 3º de la CPEUM. La falta de educación adecuada desde una etapa temprana contribuye a la vulnerabilidad frente a la violencia y la criminalidad, reflejando una falla sistémica en la garantía de igualdad de oportunidades y exacerbando las condiciones que perpetúan la violencia y la desigualdad de género.

En cuanto a la reincidencia, la ENPOL revela que el 1.5% de la población con antecedentes penales fue sentenciada nuevamente por violación sexual y el 2.3% por violencia familiar. Estas cifras reflejan una falla en la prevención terciaria, que

debería enfocarse en la rehabilitación y reinserción efectiva de los agresores para evitar la reincidencia. La cifra negra, que representa los casos no denunciados, revela una realidad alarmante sobre la violencia sexual contra mujeres mayores de 18 años, con un 99.7% de estos casos en la sombra en el segundo semestre de 2021. Esto refleja una profunda desconfianza en el sistema judicial y en las instituciones responsables de estos delitos, demandando acciones inmediatas por parte de las autoridades para mejorar la eficacia de las políticas de prevención y sanción.

Nuestra privación de la libertad tras defender a una mujer que estaba siendo agredida ilustra claramente nuestra teoría del espejo. A pesar de actuar en defensa de la víctima, fuimos detenidos bajo acusaciones infundadas, reflejando una aplicación de la justicia que no protege a quienes intentan hacer lo correcto, sino que perpetúa la desigualdad y el abuso de poder. Este caso emblemático destaca cómo la realidad puede distorsionarse cuando las acciones justas y necesarias no se alinean con la interpretación estricta y a menudo corrupta de la ley.

Finalmente, el análisis del tercer nivel preventivo de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar en el Estado de México, desde nuestro marco teórico, sugiere la necesidad de un cambio de paradigma. Este nuevo paradigma debe basarse en un sistema criminológico que fiscalice y evalúe la política criminal de tercer nivel, superando las limitaciones de las prácticas actuales y promoviendo un enfoque integral que considere la prevención, protección y rehabilitación de las víctimas. Sólo a través de un compromiso ético y la implementación efectiva de políticas integrales se podrá garantizar una protección adecuada y reducir las desigualdades y la violencia en México.

3.4 Reflexiones críticas finales

En conclusión, en este tercer capítulo hemos alcanzado nuestro tercer objetivo específico: Evaluar las estrategias que realiza el Estado mexicano para prevenir en primer, segundo y tercer nivel la violencia contra la mujer el núcleo familiar, con las siguientes reflexiones críticas finales:

La política criminológica para prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar en México enfrenta una compleja interacción de factores estructurales,

institucionales y culturales que obstaculizan su implementación efectiva en los tres niveles preventivos. A pesar de los esfuerzos significativos para establecer marcos legales y programas enfocados en la equidad de género, persisten profundas deficiencias en áreas clave como la infraestructura educativa, el derecho humano a una vivienda digna, y el sistema penitenciario. Nuestra teoría del espejo revela una disociación crítica entre la normativa y su aplicación real, exacerbada por una interpretación distorsionada del neoliberalismo norteamericano, que privilegia la austeridad y la privatización sobre el bienestar social.

Esta realidad invertida, apoyada por una teoría feminista que hemos refutado y demostrado científicamente como necesaria de reestructuración, refleja una política criminal que, lejos de abordar las causas subyacentes de la violencia, perpetúa las desigualdades y limita el acceso a la justicia y la protección efectiva de las víctimas. En lugar de disminuir o erradicar el fenómeno, el objetivo principal de estas políticas es controlar y administrar la violencia con fines económicos.

Para fundamentar esta postura, es relevante citar la entrevista con el Mtro. Roberto Calixto Márquez sobre Narco Delincuencia Globalizada, realizada en el programa *El Mundo del Derecho Penal*.[382] En esta entrevista, el Mtro. Márquez argumenta que el narcotráfico se presenta como una estrategia perversa, utilizada por los gobiernos no para combatirlo, sino para expropiar ganancias económicas. De manera similar, la violencia contra la mujer y el narcotráfico comparten un objetivo subyacente: el control y administración de conductas delictivas con fines de lucro.

El análisis reflexivo de la política criminológica para prevenir la violencia contra la mujer en México revela una práctica espectral amorfa, donde las políticas, bajo la apariencia de justicia social, favorecen la austeridad y la privatización. Esta distorsionada práctica política, influenciada por una versión involucionada del

[382] Vid. IUS Canal Multimedia, "#ElMundoDelDerechoPenal: Narcodelincuencia Globalizada," *video.* 14 de junio de 2023, disponible en: https*://www.youtube.com/watch?v=gR44EkBbM-0&t*=46s (fecha de consulta: 26 de junio de 2024).

paradigma neoliberal norteamericano, desvirtúa los principios de equidad y justicia, perpetuando un ciclo de desigualdad y violencia.

Nuestro análisis crítico muestra cómo el adoctrinamiento político, la interpretación errónea del neoliberalismo norteamericano, la influencia de los medios de comunicación, el populismo, y la ideología de género configuran y exacerban las deficiencias en la implementación de políticas preventivas en sus tres niveles. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha observado una desviación del objetivo original de su proyecto político, motivada por una ambición desmedida por el poder. Esta obsesión ha distorsionado el enfoque objetivo y empírico que deberían caracterizar las ciencias sociales, llevándolas hacia una subjetividad populista, tal como lo anticipó Adam Smith en sus análisis sobre el adoctrinamiento político.[383]

A medida que la administración se fanatiza con su doctrina progresista, se aleja de la realidad y del Estado de derecho, implementando estrategias legislativas para perpetuar un paradigma erróneamente interpretado. Esta rigidez intelectual genera resistencia y conflictos sociales, justificando nuestra evaluación crítica de las políticas preventivas abordadas en este tercer capítulo. Estas desviaciones políticas han dificultado la implementación de medidas efectivas, exacerbando las desigualdades y perpetuando un entorno de inseguridad y violencia en el núcleo familiar.

La politización se evidencia en la prisión preventiva, que se ha convertido en una estrategia radical que obstaculiza la salvaguarda de los derechos humanos y la reinserción social. Además, la interpretación errónea del neoliberalismo norteamericano ha priorizado la competitividad económica sobre la equidad social, resultando en desigualdades y deficiencias estructurales que afectan negativamente a la educación y los servicios públicos. Los medios de comunicación, por su parte, moldean la percepción pública, proyectando una imagen distorsionada de la efectividad de las políticas mediante la cobertura mediática y la proliferación

[383] Vis. Smith, Adam, “La teoría de los sentimientos morales,” Versión española y estudio preliminar de Carlos Rodríguez Braun, Madrid, Alianza, 1997, disponible en: *https://riosmauricio.com/wp-content/uploads/2020/05/Adam-Smith-La-teoria-de-los-sentimientos-morales.pdf* (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

de redes sociales. Por otra parte, el populismo en el discurso del presidente López Obrador, que promete justicia social y lucha contra la corrupción, contrasta con sus políticas conservadoras que centralizan el poder y militarizan la seguridad pública.

Finalmente, la ideología de género feminista se refleja en la estructura y funcionamiento de la FEADVVG, llevando a errores morales extremos como la tipificación del feminicidio. Estos seis factores, identificados y analizados en este capítulo, subrayan la necesidad de un enfoque integral y coherente en la formulación y ejecución de políticas públicas que materialicen la justicia y la equidad de manera efectiva y sostenible.

En este contexto, es imperativa la adopción de un enfoque multidisciplinario, deontológico y holístico que, bajo la metodología del sistema criminológico, contemple los derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, la justicia social y la ética en la administración pública. Este enfoque es necesario para reorientar la política criminal hacia un modelo verdaderamente preventivo y equitativo.

Este nuevo paradigma se desarrollará en el quinto y último capítulo de esta tesis, donde se explorarán estrategias integrales para la prevención de la violencia de manera efectiva. A través del análisis del espectro político mexicano y la presentación de propuestas concretas para la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, se plantea un camino hacia la construcción de un óptimo Estado de Derecho Social y Democrático (ESDD). En síntesis, se propone implementar un modelo neoliberal norteamericano adecuado, que aborde las causas estructurales de la violencia, proteja a las víctimas y reinserte a los agresores en la sociedad.

Finalmente, la evaluación crítica expuesta en este tercer capítulo sobre la distorsión de las políticas públicas y la interpretación errónea del neoliberalismo norteamericano pone en evidencia las profundas contradicciones que subyacen en la política criminal mexicana. Estas contradicciones no sólo perpetúan las desigualdades estructurales, sino que también revelan una realidad espejo en la que la implementación de políticas preventivas se ve fragmentada y distorsionada por un panorama político polarizado.

En este contexto, se vuelve imperativo comprender cómo la radicalización ideológica y la fragmentación institucional han exacerbado estos problemas. Así, en el siguiente capítulo, se analizará cómo la interacción de las corrientes políticas extremas ha socavado la coherencia y efectividad de la política criminal en México, particularmente en lo que respecta a la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. A través de un enfoque crítico-genealógico, se desentrañan las raíces de esta radicalización y se propondrán soluciones para superar las limitaciones estructurales que impiden el avance hacia una justicia social equitativa y sostenible.

Capítulo IV: El Espectro Político Mexicano de la PCPVCMNF

La función de la política
es reducir el grado de violencia
en la sociedad, no aumentarlo.
Norberto Bobbio

En el contexto de la política criminal en México, la PCPVCMNF se enfrenta a desafíos profundos que surgen de un panorama político marcado por la radicalización ideológica y la fragmentación institucional. Este capítulo examina cómo las corrientes políticas extremas, tanto de derecha como de izquierda, han moldeado un espectro político que impide el desarrollo de políticas públicas coherentes y efectivas. A través de un análisis crítico-genealógico, se exploran las raíces de esta radicalización y su impacto en la capacidad del Estado para promover la justicia social y la cohesión democrática. El trabajo se enfoca en desentrañar los factores que han distorsionado la implementación de políticas preventivas y en proponer vías para superar estas limitaciones estructurales.

En el primer subcapítulo, profundizamos en la manera en que la radicalización política ha influido negativamente en la implementación de la PCPVCMNF en México. Se argumenta que la combinación de ideologías extremas de derecha e izquierda ha resultado en una política incoherente y polarizadora, que no sólo fracasa en promover la cohesión social, sino que además exacerba las tensiones y desigualdades existentes. El análisis adopta un enfoque genealógico para rastrear las raíces históricas de esta radicalización, demostrando cómo estas posturas extremas han desviado a las políticas públicas de sus principios fundacionales, conduciéndolas hacia un camino de ineficacia y fragmentación. Este enfoque permite evidenciar la desconexión entre el discurso ideológico y las realidades prácticas, subrayando la necesidad de un replanteamiento profundo de las estrategias políticas en México.

En el segundo subcapítulo, se examina la contradicción entre el ideal de un ESDD y la realidad de su implementación en México. Aunque el discurso oficial promueve la construcción de un Estado equilibrado que garantice la justicia social y la equidad, la práctica política muestra una tendencia hacia la centralización del poder y la adopción de prácticas autoritarias que contradicen estos principios. A

través de un análisis crítico, se revela cómo la administración actual, bajo la bandera de la Cuarta Transformación (4T), ha creado un espejismo que desvía la atención de los problemas estructurales más profundos que enfrenta el país. Este subcapítulo subraya la desconexión entre las promesas retóricas y las acciones reales, destacando las implicaciones de esta divergencia para la consolidación de un Estado verdaderamente democrático y justo.

En el tercer subcapítulo, se examinan en profundidad los factores que han moldeado la dinámica política contemporánea en México, prestando especial atención al adoctrinamiento fanatizado, la politización extrema y la interpretación conservadora del neoliberalismo. Estos elementos han actuado como catalizadores de la radicalización política, creando un entorno de inestabilidad y fragmentación que debilita las instituciones democráticas y obstaculiza la implementación de políticas públicas efectivas, particularmente en lo que respecta a la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Mediante un enfoque crítico-genealógico, se demuestra cómo estas tendencias no sólo distorsionan la gobernanza, sino que perpetúan un ciclo de ineficacia y desigualdad, afectando negativamente los esfuerzos por lograr un cambio social significativo.

En síntesis, este capítulo, expone con argumentos sólidos el actual espectro político en el que se desenvuelve la política criminal destinada a la prevención de la violencia contra la mujer y concluye con la propuesta de una reorientación hacia un enfoque más equilibrado y centrado en la justicia social, con el objetivo de contrarrestar las fuerzas desestabilizadoras que actualmente predominan en el ámbito político mexicano.

4.1 Desentrañando el espectro político mexicano

La radicalización política, ha ejercido influencia desde la antigüedad hasta la actualidad, representa un peligro significativo para el desarrollo efectivo de la PCPVCMNF. En este subcapítulo se examinarán las causas que, desde nuestra perspectiva y como conclusión de nuestra investigación, han fomentado la radicalización política en el México actual, explorando sus orígenes. Se argumenta que la actual PCPVCMNF en el Estado de México se han adoptado estrategias en un espectro político, tanto de derecha y extrema derecha como de izquierda y

extrema izquierda, las cuales, de forma mezclada, son incoherentes e ineficaces para promover tanto la democracia, la cohesión social, así como su prevención multinivel.

Iniciaremos este subcapítulo mediante un enfoque genealógico, que será fundamental para establecer un marco conceptual sólido, orientando así el desarrollo coherente de nuestros argumentos. Analizaremos la radicalización política como un proceso que lleva las ideologías políticas hacia posturas extremas, alejándose de sus principios fundamentales. Es vital subrayar que este fenómeno trasciende un espectro ideológico único, manifestándose en supuestas corrientes de izquierda con peculiaridades que serán minuciosamente examinadas.

Iniciaremos con el análisis de la radicalización de derecha, que se distingue por defender la identidad nacional y apoyar el libre mercado en detrimento de políticas sociales. Por el otro lado, las posturas de extrema izquierda pueden resultar en la maximización de la importancia de las políticas de género y en el fortalecimiento de la ideología de género feminista. Lo que nos llevará más adelante a identificar una amorfa y discursiva política mexicana, enfocada en promover la igualdad social y en criticar el modelo capitalista, que aunque tiene objetivos de justicia social, adopta enfoques que resultan en políticas polarizadoras y divisivas.

Como piedra angular del análisis, marcaremos cómo la CPEUM establece tanto la guía como el objetivo deontológico de consolidar un ESDD, es decir, una política balanceada. Este ideal busca un equilibrio entre la libertad individual y la justicia social, así como entre la soberanía de la ley y la participación democrática. No obstante, esta aspiración se ve comprometida por el adoctrinamiento fanatizado de lo político, un fenómeno que no sólo pone en peligro la cohesión social sino que también amenaza los fundamentos de la democracia y el Estado de derecho. Mostraremos cómo los factores que finalmente dan vida a la vigente amorfa política, actúan como catalizadores de la inestabilidad, distorsionando el discurso público y erosionando las instituciones democráticas, lo que a su vez impide la implementación de la PCPVCMNF.

En términos directos, y con base en nuestra investigación, se ha identificado que la actual política mexicana está influenciada por los siguientes factores:

adoctrinamiento fanatizado, politización, interpretación conservadora del neoliberalismo, mediatización, populismo e ideología de género. Estos elementos serán analizados utilizando una metodología genealógica, apoyándonos en argumentos sólidos y científicos. Específicamente, examinaremos cómo estas fuerzas contribuyen a la ineficacia de las PCPVCMNF, exacerbando las desigualdades y dificultando la implementación de estrategias integrales y efectivas.

4.1.1 La Radicalización como fenómeno político

Para comenzar, es esencial recordar que la exploración de la radicalización política y su relación con la política criminal es fundamental para comprender las dinámicas de poder y la eficacia de las estrategias de prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Retomando los conceptos discutidos en el primer capítulo sobre *lo político*, *la política* y *las políticas*, este apartado se enfoca en el fenómeno de la radicalización y su impacto en la implementación de políticas públicas.

En primer lugar, recordemos que la palabra *política* proviene del griego *polis*, que significa ciudad o comunidad ciudadana, refiriéndose al gobierno de estas comunidades. Aristóteles subraya la importancia de la gestión de los asuntos comunitarios dentro del contexto de una ciudad o Estado, destacando la naturaleza intrínsecamente comunitaria de la política.[384]

Por otro lado, según la Real Academia Española (RAE), el radicalismo es la doctrina que propugna una reforma total en los órdenes político, científico, moral y religioso, evidenciando una postura extremadamente rigurosa hacia la gestión de los asuntos públicos. Este concepto deriva del término latino *radix*, que se traduce como raíz, indicando un retorno a las bases fundamentales.

A continuación, en el ámbito de la política, la radicalización denota un retorno a los principios fundacionales de una ideología o movimiento político, adoptando

[384] Vid. Aristóteles, "Política," trad. de Manuela García Valdés, Gredos, España, pp. 34-37, disponible en: *https://books.google.com/books?id=4JhSEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=aristoteles,+pol%C3%ADtica&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjT16vs8KOEAxV7NEQIHXUzDJIQ6wF6BAgHEAE* (fecha de consulta: 1 de julio de 2024).

una interpretación más extrema de sus preceptos esenciales. Este fenómeno subraya el esfuerzo por revigorizar las bases ideológicas de un movimiento, procurando una visión más purista y, a menudo, más radical de sus valores.[385]

Lo político, representa la dimensión ontológica y simbólica de la sociedad, configurando las estructuras profundas que definen la identidad y legitimidad colectivas.[386] La radicalización puede entenderse como un intento de redefinir estas estructuras simbólicas, buscando una representación más pura y esencial de la ideología que sustenta la comunidad política.

Por lo tanto, la radicalización no sólo afecta *la política* –las actividades concretas de gestión del poder y la toma de decisiones– sino que también transforma *las políticas* –los programas y acciones específicas diseñadas para abordar problemas y necesidades concretas–. Al adoptar una visión más extrema, los movimientos radicalizados reconfiguran las prácticas y las políticas de manera que reflejan sus interpretaciones más estrictas y puristas.[387]

Es imperativo, por consiguiente, examinar las diversas manifestaciones de la radicalización política para identificar el momento exacto en el que estas ideologías comienzan a divergir significativamente de sus interpretaciones originales o moderadas. Según Lefort, este análisis debe centrarse en cómo la radicalización

---

[385] Vid. Minkenberg, M., "The renewal of the radical right: Between modernity and anti-modernity," trad. propia, Government and Opposition, 35(2), 2000, pp. 336,337, disponible en: *https://is.muni.cz/el/1423/podzim2005/SOC765/um/Radical_Right_in_CEE.pdf,* (fecha de consulta: 6 de julio,de 2024), paráfrasis traducida: ""Right-wing radicalism is defined as a political ideology, whose core element is a myth of a homogeneous nation, a romantic and populist ultranationalism directed against the concept of liberal and pluralistic democracy and its underlying principles of individualism and universalism. This definition focuses explicitly on the idea of the nation that lies somewhere between the poles of demos and ethnos. The nationalistic myth is characterized by the effort to construct an idea of nation and national belonging by radicalizing ethnic, religious, cultural, and political criteria of exclusion and to condense the idea of nation into an image of extreme collective homogeneity".

[386] Vid. Op. Cit. Lefort, Claude, La Incertidumbre Democrática: Ensayos Sobre lo Político, p. 39.

[387] Vid. Lefort, Claude, "The Political Forms of Modern Society: Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism," trad. propia, Cambridge, MIT Press, 1986, p. 297, disponible en: *https://epdf.mx/the-political-forms-of-modern-society-bureaucracy-democracy-totalitarianism.html* (fecha de consulta: 6 de julio de 2024), paráfrasis traducida: "At the foundation of totalitarianism lies the representation of the People-as-One. It is denied that division is constitutive of society. In the so-called socialist world, there can be no other division than that between the people and its enemies: a division between inside and outside, no internal division."

reconfigura el *lugar vacío* del poder en una democracia, transformando las representaciones simbólicas que sustentan la legitimidad del sistema político.[388]

En consecuencia, la radicalización puede ser vista como una respuesta a la indeterminación inherente de la democracia, donde el poder nunca está completamente asegurado y siempre está abierto a la competencia y el conflicto.[389] Este retorno a los principios fundacionales y la adopción de interpretaciones más extremas pueden ser interpretados como intentos de ocupar de manera más definitiva ese *lugar vacío* del poder, cerrando el espacio de indeterminación y conflicto que caracteriza a la democracia.[390]

Finalmente, en los siguientes apartados se explorará la relación entre la política, el radicalismo y la radicalización, contextualizándonos dentro de las teorías de Lefort. A través de este análisis, se subraya cómo la radicalización puede transformar tanto las prácticas políticas como las políticas públicas, afectando la implementación y efectividad de las estrategias de prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar.

---

[388] Lefort, Claude, "Democracy and Political Theory," trad, propia, Cambridge, Polity Press, 1988, p. 17, *disponible en: https://epdf.mx/democracy-and-political-theory.html* (fecha de consulta: 6 de julio de 2024), paráfrasis traducida: "The locus of power becomes an empty place. There is no need to dwell on the details of the institutional apparatus. The important point is that this apparatus prevents governments from appropriating power for their own ends, from incorporating it into themselves. The exercise of power is subject to the procedures of periodic redistributions. It represents the outcome of a controlled contest with permanent rules. This phenomenon implies an institutionalization of conflict. The locus of power is an empty place, it cannot be occupied - it is such that no individual and no group can be consubstantial with it - and it cannot be represented."

[389] Vid. Ibidem, p. 19, paráfrasis traducida: "Democracy is instituted and sustained by the dissolution of the markers of certainty. It inaugurates a history in which people experience a fundamental indeterminacy as to the basis of power, law and knowledge, and as to the basis of relations between self and other, at every level of social life."

[390] Vid. Op. Cit., Lefort, Claude, "The Political Forms of Modern Society: Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism," p. 21, paráfrasis traducida: "The emergence of the democratic form of society was the result of a series of transformations which began to take place in medieval and early modern Europe. Among these transformations was the gradual development of a system of states based on a notion of sovereignty and differentiated from the societies within which they exercised power. The sphere of political power was thus separated from society as a whole and from the spheres of economic activity, law, knowledge and so on. Political power was not only separated but also circumscribed. Its legitimacy was no longer based on ideas such as divine right but rather on 'the people'; and 'the image of popular sovereignty', observes Lefort, 'is linked to the image of an empty place (lieu vide), impossible to occupy, such that those who exercise public authority can never claim to appropriate it'."

4.1.1.1 Radicalización política de derecha

La radicalización política de derecha se refiere al proceso por el cual individuos o grupos adoptan posturas políticas extremas asociadas con el espectro político de derecha, caracterizadas por la defensa de la identidad nacional o étnica, la oposición a la inmigración, el rechazo a políticas de igualdad y diversidad, y en casos extremos, la promoción de ideologías supremacistas. Estas posturas pueden manifestarse en la defensa de un estado autoritario que prioriza ciertos grupos sobre otros, basándose en principios de jerarquía y exclusión. Entre las características principales de la política radical de derecha se incluyen:

(a) Nacionalismo exclusivista: La preservación de la soberanía nacional emerge como un pilar fundamental en el discurso de numerosos movimientos políticos de derecha contemporáneos, los cuales frecuentemente se ven permeados por sentimientos antiinmigrantes y xenófobos. Estos movimientos sostienen la necesidad de adoptar políticas dirigidas a la protección de la identidad cultural y étnica de la nación, en respuesta a los retos impuestos por la globalización y el incremento de la diversidad. Griffin resalta la narrativa fascista, la cual aboga por una regeneración y purificación nacionales, proponiendo la emergencia de un *Nuevo Hombre* que lideraría el avance hacia un renovado orden social.[391] Desde la óptica fascista, la purificación se considera un medio de rejuvenecimiento cultural y una defensa de la patria europea ante amenazas internas y externas, vinculando la protección de la identidad nacional con la exclusión de los considerados *otros*.

Simone de Beauvoir, en su libro *El segundo sexo*, analiza cómo las estructuras de poder y las ideologías hegemónicas crean y perpetúan la subordinación de las mujeres, definiéndolas como *el otro*. Aunque su enfoque se centra en el género más que en la identidad nacional, ambos análisis abordan la dinámica de poder y exclusión, mostrando cómo ciertas ideologías buscan

[391] Vid. Griffin Roger, “The nature of fascism,” Great Britain, Routledge, 2003, p.12, disponible en: *https://books.google.com/books?id=QS9TAQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Griffin,+Roger.+%22The+Nature+of+Fascism%22&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiGnMSZlLuEAxXLmGoFHZ2lBxkQ6wF6BAgNEAE* (fecha de consulta: 1 julio de 2024).

mantener la pureza o integridad del grupo dominante mediante la exclusión de los *otros*.

Estas similitudes pueden servir para ilustrar cómo un nuevo nacionalismo en las políticas criminológicas mexicanas, influenciado por la ideología de género, aborda la violencia contra la mujer y la violencia de género. La teoría de la opresión de la mujer por un sistema patriarcal-machista, ya falseada en el capítulo segundo de esta investigación, requiere una reestructuración crítica. Este enfoque, similar al nacionalismo exclusivista, puede perpetuar la creación de un *otro* – en este caso, el hombre como opresor – y fomentar políticas que, aunque bien intencionadas, no abordan las raíces más profundas de la violencia y la desigualdad.

Es crucial que las políticas criminológicas mexicanas evolucionen para reconocer y abordar los verdaderos factores económicos y sociales que fomentan la violencia, en lugar de perpetuar una narrativa simplista y divisoria. Sólo así se puede lograr una protección efectiva y equitativa de todos los miembros de la sociedad, superando las limitaciones de teorías ya falseadas e incorrectas y avanzando hacia un enfoque más inclusivo y comprensivo.

(b) Conservadurismo social: Este se fundamenta en la preservación de valores tradicionales, especialmente en lo concerniente a la familia, la moral y el orden social. Esta orientación política se opone vehementemente a los movimientos que abogan por el reconocimiento y los derechos de las minorías sexuales, reproductivas y de género, argumentando que tales iniciativas socavan los pilares fundamentales de la sociedad. Según Kanoussi:

> …lo que lleva a cabo el conservadurismo neoliberal es el intento de cambiar la relación entre Estado, mercado y política en el supuesto interés de una creciente libertad, pero para ello se hace uso del Estado puesto que restablecer al mercado requiere de la fuerza de la disminución de la organización trabajadora y de la reducción de los servicios estatales. El ideal de la derecha es la economía libre y el Estado fuerte. En este sentido, se rechaza la igualdad y la justicia social puesto que son contrarias al individualismo metodológico, es decir, al liberalismo non plus ultra del desarrollo social; y con ello el fin —en todo sentido— de la historia.[392]

[392] Kanoussi, Dora, (comp.), "El pensamiento conservador en México," México, Plaza y Valdés, 2002, p. 30, disponible en: *https://books.google.com.mx/books?id=AXJL1Nbv0sgC&pg=PA11&dq=dora+kanoussi&hl=es-*

Esta autora ilustra cómo el conservadurismo social, desde una perspectiva radical de derecha, utiliza el poder del Estado para fomentar un mercado libre, al tiempo que se fortalece a sí mismo para contrarrestar cualquier avance hacia la igualdad y la justicia social que pudiese facilitar derechos a las minorías. Así, el conservadurismo social radical de derecha defiende los valores tradicionales mediante el rechazo de políticas progresistas, en un intento de mantener el orden social establecido y resistirse a los cambios que desafían sus principios fundamentales.

El conservadurismo social, característico de la política radical de derecha, se manifiesta en todos los niveles preventivos identificados en nuestra investigación de campo. Aunque el discurso retórico de la supuesta izquierda proclama progreso y protección a la mujer, la realidad práctica es diversa. En el tercer nivel preventivo, hemos expuesto claramente cómo el Estado, participante y solapador de la corrupción al interior de los centros penitenciarios de reinserción social, tiene como objetivo no reinsertar a los privados de libertad, sino administrar y controlar la violencia contra la mujer por razones de género.

Este enfoque permite y propicia un manejo libre del dinero en efectivo al interior de estos centros, lo que se traduce en una economía libre y un Estado fuerte, alineándose con la descripción de Kanoussi sobre el conservadurismo neoliberal, donde se rechaza la igualdad y la justicia social, ya que son contrarias al individualismo metodológico y al liberalismo extremo que promueven. Así, el Estado perpetúa una estructura que no sólo falla en proteger a las mujeres, sino que también fortalece su poder a través de la corrupción y el control económico, en detrimento de los principios de igualdad y justicia social.

Este análisis revela la contradicción entre el discurso progresista y la práctica real del Estado, subrayando la necesidad de una reestructuración profunda de las políticas criminológicas y de reinserción social para abordar efectivamente la violencia contra la mujer por razones de género y promover una verdadera justicia e igualdad social.

419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiByff_p7uEAxXSkWoFHfYbBdoQ6wF6BAgEEAE (fecha de consulta: 1 julio de 2024).

(c) Economía de mercado con restricciones: La tendencia de la derecha tradicional a apoyar la economía de mercado se ve desafiada por su vertiente más radicalizada, la cual, bajo ciertas circunstancias, puede inclinarse hacia políticas proteccionistas y anti-globalización. Este cambio de paradigma se justifica como un esfuerzo por proteger los intereses nacionales frente a las dinámicas adversas de la globalización y sus efectos, como la inflación, que pueden perjudicar sectores económicos internos vulnerables. Un ejemplo de esta preocupación se refleja en la observación sobre los efectos económicos negativos, como "el simple hecho de la inflación paulatina",[393] lo cual subraya la necesidad de medidas restrictivas para salvaguardar la economía nacional.

Aunque Theodor Adorno es conocido por su crítica al capitalismo y la sociedad de consumo, su análisis sobre la alienación y las dinámicas del poder económico puede interpretarse para entender cómo las políticas proteccionistas buscan combatir estos efectos negativos. Por ejemplo, en el contexto de las políticas de género, Adorno critica las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad. De manera similar, la derecha radicalizada podría adoptar políticas proteccionistas que desafíen las estructuras económicas globales que consideran perjudiciales para el bienestar nacional.

Adorno evidencia la complejidad del pensamiento de la derecha radicalizada, que, aunque generalmente favorece la libertad de mercado, reconoce que la adopción de políticas proteccionistas puede ser necesaria para proteger a la nación de los efectos perniciosos de la liberalización económica y la competencia internacional. Así, la derecha radicalizada se distancia de la pura doctrina de mercado libre al aceptar intervenciones económicas destinadas a preservar la soberanía y el bienestar nacional.

---

[393] Adorno, Theodor W., "Rasgos del nuevo radicalismo de derecha," España, Penguin Random House, 2020, p. 4, disponible en: *https://books.google.com/books?id=WmXJDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=radicalismo+de+derecha&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwihkYeyqLuEAxU6mGoFHV3cCaYQ6wF6BAgNEAE* (fecha de consulta: 1 de julio de 2024).

Esta postura es nuevamente y sólo observable desde el discurso político en políticas como la implementación de programas específicos para la protección de mujeres víctimas de violencia por razones de género, donde el Estado invierte en recursos destinados a refugios y centros de atención integral. Estas acciones buscan fortalecer la seguridad interna y la protección social frente a las presiones externas, demostrando una flexibilidad ideológica que permite equilibrar la libertad de mercado con la protección de intereses nacionales. En el contexto empírico de las políticas de género, esta postura tampoco se materializa de forma óptima pues como lo expusimos en el tercer capítulo, el Estado de México sólo cuenta con una casa de transición.

(d) Autoritarismo: La inclinación hacia un liderazgo fuerte y la gestión autoritaria del estado es una característica distintiva de las ultraderechas o derechas radicales, como se les ha denominado en diversos contextos.[394] Esta predilección se manifiesta en una profunda admiración por figuras de liderazgo que encarnan la autoridad y la capacidad de imponer el orden, a menudo en contraposición a los principios de libertad individual y pluralismo. En este sentido, la gestión autoritaria no se ve simplemente como un mecanismo de gobierno, sino como una necesidad para mantener la cohesión social, la estabilidad y, sobre todo, la seguridad.

Las políticas implementadas bajo estas administraciones tienden a reflejar una jerarquía de valores en la que las libertades individuales pueden ser sacrificadas en aras de un bien mayor percibido, identificado con la preservación del orden y la protección contra amenazas internas y externas. Esta perspectiva, aunque criticada por socavar los fundamentos de la democracia liberal, resalta una dimensión crucial de la política radical de derecha: la convicción de que ciertas circunstancias justifican un enfoque más autoritario en la gestión del Estado.

Por ejemplo, políticas de género que restringen ciertos derechos bajo el pretexto de proteger la seguridad y la moral pública pueden ilustrar esta tendencia

[394] Rodríguez, Araujo Octavio, “Derechas y ultraderechas en México,” España, Orfila Valentini, 2020, p. 6, disponible en: *https://books.google.com/books?id=1VkmEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=radicalismo+de+derecha&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwihkYeyqLuEAxU6mGoFHV3cCaYQ6wF6BAgMEAE* (fecha de consulta: 1 de julio de 2024).

autoritaria. Estas políticas a menudo justifican la intervención estatal en esferas privadas como un medio necesario para preservar el orden social, reflejando la misma lógica autoritaria que valora la seguridad y la cohesión por encima de las libertades individuales. El ejemplo más claro son las medidas de protección de orden jurisdiccional ya comentadas, criticadas y expuestas en el segundo capítulo y que empíricamente comprobamos en el tercer capítulo, en donde por orden de un juez, se prohíbe el acceso a la persona agresora al domicilio, se embarga preventivamente los bienes de la persona agresora, o se separa al victimario del hogar, entre otras.[395]

(e) Rechazo de políticas de igualdad y diversidad: El rechazo de la derecha radical a las políticas de igualdad y diversidad se fundamenta en la percepción de que tales medidas socavan los valores tradicionales y promueven desequilibrios al favorecer a ciertos grupos sobre otros. Esta postura se evidencia en la reacción adversa hacia "un creciente cuerpo de regulaciones legales que rigen la diversidad y los delitos raciales"[396] y cómo "algunos juicios que implementaban estas leyes han tenido un impacto importante en la derecha radical".[397] Desde esta perspectiva, la implementación de leyes orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades y a combatir la discriminación es vista no como un avance hacia una sociedad más justa e inclusiva, sino como una amenaza a los cimientos culturales y sociales preestablecidos.

Un ejemplo paradigmático de esta dinámica es la tipificación del delito de feminicidio. Esta legislación, diseñada para combatir la violencia extrema contra las mujeres, ha sido criticada por sectores que consideran que, al crear una categoría específica para estos crímenes, se establece un privilegio legal basado en el género, generando una jerarquía de víctimas. La derecha radical percibe esta ley como un ejemplo de cómo las políticas de igualdad y diversidad pueden fracturar la

[395] Vid. Artículo 34 quarter de la LGAMVLV

[396] Norris, Pippa, “Derecha Radical,” España, Akal, 2009, p. 123 disponible en: *https://books.google.com/books?id=-tmLcQ2Cy-YC&printsec=frontcover&dq=radicalismo+de+derecha&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwihkYeyqLuEAxU6mGoFHV3cCaYQ6wF6BAgKEAE* (fecha de consulta: 1 julio de 2024).

[397] Ídem.

cohesión social al introducir diferencias legales que privilegian a ciertos grupos sobre otros.

Desde un punto de vista argumentativo, la tipificación del feminicidio puede ser vista como un avance necesario en la lucha contra la violencia de género, pero también se puede argumentar que dicha legislación, en su afán por proteger a un grupo específico, puede desbalancear el sistema legal. Nuestra crítica radica en que esta ley no aborda la violencia de manera integral, sino que fragmenta el enfoque legal al centrarse en un tipo específico de víctima, dejando de lado la consideración de otros tipos de violencia igualmente graves.

Retóricamente, se puede sostener que la resistencia a la tipificación del feminicidio no es simplemente una defensa de valores tradicionales, sino una preocupación legítima por la igualdad ante la ley. La ley, al crear categorías específicas, podría estar violando el principio de igualdad que debería regir en cualquier sociedad justa. Esta resistencia se fundamenta en la idea de que todos los crímenes deben ser juzgados con la misma severidad, independientemente del género de la víctima, y que la justicia debe ser ciega a tales diferencias.

Estratégicamente, es crucial destacar que la tipificación del feminicidio, aunque bien intencionadas, pueden tener consecuencias no deseadas, como la creación de un sistema legal que discrimina al establecer diferentes niveles de protección y castigo basados en el género. La verdadera cohesión social se logra al garantizar que todas las personas, sin importar su identidad, reciban el mismo trato ante la ley.

Persuasivamente, se puede argumentar que las políticas de igualdad y diversidad, al introducir diferencias legales específicas, pueden fragmentar la sociedad y generar resentimiento entre aquellos que perciben estas leyes como injustas. La igualdad de oportunidades debe ser promovida de manera que no privilegie a un grupo sobre otro, sino que busque un trato equitativo para todos los ciudadanos.

En conclusión, la tipificación del delito de feminicidio ilustra cómo las políticas de igualdad y diversidad pueden ser percibidas como herramientas que, en lugar de unificar a la sociedad, la dividen al crear categorías específicas de víctimas. Esta

percepción subraya una tensión fundamental entre la defensa de valores tradicionales y la necesidad de una aplicación igualitaria de la ley, reflejando la preocupación de que tales políticas, aunque bien intencionadas, pueden desbalancear el sistema legal y socavar la cohesión social.

(f) Discurso antisistema: En el análisis de los movimientos fascistas y de derecha radical en Europa, se evidencia una paradoja fundamental: mientras aspiran a tomar el control del sistema político para materializar sus ideales, no vacilan en criticar vehementemente el statu quo. Esta crítica se fundamenta en la percepción de una profunda decadencia moral y social, atribuida a la influencia nefasta de élites corruptas y desconectadas de los verdaderos valores de la sociedad. Un ejemplo de esta crítica se manifiesta en el uso estratégico del antisemitismo, considerado por estos movimientos como un catalizador para la unificación nacional y la clarificación de la auténtica moral.

"El antisemitismo era valioso por cuanto fungiría como elemento unificador de la nación y permitiría dilucidar, así fuera por oposición, de qué se constituía la auténtica moral francesa".[398] Ramírez de Garay ilustra cómo, mediante la demonización de un otro, en este caso, el pueblo judío, se busca no sólo criticar el orden existente sino también proponer una visión alternativa de la sociedad, fundamentada en valores supuestamente puros y originales. Así, la paradoja entre la crítica al sistema y el deseo de controlarlo revela una compleja estrategia de movilización política que utiliza la denuncia de la corrupción y la decadencia moral como herramientas para legitimar su proyecto de poder, subrayando la intrincada relación entre ideología, moralidad y acción política en el contexto de los movimientos fascistas y de derecha radical.

Nuevamente, esta dinámica de lucha contra *el otro* puede vincularse con la ideología de género de Simone de Beauvoir en la lucha discursiva contra el sistema patriarcal opresor de la mujer. Al igual que la derecha radical utiliza la demonización

[398] Ramírez de Garay, Iván, “El lenguaje de la derecha radical europea,” México, Colegio de México, 2008, p. 109, disponible en: *https://books.google.com/books?id=REUNa-2P5IQC&printsec=frontcover&dq=radicalismo+de+derecha&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwihkYeyqLuEAxU6mGoFHV3cCaYQ6wF6BAgIEAE (fecha de consulta: 1 de julio de 2024).*

del *otro* para movilizar apoyo y justificar sus políticas, la narrativa de la lucha contra el sistema patriarcal identifica a los hombres y las estructuras patriarcales como el *otro* opresor de las mujeres.

Esta alianza discursiva entre el *Discurso Antisistema* y la ideología de género resalta cómo ambos enfoques utilizan la oposición a un *otro* para legitimar su causa. En el contexto de las políticas criminológicas mexicanas, esta convergencia, que se ha demostrado empíricamente en nuestro tercer capítulo, perpetúa una estructura de exclusión y marginación, tanto en términos de género como de control social. La crítica al sistema patriarcal, aunque esencial para visibilizar y combatir la opresión de la mujer, puede inadvertidamente alinearse con tácticas autoritarias y excluyentes si no se manejan con un enfoque inclusivo y equitativo. Por lo tanto, y después de haber falseado su teoría, es crucial reestructurarla.

En conclusión, la radicalización política de derecha y su rechazo a las políticas de igualdad y diversidad ponen de manifiesto una tensión fundamental en el ámbito político y social. La tipificación del feminicidio ejemplifica cómo, en su afán por proteger a ciertos grupos, estas políticas pueden ser percibidas como desestabilizadoras y generadoras de una jerarquía de víctimas. Este enfoque crítico resalta la preocupación de que dichas leyes, aunque bien intencionadas, pueden fragmentar la cohesión social y socavar la igualdad ante la ley, al crear diferencias legales basadas en el género.

Recordemos como se reveló en el tercer capítulo, que la lucha por disminuir los índices de violencia contra la mujer por razones de género no es más que una estrategia de control y administración por parte del mismo Estado. Esto la convierte, en el fondo, en una estrategia política con fines de lucro, más que en un verdadero esfuerzo por lograr la justicia y la igualdad. Este análisis revela cómo, detrás de la retórica progresista, se ocultan intenciones de lucro y control político, lo que la hace acercarse más al espectro político de derecha.

El análisis expuesto evidencia que, aunque la defensa de valores tradicionales y la oposición a la globalización y a la diversidad son características distintivas de la derecha radical, estas posturas no son exclusivas de este espectro político. En el contexto mexicano actual, el gobierno obradorista se caracteriza por

un discurso progresista que, en la práctica, adopta medidas conservadoras que perpetúan las estructuras de exclusión y marginación. Esta contradicción subraya la complejidad de la política vigente de la 4T, donde los intereses económicos prevalecen y determinan la adopción de posturas políticas, independientemente del espectro ideológico. Así, el gobierno actual, prioriza las ganancias económicas, adaptándose a diversas doctrinas políticas según convenga a sus objetivos financieros.

4.1.1.2 Radicalización política de izquierda

La radicalización política de izquierda se refiere al proceso mediante el cual individuos o grupos adoptan posturas políticas extremas asociadas con el espectro político de izquierda, caracterizadas por la búsqueda de igualdad social y económica, a menudo mediante la crítica al capitalismo, la promoción de reformas radicales y, en algunos casos, el respaldo a métodos de lucha directa o revolucionaria. Este tipo de radicalización se enfoca en la transformación de las estructuras sociales y económicas existentes, con el objetivo de crear una sociedad más justa y equitativa. Entre las características principales de la radicalización de izquierda se incluyen:

(a) Antineoliberalismo: La crítica al neoliberalismo, fundamentada en su contribución a la desigualdad social y económica, ha encontrado eco en diversas corrientes ideológicas a lo largo de la historia, destacando especialmente las propuestas del socialismo, el comunismo y el marxismo. Estas corrientes argumentan que el neoliberalismo, al promover la atomización de la sociedad y el imperio del egoísmo, socava la cohesión social y agrava las brechas económicas entre los individuos.

> Las ideas del socialismo, del comunismo o del marxismo, por ejemplo, han sido utilizadas en varios momentos del siglo XIX y XX por su capacidad para demoler el individualismo liberal. La crítica de la atomización de la sociedad y del imperio del egoísmo que produce el capitalismo liberal encuentra en el arsenal del pensamiento de izquierda armas poderosísimas.[399]

[399] Adamovsky, Esequiel, "Más allá de la vieja izquierda: seis ensayos para un nuevo anticapitalismo," Argentina, Prometeo, 2007, p. 21, disponible en: *https://books.google.com/books?id=A0S5dn8q86cC&printsec=frontcover&dq=anticapitalismo&hl=e*

Adamovsky resalta no sólo la persistencia de la crítica al sistema neoliberal a través del tiempo, sino también la relevancia de las ideologías de izquierda como alternativas viables para superar las limitaciones inherentes al capitalismo.

En el contexto mexicano actual, un ejemplo significativo de la radicalización de izquierda en materia de política criminológica de género es la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). Estos centros, establecidos para proporcionar apoyo integral a mujeres víctimas de violencia, ofrecen servicios legales, psicológicos y sociales. La implementación de los CJM refleja un esfuerzo coordinado para abordar la violencia contra la mujer y garantizar la justicia y la protección para las víctimas. Con base en el discurso político, este enfoque integral no sólo busca brindar asistencia inmediata, sino también trabajar en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer a través de la sensibilización y la educación. Este tipo de política pública resuena con los principios anti neoliberales al desafiar las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad y la opresión, promoviendo una sociedad más equitativa y justa. Aun y con la equívoca interpretación del neoliberalismo norteamericano, es decir, considerando como válida su versión de este, los hallazgos en nuestra investigación de campo revelan una realidad distinta e invertida.

(b) Igualdad social y económica: La redistribución de la riqueza y la promoción de una igualdad de oportunidades y derechos son principios fundamentales en las críticas al neoliberalismo propuestas por corrientes del radicalismo de izquierda. Estas corrientes argumentan a favor de superar las limitaciones de este sistema. Según esta perspectiva, en el neoliberalismo, la compensación que recibe cada individuo se basa en su contribución al trabajo, lo que conlleva a una desigualdad intrínseca dada por diferencias individuales en habilidades y esfuerzo. Este mecanismo perpetúa las desigualdades socioeconómicas al valorar desproporcionadamente las capacidades y esfuerzos de manera desigual.

---

s-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj187i867-EAxXSEUQIHcxRDiQQ6wF6BAgGEAE (fecha de consulta: 2 de julio de 2024).

Radicalmente hablando, se argumenta que en una fase avanzada de la sociedad comunista, estas desigualdades se superarían, eliminando la división entre trabajo mental y físico, y promoviendo una igualdad tangible y efectiva.[400] Este enfoque sugiere la necesidad de una transformación estructural en la sociedad que asegure una auténtica igualdad de oportunidades y derechos para todos, independientemente de su origen, género o condición social, ofreciendo una alternativa hacia una distribución de riqueza más justa y equitativa.

En el contexto mexicano actual, un ejemplo de políticas de género que buscan promover la igualdad es la implementación de programas de apoyo a mujeres emprendedoras y trabajadoras por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas políticas incluyen iniciativas para otorgar microcréditos a mujeres en situación de vulnerabilidad y la creación de programas educativos y de capacitación destinados a empoderar a las mujeres en el ámbito laboral.[401] Estas medidas buscan reducir la brecha de género y promover una mayor equidad económica y social, reflejando una perspectiva radical de izquierda que busca transformar las estructuras socioeconómicas para lograr una mayor justicia e igualdad.

(c) Defensa de los derechos de los trabajadores: El apoyo a la organización sindical y la lucha por mejores condiciones laborales son pilares fundamentales en la política radical de izquierda, que enfatiza la importancia de contrarrestar los intereses empresariales para asegurar derechos laborales equitativos. En este contexto, la legislación española de 1958 marcó un hito al introducir mecanismos que, aunque limitados, abrieron vías para una negociación colectiva más efectiva y la participación sindical. [402]

---

[400] Sen, Amartya y Foster, James E., La desigualdad económica, España, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 110.

[401] Vid. Velarde Flores, Cecilia Lorena y Velazquez Contreras, Lorenia, "Microcréditos y autonomía económica de las mujeres en situación de pobreza: un análisis bibliométrico," Región y sociedad [online]. 2023, vol.35 [citado 2024-07-02], 1719, disponible en: *http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252023000100101&lng=es&nrm=iso, Epub 02-Jun-2023, ISSN 2448*-4849 (fecha de consulta: 2 de julio de 2024).

[402] Vid. Ruiz Resa, Josefa Dolores., "Los derechos de los trabajadores en el franquismo," España, Dykinson, 2015, p. 52, disponible en: *https://books.google.com/books?id=-azRCQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=los+derechos+de+los+trabajadores&hl=es-*

La evolución de estos acontecimientos demuestra que, incluso en un marco de limitaciones, se pueden lograr avances significativos en la promoción de salarios justos y en la defensa de los derechos laborales. Esto evidencia el impacto positivo de la legislación laboral en la reducción de la conflictividad laboral y en la mejora de la negociación colectiva fuera de los marcos sindicales estatales. Así, se subraya la importancia de seguir promoviendo políticas que fortalezcan la organización sindical y aseguren condiciones laborales justas para todos los trabajadores, independientemente de los desafíos que esto implique.

En el contexto mexicano actual, un ejemplo significativo de la defensa de los derechos de los trabajadores en relación con la política criminológica de género es la implementación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual (PPASAHS) en diversas instituciones públicas y privadas.[403] Este protocolo busca garantizar un entorno laboral seguro y libre de violencia, promoviendo la igualdad y la justicia en el lugar de trabajo. A través de la creación de mecanismos de denuncia y atención especializada, se pretende proteger los derechos de las trabajadoras y trabajadores, asegurando que las políticas laborales aborden efectivamente las cuestiones de género y violencia, contribuyendo así a un entorno laboral más justo y equitativo.

(d) Ecologismo radical: La defensa del medio ambiente y la crítica al modelo de desarrollo capitalista se han convertido en ejes centrales del ecologismo radical, una corriente que no sólo denuncia las prácticas insostenibles promovidas por el capitalismo, sino que también aboga por una reconfiguración profunda de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Ambientalistas han sido enfáticos al señalar que el planeta se encuentra en un estado de crisis exacerbado por la política convencional y el crecimiento económico, lo que demanda una revisión crítica del paradigma de progreso predominante.[404]

419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi0wJWOgcCEAxXhJkQIHft2AxAQ6wF6BAgNEAE (fecha de consulta: 2 de julio de 2024).

[403] Vid. Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Función Pública, e Instituto Nacional de las Mujeres, "Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual," México, Diario Oficial de la Federación en línea, 3 de enero de 2020, disponible en: *http://cerotolerancia.inmujeres.gob.mx/docs/protocolo.pdf* (fecha de consulta: 2 de julio de 2024).

[404] Vid. Haro Martinez, Alma Angelina y Taddei Bringas, Isabel Cristina, "Sustentabilidad y economía: la controversia de la valoración ambiental," 2014, vol.14, n.46, pp.743-767, disponible en:

Las organizaciones ambientales, al abrazar legislaciones como la Ley Nacional de Política Ambiental después de 1970, si bien reconocen la necesidad de compromisos democráticos, raramente cuestionan la primacía del crecimiento económico.[405] Tal postura sugiere que, aunque se han dado pasos hacia el reconocimiento de la crisis ambiental, la verdadera transformación exige un cuestionamiento más profundo del modelo económico y un compromiso con alternativas que privilegien la sustentabilidad y la justicia social sobre la expansión económica incesante.

En el contexto mexicano actual, un ejemplo emblemático del ecologismo radical es la oposición al proyecto del Tren Maya. "Diputados de Oposición reclamaron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, que la construcción del Tren Maya haya significado la destrucción de la selva y la violación de la normatividad de impacto ambiental."[406] A pesar de los argumentos gubernamentales a favor del desarrollo y la creación de empleo, los opositores sostienen que el proyecto representa una contradicción en el discurso de izquierda del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que las políticas neoliberales conservadoras de derecha subyacentes priorizan el crecimiento económico sobre la preservación ambiental y los derechos de las comunidades locales.

En este contexto, la retórica de crisis utilizada por estos ambientalistas no sólo ilumina la urgencia y magnitud de los desafíos ambientales, sino que también fortalece nuestros argumentos. Esta reflexión revela la perversa política discursiva engañosa obradorista, reconociendo la amorfa política mexicana vigente, y marcando un punto de inflexión hacia una política relación más armónica y

---

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-84212014000300007&lng=es&nrm=iso (fecha de consulta: 2 de julio de 2024).

[405] Vid. Woodhouse, Keith Makoto, "The Ecocentrists: A History of Radical Environmentalism," Estados Unidos, Columbia University Press, 2018, p. 141, disponible en: *https://books.google.com/books?id=D0tBDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ecologismo+radical&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjT-7LTi8CEAxW6KUQIHXr6CvwQ6wF6BAgKEAE* (fecha de consulta: 2 de julio de 2024).

[406] Martínez, Martha, "Reclama Oposición afectación ambiental con Tren Maya," *Periodico Reforma en linea*, 30 de noviembre de 2023, parrafo 1, disponible en: *https://www.reforma.com/reclama-oposicion-afectacion-ambiental-con-tren-maya/ar2719763* (fecha de consulta: 2 de julio de 2023).

respetuosa entre la humanidad y el planeta, sugiriendo políticas más acercadas al espectro de centro, que integren la equidad social y la protección ambiental como pilares fundamentales.

(e) Antiimperialismo: La oposición a la intervención de potencias extranjeras en los asuntos internos de otros países emerge como un pilar fundamental en la crítica contra las políticas neocoloniales y el imperialismo económico y militar, particularmente en el contexto de América Latina durante las primeras décadas del siglo XX. Esta crítica se manifiesta de manera contundente frente a la invasión y dominación ejercida por las potencias internacionales, evidenciando una forma de opresión por parte de la nación más poderosa del mundo hacia las naciones más pequeñas. Tal situación no sólo propicia un escenario de crítica y resistencia ante estas prácticas, sino que también resalta la notable ausencia de protesta efectiva por parte de los diplomáticos hispanoamericanos en Washington y la inacción de organizaciones internacionales como la Unión Panamericana, las cuales deberían proteger los intereses de los pueblos americanos.[407]

Enfocándonos en nuestro objeto de estudio, la legislación en materia de género en México puede verse como un acto influenciado por compromisos internacionales, reflejando una forma moderna de imperialismo. Como lo hemos desarrollado en el primer capítulo, México ha ratificado diversos tratados y convenciones internacionales que promueven la igualdad de género y los derechos humanos, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Estos compromisos han obligado al país a adaptar su legislación y prácticas judiciales para cumplir con los estándares internacionales.

La LGAMVLV es el ejemplo más emblemático de cómo la influencia internacional ha moldeado la legislación mexicana. Aunque estas medidas buscan garantizar la igualdad y la justicia para las mujeres, es importante identificar la

[407] Vid. Pita González, Alexandra y Marichal Salinas, Carlos (editores), "Pensar el antiimperialismo, Ensayos de historia intelectual latinoamericana, 1900-1930," México, El Colegio de México AC, 2012, p. 125, disponible en: *https://books.google.com/books?id=D-QeAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=antiimperialismo&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiGzNOgl8CEAxXMMEQIHWFHDloQ6wF6BAgMEAE* (fecha de consulta: 2 de julio de 2024).

imposición de estándares internacionales como una forma de imperialismo moderno, donde las naciones más poderosas influyen en las políticas internas de los países en desarrollo. Esto plantea preguntas sobre la soberanía nacional y la capacidad de México para desarrollar sus propias soluciones a los problemas de género, sin depender de directrices externas. Como ejemplo de esta soberanía, en el primer capítulo se expuso el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde al no firmar estos convenios, tiene la capacidad para evaluar científica y criminológicamente sus políticas criminales de género a efecto de ratificar o eliminar su periódica vigencia.

(f) Apoyo a movimientos sociales: La solidaridad con movimientos que defienden los derechos de minorías étnicas, sexuales y de género, y combaten cualquier forma de discriminación y opresión constituye un eje central en la política radical de izquierda, caracterizada por su compromiso con la justicia social y la equidad. En este contexto, las redes críticas emergen como actores fundamentales en la movilización social, articulando temáticas transversales y promoviendo cambios basados en valores no dominantes. Estas redes, por su capacidad de inserción en escenarios de gobernanza y su apertura a nuevos ciclos temáticos, facilitan la politización alternativa de campos cruciales como la solidaridad internacional, el antimilitarismo, el antirracismo y el movimiento okupa, entre otros.[408]

Tal enfoque no sólo amplía el espectro de lucha contra la discriminación, sino que también propicia un espacio para la resistencia y la alternativa, demostrando la interconexión de las luchas sociales. Este paradigma subraya la importancia de la acción colectiva en la construcción de sociedades más inclusivas, donde la defensa de los derechos de las minorías y el rechazo a la opresión sean principios fundamentales. Ejemplos contemporáneos de estos movimientos en México

[408] Vid. Martí, Salvador y Gomà, Ricard, “Creadores de democracia radical: movimientos sociales y redes de políticas públicas,”España, 2002, p. 68, disponible en: *https://books.google.com/books?id=WBFQfqLwrMkC&printsec=frontcover&dq=apoyo+a+movimientos+sociales&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjSsPWvo8CEAxW1PkQIHSPVDcEQ6wF6BAgMEAE* (fecha de consulta: 2 de julio de 2024).

incluyen el movimiento feminista que lucha contra la violencia de género y por la igualdad de derechos.[409]

En conclusión, la radicalización política de izquierda se presenta como una respuesta contundente y multifacética a las desigualdades inherentes al capitalismo, abarcando una crítica profunda a las estructuras sociales y económicas establecidas. La adopción de posturas anticapitalistas, la promoción de la igualdad social y económica, y la defensa de los derechos de los trabajadores, se consolidan como los ejes principales de esta radicalización. En el contexto mexicano actual, ejemplos como los CJM, los programas de apoyo a mujeres emprendedoras y el PPASAHS evidencian un esfuerzo por reconfigurar las dinámicas de poder que perpetúan la desigualdad.

No obstante, es crucial reconocer cómo el discurso vigente, más allá de ser fiel a sus principios radicales izquierdistas, se adapta para asegurar primero los intereses económicos antes de permitir la intervención de países extranjeros en asuntos internos. Un ejemplo de esto es la pérdida de soberanía al haber firmado y ratificado convenios internacionales que, con el apoyo de la teoría de la ideología de género, han dado lugar a leyes como la LGAMVLV. Este adoctrinamiento de izquierda fanatizado, bajo la apariencia de buscar justicia social, termina realizando lo que inicialmente pretendía combatir.

Los hallazgos en nuestra investigación de campo revelan una realidad que contradice estas intenciones. A pesar de las políticas y discursos adoptados, persisten barreras estructurales y culturales que dificultan la implementación efectiva de estas medidas. Este análisis justifica tanto nuestra evaluación crítica como la propuesta de un enfoque multidimensional que reconozca las limitaciones y desafíos en la búsqueda de una verdadera justicia social y económica. Se sugiere que las soluciones deben ir más allá de las políticas públicas y considerar una transformación profunda del paradigma neoliberal mexicano.

[409] Vid. Mireya Cidón, “Razones por las que el mundo necesita el feminismo,” España, Amnistía Internacional en línea, 6 de marzo de 2024, disponible en: *https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/razones-por-las-que-el-mundo-necesita-el-feminismo/* (fecha de consulta: 2 de julio de 2024).

4.1.1.3 Política de centro

La política de centro surge como una respuesta a las ideologías extremas, buscando un equilibrio pragmático entre las diversas corrientes políticas. La política de centro se describe como una posición política oportuna y sensata, adoptada por aquellos que desean evitar los extremos de la izquierda o la derecha. La persistencia de la dicotomía entre izquierda y derecha se debe a la necesidad de distinguir prácticas políticas diversas dentro de este espectro, resaltando así la flexibilidad y adaptabilidad del centrismo.[410] Esta corriente se caracteriza por su adaptabilidad y moderación, intentando armonizar las perspectivas opuestas. La política de centro privilegia soluciones prácticas y realistas a los retos sociales, económicos y políticos, procurando un balance entre la autonomía del mercado y la intervención estatal necesaria. Además, aspira a conciliar la libertad individual con la promoción de la justicia social, reflejando el propósito del centrismo de tender puentes entre las divisiones ideológicas y promover el bienestar colectivo por encima de las preferencias partidistas.

Norberto Bobbio, en su obra *Derecha e Izquierda: Razones y significados de una distinción política*, argumenta que la distinción fundamental entre las posiciones de derecha e izquierda radica en su actitud hacia la igualdad. Según Bobbio, la izquierda busca reducir las desigualdades sociales y económicas a través de la intervención estatal y políticas redistributivas, mientras que la derecha acepta las desigualdades como inevitables o incluso beneficiosas para el progreso social y económico.

> …aquellos que se declaran de izquierdas dan mayor importancia en su conducta moral y en su iniciativa política a lo que convierte a los hombres en iguales, o a las formas de atenuar y reducir los factores de desigualdad; los que se declaran de derechas están convencidos de que las desigualdades son un dato ineliminable, y que al fin y al cabo ni siquiera deben desear su eliminación.[411]

[410] Vid. Ackerman, John M., et. alt. (eds.), "Las derechas en México: democracia y disputas político-culturales en México y el mundo," Ciudad de México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Universidad Nacional Autónoma de México, 2022, pp. 38, 39, disponible en: *https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Las_derechas_en_Mexico.pdf*, (fecha de consulta: 6 de julio de 2024).

[411] Bobbio, Norberto, "Derecha e Izquierda: Razones y significados de una distinción política," trad. de Alessandra Picone, 8ª ed., Madrid, Taurus, 1996, p. 15, disponible en:

Este análisis es crucial para comprender las políticas públicas y sus enfoques hacia la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, ya que revela cómo las posturas extremas de ambos lados del espectro pueden resultar en estrategias incoherentes y poco efectivas. La teoría de Bobbio proporciona un marco claro para analizar las diferencias ideológicas que influyen en la formulación de políticas, destacando la necesidad de un equilibrio pragmático, propio de la política de centro, para alcanzar una sociedad más justa y equitativa.

Por un lado, la política de centro se destaca por su enfoque pragmático en la gobernanza, prefiriendo soluciones basadas en la evidencia y la eficacia sobre las ideologías rígidas. Bracho argumenta que la evidencia se construye activamente mediante sistemas de información pública y la investigación evaluativa, adquiriendo valor argumentativo en su aplicación política.[412] Este enfoque subraya la importancia de la adaptabilidad y la capacidad de modificar políticas ante nuevas evidencias o contextos cambiantes, enfatizando el dinamismo necesario en la gestión pública para responder eficazmente a las necesidades contemporáneas.

Asimismo, en el debate político actual, la política de centro promueve un enfoque equilibrado hacia la gobernanza económica, posicionándose entre las perspectivas tradicionales de la derecha y la izquierda. La derecha aboga por limitar la intervención estatal para favorecer la libertad de mercado, mientras que la izquierda propone aumentar la participación estatal para asegurar la redistribución de la riqueza y la equidad social. La política de centro, en cambio, apoya la economía de mercado con regulaciones y políticas públicas diseñadas para fomentar la justicia social y evitar desigualdades significativas. Predieri destaca la ósmosis entre el Estado y el mercado como fundamental para el Estado moderno, subrayando que los ajustes deben alinearse con las normas comunitarias.[413] Esta

https://tomasdeaquino.cl/upfiles/documentos/02052016_1113am_57278ab45b772.pdf (fecha de consulta: 18 de julio de 2024)

[412] Vid. Bracho, T., "Políticas públicas basadas en la evidencia. La política pública como acción informada y objeto de investigación", en Merino, M. y Cejudo, G. (comps.) Problemas, decisiones, soluciones. Enfoques de política pública, Ciudad de México, fce/cide, 2020, p. 331.

[413] Vid. Predieri Alberto, "Estado y mercado: La ósmosis como elemento cualificador y legitimante," trad. de Elvira Ascención, Revista del centro de estudios constitucionales en linea, 1994, p. 35, disponible en: *https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1051362.pdf* (fecha de consulta: 6 de julio de 2024).

capacidad de adaptación y pragmatismo demuestra el compromiso del centro con la búsqueda de soluciones que armonicen la eficiencia económica con la responsabilidad social.

En cuanto a temas sociales, la política de centro equilibra la promoción de la libertad individual y la responsabilidad personal con el reconocimiento del rol crucial del Estado en el establecimiento de redes de seguridad social y la promoción de la igualdad de oportunidades. Magdalena Sepúlveda enfatiza que las políticas de protección social deben estar definidas a través de un marco legal e institucional adecuado.[414] Este balance garantiza que las políticas de protección social trasciendan lo aspiracional y se conviertan en compromisos efectivos y vinculantes, equilibrando la libertad individual con el apoyo colectivo.

Además, la política de centro valora el diálogo y el consenso tanto en la política interna como en la externa. Armstrong señala que, incluso en contextos con ideologías divergentes, es fundamental mantener una actitud abierta y no dogmática para facilitar la comprensión mutua.[415] Este enfoque resalta la importancia de superar las diferencias mediante el diálogo constructivo, priorizando el bienestar colectivo sobre las ambiciones de poder individual.

Por otra parte, la política de centro favorece un enfoque equilibrado que promueve el desarrollo sostenible y la protección ambiental, armonizando el crecimiento económico con la conservación de los recursos naturales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea que la igualdad, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental deben ir de la mano en una dialéctica virtuosa.[416] Este enfoque subraya la importancia de integrar estas dimensiones como pilares fundamentales de una política de desarrollo coherente y sostenible.

---

[414] Vid. Sepúlveda, Magdalena, "De la retórica a la práctica: el enfoque de derechos en la protección social en América," Naciones Unidas, 2014, p. 21, disponible en: *https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/35912/S2014131_es.*pdf (fecha de consulta: 6 de julio de 2024).

[415] Vid. Armstrong, Paul, B., Lecturas en conflicto: validez y variedad en la interpretación, México, UNAM, 1992, pp. 123, 124.

[416] Vid. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir," CEPAL, 2010, p. 12, disponible en: *https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/13309/S2010986_es.pdf (*fecha de consulta: 6 de julio de 2024).

En relaciones internacionales, la política de centro se inclina hacia el multilateralismo y la cooperación, abordando conflictos mediante métodos pacíficos y fortaleciendo lazos comerciales y diplomáticos. Alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estas estrategias buscan cumplir metas internacionales y potenciar la autonomía y eficacia de los entes de cooperación internacional.[417] Una política exterior cohesiva y bien coordinada es esencial para superar desafíos globales, posicionando a los países como protagonistas activos en el escenario internacional.

Finalmente, la participación ciudadana en la formulación e implementación de políticas públicas es crucial para garantizar su eficacia y legitimidad. La inclusión de profesionistas en seguridad ciudadana podría ser la óptima forma de materializar esta participación ciudadana. Estos profesionistas, con formación en criminología, ciencias sociales, derecho y psicología, pueden aportar conocimientos técnicos y perspectivas multidisciplinarias deontológicas que enriquezcan el diseño de políticas públicas.[418] Su participación no sólo aumentaría la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades, sino que también fortalecería la confianza de la comunidad en las instituciones gubernamentales. Además, estos profesionales pueden facilitar la capacitación continua de los trabajadores del Estado y promover prácticas basadas en evidencia, lo que contribuiría a una mayor eficacia en la prevención y atención de la violencia contra la mujer. Este enfoque participativo y profesionalizado permitiría una respuesta más integral y coherente a los desafíos preventivos, promoviendo una política balanceada y estable de centro.

---

[417] Vid. Ponce Adame et. al., *Teoría y Práctica de la Cooperación Internacional para el Desarrollo: Una Perspectiva desde México*. Ciudad de México, Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2018, p. 122, disponible en: *https://www.institutomora.edu.mx/Docencia/Cooperacion/SiteAssets/SitePages/Admisiones/Teor%C3%ADa%20y%20Pr%C3%A1ctica%20de%20la%20CID.%20M%C3%A9xico%20(Ponce,%20Huacuja%20y%20Lucatello).pdf* (fecha de consulta: 6 de julio de 2024).

[418] Vid. Universidad Autonoma del Estado de México (UAEMEX), “Licenciatura en Seguridad Ciudadana,” *Archivo PDF*, México, UAEMEX, disponible en: *http://denms.uaemex.mx/exporientavirtual/wp-content/uploads/2024/04/Seguridad_Ciudadana_20241.pdf* (fecha de consulta: 18 de julio de 2024).

4.2 ESDD y política de centro

La confluencia entre un ESDD y la política de centro ofrece un modelo político equilibrado y pragmático que preserva las libertades fundamentales y garantiza la justicia económica. Este enfoque híbrido busca soluciones meditadas y factibles a los problemas sociales, económicos y políticos, equilibrando las libertades individuales con la intervención estatal necesaria para corregir desigualdades y garantizar derechos básicos. La política de centro, con su flexibilidad y apertura al diálogo, se posiciona como el vehículo ideal para implementar las políticas de un ESDD, priorizando el interés común y fomentando un desarrollo sostenible que beneficie a toda la sociedad.

El ESDD tiene sus raíces en la fusión de ideales democráticos con el compromiso hacia la justicia social y económica, equilibrando la libertad individual con la protección de los derechos colectivos. Este concepto evolucionó a lo largo de los siglos XIX y XX en respuesta a las demandas por mayor equidad social frente a las desigualdades generadas por el libre mercado industrial. En el corazón de este modelo está la idea de que la democracia debe impregnar las estructuras sociales y económicas, garantizando la participación ciudadana y el acceso universal a derechos básicos como la educación, la salud y un nivel de vida digno. Habermas aborda la complejidad de este modelo, destacando la dialéctica entre el empoderamiento del individuo y la protección estatal:

> La dialéctica a que el Estado social da lugar entre las facultades de que dota al sujeto y la tutela que somete al sujeto, se agudiza en la medida en que el control del cumplimiento de los deberes en lo que respecta a derechos fundamentales tiene por consecuencia una ampliación y rearme por el que el Estado de derecho se convierte en un Estado de seguridad.[419]

Esta filosofía se refleja en la CPEUM desde su promulgación en 1917, que incorporó derechos sociales y laborales, reflejando los principios de un ESDD. La CPEUM consagra la división de poderes, la soberanía nacional y los derechos

[419] Habermas, Jürgen, "Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso," trad. de Manuel Jiménez Redondo, Madris, Trotta, 2010, p. 522, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1C0sqnC7i5Obt1LdZrOUaoXZbcC5s6C2a/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 6 de julio de 2024).

civiles y políticos, y se compromete con la redistribución de la riqueza y la responsabilidad estatal en asegurar el bienestar de sus ciudadanos. La reforma en materia de derechos humanos de 2011 cataliza la integración de este sistema híbrido entre el iuspositivismo y el iusnaturalismo, fortaleciendo el marco jurídico para la protección de los derechos fundamentales y la justicia social. Esta reforma subraya el compromiso de México con la construcción de una sociedad más justa y equitativa bajo el marco del derecho, consolidando la relación entre las libertades individuales y los derechos colectivos.

4.2.1 El espejismo de la 4T

El discurso político del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se caracteriza por una retórica populista con un fuerte énfasis en la justicia social, la lucha contra la corrupción y el apoyo a los sectores más vulnerables. Su enfoque se sitúa claramente en el centro-izquierda del espectro político, promoviendo programas sociales, criticando el neoliberalismo y abogando por la equidad y la justicia social. El ejecutivo federal, subraya repetidamente la importancia de reducir la desigualdad y fortalecer el papel del Estado en la provisión de servicios básicos como la educación y la salud. Además, su discurso incluye la retórica de una 4T, prometiendo un cambio profundo en la estructura económica y política del país, alejándose de las políticas neoliberales que habían predominado en décadas anteriores.

Sin embargo, en la práctica, la política mexicana bajo la administración del presidente López Obrador muestra una contradicción significativa con su discurso. Aunque proclamaba una agenda de centro-izquierda, muchas de las políticas implementadas reflejaban una orientación hacia la derecha, especialmente en términos de centralización del poder, militarización de la seguridad pública y manejo conservador de ciertos sectores económicos. Ejemplos claros de esta orientación incluyen el uso intensivo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y control de proyectos de infraestructura, lo que incrementó la presencia militar en la vida civil. Aunque el discurso promueve la equidad social, la implementación de políticas económicas favorece una estructura centralizada de poder y control, en detrimento de las instituciones autónomas y la descentralización democrática. Este

enfoque suscita críticas tanto a nivel nacional como internacional, señalando una deriva autoritaria y una contradicción con los principios de un Estado democrático de derecho.

Este análisis resalta la discrepancia entre el discurso político y la realidad de las políticas implementadas, lo que genera una tensión significativa en la percepción y la práctica de la gobernanza en México. La retórica centrada en la justicia social contrasta con acciones que fortalecen el control de un Estado policial tradicional, reflejando un alejamiento de los principios democráticos y una inclinación hacia el autoritarismo; una involución sociopolítica.

Los hallazgos en nuestra investigación sobre el primer nivel preventivo de violencia contra la mujer revelaron serias deficiencias en la implementación de políticas educativas. Aunque las instituciones educativas y los docentes desempeñan un papel crucial en la formación de valores y la promoción de un entorno libre de violencia, se identificaron significativas carencias en recursos e infraestructura. La falta de materiales didácticos adecuados, comedores escolares, enfermerías, transporte escolar y la inconsistencia en la capacitación docente son obstáculos críticos. Además, las disparidades entre las políticas teóricas y su aplicación práctica, como la falta de involucramiento de los padres de familia y la insuficiencia de programas preventivos efectivos en las escuelas, subrayan la necesidad de un compromiso real y una inversión sustancial por parte del Estado para fortalecer este nivel preventivo. Nuestra teoría del espejo proporciona un marco para entender esta disociación entre la ley y la realidad, guiando la corrección de estos desajustes estructurales. Este enfoque es esencial para lograr una política criminológica óptima en el primer nivel preventivo, abordando las causas estructurales que perpetúan la violencia y la desigualdad.

Como segundo nivel preventivo, la FEADVVG reflejó importantes debilidades, errores e inconsistencias. Aunque la FEADVVG cuenta con una estructura formal sólida, la insuficiencia de recursos humanos y materiales limita significativamente su capacidad operativa. La teoría del espejo se aplica aquí al evidenciar cómo la austeridad de recursos humanos, técnicos y materiales crea una realidad equivocada que contrasta con las intenciones declaradas de combatir la

violencia de género de manera efectiva. La fiscalía cuenta con sólo 68 policías de investigación y 18 peritos especializados a nivel Estado de México, lo que pone de manifiesto una desconexión entre la estructura formal y las capacidades reales de la institución.

En cuanto al tercer nivel preventivo, los hallazgos de la investigación sobre la reinserción social y la efectividad del sistema penitenciario revelaron serias deficiencias en la infraestructura y en los programas de rehabilitación. El sistema penitenciario en México enfrenta problemas crónicos de sobrepoblación, falta de acceso a servicios básicos y una supervisión judicial insuficiente. Las estadísticas de la ENPOL mostraron que una gran parte de la población penitenciaria no recibe programas de rehabilitación adecuados, lo que incrementa las tasas de reincidencia. Además, la corrupción y las prácticas abusivas dentro de los centros penitenciarios limitan la capacidad del sistema para cumplir con su objetivo de reintegrar socialmente a los reclusos. La teoría del control y administración del Maestro Calixto,[420] nos sirve de base para subrayar que la gestión estatal de la violencia contra la mujer ha sido ineficaz debido a la lujuria económica, un Estado enfermo e intoxicado que hace de los delitos una gestión de lucro y no una lucha para disminuir sus índices. Esto ha perpetuado la desigualdad y la injusticia, evidenciando la necesidad de un cambio de paradigma en la administración pública para lograr verdaderos avances en la justicia social y la equidad.

Basándonos en lo anterior, la 4T refleja una dinámica compleja y multifacética, influenciada por tendencias de derecha y alejada del centro, a pesar del discurso retórico que sugiere lo contrario. En este contexto, México atraviesa un período de introspección política, donde el debate se enfoca en la búsqueda de soluciones superficiales a los desafíos socioeconómicos, inclinándose hacia ideologías conservadoras de derecha. La administración del presidente López Obrador promueve un discurso de justicia social y redistribución económica, pero a la vez implementa políticas que favorecen la macroeconomía, la inversión extranjera y un Estado policial tradicional. Está demostrada contradicción refleja una estrategia

[420] Vid. Op. Cit., IUS Canal Multimedia, "#ElMundoDelDerechoPenal: Narcodelincuencia Globalizada."

política perversa, donde su discurso intenta equilibrar el desarrollo económico con las demandas sociales, resultando en una implementación deficiente de programas preventivos y una falta de infraestructura adecuada para apoyar a las víctimas de violencia.

Desde la perspectiva del materialismo dialéctico, la administración del presidente López Obrador, aunque se considera social progresista, en realidad podría interpretarse como una manifestación de política conservadora de derecha. En su esencia, se aleja de abordar las problemáticas estructurales de la sociedad mexicana. En este marco, la dialéctica entre teoría y práctica se desdibuja por estrategias que, si bien captan la atención y el apoyo popular mediante discursos retóricos de corte populista, no logran penetrar en la complejidad de las raíces de los desafíos nacionales. Este enfoque, más allá de proponer cambios profundos y sistemáticos que la teoría marxista consideraría esenciales para una transformación social verdadera, tiende a ofrecer soluciones temporales. Estas soluciones, aunque de impacto inmediato en la superficie, no consiguen modificar las condiciones materiales subyacentes de desigualdad, pobreza e injusticia, perpetuando así un ciclo de medidas paliativas que no concuerda con una visión materialista dialéctica de progreso y emancipación social.

Nuestra argumentación se desglosa en seis razones concisas: el adoctrinamiento, la politización, la interpretación conservadora del paradigma neoliberal, la influencia de los medios de comunicación tecnológicos, el populismo y la ideología de género. Este conjunto de elementos distorsiona significativamente el panorama sociopolítico. Por lo tanto, desde una perspectiva ideal, se debería aspirar a alcanzar un modelo social democrático de derecho que equilibrara adecuadamente las libertades individuales con la justicia social. Nuestra teoría del espejo, explica cómo la realidad se disocia de lo previsto en la ley debido a una interpretación errónea e involutiva del neoliberalismo, exacerbando las desigualdades y debilitando las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar.

4.3 El alimento de la actual política mexicana

La transformación política en México ha sido marcada por una rara dinámica política ideológica que plantea serios desafíos a la cohesión y estabilidad social. En primer lugar, este apartado se propone explorar el adoctrinamiento fanatizado como una característica distintiva de la administración actual, subrayando cómo la obsesión por el poder y la aplicación de una doctrina fanatizada una vez alcanzado dicho poder ha conducido a una pérdida de objetividad, derivando en un camino de subjetividad popular que se aleja de la rigurosidad empírica propia de las ciencias sociales. Inspirándonos en las reflexiones de Adam Smith, examinaremos cómo esta estrategia no sólo distorsiona la idea original de gobernanza, sino que también promueve una retórica elocuente que presenta visiones utópicas como soluciones infalibles, a menudo sin sustento en evidencia real o análisis detenido.

A través de un análisis crítico-genealógico, este trabajo busca entender el adoctrinamiento de izquierda, y es que, considerando que nace de la noble intención de ofrecer alternativas al modelo conservador, la verdad es que con el tiempo ha perdido rigor científico y se ha tornado en un ejercicio de poder que ignora las complejas realidades sociales. Al final, se discutirán las implicaciones de este fenómeno para la sociedad mexicana y se propondrán vías para mitigar los efectos negativos de un proyecto político que, atrapado en su propia ideología, olvida la diversidad de principios motrices que animan a la sociedad.

En el complejo y amorfo escenario político de México, nos atrevemos a asegurar que la politización emerge como un elemento clave que moldea la percepción y el debate de los asuntos públicos, marcando profundamente la trayectoria de la radicalización política en el país. Ante este segundo factor, este apartado se adentrará identificándolo como un factor crítico que alimenta las dinámicas políticas actuales, desentrañando su origen, evolución y las consecuencias que tiene sobre la configuración de agendas públicas y el control del crimen. A través de un recorrido que explora desde sus raíces etimológicas en la Grecia antigua hasta su relevancia en las revoluciones liberales del siglo XIX, y cómo líderes como Simón Bolívar la conceptualiza como un mecanismo de empoderamiento ciudadano, se revelará la doble cara de la politización.

Por un lado, su potencial para involucrar a la ciudadanía en la gestión de los asuntos estatales y, por otro, cómo en la actualidad, la politización extrema de las políticas públicas, ejemplificada en debates sobre la prisión preventiva, se convierte en un obstáculo para su implementación efectiva. Este análisis buscará comprender la naturaleza cambiante de la politización y su impacto en el sistema penitenciario mexicano, evidenciando cómo este proceso transforma las políticas en campos de batalla ideológicos y socava la capacidad del Estado para promover el bien común, generando retos significativos para la justicia, los derechos humanos y la reinserción social.

Así mismo, la amorfa política en México encuentra en la interpretación conservadora del neoliberalismo uno de sus ejes más polémicos y evidentes. Ante este tercer factor, este apartado se propone desentrañar cómo el modelo neoliberal, abanderado por la prestigiosa Escuela de Chicago y su principal exponente, Milton Friedman, se ha convertido en un desafío para el gobierno actual de inclinación progresista. Al prometer prosperidad y equidad, la política de supuesta izquierda ha generado expectativas no cumplidas de forma equitativa en todos los estratos sociales, revelando una profunda discrepancia entre la teoría y la práctica en la lucha contra las desigualdades.

A través de un análisis crítico, se examinarán las políticas sociales implementadas bajo esta ideología, tales como becas y apoyos económicos, que, lejos de promover la intervención estatal y promover la justicia social, reflejan paradójicamente principios de libre mercado conservadores. En este trabajo se argumenta que, a pesar de su retórica de izquierda, el gobierno actual ha adoptado en realidad estrategias que se alinean estrechamente con el *Laissez faire*, generando tensiones entre su discurso ideológico declarado y su práctica política. Así, se buscará comprender el impacto de este paradigma en la cohesión social, la equidad y el ejercicio de los derechos humanos en el México contemporáneo, revelando las contradicciones inherentes a la actual política económica y social.

En este mismo orden de ideas, la equívoca interpretación del neoliberalismo norteamericano, ha hecho que las políticas económicas y sociales implementadas para combatir la pobreza y la exclusión social en México, revelen una profunda

contradicción en el corazón de la estrategia actual. Como primera política a analizar, se explorará cómo la propuesta de Milton Friedman sobre el uso de bonos o vales, inicialmente concebida como una solución innovadora para adoptar el nuevo paradigma y así optimizar la distribución de recursos, se refleja paradójicamente en las políticas de la actual administración progresista y candidatos presidenciales. A pesar de las buenas intenciones detrás de estas políticas, un análisis crítico sugiere que su implementación, centrada en la asistencia económica a través de becas, no aborda de manera integral los desafíos de la desigualdad y la marginación, ya que se han olvidado o simplemente no han querido reconocer el objetivo dialéctico del paradigma neoliberal.

En este subcapítulo se argumenta que, sin un enfoque que trascienda la mera asistencia económica y que se enfoque en una promoción integral de los derechos fundamentales establecidos en la CPEUM, tales esfuerzos resultan insuficientes. Examinaremos cómo estas políticas, aunque presentadas como progresistas, mantienen continuidades con estrategias conservadoras, evidenciando una desconexión entre la ideología proclamada y la práctica política. A través de un análisis detallado, se buscará entender la necesidad de una perspectiva holística que asegure los derechos y promueva un auténtico ESDD, esencial para generar un impacto significativo y duradero en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en México.

Adicionalmente, en el actual panorama político de México, se observa una tendencia hacia la centralización del poder que sugiere una interpretación de la derecha conservadora en contraposición a sus fundamentos originales, perfilando un escenario preocupante hacia la consolidación de un Estado policial tradicional. Como segunda política a analizar, en este subcapítulo se examinará cómo, pese a a las declaraciones explícitas por parte de la futura y primera presidente de México la Dr. Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la continuación del proyecto de la Guardia Nacional, la dinámica política subyacente revela una inclinación hacia prácticas autoritarias que recuerdan a las de regímenes de derecha radical históricos.

A través del análisis de Michel Foucault sobre el papel de la policía en la producción y sostenimiento de sistemas de control social, se explorará el uso

excesivo de la fuerza contra manifestantes y disidentes políticos como evidencia de políticas represivas que trascienden la mera preservación del orden para adentrarse en la configuración de una sociedad sometida a vigilancia y restricciones constantes. Además, se considerará el significativo aumento en el presupuesto para seguridad pública, especialmente para la Guardia Nacional, como un reflejo del fortalecimiento de un Estado policial que plantea serios interrogantes sobre la congruencia de la administración actual con sus declaraciones de progresismo.

Por otro lado, la influencia creciente de los medios de comunicación y las tecnologías de la información en la sociedad contemporánea ha llevado a una mediatización profunda de la política mexicana, un fenómeno que juega un papel crucial en la radicalización del discurso y las prácticas políticas. Como cuarto factor agudizador de la política actual, explicaremos cómo la capacidad de estos medios para diseminar información y, al mismo tiempo, propiciar la formación de cámaras de eco, ha intensificado las convicciones y polarizado las posturas políticas de manera sin precedentes. Específicamente, el papel de las redes sociales como amplificadores de opiniones extremistas y su contribución a crear entornos que no sólo perpetúan ideologías radicales, sino que también desafían la pluralidad de ideas, promoviendo en su lugar una confrontación constante, será examinado detalladamente.

A través de este análisis, se explorará cómo la mediatización, entendida como la transformación de las interacciones sociales y culturales a través de los medios de comunicación, ha reconfigurado la dinámica política, llevando a una interpretación más radical de la política que se manifiesta en prácticas autoritarias y en una desconexión con la realidad nacional. El caso de Ingrid Escamilla, una joven brutalmente asesinada en 2020, representa un punto de inflexión en la lucha de la violencia contra la mujer por razones de género en México. La intensa mediatización del evento, marcada por la difusión de imágenes gráficas y sensacionalistas, desencadenó una ola de indignación pública y presión sobre las autoridades para tomar medidas drásticas e inmediatas. Este trágico suceso no sólo subrayó la gravedad de los feminicidios en el país, sino también la urgencia de reformar las políticas públicas para proteger a las mujeres de manera menos

efectiva. A través del análisis de este caso, se explora cómo los medios de comunicación y las tecnologías de la información han transformado la política criminal en México, destacando la necesidad de equilibrar la respuesta punitiva con enfoques preventivos y estructurales basados en evidencia.

Finalmente, en el tejido de la política mexicana contemporánea, el populismo se erige como un fenómeno complejo que ha catalizado una transformación profunda en el ejercicio político, contribuyendo significativamente a su radicalización. Este último factor que alimenta la práctica del poder en forma extrema, es desde nuestra tesitura, ejercido de forma tripartita; ideológica, estratégica y discursiva. Revelaremos de forma deductiva como estas corrientes, a pesar de sus variaciones contextuales e ideológicas, prometen encarnar la voluntad del pueblo frente a las élites. Así mismo, pero de forma inductiva, se examinará cómo el populismo, entendido tanto como un conjunto de ideas que enfatiza la dicotomía entre el pueblo puro y las élites corruptas, como una estrategia política para movilizar apoyo mediante la construcción de antagonismos, y como un estilo discursivo que simplifica la política y fomenta la polarización, ha permeado el liderazgo y las políticas públicas en México.

En particular, se analiza el liderazgo del presidente AMLO y su movimiento político como un caso emblemático del populismo en acción, ilustrando cómo este enfoque multifacético ha influenciado la dinámica política actual. A través de este análisis, se buscará comprender la naturaleza del populismo en México, su capacidad para movilizar el apoyo popular y su impacto en la profundización de la polarización política, ofreciendo así una perspectiva crítica sobre uno de los fenómenos políticos más discutidos y controvertidos de la era contemporánea.

En conclusión, ante los desafíos ya expuestos, se plantea comprender y ser conscientes del actual clima espectral político, este apartado destaca dos estrategias fundamentales. En primer lugar, propone una instrucción teórica y científica sobre la radicalización política, abarcando tanto sus orígenes como los impactos que ha generado, basándose en evidencia científica relativa a la dinámica del ejercicio político en México. En segundo lugar, una vez identificado el problema, promueve un acercamiento y búsqueda de equilibrio entre ideologías opuestas,

fomentando políticas que eviten los extremos radicales y se inclinen hacia posturas más centradas. La exposición realizada en este subcapítulo no sólo revela los problemas inherentes a la radicalización política, sino que también refleja una conciencia política de nuestro presente y anticipa el futuro político que nos espera, al menos durante la próxima administración.

4.3.1 Adoctrinamiento fanatizado

Una característica distintiva de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador fue su obsesión por la obtención y mantenimiento del poder, una ambición que distorsionó la idea original de su proyecto político. Esta obsesión, una vez alcanzado el poder, llevó a la pérdida de objetividad y derivó en un camino de subjetividad popular, abandonando la rigurosidad empírica propia de las ciencias sociales. Este fenómeno es particularmente relevante en el contexto del análisis crítico tridimensional de la política criminal para la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar en el Estado de México, que constituye el objeto de estudio de esta tesis.

Adam Smith advertía sobre este tipo de liderazgos adoctrinados y fanatizados:

> ….se imagina que puede organizar a los diferentes miembros de una gran sociedad con la misma desenvoltura con que dispone las piezas en un tablero de ajedrez. No percibe que las piezas del ajedrez carecen de ningún otro principio motriz salvo el que les imprime la mano, y que en el vasto tablero de la sociedad humana cada pieza posee un principio motriz propio, totalmente independiente del que la legislación arbitrariamente elija imponerle.[421]

Este adoctrinamiento también se manifestó en la retórica elocuente utilizada por el ejecutivo federal para presentar sus visiones y promesas como soluciones perfectas, incluso cuando carecían de evidencia o de un análisis detenido. La evaluación objetiva de las políticas y sistemas propuestos debió ser la base para refutar su gestión, en lugar de dejarse llevar por la emoción o la retórica persuasiva. En otras palabras, el discurso político utilizó la persuasión y la ilusión para ganar apoyo popular, a menudo en detrimento de un análisis realista y equilibrado de las

[421] Op, Cit., Smith, Adam, “La teoría de los sentimientos morales,” p. 26.

políticas públicas y de los derechos humanos. Este enfoque ha influido negativamente en la implementación de políticas efectivas para prevenir la violencia contra la mujer en el Estado de México, como se ha demostrado en esta investigación.

Smith también observó que:

> La gran masa del partido resulta generalmente intoxicada con la belleza imaginaria de este sistema ideal, del que no tienen ninguna experiencia pero que les ha sido representado con los colores más deslumbrantes con que ha podido pintarlo la elocuencia de sus líderes.[422]

La génesis de este proyecto residió en el noble propósito de cuestionar el modelo de gobernanza de la derecha, específicamente, la necesidad de un sistema de izquierda que ofreciera una explicación holística a sus ciudadanos sobre las acciones gubernamentales correctas, dada la percepción de que la perspectiva conservadora era frágil y carente de progreso social. Sin embargo, este cuestionamiento perdió rigor científico a medida que la obsesión por adquirir el poder se intensificó con el tiempo. Esto se evidenció claramente en el caso del presidente López Obrador, quien manifestó un afán incansable por asumir el poder desde hace varios sexenios.

Una vez alcanzado este poder, la administración se disocia de la realidad, olvidando incluso el estado de derecho y construyendo su propia versión, utilizando estrategias legislativas para legitimar y legalizar su obsesión intoxicada por un paradigma equivocadamente interpretado. Esto representó una clara estrategia autocrática característica de las derechas conservadoras. Adam Smith lo aclara diciendo:

> Los líderes del partido descontento rara vez dejan de plantear algún razonable plan de reforma que según ellos no sólo suprimirá todos los inconvenientes y aliviará todos los problemas sino que además impedirá definitivamente que reaparezcan en el futuro. Con tal motivo suelen proponer remodelar la Constitución y alterar algunas de las partes más fundamentales del sistema de gobierno bajo el cual los súbditos de un gran imperio han disfrutado quizá de paz, seguridad y hasta gloria durante varios siglos consecutivos.[423]

[422] Ibídem, p. 417.
[423] Ibídem, pp. 416, 417.

El pensamiento político de la 4T destaca la peligrosa rigidez de quienes se aferran a un proyecto político ideal sin considerar las complejas realidades sociales. La arrogancia intelectual de estos representantes del Estado, quienes se consideran a sí mismos sabios y se dejaban llevar por la fascinación de sus propias ideas políticas, ha llevado a desviaciones significativas del proyecto inicial, dificultando la adaptación de las políticas a las cambiantes realidades y necesidades de la sociedad.

Al intentar aplicar su proyecto político de manera absoluta y sin concesiones, la 4T ha generado conflicto y resistencia por parte de aquellos que se veían perjudicados por estas medidas. Su adoctrinamiento fanatizado les hace olvidar sus principios y el bando para el que ejercen el poder, olvidando que las personas tienen sus propios motivos y principios motrices, y que no pueden ser ignorados ni manipulados arbitrariamente por la legislación. La armonía en la sociedad sólo es posible cuando los principios individuales y las políticas coinciden y se alinean en una dirección común. Es por ello que, cuando estos principios son contrapuestos, la sociedad sufre desorden y conflictos. Esta situación se refleja claramente en las dificultades que enfrenta la política criminal para prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar en el Estado de México.

Para establecer una comparación entre las políticas implementadas en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y las de otros países, se pueden analizar las iniciativas como la FVPSA y el Violence Against Women Act (VAWA) en los Estados Unidos, que han demostrado ser efectivas en la prevención y atención de la violencia doméstica y de género.

Por un lado, la FVPSA, promulgada en 1984, es la principal fuente federal de financiamiento dedicada a los programas de refugio y servicios de apoyo para víctimas de violencia doméstica en los Estados Unidos. Más de 1,500 programas locales de violencia doméstica dependen de los fondos de la FVPSA para brindar refugio a más de 1.3 millones de víctimas cada año,[424] proporcionando un lugar

[424] Vid. National Network to End Domestic Violence, “Family Violence Prevention and Services Act,“ trad. propia, USA, 2023, diponible en: *https://nnedv.org/content/family-violence-prevention-services-act/* (fecha de consulta: 12 de julio de 2024), paráfrasis traducida: “Over 1,500 local domestic violence programs rely on FVPSA funding to keep their doors open to more than 1.3 million victims seeking

seguro y recursos vitales para la recuperación y reconstrucción de sus vidas. Estos programas ofrecen servicios esenciales como líneas de crisis y asesoramiento, además de desarrollar programas específicos para comunidades subrepresentadas, incluyendo comunidades indígenas y territorios estadounidenses, asegurando que todas las víctimas reciban la ayuda adecuada según sus contextos culturales y sociales. Asimismo, se mejora la capacidad de respuesta de las agencias de salud y servicios sociales mediante una capacitación y asistencia técnica integral, promoviendo la coordinación comunitaria y asegurando que las agencias estén preparadas para manejar casos de violencia doméstica de manera efectiva y sensible.

Sin embargo, en comparación, según la entrevista con la Mtra. Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, desde el 17 de marzo de 2021 en el Estado de México se han implementado 11 refugios y una casa de transición para víctimas de violencia. A pesar de esto, esta infraestructura es claramente insuficiente para abordar la magnitud del problema en la región. Recordando las altas tasas de violencia contra la mujer en el Estado de México, con una incidencia de 78.7%,[425] la demanda de espacios seguros y servicios de apoyo integral supera con creces la capacidad actual de estos refugios. La insuficiencia de estos recursos se traduce en una protección inadecuada para muchas mujeres, especialmente en áreas rurales y periféricas donde el acceso a dichos servicios es limitado. Esta carencia pone en evidencia la necesidad de una mayor inversión y expansión de la infraestructura estatal para garantizar que todas las mujeres tengan acceso efectivo a una vida libre de violencia.

Además, nuestra entrevistada comentó que en el primer semestre de 2023 se registraron 16,739 denuncias por violencia contra la mujer en el núcleo familiar, pero sólo entre 500 y 600 de estos casos avanzaron a procesos legales. Esto refleja una brecha significativa entre la cantidad de denuncias y los casos que

safety each year. A multi-state study, funded by the National Institute of Justice, shows conclusively that the nation's domestic violence shelters are addressing both the urgent safety needs of victims and their long-term needs, including economic stability."

[425] Op. Cit. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), "Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021", pp. 2, 3.

efectivamente se judicializan, indicando la necesidad de fortalecer los mecanismos de apoyo y seguimiento para asegurar que las denuncias se traduzcan en acciones legales concretas.

Por otro lado, el VAWA, promulgado en 1994, ha sido crucial en la lucha contra la violencia de género en los Estados Unidos. En el año fiscal 2023, el presupuesto del VAWA ascendió a $700 millones de dolares, lo que permitió fortalecer las respuestas comunitarias coordinadas en todo el país y apoyar la implementación de programas innovadores creados por la reautorización de VAWA en 2022.[426] Esta reautorización amplió la jurisdicción especial de los tribunales tribales para cubrir a los perpetradores no nativos de delitos sexuales, abuso infantil, acecho, tráfico sexual y agresiones a oficiales de la ley tribal en tierras tribales. Además, se incluyen programas para mejorar la respuesta del sistema de salud y la formación de examinadores forenses en casos de agresión sexual, implementando enfoques basados en el trauma y centrados en la víctima para las fuerzas del orden.

Finalmente, en comparación, la 4T necesita fortalecer las protecciones legales y la capacitación profesional similar a las iniciativas de VAWA. La integración de medidas educativas y de formación para los encargados de hacer cumplir la ley y los servicios sociales podría mejorar significativamente la respuesta y prevención de la violencia contra la mujer en México.

La perpetuación de políticas basadas en la retórica y no en la evidencia podría llevar a un aumento de la desconfianza pública y la ineficacia gubernamental en áreas críticas como la economía y la educación. La falta de adaptabilidad y la resistencia a la crítica constructiva perpetúan un ciclo de políticas fallidas que afectan negativamente a las generaciones futuras.

Incorporar elementos exitosos de FVPSA y VAWA podría transformar positivamente la política criminal y de prevención de la violencia contra la mujer en

[426] Vid. U. S, Department of Justice, “Violence Against Women Act: Milestones Achieved and the Road Ahead,” trad. propia, USA, Office on Violence Against Women (OVW), 2023, disponible en: *https://www.justice.gov/ovw/blog/violence-against-women-act-milestones-achieved-and-road-ahead* (fecha de consulta: 12 de julio de 2024), paráfrasis traducida: “OVW is currently in the process of awarding grants for the 2023 fiscal year, operating with an unprecedented budget of $700 million. This robust funding enables the office not only to strengthen coordinated community responses across the nation, but also to implement new and innovative programs created by VAWA 2022.”

el núcleo familiar en México, alineando las estrategias con enfoques basados en evidencia y recursos adecuados para proteger y apoyar a las víctimas de manera efectiva.

4.3.2 Politización

La politización también desempeña un papel fundamental en la comprensión de la crítica tridimensional de la política criminal para la PCPVCMNF en el Estado de México. Este fenómeno, identificado como el segundo factor que contribuye a la bizarra política en México, subraya la importancia de examinar su origen y trayectoria. Por consiguiente, tal análisis no sólo ilumina el significado contemporáneo de la politización, sino que también revela el impacto significativo que las estrategias políticas criminológicas ejercen sobre la estructuración de las agendas públicas y la configuración del control del crimen. Por lo tanto, comprender la politización es clave para identificar cómo y por qué determinados temas o ideas adquirieron una carga política que, a su vez, intensificó las posturas radicales dentro del espectro político, afectando directamente la efectividad de las políticas de prevención de la violencia contra la mujer en el Estado de México.

En este contexto, es importante mencionar que la etimología de *politización* remonta, al igual que la palabra *política*, a raíces griegas; *polis*, que significa ciudad o comunidad ciudadana, refiriéndose al gobierno de estas comunidades. La terminación *ización* sugiere un proceso o transformación, implicando en este contexto el acto de conferir un carácter político a una idea, tema o individuo. La primera aparición documentada del término en lengua española data del siglo XIX, periodo caracterizado por intensas transformaciones políticas y sociales que propiciaron un terreno fértil para la emergencia de nuevas terminologías políticas.

A continuación, la relevancia de la *politización* creció significativamente en el contexto de las revoluciones liberales del siglo XIX, donde la participación ciudadana en la política comenzó a ser vista como un elemento fundamental para la legitimidad de los sistemas políticos. Documentos históricos de la época, como los manifiestos políticos y las constituciones nacionales, comenzaron a utilizar este término para describir el proceso de involucramiento político de la ciudadanía y la importancia de la deliberación pública en la construcción de la esfera política.

Un ejemplo ilustrativo de la aplicación de la educación política se observa en los discursos de líderes históricos de América Latina, tales como Simón Bolívar. Este último, a través de su *Carta de Jamaica* de 1815, enfatizó la necesidad de politizar a la población, entendiendo por esto el proceso de educarla y comprometerla activamente con los asuntos del Estado. Bolívar sostenía que la educación política es fundamental para el desarrollo de un ciudadano consciente y participativo,[427] evidenciando así como la politización fue conceptualizada como un mecanismo de emancipación y empoderamiento ciudadano.

Conservadora e irónicamente, en la actualidad, la politización de las políticas públicas se erige como una de las principales barreras para su implementación efectiva y eficiente. La esencia de este problema radica en que la inclusión de intereses particulares y agendas políticas en el proceso de formulación y ejecución de políticas distorsiona sus objetivos iniciales, comprometiendo su capacidad para beneficiar al bien común. Este fenómeno es particularmente relevante en el contexto de la política criminal para la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar en el Estado de México, ya que la politización ha influido negativamente en la efectividad de estas políticas.

De hecho, la politización transforma las políticas en campos de batalla ideológicos, priorizando los intereses económicos sobre el análisis objetivo de las necesidades y soluciones. Este fenómeno se ejemplifica con la prisión preventiva, una figura jurídica diseñada para administrar justicia, que, influenciada por demandas sociales extremas, generó debates incluso en instituciones internacionales, pidiendo su revocación.[428] Los datos empíricos sobre la prisión preventiva, tratados en el tercer capítulo de esta tesis, revelan que más de la mitad de los individuos privados de libertad sin sentencia estaban bajo prisión preventiva

[427] Vid. Bolívar, Simón, "Carta de Jamaica," México, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2021, pp. 80,81, disponible en: *https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Carta_de_jamaica%20.pdf* (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

[428] Vid. Stephanie Brewer, "Corte IDH ordena a México eliminar arraigo y modificar prisión preventiva," Washington Office on Latin America en linea, 2023, disponible en: *https://www.wola.org/es/analisis/corte-idh-mexico-eliminar-arraigo-prision-preventiva/* (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

oficiosa, específicamente el 50.2%.[429] Esta cifra no sólo destaca la prevalencia de una política criminológica desmedida, sino que también plantea serias interrogantes sobre la justificación y proporcionalidad de estas detenciones.

Derivada de la sobrepoblación carcelaria, también se pueden citar problemas sistémicos en materia de derechos humanos. La aplicación politizada de la prisión preventiva, independientemente de si es oficiosa o justificada, no sólo infringe los derechos individuales, sino que también conduce a profundas disfunciones sistémicas. Esta estrategia agrava la sobrepoblación carcelaria, resultando en condiciones de vida inhumanas para los detenidos. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cifra de 92,820 reclusos excede ampliamente la capacidad instalada de las prisiones.[430] La falta de acceso a recursos básicos como agua potable, atención médica adecuada y servicios de saneamiento básico erosiona la dignidad y los derechos humanos esenciales de los internos.

Por último, la sobrepoblación carcelaria también tiene un impacto negativo significativo en la reinserción social, ya que merma la calidad y disponibilidad de programas de rehabilitación. La ausencia de educación adecuada, capacitación laboral y acceso a servicios de salud son obstáculos que dificultan la reintegración efectiva de los reclusos a la sociedad, incrementando las probabilidades de reincidencia y perpetuando el ciclo de encarcelamiento. Además, la violencia se convierte en un problema endémico dentro de las prisiones, exacerbada por las condiciones de vida degradantes y la escasez de recursos, lo cual representa un riesgo no sólo para los internos, sino también para el personal penitenciario.

4.3.3. El paradigma neoliberal mexicano ¿capitalismo?

El término *capitalismo* tiene sus raíces en el siglo XIX, siendo formalizado por Karl Marx en su obra *El Capital*.[431] Marx, en su análisis crítico del libre mercado, lo

[429] Vid. Op. Cit., INEGI, "Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Federal y Estatal (CNSIPEE-F) 2023," p. 1.
[430] Vid. Op. Cit., SSPC, "Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional," p. 11.
[431] Vid. Marx, Karl, "El capital: crítica de la economía política," Argentina, Siglo XXI de España Editores, S.A., 2007, disponible en: https://books.google.com/books/about/El_capital.html?id=tOa9WfF1S14C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1 (fecha de consulta: 1 de agosto de 2024).

describe como un sistema económico caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del trabajo asalariado. Sin embargo, a lo largo de los años, la neolengua ha utilizado este concepto, transformando la crítica marxista en una perversa estrategia de control social. Este fenómeno se manifiesta en la asociación errónea y simplista entre el análisis original de Marx de 1867 y el paradigma neoliberal norteamericano contemporáneo.

La neolengua, promovida por intereses económicos y políticos, ha utilizado la crítica marxista haciendo creer a la población que ambas perspectivas son equivalentes, reflejando la comprensión de las dinámicas de poder y explotación que Marx expuso en su tiempo. Al reconocer el capitalismo como un sistema intrínsecamente explotador, se ha impuesto una narrativa que celebra la versión neoliberal mexicana como un paradigma desigual, sin progreso económico, e injusto. Esta emulación semántica no sólo revive el análisis crítico de Marx, sino que también refuerza el error de interpretación que lleva al Estado mexicano a aplicar una versión equívoca de la versión norteamericana, lo que al final nos ha llevado a vivir en una realidad invertida.

En síntesis, el tercer factor que descompone y enferma la política en México es la interpretación crítica marxista del modelo económico de libre mercado en el vigente paradigma neoliberal norteamericano. Una vez identificado este error, el segundo error construido sobre este primero se presenta como una contradicción para el actual gobierno de la 4T que adopta una postura progresista. Contrariamente a las expectativas progresistas de izquierda, la promesa de prosperidad y equidad, supuestamente garantizada por la lucha contra esta versión mexicana del paradigma neoliberal, no se ha materializado. En otras palabras, la izquierda se ha comprometido a combatir dicha corriente y a lograr efectivamente los objetivos de disminuir las desigualdades, tal como lo pronostica el paradigma neoliberal norteamericano. Sin embargo, este problema persiste, y la explicación a esta continua disparidad se detallará a continuación.

De inicio, el neoliberalismo norteamericano, catalogado como un paradigma híbrido, ecléctico o de centro, arraiga sus fundamentos en la prestigiosa Escuela de Chicago, teniendo en Milton Friedman su principal exponente. Este paradigma

propone un ambicioso objetivo: superar incluso las barreras de propiedad privada que resguardan a las grandes corporaciones, con el fin de evitar la consolidación de monopolios.

La propuesta neoliberal proclamada por la Escuela de Chicago emerge como una respuesta orgánica para contrarrestar las tendencias autocráticas que se insinuaban en medio de la diversidad de ofertas del libre mercado criticado por Marx. Adam Smith observó que "El interés de los empresarios siempre es ensanchar el mercado pero estrechar la competencia".[432] Su esencia radica en fortalecer la libertad de elección en relación a productos y servicios, fomentando, a su vez, la procedencia de estas opciones desde distintas empresas fiscalizadas por el Estado. En resumidas palabras, se plantea la gestión de un auténtico mercado competitivo liderado por el Estado.

Así entonces, el neoliberalismo norteamericano, asociado con políticas tanto de libre mercado promovidas por corrientes de derecha (*Laissez faire*), como por políticas socialistas promovidas por corrientes de izquierda (*Welfare State*),[433] se fundamenta en la promoción de la competencia, la libertad individual y la reducción de la intervención estatal en la economía, mas no en lo social. Este enfoque incluye la licitación de empresas públicas y la liberalización de los mercados como medios para fomentar la eficiencia económica y el crecimiento social. Contrario a esto, la actual intervención estatal de supuesta izquierda, en el primer nivel para prevenir la violencia contra la mujer, no se enfoca en ofrecer soluciones integrales que salvaguarden el interés superior de la niñez y el derecho humano a la educación implícito en este mismo, sino mediante becas, lo cual garantiza la no intervención estatal, permitiendo las condiciones para que el libre mercado opere sin distorsiones.

---

[432] Smith, Adam. "La riqueza de las naciones," trad. de Carlos Rodríguez Braun, Madrid, Titivillus, s.f., p. 195, disponible en: *https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/1%20La%20riqueza%20de%20las%20Adam%20Smith.pdf* (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

[433] El Welfare State, conocido en español como Estado de Bienestar, es un concepto de organización política y social donde el Estado asume la responsabilidad de garantizar el bienestar a sus ciudadanos. Esto se realiza a través de una serie de políticas y programas destinados a asegurar que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a ciertos servicios básicos y oportunidades.

Las estrategias actuales para mitigar la pobreza y asegurar el respeto, protección, y garantía de los derechos humanos, aunque se presentan bajo una supuesta orientación de izquierda del *Welfare State*, en realidad, se alinean más estrechamente con posturas del *Laissez faire*, generando una contradicción con su ideología declarada. Históricamente, la política de izquierda ha promovido una mayor regulación económica y un rol más activo del Estado en la redistribución de la riqueza y la provisión de servicios públicos, con el objetivo de combatir la pobreza y la desigualdad. Esta discrepancia revela y desenmascara la verdadera ideología de la 4T.

Es medular entender el neoliberalismo mexicano como un paradigma que, en su esencia, busca minimizar la intervención estatal en favor de una mayor libertad de mercado, lo cual puede conducir a debates sobre su impacto en la cohesión social, la equidad y el ejercicio de los derechos humanos. La correcta explicación de estos conceptos permite una comprensión más precisa del debate contemporáneo sobre su postura y sus efectos equívocos en la sociedad.

En este contexto, es necesario aclarar como esta equívoca interpretación del modelo neoliberal que el Estado norteamericano gestiona dentro de sus fronteras es impuesta de forma irónica por este mismo, e introducida en caso particular de México con fines de control. Aguilera Gómez señala que el Consenso de Washington (CW), un conjunto de políticas económicas promovidas internacionalmente, favoreció la libertad económica privada y relegó al Estado a un rol pasivo, en contraposición a los mandatos de la CPEUM que asigna deberes económicos activos al gobierno.[434] Este enfoque no sólo subvierte los principios democráticos y constitucionales, sino que también introduce un planteamiento involucionado de neoliberalismo norteamericano, promoviendo un mercantilismo que exacerba la desigualdad socioeconómica.

El CW, diseñado en 1989 por el economista John Williamson, marcó un punto de inflexión en la política económica de América Latina. Formulado durante una conferencia del Instituto Internacional de Economía, el CW consistía en diez

[434] Aguilera Gómez, Manuel, "México: ¿Neoliberalismo de Izquierda? Las Profundas Manifestaciones de la Crisis," Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021, p. 42, disponible en: *http://132.248.170.14/publicaciones/CID/C26.pdf* (fecha de consulta: 17 de agosto de 2024).

reformas clave que, según Williamson, eran esenciales para revitalizar las economías de la región.[435] Estas políticas se convirtieron en los pilares de las condiciones impuestas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, lo que les permitió ejercer una influencia considerable sobre las decisiones económicas de los países latinoamericanos necesitados de financiamiento.

Sin embargo, el CW plantea una paradoja evidente cuando se compara con las políticas internas de Estados Unidos. Mientras que en América Latina se promovió la reducción drástica de la intervención estatal, la liberalización del comercio y la privatización de activos públicos, en Estados Unidos se adoptó un enfoque diferente. Lejos de seguir un modelo de mínima intervención estatal, Estados Unidos ha mantenido y, en algunos casos, incrementado el rol del Estado en la regulación de sectores clave, particularmente durante crisis económicas como la de 2008.

En este contexto, Rubí Martínez Rangel y Ernesto Soto Reyes Garmendia señalan que las políticas del CW, impuestas en América Latina, priorizaban los intereses de las potencias económicas, especialmente Estados Unidos.[436] Estas políticas debilitaron la capacidad de los Estados latinoamericanos para regular sus economías, imponiendo un modelo económico que contrastaba fuertemente con las prácticas internas del propio Estados Unidos. Este doble estándar evidencia el uso

[435] Vid. Williamson, John, "A Short History of the Washington Consensus," trad. propia, New York, Initiative for Policy Dialogue, 2007, p. 2, disponible en: https://policydialogue.org/files/publications/papers/Ch_2.pdf (fecha de consulta: 19 de Agosto de 2024), paráfrasis traducida: "The term 'Washington Consensus' was coined in 1989. The first written usage was in my background paper for a conference that the Institute for International Economics convened in order to examine the extent to which the old ideas of development economics that had governed Latin American economic policy since the 1950s were being swept aside by the set of ideas that had long been accepted as appropriate within the OECD. In order to try and ensure that the background papers for that conference dealt with a common set of issues, I made a list of ten policies that I thought more or less everyone in Washington would agree were needed more or less everywhere in Latin America, and labeled this the 'Washington Consensus'. Little did it occur to me that fifteen years later, I would be asked to write about the history of a term that had become the center of fierce ideological controversy."

[436] Rubí Martínez Rangel y Ernesto Soto Reyes Garmendia, "El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina," México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2012, pp. 49, 50, disponible en: *https://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n37/n37a3.pdf* (fecha de consulta: 17 de Agosto de 2024).

del CW como una herramienta de hegemonía económica, más que como un modelo coherente de política neoliberal.

> Hoy es claro que el Consenso de Washington ha definido una etapa exitosa de la globalización y para las prácticas neoliberales, pero desalentadora para muchos países de la región latinoamericana, que no han logrado el auge económico prometido tanto por los organismos internacionales como por el decálogo del CW, aun en los casos en los que se han puesto en marcha puntualmente las reformas de política económica recomendadas.[437]

Para evidenciar el fortalecimiento del Estado norteamericano a través de esta estrategia hegemónica, es crucial examinar su rol durante la crisis financiera de 2008. En ese contexto, el gobierno de Estados Unidos asumió un papel central en la regulación y estabilización de sectores clave de la economía. Joseph Stiglitz, en *The Price of Inequality*, destaca que las intervenciones gubernamentales, como los rescates financieros, fueron fundamentales para evitar un colapso económico total.[438] Sin embargo, Stiglitz critica que estas intervenciones carecieron de condiciones estrictas, "No se impusieron condiciones a las instituciones financieras que recibieron fondos. No hubo condiciones para mantener el flujo de préstamos, ni para no usar el dinero en el pago de bonos. Gran parte del dinero dado a los bancos se destinó a bonos, no a la recapitalización bancaria."[439] Lo que permitió que los bancos beneficiados continuarán con prácticas arriesgadas sin asumir las responsabilidades necesarias.

> El hecho es que no ha habido ninguna economía grande y exitosa en la que el gobierno no haya jugado un papel importante, y en los países con el crecimiento más rápido (como China) y en aquellos con los niveles de vida más altos (como los de Escandinavia), el gobierno desempeña un papel muy importante. Sin embargo, la ideología predominante en la derecha es tan fuerte que sigue habiendo un impulso hacia un gobierno pequeño, hacia la contratación externa de servicios gubernamentales y la privatización, e incluso una resistencia a la regulación.[440]

---

[437] Ídem.

[438] Vid. Stiglitz, Joseph E., “The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future,” trad. propia, New York, Norton & Company, 2012, p. 152, disponible en: *https://resistir.info/livros/stiglitz_the_price_of_inequality.pdf* (fecha de consulta: 17 de Agosto de 2024), paráfrasis traducida: "In the great bailout of the Great Recession, one corporation alone, AIG, got more than $150 billion—more than was spent on welfare to the poor from 1990 to 2006."

[439] Ibídem, p. 198, cita traducida: "No conditions were imposed on the financial institutions receiving funds. No conditions to maintain the flow of lending, no conditions not to use the money to pay bonuses. Much of the money given to the banks went to bonuses, not to bank recapitalization."

[440] Ibídem, p. 148, cita traducida: "The fact of the matter is that there has been no successful large economy in which the government has not played an important role, and in the countries with the

Esta contradicción revela cómo el CW no sólo funcionó como un mecanismo para consolidar la hegemonía de Estados Unidos en la región, sino que también tergiversó el propio paradigma neoliberal al que supuestamente adhería. En lugar de exportar un modelo genuino neoliberal, se utilizó un conjunto de políticas que debilitaron la autonomía económica de los países latinoamericanos, mientras que en casa, Estados Unidos continuaba implementando políticas que favorecen la intervención estatal en áreas estratégicas, evidenciando así una doble moral en la aplicación del neoliberalismo.

Como evidencia de esta versión neoliberal, se ha observado que, en el primer nivel preventivo de la violencia contra la mujer, existen condiciones infraestructurales paupérrimas que comprometen el derecho humano a la educación. Las becas económicas se utilizan como mecanismos discursivos para minimizar y justificar la limitada intervención estatal. Estos mecanismos, pilares del interno neoliberalismo norteamericano, han sido eclipsados, contribuyendo no sólo al aumento de la desigualdad, sino que también presentan desafíos significativos para la protección de los derechos humanos.

Lejos de derivarse de ideologías de izquierda, y luchar contra esta versión impuesta por el CW, estas políticas reflejan la aplicación de principios liberales tradicionalmente asociados con corrientes conservadoras de derecha. Tal enfoque ha tenido consecuencias profundas en la estructura social mexicana, exacerbando la desigualdad y comprometiendo la protección efectiva de los derechos humanos.

Para aclarar las contradicciones entre el discurso progresista retórico de la 4T y la práctica conservadora política real, resulta esclarecedor analizar y comparar las propuestas de Milton Friedman sobre la mitigación de la miseria y la marginación con las políticas implementadas actualmente. Friedman propone un plan de bonos o vales, argumentando que las transferencias directas de dinero a individuos en situación de pobreza fomentarían una mayor eficiencia y elección personal.[441] Estas

most rapid growth (such as China) and in those with the highest standards of living (such as those in Scandinavia), the government plays a very important role. Yet the prevailing ideology on the right is so strong that there continues to be a push for a small government, for contracting out government services and privatization and even a resistance to regulation."

[441] Vid. Friedman, Milton, Capitalismo y Libertad, trad. de Cristina Casabón, España, Deusto, 2022, pp. 253- 260.

transferencias, realizadas mediante bonos o vales, permitirían a los beneficiarios adquirir bienes y servicios en el mercado privado. Esta iniciativa, conocida como el plan de *Vouchers*, ha sido adaptada por el gobierno mexicano actual en forma de becas económicas destinadas a asegurar el derecho a la educación. Este enfoque busca ofrecer una solución práctica a los desafíos del bienestar social, evidenciando un intento por aplicar principios de libre mercado en la esfera de los servicios públicos, con el objetivo de adoptar, en términos dialécticos hegelianos, la síntesis entre el *Laissez faire* (tesis) y el *Welfare State* (antítesis): el neoliberalismo.

Sin embargo, y gracias al CW, la interpretación realizada por el gobierno mexicano es deficiente y está mal gestionada. En cuanto a la deficiencia, esto implica que la política carece del imperativo categórico kantiano, que es salvaguardar los derechos fundamentales de forma universal. Respecto a la mala gestión, como se analiza en el tercer capítulo, estas becas se otorgan de forma general a todos los estudiantes, sin considerar si se encuentran en situaciones especiales. Por lo tanto, la aplicación actual no alcanza una verdadera síntesis dialéctica, ya que omite el 50% del concepto del Estado de Bienestar.

4.3.3.1. Evidencias de mal interpretación

En este apartado, se presentan y analizan dos ejemplos concretos que ilustran la versión impuesta por el CW del neoliberalismo en las políticas públicas implementadas en México. El ocultamiento del paradigma interno norteamericano ha llevado a la adopción de estrategias que, en lugar de solucionar problemas estructurales, perpetúan y agravan las condiciones de desigualdad y violencia contra la mujer no sólo en el Estado de México sino en todo el país.

Primero, se examina la propuesta de vaucherismo defendida por Milton Friedman, la cual ha sido implementada en México con la intención de combatir la pobreza y la exclusión social. A pesar de su aparente promesa de optimizar la distribución de recursos, un análisis crítico revela que, sin una implementación integral que trascienda la asistencia económica y que priorice los derechos fundamentales, estas políticas resultan ineficaces. Además, se observa cómo las políticas actuales, aunque en apariencia progresistas, reflejan una continuidad con

estrategias de derecha conservadora, lo que demuestra una profunda mala interpretación del enfoque neoliberal norteamericano.

Segundo, se analiza la reciente propuesta de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo de integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Este enfoque, defendido como una medida necesaria para garantizar la seguridad y la paz, en realidad representa un retorno a un modelo de Estado policial tradicional. Este análisis mostrará cómo estas políticas, al centralizar el poder y perpetuar un control autoritario, erosionan los principios democráticos y socavan la confianza ciudadana, reflejando nuevamente una interpretación errónea del paradigma neoliberal. Estos ejemplos demuestran cómo la adopción y adaptación que el CW del neoliberalismo, resultan en políticas que, lejos de solucionar, perpetúan las problemáticas sociales y económicas que buscan abordar.

4.3.3.1.1. Vaucherismo

La propuesta de Milton Friedman sobre el uso de bonos o vales para combatir la pobreza y la exclusión social requiere un análisis meticuloso. En primer lugar, a primera vista, esta estrategia parece prometedora para optimizar la distribución de los recursos. No obstante, un examen más profundo, especialmente al compararla con las políticas propuestas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en su candidatura presidencial,[442] revela continuidades con las estrategias de derecha conservadora del actual ejecutivo federal. De hecho, estas estrategias, previamente apoyadas por la entonces senadora Xóchitl Gálvez,[443] fueron formalizadas en la CPEUM (Artículo 4, párrafos 15 y 16). Aunque la intención detrás de ambos enfoques es digna de elogio, un análisis crítico indica que, sin una comprensión completa del interno neoliberalismo norteamericano que trascienda la asistencia económica, tales como becas, y que priorice una promoción integral y el respeto por los derechos fundamentales establecidos en la CPEUM, estos esfuerzos podrían resultar

[442] Vid. Sheinbaum, Claudia, “Mi sueño es que todos los niños y niñas que van a escuela pública tengan una beca,” [video], 21 de noviembre de 2023, 0:15 min., disponible en: *https://www.youtube.com/watch?v=D4BloX17z6w* (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).
[443] Vid. Xochitl Galvez, “Quiero que salir adelante sea mucho más fácil,” [video], 30 de diciembre de 2023, 0:49 min, disponible en: *https://www.youtube.com/watch?v=dwR1_Mg1Jb4* (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

insuficientes. Por lo tanto, se necesita una perspectiva integral deontológica que primero salvaguarde los derechos humanos y promueva un auténtico ESDD para que las políticas de soporte económico generen un impacto significativo y duradero en la reducción de la pobreza y la marginación.

En segundo lugar, las políticas implementadas por la 4T, destinadas a garantizar el derecho a la educación, se caracterizan por su enfoque conservador de derecha, su naturaleza temporal y su limitada efectividad. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 (PPEFEF 2024) revela una inversión significativa en políticas de libre mercado conservador, destinando un total de 89,695.7 millones de pesos a programas de becas. Es decir, estos programas, diseñados para promover la continuidad educativa de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, incluyen el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro y el Programa de Becas Elisa Acuña, con asignaciones presupuestarias de 36,607.4, 39,366.6, 11,701.1 y 2,020.6 millones de pesos, respectivamente.[444] Sin embargo, estas políticas no abordan de manera integral los desafíos asociados a la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, que son causantes directos de la deserción escolar y el analfabetismo, lo que se traduce en el primer nivel preventivo de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, evidenciando su limitada efectividad.

Por ejemplo, durante el ciclo escolar 2022/2023, la tasa de deserción en la Educación Media Superior alcanzó un preocupante 8.7%, seguida por la Educación Secundaria con un 2.7% y la Educación Primaria con un 0.3%, según datos del INEGI.[445] Además, la existencia de más de 4 millones de personas mayores de 15

[444] Vid. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2024, pp. 45, 46, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1lEgNUKGY7jRCqtVybRakn8PGsUdnn8Yk/view?usp=sharing (*fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

[445] Vid. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Tasa de abandono escolar por entidad federativa según nivel educativo, ciclos escolares seleccionados de 2000/2001 a 2022/2023," México, INEGI, disponible en: *https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educacion_11_c6aa7c65-4d89-4eaf-972e-431727fc686d* (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

años analfabetas en México evidencia una profunda ineficacia estratégica.[446] En este contexto, estos datos resaltan el cuestionamiento de su eficacia y la necesidad de abordar estas problemáticas desde una perspectiva integral y no sólo superficialmente con becas económicas.

Por otro lado, la implementación de estas políticas conservadoras de derecha por parte de una administración de izquierda, bajo la creencia de que la falta de acceso equitativo a la educación —exacerbada por condiciones de vulnerabilidad como la pobreza— puede ser abordada meramente con becas económicas, incurre en dos errores fundamentales. En primer lugar, subestima la magnitud del desafío; las estadísticas del INEGI, al 3 de octubre de 2023, muestran que el 36.3% de la población en México se encuentra en situación de pobreza,[447] lo que indica la extensión del problema y la equívoca forma de abordarlo.

En segundo lugar, olvida que el derecho a la educación es una función prevista en la CPEUM, es decir, una obligación del Estado que ya debería estar cubierta y no una tarea opcional que trate de subsanar con programas sociales de apoyo económico. Trabajar en el derecho a la educación y en el interés superior de la niñez con programas que les cubren con una cuota económica sus derechos fundamentales es contradictorio a la supuesta ideología de izquierda/progresista proclamada. Además, al transferir sus responsabilidades inherentes y buscar cubrir los derechos fundamentales a través de una mera cuota económica, el gobierno adopta una postura váucherista mal interpretada. Actualmente, los niños, niñas y jóvenes beneficiados pueden usar su beca para elegir libremente en qué derecho humano, y que podría ser un factor para su deserción escolar, usarla.

En consecuencia, es crucial implementar contrapesos que superen la simple asistencia económica, estrategias realmente progresistas que se enfoquen en una

---

[446] Vid. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Población de 15 años y más por entidad federativa según condición de alfabetismo,” [programas de información en linea], México, INEGI 2020, disponible en: *https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educacion_02_fa5c35ea-9385-41f0-86df-bf2bbfc929e3* (fecha de consulta: 8 de julio de 2024).

[447] Vid. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema,” [sistema de consulta en linea], México, INEGI, 2023, disponible en: *https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6200116867&tm=8#D6200116867#D6200116870* (fecha de consulta: 8 de julio de 2023).

promoción integral y el respeto por el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, tal como están estipulados en el cuarto párrafo del Artículo tercero de la CPEUM. Para lograr que las políticas de apoyo económico, como las becas, tengan un impacto significativo y sostenible para prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, resulta imprescindible adoptar primero una visión holística y deontológica. Esta visión, de entrada, debe garantizar de manera empírica y universal los derechos fundamentales que la CPEUM prevé, es decir, propiciar la efectiva realización de un ESDD que asegure la aplicación de los derechos fundamentales que el interés superior de la niñez conecta con aquellas otras prerrogativas previstas en el Artículo cuarto de la CPEUM según el principio de interdependencia e interrelación.

4.3.3.1.2 Estado policial tradicional

Recientemente, la presidenta electa la Dr. Claudia Sheinbaum Pardo ha propuesto y realizado varias acciones en relación a la Guardia Nacional. Desde su campaña electoral, Sheinbaum afirmó su intención de consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).[448] Esta medida busca mantener la seguridad y la paz en el país, argumentando que en muchas regiones de México, la retirada del Ejército dejaría a las comunidades desprotegidas. Sheinbaum defiende que la integración de la Guardia Nacional con el Ejército no constituye una militarización de la seguridad pública, sino una medida necesaria para fortalecer las capacidades de esta institución. Además, resaltó la disminución en los índices de homicidios y delitos de alto impacto bajo las políticas de seguridad actuales, y se comprometió a continuar esta tendencia con su propia administración.

Formalmente, la futura dinámica política en México revela una interpretación de derecha conservadora que parece contradecir sus fundamentos progresistas

[448] Vid. SUN, "Así es el plan de Sheinbaum para consolidar a la GN como parte de la Sedena," *Periodico digital: INFORMADOR.MX,* 24 de junio de 2024, disponible en: *https://www.informador.mx/mexico/Asi-es-el-plan-de-Sheinbaum-para-consolidar-a-la-Guadia-Nacional-como-parte-de-la-Sedena-20240624-0063.html* (fecha de consulta: 9 de julio de 2024).

originales. La próxima administración liderada por la Dra. Sheinbaum, considerada como la continuación de la 4T, refuerza esta perspectiva. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado una inclinación hacia la centralización del poder, evidenciando una desconexión alarmante con la realidad nacional. Este enfoque en la formulación de políticas preventivas de segundo nivel hacia la violencia contra la mujer ha sido la razón por la que evaluamos críticamente su carácter autoritario. Estas características se alinean más estrechamente con ideologías asociadas a la derecha conservadora, indicando una involución hacia un modelo de Estado policial que hace años ya se considera obsoleto.

Históricamente, los Estados policiales han demostrado ser una manifestación clara de políticas radicales de derecha, extendiendo su modelo más allá de la función básica de preservar el orden y la seguridad. Ejemplos históricos como el régimen de Franco en España o la dictadura de Pinochet en Chile ilustran cómo el control autoritario se extiende para suprimir disidencias y consolidar el poder central.

Michel Foucault destaca que la policía no sólo mantiene el orden, sino que también juega un papel crucial en la producción y sostenimiento de un sistema de control social.[449] Este papel se evidencia en incontables casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y disidentes políticos, documentados a lo largo de la historia y más recientemente en México. La implementación del *Operativo Violeta* en Cuautitlán Izcalli, o la cumplimentación de las medidas de protección judicial, donde la Guardia Nacional y la Policía de Género han intervenido para disuadir la violencia contra las mujeres, ilustra cómo las fuerzas de seguridad pueden ser utilizadas para abordar problemas de violencia contra la mujer por razones de género. Sin embargo, estas intervenciones también revelan cómo, en ocasiones, las fuerzas de seguridad perpetúan una sociedad bajo vigilancia constante, restringiendo libertades y derechos. Este incidente no sólo atenta contra los derechos individuales, sino que también refleja un Estado inclinado hacia el control, característico de políticas conservadoras de derecha.

[449] Vid. Foucault, Michel, “Vigilar y Castigar: Nacimiento de la Prisión,” trad. de Aurelio Garzón del Camino, Argentina, Siglo Veintiuno, 2002, pp. 70-96, disponible en: *https://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf* (fecha de consulta: 9 de julio de 2024).

La implementación de políticas de mano dura por parte de la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad pública deteriora la relación de confianza entre el Estado y sus ciudadanos. Michel Foucault, en su análisis sobre los mecanismos de control social, sostiene que la policía posee la capacidad de influir y regular las conductas individuales dentro de la sociedad.[450] No obstante, el recurso al uso excesivo de la fuerza y a prácticas represivas para acallar voces disidentes instaura un ambiente de desconfianza y temor entre la población. Esta erosión de la confianza representa un obstáculo significativo para el avance hacia una sociedad genuinamente democrática, en la cual se debe garantizar a los ciudadanos la libertad de expresar sus opiniones y participar de manera activa en los procesos de toma de decisiones.

A pesar de que la 4T justifica estas políticas como necesarias para mantener el orden y combatir la criminalidad, los datos sugieren que estas medidas están erosionando los principios democráticos fundamentales. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 reporta que “En el periodo marzo-abril de 2023, el 74.6% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su entidad federativa era inseguro debido a la delincuencia.”[451] Esto sugiere que, a pesar de los esfuerzos por incrementar la presencia policial y militar, la percepción de seguridad no ha mejorado significativamente, sino que ha contribuido a un aumento de la desconfianza hacia las instituciones de seguridad. Asimismo, el Índice de Paz México 2024 muestra que, aunque ha habido una reducción en los homicidios, la violencia política y contra policías ha incrementado, reflejando un entorno de tensión y polarización política.[452] Estos datos indican que el aumento de la represión y la vigilancia no ha resultado en una mejora significativa

[450] Vid. Ibídem, pp. 89, 90.
[451] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023,” Comunicado de Prensa Núm. 546/23, México, INEGI, 2023, p. 2, disponible en: *https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENVIPE/ENVIPE_23.pdf* (fecha de consulta: 9 de julio de 2024).
[452] Vid. Instituto para la Economía y la Paz, "Resumen Índice de Paz México 2024," México, Institude for Economics and Peace, 2024, p. 3, disponible en: *https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2024/05/MPI-ESP-2024-briefing-web.pdf (*fecha de consulta: 9 de julio de 2024).

de la seguridad pública, sino en un aumento de la tensión social y la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto Público Federal para la Función de Seguridad Pública (PPPFFSP) del periodo 2023-2024, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un incremento en el gasto para seguridad pública a 190,595.68 mil millones de pesos (MMDP), lo que representó un aumento del 4.77% respecto al año anterior, equivalente a 8,681.92 MMDP .[453] Este aumento es particularmente notable en el presupuesto destinado a la Guardia Nacional, que se elevó a 70,767.43 MMDP. Dicha asignación se desglosa en 37,810.50 MMDP para operaciones de prevención, investigación y persecución del delito; 23,272.73 MMDP para infraestructura; y 9,684.20 MMDP para actividades de apoyo administrativo.[454] Este significativo incremento presupuestal hacia la Guardia Nacional evidencia el fortalecimiento de un Estado policial, lo cual suscita interrogantes acerca de la congruencia de esta administración, que se autodenominaba progresista, con sus prioridades declaradas.

En resumen, las recientes acciones de la candidata electa a la presidencia, la Dr. Claudia Sheinbaum Pardo de integrar la Guardia Nacional a la SEDENA reflejan un giro hacia un modelo autoritario de seguridad pública, evocando la figura de un Estado policial tradicional. Este enfoque, aunque justificado como necesario para la paz y seguridad, erosiona principios democráticos y genera desconfianza ciudadana, evidenciada en datos de la ENVIPE 2023 y el Índice de Paz México 2024. El significativo incremento presupuestal a la Guardia Nacional cuestiona la congruencia de una administración que se autodenominaba progresista. Este Estado policial tradicional en México resulta del adoctrinamiento fanatizado, la politización y la interpretación impuesta por el CW del paradigma neoliberal, perpetuando un control autoritario disfrazado de seguridad pública.

---

[453] Vid. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024,” México, SHCP, p. 12, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1lEgNUKGY7jRCqtVybRakn8PGsUdnn8Yk/view?usp=sharing* (fecha de consulta: 9 de julio de 2024).
[454] Vid. Ibídem, p. 53.

4.3.4 Mediatización

La influencia de los medios masivos tecnológicos de comunicación desempeña un rol fundamental en la bizarra política mexicana contemporánea. Estos medios, por su capacidad para diseminar tanto información legítima como desinformación a velocidades sin precedentes, propician la formación de cámaras de eco. Dichas cámaras intensifican las convicciones preexistentes y fomentan la difusión de teorías conspirativas, conduciendo frecuentemente a una polarización más profunda de las posturas políticas.[455]

Específicamente, las redes sociales ejercen un impacto significativo en este fenómeno. Tendiendo a dar mayor visibilidad a las opiniones extremistas, estas plataformas polarizan las perspectivas y crean entornos que perpetúan y refuerzan las ideologías. En un ambiente de polarización política, en lugar de admitir la presencia de opiniones distintas o conflictivas y valorar la pluralidad de ideas como algo positivo, los individuos buscan elementos que reafirmen sus concepciones, frecuentemente responsabilizando a los grupos opuestos por todos los males.[456]

La mediatización es un término empleado para describir el proceso mediante el cual los medios de comunicación y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) se erigen como mediadores fundamentales en las interacciones sociales y culturales. Este fenómeno implica un cambio esencial en nuestras prácticas cotidianas, transformando a los medios en el eje central para la interpretación y negociación de las realidades sociales. Tal como sugieren, Hepp, Benz y Kirschner, la influencia de la mediatización en el campo social y el alcance de la *doxa* mediática (opiniones o creencias establecidas que circulan en los medios de comunicación), es posible estimar el impacto profundo que los medios ejercen

---

[455] Vid. Braga Costa, Réne Morais, “A industria das fake news e o discurso de ódio,” trad. propia, en Rodolfo Viana Pereira (org), Delitos políticos, Liberda de de expresaáo e discurso de odió., vol. 1. Belo Horizonte. IDDE, 2018, p. 210, disponible en: *https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/4813/2018_braga_industria_fake_news.pdf?sequence=1&isAllowed=y* (fecha de consulta: 9 de julio de 2024), paráfrasis traducida: “A indústria dos fake news prospera, portanto, da ausência de tolerância. Nesse contexto, em um ambiente de polarização política, ao invés de admitir a presença de opiniões distintas ou conflitantes e tratar a pluralidade destas como positiva, o indivíduo busca por elementos que reafirmem e comprovem suas concepções, geralmente incriminando ou culpabilizando o grupo no espectro oposto de todas as mazelas existentes."

[456] Vid. Ídem.

en la conformación de nuestras percepciones y en la estructura de nuestras interacciones.[457] Este concepto alude a cómo la omnipresencia y utilización de los medios modifican la manera en que los mensajes son creados, intercambiados y percibidos en distintos ámbitos de la vida diaria, repercutiendo en aspectos tan variados como las estructuras sociales y políticas hasta las relaciones interpersonales.

El contexto histórico de la mediatización se remonta a la invención de la imprenta en el siglo XV, momento que marcó el inicio de una era de difusión masiva de la información, transformando las estructuras sociales y culturales de la época. A lo largo de los siglos, el concepto ha evolucionado con el desarrollo de nuevos medios: desde la prensa escrita, pasando por la radio y la televisión en el siglo XX, hasta la revolución digital del siglo XXI con Internet y las redes sociales, que han acelerado y ampliado el alcance de la mediatización a una escala global.[458]

La mediatización, entendida como una transformación profunda en la interacción entre medios de comunicación y sociedad, emergió como una de las causas fundamentales por las que la política se ha deformado. Esta evolución histórica de la mediatización refleja no sólo un cambio en los medios disponibles sino también transformaciones esenciales en cómo las sociedades se organizan, comunican y entienden el mundo. Inicialmente ligada a la mera difusión de información, la mediatización trascendió hacia un proceso integral, modelando la

[457] Vid. Hepp, Andreas, et. alt. (eds.), “New Perspectives in Critical Data Studies: The Ambivalences of Data Power,” Switzerland, palgrave macmillan, 2022, p. 98, disponible en: *https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/57022/1/978-3-030-96180-0.pdf#page=67* (fecha de consulta: 9 de julio 2024), paráfrasis traducida: "The use of algorithmic processes (automatisation of the production, circulation, and consumption of data by the use of computational procedures) in political communication is increasing. Assessing the impact of the automatic production, circulation, and delivery of political messages and advertising is challenging because the work carried out by algorithms is still largely hidden. Our current research project is intended to shed light on the contribution made by artificial intelligence, more specifically recommendation algorithms, to political advertising and messages in digital social media."

[458] Vid. Ibídem, p. ii, paráfrasis traducida: "We live in times that are characterised by a multiplicity of media: Traditional media like television, radio and newspapers remain important, but have all undergone fundamental change in the wake of digitalization. New media have been emerging with an increasing speed: Internet platforms, mobile media and the many different software-based communication media we are recently confronted with as ‘apps’. This process is experiencing yet another boost from the ongoing and increasingly fast sequence of technological media innovations. In our late modern social world, communication processes take place across a variety of media"

construcción de la realidad social y afectando la percepción del tiempo, el espacio y las relaciones humanas.[459]

El caso de Ingrid Escamilla, una joven brutalmente asesinada en 2020, ilustra cómo el poder de la mediatización puede radicalizar las políticas criminales y de género en México.[460] La cobertura mediática intensiva y sensacionalista del caso no sólo exacerbó la indignación pública sino que también generó una presión significativa sobre las autoridades para actuar de manera rápida y contundente. Este caso, mediatizado hasta el extremo, puso en el centro de atención la incapacidad del sistema judicial para proteger a las mujeres y la necesidad urgente de políticas más efectivas contra la violencia de género.

El 9 de febrero de 2020, en la Ciudad de México, Ingrid Escamilla perdió la vida a manos de su pareja. Las imágenes de su cuerpo mutilado fueron filtradas a la prensa y circuladas ampliamente en las redes sociales, lo que provocó una ola de indignación y repudio a nivel nacional e internacional.[461] La mediatización del caso llevó a protestas masivas y exigencias de justicia más estrictas para los feminicidios, resaltando la gravedad de la violencia de género y la necesidad de una respuesta institucional eficaz.

Este evento trágico ejemplifica cómo los medios de comunicación pueden influir en la percepción pública y presionar a las instituciones gubernamentales para que adopten medidas inmediatas, aunque a veces reactivas, en lugar de enfoques preventivos y estructurales más sostenibles. La difusión masiva de información, y a menudo desinformación, a través de los medios y las redes sociales, no sólo sensibilizó a la sociedad sobre la brutalidad de los feminicidios sino que también

---

[459] Vid. Ibídem, p. 220, paráfrasis traducida: "Data technologies and practices do not simply measure and represent aspects of social life but rather need to be understood as actively participating in producing new social practices. They can be usefully understood as part of a world-making practice, performing and reconfiguring the ongoing emergence of the world"

[460] Vid. Lioman Lima, “Feminicidio de Ingrid Escamilla: por qué el asesinato de la joven ha provocado protestas en México,” BBC News Mundo en linea, 16 de febrero de 2024, disponible en: *https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51518716* (fecha de consulta: 9 de julio de 2024).

[461] Vid. BBC News Mundo, “Feminicidio de Ingrid Escamilla: la indignación en México por el brutal asesinato de la joven y la difusión de las fotos de su cadaver,” BBC News Mundo en linea, 11 de febrero de 2020, disponible en: *https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51469528* (fecha de consulta: 9 de julio de 2024).

evidenció la urgencia de reformar las políticas públicas para prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar.

En conclusión, la mediatización de casos de violencia extrema, como el de Ingrid Escamilla, refleja cómo los medios de comunicación y las TIC´s han transformado la dinámica de la política criminal en México. La cobertura mediática intensa y las redes sociales amplifican las narrativas extremas, generando una presión que puede conducir a la adopción de políticas más punitivas y menos orientadas a la prevención. Para abordar eficazmente la violencia de género, es esencial equilibrar la influencia de la mediatización con enfoques integrales y basados en evidencias que promuevan la justicia y la protección de los derechos humanos.

4.3.5 Populismo

El populismo emerge desde nuestra perspectiva, como otro factor que contribuye al bizarro ejercicio político en México. Este término se ha establecido como un concepto clave en el análisis político contemporáneo, generando tanto interés como debate. La significación del populismo radica en su capacidad para englobar una variedad de movimientos y liderazgos políticos que, independientemente de sus diferencias contextuales e ideológicas, se unifican en la promesa de encarnar la voluntad del pueblo contra las élites de poder. Examinar las distintas teorías sobre el populismo permite comprender cómo los diversos enfoques teóricos ofrecen herramientas para desentrañar este fenómeno complejo, facilitando la identificación de sus orígenes, manifestaciones y efectos en distintos contextos sociopolíticos. Desde nuestra posición, se delinean tres enfoques primordiales para el análisis del populismo: ideológico, estratégico y discursivo.

4.3.5.1 Enfoque ideológico

Esta teoría conceptualiza el populismo como un conjunto de ideas o una ideología que enfatiza la dicotomía entre el pueblo puro y las élites corruptas. Críticos de este enfoque argumentan que puede ser demasiado rígido, ya que ignora la flexibilidad y adaptabilidad del populismo a diferentes contextos nacionales. Mudde, sostiene que el populismo puede ser considerado una *ideología*

delgada,[462] la cual se combina con ideologías más amplias para construir su narrativa política.

Un ejemplo ilustrativo de este enfoque es la retórica utilizada por la 4T, donde frecuentemente se refiere a la mafia del poder para describir a las élites políticas y económicas que, según esta administración, habían gobernado México en beneficio propio y en detrimento del pueblo. Este discurso resonaba especialmente en contextos de alta desigualdad y corrupción, presentándose AMLO como el defensor de los intereses populares frente a las élites corruptas. Con su propuesta de la 4T, este enfoque ideológico se traduce en eliminar la corrupción y redirigir los recursos hacia el bienestar del pueblo, contrastando directamente con los gobiernos anteriores considerados como corruptos y elitistas.

4.3.5.2 Enfoque estratégico

Desde esta perspectiva, el populismo se concibe más como una estrategia política que como una ideología per se. Los líderes utilizan esta estrategia para movilizar a la población, creando un antagonismo entre el pueblo y el otro. No obstante, este enfoque ha sido criticado por su tendencia a sobreestimar la manipulación calculada por los líderes políticos y subestimar las demandas legítimas del electorado. En este contexto, el populismo fundamenta su éxito en la construcción de apoyo político mediante apelaciones directas al público, lo que permite a los líderes populistas establecer vínculos directos con sus seguidores y mantener el poder a través de estrategias de polarización y apelaciones directas. Pontón subraya que “los elementos típicos del populismo son el liderazgo personalista y la falta de institucionalización del vínculo con los votantes. Esto le da

[462] Mudde, Cas, “The Populist Zeitgeist,” trad. propia, revista Government and Opposition, vol. 39, núm. 4, 2004, p. 544, disponible en: *https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/2CD34F8B25C4FFF4F322316833DB94B7/S0017257X00002372a.pdf/div-class-title-the-populist-zeitgeist-div.pdf* (fecha de consulta: 11 de julio de 2024), paráfrasis traducida: "Though populism is a distinct ideology, it does not possess ‘the same level of intellectual refinement and consistency’ as, for example, socialism or liberalism. Populism is only a ‘thin-centred ideology’, exhibiting ‘a restricted core attached to a narrower range of political concepts’. The core concept of populism is obviously ‘the people’; in a sense, even the concept of ‘the elite’ takes its identity from it (being its opposite, its nemesis). As a thin-centred ideology, populism can be easily combined with very different (thin and full) other ideologies, including communism, ecologism, nationalism or socialism."

al populismo una base bastante fluida no muy sólida en términos de sustentación."[463]

Un ejemplo claro de este enfoque es la implementación de los programas de becas, como la beca para el Bienestar Benito Juárez, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro y el Programa de Becas Elisa Acuña. Este programa de becas no sólo busca atender necesidades económicas específicas, sino que también fortalece el vínculo directo entre la 4T y sus bases de apoyo. A través de estos programas, la vigente política mexicana ha movilizado a amplios sectores de la población que se sienten directamente beneficiados por sus políticas, creando una dependencia política y personalista que sostiene su popularidad. Además, el uso frecuente de las *mañaneras* (conferencias de prensa diaria), permite mantener una comunicación directa con el pueblo, minimizando la intermediación de los medios tradicionales y consolidando una imagen de liderazgo accesible y cercano.

4.3.5.3 Enfoque discursivo

Este enfoque concibe el populismo principalmente como un estilo discursivo, el cual se manifiesta en la interacción comunicativa entre líderes y seguidores. Se caracteriza por simplificar la complejidad de la política y por fomentar el antagonismo. No obstante, criticamos este enfoque por su potencial limitación, argumentando que podría reducir el populismo meramente a aspectos retóricos, ignorando así sus fundamentos materiales y estructurales. Laclau enfatiza la capacidad del populismo para unificar diversas demandas sociales y políticas mediante una cadena de equivalencias, construyendo de esta manera una identidad colectiva que se posiciona en oposición a un antagonista común.[464] Este proceso facilita la formación de un pueblo político a partir de elementos heterogéneos, subrayando así la flexibilidad y el dinamismo del populismo como estrategia política.

[463] Pontón Cevallos, J., "El populismo: ¿una amenaza a la democracia en América Latina? Un diálogo con Kurt Weyland," Revista de Ciencias Sociales, Iconos, Num.55, 2016, p. 164, disponible en: *https://www.redalyc.org/pdf/509/50945652008.pdf* (fecha de consulta: 11 de julio de 2024).
[464] Vid. Laclau, Ernesto, "La razón populista," Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 86, disponible en: https://enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Aime_zapatistas/Razon_populista-Ernesto_Laclau.pdf (fecha de consulta: 11 de julio de 2024).

Un ejemplo ilustrativo de este enfoque es la manera en que la 4T ha abordado la diversidad de demandas sociales en su discurso. Durante esta administración, se ha logrado unir a grupos tan diversos como campesinos, trabajadores urbanos, estudiantes y comunidades indígenas bajo una narrativa común que los posiciona en contra de las élites corruptas y el neoliberalismo. La campaña *Primero los pobres* encapsula esta estrategia discursiva, donde se presenta a sí mismo y a su movimiento como los verdaderos representantes de las necesidades y aspiraciones de los más desfavorecidos. Esta estrategia ha permitido a la 4T crear una identidad colectiva poderosa que trasciende las diferencias individuales y se enfoca en un enemigo común, facilitando la cohesión y el apoyo a su liderazgo.

4.3.6 Ideología de género feminista

Por último, y como catalizador de nuestro objeto de estudio, la ideología de género feminista es el factor causante de la vigente y equívoca política criminal que se aborda para prevenir, disuadir, controlar y administrar la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. El concepto de ideología, introducido por el filósofo francés Destutt de Tracy a finales del siglo XVIII, representa el inicio de la ciencia de las ideas; un estudio sobre cómo pensamos, hablamos y argumentamos.[465] Esta interpretación temprana se relaciona estrechamente con lo que hoy en día conocemos como filosofía y ciencias cognitivas, más que con la psicología.

Por el otro lado, desde una perspectiva biológica, el sexo se clasifica en dos grandes grupos, masculino y femenino, basados en características físicas observables. Sin embargo, desde la sociología, el género es visto como un constructo ideológico, influenciado por las costumbres culturales de una sociedad. Este constructo abarca los roles, comportamientos y características considerados apropiados para hombres y mujeres, los cuales varían significativamente según el contexto cultural e histórico.

---

[465] Vid. Dijk, Teun A. van, "Ideología y discurso: una introducción multidisciplinaria," España, Ariel, 2003, p. 14, disponible en: *https://books.google.com/books?id=Nz4iy0RNuTYC&printsec=frontcover&dq=van+Dijk,+Teun+A.,+Ideolog%C3%ADa+y+Discurso:+Una+Introducci%C3%B3n+Multidisciplinaria&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwic-ISpq7GHAxXdJEQIHf8JBToQ6wF6BAgIEAE* (fecha de consulta: 18 de julio de 2024).

El término *género* fue utilizado por primera vez en la década de 1950 por el psicólogo y sexólogo estadounidense John Money. En su obra *Hermaphroditism, Gender, and Precocity in Hyperadrenocorticism: Psychologic Findings*, Money diferenció el género del sexo biológico para explorar la identidad de género y su desarrollo.[466] A través de su investigación con individuos intersexuales, Money desafió la idea de que el sexo biológico determina automáticamente el género, proponiendo que el género es una construcción social y psicológica que se desarrolla mediante la interacción entre el individuo y su entorno.[467]

En el fondo, estudiar la ideología de género femnista es fundamental para entender cómo este sistema de creencias impacta la estructura y dinámica social, influenciando desde políticas gubernamentales hasta interacciones cotidianas. Ejemplo de ello es cuando Carlos Marx, al criticar el libre mercado, ilustra que conceptos como *la libertad y la igualdad*, celebrados como fundamentos de justicia y equidad, pueden en realidad servir como máscaras que ocultan dinámicas de poder y desigualdades inherentes al sistema.[468] Según Marx, estos principios son proyecciones idealizadas que, al encarnarse en estructuras legales, políticas y sociales, promueven el ascenso a formas de poder más consolidadas.[469]

Así entonces, es dable afirmar, que las ideologías constituyen la base de los programas de los partidos y las plataformas electorales, influyendo decisivamente en la formulación e implementación de políticas públicas. Desde la perspectiva del funcionalismo, las ideologías actúan como un pegamento social que une a la comunidad política. Por otro lado, desde la perspectiva del conflicto social, se ven como herramientas de dominación y control. Esta dualidad revela la política como un escenario de interacciones complejas entre la ética y las ambiciones de poder, donde a menudo emerge el dilema de actuar éticamente o en función del poder.[470]

---

[466] Vid. Money, J., Hermaphroditism, Gender, and Precocity in Hyperadrenocorticism: Psychologic Findings, Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, Vol. 96, No. 4, 1955, pp. 253-264.
[467] Vid. Ídem.
[468] Vid. Marx, Karl, "Grundrisse: Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Borrador) 1857-1858," España, Siglo XXI, vol. 1., 2007, p. 183, disponible en: *https: //drive.google.com/file/d/1N82MprDcqaAwzzVbFGZcvFg443yfi4UU/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 1 de mayo de 2024).
[469] Vid. Ídem.
[470] Vid. Ídem.

Por lo que, la ideología de género feminista ha sido un factor determinante en la orquestación de políticas de prevención de la violencia contra la mujer en varios niveles de gobierno. Ha influenciado profundamente en las estrategias públicas, desde la educación y la promoción de derechos fundamentales, hasta el control, y administración de la violencia contra la mujer. La implementación de estas políticas a simple vista, busca transformar las estructuras familiares, educativas y laborales para promover la igualdad, modificando normativas y prácticas en el ámbito de la seguridad pública y la justicia.

En el ámbito educativo, la ideología de género feminista desempeña un papel crucial. Según el constructivismo social, la educación es un campo fértil para la propagación de ideologías, manifestándose en currículos, métodos pedagógicos y la selección de textos.[471] Pierre Bourdieu argumenta que la escuela contribuye a la perpetuación de la estructura social al facilitar la transmisión y legitimación del capital cultural heredado.[472] Este proceso de reforma educativa, según la ideología de género, al insertar su teoría represiva patriarcal en los programas educativos, actúa como un primer nivel preventivo, abordando las bases ideológicas y culturales que según esta ideología es la causante de perpetuar la desigualdad y la discriminación, mientras prepara el entorno educativo para prevenir y actuar contra la violencia.

En palabras más claras, y con base en el discurso retórico feminista, la inclusión de su teoría en el actual marco legal mexicano actúa no sólo como un mecanismo para sancionar, sino también como una herramienta educativa y preventiva. Este enfoque se manifiesta claramente en legislaciones como la LGAVLV y la tipificación del feminicidio, las cuales, basándose en un sistema de dominación patriarcal, responden a la necesidad de abordar las raíces ideológicas y culturales de la violencia contra las mujeres por razones de género. Sin embargo, y con base en los datos duros ya expuestos y evaluados críticamente, estas

[471] Vid. Bourdieu, Pierre, “Capital Cultural, Escuela y Espacio Social,” trad. de Isabel Jiménez, 2da ed., México, Siglo XXI Editores, 1998, p. 51, disponible en: *https://www.u-cursos.cl/facso/2017/1/TS01023/1/material_docente/bajar?id_material=1700641* (fecha de consulta: 1 de mayo de 2024).
[472] Vid. Ídem.

estrategias, en lugar de promover la reducción o erradicación de la violencia, han resultado en efectos contrarios, perpetuando las dinámicas que se intentan combatir.

4.4 Reflexiones críticas finales

En conclusión, en este cuarto capítulo hemos alcanzado nuestro cuarto objetivo específico: Revelar el actual espectro político en el que se materializa la política criminal encargada de prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, con las siguientes reflexiones críticas finales:

En primer lugar, la radicalización política, tanto de derecha como de izquierda, ha demostrado ser un obstáculo significativo para la implementación de políticas preventivas efectivas. Desde la derecha, la insistencia en mantener estructuras tradicionales y resistir cambios sociales profundos ha limitado la capacidad del Estado para adaptar políticas que respondan a las necesidades actuales de justicia y protección. Por otro lado, la izquierda radical ha promovido cambios que, aunque bien intencionados, a menudo resultan en políticas divisivas y polarizadoras que fragmentan la cohesión social y desestabilizan el sistema legal.

El populismo, manifestado de manera prominente en la administración de la 4T, ha tenido un impacto dual. Si bien ha movilizado a sectores marginados y ha dado voz a las demandas populares, también ha contribuido a la polarización e implementado políticas que carecen de sustento científico. Este enfoque ha llevado a una gestión política que oscila entre respuestas punitivas y disuasivas sin una clara dirección estratégica, reflejando una incoherencia que debilita la efectividad de las PCPVCMNF.

La implementación de la ideología de género en las políticas públicas ha sido otro factor crucial. Sin avances visibles, el combate de la violencia contra la mujer por razones de género, es la razón por la que hemos criticado su aplicación, pues es más ideológica y política que pragmática. Esta crítica se centra en la percepción de que estas políticas, en su afán por corregir desigualdades históricas, pueden generar nuevas formas de exclusión y discriminación, perpetuando un ciclo de injusticia social.

En suma, el paradigma neoliberal impuesto en América Latina a través del CW revela una doble moral por parte de los Estados Unidos. Mientras promueven políticas de mínima intervención estatal y privatización en la región, dentro de sus propias fronteras mantienen un enfoque mucho más intervencionista y regulador, especialmente en tiempos de crisis. Este contraste subraya una estrategia perversa de control, donde el CW se convierte en una herramienta para consolidar la hegemonía económica de los Estados Unidos. Las políticas del CW, lejos de ser un verdadero reflejo del neoliberalismo norteamericano, imponen un modelo que debilita la capacidad de los Estados latinoamericanos para regular sus economías y proteger los derechos humanos.

La interpretación equivocada del neoliberalismo norteamericano, adoptada en México y criticada a lo largo de esta tesis, tiene su origen en esta estrategia de dominación económica. En lugar de promover el crecimiento y la equidad, las políticas derivadas del CW han exacerbado la desigualdad y socavado las estructuras sociales y políticas de la región. Es imprescindible reconocer que el CW no exportó un neoliberalismo auténtico, sino un conjunto de políticas diseñadas para beneficiar a los intereses estadounidenses. Este análisis revela la necesidad de reexaminar y reestructurar el modelo económico que ha prevalecido en México, para evitar perpetuar una realidad distorsionada y dependiente que contrasta profundamente con las prácticas internas de los Estados Unidos.

Otro claro ejemplo de la doble moral con la que los Estados Unidos operan en materia de política criminal, y como lo pudimos observar en el primer capítulo, es su postura respecto a los instrumentos internacionales para erradicar la violencia contra la mujer. Aunque Estados Unidos no es parte de tratados clave como la CEDAW, implementa dentro de sus fronteras políticas y programas que buscan enfrentar la violencia contra la mujer. Este enfoque irónico de autodeterminación soberana refleja una contradicción: mientras que el país se rehúsa a comprometerse formalmente a nivel internacional, gestiona iniciativas internas que buscan abordar el mismo problema. Esta paradoja evidencia una política criminal que, por un lado, promueve la independencia y el control interno sobre las agendas de derechos humanos, y por otro, se distancia de la cooperación global en temas críticos. Este

enfoque plantea serias interrogantes sobre la coherencia y la eficacia de su compromiso con la protección de los derechos humanos, y refuerza la percepción de una política interior guiada por principios éticos universales, que por intereses económicos.

Por otro lado, la influencia de los medios de comunicación y las tecnologías de la información, también han transformado la política criminal en México. Casos como el de Ingrid Escamilla muestran cómo la mediatización puede generar una presión significativa sobre las autoridades, llevando a la adopción de políticas reactivas y punitivas. Para abordar eficazmente la violencia contra la mujer por razones de género, es esencial equilibrar esta influencia con enfoques integrales y basados en evidencia que promuevan la justicia y la protección de los derechos humanos.

Es fundamental promover un equilibrio ideológico entre las corrientes de derecha e izquierda, evitando los extremos que generan ineficacia y polarización. Una política de centro que incorpore lo mejor de ambos lados puede proporcionar una base más sólida para la formulación de PCPVCMNF efectivas. Las políticas públicas deben estar fundamentadas en datos empíricos y análisis rigurosos, alejándose de enfoques populistas o ideológicos sin sustento. Esto implica un compromiso con la investigación científica y la evaluación continua de las políticas implementadas.

Involucrar a profesionistas en seguridad ciudadana en la formulación y evaluación de políticas puede mejorar su legitimidad y efectividad. La inclusión de voces expertas aseguraría que las políticas respondan a las necesidades reales de la sociedad. Es crucial fortalecer la infraestructura educativa, así como reestructurar los programas educativos y de sensibilización que se han realizado sobre violencia de género, por cultura cívica, de legalidad y derechos humanos para cambiar actitudes y comportamientos a largo plazo. Esta reestructuración a su vez, subsanará sistemáticamente el camino represivo y disuasivo por programas preventivos integrales, abarcando todos los niveles de la prevención.

Finalmente, es necesario llevar a cabo reformas institucionales que fortalezcan las capacidades del Estado para implementar, fiscalizar y evaluar las

PCPVCMNF. Esto incluye mejorar la capacitación de los funcionarios públicos y garantizar recursos adecuados para la aplicación de las políticas. Así como un sistema criminológico omnipotente encargado de monitorear en todo momento, el ejercicio deontológico de los trabajadores del Estado en los tres niveles preventivos.

Capítulo V: Rompiendo el Espejo

La mejor política criminal
es una buena política social.
Franz von Liszt

El desarrollo de este capítulo se enfoca, en primer lugar, en demostrar nuestra teoría del espejo, la cual sostiene que la realidad en la que se vive es equívoca, deformada e invertida, similar al reflejo distorsionado que un espejo produce cuando refleja una imagen. Esta teoría encuentra un paralelismo en la alegoría de la caverna de Platón, donde los prisioneros, encadenados dentro de una cueva, sólo pueden ver sombras proyectadas en la pared, confundiendo esas sombras con la realidad.[473] De manera análoga, se argumenta que la sociedad mexicana percibe una realidad jurídica y social distorsionada debido a una incorrecta interpretación de la CPEUM. Esta distorsión, al igual que las sombras en la caverna, aleja de la verdad y perpetúa un sistema de injusticias y políticas ineficaces.

En la alegoría de Platón, cuando uno de los prisioneros logra escapar de la caverna y ve el mundo real, enfrenta la responsabilidad de regresar a la cueva para compartir con los demás lo que ha descubierto, aunque inicialmente sea incomprendido o rechazado.[474] De manera similar, al comparar los sistemas educativo, de procuración de justicia, penitenciario y de seguridad ciudadana de Estados Unidos con los de México, se regresa con una visión clara de cómo deberían ser las políticas públicas, de seguridad y de reinserción social. La experiencia fuera de la *caverna mexicana* ha permitido identificar la distorsión en la que se está inmerso y, por lo tanto, se presenta la necesidad de compartir una visión más objetiva y ética, basada en las mejores prácticas observadas en el sistema norteamericano.

En el fondo, la CPEUM, alineada con la corriente epistemológica del *iusrealismo*, pretende establecer un marco normativo que responda pragmáticamente a las realidades sociales y políticas de México. No obstante, este

[473] Vid. Platón, "República," trad. por Conrado Eggers Lan, Madrid, Editorial Gredos, 1988, pp. 338, 339, disponible en: *https://posgrado.unam.mx/filosofia/pdfs/Plat%C3%B3n_Rep%C3%BAblica.pdf* (fecha de consulta: 18 de agosto de 2024).
[474] Ibídem, pp. 341, 342.

objetivo se ve afectado por interpretaciones erróneas impulsadas por intereses económicos, que desvirtúan su propósito original y perpetúan injusticias y políticas ineficaces. A pesar de que la CPEUM prevé un paradigma de seguridad ciudadana, su interpretación ha sido igualmente distorsionada por la *lujuria economica*, manifestándose en políticas públicas superficiales y en estrategias punitivas que sólo han exacerbado la violencia contra la mujer.

Es crucial subrayar que las estrategias ineficientes en materia de seguridad y prevención de la violencia contra la mujer, estan influenciadas por una interpretación incorrecta del neoliberalismo norteamericano, lo que ha contribuido a su ineficacia, como lo demuestran los altos índices de violencia contra las mujeres.[475] Ante esta problemática, se propone en este capítulo un cambio de paradigma basado en la teoría de los cambios paradigmáticos de Thomas Kuhn. Este nuevo enfoque busca romper con la distorsión de la realidad que perpetúa la actual interpretación de la CPEUM y promover una visión objetiva y ética, alineada con los principios del *iusrealismo* y los valores fundamentales que verdaderamente se deben defender. Este cambio es urgente y necesario en un contexto donde la seguridad ciudadana se ha transformado en una herramienta de control político, en lugar de ser una estrategia efectiva para garantizar justicia y equidad.

En consecuencia, este nuevo paradigma multidisciplinario debe integrar no sólo a profesionales en seguridad ciudadana, criminología, psicología y derecho, sino también trascender las prácticas tradicionales de seguridad pública. El enfoque debe dirigirse hacia políticas preventivas y de desarrollo social que aborden las causas estructurales de la violencia contra la mujer. Para lograr este objetivo, se subraya la importancia de un SCI, que fiscalice y evalúe de manera continua los múltiples niveles preventivos, asegurando que se respeten y promuevan los derechos fundamentales en cada uno de ellos.

En síntesis, este capítulo transforma la información obtenida en la investigación en propuestas concretas, basadas inicialmente en la experiencia práctica y posteriormente respaldadas por evidencia científica y argumentos teóricos y académicos. El objetivo es corregir la distorsión del marco jurídico y social

[475] Vid. Op. Cit. Solís Fernando, “Edomex, primer lugar nacional en feminicidios durante 2023.”

actual, orientando las reformas hacia la construcción de un México que adopte un enfoque neoliberal más auténtico. En consecuencia, este capítulo no sólo busca redefinir el paradigma de seguridad ciudadana en México, sino también sentar las bases para un futuro en el que las políticas públicas estén alineadas con los principios constitucionales y éticos que deben guiar al país.

5.1 Estrategias para alcanzar un ESDD

Con base en la investigación empírica desarrollada en nuestro tercer capitulo, la violencia contra la mujer en el núcleo familiar representa una problemática profunda y persistente en México, lo que subraya la necesidad de un cambio paradigmático en las políticas públicas para alcanzar un ESDD. La teoría de los cambios paradigmáticos de Thomas Kuhn proporciona una base crítica para comprender esta necesidad. Según Kuhn, los paradigmas se transforman mediante revoluciones científicas,[476] lo que puede aplicarse a las políticas públicas que, hasta ahora, han demostrado ser ineficaces en la erradicación de la violencia contra la mujer. La persistencia de altos índices de violencia contra la mujer, incluyendo los feminicidios, sugiere que las estrategias actuales están obsoletas y requieren un cambio fundamental que integre un enfoque multidisciplinario, combinando, seguridad ciudadana, psicología, sociología, derecho y la educación entre otras más.

En el marco de la construcción de un ESDD, el paradigma de la seguridad ciudadana se presenta como una solución integral y preventiva. Tradicionalmente, la seguridad se ha concebido desde una perspectiva militar y estatal, centrada en la protección del territorio y la soberanía nacional. Sin embargo, con el fin de la *Guerra Fría*, surgió con fuerza el concepto de seguridad humana, el cual amplió el enfoque tradicional al considerar diversas dimensiones de la vida humana, como la económica, sanitaria, alimentaria y ambiental. La seguridad ciudadana, en este sentido, se entiende como una extensión de la seguridad humana, enfocándose en la protección de los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías

[476] Vid. Op. Cit. Kuhn Thomas, “La estructura de las revoluciones científicas,” p. 28.

individuales, permitiendo así el pleno desarrollo de las personas sin el temor a la violencia o la inseguridad.

A pesar de sus ventajas, el paradigma de la seguridad ciudadana enfrenta importantes desafíos en su implementación efectiva dentro del contexto de un ESDD. La ambigüedad del concepto y la necesidad de una coordinación eficaz entre múltiples sectores y niveles de gobierno constituyen obstáculos significativos. En el caso de México, y como se ha ido argumentando a lo largo de esta investigación, una interpretación distorsionada del paradigma neoliberal norteamericano ha desviado los objetivos originales de la seguridad ciudadana. A través de la neolengua, esta se ha convertido en una herramienta de control y manipulación política, exacerbando la inseguridad y la desconfianza ciudadana.

En síntesis, en este primer subcapítulo se exponen tanto el objetivo como el origen genealógico del paradigma de la seguridad ciudadana, y se evalúa críticamente la forma equivocada en que se implementa en México. Los capítulos siguientes proponen una reestructuración basada en principios de legalidad, proporcionalidad, investigación científica y respeto a los derechos humanos, con el fin de alcanzar un verdadero ESDD mediante un SCI.

5.1.1 Cambio de paradigma

La teoría de los cambios paradigmáticos de Thomas Kuhn ofrece una visión crítica para entender la necesidad de una transformación profunda en las estrategias del Estado dirigidas a combatir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Según Kuhn, los paradigmas científicos se transforman a través de revoluciones, lo cual es aplicable a las políticas públicas que han demostrado ser ineficaces en la erradicación de la violencia contra la mujer. En México, la persistencia de altos índices de violencia contra la mujer y de feminicidios sugiere que las estrategias actuales están obsoletas y requieren un cambio paradigmático.

Este nuevo paradigma debe integrar un enfoque multidisciplinario que combine profesiones como seguridad ciudadana, seguridad pública, derecho, ciencias forenses, psicología, sociología, pedagogía, criminología, criminalística y servicio social, promoviendo una comprensión integral del problema y soluciones reales que trasciendan las prácticas tradicionales de seguridad pública y el control

coercitivo y punitivo de la violencia contra la mujer. Además, este paradigma debe ser fiscalizado y evaluado de forma objetiva, utilizando una metodología criminológica inteligente.

5.1.1.1 El paradigma de la seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana se ha convertido en un tema crucial en el discurso contemporáneo sobre la protección y el bienestar de las personas. Históricamente, la seguridad ha sido interpretada principalmente desde una perspectiva militar y estatal, centrándose en la protección del territorio y la soberanía nacional. Sin embargo, el concepto de seguridad humana, que emergió con fuerza tras el fin de la Guerra Fría, ha ampliado esta visión al incluir múltiples dimensiones de la vida humana, tales como la económica, sanitaria, alimentaria y ambiental. Este apartado argumenta que la seguridad ciudadana debe ser vista como un nuevo paradigma derivado de la seguridad humana, enraizada en una visión integral que busca proteger a los individuos en todos los aspectos de su vida diaria.

Para empezar, el concepto de seguridad humana fue adoptado formalmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe sobre Desarrollo Humano de 1994.[477] Esta noción surge como una respuesta a las limitaciones de las concepciones tradicionales de seguridad, que estaban excesivamente centradas en el estado y la defensa territorial. La seguridad humana propone un cambio de enfoque hacia la protección de las personas, considerando una gama amplia de amenazas que incluyen la pobreza, la enfermedad, la represión y la violencia.[478]

Los orígenes del concepto pueden rastrearse hasta la pos segunda guerra mundial y los esfuerzos globales por promover la paz y el desarrollo humano sostenible. No obstante en un contexto mexicano, algunas de las raíces más profundas de estos principios pueden encontrarse en contextos nacionales

[477] Vid. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Informe sobre Desarrollo Humano 1994,” México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 25-50, disponible en: *https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1994escompletonostats.pdf* (fecha de consulta: 13 de julio de 2024).
[478] Vid. Rodríguez Alcázar, Javier. "La noción de 'seguridad humana': sus virtudes y sus peligros." Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Chile, Edalyc, vol. 4, núm. 11, 2005, p. 4, disponible en: *http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30541114* (fecha de consulta: 13 de julio de 2024).

específicos, como la posrevolución mexicana, donde las políticas sociales y de bienestar buscaban mejorar las condiciones de vida y reducir la inseguridad en diversas formas. Este contexto histórico subraya la importancia de un enfoque multidimensional y preventivo en la seguridad.

En este contexto, la seguridad ciudadana puede considerarse una ramificación de la seguridad humana, centrada específicamente en la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, la violencia y el crimen. Este enfoque no sólo aboga por la seguridad física, sino también por la creación de un entorno donde las personas puedan desarrollarse plenamente sin temor a la violencia o la inseguridad.[479]

La seguridad ciudadana, como nuevo paradigma, y a diferencia de la seguridad pública, enfatiza la prevención y el desarrollo. En lugar de depender exclusivamente de medidas represivas, se centra en abordar las causas subyacentes de la inseguridad, tales como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Este enfoque holístico reconoce que la seguridad de los individuos está intrínsecamente vinculada a su bienestar general y a la cohesión social de sus comunidades.[480]

Alessandro Baratta denomina "…nueva prevención de la Seguridad Ciudadana"[481] a su enfoque integral para la prevención del delito. Este enfoque se centra en la participación comunitaria y la colaboración interinstitucional como mecanismos fundamentales para abordar tanto la criminalidad como sus causas estructurales. La nueva prevención de Baratta no sólo pretende mantener el orden mediante la acción policial y el control social, sino también promover políticas que enfrenten la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades.

---

[479] Vid. Op. Cit. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , "Informe sobre Desarrollo Humano 1994," p. iii.

[480] Vid. Chinchilla, Laura, et. alt., "Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe: Desafíos e innovación en gestión y políticas públicas en los últimos 10 años," Washington DC., Banco Interamericano de Desarrollo, 2018, p. 10, disponible en: *https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/11/LChinchilla_SegCiud_Nov2018_FINAL.pdf* (fecha de consulta: 13 de julio de 2024).

[481] Baratta, Alessandro. "Política Criminal: Entre la Política de Seguridad y la Política Social," En Carranza, Isaías (coord.), "Delito y Seguridad de los Habitantes," México, D.F., Editorial Siglo XXI, Programa Sistema Penal Derechos Humanos de ILANUD y Comisión Europea, 1997, p. 5, disponible en: *https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/05/doctrina46549.pdf* (fecha de consulta: 15 de julio de 2024).

Baratta destaca que la verdadera prevención del delito debe trascender la mera represión.[482] Insiste en la necesidad de incorporar medidas sociales y económicas que aborden las raíces de la delincuencia. De esta manera, su propuesta busca fomentar una justicia social más equitativa y efectiva, atacando los factores subyacentes que contribuyen a la criminalidad. Así, el enfoque de Baratta se presenta como una solución comprensiva y sostenible para la seguridad ciudadana, integrando la justicia social y la participación comunitaria en la prevención del delito.

Además, uno de los principales beneficios de la seguridad ciudadana es su capacidad para movilizar una amplia gama de actores, desde gobiernos y organizaciones no gubernamentales hasta comunidades locales.[483] Esta movilización es crucial para abordar las diversas dimensiones de la inseguridad y para implementar estrategias efectivas de prevención y desarrollo.

Sin embargo, este paradigma también enfrenta desafíos significativos. La ambigüedad del concepto de seguridad humana, y por extensión de la seguridad ciudadana, puede dificultar su aplicación en políticas concretas.[484] Además, la integración de diferentes dimensiones de la seguridad requiere una coordinación efectiva entre múltiples sectores y niveles de gobierno, lo cual puede ser complejo en contextos de recursos limitados y capacidades institucionales insuficientes.

Laura Chinchilla destaca cuatro desafíos institucionales principales: integralidad, multisectorialidad, rigurosidad y sostenibilidad y escalabilidad.[485] La integralidad implica estrategias articuladas que promuevan una visión compartida del problema de la violencia y el delito. La multisectorialidad requiere estructuras organizativas que faciliten la coordinación interinstitucional entre diferentes niveles de gobierno y la participación del sector privado y la sociedad civil. La rigurosidad se refiere a la fiabilidad de la información y las estadísticas, la profesionalización del personal y el acceso a tecnologías de la información. Finalmente, la sostenibilidad

[482] Vid. Ibídem, p. 10.
[483] Vid. Op. Cit. Vid. Rodríguez Alcázar, Javier. "La noción de 'seguridad humana': sus virtudes y sus peligros," p. 6.
[484] Vid. Op. Cit. Chinchilla, Laura, et. alt., “Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe: Desafíos e innovación en gestión y políticas públicas en los últimos 10 años,” p. 14.
[485] Vid. Ibídem, pp. 15-17.

y escalabilidad se enfocan en garantizar la continuidad y expansión de las políticas de seguridad ciudadana a lo largo del tiempo.

Según el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2013), la seguridad ciudadana es un proceso integral que busca establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático eliminando las amenazas de violencia en la población.[486] Este enfoque se considera un bien público e implica la tanto la salvaguarda de los derechos humanos inherentes a la persona, como de garantizar sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la educación y la libertad de movimiento. Este proceso debe ser polifacético, incluyendo la universalización del acceso a servicios sociales básicos, la mejora del funcionamiento del Estado y las instituciones sociales para fomentar un crecimiento equitativo, y la eliminación de barreras burocráticas y sociales que limitan la acción económica y la movilidad social.[487] En este sentido, la gobernanza efectiva y una representación inclusiva son esenciales para proteger a la ciudadanía de diversas amenazas, promoviendo la equidad y la participación democrática.

Como pieza clave, “Uno de los instrumentos más poderosos para lograr este propósito es la educación, que aumenta la autoestima de las personas, les permite encontrar mejores trabajos, participar en debates públicos y exigir respuestas al gobierno en cuestiones de atención de salud, seguridad social y otros derechos”.[488] La educación no sólo es fundamental para el desarrollo humano, sino también para mejorar la seguridad. En particular, la educación de niñas y mujeres, mencionada en el informe del PNUD, es clave para reducir la violencia y mejorar la calidad de vida, contribuyendo así a una mayor seguridad ciudadana.

Además, la participación activa de los ciudadanos en la formulación de políticas garantiza que las estrategias de seguridad sean efectivas y respeten los

[486] Vid. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Informe sobre Desarrollo Humano 2013: El ascenso del Sur, Progreso humano en un mundo diverso,” Nueva York, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013, p. 13, disponible en: *https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2013essummary.pdf* (fecha de consulta: 15 de julio de 2024).
[487] Vid. Ibídem, p. 8.
[488] Vid. Ibídem, p. 9.

derechos democráticos. Es imperativo implementar políticas integrales y acciones coordinadas para enfrentar desafíos complejos como la pobreza, el cambio climático y la inseguridad. La inacción en estos aspectos puede tener consecuencias graves.

Guillermo Fernández también profundiza en la relación entre seguridad humana y seguridad ciudadana, destacando que la seguridad ciudadana se centra en la protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y la integridad física y material de la persona.[489] Formalmente, Fernández resalta que este concepto ha sido fundamental en América Latina durante las transiciones a la democracia, diferenciándose de la seguridad pública y la seguridad nacional, las cuales se enfocan más en la protección del Estado que en la de los ciudadanos.

Como evidencia de ello, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2009 enfatiza que la seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública integral, entendida no sólo como la lucha contra la delincuencia, sino como la creación de un entorno que promueva el respeto y la garantía de los derechos humanos. “La Comisión reitera que una política pública de seguridad ciudadana debe ocuparse de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la violencia, y por tanto, es necesario que sus intervenciones conduzcan a su abordaje integral.”[490] Así entonces, es viable asegurar que este enfoque debe incluir los tres niveles preventivos, sumando la participación ciudadana y la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana en cada uno de estos niveles.

Para reforzar este pronunciamiento, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostiene que la seguridad humana implica una "…situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente

[489] Vid. Fernández L., Guillermo, “Los conceptos de Seguridad Ciudadana y Seguridad Humana,” Asesoría Técnica Parlamentaria, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, junio, 2023, p. 1, disponible en: *https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/34315/2/GRID_GF_Seguridad_Humana_y_Seguridad_Ciudadana.pdf* (fecha de consulta: 15 de julio de 2024).

[490] Vid. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos,” Washington D.C., Organización de los Estados Americanos, 2009, p. 25, disponible en: *https://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/seguridad%20ciudadana%202009%20esp.*pdf (fecha de consulta: 15 de julio de 2024).

capacidad en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y responder con eficacia cuando éstos son vulnerados."[491] Por lo tanto, el concepto de seguridad ciudadana ha sido aplicado en diversos contextos con resultados variables. Por ejemplo, en América Latina, muchas ciudades han implementado políticas de seguridad ciudadana que incluyen medidas disuasivas y de desarrollo comunitario. En Colombia, el Plan de Desarrollo y Seguridad de Bogotá ha adoptado un enfoque integral que combina estrategias de prevención del crimen con programas sociales y económicos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.[492]

Otro ejemplo es el caso de Cuautitlán Izcalli en el Estado México, donde se han implementado estrategias innovadoras como el *Operativo Violeta* y la utilización de grupos de *WhatsApp* para combatir la violencia contra la mujer.[493] Estas estrategias no sólo se centran en la respuesta policial, sino también en la creación de redes de apoyo comunitario y en la confianza en las autoridades locales.

El PNUD (2013) también presenta casos exitosos en El Salvador, donde medidas como la tregua entre las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS13) y la pandilla del Barrio 18, negociada con el apoyo del Ministerio de Justicia y Seguridad, ayudaron a reducir el índice de criminalidad en más del 41% en 27 municipalidades en 2012.[494] En Nicaragua, la asesoría y asistencia prestadas a la policía en regiones como la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y Masaya han contribuido a mejorar la seguridad pública, reduciendo los delitos y asesinatos relacionados con

---

[491] Vid. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano 1994, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1994, citado en: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos," Washington D.C., Organización de los Estados Americanos, 2009, p. 9, disponible en: *https://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/seguridad%20ciudadana%202009%20esp.pdf* (fecha de consulta: 15 de julio de 2024).

[492] Vid. Salgado Ruiz, Henry,"El Plan Colombia, una política de (in)seguridad humana para las poblaciones del Putumayo," Bogotá D.C., marzo de 2004, p. 28, disponible en: *https://reliefweb.int/report/colombia/el-plan-colombia-una-pol%C3%ADtica-de-inseguridad-humana-para-las-poblaciones-del* (fecha de consulta: 15 de julio de 2024).

[493] Vid. Op. Cit. raul briseno, "La violencia de género en México," min. 1:04:20.

[494] Vid. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,"Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y Propuestas para América Latina," Nueva York, PNUD, 2013, p. 191, disponible en: *https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/informe-regional-de-desarrollo-humano-2013-2014* (fecha de consulta: 15 de julio de 2024).

armas de fuego en casi un 5% en 2012.[495] Estos ejemplos muestran cómo un enfoque integral y coordinado en el segundo nivel preventivo puede tener un impacto significativo en la seguridad ciudadana.

En conclusión, la seguridad ciudadana, como un nuevo paradigma derivado de la seguridad humana, representa un enfoque integral y preventivo que busca proteger a las personas en todos los aspectos de su vida. Al enfatizar la prevención y el desarrollo, este paradigma ofrece una respuesta más adecuada a las complejas realidades de la inseguridad en el mundo contemporáneo. No obstante, su implementación efectiva requiere una coordinación intersectorial entre los tres niveles preventivos y un compromiso sostenido por parte de todos los actores involucrados. Como se ha demostrado, la materialización de este paradigma ha tenido un desarrollo predominante en el segundo nivel preventivo. Basándonos en el marco teórico desarrollado, se puede afirmar que el paradigma de la seguridad ciudadana debe proteger los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales en los tres niveles preventivos de la política criminal.

5.1.1.1.1 La miseria de la seguridad ciudadana

El paradigma de la seguridad ciudadana, concebido originalmente como un enfoque integral y preventivo para proteger tanto los derechos humanos, como los derechos fundamentales y las garantías individuales, fomentando el desarrollo en un entorno libre de violencia, ha sido víctima de la distorsión económica del neoliberalismo mexicano. Bajo esta influencia, el paradigma ha sido reducido a estrategias de política criminal superficiales, enfocadas más en la coerción y la represión que en la prevención y el desarrollo social. Esta transformación ha desviado significativamente el objetivo original de proteger y promover los derechos ciudadanos fundamentales, creando un entorno donde la seguridad se utiliza como herramienta de control y manipulación política, exacerbando la inseguridad y la desconfianza ciudadana.

En el contexto de la administración actual (4T), la obsesión por obtener y mantener el poder ha perpetuado políticas que contradicen los principios

[495] Vid. Ibídem, p. 50.

fundamentales de justicia y equidad establecidos en la CPEUM. La politización extrema y el uso del populismo penal han desviado la implementación del paradigma de seguridad ciudadana, resultando en una estrategia fallida que no aborda las raíces profundas de la inseguridad y la violencia, especialmente contra mujeres y niñas en el núcleo familiar. En consecuencia, el paradigma de seguridad ciudadana ha sido instrumentalizado para fines políticos radicales, erosionando la confianza en las instituciones y perpetuando un ciclo de violencia e injusticia.

Desde un contexto nacional mexicano, el paradigma de la seguridad ciudadana emerge como resultado de la transición de un gobierno autoritario durante el Porfiriato hacia un modelo de ESDD posrevolucionario. Esta transformación implica que la prevención de delitos a través del poder coercitivo debe considerarse como la última alternativa (seguridad pública), priorizando el orden público desde una perspectiva social e institucional. El objetivo es proteger a los ciudadanos dentro de un marco normativo que respete, proteja, promueva y garantice sus derechos fundamentales, tal como se establece en la CPEUM.

Durante el último cuarto del siglo XX, México adoptó una versión mal interpretada del paradigma neoliberal estadounidense. Esta adopción exacerbó y desvió el enfoque del trabajo en materia de seguridad ciudadana que había sido desarrollado durante casi siete décadas, provocando una involución significativa. La imposición política mexicana de esta versión del neoliberalismo, combinada con la vigencia de una CPEUM basada en el modelo de un ESDD de 1917, ha generado caos y propiciado acciones anticonstitucionales.

El avance del modelo de ESDD ha enfrentado un freno significativo. Irónicamente, desde las altas esferas del poder, se sigue promoviendo una versión equivocada del neoliberalismo, a pesar de que la CPEUM prevé un enfoque diferente. Esta situación ha creado una enemistad entre los ciudadanos y el paradigma original, como se abordó en el capítulo anterior al discutir el populismo, el cual ha tergiversado la percepción pública al hacer creer que esta versión neoliberal es la auténtica. La evidencia de ello se manifiesta en el desmantelamiento del trabajo social realizado hasta la fecha y en las condiciones actuales de la política multinivel preventiva en México que compararemos con las de Estados Unidos.

En síntesis, la incapacidad de alcanzar resultados óptimos en la transición posrevolucionaria se debe a la adopción de un modelo neoliberal mal entendido, que exigió cambios abruptos e inadecuados. En consecuencia, los errores surgidos de la incorrecta interpretación del paradigma original se implantaron de manera defectuosa, resultando en un desvío significativo de las metas y principios establecidos durante la consolidación del Estado mexicano.

Desde entonces, la interpretación equivocada del paradigma neoliberal ha tenido un efecto negativo en el modelo de ESDD. En lugar de respaldar y fortalecer al Estado, este enfoque parece promover sus propios intereses a expensas de los principios fundamentales de justicia y equidad. Como menciona Nils Christie en su obra *La industria del control del delito*, se evidencia una preocupante tendencia hacia la privatización de servicios esenciales como la seguridad y la justicia.[496]

Es importante destacar que la visión de Christie no condena por completo la iniciativa privada, sino que enfatiza que debería ser una ayuda complementaria para el Estado.[497] La colaboración entre el sector privado y el Estado puede ser beneficiosa si se establecen mecanismos adecuados de regulación y supervisión, garantizando que el interés público prevalezca sobre el afán de lucro. De esta manera, se podrían aprovechar los recursos y la eficiencia que ofrece la iniciativa privada, sin debilitar el rol esencial del Estado en la protección de los derechos y el bienestar de los ciudadanos.

Así, la neolengua, la mala interpretación de los conceptos y la distorsión económica son los elementos responsables de la versión neoliberal mexicana que se critica. Ante la falta de respuesta del gobierno para cumplir con las obligaciones establecidas en la vigente CPEUM, los ciudadanos se ven forzados a actuar por sus propios medios para obtener los derechos que deberían estar garantizados. José Fernández asegura que esta situación obliga a los ciudadanos a concentrar sus

[496] Vid. Nils Christie, “La industria del control del delito: ¿La nueva forma del holocausto?,” trad. de Sara Costa, 2a ed., Buenos Aires, Editores del Puerto, 1993, p. 111, disponible en: *https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/02/doctrina40689.*pdf (fecha de consulta: 15 de julio de 2024).
[497] Vid. Ibídem, p. 118.

esfuerzos en defender tanto sus bienes materiales como sus derechos fundamentales.[498]

Este enfoque surge como una respuesta al debilitamiento y limitación del Estado, creando una brecha donde la ciudadanía se ve obligada a tomar acciones por su propia cuenta. Es crucial reconocer que esta dinámica ha sido promovida por los elementos ya identificados, que impulsan la versión errónea del neoliberalismo norteamericano. Estos elementos han explotado la ignorancia y la confusión para fomentar decisiones que no siempre se alinean con el bienestar colectivo y la armonía social.

En este orden de ideas, nuestra tesis sostiene que la seguridad ciudadana aplicada actualmente no es el paradigma completo, sino una política criminal superficial, resultado de un Estado de Derecho fallido. En este sentido, es crucial analizar el concepto de seguridad ciudadana que se implementa en la versión neoliberal mexicana y su relación con el debilitamiento del Estado de Derecho.

Para comenzar, recordemos que el Estado de Derecho es aquel en el cual se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos, se establecen y respetan normas jurídicas, y se promueve la justicia y la equidad. Según Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, la función principal del Estado es proporcionar seguridad a sus ciudadanos para evitar el caos y la violencia inherentes a su estado natural.[499] Sin embargo, cuando este Estado de Derecho se debilita y no cumple adecuadamente su función de proteger a los ciudadanos, surge la necesidad de implementar medidas de seguridad que muchas veces se alejan de los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos. Este debilitamiento puede llevar a un incremento en la inseguridad y la adopción de medidas autoritarias, lo que a su vez socava la justicia y la equidad que el Estado debería promover. Así, la falta de seguridad, que es la razón de ser del Estado según Hobbes, se convierte

[498] Vid. González, Fernández José Antonio, *"*La seguridad pública en México*",* en Peñaloza, Pedro José Garza Salinas, Mario A. (coords), *Los desafíos de la seguridad pública en México*, México, Universidad Iberoamericana, 2002, p. 125, disponible en: *http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/9387* (fecha de consulta: 15 de julio de 2024).
[499] Vid. Op. Cit. Hobbes, Thomas, "Leviatán," pp. 72, 73.

en una justificación para acciones que pueden erosionar los mismos derechos que el Estado está llamado a proteger.

Por lo tanto, es válido aseverar que el enfoque actual de seguridad ciudadana es un síntoma de un Estado fallido de Derecho, ya que refleja la incapacidad de las instituciones estatales para garantizar la seguridad de los ciudadanos de manera integral y respetando sus derechos. Este enfoque, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, se convierte en un remedio superficial que no aborda las raíces profundas de la inseguridad. Lo que se traduce en un error construido sobre otro error.

Desde otra perspectiva, la seguridad ciudadana actual representa una herramienta paradójica que ha generado una regresión en el ámbito político-social. En el delicado equilibrio entre las políticas públicas y las políticas criminales para la prevención del delito, las estrategias de control social implementadas han resultado contraproducentes, potenciando el crimen en lugar de prevenirlo y abordarlo de manera efectiva. El enfoque actual de la seguridad ciudadana, influenciado por la versión equivocada del neoliberalismo norteamericano, se centra exclusivamente en la criminalidad tradicional, dejando de lado las realidades de mujeres y niñas que enfrentan riesgos significativos en el ámbito familiar, como la violencia económica, física y psicológica.[500]

La versión involucionada del paradigma neoliberal norteamericano y que es la injertada en el sistema político mexicano evidencia que, en lugar de servir como apoyo al Estado mexicano, esta versión parece inclinarse hacia sus propios intereses, desviándose del objetivo previsto en la CPEUM. Esta desviación socava el propósito fundamental de prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. La actual seguridad ciudadana se erige como una política que busca enaltecer el objetivo ideológico marxista, debilitando el modelo de ESDD. Esta estrategia ha sido utilizada nuevamente por la administración actual para desentenderse de su responsabilidad, enmascarando el poder coercitivo del Estado.

[500] Vid. Op. Cit. Baratta, Alessandro. "Política Criminal: Entre la Política de Seguridad y la Política Social,“ pp. 6,7.

En palabras de Alessandro Baratta, estas contradicciones políticas no obedecen a la lógica, sino a una ideología que "…no tienen el propósito de aclarar, sino de confundir las relaciones conceptuales esenciales que se encuentran en la base del sistema normativo y de los principios propios de los Estados Sociales de Derecho".[501] Por tanto, no sorprende que la actual seguridad ciudadana carezca de coherencia y se entienda como un constructo ideológico conservador. Es una estrategia fallida desde su concepción, especialmente en lo que respecta a la política criminal integral.

El paradigma de la seguridad ciudadana, a diferencia de la incompleta versión que se ejecuta actualmente y que se traduce en seguridad pública (prevención de segundo nivel), debe seguir la propuesta de Baratta, estableciendo límites claros a esta última.

> Más prometedora, también, entre otras razones porque es más reciente, es la concepción de la seguridad ciudadana, que atribuye a la política criminal, por primera vez, una dimensión local, participativa, multidisciplinaria, pluriagencial, y que representa quizás un resultado histórico del actual movimiento de la nueva prevención. Sin embargo en este último caso, al igual que en los otros dos, el adjetivo estrangula, por así decirlo, al sustantivo. Desde el punto de vista jurídico, pero asimismo desde el psicológico, podrían y deberían estar, sobre todo, los sujetos portadores de derechos fundamentales universales (los que no se limitan a los ciudadanos), y éstos son todas y cada una de las personas físicas que se encuentran en el territorio de un Estado, de una ciudad, de un barrio o de otro lugar público, de una casa o de otro edificio o espacio privado. 'Seguros', en relación con el disfrute y la protección efectiva de aquellos derechos frente a cualquier agresión o incumplimiento por parte de otras personas físicas que actúan en el ámbito de competencias, poderes de derecho o de hecho que esas personas tengan, como funcionarios o particulares, en uno de los distintos ámbitos territoriales.[502]

Garantizar el orden público mediante una estrategia integral de prevención que reduzca los factores de riesgo del crimen implica adoptar una verdadera política criminal interseccional, abarcando los tres niveles preventivos y no basándose únicamente en el uso legal y legítimo de la coacción.

Para ejemplificar la miseria que encontramos en la seguridad ciudadana aplicada actualmente, podemos referirnos al trágico evento ocurrido en las oficinas de migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, el 27 de marzo de 2023. En

[501] Ibídem, p. 4.
[502] Op. Cit. Baratta, Alessandro. "Política Criminal: Entre la Política de Seguridad y la Política Social," pp. 6,7.

este suceso, murieron 39 migrantes y otros 28 resultaron heridos, en su mayoría provenientes de Sudamérica.[503] Este acontecimiento es un claro y terrible ejemplo de la falta tanto de seguridad ciudadana como de un Estado de Derecho.

Persiste la confusión y la mala interpretación en torno al verdadero significado del paradigma de la seguridad ciudadana. Este enfoque debe ser entendido como un sistema holístico que no sólo aborde la criminalidad desde una perspectiva reactiva y punitiva, sino que se enfoque en la salvaguarda de los derechos humanos.

Otro ejemplo claro de esta miseria es la utilización del concepto de seguridad ciudadana para crear políticas criminales que carecen de un aporte significativo. En lugar de contribuir y estar alineadas con lo expuesto en el apartado anterior, estas estrategias carecen de integridad y no abordan la raíz del problema. En última instancia, se traducen en simples cambios de nombre, con la errónea creencia de que adoptar el término será suficiente para satisfacer las demandas de un Estado de Derecho. Según Iñaki Rivera, esto estaría más relacionado con políticas de derecha en lugar de extrema izquierda. Para él, las políticas de extrema izquierda se caracterizan:

> En primer lugar, porque «la reconocida seriedad del problema del delito» es tal que requiere una respuesta que vaya más allá de la ingeniería asistemática y de ajustes a corto plazo. En segundo término, la adjetivación de «radical» sugiere la construcción de una respuesta política que no quede subsumida en el consenso liberal-conservador tradicional. En tercer lugar, es «radical» porque pretende atacar la raíz del problema del delito. Finalmente, también lo es porque se inspira libremente en la tradición del pensamiento crítico que pretende la desmitificación de las relaciones sociales.[504]

A su vez y para ejemplificar estas políticas de derecha, se puede mencionar la publicación en la gaceta oficial de la Ciudad de México del 23 de diciembre de 2019, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de

---

[503] Vid. BBC News Mundo, "Incendio en Ciudad Juárez: identifican a los 39 fallecidos y ordenan la detención de 6 personas por la tragedia en un centro de detención de migrantes," periódico *en línea BBC News, Mundo,*29 de marzo del 2023, disponible en: *https://www.bbc.com/mundo/noticias-65132769* (fecha de consulta: 16 de julio de 2024).

[504] Rivera Beiras, Iñaki (coord.), "Política Criminal y Sistema Penal: Viejas y nuevas racionalidades punitivas," Barcelona, Anthropos, 2005, p. 217, disponible en: *https://www.academia.edu/29125193/_Politica_Criminal_Y_Sistema_Penal_Rivera_I%C3%B1aki* (fecha de consulta: 16 de julio de 2024).

México (LOSSSCDMX). Esta ley decretó la abrogación de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (LOSSPDF) y la expedición de la nueva LOSSSCDMX.[505]

En esta supuesta transición de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, esta ley no refleja de manera estricta los diferentes derechos fundamentales que el paradigma de la seguridad ciudadana prevé, tales como el derecho a una vivienda digna, a la alimentación, a un trabajo digno, o a la educación, entre otros. Esto evidencia una estrategia que no implica cambios estructurales profundos, limitándose simplemente a un cambio nominal de la institución. Esta superficialidad en la implementación denota una falta de comprensión del paradigma, una fuerte determinación de seguir ejerciendo la autoridad coercitiva del Estado a través de las funciones de seguridad pública, aunque ahora bajo el nombre de seguridad ciudadana.

Otro ejemplo de esta miseria se observa en la Dirección General de Seguridad Ciudadana en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. El simple cambio de nombre de la policía municipal a policía de Seguridad Ciudadana revela la simplista política criminal implementada en esta localidad. A pesar del cambio de denominación, el enfoque y las prácticas continúan siendo las mismas, sin una transformación real en las estrategias y objetivos de la seguridad pública. Esta situación se evidencia en la indiferencia institucionalizada ante la vulneración de derechos humanos. En el tercer capítulo se identificaron niños realizando actividades peligrosas en las calles de Nezahualcóyotl, mientras un policía de Seguridad Ciudadana no sólo no actuaba para protegerlos, sino que participaba comprándoles productos de forma informal. Este acto revela una disfunción sistémica alarmante y la falta de una verdadera implementación del paradigma de seguridad ciudadana.

[505] Vid. Congreso de la Ciudad de México, "Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México," Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2019, disponible en: *https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cdf1d09f332b91ca90a141c0980805a02fa6a7cf.pdf* (fecha de consulta: 16 de julio de 2024).

Nuestra tesis sostiene que la incompleta interpretación de la actual seguridad ciudadana es una construcción sociocultural, anticientífica e involutiva. Esta afirmación se fundamenta en dos aspectos principales. Primero, es desarrollada en la interpretación radical del paradigma neoliberal norteamericano, alejándose de las bases científicas y racionales que deberían sustentar cualquier enfoque en materia de seguridad. En lugar de basarse en evidencias empíricas y teorías fundamentadas, se apoya en enfoques populistas y discursos que buscan agradar a la opinión pública sin considerar su eficacia real. Segundo, se sostiene que se ha dejado de utilizar fuentes etiológicas en su construcción. Las fuentes etiológicas hacen referencia al análisis de las causas y factores que originan los problemas de seguridad, permitiendo así diseñar estrategias efectivas y sostenibles. En lugar de abordar las raíces y las condiciones estructurales que generan la inseguridad, se opta por un modelo populista que se enfoca únicamente en medidas superficiales y reactivas, sin abordar de manera integral los problemas subyacentes.

A decir verdad, la idea incompleta del paradigma de seguridad ciudadana considera al populismo como un elemento válido para predecir cambios sociales, lo que la convierte en un error científico, tal como argumenta Karl R. Popper en su obra La Miseria del Historicismo. Según Popper, el populismo adolece de fundamentos científicos sólidos, ya que se basa en supuestos simplistas y generalizaciones que no logran capturar la complejidad de la realidad social.

> El curso de la historia humana está fuertemente influido por el crecimiento de los conocimientos humanos. No podemos predecir, por métodos racionales o científicos, el crecimiento futuro de nuestros conocimientos científicos. No podemos, por tanto, predecir el curso futuro de la historia humana.[506]

La situación ha alcanzado un punto crítico en el que la presión de la acción social ha obligado al gobierno a cambiar el nombre de las instituciones con el fin de aparentar un óptimo Estado de Derecho y supuestos avances en el desarrollo social. En efecto, esta estrategia se convierte en una farsa que busca disimular la falta de sustancia y la ausencia de una comprensión genuina de los problemas de la

[506] Popper, Karl Raimund, “La miseria del historicismo,” trad, de Pedro Schwartz, Digitalizado por Titivillus, 2023, p. 7, disponible en*: https://proletarios.org/books/Popper-Miseria_del_historicismo.pdf* (fecha de consulta: 17 de julio de 2024).

violencia contra la mujer. Es alarmante que se dé prioridad al cambio de nombre y a la apariencia superficial, en lugar de abordar las causas profundas de la violencia contra la mujer. Este enfoque engañoso, que se cataliza con la falsa teoría de la ideología de género, no sólo carece de respaldo científico, sino que también desvía la atención de las soluciones reales y perpetúa la violencia contra la mujer, tal como señala Karl Popper en su teoría sobre el fracaso de las predicciones históricas.

Es fundamental que el paradigma de la seguridad ciudadana se base en principios de legalidad, proporcionalidad, investigación científica y respeto a los derechos humanos. Promover convocatorias para integrar profesionistas en seguridad ciudadana en los tres niveles preventivos, garantiza la aplicación correcta del paradigma de seguridad ciudadana, fortaleciendo el Estado de Derecho, garantizando la protección de los derechos fundamentales y abordando las causas estructurales de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. No basta con cambiar el nombre de las instituciones y enfocarse en políticas disuasivas y represivas que politicen la violencia contra la mujer, se requieren reformas auténticas y sustantivas que aborden los problemas desde sus raíces y promuevan una verdadera prevención del fenómeno en disputa.

5.1.2 Sistema criminológico

El estudio de la criminología ha evolucionado considerablemente, abarcando múltiples perspectivas que van desde enfoques etiológicos hasta aproximaciones sociológicas y culturales. En este apartado, se propone un *Sistema Criminológico* que integra diversas conceptualizaciones y enfoques, con el objetivo de proporcionar una herramienta metodológica, tanto teórica como práctica, no sólo para la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, sino de forma general, para disminuir los índices de criminalidad a través del estudio de las conductas antisociales y/o delitos, el criminal, la víctima y parte de la sociedad, utilizando el método de observación y de experimentación, con una finalidad

preventiva, predictiva (o de pronóstico cuando se haga una evaluación más amplia y completa), de control social y búsqueda del bien común.[507]

Inicialmente, podemos mencionar la conceptualización de la criminología según Osvaldo Tieghi, quien se enfoca en conocer las causas, el origen y el desarrollo de la personalidad del delincuente y su conducta criminal, con fines preventivos y de resocialización.

> Constituye, en sentido estricto, el núcleo y el objeto primigenio de la criminología científica, empírica y experimental; ello, en tanto ésta pretende conocer las causas, el origen y el desarrollo de la personalidad del delincuente, y su conducta criminal, para su posterior aplicación `preventiva´ y `resocializante´.[508]

Por su lado, Mariano Ruiz Funes considera a la criminología como una disciplina integradora que se centra en entender las conductas antisociales a través de una explicación basada en causas naturales.[509] El propósito fundamental de esta ciencia es disminuir la incidencia del crimen. Se enfoca en analizar en profundidad tanto al delincuente como al acto delictivo, viendo este último no sólo desde un punto de vista jurídico, sino también como un fenómeno social y natural inherente a la conducta humana. Para lograr estos objetivos, la criminología emplea métodos de observación y experimentación dentro de un contexto de clínica social.

Asimismo, Alfonso Quiroz Cuarón perfecciona esta definición al describir la criminología como una ciencia que no sólo estudia las conductas antisociales, sino también el contexto cultural y social en el que se desarrollan, con una finalidad preventiva. "…ciencia que se ocupa de estudiar al delincuente en todos sus aspectos; expresando que son tres grandes ciencias las constitutivas, a saber: la

---

[507] Vid. Márquez Roberto, Calixto, "Visiones Criminológicas del Delito y del Delincuente," *Presentación*, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Maestría en Política Criminal, p. 4, disponible en: *https://docs.google.com/presentation/d/16o-Ch_E8G98umA7XmzJ1EVx8fP7w7Yf-/edit?usp=sharing&ouid=103952795350638508265&rtpof=true&sd=true* (fecha de consulta: 21 de julio de 2024).

[508] Hikal Carreon, Wael Sarwat, "Prevención social del delito a través de los derechos humanos: un vínculo ignorado," *Revista. Criminología en línea,* 2011, vol.53, n.1, p. 2, disponible en: *http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082011000100005&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1794-3108*, (fecha de consulta: 22 de julio de 2024).

[509] Vid. Rodríguez Manzanera, Luis, "Criminología," 2ª ed. México, Editorial Porrúa, 1981, p. 4, disponible en: *https://yorchdocencia.files.wordpress.com/2014/06/criminologc3ada-rodrc3adguez-manzanera-luis.pdf* (fecha de consulta: 22 de julio de 2024).

ciencia del delito, o sea el Derecho Penal; la ciencia del delincuente, llamada Criminología; y la ciencia de la pena, Penología."[510]

Luis Rodríguez Manzanera añade que la criminología utiliza el método de observación y experimentación, abarcando los elementos de ciencia, síntesis, empirismo y objeto. "Ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales."[511]

Por lo tanto, el *Sistema Criminológico* propuesto se basa en cinco elementos esenciales, cada uno de los cuales desempeña un papel crucial en el entendimiento y manejo de los tres niveles preventivos.

En primer lugar, *la criminalidad*, entendida como el cúmulo de conductas antisociales o delitos cometidos en un lugar y tiempo determinados. Este elemento permite cuantificar y analizar la incidencia delictiva, identificando patrones y tendencias que informan las estrategias de prevención y control.

En segundo lugar, *las conductas antisociales y/o delitos,* estos comprenden el conocimiento de la ley y las costumbres, permitiendo una comprensión profunda de los comportamientos que son considerados criminales en diferentes contextos sociales y legales. Este conocimiento es crucial para el desarrollo de políticas que aborden tanto la prevención como la disuasión y la sanción de dichos comportamientos.

En tercer lugar, el conocimiento del *delincuente* se enfoca en su apreciación, sus relaciones pasadas y presentes, y las expectativas futuras. Este elemento incluye la evaluación de factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en la conducta delictiva, facilitando la creación de perfiles y estrategias de intervención personalizadas.

Seguidamente, *la víctima*, de acuerdo al Artículo cuarto de la Ley General de Víctimas considera las personas que han sufrido daño o menoscabo como consecuencia de un delito o violaciones de derechos humanos. Incluye víctimas directas, indirectas y potenciales, reconociendo la importancia de su protección y

[510] Ibídem, p. 6.
[511] Ibídem, p. 1.

asistencia. Este enfoque victimológico es esencial para desarrollar medidas de apoyo y reparación que contribuyan a la justicia y al bienestar social.

Finalmente, se examina a la *sociedad* y el contexto en el que se cometen las conductas antisociales y/o delitos. Este elemento abarca factores como la cultura, la economía, la política y las dinámicas comunitarias, los cuales influyen significativamente en la criminalidad. La integración de este elemento permite desarrollar políticas que aborden las raíces sociales del crimen.

En el fondo, nuestro *Sistema Criminológico*, utiliza una metodología científica basada en la observación y la experimentación, adaptada a las particularidades del estudio criminológico. Talcott Parsons propone un enfoque epistemológico que distingue entre fenómenos y hechos, sugiriendo que el sistema teórico debe ser una representación adecuada de la realidad externa.

> Un sistema de teoría científica es generalmente abstracto precisamente porque los hechos que engloba no constituyen una descripción completa de los fenómenos concretos implicados sino que son enunciados «en términos de un esquema conceptual»; es decir, sólo incluyen hechos relativos a fenómenos importantes para el sistema teórico que se está empleando en aquel momento.[512]

En términos de aplicaciones prácticas, el *Sistema Criminológico* propuesto, tiene múltiples aplicaciones, incluyendo la prevención mediante la identificación de factores de riesgo y desarrollo de programas preventivos dirigidos en los tres niveles preventivos (educación). La predicción se basa en la utilización de perfiles criminales, monitoreo y análisis de tendencias para anticipar, mitigar y evitar que se repitan las conductas delictivas. El control social implica la implementación de políticas y prácticas que fomenten la conformidad con las normas sociales y legales (derechos humanos, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte). La búsqueda del bien común se enfoca en desarrollar estrategias integrales que promuevan la justicia, la equidad y el bienestar social (derechos fundamentales).

---

[512] Parsons, Talcott, “La Estructura de la Acción Social: Estudio de Teoría Social con Referencia a un Grupo de Recientes Escritores Europeos,” trad. de Juan José Cadallero y José Castillo Castillo, Madrid, Ediciones Guadarrama, 1968, p. 79, disponible en: *file:///C:/Users/vo/Downloads/Teoria_Economica_Texto_8_Parsons_Talcott.pdf* (fecha de consulta: 22 de julio de 2024).

En conclusión, el desarrollo de un Sistema Criminológico integral y multidisciplinario es fundamental para abordar de manera efectiva la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar en el Estado de México y más allá. Considerando el claro y evidente atraso socioeconómico que el Estado mexicano padece debido a la equivocada interpretación del paradigma neoliberal norteamericano, proponemos un *Sistema Criminologico Inteligente*, haciendo el uso de las más avanzadas tecnologías de comunicación, educación y control social con el objetivo de redireccionar el camino y transformar nuestra realidad. Esta síntesis metodología holística permitiría no sólo fiscalizar y evaluar los tres niveles preventivos de forma deontológica, sino también cambiar de paradigma. Además, el uso de IA se presenta como una potente herramienta objetiva que, de forma fría, podría guiarnos en la toma de decisiones y hacernos ser conscientes del deber ser.

5.1.2.1 Fundamentos y aplicaciones de la IA en criminología

Para comenzar, justificamos el desarrollo de un SCI devido a la necesidad de abordar de manera eficiente y adaptativa los complejos desafíos de la política criminal vigente. Este sistema no se limita únicamente a la violencia contra la mujer, sino que abarca todas las formas de criminalidad. Desde la perspectiva del imperativo categórico kantiano, tratar estos fenómenos de manera aislada y especializada resulta insuficiente, ya que reproduce los resultados limitados observados hasta ahora. Por lo tanto, proponemos un enfoque holístico que integre diversas disciplinas y conocimientos, apoyado en tecnologías avanzadas como la IA para la recolección, análisis y aplicación de datos relevantes.

Este apartado se centra en la conceptualización de un sistema criminológico como un sistema complejo y adaptable, explorando su evolución hacia un sistema inteligente. La IA se refiere al desarrollo de sistemas computacionales capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, el aprendizaje, la percepción y la toma de decisiones. Según los argumentos de Russell y Norvig, la IA se divide en dos categorías principales: IA débil (o estrecha), que está diseñada para realizar tareas específicas, y IA fuerte

(o general), que tiene la capacidad de realizar cualquier tarea cognitiva que un ser humano pueda realizar.[513]

La IA débil es la más común y abarca aplicaciones como asistentes virtuales, sistemas de recomendación y herramientas de análisis de datos. Gran parte del progreso en IA se ha logrado mediante la competencia en tareas específicas, como el reconocimiento de objetos en imágenes o juegos como el ajedrez y el Go.[514] Cada una de estas tareas suele ser abordada con un sistema de IA separado y especializado, entrenado con datos recopilados específicamente para ese propósito. Sin embargo, un agente verdaderamente inteligente debería ser capaz de realizar más de una tarea, acercándose así al concepto de IA fuerte.

La IA fuerte es aún una meta teórica y se centra en crear sistemas con capacidad de razonamiento, comprensión y adaptabilidad comparables a los de los seres humanos. En este orden de ideas, el aprendizaje automático (machine learning) permite a los sistemas mejorar su rendimiento a través de la experiencia y el uso de datos. Según Goodfellow, Bengio y Courville, el aprendizaje profundo es un tipo particular de aprendizaje automático que logra un gran poder y flexibilidad al aprender a representar el mundo como una jerarquía anidada de conceptos, con

---

[513] Vid. Russell, Stuart J., y Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach,” trad. propia, 4th ed., Upper Saddle River NJ, Pearson, 2020, p. 1020, disponible en: *https://dl.ebooksworld.ir/books/Artificial.Intelligence.A.Modern.Approach.4th.Edition.Peter.Norvig.%20Stuart.Russell.Pearson.9780134610993.EBooksWorld.ir.pdf* (fecha de consulta: 1 de agosto de 2024), paráfrasis traducida: "Much of the progress in AI in the 21st century so far has been guided by competition on narrow tasks, such as the DARPA Grand Challenge for autonomous cars, the ImageNet object recognition competition, or playing Go, chess, poker, or Jeopardy! against a world champion. For each separate task, we build a separate AI system, usually with a separate machine learning model trained from scratch with data collected specifically for this task. But a truly intelligent agent should be able to do more than one thing."

[514] El juego de mesa Go, conocido también como Weiqi en China y Baduk en Corea, es un juego de estrategia abstracta con más de 2,500 años de antigüedad, considerado uno de los más complejos a nivel estratégico. El juego se desarrolla en un tablero cuadrado compuesto por 19x19 líneas, donde dos jugadores, alternando turnos, colocan fichas (llamadas piedras) de color blanco o negro en los puntos de intersección de las líneas. El objetivo es controlar la mayor cantidad de territorio posible en el tablero, rodeando las áreas con las piedras del propio color. A diferencia del ajedrez, las reglas del Go son relativamente simples, pero la profundidad estratégica es inmensa, lo que ha llevado a que se le compare con un arte más que con un simple juego. Su importancia cultural en Asia ha sido destacada a lo largo de la historia, y en la actualidad, su estudio y práctica son reconocidos tanto por su valor intelectual como por su capacidad de mejorar habilidades de pensamiento crítico y planificación a largo plazo. Vid. Shotwell, Peter, *Go! More Than a Game*, Ucrania, Tuttle Publishing, 2011.

cada concepto definido en relación con conceptos más simples, y representaciones más abstractas calculadas en términos de representaciones menos abstractas.[515]

Así entonces, es válido afirmar que el aprendizaje profundo (deep learning) en un SCI funcionará como una subcategoría del aprendizaje automático. Este sistema utilizará redes de comunicación interconectadas a nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria para modelar y analizar patrones complejos en grandes conjuntos de datos. Esta metodología ha permitido avances significativos en áreas como el reconocimiento de imágenes y el procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, en el caso del reconocimiento de imágenes, plataformas como Facebook emplean algoritmos de reconocimiento facial para sugerir etiquetas en las fotos de usuarios, facilitando así la organización y búsqueda de imágenes en redes sociales.

En cuanto a los sistemas inteligentes más avanzados que emplean el procesamiento del lenguaje natural, está el chatbot Meta AI, disponible en la aplicación de WhatsApp. Este chatbot, que se activa al actualizar la aplicación, está diseñado para interactuar tanto en chats individuales como en conversaciones grupales. Meta AI utiliza el modelo de lenguaje Llama 3, un modelo de gran capacidad y precisión que permite al sistema responder a preguntas, generar imágenes a partir de descripciones y actuar como asistente de búsqueda de información.[516] Este avance representa un paso significativo en la evolución de la IA aplicada al procesamiento del lenguaje, al proporcionar una experiencia interactiva y versátil en un entorno familiar y cotidiano.

Sin embargo, se ofrece un análisis crítico sobre la implementación de la IA en el ámbito específico de la criminología, evaluando su potencial para transformar la administración de justicia y la prevención multinivel del delito. Un sistema

---

[515] Goodfellow, Ian, at. elt., “Deep Learning,” trad. propia, Cambridge, MIT Press, 2016, p. 8, disponible en: *http://imlab.postech.ac.kr/dkim/class/csed514_2019s/DeepLearningBook.*pdf (fecha de consulta: 1 de agosto de 2024), cita textual traducida: "Deep learning is a particular kind of machine learning that achieves great power and flexibility by learning to represent the world as a nested hierarchy of concepts, with each concept defined in relation to simpler concepts, and more abstract representations computed in terms of less abstract ones."

[516] Vid. Techopedia, "Meta AI Chatbot Now Available on WhatsApp: Here’s How To Use It." *Techopedia*, 23 de julio de 2024, disponible en: https://www.techopedia.com/news/meta-ai-chatbot-now-available-on-whatsapp-heres-how-to-use-it, (fecha de consulta: 1 de agosto de 2024).

complejo adaptable en criminología se estructura a partir de la interacción dinámica de sus componentes, adaptándose continuamente a las fluctuaciones y cambios en el entorno social y criminal. Estos sistemas se caracterizan por su capacidad de evolución, respondiendo a las necesidades de la prevención y el control del crimen mediante la integración de datos de diversas fuentes, como estadísticas de criminalidad, estudios sociológicos y registros policiales. La adaptabilidad se manifiesta en la capacidad del sistema para modificar sus estrategias en función de nuevos datos y cambios en las condiciones sociales.

La inteligencia en el contexto de un sistema criminológico se refiere a la capacidad del sistema para procesar y analizar grandes volúmenes de datos, extrayendo información relevante que guíe la toma de decisiones. Similar a cómo los algoritmos en internet analizan datos de usuarios para prever necesidades y sugerir productos o servicios, los cuerpos policiales pueden emplear análisis computacionales para predecir y prevenir delitos.[517] Esta metodología mejora la conciencia situacional a nivel táctico y estratégico, permitiendo a las fuerzas del orden trabajar de manera más proactiva y eficiente con recursos limitados.

La inteligencia artificial, como componente del SCI, permite el procesamiento de datos a una escala y velocidad inigualables. A través de técnicas como el aprendizaje automático, la IA puede descubrir patrones y correlaciones ocultas, facilitando la predicción de actividades delictivas y la planificación de estrategias de intervención. Sin embargo, es crucial evaluar de manera ética y crítica la implementación de la IA, considerando aspectos como la privacidad de los datos, el potencial sesgo en los algoritmos y las implicaciones de confiar en sistemas automatizados para la toma de decisiones. Es fundamental que estos sistemas sean

[517] Vid. Perry, Walter L., et. alt., “Predictive Policing: The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations,”. Santa Monica, RAND Corporation, 2013, p. 2, disponible en: *https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR233.html* (fecha de consulta: 31 de julio de 2024), paráfrasis traducida: "Many similar relationships in law enforcement can be explored with predictive policing. Police agencies use computer analysis of information about past crimes, the local environment, and other pertinent intelligence to 'predict' and prevent crime. The idea is to improve situational awareness at the tactical and strategic levels and to develop strategies that foster more efficient and effective policing. With situational awareness and anticipation of human behavior, police can identify and develop strategies to prevent criminal activity by repeat offenders against repeat victims. These methods also allow police departments to work more proactively with limited resources."

transparentes y comprensibles, ya que un proceso de decisión que carezca de estas características puede resultar ilegítimo y autocrático, comprometiendo la confianza y la justicia en el sistema penal.[518]

En cuanto a los riesgos asociados, se debe tener en cuenta la posibilidad de que la IA refuerce sesgos preexistentes. Por ejemplo, investigaciones han demostrado que algunos sistemas de predicción de crimen, como el algoritmo COMPAS, han mostrado sesgos raciales, sobrerrepresentando el riesgo de reincidencia en personas de color.[519] Este problema se debe a que la IA aprende de los datos con los que es entrenada, y si estos datos reflejan prejuicios históricos, el sistema perpetuará dichos prejuicios.

Además, la dependencia excesiva de la automatización puede reducir la capacidad de los seres humanos para cuestionar o revisar decisiones cruciales, especialmente en contextos judiciales donde es vital considerar matices y contextos individuales. Según Pasquale, los sistemas algorítmicos funcionan como *cajas negras*,[520] es decir, aunque podemos observar las entradas y salidas de información,

---

[518] Vid. Završnik, A. “Criminal justice, artificial intelligence systems, and human rights,” trad. propia, *ERA Forum* 20, 2020, p. 568, disponible en: *https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00602-0* (fecha de consulta: 31 de julio de 2024), paráfrasis traducida: "The technical sophistication of the new AI systems used in decision-making processes in criminal justice settings often leads to a 'black box' effect. [...] AI systems must be transparent when used in judicial settings, where the explainability of decisions and the transparency of the reasoning are of significant—even civilizational—value. A decision-making process that lacks transparency and comprehensibility is not considered legitimate and non-autocratic."

[519] Vid. Angwin, J., et. alt., "Machine Bias: There’s software used across the country to predict future criminals. And it’s biased against blacks," trad. propia, *ProPublica*, 2016, disponible en: *https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing* (fecha de consulta: 31 de julio de 2024), paráfrasis traducida: “Yet something odd happened when Borden and Prater were booked into jail: A computer program spat out a score predicting the likelihood of each committing a future crime. Borden — who is black — was rated a high risk. Prater — who is white — was rated a low risk.”

[520] Vid. Pasquale, Frank, “The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information,” trad. propia, Estados Unidos, Harvard University Press, 2015, p. 3, disponible en: *https://books.google.com/books?id=ll3rBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=The+Black+Box+Society:+The+Secret+Algorithms+That+Control+Money+and+Information&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiEmIHJ3dGHAxWTHUQIHe-nBHYQ6wF6BAgFEAE* (fecha de consulta: 31 de julio de 2024), paráfrasis traducida: “The term 'black box' is a useful metaphor for doing so, given its own dual meaning. It can refer to a recording device, like the data-monitoring systems in planes, trains, and cars. Or it can mean a system whose workings are mysterious; we can observe its inputs and outputs, but we cannot tell how one becomes the other. We face these two meanings daily: tracked ever more closely by firms and government, we have no clear idea of just how far much of this information can travel, how it is used, or its consequences.“

los procesos internos que conducen a las decisiones permanecen opacos y misteriosos.

Para mitigar estos desafíos, proponemos que el SCI sea supervisado por un equipo multidisciplinario de expertos en seguridad ciudadana, derecho, criminalística, criminología, servicio social, psicología, pedagogía, seguridad pública, política criminal y políticas públicas, entre otras disciplinas. La IA debería servir como herramienta para generar propuestas de solución, mientras que las decisiones finales serían tomadas por este equipo, garantizando una comprensión integral y matizada de los problemas, incorporando consideraciones éticas, legales y sociales.

La genealogía de la IA en criminología se remonta a las primeras aplicaciones de sistemas expertos en la década de 1970, influenciadas por desarrollos fundamentales en la lógica matemática, como el trabajo de George Boole, un sistema general para la expresión precisa y la manipulación de proposiciones.[521] Desde entonces, la evolución de la IA ha estado marcada por avances en la ciencia de datos, la estadística, la informática y cambios filosóficos en la concepción del conocimiento y la ética. Una influencia significativa ha sido el funcionalismo, que conceptualiza la mente y el comportamiento humano como sistemas de procesamiento de información, facilitando la creación de algoritmos que imitan la toma de decisiones humanas. Por ejemplo, Putnam sugiere que, al igual que una máquina de *Turing* equipada con *órganos sensoriales electrónicos* puede formular y probar teorías sobre su propia estructura,[522] los sistemas de IA pueden ser

[521] Vid. Copi, Irving M., et. alt., "Introduction to Logic," trad, propia, 14.ª ed. Harlow, Pearson Education Limited, 2014, p. 616, disponible en: *https://dorshon.com/wp-content/uploads/2018/03/Introduction-to-Logic.pdf* (fecha de consulta: 31 de julio de 2024), paráfrasis traducida: "A major advance toward Leibniz's goal was made by the English logician George Boole, who devised, in his Investigation into the Laws of Thought (1854), a general system for the accurate expression and thus manipulation of propositions. This system laid the groundwork for the development of logical machines, foreshadowing modern electronic computers and the use of Boolean logic in electrical circuits."

[522] Vid. Putnam, Hilary, "Minds and Machines," In Sidney Hook (ed.), Dimensions Of Mind: A Symposium, New York, University Press, 1960 p. 363, disponible en: *https://e-l.unifi.it/pluginfile.php/914635/mod_folder/content/0/lezione%207%20-%20Putnam%20-%20Minds%20and%20Machines.pdf?forcedownload=1* (fecha de consulta: 31 de julio de 2024), paráfrasis traducida: "To obtain such an analogue, let us identify a scientific theory with a 'partially-interpreted calculus' in the sense of Carnap. Then we can perfectly well imagine a Turing machine which generates theories, tests them (assuming that it is possible to 'mechanize' inductive logic to

diseñados para simular procesos mentales mediante la generación y prueba de teorías basadas en datos sensoriales. Aunque este enfoque ha sido criticado por su reduccionismo, también ha permitido avances importantes en la IA.

Finalmente, el desarrollo tecnológico de la IA también ha sido influenciado por la cibernética y la teoría de sistemas, que enfatizan la retroalimentación y la adaptabilidad en los sistemas complejos. Estas teorías han sido fundamentales para el desarrollo de algoritmos que no sólo procesan información, sino que también pueden adaptarse y aprender de nuevos datos, mejorando continuamente su rendimiento. Según los principios de la cibernética, Wiener asegura que algunas de las actividades más características de los sistemas complejos sólo pueden explicarse como procesos circulares, donde las señales emergen de un componente, como el sistema nervioso, y reingresan a través de retroalimentación, destacando así la importancia de comprender estos sistemas como un todo integrado.[523]

En conclusión, la integración de la IA en el sistema criminológico ofrece oportunidades sin precedentes para mejorar la eficiencia y precisión en la prevención y control del crimen. No obstante, es esencial abordar de manera crítica los riesgos asociados, incluyendo la perpetuación de sesgos y la pérdida de control humano. Una comprensión genealógica de la IA permite apreciar las influencias filosóficas y tecnológicas que han moldeado su desarrollo, así como sus implicaciones éticas y sociales. Al avanzar en la implementación de estas tecnologías, es fundamental equilibrar la innovación con la responsabilidad ética,

---

some degree), and 'accepts' theories which satisfy certain criteria (e.g. predictive success). In particular, if the machine has electronic 'sense organs' which enable it to 'scan' itself while it is in operation, it may formulate theories concerning its own structure and subject them to test."

[523] Vid. Wiener, Norbert, "Cybernetics: Or, Control and Communication in the Animal and the Machine," trad. propia, 2a ed., Reino Unido, M.I.T. Press, 1961, p. 8, disponible en: . *https://books.google.com.mx/books?id=NnM-uISyywAC&pg=PR4&dq=Wiener,+IN.+(1948).+%22Cybernetics:+Or+Control+and+Communication+in+the+Animal+and+the+Machine.%22+MIT+Press.&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi6wcHp8tGHAxVAHEQIHeNgCowQ6wF6BAgHEAE* (fecha de consulta: 31 de julio de 2024), paráfrasis traducida: "…some of its most characteristic activities are explicable only as circular processes, emerging from the nervous system into the muscles, and re-entering the nervous system through the sense organs... This seemed to us to mark a new step in the study of that part of neurophysiology which concerns not solely the elementary processes of nerves and synapses but the performance of the nervous system as an integrated whole."

asegurando que la IA se utilice de manera justa y transparente para fortalecer el sistema de justicia penal.

5.2 Propuestas de primer nivel preventivo para fortalecer la PCPVCMNF

Este subcapítulo comienza con un análisis detallado del sistema educativo estadounidense, basado en observaciones directas y experiencias personales, como la visita a la escuela preparatoria *Wood River High School.* Aquí se destaca la infraestructura educativa excepcional, que incluye edificios modernos, amplias áreas verdes, comedores bien mantenidos, una enfermería equipada, laboratorios avanzados de ciencias y tecnología, y canchas deportivas de alta calidad. Estas características subrayan cómo el sistema educativo en Estados Unidos garantiza los derechos fundamentales de los estudiantes, alineándose con el interés superior de la niñez y promoviendo prácticas educativas de alta calidad y equidad.

Así mismo, se contrasta esta experiencia con el sistema educativo mexicano, subrayando la importancia de una inversión sólida en educación para el desarrollo integral de los estudiantes. En Estados Unidos, la educación básica es gratuita y abarca no sólo el aspecto académico, sino también el bienestar general de los alumnos. Esto se refleja en la disponibilidad de comedores, enfermerías, auditorios, estadios, casilleros personalizados y un sistema de transporte escolar eficiente. La infraestructura y los recursos en las escuelas públicas son fundamentales para crear un entorno que fomente tanto el aprendizaje como el bienestar físico y emocional de los estudiantes.

Se profundiza en el ámbito pedagógico a través de las perspectivas de los teóricos John Dewey y Paulo Freire. Dewey enfatiza una pedagogía basada en la experiencia, promoviendo la interacción continua entre el alumno y su entorno para asegurar que los estudiantes alcancen su máximo potencial. Freire, por su lado, critica el modelo de educación bancaria y defiende una pedagogía que fomente la reflexión crítica y la participación activa de los estudiantes.[524] Ambos enfoques

[524] Vid. Freire, Paulo, “Pedagogía del Oprimido,” Buenos Aires, Siglo XXI Argentina Editores, 1972, p. 60, disponible en: *https://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf* (fecha de consulta: 4 de agosto de 2024).

destacan la necesidad de un entorno educativo que vaya más allá del rendimiento académico y abarque el desarrollo holístico de los estudiantes. Se sugiere que el sistema educativo mexicano podría adoptar estos modelos para mejorar su eficacia y contribuir a la prevención de la violencia en el núcleo familiar.

Para mejorar el sistema educativo mexicano y prevenir la violencia, se propone una estrategia híbrida que combine la gestión eficiente de recursos con la participación activa de los padres y la protección estatal de los derechos fundamentales de la niñez. Esta estrategia debe centrarse en un sistema educativo subsidiado y liderado por el Estado, con una infraestructura integral que cubra desde la educación inicial hasta la media superior. Inspirada en el modelo educativo estadounidense y fundamentada en la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner,[525] esta propuesta busca crear un entorno educativo seguro y propicio para el desarrollo integral de los estudiantes, abordando de manera efectiva las prácticas y costumbres que perpetúan la violencia.

Finalmente, se plantea la implementación de un SCI como una herramienta esencial para abordar las raíces de la violencia desde una etapa temprana. Basado en la teoría de los sistemas complejos adaptables y potenciado por inteligencia artificial, el SCI se centrará en la educación, la concientización y la formación de valores cívicos. Este sistema utilizará tecnologías avanzadas para monitorear y evaluar la efectividad de las políticas educativas, asegurando un acceso equitativo a la educación y promoviendo un entorno libre de violencia y discriminación. La capacidad de la IA permitirá una adaptación continua de los programas educativos, garantizando que se aborden de manera efectiva las necesidades de todos los estudiantes y se promueva una educación inclusiva y justa.

5.2.1 Reflexión crítica del sistema educativo norteamericano

Las observaciones directas son el fundamento de los argumentos presentados en este análisis. Se relata la visita a la escuela preparatoria Wood River High School en los Estados Unidos con el objetivo de obtener información sobre

[525] Vid Op. Cit., Bronfenbrenner, Urie, “La Ecología Del Desarrollo Humano: Experimentos en Entornos Naturales y Diseñados.”

cursos de inglés para adultos. Al ingresar al recinto, se observó una infraestructura impresionante, que incluye un edificio moderno, amplias áreas verdes, comedores bien mantenidos, una enfermería completamente equipada, laboratorios de ciencias y tecnología de última generación, y canchas deportivas comparables a las de un campus universitario. La vivencia de haber residido varios años en Estados Unidos permite identificar la salvaguarda y garantía de los derechos fundamentales previstos por el interés superior de la niñez en comparación con México.

Como inmigrante y estudiante del idioma inglés, la observación del alto nivel de equipamiento y recursos disponibles en las escuelas públicas estadounidenses resulta notable. Este contraste con el sistema educativo de México destaca la importancia de la inversión en educación y su impacto en el desarrollo integral de los estudiantes. En Estados Unidos, la educación básica es gratuita y las instituciones educativas se preocupan no sólo por la enseñanza académica, sino también por el bienestar general de los alumnos. Esto se manifiesta en la disponibilidad de comedores, enfermerías, auditorios, estadios con césped, casilleros personalizados y un sistema de transporte escolar eficiente.

En el sistema educativo norteamericano, se observa que la infraestructura educativa y los recursos disponibles en las escuelas públicas son factores fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes. John Dewey, enfatiza la importancia de un enfoque progresivo en la educación que considere tanto las necesidades internas de los estudiantes como las condiciones objetivas del entorno educativo.

> En el pensamiento pedagógico de Dewey el concepto de experiencia educativa es inseparable de su concepción del método experimental —o «pensamiento reflexivo» como lo denomina en otros textos—, como la forma de aprendizaje hacia la cual se debe conducir al alumno y a la cual se debe habituar. Como es frecuente en Dewey, la relación entre estos dos conceptos es circular, puesto que el desarrollo de la experiencia educativa crea las condiciones que requieren y facultan prácticas de pensamiento experimental, y el efecto de las prácticas de pensamiento experimental es la producción de mayores experiencias educativas en el futuro.[526]

[526] Dewey, John, “Experiencia y educación,” trad. de Lorenzo Luzuriaga, Edición y estudio introductorio de Javier Sáenz Obregón, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004, p. 40, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1qIP3juN0yFlmTUZVb88tNOqdebr4-P53/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 26 de julio de 2024).

Dewey critica las concepciones tradicionales y progresistas de la educación por sus enfoques unilaterales, proponiendo en su lugar una pedagogía basada en la experiencia que promueva la continuidad y la interacción entre el alumno y su entorno. La infraestructura y los recursos, tales como comedores, enfermerías, laboratorios y áreas deportivas, contribuyen a crear un ambiente educativo que apoya no sólo el aprendizaje académico, sino también el bienestar físico y emocional de los estudiantes. Esta visión integral es fundamental para garantizar que todos los alumnos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, lo cual es un aspecto que podría ser implementado en el sistema educativo mexicano para mejorar su eficacia y contribuir a la prevención de la violencia en el núcleo familiar.

Por su lado, la crítica de Paulo Freire a la educación bancaria resalta la necesidad de una pedagogía que fomente la reflexión crítica y la participación activa de los estudiantes. Según Freire, este modelo de educación tradicional, que él denomina *bancario*, convierte a los estudiantes en receptores pasivos de información, despojándolos de su capacidad crítica y creativa.[527] En contraste, Freire aboga por una educación problematizadora, la cual se fundamenta en la creatividad y promueve una auténtica acción y reflexión sobre la realidad.[528] Este enfoque pedagógico no sólo permite a los estudiantes cuestionar y transformar su entorno, sino que también respeta su naturaleza como seres en constante proceso de devenir.

El enfoque de la educación problematizadora encuentra eco en el sistema educativo norteamericano, donde se enfatiza no sólo el rendimiento académico, sino también el bienestar físico y emocional de los estudiantes. Según los *Lineamientos para el Apoyo Socioemocional en las Comunidades Educativas*, se recomienda la implementación de programas de bienestar y salud mental, junto con actividades extracurriculares que fomenten el desarrollo de habilidades socioemocionales.[529] Además, se destaca la importancia de promover la

[527] Vid. Op. cit. Freire, Paulo, “Pedagogía del Oprimido,” p. 52.
[528] Vid. Ibídem, p. 60.
[529] Vid. Gallardo Ch., Gonzalo, “Sostener cuidar: Lineamientos para el Apoyo Socioemocional en las Comunidades Educativas,” Santiago de Chile, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,

participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Este enfoque integral no sólo apoya el desarrollo holístico de los estudiantes, sino que también se alinea con la visión de Paulo Freire, que aboga por una educación transformadora y empoderadora, centrada en la reflexión crítica y la acción.[530]

Al aplicar estos principios en el sistema educativo mexicano, se podría fomentar una educación más inclusiva y holística, que no sólo mejore la calidad educativa, sino que también contribuya a la prevención de la violencia en el núcleo familiar. La implementación de una infraestructura adecuada y la promoción de políticas educativas inclusivas son esenciales para crear un entorno educativo que promueva la igualdad y el respeto mutuo, siguiendo tanto las teorías de Freire como las de John Dewey, quien también aboga por una educación que responda a las necesidades del entorno y promueve la experiencia educativa como medio de aprendizaje.

Un estudio reciente resalta que los programas educativos que promueven la diversidad y la inclusión no sólo benefician a los estudiantes de minorías, sino que también mejoran el rendimiento académico y social de todos los alumnos. La investigación, tal como se detalla en el artículo *Clases diversas en las escuelas de Estados Unidos. La importancia de una educación inclusiva* de Gustavo A. Glatzel, demuestra que las aulas diversas fomentan un entorno de aprendizaje donde se valoran diferentes perspectivas y se desarrollan habilidades de pensamiento crítico.[531] Este enfoque inclusivo requiere que los docentes adapten las prácticas educativas y trabajen colaborativamente para desarrollar nuevas rutinas a través de la diferenciación, un proceso metodológico que atiende a estudiantes con diferentes habilidades en la misma clase.

UNICEF, 2021, p. 5, disponible en: *https://www.unicef.org/chile/media/5701/file/Sostener%20cuidar%20.pdf#:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fchile%2Fmedia%2F5701%2Ffile%2FSostener%2520cuidar%2520.pdf%0AVisible%3A%200%25%20* (fecha de consulta: 4 de agosto de 2024).

[530] Op. Cit. Vid. Freire, Paulo, “Pedagogía del Oprimido,” p. 60.

[531] Vid. Glatzel, Gustavo A., "Clases diversas en las escuelas de Estados Unidos. La importancia de una educación inclusiva," *Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva*, no. 2, 2017, p. 81, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6545216.pdf (fecha de consulta: 26 de julio de 2024).

El imperativo categórico kantiano, que nos insta a actuar de manera que nuestras acciones puedan convertirse en una ley universal, refuerza la necesidad de una educación inclusiva. Al implementar programas que valoran y respetan la diversidad, no sólo estamos cumpliendo con un deber moral hacia cada individuo, sino que también estamos estableciendo un estándar ético universal para la educación. Este principio ético se refleja en la práctica educativa al reconocer y atender las necesidades de todos los estudiantes, promoviendo así un entorno donde cada alumno puede alcanzar su máximo potencial. La educación inclusiva, por lo tanto, no es sólo una estrategia pedagógica, sino una manifestación concreta del compromiso moral de tratar a cada persona con dignidad y respeto, asegurando que nuestras acciones educativas sean justas y equitativas para todos.

A lo largo de nuestra estancia en Estados Unidos, observamos cómo la implementación de estos principios teóricos y programas específicos tenían un impacto tangible en la vida de los estudiantes. Las escuelas no sólo se preocupan por cumplir con los estándares académicos, sino que también se enfocan en el desarrollo emocional y social de los alumnos. Este enfoque holístico, respaldado por una infraestructura adecuada y recursos suficientes, permite que los estudiantes se sientan valorados y apoyados en su proceso educativo.

En conclusión, la revisión crítica del sistema educativo norteamericano subraya la importancia de adoptar un enfoque inclusivo y holístico en la educación. Este enfoque, que aboga por la diversidad y la provisión adecuada de recursos, es fundamental para garantizar que todos los estudiantes puedan desarrollar su máximo potencial. De manera similar, en México, la implementación de prácticas que promuevan el respeto y la protección de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes puede ser altamente beneficiosa. Para mejorar el sistema educativo mexicano, es esencial invertir en infraestructura educativa, desarrollar programas inclusivos y centrarse en el bienestar integral de los estudiantes. Estos pasos son cruciales para fomentar un entorno educativo equitativo y efectivo.

5.2.1.1 Propuesta híbrida para la gestión educativa y la prevención de la violencia

Se propone una estrategia híbrida que sustituya la actual gestión populista de las becas por una basada en una metodología científica, junto con la salvaguarda

estatal de los derechos fundamentales y la participación activa de los padres de familia. Esta estrategia es esencial para lograr resultados óptimos en el desarrollo adecuado de niñas, niños y adolescentes. Es crucial establecer un sistema educativo subsidiado y liderado por el Estado, en el que los derechos fundamentales previstos por el interés superior de la niñez transformen la crianza y la educación, así como la corrección de prácticas y costumbres arraigadas en el núcleo familiar que idealizan el patriarcado. Este enfoque no sólo fortalece la legitimidad de las estrategias de crianza y educación, sino que también asegura que las soluciones sean pertinentes y efectivas en la prevención de la violencia.

En este orden de ideas, es indispensable que el Estado demuestre con hechos la gestión eficiente de recursos y la protección del interés superior de la niñez. Esto es igualmente importante para construir la confianza de las familias y garantizar que las políticas tengan un impacto real en la erradicación de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Recordemos que el primer nivel preventivo se enfoca en eliminar las condiciones que fomentan la desigualdad y la violencia mediante medidas educativas y socioeconómicas.

La propuesta se centra en fortalecer la estructura educativa estatal mexicana, siguiendo un modelo integral y homologado desde la educación inicial hasta la media superior, inspirándose en el modelo educativo norteamericano. Este enfoque busca materializar la salvaguarda de los derechos fundamentales previstos en el interés superior de la niñez, garantizando una infraestructura educativa adecuada y universal.

Para comenzar, y con base en nuestra tesis hasta este momento desarrollada, el fortalecimiento de la infraestructura educativa estatal mexicana es esencial para prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Inspirándose en el modelo educativo norteamericano, se proponen una serie de medidas que aborden las necesidades educativas y de infraestructura de manera integral y universal, asegurando la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes. El modelo educativo norteamericano ha demostrado ser efectivo en proporcionar una educación integral que promueve el desarrollo personal y social de los estudiantes. La teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner, uno de los pilares de este

modelo, proporciona un marco integral para entender cómo diferentes entornos influyen en el desarrollo del niño.

Bronfenbrenner, psicólogo ruso-estadounidense, desarrolló la teoría ecológica del desarrollo humano, también conocida como la teoría bioecológica.[532] Esta teoría postula que el desarrollo humano es influenciado por diferentes tipos de sistemas ambientales que interactúan entre sí. Estos sistemas son: el microsistema, el entorno más cercano al individuo, incluyendo la familia, la escuela, los compañeros y los vecinos; el mesosistema, las interrelaciones entre los microsistemas, como la relación entre la familia y la escuela; el exosistema, entornos que no interactúan directamente con el niño, pero que afectan su desarrollo, como el lugar de trabajo de los padres; el macrosistema, influencias culturales y sociales más amplias que afectan a todos los otros sistemas; y el cronosistema, los cambios y transiciones en la vida del individuo a lo largo del tiempo.

Bronfenbrenner destacó la importancia de considerar estos múltiples niveles de influencia al diseñar políticas y programas educativos. Su trabajo tuvo un impacto significativo en programas como *Head Start*, que proporciona educación integral, salud, nutrición y servicios parentales a niños de bajos ingresos y sus familias. “El programa Head Start, llevado a cabo a escala nacional en los Estados Unidos, ha sido diseñado para proporcionarles a los niños procedentes de un nivel socioeconómico bajo la oportunidad de alcanzar un nivel mejor en el momento de comenzar su etapa de escolarización.”[533]

Las investigaciones concluyeron que los niños desarrollan habilidades cognitivas, emocionales y sociales más sólidas cuando están rodeados de entornos de apoyo.[534] Según Cobo, Cristóbal, y John W. Moravec:

> Es fundamental estrechar la relación entre el mundo de la educación y el del trabajo a fin de diseñar estrategias conjuntas para atender los desafíos de una 'economía de los talentos' donde una fuerza laboral multicompetente se convierte en un capital de alto valor estratégico en la era del conocimiento. El aprendizaje invisible está especialmente presente en las prácticas de adquisición y transferencia de conocimientos

[532] Vid Op. Cit., Bronfenbrenner, Urie, “*La Ecología Del Desarrollo Humano: Experimentos en Entornos Naturales y Diseñados.”*
[533] Vid Ibídem, p. 146.
[534] Vid. Ídem.

> tácitos, en las habilidades blandas (social skills) y en las llamadas 'competencias para el siglo XXI'. La educación actual demanda profesores y estudiantes que desarrollen habilidades propias de un agente del conocimiento, capaz de administrar, crear, traducir y exportar distintas fuentes de información en diversos formatos y para distintos públicos y contextos.[535]

Este enfoque destaca la importancia de una educación integral que incluya comedores, enfermerías, aulas, bibliotecas, laboratorios, auditorios y canchas deportivas óptimamente equipados, así como áreas verdes y un servicio de transporte escolar. Los comedores escolares propuestos deben proporcionar alimentos nutritivos y equilibrados, garantizando que todos los estudiantes tengan acceso a una dieta adecuada para su desarrollo integral.

Además, cada escuela debe contar con una enfermería equipada con los recursos necesarios tanto para atender lesiones graves como para brindar primeros auxilios. Esto incluye personal capacitado y recursos médicos adecuados. La construcción de canchas de fútbol y baloncesto, techadas o en espacios cerrados, así como áreas verdes, fomentará la actividad física y el bienestar mental de los estudiantes.

Asimismo, las bibliotecas deben estar bien equipadas con una variedad de recursos educativos y tecnológicos. Los laboratorios y aulas deben contar con los recursos óptimos según el área del conocimiento para la que se pretende usar, promoviendo el aprendizaje práctico y experimental.

Igualmente, la implementación de casilleros personalizados para el alumnado, personal administrativo y docente mejorará la organización y seguridad de los bienes personales. La provisión de unidades de transporte escolar y áreas de resguardo para estos asegurará que todos los estudiantes tengan acceso a la educación sin importar la distancia de sus hogares a las escuelas.

La participación de los padres se garantizará contractualmente, mediante el pago de las cuotas de inscripción, el compromiso de enviar a sus hijos a la escuela

---

[535] Cobo, Cristóbal, y John W. Moravec, “Aprendizaje Invisible: Hacia una Nueva Ecología de la Educación,” Barcelona, i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2011, p. 104, disponible en: *https://books.google.com/books?id=gRm1NfSWWqsC&printsec=frontcover&dq=aprendizaje+invisible&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjj9NqJtcWHAxWzLkQIHTYUAq0Q6wF6BAgIEAE* (fecha de consulta: 26 de julio de 2024).

y la compra de útiles y uniformes escolares. Además, deberán asistir, a solicitud de las instituciones educativas, a eventos, talleres u otras actividades enfocadas al desarrollo de sus hijos. Este compromiso asegurará que los padres estén activamente involucrados en la educación de sus hijos y contribuyan al mantenimiento y mejora de las instalaciones escolares

Además, en línea con la teoría de las garantías individuales de Luigi Ferrajoli, este enfoque refuerza la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación, estableciendo mecanismos que no sólo aseguren el acceso a la misma, sino también la calidad y continuidad de la participación educativa de los menores. Según Ferrajoli, las garantías individuales implican no sólo la protección de derechos básicos, sino también la implementación de medidas que faciliten el ejercicio efectivo de estos derechos.[536] De esta manera, el compromiso contractual de los padres se alinea con el principio de corresponsabilidad y refuerza el marco normativo que protege el derecho fundamental a la educación.

En este orden de ideas, será necesario reformar el Artículo tercero de la CPEUM, en donde se deberá dejar claro que la educación pública básica en México es subsidiada por el Estado. Este cambio, además de ser una solución híbrida, actualiza el paradigma con el que se fundó la vigente CPEUM, evitando enemistades y malinterpretaciones de la ciudadanía. Al prever que es gratuita, esta palabra ha provocado en la ciudadanía enojo y falta de compromiso con un supuesto Estado progresista que debería proporcionar educación completamente gratuita, lo cual empíricamente, y como lo comprobamos en esta tesis, no es así.

En cuanto a la sostenibilidad financiera (subsidio estatal), esta se logrará mediante la correcta y científica gestión y redireccionamiento del actual presupuesto de egresos de la federación en materia de prevención de primer, segundo y tercer nivel. Además, se propone una estrategia gubernamental de segundo nivel preventivo, en la cual la aplicación deontológica de las multas de tránsito fortalecerá el erario federal. Conscientes de ello, esta propuesta amerita una investigación propia y de la misma envergadura que la abordada en esta tesis, pero se presenta

[536] Vid. Op. Cit. Ferrajoli, Luigi, *Derechos y garantías: La ley del más débil,* p. 52.

como un primer paso hacia la financiación sostenible de las mejoras educativas, y de la cual estaríamos dispuestos a llevar a cabo.

Las becas serían gestionadas de manera científica sobre tres pilares principales: excelencia académica, pobreza extrema e inclusión. Este enfoque se fundamentaría en las teorías de Paulo Freire y en el modelo del Estado de bienestar (Welfare State). Las becas no sólo premiarán el mérito académico, sino que también brindarán apoyo a aquellos alumnos en situación de vulnerabilidad económica, cubriendo el pago de colegiatura, uniformes y útiles escolares, y promoverán la inclusión de todos los estudiantes, independientemente de sus antecedentes socioeconómicos, o lugar de origen.

En conclusión, el fortalecimiento de la estructura educativa estatal mexicana mediante un enfoque universal y homologado, inspirado en el modelo educativo norteamericano y fundamentado en la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner, es esencial para prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. La implementación de una infraestructura educativa adecuada y la promoción de políticas integrales que salvaguarden los derechos fundamentales de los niños y jóvenes garantizarán un entorno seguro y propicio para su desarrollo integral.

Las propuestas específicas presentadas, respaldadas por estudios y programas exitosos, ofrecen un camino viable para mejorar el sistema educativo, lo que se traduce en un cambio de paradigma o, en otros términos, en una correcta interpretación del paradigma neoliberal norteamericano. Este enfoque no sólo tiene el potencial de reducir la violencia contra la mujer, sino que también puede fomentar una sociedad más justa y equitativa, conforme a los principios deontológicos kantianos.

5.2.1.2 IA y educación Integral

Para abordar la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, es crucial implementar un enfoque preventivo que ataque las raíces del problema desde sus etapas más tempranas. Este apartado propone la creación de un SCI diseñado específicamente para el primer nivel preventivo, enfocado en la educación, la concientización y la formación de valores cívicos. Este sistema se basa en la teoría de los sistemas complejos adaptables y se estructura como una estrategia educativa

integral que incluye tanto tecnologías de vigilancia como herramientas tecnológicas educativas, potenciadas por IA.

En primer lugar, se destaca la relevancia del primer nivel preventivo, desarrollado bajo la teoría de Urie Bronfenbrenner, la cual enfatiza la influencia de diversos sistemas ambientales en el desarrollo humano. Bronfenbrenner subraya cómo el desarrollo humano es moldeado por una serie de sistemas interconectados; "La ecología del desarrollo humano se halla en el punto de convergencia entre las ciencias biológicas, psicológicas y sociales, que influyen sobre la evolución del individuo en la sociedad,"[537] lo que justifica la necesidad de un enfoque integral en la educación y la prevención de la violencia desde una etapa temprana. En rigor, la prevención primaria se centra en modificar los factores del microsistema que fomentan la violencia y la desigualdad. Además, este enfoque se sustenta en los principios deontológicos kantianos, que abogan por la creación de un entorno justo y equitativo, basado en el respeto a los derechos fundamentales de todos los individuos.

En segundo lugar, se plantea el uso de tecnología inteligente para la fiscalización y evaluación de la estrategia preventiva. El sistema criminológico propuesto integrará herramientas tecnológicas avanzadas, como plataformas de e-learning y aplicaciones móviles, complementadas con IA. Según Stuart Russell y Peter Norvig en *Inteligencia Artificial: un enfoque moderno,* los algoritmos de IA son capaces de mejorar la calidad de sus salidas gradualmente, tomando decisiones cada vez más precisas a medida que disponen de más datos y tiempo de procesamiento.[538] En este contexto, la IA se utilizará para adaptar el contenido educativo y de concientización a las necesidades y características específicas de los usuarios, optimizando continuamente los materiales mediante el análisis de patrones de uso y retroalimentación.

---

[537] Vid. Op. Cit. Bronfenbrenner, Urie, "*La Ecología Del Desarrollo Humano: Experimentos en Entornos Naturales y Diseñados*," p. 32.

[538] Vid. Russell, Stuart J., y Peter Norvig, "Inteligencia Artificial: un enfoque moderno," 2ª ed. Madrid, Pearson Educación, 2004, p. 1103, disponible en: *https://luismejias21.files.wordpress.com/2017/09/inteligencia-artificial-un-enfoque-moderno-stuart-j-russell.pdf* (fecha de consulta: 2 de agosto de 2024).

Por otra parte, John H. Holland, en *Complexity: A Very Short Introduction*, destaca la capacidad de los sistemas complejos adaptables para evolucionar y ajustarse a nuevas condiciones. Señala que "En los bosques tropicales, la adaptación es un proceso continuo y relativamente rápido, que genera constantemente nuevas interacciones y nuevas especies."[539] Esta idea es aplicable al sistema educativo, donde se concentra el primer nivel preventivo dentro del marco del microsistema ecológico de Urie Bronfenbrenner.

Estas plataformas, al estar conectadas a internet, permitirán un acceso ininterrumpido y asegurarán la disponibilidad constante de recursos. La teoría de los sistemas complejos adaptables explica cómo estos sistemas tecnológicos, al estar interconectados y operados de manera continua, pueden adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad educativa y responder eficazmente a nuevas amenazas o desafíos emergentes. Además, la IA se utilizará para detectar comportamientos anómalos o señales de alarma si la salvaguarda de sus derechos fundamentales no están siendo garantizados y otorgados, facilitando intervenciones tempranas y personalizadas.

Así pues, la implementación de un SCI es esencial para prevenir la violencia y promover un entorno educativo seguro y equitativo. Según el Informe Global de Monitoreo de la Educación 2020 de la UNESCO, las políticas educativas que integran la igualdad de género y la inclusión son fundamentales para crear un entorno de aprendizaje seguro y propicio; "La falta de comprensión sobre la naturaleza holística de los servicios de la primera infancia y la ausencia de coordinación entre proveedores de salud, nutrición y educación dificultan la inclusión."[540] Aunado a esto último, la incorporación de módulos sobre igualdad de

---

[539] Holland, John H. "*Complexity: A Very Short Introduction,"* trad. propia*,* Oxford, Oxford University Press, 2014, p. 1, disponible en: *https://books.google.com/books?id=lmygAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Holland,+John+H.+Complexity:+A+Very+Short+Introduction.+Oxford+University+Press,+2014,+pdf&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiFzLWn89aHAxUZJUQIHTxNE9oQ6wF6BAgGEAE* (fecha de consulta: 2 de Agosto de 2024), cita traducida: "Adaptation in rainforests is an ongoing, relatively rapid process, continually yielding new interactions and new species."

[540] UNESCO, "Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education: All Means All," trad. propia, Paris, UNESCO, 2020, p. 45, disponible en: *https://reliefweb.int/attachments/ac4efd7d-f76f-31ec-8bb4-9eade7a12d56/Global%20Education%20Monitoring%20Report%202020%20-%20Inclusion%20and%20education%20-%20All%20means%20all%20%5BEN%5D.pdf* (fecha de consulta: 3 de agosto de 2024), cita traducida: "Lack of understanding of the holistic nature of early

género, derechos humanos, educación cívica y ética, cultura de legalidad y resolución pacífica de conflictos en el currículo educativo es clave para fomentar valores de respeto y convivencia pacífica desde una edad temprana.

Estas políticas, identificadas y sugeridas por el SCI deben enfocarse no sólo en el contenido curricular, sino también en la formación de docentes, la infraestructura escolar y el acceso a recursos educativos para todos los estudiantes, independientemente de su género o contexto socioeconómico. El establecimiento de normas claras y la provisión de recursos adecuados son necesarios para garantizar que las escuelas sean espacios seguros y libres de discriminación y violencia.

En este orden de ideas, la instalación estratégica de un SCI que funcione a su vez como un sistema de videovigilancia en todas las instituciones educativas es esencial para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Brandon C. Welsh y David P. Farrington, en The Oxford Handbook of Crime Prevention, destacan la eficacia de la videovigilancia en la prevención de incidentes de violencia, aportando evidencia de su impacto positivo en la seguridad escolar. Cabe mencionar que, según los autores, sólo se consideraron las evaluaciones de más alta calidad para determinar qué medidas de prevención son efectivas, lo que asegura la fiabilidad de los resultados que muestran un efecto preventivo significativo de la videovigilancia en estos contextos.[541]

A diferencia de esta revisión de videovigilancia análoga, el SCI propuesto, complementado con IA será objetivo y automático ya que utilizará algoritmos para monitorear las imágenes en tiempo real, permitiendo la identificación de posibles actos de violencia o acoso, notificando y sugiriendo toma de decisiones a las

childhood services hinders inclusion, as does absence of coordination among health, nutrition and education providers."

[541] Welsh, Brandon C., y David P. Farrington, "The Oxford Handbook of Crime Prevention," trad. propia, Oxford University Press, 2014, p. 12, disponible en: *https://books.google.com/books?id=ZRo1DQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Welsh,+Brandon+C.,+y+David+P.+Farrington.+The+Oxford+Handbook+of+Crime+Prevention.+Oxford+University+Press,+2012.&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwimgrXpodmHAxVmL0QIHTVsIa4Q6wF6BAgJEAE* (fecha de consulta: 3 de Agosto de 2024), cita trasducida: "The reviews included only the highest quality evaluations in arriving at conclusions about what works, what does not work, and what is promising. This had the effect of excluding many situational measures with demonstrated preventive effects."

autoridades pertinentes. Al estar conectado a internet, el sistema de videovigilancia estará activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, proporcionando una vigilancia continua y una capacidad de respuesta rápida.

En cuanto al trabajo evaluativo, utilizando indicadores como la tasa de deserción escolar, las calificaciones de los alumnos y el número de becas solicitadas por excelencia académica, pobreza extrema e inclusión, se propone que además de la implementación de un sistema integral de videovigilancia inteligente, se instalen tabletas personalizadas en las aulas. Estas tabletas, conectadas a internet y al SCI, substituirán a los libros de texto gratuitos, contribuyendo al cuidado del medio ambiente al reducir la tala de árboles necesaria para la fabricación de libros. Además, mejorarán la salud de los alumnos al eliminar la necesidad de cargar mochilas pesadas llenas de herramientas didácticas.

Potenciadas con inteligencia artificial, las tabletas analizarán el avance académico de los estudiantes y sus datos para identificar patrones y tendencias. Esto permitirá una evaluación precisa de la efectividad de las políticas implementadas, facilitando un seguimiento continuo y detallado del desempeño escolar y la eficacia de las estrategias, gracias a la conexión a internet y la operación 24/7 del sistema.

La teoría de los sistemas complejos adaptables subraya la capacidad del sistema para ajustarse dinámicamente a los cambios en el entorno educativo. Esto asegurará que las políticas se adapten a las realidades cambiantes y respondan de manera eficaz a los desafíos emergentes, garantizando una mejora continua en la calidad de la educación y la inclusión de todos los estudiantes.

Finalmente, es fundamental que todas las acciones emprendidas dentro del marco del SCI respeten los principios éticos y legales establecidos, especialmente en relación con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. David Lyon, en su obra *Surveillance Studies: An Overview*, aborda de manera exhaustiva las preocupaciones éticas y de privacidad relacionadas con el uso de tecnologías de vigilancia. Lyon destaca la necesidad imperiosa de proteger los derechos de las personas que son objeto de monitoreo. En sus palabras, "la vigilancia dirige su atención en última instancia hacia los individuos... La vigilancia

es rutinaria; ocurre como una parte 'normal' de la vida cotidiana en todas las sociedades que dependen de la administración burocrática y de algunos tipos de tecnología de la información."[542] Este enfoque subraya cómo la vigilancia se ha institucionalizado como una práctica sistemática y habitual, lo que recalca la importancia de abordar cuidadosamente las implicaciones éticas y de privacidad que estas prácticas conllevan.

Para ello, se implementarán medidas que garanticen que las intervenciones educativas y de concientización sean inclusivas, respetuosas y libres de discriminación. Asimismo, se cumplirán rigurosamente las normativas de protección de datos personales en el uso de tecnologías de monitoreo y evaluación, particularmente la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), establecen un marco regulatorio esencial para el uso de tecnologías de monitoreo y evaluación.

Esta ley garantiza que las entidades manejen los datos personales con altos estándares de responsabilidad y transparencia. El principio del consentimiento informado, consagrado en los Artículos 6 y 8, asegura que los individuos sean debidamente informados y consientan el tratamiento de sus datos personales, lo cual es crítico en el manejo de información sensible. Además, el Artículo 19 impone la obligación de implementar medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger los datos contra accesos no autorizados y otras vulneraciones, reconociendo la importancia de la seguridad en un entorno digital avanzado. La ley también protege los derechos de los individuos a través de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), detallados en los Artículos 16 y 22, permitiendo a los ciudadanos controlar cómo se utilizan sus datos. Estos derechos son fundamentales en un entorno donde las tecnologías de monitoreo

[542] Lyon, David, “Surveillance Studies: An Overview,” trad, propia, Cambridge, Polity Press, 2007, p.14, disponible en: *https://books.google.com/books?id=_dTHJgh3-f0C&printsec=frontcover&dq=Lyon,+David,+%E2%80%9CSurveillance+Studies:+An+Overview,%E2%80%9D+trad,+propia,+Cambridge,+Polity+Press,+2007&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjNvOfht9mHAxVrJUQIHZL2NeEQ6wF6BAgGEAE* (fecha de consulta: 3 de Agosto de 2024), cita traducida: "Surveillance directs its attention in the end to individuals... Surveillance is routine; it occurs as a ‘normal’ part of everyday life in all societies that depend on bureaucratic administration and some kinds of information technology."

pueden amenazar la privacidad, promoviendo así un equilibrio entre el avance tecnológico y el respeto por los derechos fundamentales de las personas

En conclusión, la creación de un SCI para el primer nivel preventivo de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar es fundamental para abordar las causas estructurales de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar y la violencia contra la mujer por razones de género (feminicidio). Este sistema, a través de una educación integral, tiene como objetivo transformar las normas y valores que perpetúan la violencia, promoviendo un entorno social justo, inclusivo e igualitario. La implementación de herramientas tecnológicas avanzadas potencializadas con IA, y el uso de un enfoque basado en la teoría de los sistemas complejos adaptables, garantizarán la efectividad y adaptabilidad de las intervenciones. Este enfoque innovador facilita la transición hacia el paradigma de seguridad ciudadana, alejándose del enfoque conservador de libre mercado que actualmente domina la política criminal en el primer nivel preventivo de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar; la educación.

5.3 Propuestas de segundo nivel preventivo para fortalecer la PCPVCMNF

Este subcapítulo presenta un análisis detallado del sistema de procuración de justicia en los Estados Unidos, con un enfoque particular en un caso de violencia doméstica que se presenció. A partir de esta experiencia, se explora cómo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) ofrece protección a las víctimas, destacando el proceso que va desde la canalización a una casa de transición hasta la asignación de una vivienda permanente segura. Este sistema no sólo proporciona un refugio temporal, sino que también busca ofrecer soluciones a largo plazo para las víctimas, subrayando la importancia de un sistema judicial eficaz que garantice el derecho a una vida libre de violencia y una vivienda digna. Se sugiere que estas experiencias pueden servir como un modelo para mejorar otros sistemas judiciales, como el mexicano.

Así mismo, se aborda la necesidad de fortalecer la FEADVVG del Estado de México, dotándola de los recursos humanos y técnicos necesarios. Esto incluye la ampliación del número de fiscales especializados, policías de investigación y peritos forenses, así como la independencia y profesionalización de estos actores para

asegurar una justicia efectiva y la protección de los derechos humanos. Se analizan ejemplos de mejores prácticas internacionales y se proponen recomendaciones para adaptarlas al contexto mexicano, enfatizando la importancia de una infraestructura adecuada que proporcione espacios seguros para las víctimas y un enfoque integral y multidisciplinario en la administración de justicia.

Además, se subraya la responsabilidad del Estado en la protección de derechos fundamentales, como el derecho a una vida libre de violencia y a una vivienda digna. Se discuten las implicaciones legales y éticas de las medidas necesarias para garantizar estos derechos, destacando la necesidad de políticas públicas efectivas y de una infraestructura socio estatal que apoye a las víctimas de violencia doméstica.

El subcapítulo también examina la importancia de la profesionalización de las fuerzas de seguridad, destacando la necesidad de una formación continua y especializada que permita a los policías manejar situaciones complejas con competencia técnica y ética. Se analiza el concepto de profesionalización desde diversas perspectivas, subrayando la relevancia de la educación formal y la obtención de títulos universitarios, así como la implementación de estándares rigurosos para la capacitación y promoción dentro de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, se propone el desarrollo de un SCI que utilice tecnologías avanzadas, como la videovigilancia y la inteligencia artificial, para monitorear y analizar situaciones de riesgo. Este sistema, basado en la teoría de los sistemas complejos adaptables, busca ajustarse dinámicamente a nuevas amenazas y necesidades de seguridad, garantizando al mismo tiempo el respeto a la privacidad y los derechos humanos. Se exploran las implicaciones éticas y legales de este tipo de sistema, con el objetivo de prevenir la violencia y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas del orden, promoviendo un entorno más seguro y justo para todas las mujeres.

5.3.1 Reflexión crítica del sistema de procuración de justicia norteamericano a través de un caso familiar

Este apartado se fundamenta en nuestra experiencia al llegar a Estados Unidos. La emoción de un nuevo comienzo se mezclaba con la incertidumbre, nos

alojamos el 6 de octubre del año 2004 en el apartamento de mis suegros junto a mis dos cuñados pequeños. Pronto nos dimos cuenta de una realidad que no imaginábamos: la violencia doméstica que mi suegra estaba sufriendo. La tensión en el hogar era palpable y, con el tiempo, entendimos que ya se había iniciado un proceso de denuncia. La situación escaló hasta que ella fue canalizada a una casa de transición.

Durante aproximadamente dos semanas, las víctimas vivieron en una casa de transición, una residencia que ofrecía refugio temporal a mujeres víctimas de violencia doméstica. Las visitábamos a menudo, observando de primera mano los esfuerzos del sistema para protegerlos. Finalmente, se les asignó una vivienda permanente en una unidad habitacional estatal. Este apartamento, con dos habitaciones, sala, cocina y baño, ofrecía una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. La seguridad es estricta; sólo se permite el acceso a visitantes registrados, y un sofisticado sistema de reconocimiento facial y vehicular garantiza que ningún agresor pueda acercarse. Esta experiencia nos abrió los ojos a la complejidad y la importancia de un sistema procurador de justicia eficaz en la protección del derecho humano a una vida libre de violencia, así como al derecho a una vivienda digna.

En este contexto, el sistema de procuración de justicia norteamericano, especialmente bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), está diseñado para proporcionar una respuesta integral y efectiva a la violencia doméstica. Esta ley no sólo se centra en la protección inmediata de las víctimas, sino que también aborda su bienestar a largo plazo, asegurando el derecho a una vida libre de violencia y a una vivienda digna.

Por ejemplo, observamos cómo el sistema no sólo ofrecía refugio temporal, sino también una solución permanente. La casa de transición donde estuvieron inicialmente no era sólo un techo, sino un lugar donde podían recibir apoyo emocional y psicológico, crucial para su recuperación. El proceso de reubicación a una vivienda permanente fue exhaustivo, incluyendo evaluaciones de servicio social para determinar el subsidio estatal adecuado. Esta vivienda, dentro de una unidad habitacional especializada, no sólo proporcionaba seguridad física, sino también un entorno donde podía empezar a reconstruir su vida con dignidad.

La implementación de la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) es ejemplar en este contexto, estableciendo una serie de medidas destinadas a proteger a las víctimas de violencia doméstica. Estas medidas incluyen la emisión de órdenes de alejamiento, la provisión de refugios seguros, y la asistencia legal y financiera. En la práctica, estas disposiciones se han manifestado de manera efectiva. Por ejemplo, la notificación al agresor sobre las consecuencias legales de persistir en conductas violentas, junto con la estricta seguridad implementada en la unidad habitacional, son manifestaciones concretas de cómo la ley busca disuadir la reincidencia y garantizar la protección de las víctimas.

Es fundamental que los sistemas de procuración de justicia, como el mexicano, se adapten y aprendan de experiencias previas para proteger de manera efectiva los derechos humanos, incluido el derecho a una vida libre de violencia y a una vivienda digna. Estas mejoras no sólo benefician a las víctimas actuales, sino que también establecen las bases para un futuro más seguro y justo para las próximas generaciones. En última instancia, la protección de los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales es una responsabilidad del Estado que requiere una acción decidida.

5.3.1.1 El fortalecimiento de la FEADVVG

Para garantizar una respuesta eficaz y oportuna a los casos de violencia contra la mujer, es esencial que la FEADVVG cuente con una dotación adecuada de fiscales, policías de investigación y peritos. En primer lugar, la asignación de más fiscales especializados en violencia contra la mujer por razones de género es crucial para procesar la alta carga de trabajo y garantizar que cada caso reciba la atención debida. Según un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), una proporción adecuada de fiscales por cantidad de denuncias es esencial para la eficiencia y eficacia del sistema judicial.

> …no todas las instituciones de asistencia jurídica en América Latina pueden ejercer independencia de las autoridades ejecutivas o judiciales o de los fiscales, lo que limita la libertad y capacidad de acción de los defensores públicos en esos países. Según una encuesta realizada por

> la AIDEF en 2014, sólo el 47% de las instituciones de defensoría pública que participaron en la encuesta tenían independencia institucional.[543]

Estos datos destacan la importancia de la independencia y una proporción adecuada de fiscales y defensores para asegurar la efectividad del sistema judicial. Para la FEADVVG, se recomienda un incremento del personal de fiscales en al menos un 50%, acompañado de capacitación continua en derechos humanos y seguridad ciudadana. Como lo demuestra el exitoso modelo implementado en España, donde la formación especializada ha sido clave para mejorar la respuesta judicial a la violencia contra la mujer.

> Es necesario insistir en la formación de todos los operadores jurídicos concernidos por esta materia, formación jurídica integral, y multidisciplinar, que incluya aspectos normativos, y enjuiciamiento con perspectiva de género, entre otros. [...] Los poderes públicos encargados de la 'Administración de la Justicia' (servicios prestacionales) deberían tomar en consideración la insostenible situación de los Juzgados mixtos con competencias en materia de violencia sobre la mujer, pues no pueden prestar un servicio público adecuado (ni en el fondo ni en la forma) a la víctima y a sus hijos e hijas.[544]

En rigor, el *Consejo General del Poder Judicial Español* enfatiza la necesidad de una formación integral y multidisciplinaria para los operadores jurídicos, incluyendo una perspectiva de género, y señala los desafíos en la organización judicial que afectan la calidad del servicio prestado a las víctimas.

Por su lado, el fortalecimiento de la Policía de Investigación (PDI) es esencial, especialmente considerando que la FEADVVG cuenta actualmente con sólo 68 agentes de investigación, un número claramente insuficiente para abordar

---

[543] Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “Global Study on Legal Aid: Global Report,” trad. propia, Vienna, United Nations, 2016, p. 29, disponible en: *https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/LegalAid/Global_Study_on_Legal_Aid_-_FINAL.pdf* (fecha de consulta: 3 de Agosto de 2024), cita traducida: "However, not all legal aid institutions in Latin America can exercise independence from executive or judicial authorities or prosecutors, which limits the freedom and capacity of public defenders in those countries. According to a survey conducted by AIDEF in 2014, only 47% of the public defender institutions that participated in the survey had institutional independence."

[544] Consejo General del Poder Judicial, “Guía de Buenas Prácticas para la Toma de Declaración de Víctimas de Violencia de Género,” Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2022, pp. 13, 14, disponible en: *https://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20JUDICIAL/ESTUDIOS%20Y%20ENCUESTAS/ESTUDIOS/FICHERO/20221013%20Gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20para%20la%20toma%20de%20declaraci%C3%B3n%20de%20v%C3%ADctimas%20de%20violencia%20g%C3%A9nero.pdf* (fecha de consulta: 3 de Agosto de 2024).

adecuadamente los problemas del Estado de México. Según Emily Weisburst, un aumento del 10% en la tasa de empleo policial puede llevar a una disminución del 13% en los delitos violentos y del 7% en los delitos contra la propiedad, lo que evidencia la eficacia de un mayor número de agentes para mejorar la seguridad pública.[545] Además, la incorporación de más agentes puede ser una inversión costo-efectiva, ya que un aumento de un oficial por cada 10,000 habitantes podría reducir significativamente varios tipos de delitos, como robos, agresiones graves y hurtos.[546]

Por otro lado, las tasas de empleo policial en Estados Unidos son significativamente más bajas que el promedio mundial, lo que subraya la necesidad de invertir en el personal policial para enfrentar adecuadamente la criminalidad.[547] Por lo tanto, y con base en las cifras expuestas y desarrolladas por Emily Weisburst, es imperativo aumentar el número de PDI´s en un 100%, priorizando la especialización en violencia familiar, lo cual también debe incluir la formación en técnicas avanzadas de investigación forense y cibercrimen, dada la creciente incidencia de violencia digital.

Además, la importancia de los peritos especializados en la recolección de pruebas es fundamental para respaldar las denuncias y garantizar un proceso judicial justo. Actualmente, la FEADVVG enfrenta un déficit significativo de peritos en áreas esenciales como criminalística, medicina forense y psicología. Este déficit limita la capacidad de proporcionar una atención adecuada a las víctimas y afecta la calidad de la evidencia obtenida. Según un estudio de la *American Psychological Association* (APA), la intervención de expertos en el ámbito forense es crucial para

---

[545] Vid. Weisburst, Emily, “Safety in Police Numbers: Evidence of Police Effectiveness from Federal COPS Grant Applications,” trad. propia, USA, 2017, pp. 6, 7 disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2845099 (fecha de consulta: 3 de Agosto de 2024), paráfrasis traducida: "I find that a 10% increase in police employment rates reduces violent crime rates by 13% and property crime rates by 7%, estimates that overlap with the upper range of effects in the existing literature."

[546] Vid. Ibídem, p, 24, paráfrasis traducida: "If the average district increased its police employment rate by 1 officer per 10,000 residents, or 2.4 total additional police officers, the primary results imply that there would be an annual reduction of 1.5 robberies, 3 aggravated assaults, 20.9 larcenies, and 8.5 vehicle thefts, while increasing the number of burglaries by 5.3."

[547] Vid. Ibídem, p. 3, paráfrasis traducida: "Policymakers are increasingly focused on the need for criminal justice reform. United States incarceration rates are over 300% larger than the world average and rates of police employment are 35% less than the world average."

ofrecer una atención integral a las víctimas y para la obtención de pruebas esenciales que puedan ser utilizadas en los procedimientos judiciales.[548]

Los peritos forenses, especialistas en diversas disciplinas como la psicología, juegan un papel vital en la resolución de conflictos legales.

> Los psicólogos proporcionan su experiencia a los sistemas judiciales, administrativos y educativos, incluyendo, pero no limitado a, examinar o tratar a personas en anticipación o como consecuencia de procedimientos legales, contractuales o administrativos; ofrecer opinión experta sobre cuestiones psicológicas en forma de informes amicus o testimonios ante cuerpos judiciales, legislativos o administrativos; actuar en calidad de adjudicadores; servir como consultores en juicios o de otra manera ofrecer su experiencia a abogados, tribunales u otros.[549]

Su trabajo es especialmente relevante en la evaluación de la condición psicológica de los involucrados, ya sea como víctimas o acusados. La precisión y la integridad de la evidencia que estos profesionales presentan son indispensables para asegurar que se respeten los derechos de todas las partes implicadas y que se administre justicia de manera imparcial. Además, la APA asegura que es imperativo que los peritos mantengan su imparcialidad y eviten cualquier conflicto de interés, ya que cualquier sesgo podría comprometer la validez de sus testimonios y, por consiguiente, la equidad del proceso judicial.[550]

En conclusión, la presencia de peritos especializados no sólo garantiza una atención más comprensiva y humanizada a las víctimas, sino que también asegura que los procesos judiciales se basen en pruebas confiables y objetivas. Esto es

---

[548] Vid. American Psychological Association, "Specialty Guidelines for Forensic Psychology," trad, propia, *American Psychologist 68*, no. 1, Washington DC, American Psychological Association, 2013, pp. 11, 12, *disponible en: https://www.apa.org/pubs/journals/features/forensic-psychology.*pdf (fecha de consulta: 3 de agosto de 2024), paráfrasis traducida: "Therapeutic services can have significant effects on current or future legal proceedings. Forensic practitioners are encouraged to consider these effects and minimize any unintended or negative effects on such proceedings or therapy when they provide therapeutic services in forensic contexts."

[549] Ibídem, p. 7, cita traducida: "Psychologists provide expertise to judicial, administrative, and educational systems including, but not limited to, examining or treating persons in anticipation of or subsequent to legal, contractual, or administrative proceedings; offering expert opinion about psychological issues in the form of amicus briefs or testimony to judicial, legislative, or administrative bodies; acting in an adjudicative capacity; serving as a trial consultant or otherwise offering expertise to attorneys, the courts, or others."

[550] Vid. Ibídem, pp. 8, 9, paráfrasis traducida: "Forensic practitioners strive for accuracy, impartiality, fairness, and independence... Forensic practitioners recognize the adversarial nature of the legal system and strive to treat all participants and weigh all data, opinions, and rival hypotheses impartially... Forensic practitioners refrain from taking on a professional role when personal, scientific, professional, legal, financial, or other interests or relationships could reasonably be expected to impair their impartiality, competence, or effectiveness..."

especialmente relevante en los casos de violencia contra la mujer, donde la justicia depende en gran medida de la calidad de la evidencia presentada. Por ello, se recomienda un incremento del 70% en el número de peritos, con una distribución equilibrada de especialidades y una adecuada cobertura en todas las regiones del Estado de México, para garantizar la disponibilidad y eficacia en la respuesta judicial.

Finalmente, la mejora de la infraestructura de la FEADVVG es esencial para ofrecer un entorno seguro y adecuado para las víctimas, especialmente madres de familia y menores de edad. Esto incluye la creación de espacios dedicados para el apoyo psicológico, la atención médica y la asesoría legal, así como áreas seguras para recibir a las víctimas. Un enfoque integral y coordinado es crucial para abordar problemas complejos como la violencia familiar, mejorando la prestación de servicios y fortaleciendo las rutas de acceso, lo cual resulta en mejores resultados para las familias y las comunidades.[551] Por ejemplo, la creación de Centros de Atención Integral (CAI) dentro de la infraestructura de la fiscalía es una estrategia que ha demostrado ser efectiva en países como Noruega y Nueva Zelanda, donde las víctimas reciben atención integral en un sólo lugar. La meta es incrementar el acceso a información clara y apoyo mediante una variedad de plataformas, asegurando que el sistema pueda adaptarse a las diferentes necesidades de las personas afectadas.[552]

Estos centros deben incluir instalaciones adecuadas para brindar apoyo psicológico, médico y legal, además de contar con áreas de juego y cuidado infantil

[551] Vid. Ministry of Social Development, “Family Violence Funding Approach: Building a Sustainable Future for Family Violence Services,” trad. propia, New Zealand, Ministry of Social Development, 2019, p. 15, disponible en: *https://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/work-programmes/initiatives/family-and-sexual-violence/family-violence-funding-approach.pdf*. (fecha de consulta: 4 de agosto de 2024), paráfrasis tradicida: "A whānau-centred approach is holistic and strengths-based. It values the complexity of relationships within a whānau, and recognises the significance of these relationships to either help or hinder a person’s wellbeing. People should be able to define their own whānau. A whānau-centred approach means we will be open to all the diverse forms of whānau, without pre-conceptions or judgement".

[552] Vid. Ibídem, p. 17, paráfrasis traducida: "Our aim is to increase the accessibility of clear information and support to anyone affected by family violence, with access via a number of platforms, including web, phone, instant messaging, email, social media and SMS/text. The portal will offer a range of services that would be designed with provider’s expertise but may include: information and guidance, low-level counselling and support, education, referrals and warm transfer to local service providers."

para menores. Un enfoque centrado en la violencia familiar es fundamental, valorando la complejidad de las relaciones dentro de una familia y reconociendo la importancia de estos vínculos para el bienestar de las personas, garantizando que los servicios se adapten a las diversas formas de violencia familiar sin prejuicios.[553] Además, se planea invertir en apoyo regional para mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta del sector frente a la violencia familiar, asegurando una mejor sincronización de los servicios y una respuesta más eficaz a las necesidades de las familias.[554]

En conclusión, fortalecer la FEADVVG requiere un enfoque multifacético que abarque tanto la mejora del personal como la infraestructura. La implementación de estas medidas, basadas en evidencia y en las mejores prácticas internacionales, es esencial para garantizar una respuesta integral y efectiva a la violencia contra la mujer en el núcleo familiar en el Estado de México. Este fortalecimiento no sólo mejorará la capacidad de la fiscalía para gestionar casos de violencia contra la mujer, sino que también contribuirá a una mayor confianza pública en el sistema de justicia y a la protección efectiva de los derechos de las mujeres. Estos objetivos son fundamentales dentro del marco del paradigma de la seguridad ciudadana y la orientación del paradigma neoliberal norteamericano. Además, es crucial considerar el derecho fundamental a una vivienda digna como un componente vital para la protección de las víctimas. La profesionalización de la policía también juega un

[553] Vid. Ibídem, p. 18, paráfrasis traducida: "The regional support will form part of the integrated family violence system that is being developed with the joint venture and help strengthen existing infrastructure, which will support sector collaboration. Evidence indicates that an integrated system is required to meet the challenges faced in preventing and responding to complex problems such as family violence and the Backbone Organisations will be essential in delivering this by improving service delivery, strengthening routes to services, increasing consistency, allowing local innovations in dealing with family violence and, thus, resulting in better outcomes for families, whānau and communities"

[554] Vid. Ibídem, pp. 17, 18, paráfrasis traducida: "Across New Zealand, some regions and some providers have strong affiliations and connections, but not all. Providers have told us that working collectively is important and they want to be supported to collaborate and work better together. To support the capability of regions to respond to family violence, we plan to invest in regional support to deliver the following functions: communication, consistency and interaction between providers and the wider sector; enable an enhanced coordinated approach; respond to whānau needs, with improved enhanced service synchronisation; increase wider sector's capability when responding to family violence"

papel importante en este contexto, y ambos temas se abordarán en detalle en los apartados siguientes.

5.3.1.1.1 Vivienda digna como estrategia preventiva de la violencia contra la mujer

En el contexto de las estrategias dirigidas a prevenir la violencia contra la mujer en el ámbito familiar, es crucial reconocer la intersección de los derechos fundamentales. Una vivienda adecuada es un derecho reconocido internacionalmente y, en el caso de México, está respaldado por el Artículo 4º de la CPEUM, que establece el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Para las mujeres víctimas de violencia familiar, que se encuentran en una situación vulnerable, tener la oportunidad de gestionar y acceder a una vivienda segura y fuera del alcance del agresor constituye una medida preventiva óptima y esencial.

Las Naciones Unidas han afirmado de manera contundente que "La falta de protección del derecho de la mujer a una vivienda adecuada puede hacerla más vulnerable a la violencia doméstica."[555] Este enunciado resalta la preocupante relación entre el riesgo que enfrenta la mujer al no tener garantizado dicho derecho, viéndose obligada a regresar al núcleo familiar donde es violentada. Cuando una mujer se ve privada de una vivienda segura, se afectan múltiples aspectos de su vida, incluyendo su seguridad física y emocional. La falta de un espacio seguro incrementa la vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia doméstica. Una vivienda insegura, caracterizada por un ambiente insano y violento, crea un entorno propicio para el ejercicio de poder y control por parte de los agresores en el núcleo familiar.

La vivienda insegura no sólo se refiere a las condiciones físicas, sino también a las implicaciones que tiene en la vida cotidiana de las mujeres. La falta de espacio adecuado y el hacinamiento generan un ambiente de estrés y tensión constante, afectando negativamente tanto la salud física como el bienestar psicológico de las

[555] Organización de las Naciones Unidas (ONU), “La mujer y el derecho a una vivienda adecuada,” New York y Ginebra, ONU, 2012, p. 86, disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.11.2_sp.pdf (consultado el 24 de junio de 2023).

mujeres. Cuando una mujer vive en un espacio inseguro, reducido e indigno, se encuentra en una posición de vulnerabilidad. "…la falta de espacio y el hacinamiento inciden directamente en el bienestar físico y psicológico de la mujer."[556] Estas condiciones de vida insanas contribuyen al deterioro de la salud de las mujeres, aumentando su vulnerabilidad a enfermedades y agravando los efectos de situaciones abusivas.

La falta de acceso a un lugar seguro y digno por parte de las autoridades procuradoras de justicia puede llevar a la dependencia económica y emocional de las mujeres. Según Leilani Farha, "La falta de hogar es la inaceptable consecuencia del fracaso por parte de los Estados en la implementación del derecho a una vivienda adecuada."[557] Esto pone de manifiesto la grave situación que enfrentan las mujeres víctimas de violencia que son canalizadas a albergues o a la única casa de transición con la que se cuenta en el Estado de México, perpetuando su dependencia económica y emocional y colocándolas en una posición vulnerable que las obliga a regresar al ambiente del que intentaron escapar.

Por estas razones, la falta de infraestructura estatal que salvaguarde el derecho fundamental a una vivienda digna incrementa el riesgo de que se repita la violencia contra la mujer o que incluso escale a su manifestación más extrema, el feminicidio. La ausencia de viviendas de interés social público, junto con la carencia de programas y protocolos gubernamentales que garanticen el derecho a una vivienda digna y segura, deja a las mujeres en una situación de desprotección y vulnerabilidad.

Es necesario adoptar un enfoque integral y multidimensional en la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, que aborde tanto el ámbito público como el privado. Esto implica no sólo abrogar la vigilancia policial en la vía pública, la separación coercitiva del victimario del núcleo familiar y la canalización de las víctimas a albergues temporales, sino también implementar políticas y

---

[556] Ibídem, p. 83.

[557] Farha, Leilani, "Resumen del informe de la Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada," *A/HRC/31/54*, ONU, 2024, p. 1, disponible en: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AnnualReports.aspx (fecha de consulta: 27 de julio de 2024).

programas que promuevan, respeten, protejan y garanticen sus derechos fundamentales de forma integral, como lo establece la CPEUM. Este enfoque debe incluir la canalización inmediata y directa de las víctimas a casas de transición, y posteriormente a viviendas seguras, dignas, y permanentes subsidiadas por el Estado.

El imperativo categórico kantiano, que exige actuar de manera que nuestras acciones puedan convertirse en una ley universal, se alinea perfectamente con la obligación de proporcionar viviendas seguras y dignas. Al garantizar que todas las mujeres tengan acceso a una vivienda adecuada, se reconoce y respeta su dignidad intrínseca, promoviendo una sociedad en la que la protección y el respeto a los derechos humanos sean la norma. Este compromiso no sólo refleja un principio ético fundamental, sino que también establece un estándar universal que combate la raíz de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, una verdadera estrategia neoliberal que asegura un entorno seguro y digno para todas las mujeres.

Es fundamental construir una infraestructura socio estatal que cumpla con lo estipulado en la CPEUM. Esto incluye el desarrollo de casas de transición óptimas y suficientes, así como unidades habitacionales especializadas propiedad del Estado mexicano. La justificación de estas propuestas no es poca cosa, sino que se fundamenta en las reformas en materia de derechos humanos de 2011 que transformaron nuestro modelo jurídico *iuspositivista* en uno híbrido, incorporando elementos del *iusnaturalismo*. De esta manera, se puede comenzar de forma efectiva y coherente la protección y garantía del derecho a una vivienda digna, un aspecto clave en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. El desarrollo de esta infraestructura no sólo cumple con los mandatos constitucionales, sino que también representa un paso esencial hacia la interpretación correcta del paradigma neoliberal norteamericano.

Por su lado, el paradigma neoliberal norteamericano promueve una gestión híbrida que articula la eficiencia del mercado con la intervención estatal en sectores estratégicos. Este enfoque se alinea con la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a viviendas seguras y dignas, especialmente para grupos vulnerables, como las mujeres violentadas. Según esta visión, el interés financiero y material se

integra con el bienestar ciudadano, buscando un equilibrio donde el dinero se utilice no sólo para generar ganancias para los inversionistas, sino también para proveer servicios esenciales que mejoren la calidad de vida.

En esta estrategia híbrida, el Estado desempeña un rol crucial, actuando como el principal garante de los derechos fundamentales y responsable de la infraestructura y subsidio de los servicios de vivienda. A su vez, el sector privado colabora mediante contratos y licitaciones, complementando los esfuerzos estatales y asegurando una gestión eficiente de los recursos. Esta colaboración público-privada se fundamenta en la teoría de Thomas Hobbes, que considera al Estado como el poder supremo encargado de dirigir y gestionar tanto los recursos públicos como las iniciativas privadas en beneficio del bien común.

> En efecto: gracias al arte se crea ese gran Leviatán que llamamos república o Estado (en latín civitas) que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural para cuya protección y defensa fue instituido; y en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero; los magistrados y otros funcionarios de la judicatura y ejecución, nexos artificiales; la recompensa y el castigo (mediante los cuales cada nexo y cada miembro vinculado a la sede de la soberanía es inducido a ejecutar su deber) son los nervios que hacen lo mismo en el cuerpo natural; la riqueza y la abundancia de todos los miembros particulares constituyen su potencia; la salus populi (la salvación del pueblo) son sus negocios; los consejeros, que informan sobre cuantas cosas precisa conocer, son la memoria; la equidad y las leyes, una razón y una voluntad artificiales; la concordia, es la salud; la sedición, la enfermedad; la guerra civil, la muerte.[558]

De este modo, al igual que en el paradigma neoliberal norteamericano, se plantea una síntesis dialéctica donde la colaboración entre el sector público y privado permite alinear los intereses económicos con la protección de derechos sociales.

En consecuencia, serán necesarias reformas legislativas fundamentadas en un análisis crítico y basadas en evidencia científica. La LGAMVLV debe ser revisada y fortalecida para abordar las deficiencias en su implementación. Esto incluye, por un lado, la derogación de aquellas estrategias coercitivas que exacerban y provocan el escalamiento de la violencia familiar en feminicidio, como las medidas de protección judicial que no resuelven el problema ni protegen los derechos fundamentales de las víctimas. Por otro lado, se deben incluir protocolos para

[558] Op. Cit. Hobbes, Thomas, “Leviatán,” p. 2.

solicitar la protección del derecho en pugna. Además, es esencial que las reformas consideren el paradigma de la seguridad ciudadana, adaptando las mejores prácticas globales al contexto específico de México.

5.3.1.1.2 Profesionalización de la policía

La profesionalización de los trabajadores del Estado con funciones de seguridad pública es fundamental para garantizar la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos en el desempeño del segundo nivel preventivo. Este concepto, profundamente arraigado en la historia y la etimología, ha evolucionado a lo largo del tiempo para incluir no sólo la adquisición de habilidades técnicas y conocimientos especializados, sino también un compromiso ético con la práctica profesional. Dicho compromiso se evidencia a través de un capital cultural institucional sólido. En el contexto contemporáneo, y basado en nuestro análisis, la correcta profesionalización implica una formación continua y especializada que abarca desde el nivel de licenciatura hasta el posgrado. Esta formación asegura que los servidores públicos estén preparados para enfrentar los desafíos complejos de su labor.

Este análisis crítico-deontológico se enmarca en el Artículo 21 de la CPEUM y en la teoría del capital cultural de Pierre Bourdieu.[559] Proponemos un enfoque integral que enfatiza la necesidad de una educación profesional para el personal de seguridad pública, tanto para nuevos aspirantes como para elementos en activo. La implementación de estas estrategias contribuirá al desarrollo integral del personal y a la transición hacia un paradigma de seguridad ciudadana eficiente y ético. La adopción de estos métodos no sólo mejora la competencia técnica y ética del personal, sino que también fortalece la confianza pública en las instituciones de seguridad, creando un entorno más seguro y justo para todos.

Para iniciar, el concepto de profesionalización se puede rastrear a través de varias etapas históricas y lingüísticas que han moldeado su significado actual.

[559] Vid. Bourdieu, Pierre, "Poder, derecho y clases sociales," 2ª ed. trad. de María José Bernuz Beneitez, Andrés García Inda, María José González Ordovás y Daniel Oliver Lalana, Bilbao, Editorial Desclée de Brouwer, 2001, p. 136, disponible en: *https://erikafontanez.com/wp-content/uploads/2015/08/pierre-bourdieu-poder-derecho-y-clases-sociales.pdf* (fecha de consulta: 29 de julio de 2024).

Etimológicamente, el término *profesionalización* proviene del verbo *profesionalizar*, que a su vez deriva de *profesional*. Con base en la RAE, la palabra *profesional* tiene sus raíces en el latín *professio*, que significa *declaración pública* o *profesión*, y en *profiteri*, que significa *declarar públicamente*. Esta raíz etimológica denota un compromiso público y formal con una ocupación específica.

Desde la antigüedad, la profesionalización ha estado asociada con la adquisición de habilidades especializadas y el cumplimiento de estándares reconocidos. En las antiguas civilizaciones, ciertas ocupaciones, como la medicina y la jurisprudencia, requerían una formación especializada y un compromiso ético con la práctica profesional. En Egipto y Mesopotamia, la estructura social se justificaba en fundamentos religiosos, considerándose un deber religioso aceptar las formas sociales establecidas como parte del plan divino para el mundo.[560] Esta actitud fue heredada y adaptada por las sociedades medievales, aunque enfrentaron desafíos debido a ciertas incompatibilidades con las nuevas corrientes religiosas. Durante la Edad Media, el surgimiento de gremios y asociaciones profesionales formalizó aún más la profesionalización, estableciendo estándares de formación y conducta para sus miembros.

Con la Revolución Industrial, la profesionalización experimentó un cambio significativo, ya que el crecimiento de nuevas profesiones y la necesidad de formación especializada se hicieron más evidentes. La educación formal y la capacitación continua se convirtieron en componentes esenciales de la profesionalización, y las universidades y otras instituciones educativas comenzaron a desempeñar un papel crucial en este proceso. Este desarrollo se ha vinculado directamente con los procesos sociales que preparan y forman a los individuos para

---

[560] Vid. Cantor, Norman F.,"Civilization of the Middle Ages," trad. propia, Reino Unido, Harper Collins, 2015, p. 8, disponible en: *https://books.google.com/books?id=d1rHCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=The+civilization+of+the+Middle+Ages+:+a+completely+revised+and+expanded+edition+of+Medieval+history,+the+life+and+death+of+a+civilization&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjF_cDilc2HAxVlJUQIHdnZG9UQ6wF6BAgIEAE* (fecha de consulta: 29 de julio de 2024), paráfrasis traducida: "In the ancient world, in Egypt and Mesopotamia, the social structure was justified on religious grounds. It was God's plan for the world—God's will—and acceptance of the social forms was a religious duty. Medieval men inherited that attitude and built upon it. They had more difficulty than the Egyptians, in doing so however, because certain strains within Christianity were incompatible with the ancient system."

desempeñarse en el ámbito laboral, a través de un proceso educativo en instituciones de educación superior. Este proceso está orientado a que los estudiantes adquieran conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos y culturales necesarios para el ejercicio de una profesión específica.[561]

Partiendo de esta base histórica y etimológica, es importante considerar la fundamentación jurídica proporcionada por el Artículo 21 de la CPEUM. Este Artículo establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, deberán ser de carácter civil, disciplinado y profesional. Este mandato constitucional implica una serie de obligaciones y estándares que deben ser cumplidos para garantizar que las instituciones de seguridad pública operen con la máxima eficiencia, legalidad y respeto a los derechos humanos.

Para entender mejor la importancia de la profesionalización, es útil incorporar la teoría del capital cultural de Pierre Bourdieu. Según Bourdieu, el capital cultural se refiere a los conocimientos, habilidades, educación y cualquier otra ventaja que una persona posea y que le confiere un estatus más elevado en la sociedad, este capital puede existir en tres formas: incorporado, objetivado e institucionalizado.[562] El capital cultural incorporado incluye habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo, a menudo a través de la educación formal y la socialización. En el contexto de la profesionalización, una persona debe adquirir un conjunto de habilidades y conocimientos específicos que le permitan desempeñarse de manera competente en su profesión.

El capital cultural objetivado se refiere a los bienes culturales, como libros, instrumentos y otras herramientas que se utilizan en la profesión. Para un profesional, tener acceso a estos recursos puede ser fundamental para su práctica y desarrollo continuo. Por último, el capital cultural institucionalizado se refiere a los títulos académicos y credenciales que una persona posee. En términos de profesionalización, este aspecto es crucial. Los títulos académicos, como los de

[561] Vid. Fernández Pérez, Jorge A., et. alt. (eds), “Profesión, ocupación y trabajo: Eliot Freidson y la conformación del campo,” Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2022, p. 30, disponible en: *https://comunicacion-cientifica.com/wp-content/uploads/2023/02/083.-PDF-Profesion-ocupacion-y-trabajo.pdf* (fecha de consulta: 29 de julio de 2024).
[562] Vid. Op. Cit. Bourdieu, Pierre, “Poder, derecho y clases sociales,” p. 136.

licenciatura, maestría, doctorado o especialización, actúan como certificados de competencia y conocimiento reconocido oficialmente.

En este orden de ideas, la profesionalización en el contexto de las instituciones de seguridad pública debe ser entendida como la comprobable adquisición y desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar funciones de seguridad de manera competente y ética. Esto implica que los policías deben alcanzar un nivel mínimo de licenciatura, alineado con los estándares académicos de las mejores universidades de México.

Weber introduce la idea de la *ética de la responsabilidad* como un principio que debe guiar la acción de los profesionales, especialmente aquellos en roles de autoridad o impacto social.

> Diferente al comportamiento guiado por una ética absoluta o de convicciones es el comportamiento guiado por una ética de la responsabilidad, es decir, por la ética de que hay que responder de las consecuencias (previsibles) de la propia acción... ninguna ética puede evitar que la consecución de fines considerados buenos vaya unida a tener que contar con medios dudosos y con consecuencias colaterales malas. [563]

Así entonces, la profesionalización, certificada por un título profesional, implica una responsabilidad no sólo hacia la tarea específica, sino también hacia la sociedad en general. Los profesionales deben rendir cuentas de sus acciones y decisiones, lo cual es posible gracias a la formación y certificación recibida en su educación formal. La obtención de un título profesional asegura que el individuo ha sido sometido a un proceso riguroso de evaluación y formación ética.

De acuerdo con el Artículo 98 de la LGSNSP, la profesionalización se define como un proceso integral y progresivo que incluye la formación inicial, la actualización, la especialización y la alta dirección, con el objetivo de desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

La LGSNSP establece la formación inicial como una etapa crucial para asegurar que los nuevos integrantes de las instituciones policiales adquieran los

[563] Weber, Max, “La política como profesión,” Editado por Joaquín Abellán, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, p. 25, disponible en: https://teoriapoliticaseminario.home.blog/wp-content/uploads/2019/12/max-weber-2007-polc3adtica-como-profesic3b3n-1.pdf (fecha de consulta: 29 de julio de 2024).

conocimientos y habilidades básicas necesarias para su desempeño. Esta formación según su Artículo 54, debe consistir en una duración mínima de 500 horas clase, y llevarse a cabo en Academias e Institutos de Capacitación Policial tanto a nivel federal como estatal. Al proporcionar una base sólida en aspectos teóricos y prácticos, la formación inicial garantiza que los policías estén preparados para enfrentar los desafíos cotidianos de su labor, promoviendo así un estándar elevado de profesionalismo desde el comienzo de sus carreras. Esta preparación básica es esencial para el desarrollo de competencias que aseguren la efectividad y legalidad en el desempeño policial, alineándose con los principios de legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos.

Así mismo, la LGSNSP enfatiza la importancia de la actualización continua a lo largo de la carrera policial, demandando que los policías mantengan y mejoren sus habilidades y conocimientos, adaptándose a los cambios en técnicas, procedimientos y legislación relevante. Esta etapa, realizada en Academias e Institutos de Capacitación Policial, es crucial para que los policías estén siempre preparados para responder de manera efectiva y eficiente a nuevas amenazas y desafíos. La actualización continua fomenta una cultura de aprendizaje y mejora constante, lo cual es esencial para mantener la calidad del servicio y la confianza del público en las instituciones de seguridad pública.

Además de la formación y actualización, la LGSNSP contempla la especialización y la formación en alta dirección como etapas fundamentales para el desarrollo profesional. La especialización permite a los policías adquirir conocimientos y habilidades en áreas específicas, como la investigación criminal o el manejo de crisis, lo cual es vital para la eficiencia operativa y la resolución de casos complejos. Por otro lado, la formación en alta dirección prepara a los policías para asumir roles de liderazgo y gestión, asegurando que las instituciones policiales estén dirigidas por personal profesional, capacitado en administración y políticas de seguridad pública. Estas etapas de profesionalización son esenciales para desarrollar líderes efectivos que puedan guiar a sus equipos con conocimiento, ética y eficacia, contribuyendo así a la mejora continua y la estabilidad institucional.

A mayor abundamiento, el Programa Rector de Profesionalización 2024 (PRP) refuerza la profesionalización, destacando la importancia de una formación continua y especializada para todos los niveles del servicio policial. Sin embargo, el PRP especifica que la profesionalización abarca desde el nivel técnico hasta el nivel de licenciatura y posgrado, asegurando que los servidores públicos adquieran y mantengan las competencias necesarias para el desempeño efectivo de sus funciones. Para las y los aspirantes de nivel básico, el nivel académico que es posible acreditar a través de la formación inicial es: Profesional Técnico Bachiller (PTB) o Técnico Superior Universitario (TSU). Para los elementos en activo, es posible acreditar los siguientes niveles académicos: Licenciatura y Posgrado.[564]

Esto quiere decir que según el PRP el nivel licenciatura no es el grado minimo para desempeñarse como policía, y peor aun, que para ingresar a alguna institución de seguridad pública, basta con tener el nivel medio superior, ya que los programas de formación inicial les brindarán el nivel Profesional Técnico Bachiller (PTB) y el nivel Técnico Superior Universitario (TSU).

Según los argumentos presentados en el PRP, este nivel de formación es suficiente para dotar a los aspirantes de las competencias necesarias para desempeñar funciones esenciales como prevención, proximidad, reacción e investigación.[565] En otras palabras, el PRP garantiza que una persona que cuente con bachillerato puede participar en un programa de formación inicial como policía, y que con la formación inicial consistente en 500 horas clase, estará capacitada para aplicar de forma profesional las diversas competencias que el Artículo 21 de la CPEUM, preve en la función de la seguridad pública.

En cuanto a los elementos en activo, nuestro análisis crítico concuerda con el PRP al asegurar que los programas de estudios profesionales complementan la preparación del personal policial, desarrollando un conjunto integral de conocimientos, actitudes y habilidades mediante la obtención de una Licenciatura

[564] Cfr. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “Programa Rector de Profesionalización 2024,” México, SESNSP, 2024, pp. 66, 67, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/884930/DGAT_Actualizacio_n_PRP_22_Enero_2024.pdf (fecha de consulta: 29 de julio de 2024).
[565] Íbidem.

en Seguridad Pública.[566] Este grado académico no sólo mejora la competencia técnica de los policías, sino que también promueve el desarrollo de habilidades de liderazgo y ética profesional, aspectos cruciales para la gestión eficaz y transparente de las instituciones de seguridad pública.

Por su lado, y nuevamente coincidiendo con el PRP, los programas de posgrado son un conjunto de programas de estudio encaminados a profundizar y ampliar los conocimientos, respecto de un campo específico en materia de seguridad pública o disciplina afín.[567] Están diseñados para profundizar y ampliar los conocimientos en áreas específicas, como la gestión de crisis, la investigación avanzada y el uso de tecnologías innovadoras en la seguridad pública. Este nivel de formación es indispensable para preparar a los elementos para roles de alta dirección y especialización, permitiéndoles enfrentar desafíos complejos con una base sólida de conocimiento y competencia técnica.

Finalmente, el PRP prevé que los cursos de especialización son obligatorios para garantizar la preparación mínima necesaria para el proceso de promoción, se enfocan en especializaciones técnicas y desarrollo de habilidades de mando y supervisión.[568] La actualización constante en normativas y procedimientos asegura que el personal esté al día con las mejores prácticas y cambios legislativos, promoviendo una cultura de aprendizaje continuo.

Para alcanzar estos grados académicos, el PRP propone varias estrategias. En primer lugar, fortalecer la formación inicial y continua a través de la actualización y homologación de contenidos, asegurando que respondan a las necesidades actuales de las instituciones de seguridad pública.[569] Además, la coordinación con instituciones de educación superior garantiza la calidad y pertinencia de los programas educativos ofrecidos, promoviendo cursos, diplomados, especialidades, licenciaturas, maestrías y doctorados en conjunto con estas instituciones.[570]

---

[566] Vid. Ibídem, p. 67.
[567] Vid. Ídem.
[568] Vid, Ídem.
[569] Vid. Ibídem, p. 36.
[570] Vid. Ibídem, p. 37.

Así mismo, el PRP asegura que la implementación de modelos flexibles de educación a distancia facilita la formación continua, especialmente en situaciones de fuerza mayor, asegurando que todos los elementos tengan acceso a la capacitación necesaria.[571] Promover la investigación académica en seguridad pública contribuye a mejorar las políticas de capacitación y formación, asegurando que estas estén basadas en evidencia y respondan a las necesidades reales de las instituciones.

Disociándonos de lo previsto en el PRP y con base en nuestro análisis genealógico, etimológico y teórico, proponemos que, aquellos que ingresen a alguna institución de seguridad pública con un nivel de bachillerato deben participar en un programa de formación profesional que les permita obtener un grado de licenciatura. Este enfoque contrasta con lo previsto en el PRP, que sugiere el nivel PTB o TSU.

El programa debe estar diseñado para asegurar que, durante su formación inicial, los futuros servidores públicos reciban una educación profesional que cumpla con los más altos estándares académicos de la licenciatura en seguridad pública. Un ejemplo claro de esta equívoca estrategia es la convocatoria del IFP-CDMX, la cual convoca a mexicanos con vocación de servicio y con nivel de bachillerato que deseen formar parte de la PDI. El Instituto capacita a sus cadetes en su formación inicial mediante el curso de TSU en investigación Policial.[572]

Por otro lado y con base en los argumentos del propio PRP, las instituciones de seguridad pública tienen el deber deontológico de garantizar que su personal activo cuente con la formación académica adecuada para ejercer sus funciones con profesionalismo, [573] lo que se traduce según nuestro análisis, en el grado académico mínimo de licenciatura. Esto se traduce en la obligación de facilitar el acceso a estudios de licenciatura para aquellos que están ya activos y sólo cuentan con el

---

[571] Vid. Ibídem, p. 36.
[572] Cfr. Instituto de Formación Profesional (IFP), "Convocatoria de Ingreso al Cargo de Agente a la Policía de Investigación: Carrera de Técnico Superior Universitario en Investigación Policial," *Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México*, 2017, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1bqqdSAqTuEDym5ImQcBakop7hazy5oJR/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 29 de julio de 2024).
[573] Vid. Op. Cit., Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “Programa Rector de Profesionalización 2024,” p. 67.

nivel de bachillerato. Así entonces, proponemos que los policías ya activos que no cuenten con un nivel académico de licenciatura deben recibir las facilidades necesarias para cursar estudios universitarios. Esto incluye permisos laborales, horarios flexibles y apoyo institucional para garantizar que puedan completar su formación académica.

En consecuencia, proveer facilidades laborales para la educación profesional es esencial para la profesionalización efectiva, ya sea que se realice de forma institucional o personal. Permitir que los servidores públicos inicien o completen sus estudios profesionales contribuye al desarrollo integral del personal y mejora la calidad del servicio de seguridad pública. Además, la inversión institucional en educación superior para el personal de seguridad pública es un ejemplo y el primer paso para transicionar al paradigma de la seguridad ciudadana. Todo esto ya previsto en el Artículo 21 de la CPEUM.

Por último, se propone que para futuras convocatorias de ingreso a las instituciones de seguridad pública se establezca como requisito mínimo contar con un grado académico de licenciatura, acreditado mediante título y cédula profesional. Este requisito asegurará que el personal entrante posea una base sólida de conocimientos y competencias necesarias para desempeñar sus funciones de manera profesional y ética desde el inicio, catalizando su profesionalismo mediante los programas de formación inicial previstos en la LGSNSP, los cuales constan de un mínimo de 500 horas clase.

En conclusión, la profesionalización de la policía y de la Guardia Nacional, tal como se establece en el Artículo 21 de la CPEUM,[574] requiere un enfoque deontológico e integral que incluya la obtención de un grado académico de licenciatura para todos los servidores públicos. Es esencial que las instituciones de seguridad pública faciliten este proceso mediante programas de formación profesional, apoyo laboral y la exigencia de títulos universitarios en futuras convocatorias. Esta propuesta constituye un avance significativo hacia un modelo de seguridad ciudadana, distanciándose del paradigma conservador que prioriza un

[574] La aclaración se hace porque, como se menciona en el cuarto capítulo (4.3.3.1.2 Estado policial tradicional), la actual candidata electa a la presidencia, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, tiene en su agenda trasladar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Estado policial, donde se capacita a personal con educación básica con el fin de fortalecer el aparato represor del Estado.

Este enfoque no sólo responde al mandato constitucional, sino que también promueve una fuerza policial más competente, ética y eficaz, comprometida con la protección de los derechos humanos y el servicio a la sociedad. Asimismo, fortalece la confianza y el respeto de la ciudadanía hacia los cuerpos de seguridad, contribuyendo a la construcción de un tejido social robusto y alejado de discursos populistas y polarizantes.

La exigencia de un título profesional como requisito para considerar a alguien verdaderamente profesional no es meramente una formalidad administrativa, sino una necesidad ética y deontológica. Esta medida asegura que quienes desempeñan funciones críticas en la sociedad, como las de seguridad pública, estén adecuadamente preparados y comprometidos con estándares de excelencia y responsabilidad. Esto fortalece la confianza pública y garantiza que las instituciones operen con la máxima eficiencia y respeto a los derechos humanos. Desde la visión de Immanuel Kant, Pier Bordieu y Max Weber, la profesionalización no puede considerarse alcanzada con los niveles de PTB o TSU, ya que estos no proporcionan la profundidad y especialización necesarias para el ejercicio pleno de una profesión. La verdadera profesionalización requiere una educación superior formal que culmine en la obtención de un título universitario como licenciado, certificando así la adquisición de conocimientos y habilidades avanzadas, y garantizando el compromiso con elevados estándares éticos.

5.3.1.2 Un SCI para combatir la violencia contra la mujer

En la búsqueda de estrategias eficaces para prevenir la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, es imperativo desarrollar sistemas que permitan una fiscalización y evaluación rigurosa de las medidas implementadas. Para ello, se propone la creación de un SCI, diseñado específicamente para monitorear el segundo nivel preventivo de la violencia contra la mujer. Este sistema se basa en la instalación de un sofisticado sistema de videovigilancia, tanto en el interior de la FEADVVG como en el exterior, incluyendo las viviendas temporales y permanentes

a las que fueron canalizadas las víctimas, así como en los propios elementos auxiliares del Estado.

Como marco teórico, el diseño del sistema criminológico se basa en la teoría de los sistemas complejos adaptables. Según John H. Holland en su obra *Complexity: A Very Short Introduction*, estos sistemas tienen la capacidad de evolucionar y ajustar sus componentes en respuesta a estímulos externos.[575] Esta característica es especialmente relevante para el diseño del sistema de videovigilancia propuesto. La teoría sostiene que los sistemas, al estar compuestos por múltiples componentes interconectados, pueden adaptarse y evolucionar ante cambios en su entorno. En este sentido, el sistema de videovigilancia se conceptualiza como un sistema complejo que integra hardware y software interconectados. Este sistema operará de manera continúa (24/7), estaría conectado a internet, e impulsado por IA lo que le permite adaptarse dinámicamente a nuevas condiciones y necesidades de seguridad.

El concepto de sistemas complejos adaptables es particularmente relevante, ya que reconoce la capacidad del sistema para gestionar grandes cantidades de datos, analizar patrones de comportamiento y adaptarse a nuevas amenazas y circunstancias. La red de comunicación establecida se convierte en una herramienta omnipresente, capaz de proporcionar información en tiempo real y coordinar acciones preventivas y reactivas. La omnipresencia del internet y la tecnología de comunicación moderna permiten un monitoreo constante y detallado, similar a la disponibilidad de información en nuestros dispositivos móviles.

En cuanto a la estructura y componentes del sistema, el hardware consta de cámaras de videovigilancia de alta resolución con micrófono, estratégicamente instaladas en el interior de la FEADVVG. Estas cámaras se ubican en áreas de acceso público, salas de espera y otros espacios relevantes, con el objetivo de garantizar la seguridad y transparencia en las operaciones. Además, se implementarán cámaras en el exterior de las instalaciones para monitorizar la seguridad perimetral.

[575] Op. Cit. Holland, John H. “Complexity: A Very Short Introduction,” p. 1.

En las viviendas temporales y permanentes destinadas a las víctimas de violencia, se instalarán cámaras de seguridad en las áreas comunes y en las entradas principales para garantizar su protección. Es crucial que estas cámaras respeten la privacidad de las víctimas, enfocándose exclusivamente en zonas que no comprometan su intimidad. David Lyon, en *The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life*, subraya la importancia de considerar los aspectos éticos y de privacidad al implementar tecnologías de vigilancia. Lyon enfatiza que las nociones de lo público y lo privado a menudo son conflictivas, y existe una lucha constante, especialmente en el uso de internet, por equilibrar la búsqueda de publicidad con el derecho a la privacidad, resaltando la necesidad de proteger los derechos de las personas monitoreadas y asegurando que estas medidas no invadan su espacio personal.[576]

Adicionalmente, se instalarán cámaras de video tanto en los uniformes de los policías adscritos a la FEADVVG como en todas las unidades móviles (patrullas). En *The Oxford Handbook of Crime Prevention*, Brandon C. Welsh y David P. Farrington destacan la efectividad de las cámaras de videovigilancia y las cámaras corporales como herramientas para la prevención situacional del crimen,[577] lo que se traduce en una promoción de la transparencia en las acciones policiales. Estos dispositivos registrarán las interacciones de los oficiales con el público y las actividades realizadas durante los desplazamientos y respuestas a incidentes, facilitando una mayor transparencia y rendición de cuentas en las operaciones policiales.

---

[576] Vid. Lyon, David, “The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life,” trad. propia, Alemania, Polity Press, 2018, p. 41, disponible en: *https://books.google.com/books?id=WJNcDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=David+Lyon,+en+The+Culture+of+Surveillance:+Watching+as+a+Way+of+Life&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwik-biV4N-HAxXI5MkDHW5VLpoQ6wF6BAgLEAE* (fecha de consulta: 6 de Agosto de 2024), paráfrasis traducida: "Notions of public and private are contested; vital and ongoing struggles exist especially around internet use. Seeking ‘publicity’, for instance, through social media or craving ‘privacy’ as a ‘right’ appear within the following pages, but a certain ambivalence will also be evident, both in everyday situations and also in the analysis and the politics of surveillance culture."

[577] Op. cit. Welsh, Brandon C., y David P. Farrington, “The Oxford Handbook of Crime Prevention,” p. 4, paráfrasis traducida: "Situational prevention refers to interventions designed to prevent the occurrence of crimes by reducing opportunities and increasing the risk and difficulty of offending."

Por otro lado, el software del sistema incorpora algoritmos avanzados de reconocimiento de patrones y análisis de comportamiento, complementados con tecnologías de IA. Stuart Russell y Peter Norvig, en Artificial Intelligence: A Modern Approach, destacan que la IA, mediante algoritmos de aprendizaje automático, puede analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones y predecir comportamientos futuros. Señalan que el aprendizaje no supervisado permite clasificar datos y descubrir categorías que no estaban previamente etiquetadas, como en el caso de la astronomía, donde se identificaron tipos de estrellas sin etiquetas previas.[578] Esta capacidad es esencial para la detección de riesgos de violencia. Los algoritmos de IA se emplean para identificar automáticamente situaciones anómalas o sospechosas, basándose en una extensa base de datos de comportamientos previamente registrados y análisis predictivos. Además, la IA tiene la capacidad de aprender y mejorar continuamente en la identificación de situaciones de riesgo a través de técnicas de aprendizaje automático.

En términos de implementación de IA, el sistema puede realizar reconocimiento facial y de emociones, lo que permite identificar individuos y analizar expresiones faciales para detectar señales de angustia o agresión. Esta funcionalidad es particularmente útil para monitorear el bienestar de las víctimas y prevenir posibles incidentes de violencia. Además, mediante técnicas de análisis de video, la IA puede reconocer comportamientos inusuales o peligrosos, como movimientos bruscos o patrones de conducta que indiquen posible violencia. Al detectar estos comportamientos, el sistema puede enviar alertas en tiempo real a las autoridades correspondientes.

La IA también se emplea para analizar datos históricos y patrones de comportamiento, permitiendo predecir posibles incidentes de violencia. Esto se realiza mediante algoritmos predictivos que consideran variables como antecedentes de agresores, horarios y ubicaciones de riesgo. Asimismo, la

[578] Vid. Op. cit. Russell, Stuart J., y Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach,” p. 739, paráfrasis traducida: "Unsupervised clustering begins with data. [...] We are all familiar with terms such as 'red giant' and 'white dwarf,' but the stars do not carry these labels on their hats—astronomers had to perform unsupervised clustering to identify these categories."

integración con bases de datos permite a la IA facilitar la integración y el análisis de datos provenientes de diversas fuentes, como registros policiales, antecedentes penales y datos sociodemográficos. Esta capacidad de análisis holístico ayuda a crear perfiles de riesgo y a priorizar la atención en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Como objetivo principal, la IA proporcionará asistencia en la toma de decisiones, ofreciendo recomendaciones basadas en datos a los operadores del sistema y a las fuerzas del orden, ayudando en la toma de decisiones rápidas y bien informadas. Esto incluye sugerencias sobre despliegue de recursos, estrategias de intervención y medidas de protección adicionales.

Por consiguiente, el sistema de videovigilancia, complementado con IA, no sólo tiene una función disuasoria, sino que también permite una vigilancia activa y preventiva. Al detectar comportamientos sospechosos o peligrosos, el sistema puede alertar inmediatamente a las unidades de policía adscritas a la FEADVVG, facilitando una respuesta rápida y efectiva. Esto es particularmente importante en situaciones de emergencia, donde cada segundo cuenta para la protección de las víctimas.

En cuanto a las funciones del sistema, este desempeña un papel crucial en la fiscalización y evaluación de las medidas preventivas. Basándose en los informes de ONU Mujeres y la OMS, que proporcionan una base empírica sólida para el desarrollo de políticas de protección y atención a víctimas, el sistema propuesto busca crear entornos seguros y de apoyo para las personas afectadas por la violencia contra la mujer. Estos informes destacan la importancia de implementar estrategias que garanticen la seguridad, la justicia y la reparación del daño para las víctimas, así como el acceso a servicios integrales de apoyo. "Los refugios siguen siendo una forma necesaria de protección contra la violencia, ya que ofrecen alojamiento seguro cuando las mujeres no pueden regresar a sus hogares debido a un traumatismo o mientras buscan justicia. La CEDAW y el relator especial han respaldado la creación de centros centralizados que prestan diversos servicios

jurídicos, de salud y sociales para las mujeres."[579] En este contexto, la creación de centros que ofrezcan servicios integrales, incluyendo apoyo jurídico, de salud y social, es fundamental para proteger a las víctimas y facilitar su acceso a la justicia, tal como lo respaldan tanto la CEDAW como el relator especial de la ONU.

El análisis de los datos recopilados por el sistema de videovigilancia, complementado con las directrices internacionales, permitirá identificar áreas de mejora en la protección y atención a las víctimas. Esto incluye la evaluación de la efectividad de las acciones policiales y la calidad de los servicios proporcionados por la FEADVVG, asegurando que las políticas implementadas cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y sean eficaces en la prevención y atención de la violencia contra la mujer, ya sea en el ámbito doméstico o por razones de género. El sistema, al proporcionar una evaluación continua y basada en datos, facilitará la adaptación de las políticas para responder de manera adecuada a las necesidades de las víctimas, garantizando un entorno más seguro y justo para todas las mujeres.

Finalmente, es esencial considerar las implicaciones éticas y legales. La implementación de este sistema de videovigilancia, con su componente de IA, debe realizarse con estricto apego a las normativas legales y con un profundo respeto por los derechos humanos. La privacidad de las víctimas debe ser una prioridad, garantizando que el monitoreo se realice con propósitos claramente definidos. Además, es crucial establecer protocolos de seguridad rigurosos para proteger los datos recopilados y evitar su mal uso. Asimismo, se deben implementar medidas para garantizar que los algoritmos de IA no presenten sesgos que puedan afectar negativamente a ciertos grupos.

En conclusión, la implementación de un SCI basado en videovigilancia, IA y la teoría de los sistemas complejos adaptables representa un avance significativo en la prevención de la violencia contra la mujer. Este sistema no sólo facilita una supervisión continua y detallada, sino que también ofrece una plataforma para la

[579] International Development Law Organization, “Justicia para las Mujeres: Informe del Grupo de Alto Nivel,” Nueva York, ONU Mujeres, 2019, p. 60, disponible en: *https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Justice-for-women-High-level-group-report-es.pdf* (fecha de consulta: 6 de agosto de 2024).

evaluación constante de las medidas preventivas, garantizando una respuesta eficaz y adaptativa ante nuevas amenazas. La integración de cámaras en uniformes y patrullas añade una capa adicional de transparencia y seguridad, asegurando un control más efectivo y una clara rendición de cuentas en todas las operaciones policiales. Al combinar tecnología avanzada con un enfoque centrado en la protección y los derechos humanos, se promueve un entorno más seguro y justo para todas las mujeres en el Estado de México y más allá.

5.4 Propuestas de tercer nivel preventivo para fortalecer la PCPVCMNF

En este subcapítulo se propone una serie de mejoras para el sistema penitenciario mexicano, basadas en un análisis crítico del sistema penitenciario norteamericano y enriquecidas con observaciones participativas y comparaciones teóricas. La metodología aplicada en este capítulo incluye la integración de experiencias empíricas, obtenidas durante un periodo de reclusión en el Centro de Detención del Condado de Blaine (Blaine County Detention Center – BCDC, por sus siglas en inglés) en Idaho, Estados Unidos, con un enfoque interdisciplinario que abarca aspectos legales, criminológicos, sociológicos y tecnológicos. A través de la observación participativa y la revisión teórica, sustentada en autores como Erving Goffman, Michel Foucault, Nils Chistie, se identifican prácticas que podrían ser adaptadas al contexto mexicano para promover la eficiencia, la equidad, y el respeto a los derechos humanos en las instituciones penitenciarias. En síntesis, este subcapítulo se enfoca en la formulación de propuestas concretas para la modernización del sistema penitenciario mexicano, con especial énfasis en la implementación de un SCI, la obligatoriedad de la educación y la capacitación laboral, y la optimización de servicios de salud, deporte, y manejo financiero dentro de los centros de reinserción social.

5.4.1 Reflexión crítica del sistema penitenciario norteamericano

La experiencia de haber sido privado de la libertad por un caso de violencia doméstica constituye el fundamento central de este apartado. El conocimiento empírico obtenido a través de la observación participativa durante la reclusión en el CDCB en el Estado de Idaho, Estados Unidos, proporciona una fuente invaluable

de información que permite examinar la naturaleza de la ejecución del sistema preventivo en ese país.

El proceso que llevó a esta privación de libertad se inició en la primera semana del mes de enero del año 2011 con un golpe seco en la puerta, marcando el comienzo de un evento que transformaría profundamente el curso de mi vida. Durante una discusión doméstica, las autoridades policiales respondieron a una llamada telefónica alertando sobre gritos provenientes del apartamento. Lo que inicialmente se concebía como una breve detención preventiva de 24 horas se extendió a un periodo de seis meses de encarcelamiento, debido a nuestra condición migratoria irregular en Estados Unidos.

Este apartado se enfoca en describir y analizar el sistema penitenciario norteamericano, enfatizando cómo su eficiencia implacable y su estructura rigurosa garantizan la protección de los derechos humanos, la prevención de la corrupción, y la equidad en el trato de los internos. A través de esta revisión crítica, se busca demostrar que, a pesar de la frialdad con la que opera el sistema, existe un firme compromiso con el respeto a la legalidad y a la dignidad humana dentro del marco penitenciario estadounidense.

Para comprender la eficacia del sistema penitenciario norteamericano, es necesario referirse tanto al marco teórico propuesto por Erving Goffman como a los análisis de Michel Foucault. Goffman, en su obra *Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales*, ofrece una descripción precisa de lo que denomina *instituciones totales*. Según Goffman, estas instituciones se caracterizan por ser lugares donde un gran número de individuos, en situaciones similares, viven aislados de la sociedad y comparten una rutina diaria administrada formalmente.[580] A partir de esta premisa, es evidente que el sistema penitenciario norteamericano se ajusta a esta definición, en la medida en que todos los aspectos de la vida de los internos están rigurosamente controlados y organizados para garantizar el orden y la seguridad.

[580] Vid. Op. Cit. Goffman, Goffman, Erving, “Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales,” p. 13.

Por su parte, Michel Foucault, en su influyente obra *Vigilar y Castigar*, explora el concepto del panoptismo, una estructura de vigilancia diseñada para ejercer un control constante sobre los individuos sin la necesidad de un contacto directo. En el sistema penitenciario norteamericano, el centro de control de mando, ubicado estratégicamente frente al pabellón y operando tanto de manera digital (cámaras de videovigilancia) como analógica (infraestructura de cristal), funciona bajo esta lógica panóptica. Foucault sostiene que este tipo de vigilancia asegura que los internos se sientan siempre observados, lo que garantiza un comportamiento disciplinado y reduce la posibilidad de infracciones.[581]

Además, Nils Christie, en *La Industria del Control del Delito*, critica la expansión del sistema penitenciario y el control del delito en Estados Unidos, argumentando que este crecimiento responde a la necesidad percibida de seguridad y control, lo que conduce a un aumento constante de la población carcelaria y a una sofisticación en las técnicas de vigilancia.[582] Sin embargo, esta expansión también tiene el efecto de asegurar que todos los internos sean tratados de manera uniforme, minimizando las posibilidades de corrupción o violación de derechos humanos.

En este contexto, es pertinente analizar cómo se gestiona el día a día dentro del sistema penitenciario norteamericano para asegurar la equidad y el respeto por los derechos humanos. Desde el momento en que fui procesado, experimenté de primera mano la meticulosidad con la que opera este sistema. Cada detalle, desde la toma de datos personales y biométricos hasta la entrega de un uniforme estandarizado, muestra un sistema diseñado para funcionar sin violentar la dignidad humana. Así, cada interno recibe tres mudas de ropa semanales, reflejando una uniformidad impuesta que es esencial en las instituciones totales, donde la individualidad se suprime en favor del orden y control.

---

[581] Vid. Op. Cit. Foucault, Michel, “Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión,” p. 185.

[582] Vid. Christie, Nils, “La industria del control del delito: ¿la nueva forma del holocausto?” Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1993, p. 21, disponible en: https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/02/doctrina40689.pdf (fecha de consulta: 11 de agosto de 2024).

De igual forma, el manejo de los uniformes está estrictamente regulado. Cada semana, los internos intercambian sus mudas de ropa sucia por prendas limpias a través de un servicio de lavandería gestionado internamente. Este proceso garantiza que cada interno tenga acceso a ropa limpia y adecuada, minimizando el riesgo de problemas de salud relacionados con la higiene. En consonancia con lo que Christie describe, este nivel de organización asegura que no haya espacio para el favoritismo o la corrupción, manteniendo así la equidad entre los internos.

Por otro lado, la alimentación en las instituciones penales se gestiona con un control similar. Las comidas se distribuyen en horarios estrictamente controlados, con porciones equitativas y previamente asignadas. Esta estandarización es coherente con la descripción de Goffman sobre la administración formal de la rutina diaria en las instituciones totales, asegurando que no haya margen para la variación o el favoritismo

> Un ordenamiento social básico en la sociedad moderna es que el individuo tiende a dormir, jugar y trabajar en distintos lugares, con diferentes coparticipantes, bajo autoridades diferentes, y sin un plan racional amplio. La característica central de las instituciones totales puede describirse como una ruptura de las barreras que separan de ordinario estos tres ámbitos de la vida. Primero, todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad única. Segundo, toda la actividad diaria del miembro se lleva a cabo en la compañía inmediata de un gran número de otros, a quienes se les exige hacer lo mismo y a quienes se les requiere que hagan las mismas cosas. Tercero, todas las etapas de las actividades diarias están estrictamente programadas, de modo que una actividad conduce en un momento prefijado a la siguiente, y toda la secuencia de actividades se impone desde arriba, mediante un sistema de normas formales explícitas, y un cuerpo de funcionarios.[583]

. Así, la rigurosidad en la distribución de alimentos no sólo garantiza la equidad, sino que también elimina cualquier posibilidad de corrupción, un principio fundamental para la protección de los derechos humanos en el sistema.

El uso de dinero en efectivo está completamente prohibido, lo que elimina cualquier posibilidad de corrupción o tráfico de influencias. En su lugar, cada interno tiene una cuenta interna donde sus familiares pueden depositar dinero, y con este saldo, los internos pueden adquirir productos de una lista controlada que incluye artículos de aseo personal y alimentos adicionales, todo bajo estricta supervisión.

[583] Op. Cit. Goffman, Erving, “Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales,”pp. 19, 20.

Además, los internos pueden utilizar este saldo para realizar llamadas telefónicas en horarios específicos, las cuales son controladas y monitoreadas cuidadosamente. Estas llamadas son grabadas y supervisadas para asegurar que se realicen de manera adecuada y no sean utilizadas para actividades indebidas. Este control del consumo, junto con la gestión de las comunicaciones, refleja la naturaleza absorbente de las instituciones totales que Goffman describe, donde la institución regula todos los aspectos de la vida de los internos. "…todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma autoridad única."[584]

Además de los controles rigurosos y la supervisión detallada, el sistema penitenciario norteamericano también se enfoca en la rehabilitación y reinserción social de los internos a través de programas de educación y capacitación para el trabajo. Estos programas son seleccionados cuidadosamente mediante un estudio criminológico previo, que determina las necesidades y capacidades de cada interno. A lo largo de la semana, los internos tienen la oportunidad de participar en talleres de oficios, cursos educativos y actividades de capacitación laboral, los cuales están diseñados para proporcionarles habilidades prácticas que les serán útiles una vez que sean liberados.

Laura Zúñiga, en su obra *Nociones de Política Criminal*, subraya la importancia de la prevención y la resocialización dentro del sistema penal, destacando que una política criminal eficaz debe trascender el simple castigo, enfocándose en la reintegración social de los delincuentes. Según Zúñiga, la prevención terciaria es esencial en este contexto, ya que se enfoca en los individuos que ya han cometido delitos, con el objetivo de evitar la reincidencia mediante la educación y la formación.[585] Desde esta perspectiva, los programas de capacitación laboral y educativa dentro del sistema penitenciario norteamericano no sólo buscan dotar a los internos de habilidades útiles para su vida post-penitenciaria, sino que también representan un compromiso con la reducción de la criminalidad a largo plazo.

[584] Ídem.
[585] Vid. Op. Cit. Zúñiga Rodríguez, Laura, “Nociones de Política Criminal,” p. 21.

La implementación de programas de formación y educación dentro del sistema penitenciario refuerza el enfoque de un *sistema criminológico integral*, basado en la premisa de que el encarcelamiento no debe limitarse a la retribución, sino también a la creación de condiciones que faciliten la reinserción de los internos como ciudadanos productivos en la sociedad. Proporcionar herramientas prácticas y conocimientos no sólo tiene un impacto en el presente de los internos, sino también en su futuro, mejorando sus oportunidades y reduciendo así las probabilidades de reincidencia. En este contexto, la resocialización y la prevención terciaria se consolidan como componentes esenciales de una política criminal integral orientada a abordar las causas subyacentes del delito.

El control de la información y el contacto con el mundo exterior son elementos fundamentales dentro del sistema penitenciario norteamericano, donde el acceso a la televisión desempeña un papel crucial. En este contexto, Erving Goffman subraya que el control de la información es esencial para mantener la separación entre el mundo interno y el mundo exterior. Según Goffman

> Así como la conversación entre un grupo y otro se restringe, también se restringe el paso de información, especialmente en lo relativo a los planes del personal con respecto a los internos. Es característico mantenerlos en la ignorancia de las decisiones que se toman sobre su propio destino [...] dicha exclusión proporciona al personal una sólida base para guardar las distancias y ejercer su dominio sobre los internos.[586]

La televisión, dentro de este entorno controlado, ofrece a los internos una conexión limitada pero significativa con el mundo exterior, permitiéndoles mantenerse informados sobre las noticias y eventos actuales sin comprometer la seguridad interna. Este acceso, aunque restringido, se enmarca dentro de la estructura de vigilancia y control descrita por Michel Foucault. En *vigilar y castigar,* Foucault describe la jornada reglamentaria de los presos en una *Casa de jóvenes delincuentes de París*.[587] El reglamento detalla cómo cada actividad diaria de los internos, desde el momento en que se despiertan hasta el momento en que se acuestan, está estrictamente controlada, cronometrada, y vinculada a mantener la disciplina. Este control se extiende desde las horas de trabajo, las comidas, la

[586] Op. Cit. Goffman, Erving, “Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales,”p. 22.
[587] Vid. Op. Cit. Foucault, Michel, “Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión,” pp. 9, 10.

educación, hasta las oraciones y el tiempo de recreo, subrayando la subordinación total de los internos al sistema disciplinario de la institución. Así, la televisión no sólo actúa como un medio para la transmisión de información, sino también como una herramienta de control que refuerza la separación entre el interno y el mundo exterior, alineándose con las estrategias institucionales que buscan preservar el orden dentro del centro penitenciario.

Las visitas familiares, gestionadas a través de un sistema de videollamadas, son otro ejemplo de cómo el sistema penitenciario norteamericano asegura que los internos mantengan el contacto con sus seres queridos sin comprometer la seguridad del centro. Este sistema evita cualquier riesgo de tráfico de objetos prohibidos y garantiza que el contacto familiar se mantenga de manera ordenada y supervisada. Este tipo de control riguroso es esencial para evitar la corrupción y asegurar que el sistema penitenciario funcione de manera justa y eficiente.

Además, es importante mencionar la existencia de celdas de aislamiento hechas de cristal, reservadas para personas acusadas de delitos graves como violación, homicidio y delitos sexuales. Estas celdas, completamente individuales, mantienen a los internos aislados del resto de la población en todo momento, garantizando tanto su seguridad como la de los demás. El diseño de estas celdas de cristal, aunque permite la vigilancia constante, asegura que los internos sean tratados con un respeto riguroso hacia su dignidad, proporcionando un ambiente controlado que minimiza el contacto con otros internos y maximiza la seguridad.

En lo que respecta a la salud, el sistema penitenciario norteamericano asegura que cada interno tenga acceso a la atención médica necesaria. Los servicios de salud se proporcionan dentro del centro de reinserción, con instalaciones que cuentan con equipos modernos y personal calificado. La administración de medicamentos es estrictamente controlada, garantizando que los internos reciban el tratamiento adecuado sin riesgo de abuso. Foucault analiza cómo estas medidas reflejan una evolución hacia un sistema de penalidad que se enfoca en la corrección y el cuidado del individuo, más que en el castigo físico directo.

> Un ejército entero de técnicos ha venido a relevar al verdugo, anatomista inmediato del sufrimiento: los vigilantes, los médicos, los capellanes, los

> psiquiatras, los psicólogos, los educadores. Por su sola presencia junto al condenado cantan a la justicia la alabanza de que aquélla tiene necesidad: le garantizan que el cuerpo y el dolor no son los objetivos últimos de su acción punitiva.[588]

Además, en situaciones que requieren seguimiento médico, como después de una cirugía o tratamiento específico, los internos reciben visitas regulares del personal de salud, quienes monitorean su progreso y ajustan el tratamiento según sea necesario. Este nivel de atención médica, combinado con el control riguroso, refleja la precisión que caracteriza a las instituciones totales descritas tanto por Goffman como por Foucault, donde cada aspecto de la vida de los internos está cuidadosamente regulado para mantener la seguridad y el orden.

En cuanto a la higiene personal, las instalaciones de las regaderas están diseñadas para ofrecer agua caliente y garantizar la privacidad de los internos. Aunque la seguridad es primordial, el diseño arquitectónico de estas áreas asegura que los internos puedan mantener su higiene personal de manera digna, sin sentirse expuestos o vulnerables. Las regaderas están equipadas con barras de concreto y azulejo que bloquean la vista directa del cuerpo del interno, permitiendo que sólo su rostro sea visible desde el exterior. Este equilibrio entre seguridad y respeto por la privacidad es esencial en el mantenimiento de la dignidad de los internos dentro del sistema.

Asimismo, es relevante mencionar las actividades recreativas y espirituales que el sistema penitenciario norteamericano ofrece a los internos. Cada sábado, se permite a los internos salir al patio durante aproximadamente dos horas, donde pueden participar en actividades físicas como baloncesto, atletismo o ejercicios en el gimnasio al aire libre. Esta oportunidad de actividad física no sólo promueve la salud física, sino que también ofrece un respiro mental en un entorno controlado y seguro. Además, cada domingo se ofrece a los internos la posibilidad de asistir a misa en la capilla del centro de detención. La misa, oficiada por un sacerdote católico, proporciona un espacio de reflexión y consuelo espiritual, permitiendo a los internos conectar con su fe en un ambiente respetuoso y tranquilo.

[588] Ibídem, p. 13.

En última instancia, el sistema penitenciario norteamericano, con su frialdad y eficiencia, ofrece un modelo que asegura la protección de los derechos humanos y previene la corrupción. Así, México podría aprender de este enfoque, adoptando prácticas que garanticen la equidad, la transparencia y la justicia en el tratamiento de los internos.

Por lo tanto, mejorar el sistema penitenciario mexicano no sólo es esencial para cumplir con los mandatos constitucionales, sino también para asegurar que todos los individuos, independientemente de su situación, reciban un trato justo y humano. En conclusión, la frialdad del sistema penitenciario norteamericano no debe verse como una falta de humanidad, sino como una herramienta poderosa para garantizar la justicia y la integridad del sistema, valores que México debe adoptar para mejorar su propio sistema penitenciario. Esta comparación entre el sistema penitenciario mexicano y el norteamericano ha sido posible gracias a la observación participativa en ambos contextos, permitiéndonos identificar las fortalezas y diferencias de cada uno.[589]

5.4.1.1 Reformulación y modernización del sistema penitenciario mexicano

En primer lugar, la propuesta de mejora para el sistema penitenciario mexicano con un enfoque en educación y formación para el trabajo explora la implementación de estos aspectos como pilares fundamentales para la reinserción social de las personas privadas de libertad. A partir de lo establecido en el Artículo 18 de la CPEUM, se analiza cómo la educación y la capacitación laboral no sólo son derechos fundamentales, sino también herramientas esenciales para reducir la reincidencia y facilitar una reinserción efectiva en la sociedad. Se presentan argumentos a favor de la obligatoriedad de la educación básica y la formación vocacional desde el ingreso al sistema penitenciario, respaldados por evidencia empírica que demuestra su impacto positivo en la disminución de las tasas de reincidencia. Esta sección también aborda cómo estas medidas contribuyen a una

[589] Se recuerda que la descripción detallada del sistema penitenciario mexicano se encuentra en el subcapítulo 3.3.3.1, titulado *Observaciones empíricas desde el CPRSNBX*, dentro del tercer capítulo de esta tesis. En dicho apartado, se examina cómo las diferencias estructurales y operativas del sistema penitenciario impactan tanto en la efectividad de los procesos de reinserción social como en la protección de los derechos humanos.

sociedad más segura y justa, cumpliendo con el mandato constitucional y promoviendo el desarrollo personal y profesional de los internos.

En segundo lugar, se centra la atención en la mejora de los servicios de salud y deporte dentro del sistema penitenciario mexicano, con un enfoque en la promoción de la justicia social. Partiendo del Artículo 18 de la CPEUM, se discute cómo la salud física y mental, junto con la actividad física, son componentes críticos para la rehabilitación de los internos y su eventual reintegración en la sociedad. Se proponen medidas para mejorar la atención médica y fortalecer las instalaciones deportivas en los centros penitenciarios, con el objetivo de reducir el estrés, la violencia y la agresión entre los internos. Además, se examina cómo estas mejoras pueden contribuir a la creación de un entorno penitenciario más equitativo y humano, en línea con los principios de justicia social, y cómo estas acciones impactan en la reducción de la reincidencia y en la promoción de un sistema penitenciario más eficaz y respetuoso de los derechos humanos.

Por otro lado, se analiza la problemática que representa la libre posesión y uso de dinero en efectivo dentro del sistema penitenciario mexicano, enfocándose en las consecuencias negativas que estas prácticas generan, como la creación de economías informales y la perpetuación de desigualdades y corrupción. Se propone la implementación de un sistema de cuentas internas controladas electrónicamente para los internos, como una alternativa para limitar el uso de efectivo y promover la transparencia y la seguridad dentro de los centros penitenciarios. También se explora la adopción de tecnologías de comunicación, como las visitas virtuales, que permiten mantener el contacto con el exterior sin necesidad de manejar efectivo. Este apartado ofrece una visión de cómo estas medidas pueden transformar el entorno penitenciario, alineándose con los principios constitucionales y contribuyendo a la rehabilitación efectiva de los internos.

Finalmente, se introduce la propuesta de un SCI, diseñado para optimizar la supervisión y evaluación de los programas de educación, formación para el trabajo, salud, deporte y manejo financiero dentro del sistema penitenciario mexicano. Inspirado en la noción del panóptico de Michel Foucault,[590] el SCI opera como un

[590] Vid. Op. Cit. Foucault, Michel, “Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión,” p. 185.

sistema de vigilancia digital omnipresente, capaz de adaptarse dinámicamente a las condiciones cambiantes del entorno penitenciario. Se discute cómo este sistema, basado en algoritmos avanzados y supervisado por un equipo multidisciplinario, garantiza una gestión más eficaz, transparente y respetuosa de los derechos humanos. Además, se analiza el impacto del SCI en la mejora de la seguridad y la rehabilitación dentro de los centros penitenciarios, posicionando al sistema penitenciario mexicano como un modelo a seguir en el ámbito internacional.

Las propuestas expuestas en los apartados siguientes se fundamentan en un riguroso análisis crítico de los sistemas penitenciarios de México y Estados Unidos. Este análisis, enriquecido con la observación participativa en ambos contextos, ha permitido una profunda reflexión sobre sus respectivos enfoques y resultados. La metodología científica aplicada ha sido esencial para estructurar y consolidar los argumentos presentados, garantizando que se apoyen en una base empírica y teórica sólida.

Además, la observación no participativa, complementada con la técnica de la entrevista, ha sido instrumental para identificar fallas morales y pragmáticas en el sistema penitenciario mexicano. Estas herramientas metodológicas han permitido una evaluación objetiva y crítica, revelando aspectos que requieren una urgente revisión y reforma. A través de este enfoque combinado, se han identificado no sólo errores y deficiencias, sino también oportunidades para mejorar la eficacia del sistema penitenciario, con miras a una reinserción social más efectiva y un respeto más amplio por los derechos humanos.

Es imperativo reformular la estructura penitenciaria para transitar de un sistema punitivo a uno de seguridad ciudadana que realmente habilite y facilite la reinserción social, especialmente de quienes han cometido delitos contra mujeres. Los esfuerzos actuales por implementar estrategias adecuadas han resultado infructuosos debido a la falta de atención a las causas fundamentales del problema. La ineficacia radica en la ausencia de una transformación profunda en la superestructura penitenciaria. Sin abordar las raíces del sistema carcelario y sus deficiencias estructurales, cualquier intento de reforma está destinado al fracaso.

Por lo tanto, sin cambios significativos en la estructura subyacente, los programas de reinserción seguirán siendo insuficientes. En este contexto, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte como ejes rectores son fundamentales, tanto para la reinserción social de los reclusos como para la reincidencia de la violencia contra la mujer en el nucleo familiar.

5.4.1.1.1 Educación y formación para el trabajo

El Artículo 18 de la CPEUM establece que las instituciones penitenciarias deben organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, como medios para alcanzar la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Así, la educación y la capacitación para el trabajo resultan fundamentales no sólo para el desarrollo personal y profesional de los internos, sino también para prevenir la reincidencia.

Proponemos que la educación en el contexto penitenciario sea reconocida y fortalecida como una herramienta clave para reducir la reincidencia y promover la reintegración social. Diversos estudios han demostrado el impacto significativo de la educación en prisiones sobre la reincidencia. Por ejemplo, el informe de Gaes indica que los programas de educación formal, como la primaria y la secundaria, pueden reducir las tasas de reincidencia en un rango del 7% al 46%.[591] Este hallazgo subraya la importancia de proporcionar educación básica a los internos como un primer paso crucial hacia su reinserción.

Por otro lado, un meta-análisis realizado por Chappell subraya la relevancia de la educación media superior en la reintegración efectiva de los ex-reclusos. Los resultados muestran que los internos que completaron programas de educación postsecundaria reincidieron a una tasa del 19%, en comparación con una tasa del 38% para aquellos que no completaron dichos programas.[592] Esto sugiere que la

[591] Vid. Gaes, Gerald G., “The Impact of Prison Education Programs on Post-Release Outcomes,” trad. propia, *Ponencia presentada en la Reunión de la Mesa Redonda sobre Reintegración*, 31 de marzo - 1 de abril de 2008, disponible en: *http://www.antoniocasella.eu/nume/Gaes_2008.pdf* (fecha de consulta: 11 de Agosto de 2024), paráfrasis traducida: "Effect sizes in Table 1 vary from 7 percent to almost 46 percent depending on the meta-analysis and the type of education program."

[592] Vid. Chappell, Cathryn A., "Post-Secondary Correctional Education and Recidivism: A Meta-Analysis of Research Conducted 1990-1999," trad. propia, *The Journal of Correctional Education 55*, no. 2, 2004, p. 162, disponible en: *http://www.antoniocasella.eu/nume/Chappel_2004.pdf* (fecha de consulta: 11 de agosto de 2024), paráfrasis traducida: "The meta-analysis of research available on

educación media superior no sólo prepara a los internos para integrarse mejor en el mercado laboral, sino que también promueve cambios más profundos en sus actitudes y comportamientos, lo que es esencial para su reintegración exitosa en la sociedad.

A la luz de estos resultados, la evidencia científica basada en un meta-análisis realizado por Steve Aos, Marna Miller, y Elizabeth Drake, demuestra que los programas de educación básica y formación vocacional en prisión pueden disminuir significativamente las tasas de reincidencia. Estos autores, tras revisar 291 evaluaciones rigurosas sobre programas correccionales para adultos, encontraron que los programas de educación básica en prisión reducen la reincidencia en un 5.1%, mientras que los programas de formación vocacional logran una reducción del 12.6% en promedio.[593]

Estos datos subrayan que la educación en prisión no sólo proporciona conocimientos, sino que también dota a los internos de habilidades prácticas que mejoran sus oportunidades de empleo tras su liberación. La combinación de educación y formación vocacional no sólo amplía las perspectivas de empleo, sino que también crea un ciclo positivo que beneficia tanto al individuo como a la sociedad, disminuyendo la probabilidad de reincidencia y contribuyendo a una reintegración social más efectiva.

En consecuencia, estos hallazgos proporcionan una base sólida para argumentar que la educación debe convertirse en un eje rector obligatorio dentro del sistema penitenciario mexicano. Al garantizar que los internos tengan acceso tanto a la educación básica como a la formación vocacional, se les ofrece una oportunidad real de adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para su reintegración social. Esto, a su vez, disminuye significativamente las probabilidades

PSCE and recidivism research reported between 1990 and 1999 showed a positive correlation between participation in post-secondary correctional education and the reduction of recidivism. The results indicate that inmates who completed PSCE programs recidivated at a rate of 19%, compared to a 38% recidivism rate for those who did not complete such programs."

[593] Vid. Washington State Institute for Public Policy, “Evidence-Based Adult Corrections Programs: What Works and What Does Not,” Olympia Washington State, Institute for Public Policy, 2006, p. 3, disponible en: *https://www.wsipp.wa.gov/ReportFile/924/Wsipp_Evidence-Based-Adult-Corrections-Programs-What-Works-and-What-Does-Not_Preliminary-Report.pdf* (fecha de consulta: 11 de sgosto de 2024), paráfrasis traducida: "Basic adult education programs in prison -5.1%, Vocational education in prison -12.6%.”

de que vuelvan a delinquir. Por ende, institucionalizar la educación dentro del sistema penitenciario no sólo cumpliría con los mandatos constitucionales, sino que también contribuiría de manera decisiva a la construcción de una sociedad más segura y justa.

Para fundamentar la obligatoriedad de la educación como eje rector de la resocialización dentro del sistema penitenciario, partimos del Artículo 18 de la CPEUM, que establece la educación como pilar esencial en la reinserción social de los internos. Este principio se refuerza con el Artículo 3° del mismo precepto legal, que declara la educación básica como obligatoria para todas las personas que residen en el territorio mexicano, como se señala también en el primer párrafo del Artículo 1° de la CPEUM.

Además, la LNEP complementa este marco constitucional al establecer en su Artículo 1, Fracción III, que uno de los objetivos de la ley es regular los medios para lograr la reinserción social de las personas privadas de su libertad, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la CPEUM. Esto implica que la educación debe ser un componente esencial de cualquier plan de reintegración social, conforme a la obligatoriedad prevista en el Artículo 3° de la CPEUM.

El Artículo 4 de la LNEP consagra la reinserción social como uno de los principios rectores del Sistema Penitenciario, resaltando la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción. En este contexto, la educación se configura como un elemento clave para alcanzar dicho objetivo, al ser un mecanismo que facilita la reintegración de los internos a la sociedad.

El Artículo 9, Fracción XI de la misma ley refuerza este punto al reconocer el derecho de las personas privadas de su libertad a participar en la integración de su plan de actividades, que debe incluir actividades educativas, entre otras. Esto establece un mandato claro para las autoridades penitenciarias de asegurar que la educación forme parte integral del régimen de vida de los internos, contribuyendo a su desarrollo personal y su eventual reintegración.

Asimismo, el Artículo 14, Fracción II de la LNEP asigna a la Autoridad Penitenciaria la función de procurar la reinserción social efectiva mediante

programas institucionales, entre los cuales la educación ocupa un lugar central. Esta disposición legal refuerza la propuesta de que la educación básica no sólo sea un derecho, sino una obligación inmediata para los internos desde su ingreso al sistema penitenciario.

Finalmente, el Artículo 32 de la LNEP establece la obligación de la Autoridad Penitenciaria de brindar servicios educativos de manera accesible, aceptable, y adaptada a las necesidades de las personas privadas de la libertad, garantizando su derecho a la educación desde el ingreso al centro penitenciario. Esto es congruente con la propuesta de que la educación básica se imponga como una obligación desde el inicio de la reclusión, independientemente del estado procesal del interno.

Por lo tanto, al combinar estos preceptos constitucionales y legales, proponemos que la educación básica no sólo sea un derecho, sino una obligación inmediata para los internos desde su ingreso a la institución penitenciaria, en línea con la conceptualización de la *institución total* de Erving Goffman.[594] Esta obligación se aplicará independientemente del estado procesal del interno, asegurando que, desde el inicio de su reclusión, aquellos que no hayan completado su educación básica sean compelidos a cumplir con este mandato constitucional, sin necesidad de esperar a la resolución de su proceso legal, ya sea condenatoria o absolutoria.

Es imperativo que el sistema penitenciario mexicano adopte un enfoque integral en la implementación de programas educativos que cumplan con los estándares nacionales de calidad. De acuerdo con la Ley General de Educación (LGE), específicamente en sus Artículos 1, 5, 7 y 8, toda persona en México tiene el derecho de acceder a una educación que promueva su desarrollo personal y profesional, contribuyendo al bienestar social. Esta educación, además de ser un servicio público garantizado por el Estado, debe ser inclusiva, eliminando cualquier forma de discriminación o exclusión, y debe orientarse hacia la equidad, priorizando a aquellos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad o rezago educativo.

[594] Op. Cit. Goffman, Erving, “Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales,” p. 13.

En vista de lo anterior, sostenemos que la educación en prisiones debe ser vista como una extensión de este derecho fundamental para la construcción de un sistema penitenciario que realmente promueva la reintegración social, un mandato que se refuerza con los compromisos del Estado mexicano con los tratados internacionales. Este compromiso se ve reflejado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la cual, en su Artículo 26, establece la obligación de los Estados de adoptar medidas para asegurar la efectividad de los derechos económicos, sociales y educativos, lo que incluye a las personas privadas de libertad. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en su Artículo 13, reconoce el derecho de toda persona a la educación y obliga a los Estados Partes a garantizar este derecho, sin excepción. Además, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) refuerzan este principio al disponer, en su Regla 104, que la educación debe ser una parte integral del régimen penitenciario, asegurando que la continuidad educativa sea garantizada durante la detención.

Travis Hirschi, con su teoría del control social, nos recuerda que la conducta desviada surge cuando los lazos del individuo con la sociedad se debilitan.

> Las teorías del control asumen que los actos delictivos ocurren cuando el vínculo de un individuo con la sociedad es débil o está roto. Dado que estas teorías abarcan dos conceptos altamente complejos, el vínculo del individuo con la sociedad, no es sorprendente que en algún momento hayan formado la base de explicaciones para la mayoría de las formas de comportamiento aberrante o inusual. [595]

Así entonces, en el contexto penitenciario, la educación desempeña un papel crucial en la fortificación de los lazos entre el individuo y la sociedad. Al dotar a los reclusos de herramientas educativas, se facilita su reinserción efectiva en la comunidad una vez que cumplen su condena. Este enfoque no sólo promueve la adquisición de conocimientos, sino que también refuerza habilidades sociales y laborales, esenciales para su reinserción.

---

[595] Hirschi, T., “Causes of Delinquency,” trad. propia, Nueva York, Estados Unidos, Routledge, 2017, p. 16, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1o1Z0y-prwvSmCe7T3LcCPn3jS2eZzJye/view?usp=sharing* (fecha de consulta: 11 de Agosto de 2024), cita traducida: "Control theories assume that delinquent acts result when an individual's bond to society is weak or broken. Since these theories embrace two highly complex concepts, the bond of the individual to society, it is not surprising that they have at one time or another formed the basis of explanations of most forms of aberrant or unusual behavior."

En este orden de ideas, es necesario introducir y desarrollar el concepto del *derecho al olvido* como una medida complementaria que facilite la reinserción laboral de las personas que han cumplido una condena. El derecho al olvido se refiere a la posibilidad de que una persona exija que se eliminen o bloqueen ciertos datos personales, en especial aquellos relacionados con condenas penales, que ya no son relevantes o necesarios para los fines con los que fueron recopilados originalmente. Este derecho, ampliamente discutido en el contexto del derecho a la privacidad y la protección de datos personales, es fundamental para evitar la estigmatización de las personas que han cumplido su pena.

En la doctrina jurídica, el derecho al olvido ha sido defendido como una extensión del derecho a la privacidad y la dignidad humana. Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el caso Google Spain SL vs. Agencia Española de Protección de Datos, se reconoció el derecho de los individuos a solicitar que se eliminen enlaces a información personal desactualizada o irrelevante de los motores de búsqueda.[596] Este principio, aunque desarrollado en un contexto digital, tiene implicaciones significativas para la reinserción social, pues garantiza que las personas que han cumplido su condena no sean indefinidamente marcadas por su pasado, lo que les permitiría reintegrarse de manera efectiva en la sociedad y en el ámbito laboral.

No obstante, es importante establecer límites claros en la aplicación del derecho al olvido. Esta figura jurídica debe estar reservada únicamente para delitos en los que, tras un estudio criminológico, no se hayan identificado sesgos de un trastorno de la personalidad alimentados por misoginia. Esto es crucial, ya que tales sesgos podrían traducirse en delitos sexuales o feminicidios, los cuales requieren un tratamiento distinto en el marco de la reinserción social.

En suma, la educación dentro del sistema penitenciario debe ser reconocida no como una simple opción complementaria, sino como un componente esencial y obligatorio para la reintegración social efectiva de las personas privadas de libertad.

---

[596] Vid. Guzmán Camacho, José Juan, “El ejercicio del derecho al olvido en México,” *Revista Estudios en Derecho a la Información*, no. 16, UNAM, julio-diciembre 2023, pp. 41, 42, disponible en: *https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8913366* (fecha de consulta: 12 de agosto de 2024).

La combinación de educación formal y formación vocacional, respaldada por un marco legal robusto y fundamentada en principios de derechos humanos, no sólo reduce significativamente las tasas de reincidencia, sino que también fortalece los lazos sociales, preparando a los internos para una reinserción más armoniosa en la sociedad.

Además, la incorporación del *derecho al olvido* como medida complementaria ofrece una vía para que aquellos que han cumplido su condena no sigan siendo castigados por su pasado, permitiéndoles así una verdadera reinserción laboral y social. De esta manera, al institucionalizar la educación y aplicar cuidadosamente el derecho al olvido dentro del sistema penitenciario, se promueve una visión más humanista y efectiva de la justicia. Esta visión no sólo protege a la sociedad, sino que también brinda a los ex reclusos la oportunidad de reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza, garantizando un paradigma de seguridad ciudadana.

5.4.1.1.2 Salud, deporte y justicia social

El Artículo 18 de la CPEUM establece que la salud y el deporte son pilares fundamentales para la reinserción social de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, la implementación de estos ejes en el sistema penitenciario mexicano ha sido deficiente, afectando negativamente el proceso de reintegración social y, en consecuencia, incrementando la reincidencia. Datos recientes indican que aproximadamente el 20.5% de los delitos en México son cometidos por personas que ya han estado en prisión.[597] Esta cifra sugiere que la falta de atención adecuada a la salud y al bienestar físico durante la reclusión contribuye a la reincidencia. Para corregir esta trayectoria, es imprescindible que el Estado mexicano redoble sus esfuerzos para garantizar que los principios constitucionales de salud y deporte se traduzcan en políticas penitenciarias efectivas, que no sólo respeten los derechos de los internos, sino que también promuevan una verdadera reintegración social.

[597] Vid. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, “ México, INEGI, 2021, p. 42, disponible en: *https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf* (fecha de consulta: 13 de agosto de 2024).

Para abordar esta problemática, es esencial contextualizar las propuestas dentro del marco legal y doctrinario vigente. El Artículo 18 de la CPEUM es explícito en su mandato de que las instituciones penitenciarias deben organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y la promoción de la reinserción social. En consonancia, la LNEP, en su Artículo 14, establece la obligación del Estado de garantizar la salud y la actividad física como derechos fundamentales para las personas privadas de la libertad. Además, el Artículo 9 de la misma ley refuerza esta obligación al reconocer el derecho de los internos a recibir asistencia médica preventiva y tratamiento, así como una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Artículo 32 de la LNEP complementa este marco al imponer a la Autoridad Penitenciaria la obligación de prestar servicios de salud y actividades deportivas de buena calidad y adecuados a las necesidades de los internos.

Michel Foucault, enfatiza que el control y la organización dentro de las instituciones penitenciarias deben orientarse hacia la corrección y rehabilitación del individuo, y no meramente hacia el castigo.[598] Esto resuena con la necesidad de que los servicios penitenciarios se centren en la rehabilitación efectiva, apoyada por un acceso adecuado a la salud y al deporte.

Por tanto, la primera de nuestras propuestas es la implementación de medidas contundentes para mejorar la calidad de los servicios dentro de los centros penitenciarios, particularmente en lo que respecta a la atención médica y psicológica. Al cierre de 2022, se reportaron 54,519 quejas en 139 centros penitenciarios y especializados, de las cuales un 37.2% estaban relacionadas con la atención médica y psicológica.[599] Este alto porcentaje subraya la necesidad urgente de fortalecer estos servicios para garantizar que todos los internos reciban la atención adecuada y oportuna. De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, Artículo 9, fracción II, las personas privadas de la libertad tienen derecho a recibir asistencia médica preventiva y tratamiento en unidades de salud de primer

[598] Op. Cit. Foucault, Michel, “Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión,” pp. 9, 10.
[599] Vid. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023,” México, INEGI, 2023, p. 54, disponible en: *https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2023/doc/cnsipef_2023_resultados.pdf* (fecha de consulta: 13 de agosto de 2024).

nivel dentro del centro penitenciario. En caso de requerir atención médica avanzada no disponible en el centro, se debe gestionar la atención especializada dentro o fuera del centro penitenciario.

Para cumplir con este mandato, se propone la contratación de más personal médico y psicológico, así como la mejora en la infraestructura sanitaria de los centros penitenciarios. Un desafío en esta mejora es la falta de recursos financieros. Para superarlo, se podría explorar la posibilidad de colaboraciones público-privadas, donde empresas del sector salud contribuyan a la mejora de las instalaciones a cambio de incentivos fiscales. Además, se podrían establecer alianzas con ONGs para capacitar al personal en temas de salud preventiva y gestión de crisis. Este enfoque asegura que los servicios de salud en los centros penitenciarios cumplan con los estándares necesarios para proteger la dignidad humana y promover la rehabilitación efectiva.

Asimismo, el Artículo 34 de la misma ley dispone que la Administración Penitenciaria, en colaboración con la SSA a nivel federal o sus equivalentes en los estados, debe proporcionar atención médica conforme a lo establecido en la Ley General de Salud. Esta disposición incluye la responsabilidad de implementar las acciones necesarias para asegurar la atención médica de urgencia y, en situaciones excepcionales donde la gravedad del caso lo amerite, autorizar el traslado de los internos a instituciones públicas del sector salud para su tratamiento. Además, la ley subraya la importancia de mantener una disponibilidad continua de medicamentos y de garantizar servicios médicos adecuados en todos los niveles de atención. Por consiguiente, es crucial fortalecer estas capacidades dentro de los centros penitenciarios, asegurando así el cumplimiento de las obligaciones legales y mejorando las condiciones de atención médica y psicológica de la población reclusa.

Otra de las propuestas fundamentales es la implementación de un servicio de uniformes y lavandería centralizado y regulado en todos los centros penitenciarios mexicanos. Los internos deben recibir semanalmente tres mudas de ropa limpia, gestionadas a través de un servicio de lavandería interno que garantice la higiene y uniformidad entre los internos. Este proceso asegura que todos los

internos tengan acceso a ropa limpia de manera regular, lo cual no sólo es crucial para la higiene personal, sino también para mantener la disciplina y el orden en el centro penitenciario. La implementación de este servicio contribuiría a la equidad en el trato de los internos, evitando favoritismos y minimizando riesgos de corrupción.

Este enfoque está respaldado por la LNEP, la cual en su Artículo 9, Fracción VI garantiza el suministro salubre y aceptable de agua y artículos de aseo diario necesarios para el cuidado personal de los internos. Asimismo, el Artículo 32 obliga a la Autoridad Penitenciaria a prestar servicios de buena calidad, adecuados a las necesidades de los internos y bajo criterios de razonabilidad y no discriminación. La organización de estos servicios debe estar en conformidad con las disposiciones del Artículo 6, que regula la organización interna de los centros penitenciarios bajo las normativas vigentes, asegurando así la implementación efectiva del servicio de lavandería y uniformes como parte de una política penitenciaria equitativa.

Por otro lado, es fundamental establecer una gestión eficiente de los alimentos dentro de los centros penitenciarios. Las comidas deben ser distribuidas en horarios estrictamente controlados, con porciones equitativas y preasignadas que cumplan con los estándares nutricionales. Este enfoque es respaldado por la LNEP, la cual establece en su Artículo 9, fracción III, que las personas privadas de su libertad tienen derecho a recibir una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud. Según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSPFE) 2023, las quejas relacionadas con la alimentación son una preocupación frecuente ante las autoridades penitenciarias,[600] lo que refleja una falta de homologación sobre la calidad y cantidad de los alimentos recibidos en algunos centros penitenciarios.

Para abordar esta situación, es necesario diseñar comedores homologados en los centros penitenciarios mexicanos, con capacidad suficiente para cubrir las necesidades alimenticias en un sistema afectado por la sobrepoblación. La gestión de estos comedores debe regirse por un enfoque riguroso, donde la preparación y el servicio de las comidas se lleven a cabo bajo estrictas normas de salubridad y equidad. Este enfoque debe estar alineado con lo dispuesto en el Artículo 33 de la

[600] Ídem.

LNEP, que obliga a la Autoridad Penitenciaria a cumplir con protocolos que garanticen condiciones dignas y seguras. Además, el Artículo 30 de la LNEP establece que las condiciones de internamiento deben asegurar una vida digna y segura, lo que incluye una alimentación adecuada. Es necesario que las raciones de alimentos sean suficientes para mantener la salud física de los internos y que sean supervisadas por nutricionistas profesionales, cumpliendo así con la obligación de la Autoridad Penitenciaria de proporcionar servicios de buena calidad y adecuados a las necesidades de los internos, tal como lo estipula el Artículo 32 de la LNEP. Este nivel de estandarización es crucial para eliminar cualquier margen de variación o favoritismo en la distribución de alimentos y garantizar que todos los internos reciban un trato justo y equitativo en este aspecto fundamental de su internamiento.

En cuanto a la actividad física, se propone la construcción y mantenimiento de instalaciones deportivas adecuadas en todos los centros penitenciarios, incluyendo gimnasios al aire libre equipados con las herramientas necesarias para el ejercicio físico. Estas instalaciones permitirán a los internos realizar ejercicios de fuerza, resistencia y acondicionamiento físico de manera regular. La LNEP, en su Artículo 81, reconoce el derecho de las personas privadas de su libertad a participar en actividades físicas y deportivas, atendiendo a su estado físico, con el propósito de mantener esquemas de esparcimiento y ocupacionales. Además, el Artículo 82 de la LNEP establece que estas actividades deben ser planificadas, organizadas y reguladas por la Autoridad Penitenciaria, lo que respalda la necesidad de instalaciones adecuadas y bien equipadas.

La actividad física debe ser una parte obligatoria de la rutina diaria de los internos, supervisada por personal capacitado, lo que contribuiría a la reducción del estrés y la agresión dentro de los centros penitenciarios, en concordancia con los objetivos mencionados en la LNEP, que buscan el mantenimiento de la salud física y mental de las personas internas. La OMS ha señalado que la actividad física regular puede reducir la ansiedad y la depresión en contextos de encierro, mejorando así el bienestar general de los internos. De acuerdo con la perspectiva de Lars Møller y otros, las prisiones, al ser entornos con dificultades particulares

para la promoción de la salud, ofrecen una oportunidad única para implementar medidas que aborden tanto la salud física como mental. Considerando esto, una institución penitenciaria puede convertirse en un espacio integral que promueva el bienestar espiritual, físico, social y mental de los reclusos.[601]

Además, se propone la creación de celdas individuales diseñadas específicamente para el aislamiento de internos que, según estudios criminológicos, hayan cometido delitos graves como delitos sexuales, homicidio, feminicidio, secuestro y trata de personas. Estas celdas deben estar equipadas para garantizar la seguridad tanto de los internos aislados como del resto de la población penitenciaria, minimizando el riesgo de violencia o influencias negativas. Este aislamiento es esencial no sólo para proteger a otros internos, sino también para prevenir la contaminación criminológica, es decir, evitar que las conductas y actitudes antisociales propias de los internos más peligrosos influyan o perviertan a otros reclusos que podrían estar en un proceso de rehabilitación.

La implementación de estas celdas individuales encuentra respaldo en varios Artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El Artículo 31 establece la obligación de la Autoridad Penitenciaria de clasificar las distintas áreas y espacios en el Centro Penitenciario, tomando en cuenta la situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad. Esto incluye la separación de los internos más peligrosos en espacios especiales, asegurando así la armonía y la gobernabilidad del centro penitenciario, así como la convivencia entre los internos. De manera similar, el Artículo 37 estipula que aquellos internos que, debido a la gravedad de sus crímenes, requieran medidas especiales de seguridad, deben cumplir sus penas en espacios especiales, reforzando la necesidad de celdas individuales para evitar el riesgo de violencia y preservar la seguridad general.

---

[601] Vid. Lars Møller et al., “Health in Prisons: A WHO Guide to the Essentials in Prison Health,” trad. propia, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2007, p. 16, disponible en: *https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/107829/E90174.pdf?sequence=1&isAllowed=y* (fecha de consulta: 16 de agosto de 2024), paráfrasis traducida: "Prison is an environment with special difficulty in the promotion of health... However, imprisonment is also a unique opportunity for all aspects of health promotion, health education and disease prevention... Each prison has the potential to be a healthy setting: a single institution can address spiritual, physical, social and mental health and well-being."

Además, el Artículo 33 obliga a la Autoridad Penitenciaria a cumplir con protocolos que garanticen condiciones de internamiento dignas y seguras para todos los internos y el personal del centro. La creación de celdas individuales dentro de estos protocolos garantiza un entorno seguro y controlado, minimizando el riesgo de influencias negativas y permitiendo una intervención y tratamiento específicos para los internos más peligrosos. Asimismo, estas medidas contribuirían a preservar la salud física y mental de la población penitenciaria, evitando situaciones de estrés o conflicto que puedan surgir del contacto con individuos altamente peligrosos.

El Artículo 34 refuerza esta propuesta al establecer la obligación de la Autoridad Penitenciaria de garantizar la atención médica, tanto física como mental, a todos los internos. La creación de celdas individuales permitiría un monitoreo más eficaz y un acceso más rápido a los servicios de salud para los internos peligrosos, asegurando que cualquier necesidad médica, incluyendo la atención psicológica o psiquiátrica, se atienda de manera oportuna y adecuada. De esta manera, se protege no sólo la seguridad física, sino también el bienestar mental de todos los internos.

Al segregar a aquellos con perfiles criminológicos más graves, se disminuye el riesgo de que estos individuos ejerzan una influencia negativa sobre la población general, contribuyendo así a un entorno más seguro y propicio para la reintegración social efectiva. Además, este entorno controlado permitirá la intervención y tratamiento específicos para estos individuos, en línea con un enfoque de seguridad que priorice tanto la protección de los derechos humanos como la reducción del riesgo de reincidencia. En este contexto, el Artículo 43 establece restricciones al aislamiento, asegurando que, aunque necesario, se realice de manera que no vulnere los derechos humanos, permitiendo así que el aislamiento sea una medida proporcional y justificada en la protección de la seguridad, así como en el cuidado de la salud física y mental de los internos.

El fortalecimiento de los ejes de salud y deporte en el sistema penitenciario no sólo mejora las condiciones de vida de los internos, sino que también tiene un impacto positivo en prevenir la reinsidencia de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Un interno que recibe atención médica adecuada, participa en

actividades deportivas y tiene acceso a servicios de uniformes y alimentación de calidad es menos propenso a reincidir en conductas violentas contra la mujer al salir en libertad, lo que contribuye a la reducción de la criminalidad y a la construcción de una sociedad más segura. Según la teoría de la prevención terciaria, mencionada por Laura Zúñiga en *Nociones de Política Criminal*, la intervención durante la reclusión es crucial para prevenir la reincidencia.[602] La implementación de estos programas de salud, deporte, y servicios complementarios, en línea con los principios establecidos por la CPEUM y la LNEP, refuerza el paradigma integral de la seguridad ciudadana, garantizando que los internos reciban las herramientas necesarias para no volver a reincidir en conductas en donde se pueda violentar a la mujer.

En conclusión, las propuestas aquí presentadas buscan transformar el enfoque del sistema penitenciario mexicano hacia una política de reinserción social basada en los derechos humanos, la salud integral, la promoción del deporte, y la provisión de servicios esenciales como uniformes y alimentación de calidad. El sistema mexicano debe adoptar prácticas que aseguren la equidad, la transparencia y la justicia en el tratamiento de los internos. La adopción de estas medidas fortalecerá la función del sistema penitenciario como un instrumento de justicia social y seguridad ciudadana, en cumplimiento con el mandato constitucional y las mejores prácticas internacionales.

5.4.1.1.3 La restricción del uso y la posesión de dinero en efectivo en el contexto penitenciario

En el contexto del neoliberalismo mexicano, impregnado de un deseo desmedido de ganancias económicas, el sistema penitenciario refleja un microcosmos de las dinámicas socioeconómicas externas. Este microcosmos replica las desigualdades y problemas sociales presentes en la sociedad libre, ahora trasladados al interior de las prisiones. La interpretación del paradigma neoliberal, como se aclaró en el capítulo IV y que fue impuesto por el CW, ha generado un entorno carcelario donde la libre posesión y uso de dinero en efectivo por parte de

[602] Op. Cit., Zúñiga Rodríguez, Laura, p. 21.

los reclusos ha derivado en consecuencias imprevistas y perjudiciales, similares a las observadas en la sociedad exterior. Este fenómeno, que refleja las distorsiones observadas en nuestra teoría del espejo expuesta en esta tesis, explica por qué la política criminal encargada de prevenir tridimensionalmente la violencia contra la mujer en el núcleo familiar mexicano no ha logrado ser efectiva.

Para comprender mejor este fenómeno y fortalecer nuestra teoría del espejo, resulta particularmente reveladora la teoría del caos desarrollada por Edward Lorenz. Según esta teoría, pequeñas variaciones en un sistema pueden desencadenar efectos desproporcionadamente grandes.[603] Lorenz ilustra este concepto mediante la pregunta: "¿Puede el aleteo de una mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas?"[604] Aunque pueda parecer una exageración, esta metáfora evidencia cómo una pequeña perturbación inicial en un sistema complejo puede, con el tiempo, evolucionar y generar cambios significativos.

Este principio se puede aplicar al contexto penitenciario, específicamente en la introducción del dinero en efectivo dentro de las prisiones. A primera vista, podría parecer una variación menor; sin embargo, tal acción puede desencadenar consecuencias desproporcionadas en el orden y la seguridad del sistema penitenciario. La libre circulación de dinero, lejos de ser un asunto trivial, puede generar un efecto dominó que fomente el desorden y el conflicto entre los internos. Esto no sólo contraviene los objetivos de reinserción social, sino que también atenta contra las medidas de seguridad que el Artículo 18 de la CPEUM prevé como esenciales en el proceso de la reinserción social.

Así entonces, en el entorno penitenciario, el dinero se convierte en un instrumento que refuerza el poder y la desigualdad, exacerbando las diferencias socioeconómicas entre los reclusos. Esta dinámica refleja, en un nivel micro, las

---

[603] Lorenz, Edward N., "Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas?" trad. propia, Presentado en la American Association for the Advancement of Science, 29 de diciembre de 1972, p. 1, disponible en: https://static.gymportalen.dk/sites/lru.dk/files/lru/132_kap6_lorenz_artikel_the_butterfly_effect.pdf (fecha de consulta: 17 de agosto de 2024), paráfrasis traducida: "The question which really interests us is whether they can do even this—whether, for example, two particular weather situations differing by as little as the immediate influence of a single butterfly will generally after sufficient time evolve into two situations differing by as much as the presence of a tornado."

[604] Ídem, cita traducida: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas?

disfunciones sociales más amplias, como la marginalización de los sectores vulnerables y la perpetuación de la inequidad, que han sido acentuadas por la implementación de un modelo neoliberal distorsionado en México. En este contexto, la CPEUM prevé que el derecho a la propiedad puede ser restringido en circunstancias excepcionales, como en la privación de la libertad, con el fin de evitar que las desigualdades económicas dentro de las prisiones comprometan los principios de equidad y rehabilitación.

> Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
> II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;
> III. Durante la extinción de una pena corporal;
> VII. Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

La limitación del uso y posesión de dinero en efectivo en las instituciones penitenciarias, justificada por la necesidad de mantener el orden y la seguridad, se implementa para evitar que el poder económico de ciertos internos desestabilice la equidad y las condiciones de rehabilitación. Permitir a los reclusos manejar dinero en efectivo dentro de las prisiones representa una interpretación equivocada de su derecho a la propiedad, abriendo la puerta a riesgos que comprometen tanto la seguridad como el orden institucional.

Aunque en nuestra participación en el conversatorio "Elementos estructurales de las políticas públicas en el ámbito de la política criminal,"[605] se nos refuto que esta medida podría violar el derecho a la propiedad privada, defendemos que, en el contexto penitenciario, dicha restricción es esencial para alcanzar los objetivos de reinserción social. En esta propuesta de tesis, abogamos por un sistema que regule estrictamente la adquisición y uso del dinero en las prisiones, mitigando los riesgos asociados con la circulación libre de efectivo.

---

[605] Vid. Buenrostro Briseño, Raul Javier, et. alt., “Elementos Estructurales en el Ámbito de la Política Criminal,” *Conversatorio*, México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México, 2024, disponible en: *https://drive.google.com/file/d/186-NtMGGoseo7daGB2K6lKGtmPEACil1/view?usp=drive_link* (fecha de consulta: 17 de agosto de 2024).

Proponemos la remodelación de los centros de reinserción social, integrando tecnología avanzada para garantizar la dignidad de los derechos limitados de los internos. Esta remodelación incluiría la creación de cuentas bancarias controladas, accesibles semanalmente, con límites de gasto preestablecidos para la compra de productos de un catálogo limitado, eliminando así el manejo directo de efectivo. Además, las comunicaciones serían gestionadas a través de estas cuentas, permitiendo llamadas diarias mediante plataformas tecnológicas vinculadas a los saldos de los internos. Esto no sólo evitaría la circulación de efectivo, sino que también contribuiría a prevenir la violencia telefónica, como se analiza en el apartado *3.3.4 Realidad penitenciaria vigente y su ineficacia en la prevención de la violencia contra la mujer.* Los depósitos en estas cuentas se realizarán exclusivamente mediante depósitos o transacciones bancarias remotas, reduciendo la posibilidad de actos de corrupción.

Aunque el enfoque del sistema penitenciario norteamericano puede percibirse como frío y rígido, es fundamental reconocer que su estructura disciplinaria y tecnológicamente avanzada ha mostrado resultados efectivos en la prevención de la reincidencia. Diversos estudios, como el de Duwe y McNeeley, han evidenciado que el mantenimiento del contacto familiar, incluso a través de videollamadas, disminuye significativamente la probabilidad de que los internos vuelvan a delinquir.[606] Estos hallazgos sugieren que las videovisitas no sólo tienen un valor emocional, sino también un impacto tangible en la reducción de la reincidencia, particularmente en delitos generales y graves.

Es claro que, las videollamadas en las prisiones mexicanas representan una solución viable para superar las barreras logísticas y financieras asociadas con las visitas presenciales. A pesar de que tanto los reclusos como sus familias suelen preferir el contacto físico debido a la mayor calidad de la interacción, el contexto

[606] Vid. Duwe, Grant, and Susan McNeeley, "Just as Good as the Real Thing? The Effects of Prison Video Visitation on Recidivism," trad. propia, *Crime & Delinquency* 68, no. 1, Los Angeles, CA, SAGE Publications 2021, pp. 16, 17, paráfrasis traducida: "While video visits did not have a significant effect on all of the recidivism measures, the results still showed a reduction for general and felony reconvictions. Consistent with prior research on in-person visits, the findings also indicated that as the number of video visits increased, so did the magnitude of the decrease for general and felony reconvictions."

actual de corrupción relacionado con el manejo de dinero en efectivo dentro de las prisiones requiere alternativas tecnológicas que minimicen estos riesgos. La implementación de un sistema de videovisitas restringe el contacto directo con el exterior, reduciendo así las oportunidades para la introducción de contrabando y otras actividades ilícitas. Este enfoque también contribuye a disminuir la carga de trabajo del personal penitenciario al reducir la necesidad de supervisar visitas físicas, lo que mejora la seguridad interna al minimizar los conflictos que suelen surgir durante las visitas presenciales.

El cambio hacia las videovisitas no sólo es una medida administrativa, sino un componente esencial en la transformación del sistema penitenciario mexicano hacia un modelo de seguridad ciudadana seguro y menos susceptible a la corrupción. La integración de tecnología avanzada en los procesos penitenciarios no sólo facilita la gestión diaria, sino que también serve como un mecanismo de control que reduce las oportunidades de conductas corruptas, reforzando la transparencia y la eficiencia en la administración de justicia.

En conclusión, nuestras propuestas para restringir el uso y la posesión de dinero en efectivo dentro de las prisiones se alinean con los principios constitucionales, que buscan establecer un entorno seguro y propicio para la reinserción social. Estos fundamentos, que también sustentan un paradigma de seguridad ciudadana, están implícitos en las medidas planteadas. Lo que demuestra como, la interpretación y aplicación práctica de estos principios, distorsionan la realidad, creando una situación inversa, un reflejo distorsionado de lo que el sistema penitenciario debería representar. Al incorporar tecnologías avanzadas como las videovisitas, se da un paso significativo hacia la reforma del sistema penitenciario mexicano, orientado a corregir estas distorsiones.

Este enfoque no sólo impulsa un proceso de reinserción social más eficiente, sino que también aborda las desigualdades que perpetúan la criminalidad. Al transformar las prisiones en espacios más justos y menos propensos a la corrupción, se logra desmantelar la imagen reflejada en el espejo de la política criminal, particularmente en su función de prevención terciaria de la violencia contra

la mujer. Así, se rompe con la realidad equívoca y se avanza hacia un sistema que verdaderamente respalde la justicia y la seguridad.

5.4.1.1.4 Crítica y propuesta para la automatización del sistema penitenciario mexicano

En un mundo ideal, el sector público, al estar directamente ligado a la comunidad y ser responsable ante el Estado, debería ser el estándar de excelencia en la prestación de servicios. Este sector, al representar los intereses de todos los ciudadanos, está diseñado para operar con un alto grado de responsabilidad ética y transparencia. Sin embargo, en el contexto mexicano, esta realidad parece estar invertida. A diferencia de lo que se espera en otras sociedades, en México se ha desarrollado una tendencia a valorar más la eficiencia y la calidad de los servicios proporcionados por el sector privado, relegando al sector público a un segundo plano. Esta inversión en la percepción es un claro ejemplo de nuestra teoría del espejo, donde la realidad se distorsiona, y lo que debería ser el modelo a seguir se convierte en la excepción. Nils Christie señala que, La privatización en áreas como la gestión penitenciaria refleja un cambio en la responsabilidad, donde lo que tradicionalmente era función del Estado se delega al sector privado, creando un riesgo de pérdida de la responsabilidad ética.[607] Pero, ¿Por que es esto? Si nosotros como mexicanos sabemos que los mejores servicios los ofrece la iniciativa privada.

Recordando la forma en que el paradigma neoliberal se gestiona al interior de los Estados Unidos, este fenómeno se refleja en la administración de servicios públicos esenciales, como la educación, y la salud. Mientras que en este país, se mantiene como el pilar de la ética y la eficiencia, en México y con base en la versión del neoliberalismo que se gestiona, se ha instaurado la creencia de que sólo a través de la privatización se puede alcanzar un nivel de calidad adecuado. La realidad invertida muestra cómo el sector privado ha llegado a ser visto como el ejemplo a seguir, cuando en realidad, en su esencia, debería ser del sector público. Es por esta razón que para Christie, la iniciativa privada se distorsiona en un intento de

[607] Vid. Op. Cit. Nils Christie, “La industria del control del delito: ¿La nueva forma del holocausto?” p. 109.

replicar la eficiencia del sector público, sin la misma base de responsabilidad hacia la comunidad, en palabras más simples porque nuestra realidad está invertida.

En este contexto, el SCI es una propuesta innovadora diseñada para optimizar la supervisión, evaluación y gestión de las actividades y programas dentro del sistema penitenciario mexicano. Inspirado en la noción del panóptico de Michel Foucault,[608] este sistema se conceptualiza como un panóptico digital omnipresente que permite la vigilancia constante y total de todos los aspectos de la vida en prisión. Foucault describió el panóptico como una estructura que permite a un sólo guardián observar a todos los internos sin que estos sepan cuándo están siendo vigilados, lo que genera un control social efectivo.[609] Esta perspectiva refuerza la importancia de un entorno controlado dentro de las prisiones según los argumentos de Erving Goffman, donde este tipo de *institución total* se convierte en una herramienta de disciplina y transformación personal.[610] En el contexto del SCI, esta idea se lleva a un nivel digital, donde la tecnología permite una observación continua y discreta, asegurando el cumplimiento de las normas y previniendo conductas inadecuadas.

El desarrollo y la expansión de la industria del control del delito, como se analiza en la obra de Nils Christie, han permitido que tecnologías avanzadas se integren en los sistemas penitenciarios. Estas tecnologías han facilitado la automatización y vigilancia, minimizando la necesidad de intervención humana directa. Este enfoque se refleja en el SCI, que busca una operación constante y omnipresente, conectada al sistema de videovigilancia, configurándose como un Sistema Complejo Adaptable (SCA). Este sistema, impulsado por IA, tendrá la capacidad de identificar problemas y proponer decisiones objetivas para los operadores, mejorando así la calidad de la reinserción social. Conectado a internet y dotado de algoritmos avanzados, el SCI se ajustará continuamente a las dinámicas internas del sistema penitenciario, aprendiendo de los patrones de comportamiento y tomando decisiones informadas para mejorar la seguridad y la rehabilitación. Este enfoque permite que el SCI no sólo responda a eventos en

[608] Vid. Op. Cit. Foucault, Michel, “Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión,” p. 186.
[609] Vid. Ibídem.
[610] Op. Cit. Goffman, Goffman, Erving, “Internados: Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales,” p. 13.

tiempo real, sino que también anticipe y prevenga posibles problemas a través de la adaptación constante y la evolución de sus algoritmos.

La automatización de las cárceles ha ganado terreno como un enfoque efectivo para mejorar la seguridad y el control dentro de los centros penitenciarios. Un ejemplo notable de esta tendencia es el caso de Pelican Bay, donde el contacto entre internos y guardias es prácticamente inexistente. Este modelo refuerza la propuesta del SCI, que busca minimizar la interacción directa entre reclusos y personal de seguridad, con el fin de reducir la posibilidad de conflictos, abusos de poder y situaciones de tensión. En instalaciones como Pelican Bay, los internos pasan la mayor parte del día en celdas aisladas y sin ventanas, mientras que las puertas se operan electrónicamente desde una cabina de control central, lo que limita considerablemente la interacción humana.[611] El SCI, a través de su sistema de videovigilancia y tecnología automatizada, garantiza que los movimientos de los internos sean controlados de manera segura y precisa, bajo una supervisión constante que elimina la necesidad de intervención humana directa. Este enfoque promueve un ambiente más neutral y controlado, donde las decisiones y operaciones se realizan de acuerdo con protocolos estrictamente definidos y monitoreados, asegurando así un manejo más eficiente y menos propenso a errores o parcialidades humanas.

Además, se propone que el Estado mexicano invierta en la remodelación del sistema penitenciario, robustecimiento estructural y automatización de los centros de reinserción social. Las mejoras tecnológicas, como la instalación de puertas automatizadas, sistemas de videovigilancia en circuito cerrado e intercomunicadores, se integrarán dentro del SCI, lo que permitirá un monitoreo preciso y controlado de las actividades de los internos. Estas innovaciones garantizan el restrictivo disfrute de los derechos fundamentales de los reclusos, que el Artículo 29 y 38 de la CPEUM prevén motivada y fundamentadamente por estar sujetos a un proceso criminal.

[611] Vid. Op. Cit. Nils Christie, “La industria del control del delito: ¿La nueva forma del holocausto?” p. 95.

Este SCI será dirigido de forma análoga por un autónomo grupo de profesionales en seguridad ciudadana, derecho, psicología, pedagogía, trabajo social, criminología, criminalística, entre otras disciplinas. Este equipo multidisciplinario tendrá la responsabilidad de entrenar a la IA del SCI, supervisar su funcionamiento y tomar las decisiones finales basadas en las propuestas generadas por el sistema. De esta manera, se asegura que las decisiones sean éticamente fundamentadas, considerando no sólo los datos analizados por el SCI, sino también las perspectivas humanas y profesionales.

Como ya lo pudimos apreciar, el diseño y la implementación del SCI es una propuesta que ha surgido por las observaciones participativas en sistema penitenciario estadounidense, conocido por su enfoque frío y estricto, que impide la violación de derechos humanos y la corrupción. Este enfoque servirá como modelo para asegurar que el sistema penitenciario mexicano funcione dentro de un marco de legalidad y ética, garantizando que todas las operaciones sean transparentes y estén libres de prácticas corruptas.

La nula interacción con el personal de seguridad penitenciario es un aspecto central de esta propuesta. Al minimizar el contacto directo entre internos y guardias, se reduce la posibilidad de conflictos, abusos de poder o situaciones de tensión. El SCI, mediante su sistema de videovigilancia y automatización, asegura que los internos se muevan por las instalaciones de manera controlada y segura, bajo la supervisión constante del sistema sin necesidad de intervención humana directa. Este enfoque fomenta un ambiente más neutral y controlado, donde las decisiones y operaciones se basan en protocolos automatizados y monitoreados.

Además, en el ámbito de la educación y la formación para el trabajo, el SCI desempeñará un papel crucial al supervisar en tiempo real todos los programas educativos dentro de las prisiones. La educación es un componente esencial para la reintegración social, y su efectividad depende de una participación activa y constante por parte de los internos. El SCI garantiza que los internos asistan y participen en las clases, y que los instructores cumplan con sus deberes. Además, el sistema permitirá evaluar el impacto de estos programas, recopilando datos sobre asistencia y desempeño que podrán ser utilizados para realizar mejoras continuas.

De igual importancia, el SCI también será responsable de supervisar la implementación de celdas individuales para aquellos internos que, según estudios criminológicos, presenten perfiles de riesgo o hayan cometido delitos graves. Estas celdas están diseñadas para garantizar la seguridad tanto de los internos como del resto de la población penitenciaria, minimizando el riesgo de violencia o influencias negativas. La videovigilancia constante en estas celdas permitirá un control efectivo de los internos, asegurando que se mantengan las condiciones de seguridad necesarias.

En paralelo, el deporte jugará un papel vital en la reinserción social de los internos. Las actividades deportivas, esenciales para el bienestar físico y mental, también estarán bajo la supervisión del SCI. El sistema de videovigilancia asegurará que las actividades deportivas se desarrollen en un entorno seguro y ordenado, previniendo incidentes y garantizando que todos los internos tengan acceso a estas oportunidades de desarrollo.

No menos relevante, el SCI no sólo se enfocará en la educación y el deporte, sino que también tendrá un rol central en la salud y el bienestar de los internos. El sistema supervisará todas las áreas médicas dentro de las prisiones, asegurando que los internos reciban la atención adecuada y que las instalaciones sanitarias se mantengan en condiciones óptimas. La vigilancia continua garantizará que las actividades relacionadas con la salud se desarrollen sin incidentes, proporcionando un ambiente seguro y propicio para la rehabilitación.

Por otro lado, otro aspecto clave que abordará el SCI es la restricción del uso y la posesión de dinero en efectivo dentro de las prisiones. La presencia de dinero en efectivo puede generar desigualdades y problemas de seguridad dentro del sistema penitenciario. Para mitigar estos riesgos, el SCI supervisará todas las transacciones económicas dentro de las prisiones, asegurando que los internos no manejen efectivo y previniendo la creación de economías informales. En su lugar, se implementarán cuentas internas controladas electrónicamente, donde los internos podrán gestionar su dinero de manera segura y transparente. Los depósitos se realizarán de manera remota y/o mediante transacciones electrónicas, lo que evitará el manejo de efectivo y reducirá el riesgo de corrupción.

Además, el SCI gestionará las visitas virtuales, facilitando el contacto entre los internos y sus familias sin necesidad de contacto físico ni manejo de efectivo. Estas visitas virtuales se realizarán utilizando cámaras y monitores, bajo una vigilancia remota que asegurará que se realicen de acuerdo con las normas establecidas. Este enfoque no sólo mantendrá la seguridad, sino que también permitirá a los internos mantener conexiones familiares esenciales para su reintegración social.

Dado que el SCI implica una vigilancia constante y omnipresente, es fundamental abordar las implicaciones éticas y sociales de su implementación. Este análisis incluirá una reflexión sobre el equilibrio entre la seguridad y la privacidad, así como el impacto potencial en los derechos humanos de los internos. Se asegurará que el SCI opere dentro de un marco ético robusto, garantizando que la tecnología se utilice de manera responsable y respetuosa con la dignidad humana.

Finalmente, el SCI debe ser adaptable y escalable para ser efectivo en diversos contextos penitenciarios. Esto incluye su personalización para diferentes tipos de instituciones, como prisiones de alta seguridad o centros de reintegración social, y su capacidad para evolucionar con el tiempo en respuesta a cambios tecnológicos y necesidades emergentes dentro del sistema penitenciario. Por ello, se propone explorar colaboraciones con otros países que ya han implementado tecnologías avanzadas en sus sistemas penitenciarios. Esta colaboración podría incluir estudios comparativos, intercambio de mejores prácticas y transferencia de conocimientos, lo cual enriquecería el desarrollo y la implementación del SCI en México, alineándose con las mejores prácticas internacionales.

En conclusión, el SCI se presenta como una herramienta fundamental para la gestión y supervisión de todos los aspectos de la vida dentro del sistema penitenciario mexicano. Al incorporar la vigilancia digital omnipresente inspirada en el panóptico de Foucault y fundamentada en la teoría de los sistemas complejos adaptables, el SCI garantiza un control eficaz, la seguridad, y el cumplimiento de las normas, al mismo tiempo que facilita la rehabilitación y la reintegración social de los internos. Es importante destacar que esta propuesta no busca fomentar la privatización del sistema penitenciario mexicano, sino fortalecer al Estado en su rol

como máxima autoridad, tal como lo argumenta Thomas Hobbes.[612] El Estado, siendo el garante de los derechos fundamentales, se encargaría de administrar los servicios proporcionados por la iniciativa privada al interior de las prisiones, asegurando que se respeten y se cumplan con los estándares de legalidad y ética.

El SCI, dirigido por un equipo multidisciplinario de profesionales, asegura que las decisiones tomadas sean éticamente sólidas y basadas en un análisis integral, combinando la IA con la experiencia humana. Además, al considerar, la evaluación ética, su adaptabilidad, la automatización de puertas, la nula interacción con el personal de seguridad, y la colaboración internacional, el SCI se posiciona como una propuesta avanzada y holística que puede transformar significativamente el sistema penitenciario mexicano y alinearlo con los más altos estándares internacionales, inspirado por las mejores prácticas observadas en el sistema penitenciario estadounidense, donde se salvaguardan los derechos humanos y se impide la corrupción.

5.4.2 Propuesta para derogar el feminicidio como tipo penal

En este apartado, se examina la problemática de la tipificación del feminicidio como delito independiente y su impacto tanto en la ética jurídica como en el principio de igualdad. Si bien se ha argumentado que esta figura penal es necesaria para visibilizar la violencia extrema contra las mujeres, es importante plantear una reflexión profunda sobre las implicaciones éticas y jurídicas que esta diferenciación conlleva. A lo largo del análisis, se observa cómo la separación del *feminicidio* del homicidio general contradice principios fundamentales, como el imperativo categórico kantiano, que exige tratar a todos los seres humanos como fines en sí mismos, sin distinciones basadas en el sexo.

En este contexto, se aborda también cómo la creación de una categoría penal específica para las mujeres, bajo la figura del feminicidio, introduce una desigualdad en la aplicación de la ley. Este enfoque, aunque bien intencionado, resulta en una jerarquía de valor en la vida humana que es difícil de justificar desde un punto de vista moral y jurídico. A través de nuestra teoría del espejo, se argumenta que esta

[612] Op. Cit. Hobbes, Thomas, “Leviatán,” p. 2.

distorsión en la realidad jurídica responde a una incorrecta interpretación de los conceptos de igualdad y dignidad humana, lo que ha llevado a la instrumentalización de la ley con fines políticos, más que a su uso como una herramienta imparcial de justicia.

Además, se presenta una crítica desde el derecho penal, destacando cómo la tipificación del feminicidio, al generalizar la violencia de género como un fenómeno social que justifica una categoría penal específica, entra en conflicto con los principios fundamentales del derecho penal. Se demuestra que esta generalización desvirtúa el análisis objetivo de cada caso concreto, lo que pone en peligro la equidad en la aplicación de la justicia. Este análisis busca preparar al lector para entender los desafíos que presenta la actual legislación y las posibles consecuencias de mantener esta distinción penal.

Finalmente, se propone una alternativa a la tipificación del feminicidio como delito independiente, sugiriendo su reclasificación como una agravante del homicidio. Este enfoque permitirá restablecer la igualdad y justicia en la aplicación de la ley, reconociendo la gravedad de los crímenes motivados por razones de género, pero sin crear distinciones innecesarias. A medida que se avanza en la lectura, se explica cómo esta propuesta busca asegurar un trato equitativo para todas las partes, respetando los principios constitucionales que deben guiar el sistema legal mexicano, y cómo puede contribuir a una justicia más objetiva y equitativa.

5.4.2.1 El error moral del feminicidio como figura penal

En este subcapítulo se sostiene que la tipificación del feminicidio como figura penal separada es un error moral. Desde la perspectiva del imperativo categórico kantiano, cualquier legislación debe tratar a todos los seres humanos como fines en sí mismos, no como medios para un fin político o social.[613] Este principio fundamental de la ética kantiana exige que la ley respete la dignidad de todos por igual, sin distinción de sexo. Por tanto, la separación de las víctimas de homicidio

[613] Vid. Op. Cit. Kant, Immanuel, *Crítica de la Razón Práctica*, p. 77.

en función de su sexo contradice este principio ético al establecer una jerarquía moral y legal entre las vidas humanas.

Además, el principio de igualdad ante la ley es el pilar sobre el cual se construye la democracia, y desde esta base se conceptualizan los derechos humanos. Todos los individuos, hombres y mujeres, son dignos de igual respeto y trato, lo que implica que la ley no debe establecer distinciones basadas en el sexo de las víctimas. Cualquier diferenciación en las penas que no esté justificada por las circunstancias específicas del crimen, sino por el sexo de la víctima, es una violación a este principio de igualdad.

Desde nuestra teoría del espejo, se argumenta que la realidad ha sido distorsionada por interpretaciones equivocadas de la ley, en este caso, del concepto de igualdad y dignidad humana. Esta distorsión se refleja en la tipificación del feminicidio, que altera el principio de igualdad al otorgar un mayor valor legal a la vida de las mujeres en comparación con la de los hombres. Este fenómeno no es más que una interpretación invertida y deformada de la realidad, donde el feminicidio aparece como una figura jurídica válida, cuando en realidad perpetúa una desigualdad injustificable.

Por consiguiente, el feminicidio introduce una desigualdad ante la ley al establecer que ciertas pérdidas humanas merecen mayores penas simplemente por el sexo de la víctima. Esto crea una valoración desigual de la vida humana, lo que contradice tanto el imperativo categórico kantiano como el principio de igualdad. Surge entonces la interrogante: ¿por qué la violencia dirigida hacia las mujeres debería tener un mayor peso penal que la dirigida hacia los hombres? Desde una perspectiva moral y jurídica, esta distinción no tiene justificación.

El Artículo 281 del CPEM refleja esta disparidad al definir el feminicidio como el acto de quitarle la vida a una mujer por motivos de género, y establece sanciones más rigurosas en comparación con otros homicidios. Las penas varían entre cuatro décadas y siete décadas de reclusión, e incluso contemplan la posibilidad de prisión perpetua. Sin embargo, esta diferenciación desatiende la necesidad de otorgar el mismo nivel de dignidad y respeto a todas las víctimas de violencia, sin importar su género. Así, se mantiene una realidad donde la valoración de la dignidad humana

es desigual, lo que resalta la distorsión de la realidad discutida en nuestra teoría del espejo.

En este contexto, la teoría feminista que postula la existencia de un sistema patriarcal opresor fue sometida a un examen de falsabilidad en el segundo capítulo de esta tesis, donde se concluyó que es una teoría superada y anticientífica que requiere una reestructuración profunda. Desde esta perspectiva crítica, se argumenta que dicha teoría no sólo perpetúa una interpretación errónea de la igualdad legal y la dignidad humana, sino que también contribuye a mantener una realidad distorsionada. En lugar de promover una auténtica igualdad, la ideología de género feminista construye una realidad en la que se valoran de manera desigual las vidas de hombres y mujeres, distinción que se refleja de forma evidente en la legislación penal citada.

Asimismo, esta realidad distorsionada, que muchos perciben como correcta, ha sido construida a través de un proceso de adoctrinamiento en control y administración, como se detalla en el apartado *4.3.6 Ideología de género,* de esta tesis. Este adoctrinamiento ha influido profundamente en las estrategias públicas, desde la educación y la promoción de derechos fundamentales, hasta el control y manejo de la violencia contra la mujer. De esta forma, se consolida una percepción colectiva que legitima una desigualdad jurídica basada en el sexo, distorsionando aún más los principios de justicia y equidad.

Por otro lado, la tipificación de la muerte violenta de mujeres como feminicidio, impulsada por la teoría feminista que sostiene la existencia de un sistema patriarcal opresor, ha sido ampliamente incorporada en diversos instrumentos internacionales, incluyendo la Ley Modelo Interamericana (LMI) para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas (Feminicidio/Femicidio)

> El Comité de Expertas del MESECVI (CEVI) llama la atención sobre el femicidio como la expresión más extrema e irreversible de la violencia y discriminación contra las mujeres. Radicalmente opuesto a todos los derechos y garantías establecidos en las legislaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, es un acto de odio que de forma extrema desvirtúa todo el sentido de la humanidad, consolidando en el tiempo, la visión hegemónica del hombre sobre la mujer como objeto de transgresión y el símbolo de la debilidad, una configuración de la estructura del poder del sistema patriarcal de dominación.

> La muerte violenta de mujeres, femicidios o feminicidios tienen su raíz en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, que encuentra en la violencia de género un mecanismo de reproducción de la opresión de las mujeres. El sistema patriarcal ubica al hombre en una posición de poder en relación a la mujer que, a partir de mandatos culturales histórica y socialmente construidos, habilita la visión ostentada por los hombres para considerarla su pertenencia u objeto de dominación. Esta relación se perpetúa a través de sistemas ideológicos y culturales que legitiman o naturalizan las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.[614]

Este enfoque, al centrarse exclusivamente en la narrativa de la dominación masculina, omite considerar otros factores estructurales y contextuales que también pueden incidir en la violencia, lo que evidencia cómo la ideología feminista ha influido en la configuración de políticas públicas, como la LMI, y estrategias de control social

Asimismo, el pensamiento de Diana Russell, una de las principales promotoras de esta perspectiva, es crucial para entender esta construcción teórica. Russell argumenta que el feminicidio es una consecuencia directa del patriarcado, "La explicación del feminicidio se encuentra en el dominio de género: caracterizado tanto por la supremacía masculina como por la opresión, discriminación, explotación y, sobre todo, exclusión social de niñas y mujeres."[615] Idea que Ana María Fernández resume en su artículo *Feminicidio: la ferocidad del patriarcado*, al describirlo como la forma más extrema de terrorismo sexista.

> El asesinato de mujeres es la forma más extrema del terrorismo sexista. Una nueva palabra ha sido necesaria para comprender su significado político. En palabras de Diana Russel y Jill Radford, “Pensamos que femicidio es la palabra que mejor describe los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad sobre ellas”. Estas autoras han considerado que al llamar a estas muertes de mujeres ‘femicidio’ se remueve el velo oscurecedor con el que las cubren términos “neutrales” como homicidio o asesinato (Radford, J. Russell, D.: Femicide). El concepto de femicidio es utilizado para dar cuenta de que las relaciones inequitativas entre los géneros determinan socialmente estas muertes; resulta útil porque indica

[614] Inter-American Commission of Women, “Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas (Femicidio/Feminicidio),” Washington D.C., Organization of American States, 2018, p. 11, disponible en: *https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/leymodelofemicidio-es.pdf* (fecha de consulta: 18 de agosto de 2024).

[615] Russell, Diana E. H., “Feminicidio: una perspectiva global,” edit. por Roberta A. Harmes, Ciudad de México, UNAM, 2006, p. 21, disponible en: *https://books.google.com.mx/books?id=Aq1yKJQFjLYC&printsec=frontcover&dq=diana+russell+feminicidio+pdf&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjftJqmnP-HAxVtLUQIHWcyPAUQ6wF6BAgFEAE* (fecha de consulta: 18 de agosto de 2024).

> el carácter social y generalizado de esta violencia y permite alejarse de planteamientos individualizantes, naturalizados –generalmente en clave romántica– o patologizados que tienden a culpar a las víctimas, a representar a los agresores como "locos", o a considerar estas muertes como el resultado de "problemas pasionales.[616]

El análisis de esta cita, plantea una crítica importante desde la perspectiva del derecho penal. El concepto de *feminicidio/femicidio* busca visibilizar las desigualdades estructurales y la violencia de género como un fenómeno social generalizado. Según Diana Russel y Jill Radford, el término femicidio es necesario para describir los asesinatos de mujeres motivados por el odio, desprecio, o sentido de propiedad por parte de los hombres. "El feminicidio incluye aquellos motivados por el odio hacia las mujeres, en tanto que los asesinatos sexistas incluyen a los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por el placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres." [617] Este enfoque intenta diferenciar el femicidio de términos más *neutros* como homicidio, subrayando el contexto de desigualdad de género que rodea estos crímenes.

Sin embargo, desde una perspectiva jurídica, específicamente en el derecho penal, planteamos una crítica crucial: la individualización de la conducta delictiva es un principio fundamental. El derecho penal tiene como objetivo evaluar y sancionar actos individuales, considerando las circunstancias específicas y únicas de cada caso, sin caer en generalizaciones. Al conceptualizar el femicidio como una categoría que se sustenta en la generalización de la violencia de género, se desvía la atención de la conducta individual del perpetrador y de las particularidades del caso concreto. Esto lleva a una tensión entre la búsqueda de visibilizar un fenómeno social y la necesidad de mantener la imparcialidad y la justicia en la aplicación de la ley penal.

Por lo tanto, nuestra crítica radica en que el concepto de *feminicidio* entra en conflicto con la estructura y principios del derecho penal, que prioriza la

---

[616] Fernández, Ana María, "Femicidios: La ferocidad del patriarcado," *Revista Nomadías* No.16, Santiago, Chile, Universidad de Chile, 2012, p. 48, disponible en: *https://nomadias.uchile.cl/index.php/NO/article/download/24957/26310/*81323 (fecha de consulta: 18 de agosto de 2024).

[617] Op. Cit. Russell, Diana E. H., "Feminicidio: una perspectiva global," p. 78.

individualización de las conductas y sanciones. El derecho penal, al centrarse en la persona y el acto específico, busca evitar generalizaciones que puedan afectar la equidad en la aplicación de la justicia.

Por lo tanto, se concluye que la tipificación del feminicidio en la legislación vigente del Estado de México refleja una realidad distorsionada, en la que el derecho penal se instrumentaliza con fines políticos de control y administración con fines de lucro, más que para impartir justicia. Esta legislación, al conferir un valor superior a la vida de las mujeres en comparación con la de los hombres, perpetúa una desigualdad que no encuentra justificación moral. A la luz de nuestra teoría del espejo desarrollada en esta tesis, y del marco teórico expuesto en los capítulos I y II, se puede afirmar que la tipificación del feminicidio constituye tanto un error moral como un error legal.

5.4.2.2 El espejo legal del feminicidio

Para abordar los delitos, es imprescindible cumplir con ciertos requisitos establecidos en la teoría general del delito. Dos elementos clave en esta teoría, que serán analizados en este apartado, son la tipicidad y la conducta. Por un lado, la tipicidad se refiere a cómo la conducta debe encajar en un tipo penal, es decir, debe corresponderse con una descripción legal de un delito. En este contexto, se evalúa si la acción u omisión del sujeto se adecua a lo establecido por la ley como un delito. Por otro lado, la conducta parte de la existencia de un acto humano, ya sea positico (acción) o negatico (omisión).

No obstante, la complejidad surge cuando se considera la motivación detrás de la conducta, especialmente en el análisis crítico del tipo penal de feminicidio. La ley penal prevé prejuicios de género para probar la motivación del victimario en estos casos. El Artículo 281 del CPEM establece: *Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género*. Sin embargo, esta tipificación del feminicidio presenta desafíos probatorios desde la objetividad de las ciencias penales. Por ende, para mitigar esta dificultad, se crean descripciones de conductas que permiten inferir la motivación. En otras palabras, estas descripciones son subjetivas, ya que se basan en hipótesis que representan presuntas motivaciones.

El problema radica en la subjetividad inherente a estas interpretaciones, lo que puede derivar en normas con hipotesis en blanco. Este tipo de normas, aunque legales, presentan un riesgo significativo, ya que la interpretación judicial puede volverse arbitraria, poniendo en peligro los derechos humanos. Por ejemplo, se crean normas con hipotesis subjetivas a fin de adecuar la conducta al tipo penal de feminicidio, un ejemplo la fracción IV del Artículo 281 del CPEM, que establece: *Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza*. De este modo, la interpretación del juez puede variar ampliamente, permitiendo condenas con la pena máxima bajo este tipo penal.

Por otra parte, el origen de esta problemática se puede rastrear en los pronunciamientos de la OEA.

> Prever componentes subjetivos en cuanto a la intención del agresor impone un reto complejo a las y los operadores de justicia en términos de estándar de prueba, por ello este Comité ha optado por establecer las circunstancias de hecho objetivas que permitan presumir la existencia de razones de género que tendrán que ser consideradas, desde un enfoque interseccional, desde el contexto y la comunidad de la víctima y el victimario, incluyendo sus creencias culturales y religiosas, sin requerir probar el estado mental o una motivación especial (mens rea) del agresor.[618]

A la luz de nuestra teoría del espejo, que sostiene que la realidad legal en México está distorsionada e invertida debido a una interpretación incorrecta de la CPEUM, se observa igualmente, que la tipificación del feminicidio refleja una realidad deformada. Por consiguiente, en esta realidad se presume una motivación de género basada en supuestos que no siempre se ajustan a la realidad objetiva. Esta distorsión genera un marco legal que, en lugar de resolver el problema de la violencia contra la mujer por razones de género, contribuye a perpetuar una visión sesgada y limitada del fenómeno.

Como se discutió en el apartado anterior, el Comité de expertas del MESECVI (CEVI) sostiene que el feminicidio es una manifestación de un sistema patriarcal opresor de mujeres,[619] fundamentado en la teoría feminista de dicho sistema. Sin embargo, esta teoría, que ha sido refutada y falseada en este trabajo de investigación,

[618] Op. Cit. Inter-American Commission of Women, "Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas (Femicidio/Feminicidio)," p. 19.
[619] Ibídem, p. 11.

se utiliza principalmente para controlar y administrar el fenómeno social del feminicidio con fines económicos, en lugar de promover la justicia y la equidad de género. De hecho, la permanencia de esta teoría responde a su utilidad como estrategia que genera ganancias económicas exorbitantes para un Gobierno que, lamentablemente, se encuentra intoxicado por una lujuria económica.

En este contexto, profundizando en la crítica al tipo penal de feminicidio, si retomamos la fracción IV del Artículo 281 del CPEM, se observa que si la privación de la vida ocurre en una relación sentimental y la víctima es mujer, automáticamente se clasifica como feminicidio, no como violencia familiar, debido a la subjetividad de esta hipótesis. Sin embargo, el problema es que esta condición no se justificaría si la misma conducta fuera cometida por una mujer contra un hombre.

Es más, casos recientes en México, como el asesinato de un hombre en Cuautlancingo, Puebla, en noviembre de 2023,[620] y otros incidentes similares en Tonaya, Jalisco,[621] y la Ciudad de México,[622] revelan la complejidad de la violencia de género en la sociedad mexicana. Dicho esto, estos casos, en los que mujeres privan de la vida a sus parejas, desafían los estereotipos tradicionales y subrayan la necesidad de un enfoque equitativo en la prevención y atención de la violencia de pareja, independientemente del género del agresor o de la víctima. Asimismo, demuestran que la violencia en las relaciones íntimas puede manifestarse de diversas maneras y en diferentes contextos.

En conclusión, la hipótesis IV del Articulo 281 del CPEM, que sostiene que este tipo de delito se comete en una relación heterosexual sentimental de pareja debido a un sistema patriarcal opresor de mujeres, pierde validez cuando se considera que también existen casos en los que las mujeres son las agresoras. Este

---

620 Jesús Zavala, “Mujer asesina a su novio dentro de su casa en Cuautlancingo, Puebla,” *Telediario*, México, 3 de noviembre de 2023, disponible en: *https://www.telediario.mx/policia/mujer-asesina-a-su-novio-en-cuautlancingo-puebla* (fecha de consulta: 18 deagosto de 2024).

621 Redacción/GH, "Mujer mata a su esposo con más de 66 puñaladas en Jalisco," *El Imparcial*, México, 19 de octubre de 2023, disponible en: *https://www.elimparcial.com/mexico/2023/10/19/mujer-mata-a-su-esposo-con-mas-de-66-punaladas-en-jalisco/* (fecha de consulta: 18 de agosto de 2024).

622 Arochi, Ximena, "Tras años de abuso físico, mujer mata a su esposo, en Iztapalapa," *Proceso*, México, 6 de febrero de 2024, disponible en: *https://www.proceso.com.mx/nacional/justicia/2024/2/6/tras-anos-de-abuso-fisico-mujer-mata-su-esposo-en-iztapalapa-323498.html (fecha de consulta: 18 de Agosto de 2024).*

hecho pone en evidencia que la ideología de género feminista, al influir en el tercer nivel preventivo, no sólo ha sido ineficaz en resolver el problema de la violencia contra la mujer, sino que también ha agravado la situación, creando un nuevo problema. Como se ha demostrado a lo largo de esta tesis, las cifras de feminicidios no han disminuido; por el contrario, han aumentado,[623] lo que confirma la ineficacia de este enfoque. Este aumento se debe a que se ha construido un sistema que pretende resolver un problema inexistente. El verdadero problema, más allá de un supuesto sistema patriarcal opresor de mujeres, radica en la violencia dentro del núcleo familiar, cometida tanto por hombres como por mujeres, y alimentada por una deficiente protección de los derechos fundamentales. Por lo tanto, esta realidad distorsionada, en la que el sistema de justicia identifica únicamente a los hombres como perpetradores de violencia, resulta en un sistema que viola el principio de igualdad ante la ley.

Por consiguiente, se propone derogar el tipo penal de feminicidio y colocarlo como una agravante del homicidio. Esta propuesta busca restablecer un enfoque más objetivo y equitativo en la aplicación de la ley, eliminando la subjetividad inherente al feminicidio como tipo penal. Finalmente, al incorporar las circunstancias de género como una agravante en los casos de homicidio, se podrá garantizar un trato justo para todas las partes involucradas, respetando los principios de igualdad y justicia que deberían regir el sistema legal.

5.5 Reflexiones críticas finales

En conclusión, en este quinto y último capítulo hemos alcanzado nuestro quinto objetivo específico: Proponer un sistema criminológico que fiscalice y evalué la actual política criminal tridimensional, modificaciones al marco legal, así como estrategias, herramientas, programas y/o soluciones que eviten la manifestación, reincidencia y reproducción de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, con las siguientes reflexiones críticas finales:

En primer lugar, la violencia contra la mujer en el ámbito familiar refleja una falla estructural en las políticas públicas de México, atribuible a la incorrecta

[623] Vid. Op. Cit. Solís Fernando, “Edomex, primer lugar nacional en feminicidios durante 2023.”

implementación del paradigma neoliberal. Esta tesis ha demostrado que dicho paradigma, en su forma aplicada en México, ha sido no sólo ineficaz, sino también contraproducente, al priorizar políticas punitivas y coercitivas sobre enfoques preventivos y de desarrollo social. La versión distorsionada del neoliberalismo que sustenta la seguridad ciudadana ha transformado la seguridad en una herramienta de control político, socavando la protección de los derechos fundamentales y perpetuando la inseguridad y desconfianza ciudadana. En consecuencia, es imprescindible reemplazar las estrategias actuales por un enfoque integral que aborde las raíces de la violencia desde una perspectiva multidisciplinaria, basada en la legalidad, proporcionalidad y evidencia científica. Este cambio de paradigma es urgente si México aspira a construir un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.

A su vez, el fracaso de las políticas actuales para erradicar la violencia contra la mujer y garantizar la seguridad ciudadana evidencia una crisis más amplia en el Estado de Derecho en México. Este problema no sólo refleja una mala interpretación del neoliberalismo, sino también una visión reduccionista de la seguridad, que ignora la complejidad de los factores socioeconómicos y culturales que perpetúan la violencia. En este contexto, la propuesta de un SCI, planteada en esta tesis, ofrece una solución a estos desafíos mediante la integración de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, junto a un enfoque centrado en los derechos humanos y la justicia social. No obstante, es crucial reconocer que la tecnología, por sí sola, no resolverá los problemas estructurales de inseguridad y violencia. La implementación del SCI debe acompañarse de una reforma profunda y sostenida en las instituciones públicas, promoviendo la transparencia, la responsabilidad y la participación ciudadana. Sólo de esta manera se podrá avanzar hacia un modelo de seguridad que no sólo prevenga la violencia, sino que también promueva un desarrollo inclusivo y equitativo para todos los ciudadanos.

En segundo lugar, esta tesis ha demostrado que la violencia contra la mujer en el núcleo familiar es un problema complejo y multifacético que demanda soluciones igualmente complejas. La propuesta de un SCI especializado en el primer nivel preventivo constituye un avance significativo para abordar las raíces de

esta violencia. Inspirado en la teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner y en la capacidad adaptativa de los sistemas complejos, este enfoque prioriza tanto la educación como la concientización desde una etapa temprana. Además, integra herramientas tecnológicas avanzadas, como la inteligencia artificial, para monitorear y evaluar la efectividad de las intervenciones de manera continua.

Sin embargo, la implementación del SCI no está exenta de desafíos. Aunque la vigilancia constante y el uso de tecnología avanzada son fundamentales para su efectividad, también plantean importantes preocupaciones éticas y legales que deben ser abordadas con rigor. Por ello, es crucial que las políticas educativas y criminológicas basadas en tecnología respeten de manera estricta los derechos fundamentales, especialmente en lo referente a la protección de datos y la privacidad. En este sentido, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece un marco regulatorio indispensable para garantizar que las intervenciones educativas y de vigilancia sean inclusivas, respetuosas y libres de cualquier forma de discriminación.

De igual modo, al alejarnos del paradigma conservador, es esencial que este nuevo enfoque no sólo sea innovador, sino que también se base en principios éticos sólidos y en un compromiso firme con la justicia. Cada intervención debe diseñarse cuidadosamente para garantizar la equidad y la dignidad humana, protegiendo los derechos de todos los individuos involucrados. Al mismo tiempo, es fundamental reconocer que el interés superior de la niñez, vinculado en esta tesis al derecho a la educación, abarca un espectro mucho más amplio que requiere una investigación propia. Esta realidad es especialmente pertinente en el contexto mexicano, donde se observa a numerosos niños en situación de calle, obligados a trabajar para sobrevivir, una situación que exige una respuesta inmediata, integral y sostenida por parte del Estado.

En tercer lugar, es crucial destacar que la implementación de un SCI de segundo nivel preventivo en México no sólo supone una evolución en la capacidad del Estado para prevenir la violencia contra la mujer, sino que también presenta un desafío ético y legal sin precedentes. La integración de tecnologías avanzadas, como la videovigilancia y la inteligencia artificial, en el monitoreo continuo de las

víctimas y en la fiscalización de las medidas preventivas, aunque puede aumentar la transparencia y eficacia de la respuesta estatal, conlleva el riesgo de invadir la privacidad y los derechos fundamentales de las personas. Por consiguiente, es necesario establecer límites claros y mecanismos de supervisión sólidos que aseguren la implementación de estos sistemas con un respeto absoluto a los derechos humanos, evitando que la tecnología se convierta en una herramienta de control desmedido que perpetúe nuevas formas de violencia institucional.

Por su lado, el análisis comparativo del sistema de procuración de justicia estadounidense resalta la necesidad urgente de adaptar y fortalecer las instituciones mexicanas, especialmente en la protección del derecho a una vida libre de violencia y a una vivienda digna. Sin embargo, no basta con importar modelos extranjeros; es fundamental considerar las particularidades socioculturales y estructurales de México para que estas adaptaciones sean efectivas y sostenibles a largo plazo. El fortalecimiento de la FEADVVG es un paso crucial, pero debe acompañarse de una verdadera profesionalización de las fuerzas de seguridad y de la construcción de una infraestructura que permita la implementación efectiva de estos derechos. Sólo mediante un enfoque integral que combine la innovación tecnológica con un compromiso ético y una adaptación contextualizada, el Estado mexicano podrá garantizar una protección efectiva y duradera para las mujeres víctimas de violencia.

En cuarto lugar, la revisión crítica del sistema penitenciario mexicano en comparación con el modelo norteamericano ha revelado discrepancias significativas en la implementación de políticas que promuevan la equidad y la reintegración social. Aunque el sistema penitenciario estadounidense se distingue por su eficiencia y frialdad, este rigor contribuye a la protección de los derechos humanos y a la transparencia en la gestión penitenciaria. No obstante, la implementación de un SCI en México no debe limitarse a replicar este modelo, sino que debe adaptarse a las particularidades culturales y sociales del país. Inspirado en el panóptico de Foucault, este sistema tiene el potencial de reducir la corrupción y mejorar la seguridad, pero también plantea retos éticos significativos, especialmente en lo referente a la privacidad y dignidad de los internos. Por lo tanto, es esencial que su

implementación sea acompañada de un marco ético robusto y de una supervisión multidisciplinaria que garantice el respeto a los derechos fundamentales.

Por lo demás, la propuesta de reclasificar el feminicidio como una agravante del homicidio en lugar de mantenerlo como un tipo penal independiente, aunque controvertida, responde a la necesidad de una aplicación más equitativa de la justicia. La distinción penal basada en el sexo de la víctima, sustentada en la teoría feminista del sistema patriarcal opresor, ha demostrado ser una herramienta insuficiente e incluso contraproducente para alcanzar la verdadera igualdad ante la ley. Al desmantelar esta distorsión jurídica, se busca restaurar el principio kantiano de tratar a todas las personas como fines en sí mismas, sin distinciones arbitrarias. No obstante, esta reclasificación requiere también una revisión profunda de las políticas de prevención de la violencia de género, garantizando que la lucha contra la violencia hacia las mujeres no se debilite, sino que se fortalezca mediante un enfoque más integrador y menos fragmentado en la legislación penal.

Para concluir esta tesis de maestría en política criminal, se ha alcanzado el objetivo general: Desarrollar una teoría que explique por qué la política criminal en México, destinada a prevenir tridimensionalmente la violencia contra la mujer en el núcleo familiar, no funciona, con las siguientes reflexiones críticas finales:

Se ha demostrado que la teoría del espejo actúa como un marco teórico integral para comprender las razones detrás de esta ineficacia. Esta teoría plantea que la realidad de la política criminal mexicana es una distorsión, una imagen invertida y deformada de lo que debería ser un sistema eficaz y justo. A lo largo de los cinco objetivos específicos abordados en esta tesis, se ha revelado que esta distorsión surge de la incorrecta implementación del paradigma neoliberal norteamericano, el cual prioriza el control y la coerción por encima de la equidad y la prevención.

La teoría del espejo expone que las políticas criminales actuales en México no abordan las causas subyacentes de la violencia, sino que perpetúan un ciclo de inseguridad y desigualdad. Esta realidad distorsionada refleja un Estado que actúa más como un administrador de la violencia que como un garante de la justicia,

desviando el enfoque de la verdadera prevención y equidad en la lucha contra la violencia de género.

El primer objetivo específico permitió identificar la desconexión entre la normativa y su aplicación real, revelando cómo una versión equivoca del paradigma neoliberal norteamericano ha deformado la política criminal mexicana en un sistema punitivo que ignora los derechos fundamentales. El segundo objetivo cuestionó las teorías feministas aplicadas en la política criminal, mostrando que estas teorías, en su aplicación actual, contribuyen a mantener el sistema patriarcal en lugar de desmantelarlo, lo que refuerza la distorsión de la realidad en la política criminal. El tercer y cuarto objetivo destacaron cómo la polarización política y el populismo, en lugar de promover la justicia social, han fragmentado la cohesión social y desvirtuado las políticas preventivas, reforzando el espejo distorsionado de una política criminal que falla en proteger a las mujeres. Finalmente, el quinto objetivo ofreció una propuesta para corregir esta distorsión: un SCI que, aunque tecnológicamente avanzado, debe ser implementado dentro de un marco ético y socialmente justo para evitar convertirse en una herramienta más de control.

Al haber alcanzado los cinco objetivos específicos en esta tesis, se ha demostrado que la política criminal en México refleja una realidad distorsionada y fallida, lo que explica su incapacidad para prevenir efectivamente la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. La teoría del espejo desarrollada en esta tesis no sólo ofrece una explicación crítica de esta problemática, sino que también establece una base teórica sólida para reestructurar la política criminal mexicana en su conjunto. Este modelo teórico exige un cambio de paradigma que reconozca y corrija las distorsiones actuales, abandonando el enfoque predominantemente punitivo y coercitivo en favor de un enfoque centrado en la equidad, la prevención y la protección integral de los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales. Sólo al implementar un modelo basado en estos principios se podrá romper con la imagen distorsionada que perpetúa la injusticia y construir una realidad en la que la dignidad humana sea prioritaria por encima de los intereses económicos.

Conclusiones

1. *Enfoque integral para la prevención de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar*: Se concluye que es esencial adoptar un enfoque integral que no sólo aborde la sanción de los actos de violencia, sino que también se centre en la prevención y las causas subyacentes de la violencia contra la mujer en el núcleo familiar. Este enfoque debe incluir políticas multidisciplinarias que involucre a expertos en seguridad ciudadana, derecho, criminología, sociología, psicología, y educación para abordar el problema de manera efectiva desde sus raíces.

2. *Orígenes genealógicos del feminicidio:* El análisis realizado revela que el feminicidio es la manifestación extrema de un proceso de violencia estructural y cultural que se origina en el núcleo familiar. Este enfoque genealógico de la violencia contra las mujeres subraya la necesidad de intervenir legalmente desde los primeros escenarios en los que el Estado ejerce su función de protección. La comprensión de estos orígenes destaca la importancia de políticas públicas que no sólo aborden las consecuencias de la violencia, sino que también actúen preventivamente desde el ámbito educativo, donde se gestan las dinámicas de poder y control que culminan en el feminicidio.

3. *Impacto del neoliberalismo en la violencia de género*: La implementación de una versión radical del neoliberalismo en México ha exacerbado las desigualdades de género y ha intensificado la violencia entre el binario. Este modelo económico, al priorizar el beneficio económico sobre el bienestar social, ha debilitado las políticas públicas orientadas a la prevención y protección de las mujeres. Además, el uso de la neolengua dentro del discurso neoliberal ha distorsionado la percepción de los derechos sociales, afectando negativamente las iniciativas dirigidas a prevenir la violencia de género. En consecuencia, esta version del neoliberalismo no sólo ha perpetuado la desigualdad estructural, sino que también ha obstaculizado los esfuerzos para combatir la violencia en su raíz.

4. *Fortalecimiento del Estado de Derecho y su rol en la prevención del feminicidio:* Se reafirma la importancia del Estado de Derecho como la base

fundamental para proteger a las mujeres contra la violencia. La correcta y deontologica interpretación y aplicación del marco legal mexicano es esencial para prevenir el feminicidio y garantizar que las políticas públicas protejan efectivamente los derechos de las mujeres.

5. *Revisión crítica del marco legal y la necesidad de reformas:* Se destaca la urgencia de revisar y reformar el marco legal vigente para abordar de manera más efectiva las causas estructurales de la violencia contra las mujeres. Es necesario un análisis genealógico y ético que permita identificar y corregir las deficiencias en la legislación actual para prevenir la violencia de género.

6. *Cambio de paradigma en la política criminal para la prevención del feminicidio:* Inspirado en la teoría de los cambios paradigmáticos de Thomas Kuhn, se propone un cambio profundo en las políticas de prevención de la violencia contra la mujer. Las estrategias actuales están obsoletas y requieren una transformación estructural y cultural para abordar de manera efectiva la violencia contra la mujer en el núcleo familiar y la violencia contra la mujer por razones de género (femicidio/feminicidio).

7. *Sistema Criminológico Inteligente (SCI) para la prevención del feminicidio:* Este trabajo enfatiza la necesidad de implementar un Sistema Criminológico Inteligente (SCI) que permita monitorear y evaluar de manera continua las políticas preventivas en los tres niveles de intervención: primario, secundario y terciario. El SCI debe ser diseñado para actuar de manera integral, comenzando con la prevención de la violencia en el primer sistema de control social del Estado, que son las instituciones educativas, seguido por el sistema de procuración de justicia y culminando en el sistema penitenciario. A través de este enfoque, se busca asegurar que las estrategias implementadas no sólo sean efectivas, sino que también respeten y salvaguarden los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales de todas las personas involucradas.

8. *Educación como herramienta clave para la prevención de la violencia de género:* La educación se presenta como una herramienta esencial para prevenir la

violencia de género desde sus raíces. Para lograr este objetivo, es fundamental fortalecer la infraestructura educativa en todo el país y diseñar un programa nacional que promueva, de manera uniforme, la salvaguarda de los derechos fundamentales vinculados al interés superior de la niñez. Este enfoque debe asegurar que las medidas implementadas sean coherentes y aplicables en todo el territorio mexicano, garantizando que todas las niñas, niños y adolescentes reciban una formación que fomente el respeto por los derechos humanos y la equidad de género.

9. *Importancia de la voluntad política en la prevención del feminicidio:* Se concluye que la falta de voluntad política es uno de los principales obstáculos para la implementación efectiva de políticas de prevención del feminicidio. Es necesario un compromiso real y desintoxicado de *lujuria economica* por parte de los actores políticos para priorizar la protección de las mujeres y garantizar que las políticas públicas estén orientadas a prevenir la violencia desde su origen, y no fomentar el legal y legitimo uso de la fuerza que el Estado tiene como primera opción.

10. *Reforma integral del sistema penitenciario para prevenir la reincidencia de la violencia contra la mujer:* Se plantea la necesidad de una reforma integral del sistema penitenciario mexicano con el objetivo de evitar que los agresores reincidan en actos de violencia contra las mujeres. Esta reforma requiere una infraestructura óptima, robusta y actualizada, que integre tecnología avanzada, como la inteligencia artificial, para optimizar el control penitenciario. A través de un modelo panóptico, se busca alcanzar una mayor objetividad en la supervisión y gestión de los internos, reduciendo tanto las posibles violaciones de derechos humanos como la corrupción dentro del sistema. Además, es fundamental que esta reforma incluya programas efectivos de educación, formación para el trabajo y rehabilitación, que promuevan una verdadera reinserción social y rompan el ciclo de violencia desde su raíz.

11. *Propuesta de derogación del feminicidio como tipo penal*: Se propone reconsiderar el feminicidio no como un tipo penal independiente, sino como una agravante del homicidio. Esta propuesta busca una mayor coherencia legal y ética en el tratamiento de la violencia contra las mujeres dentro del sistema penal, enfocándose en los principios de igualdad y justicia.

12. *Conclusión General:* Esta tesis aboga por un enfoque integral y reformador para romper el ciclo de la violencia de género, con un énfasis particular en su origen: el núcleo familiar. Para lograrlo, es imperativo reestructurar las políticas públicas, adoptar un compromiso ético y legal sólido, y asegurar una voluntad política genuina. Este enfoque no sólo se orienta hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa, sino que también requiere el fortalecimiento del Estado como la autoridad suprema, siguiendo la visión de Hobbes. Sólo un Estado robusto, y dotado de infraestructura necesaria para garantizar calidad, paz y orden, puede implementar de manera efectiva las reformas necesarias para prevenir la violencia de género (homicidios y feminicidios).

Propuestas

Este apartado presenta un conjunto de propuestas estructuradas en tres niveles preventivos, enfocadas en prevenir la violencia de género, lo que se traduce en la manifestación más extrema de violencia entre estos (homicidios y feminicidios).

A. Primer Nivel Preventivo: Derecho a la Educación y Prevención de la Violencia desde la Infancia.

I. Reforma Constitucional para transitar al paradigma de la Seguridad Ciudadana.

1. Reforma Propuesta: Se sugiere una reforma al artículo 3º de la CPEUM con el fin de garantizar que la educación promueva y proteja de manera efectiva los derechos fundamentales establecidos en el interés superior de la niñez. Esta reforma busca utilizar la educación como una herramienta clave para prevenir la violencia de género desde la infancia, enfocándose en la formación de una cultura de respeto e igualdad. La implementación de esta reforma implicaría un cambio de paradigma en la seguridad ciudadana, al abordar la prevención de la violencia desde sus raíces en la educación básica, y asegurando que cada niña, niño y adolescente reciba una formación integral óptima que promueva los valores de equidad y justicia.

   - Artículo 3º: El derecho a la educación es una función del Estado mexicano, que incluye la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, cuyos fines, basados en el interés superior de la niñez, son salvaguardar el derecho a la alimentación, la salud, un ambiente sano, el agua, la cultura, el deporte y la movilidad. El Estado garantizará, subsidiará y proveerá de manera directa la educación en sus niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Los niveles iniciales, preescolares, primarios y secundarios constituyen la educación básica, y junto con la media superior, son de carácter obligatorio para todos los ciudadanos. La educación superior se considerará obligatoria conforme a lo estipulado en la fracción X de

este artículo. Asimismo, se reconoce el derecho a la educación inicial para toda la niñez, y será responsabilidad del Estado garantizar su acceso universal.

La educación tendrá un enfoque integral, que promueva la equidad de género, el respeto a los derechos humanos, y la creación de una cultura de paz y respeto. Para cumplir estos fines, el Estado deberá garantizar una infraestructura educativa adecuada y segura, así como la formación continua del personal docente en estos temas.

II. Fortalecimiento de la Estructura e Infraestructura Educativa

Se propone mejorar tanto la estructura como la infraestructura educativa para que las escuelas se conviertan en espacios seguros y promotores de la igualdad de género, con instalaciones que permitan el desarrollo integral y la vigilancia para prevenir la violencia. Esta propuesta también incluye la implementación de un enfoque integral en la educación que promueva explícitamente la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos, y la prevención de la violencia desde una edad temprana. Además, la infraestructura estará respaldada por el Sistema Criminológico Inteligente (SCI) para monitorear la seguridad y el respeto de los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales en las escuelas. Esta propuesta se materializaría con las siguientes adiciones de ley:

1. Adición Propuesta: Artículo 15 Bis y Ter - Capítulo II: De los fines de la educación, de la Ley General de Educación (LGE)
    - Artículo 15 Bis. El Estado mexicano, a través de la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, garantizará que todas las instituciones educativas públicas cuenten con una infraestructura física adecuada y segura. Esta infraestructura debe ser promotora de la equidad de género, el respeto a los derechos humanos y de los derechos fundamentales establecidos en el interés superior de la niñez.
    - Artículo 15 Ter. Las instalaciones educativas deberán contar con espacios que permitan el desarrollo integral de los estudiantes, asegurando condiciones que favorezcan su bienestar físico, emocional

y social. Asimismo, se implementarán mecanismos de vigilancia y monitoreo, como el Sistema Criminológico Inteligente (SCI), para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos humanos en las escuelas.

III. Implementación del Sistema Criminológico Inteligente (SCI) en el Sistema Educativo

Se propone crear un Sistema Criminológico Inteligente (SCI) especializado en el sistema educativo, encargado de fiscalizar y evaluar la implementación de las reformas educativas relacionadas con la equidad de género, el respeto a los derechos humanos, los derechos fundamentales establecidos en el interés superior de la niñez y la prevención de la violencia. Este Sistema deberá realizar evaluaciones periódicas y estudios de impacto que permitan ajustar las estrategias educativas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ley.

1. Adición Propuesta: Artículo 21 Bis - Capítulo IV: De la orientación integral, de la Ley General de Educación (LGE)
    - Artículo 21 Bis. El Estado creará un Sistema Criminológico Inteligente (SCI) especializado en el sistema educativo, encargado de fiscalizar y evaluar la implementación de las reformas educativas relacionadas con la equidad de género, el respeto a los derechos humanos, los derechos fundamentales establecidos en el interés superior de la niñez y la prevención de la violencia. Este Sistema deberá realizar evaluaciones periódicas y estudios de impacto que permitan ajustar las estrategias educativas para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ley.

IV. Programas de Capacitación y Sensibilización en la Comunidad Educativa

Se propone que la comunidad educativa, que incluye a docentes, estudiantes, padres de familia, tutores y otros actores relevantes, participen activamente en la promoción de una cultura de respeto, equidad de género y prevención de la violencia en las escuelas, implementando programas de capacitación y campañas de sensibilización que involucre a todos los miembros de la comunidad escolar.

1. Adición Propuesta: Artículo 16 Bis y Ter - Capítulo III: De los criterios de la educación, de la Ley General de Educación (LGE)
    - Artículo 16 Bis. La comunidad educativa, que incluye a docentes, estudiantes, padres de familia, tutores y otros actores relevantes, participará activamente en la promoción de una cultura de respeto, equidad de género y prevención de la violencia en las escuelas. Para ello, se implementarán programas de capacitación y campañas de sensibilización que involucre a todos los miembros de la comunidad escolar.
    - Artículo 16 Ter. El Estado garantizará la creación de espacios de diálogo y colaboración entre la comunidad educativa y las autoridades, con el fin de fortalecer las acciones orientadas a la promoción de la equidad y la prevención de la violencia en las escuelas desde el nivel básico hasta el nivel superior.

V. Derecho a la Alimentación en las Escuelas

Se propone que el Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de Bienestar, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), garanticen el derecho a la alimentación adecuada, nutritiva y suficiente en todas las instituciones educativas del país, en conformidad con los principios del interés superior de la niñez y la protección de los derechos humanos.

1. Adición Propuesta: Artículo 21 Ter - Capítulo IV: De la orientación integral, de la Ley General de Educación (LGE)
    - Artículo 21 Ter. El Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de Bienestar, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), garantizará el derecho a la alimentación adecuada, nutritiva y suficiente en todas las instituciones educativas del país, en conformidad con los principios del interés superior de la niñez y la protección de los derechos humanos.
      La SEP será responsable de implementar programas de alimentación

escolar, asegurando que todos los estudiantes, sin excepción, reciban los alimentos necesarios para su desarrollo integral. La Secretaría de Salud establecerá los lineamientos nutricionales y supervisará la calidad de los alimentos distribuidos en las escuelas. La Secretaría de Bienestar brindará el apoyo financiero y logístico necesario para asegurar la cobertura de estos programas, especialmente en las zonas de mayor vulnerabilidad. El DIF, en colaboración con estas dependencias, promoverá programas educativos sobre nutrición para estudiantes, padres de familia y docentes, así como la logística de distribución de alimentos.

El Estado garantizará la asignación de recursos suficientes para la implementación de estos programas, priorizando a las comunidades marginadas y de bajos recursos, con el fin de asegurar que ningún niño o niña quede excluido del acceso a una alimentación adecuada durante su educación.

VI. Igualdad de Género y Prevención de la Violencia en los Planes de Estudio

Se propone que el sistema educativo provea y garantice de manera efectiva los derechos fundamentales establecidos en el interés superior de la niñez e incorpore contenidos específicos que promuevan la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres, desde la educación básica hasta la superior.

1. Adición Propuesta: Artículo 42 Ters - Sección Segunda Bis. De la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)
    - Artículo 42 Ters. El sistema educativo deberá promover y garantizar de manera efectiva los derechos fundamentales establecidos en el interés superior de la niñez e incorporar contenidos específicos que promuevan la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres, desde la educación básica hasta la superior. Se garantizará que estos contenidos sean parte integral de los planes y programas de estudio,

con el fin de erradicar estereotipos de género y promover una cultura de respeto y equidad en las nuevas generaciones.

VII. Formación Continua de Docentes

Se propone una formación continua de los docentes que incluya obligatoriamente contenidos relacionados con la garantización de los derechos fundamentales establecidos en el interés superior de la niñez, igualdad de género, el respeto a los derechos humanos, y la prevención de la violencia.

1. Adición Propuesta: Artículo 13 Bis - Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM)
    - Artículo 13 Bis. La formación continua de los docentes incluirá obligatoriamente contenidos relacionados con la garantización de los derechos fundamentales establecidos en el interés superior de la niñez, igualdad de género, el respeto a los derechos humanos, y la prevención de la violencia. Estos temas serán requisitos para la permanencia y promoción en el sistema de carrera docente, con el fin de asegurar que el personal educativo esté capacitado para implementar las reformas y promover una cultura de equidad y respeto en el ámbito escolar.

VIII. Colaboración Interinstitucional para la Seguridad en la Infraestructura Educativa

1. Se propone que el Estado, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, deberá garantizar la seguridad física de la infraestructura educativa en todos sus niveles, asignando personal especializado para la protección de las instalaciones escolares.
    - Artículo 21 Bis.- Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: El Estado, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, garantizará la seguridad física de la infraestructura educativa en todos sus niveles. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asignará personal de seguridad física en las escuelas para la vigilancia y protección de las instalaciones

escolares, asegurando un entorno seguro para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, el Sistema Criminológico Inteligente (SCI) será dirigido e implementado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para apoyar en la evaluación continua de las medidas de seguridad implementadas, así como en la identificación temprana de posibles riesgos. El SCI, operado de manera independiente y conectado al sistema de videovigilancia de las instalaciones educativas, permitirá establecer protocolos específicos de seguridad, en conjunto con las autoridades educativas, que incluirán medidas preventivas y de respuesta ante posibles amenazas, a fin de proteger integralmente a la comunidad educativa.

IX. Eventos Deportivos Periódicos (CONADE y SEP)

Se propone que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP), organicen y promuevan eventos deportivos periódicos en las instituciones educativas de todos los niveles, con el objetivo de velar por el principio del interés superior de la niñez.

1. Adición Propuesta: Artículo 10 Bis - Título Segundo, Del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Cultura Física y Deporte

   - Artículo 10 Bis: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP), organizará y promoverá eventos deportivos periódicos en las instituciones educativas de todos los niveles, con el objetivo de velar por el principio del interés superior de la niñez. Esta colaboración tiene como propósito garantizar el derecho a la salud, el desarrollo integral, y el sano esparcimiento de las niñas, niños y adolescentes en el país. Los eventos deberán incluir actividades que fomenten la equidad, la inclusión y la prevención de la violencia, promoviendo una cultura de paz y bienestar en el ámbito educativo.

X. Transporte Escolar Seguro y Accesible

Se propone que el Estado, a través de la Secretaría de Movilidad y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), garanticen el acceso al transporte escolar seguro, accesible y eficiente para todos los estudiantes, desde la educación básica hasta la superior.

1. Adición Propuesta: Artículo 24 Bis - Capítulo II, de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
    - Artículo 24 Bis: El Estado, a través de la Secretaría de Movilidad y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), garantizará el acceso al transporte escolar seguro, accesible y eficiente para todos los estudiantes, desde la educación básica hasta la superior. Este servicio de transporte deberá cumplir con los estándares de seguridad vial establecidos por la ley, asegurando que los estudiantes puedan acceder a sus centros educativos de manera segura y puntual. El transporte escolar será implementado prioritariamente en las zonas rurales y marginadas del país, donde el acceso a la educación puede verse obstaculizado por la falta de medios de transporte adecuados. Las autoridades locales, en conjunto con las entidades federales, deberán garantizar la infraestructura necesaria para la operación del transporte escolar, así como la fiscalización continua para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad. El Estado, a través de los programas de movilidad, asignará los recursos necesarios para garantizar la gratuidad del transporte escolar, asegurando que ningún estudiante quede excluido del sistema educativo por falta de acceso a transporte. Las autoridades locales deberán colaborar para asegurar la disponibilidad, operación, y supervisión continua del transporte escolar, así como la formación de los conductores en materia de seguridad vial y derechos de los menores.

XI. Otorgamiento de Becas Educativas Basado en Principios Científicos

Se propone que el Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), establesca un sistema de becas educativas gestionado de manera científica,

fundamentado en tres pilares principales: excelencia académica, pobreza extrema e inclusión. Estas becas serán otorgadas de forma transparente y equitativa, asegurando que los estudiantes más necesitados y aquellos con alto rendimiento académico tengan acceso a los recursos necesarios para continuar su educación.

1. Adición Propuesta: Artículo 119 Bis - Ley General de Educación (LGE)

- Artículo 119 Bis. El Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), establecerá un sistema de becas educativas gestionado de manera científica, fundamentado en tres pilares principales: excelencia académica, pobreza extrema e inclusión. Estas becas serán otorgadas de forma transparente y equitativa, asegurando que los estudiantes más necesitados y aquellos con alto rendimiento académico tengan acceso a los recursos necesarios para continuar su educación.
    - Excelencia Académica: Las becas serán otorgadas a estudiantes que demuestren un desempeño académico sobresaliente en sus estudios. Los criterios de evaluación incluirán tanto el rendimiento en el aula como en actividades extracurriculares relacionadas con su formación integral. La selección será basada en un sistema de puntaje objetivo, garantizando que los estudiantes más destacados reciban el apoyo necesario para continuar su educación.
    - Pobreza Extrema: El sistema de becas también estará dirigido a estudiantes que provengan de familias en situación de pobreza extrema. El Estado implementará mecanismos de identificación y verificación de estas condiciones, asegurando que las becas lleguen a quienes más las necesitan. El objetivo es reducir las barreras económicas que impiden el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
    - Inclusión:Se otorgarán becas a estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables o históricamente marginados, incluyendo personas con discapacidades, poblaciones indígenas y otros

grupos en situación de vulnerabilidad. El enfoque en la inclusión garantizará que todos los estudiantes, independientemente de su origen o condición, tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad.

- Transparencia y Evaluación: El proceso de selección de becarios será monitoreado y evaluado de manera continua mediante el Sistema Criminológico Inteligente (SCI), que utilizará análisis de datos para asegurar la equidad en la asignación de recursos. Además, se implementarán mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana para garantizar la transparencia en el otorgamiento de las becas.

B. Segundo Nivel Preventivo: Policía, Procuración de Justicia y Medidas de Protección para Prevenir la Violencia Contra la Mujer

I. Reforma para transitar al paradigma de la Seguridad Ciudadana

1. Adición Propuesta: Se propone agregar un tercer párrafo al Artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), en donde se deje claro que la estrategia de prevención delictiva se despliega en tres niveles. Todo esto como estrategia para contrarrestar el enfoque preventivo disuasivo/punitivo que se tiene actualmente, resultado tanto de la versión involucionada neoliberal implementada en México como de la ideología de género feminista que la apoya.

   - Artículo 2, tercer párrafo: La prevención del delito constituye una función esencial y estratificada del Estado, la cual se despliega a través de tres niveles interconectados de acción. El primer nivel se enfoca en abordar las causas raíz del delito, fomentando instituciones sociales robustas que aseguren el cumplimiento de los derechos fundamentales, como la educación obligatoria, la salud, la vivienda digna, y el empleo. El segundo nivel, operando bajo el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se dedica a la disuasión activa de la comisión de delitos y a la protección integral de las víctimas, empleando

medidas de vigilancia y respuesta rápida. Finalmente, el tercer nivel se concentra en el sistema penitenciario y judicial, con el objetivo de prevenir la reincidencia de los delitos, mediante programas de reinserción social. Este enfoque tripartito subraya el compromiso del Estado con la seguridad ciudadana como un derecho y responsabilidad fundamentales, garantizando un enfoque proactivo y multidimensional para la prevención del delito en la sociedad.

Además, siguiendo la pauta del artículo tercero de la LGSNSP, se propone reformar este Artículo a efecyo de incluir a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y al Departamento de Integración Familiar como autoridades que contribuyen tridimensionalmente a la prevención de los delitos.

2. Reforma Propuesta: Artículo 3 – de la LGSNSP

- Artículo 3: La función de Seguridad Ciudadana se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y el Departamento de Integración Familiar, autoridades que en razón de sus atribuciones contribuyen tridimensionalmente al objeto de esta Ley.

II. Fortalecimiento de la Estructura e Infraestructura de la Procuración de Justicia

Se propone mejorar la estructura e infraestructura de la procuración de justicia, garantizando un acceso efectivo, ágil y transparente a los mecanismos judiciales. Esta propuesta incluye la modernización tecnológica tanto de la FEADVVG como de la policía de género adscrita a la misma, mediante la implementación de un Sistema Criminológico Inteligente (SCI) que permita el

seguimiento en tiempo real de los casos, garantizando así la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, se fortalecerá la capacitación y profesionalización del personal policial en derechos humanos y seguridad ciudadana, asegurando que cada proceso judicial respete la dignidad de las víctimas y erradique cualquier forma de discriminación. El SCI también respaldará esta propuesta al facilitar la vigilancia y evaluación continua del desempeño de las instituciones de procuración de justicia, reduciendo la corrupción y garantizando el respeto a los derechos humanos, los derechos fundamentales y las garantías individuales en cada etapa del proceso. Esta propuesta se materializaría con las siguientes adiciones de ley:

1. Adición propuesta: Artículo 22 Bis - Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)
    - Artículo 22 Bis: La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género (FEADVVG) deberá contar con el personal y la infraestructura necesarios para garantizar una atención integral a las víctimas de violencia de género. El Estado deberá asignar los recursos suficientes para:

        -Incremento del personal especializado: Asegurando la contratación y capacitación de profesionales con experiencia en derechos humanos, género, y atención a víctimas de violencia.

        -Creación y fortalecimiento de Centros de Atención Integral (CAI): Los CAIs deberán ser establecidos en todas las FEADVVG, proporcionando servicios integrales que incluyan atención psicológica, legal, médica, y social para las víctimas. Estos centros también deberán ofrecer refugio temporal para las víctimas en situaciones de emergencia.

        -Infraestructura adecuada: Garantizar que todas las FEADVVG cuenten con instalaciones modernas y seguras, capaces de ofrecer un entorno propicio para la atención de las víctimas y la gestión eficiente de los casos de violencia de género.

-Vigilancia y Evaluación Continua: Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de las actividades y la efectividad de las FEADVVG, asegurando que se mantengan los más altos estándares en la atención a las víctimas y el manejo de casos.

2. Adición Propuesta: Artículo 7 Bis – Título II: Modalidades de la violencia, Capítulo I, de la Violencia en el Ámbito Familiar, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)

   - Artículo 7 Bis: El Estado, en coordinación con los municipios y las entidades federativas, implementará un Sistema Criminológico Inteligente (SCI) especializado en el Segundo Nivel Preventivo de la violencia familiar y/o de género. Este SCI estará fundamentado en el uso de tecnología avanzada para monitorear en tiempo real la ejecución y efectividad de las estrategias diseñadas para abordar este nivel preventivo. Las medidas implementadas incluirán, entre otras:

     -La instalación de cámaras de videovigilancia conectadas al SCI en refugios, casas de transición, viviendas subsidiadas por el Estado, Fiscalías Especializadas en Violencia de Género, y unidades policiales adscritas a esta dependencia.

3. Adición propuesta: Artículo 32 Bis, Ter, Quarter, Quintus, Sextus y Septimus, Centros de Atención Integral para Víctimas de Violencia de Género (CAIs) – Capítulo Cuarto: de la Estructura Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

   - Artículo 32 Bis: El Estado, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, establecerá Centros de Atención Integral (CAIs) en todas las FEADVVG, con el objetivo de proporcionar servicios integrales a las mujeres víctimas de violencia familiar y/o de género.
   - Artículo 32 Ter: Los CAIs ofrecerán los siguientes servicios en un sólo lugar:

     -Atención psicológica: Brindarán apoyo emocional y psicológico especializado a las víctimas de violencia de género.

-Asesoría legal: Proporcionarán asesoría y acompañamiento legal a las víctimas en los procesos judiciales que enfrenten.

-Atención médica: Ofrecerán servicios médicos para atender las consecuencias físicas y de salud derivadas de la violencia.

-Servicios sociales: Facilitarán el acceso a programas de apoyo social y económico para la reintegración de las víctimas a la sociedad.

-Refugio temporal: Proporcionarán un lugar seguro y confidencial para las víctimas y sus hijos en situaciones de emergencia.

- Artículo 32 Quarter: Los CAIs deberán contar con personal especializado en la atención a víctimas de violencia familiar y/o de género, debidamente capacitado en derechos humanos, seguridad ciudadana, y protocolos de atención integral.
- Artículo 32 Quintus: Los CAIs deberán coordinarse con las fiscalías especializadas, las unidades de atención a víctimas y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar una atención integral y continua a las mujeres víctimas de violencia.
- Artículo 32 Sextus: El Estado garantizará los recursos necesarios para la construcción, operación, y mantenimiento de los CAIs, priorizando las zonas de mayor incidencia de violencia familiar y/o de género y con mayor vulnerabilidad social.
- Artículo 32 Septimus: Los CAIs estaran fiscalizados y seran evaliuados por el SCI, asegurando la calidad y efectividad de los servicios prestados, permitiendo realizar ajustes oportunos en los protocolos de atención.

4. Adición Propuesta*:* Artículo 34 Quinterdecies – Capítulo VI: de las órdenes de Protección, de la LGAMVLV

- Artículo 34 Quinterdecies: Las mujeres en situación de alta vulnerabilidad, como aquellas en pobreza extrema, con discapacidades, o en riesgo de violencia grave, tendrán acceso prioritario a recursos de protección, incluyendo vivienda digna, órdenes de protección, y

programas de apoyo económico y social. El Sistema Criminológico Inteligente (SCI) identificará y priorizará los casos más urgentes para garantizar una respuesta inmediata y efectiva.

5. Adición Propuesta: Artículo 23 Bis - Capítulo V: De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, de la LGAMVLV

- Artículo 23 Bis: El Estado implementará un mecanismo de evaluación y monitoreo continuo de las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia contra las mujeres, utilizando el Sistema Criminológico Inteligente (SCI). Este mecanismo evaluará periódicamente la efectividad de las medidas adoptadas y propondrá ajustes basados en el análisis de datos y las necesidades reales de la población.

  Las evaluaciones se realizarán de manera transparente y participativa, involucrando a organizaciones de la sociedad civil, académicos, y expertos en derechos humanos y violencia de género.

6. Adición Propuesta: Artículo 33 Bis - Capítulo II: Atención Médica, Protocolos de Atención en Centros de Salud, de la Ley General de Salud.

- Artículo 33 Bis: Todos los centros de salud, tanto públicos como privados, deberán implementar protocolos de atención inmediata para mujeres víctimas de violencia familiar y/o de género. Estos protocolos incluirán el acceso rápido y gratuito a servicios médicos, psicológicos y legales, así como la implementación de mecanismos de derivación y seguimiento a través del Sistema Criminológico Inteligente (SCI).Los protocolos deberán garantizar que:

  -Se brinde atención integral y confidencial a las mujeres en situación de violencia.

  -Se establezcan rutas críticas de atención que incluyan la coordinación con las autoridades competentes, como la Fiscalía General de Justicia y los refugios para mujeres.

  -Se priorice la protección y seguridad de las mujeres en situación de violencia, evitando la revictimización.

7. Adición Propuesta: Artículo 64 Bis, Ter y Quater - Capítulo V: De la Profesionalización, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
    - Artículo 64 Bis. Todos los integrantes de las instituciones policiales, así como los operadores jurídicos involucrados en la seguridad pública, deberán contar con un título universitario en seguridad ciudadana, seguridad pública, derecho, criminología o áreas afines, y contar con la cédula profesional correspondiente. El grado mínimo requerido para ingresar a la función de seguridad pública será la licenciatura con título y cédula profesional. Este requisito deberá ser especificado claramente en todas las convocatorias de ingreso a las funciones de seguridad pública.
    - Artículo 64 Ter: Los integrantes de las instituciones de seguridad pública, así como los operadores jurídicos, estarán obligados a participar en programas de formación continua en derechos humanos, seguridad ciudadana y prevención de la violencia de género. Estos programas deberán ser actualizados periódicamente para reflejar los avances en estas áreas y asegurar que el personal esté preparado para responder adecuadamente a las situaciones de violencia familiar y/o de género.
    - Artículo 64 Quater: El Estado establecerá convenios con universidades e instituciones de educación superior para ofrecer programas de licenciatura y posgrado en seguridad ciudadana, seguridad pública, criminología, derechos humanos, política criminal y género, destinados a la profesionalización de los miembros de las fuerzas de seguridad pública. Estos programas deberán incluir tanto formación teórica como práctica, con un enfoque interdisciplinario y ético.
8. Adición propuesta: Capítulo I Bis. - El Sistema Criminológico Inteligente (SCI), de la LGSNSP

- Artículo 111 Ter. Se implementará el Sistema Criminológico Inteligente (SCI) como una herramienta tecnológica avanzada para el monitoreo, análisis, y prevención de la violencia familiar y/o de género y otros delitos de alto impacto. Este sistema integrará videovigilancia, análisis de datos, y algoritmos de inteligencia artificial (IA) para identificar situaciones de riesgo y evaluar la efectividad de las medidas preventivas.
- Artículo 111 Quater: El SCI se conectará a las redes de videovigilancia de la Fiscalia General de Justicia e instancias de seguridad pública de los tres ordenes de gobierno, para proporcionar un monitoreo en tiempo real de este segundo nivel preventivo. El sistema emitirá alertas tempranas y proporcionará información relevante para la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.
- Artículo 111 Quintus: El SCI realizará análisis predictivos y evaluaciones continuas de los patrones de violencia, permitiendo a las autoridades ajustar las estrategias de prevención y reacción conforme a las necesidades detectadas. Este análisis se basará en datos históricos y en tiempo real, asegurando una respuesta proactiva y efectiva.
- Artículo 111 Sextus: El SCI se encargará de fiscalizar y evaluar la implementación de las políticas públicas de prevención de la violencia familiar y/o de género, y otros delitos de alto impacto, proporcionando informes periódicos a las autoridades competentes para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Estos informes serán públicos y permitirán la rendición de cuentas por parte de las instituciones involucradas.
- Artículo 111 Septimus: La implementación y operación del SCI estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, asegurando que el sistema funcione de manera integrada y eficiente en todo el territorio nacional.

- Artículo 111 Octavus.: El Estado asignará los recursos necesarios para la instalación, operación, y mantenimiento del SCI, priorizando las áreas con mayor incidencia de violencia familiar y/o de género y otros delitos de alto impacto. Se establecerán programas de capacitación para el personal encargado de operar y supervisar el sistema.
- Artículo 111 Novenus: El uso del SCI deberá cumplir con los estándares más altos en materia de derechos humanos y protección de datos personales. Se implementarán salvaguardias para garantizar que la información recabada sea utilizada únicamente para los fines establecidos en esta ley y no vulnere la privacidad de las personas.

9. Adición Propuesta: Artículo 215 Bis, y Ter. - Capítulo III: Abuso de autoridad, del Codifo Penal Feseral (CPF).
    - Artículo 215 Bis: Se impondrá una pena de 3 a 7 años de prisión, destitución del cargo, e inhabilitación para desempeñar cualquier función pública por un período de hasta 10 años a cualquier servidor público que, teniendo la obligación de proteger a las víctimas de violencia familiar y/o de género, omita deliberadamente dicha protección, poniendo en riesgo la integridad física, psicológica o la vida de la víctima. Esta pena se incrementará en un tercio cuando la omisión comprometa, además, el interés superior de la niñez, afectando su bienestar integral, desarrollo sano o seguridad en cualquier forma.
    - Artículo 215 Ter: Los servidores públicos a quienes se les impute este delito tendrán derecho a un proceso justo y al debido proceso, respetando sus derechos humanos en todas las etapas del procedimiento.
10. Adición Propuesta: Artículos 82 Bis, Ter, Quater, Quintus, Sextus y Septimus - Capítulo II: De las Bases de Datos en Posesión de Instancias de Seguridad, Procuración y Administración de Justicia, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados:
    - Artículo 82 Bis: Los datos personales recabados y utilizados por el Sistema Criminológico Inteligente (SCI) deberán ser tratados de

conformidad con los principios de licitud, calidad, finalidad, lealtad, consentimiento, proporcionalidad, y responsabilidad, establecidos en la presente ley.

- Artículo 82 Ter: El tratamiento de datos personales en el SCI deberá limitarse estrictamente a los fines de prevención y monitoreo de la violencia de género y otros delitos de alto impacto, garantizando que los datos no sean utilizados para otros fines sin el consentimiento expreso de los titulares.
- Artículo 82 Quater: El acceso a los datos personales recabados por el SCI estará restringido a las autoridades competentes que participen en la implementación de las políticas de prevención y protección de las víctimas de violencia de género. Se establecerán controles estrictos para evitar el acceso no autorizado y garantizar la confidencialidad de la información.
- Artículo 82 Quintus: Los titulares de los datos personales tendrán derecho a acceder, rectificar, cancelar, y oponerse al tratamiento de sus datos en los términos establecidos en la presente ley. Además, se les informará de manera clara y transparente sobre el uso de sus datos en el contexto del SCI.
- Artículo 82 Sextus: Las autoridades responsables del SCI deberán implementar medidas de seguridad físicas, técnicas, y administrativas para proteger los datos personales contra el acceso no autorizado, la pérdida, el uso indebido, o la divulgación indebida.
- Artículo 82 Septimus: Cualquier violación a la protección de los datos personales en el contexto del SCI será sancionada de acuerdo con las disposiciones establecidas en la presente ley, garantizando la reparación del daño y la rendición de cuentas por parte de los responsables.

III. Derecho a una Vivienda Digna para Mujeres Víctimas de Violencia

Se propone la construcción de casas de transición y unidades habitacionales especializadas, seguras, propiedad del Estado y subsidiadas por este mismo,

diseñadas para mujeres víctimas de violencia familiar y/o de género. Estas viviendas no sólo proporcionarán un refugio seguro, sino también promoverán la reintegración social y económica de las víctimas. Además, se propone la adopción de un enfoque integral en el diseño de políticas públicas, en el cual la vivienda sea vista no sólo como un bien material, sino como un pilar en la construcción de un entorno seguro y equitativo. Esta propuesta se materializaria con las siguiente reformas de ley:

1. Reforma propuesta: Artículo 4º de la CPEUM, Adición de un párrafo que garantice el derecho a una vivienda digna y segura, con prioridad para mujeres víctimas de violencia de género.
    - Artículo 4º: Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar que este derecho se haga efectivo, especialmente para las mujeres víctimas de violencia familiar y/o de género, quienes tendrán acceso prioritario a viviendas subsidiadas y seguras, tanto de carácter transitorio como permanente. Las leyes determinarán las modalidades y requisitos para el acceso a estas viviendas, garantizando el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.
2. Adición propuesta: Artículo 8 bis - Ley General de Desarrollo Social (LGDS).
    - Artículo 8 bis: El Estado deberá garantizar el acceso a viviendas dignas para las mujeres víctimas de violencia, a través de la creación de casas de transición y unidades habitacionales especializadas propiedad del Estado, subsidiadas por este mismo y gestionadas en colaboración con el sector privado.
3. Adición propuesta: Artículo 7 Bis, Ter, Quater, Quintus, Sextus y Septimus - Capítulo II: De la programación, de la Ley de Vivienda.
    - Artículo 7 Bis: Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán acceso prioritario a viviendas propiedad y subsidiadas por el Estado, tanto de carácter transitorio como permanente. Estas viviendas deberán cumplir con estándares de seguridad, dignidad, y accesibilidad, y estarán diseñadas para facilitar la recuperación y reintegración social de las mujeres y sus familias.

- Artículo 7 Ter: Se considerarán viviendas de transición aquellas que proporcionen refugio temporal y seguridad inmediata a las víctimas de violencia, mientras se resuelve su situación legal y social. Estas viviendas estarán conectadas a servicios de atención integral, incluyendo apoyo psicológico, legal y social.
- Artículo 7 Quater: Las viviendas permanentes estarán destinadas a mujeres víctimas de violencia que no puedan regresar a su hogar debido a la situación de riesgo en la que se encuentran. El Estado garantizará que estas viviendas sean accesibles y adecuadas, promoviendo la independencia y la estabilidad de las beneficiarias.
- Artículo 7 Quintus: Los gobiernos federal y estatal asignarán recursos específicos para la construcción, mantenimiento, y operación de estas viviendas, priorizando las zonas con mayor incidencia de violencia familkiar y/o de género.
- Artículo 7 Sextus: La adjudicación de las viviendas estará sujeta a un proceso de evaluación que garantice la transparencia y equidad, asegurando que las mujeres más vulnerables reciban el apoyo necesario sin discriminación.
- Artículo 7 Septimus: Las autoridades en materia de vivienda deberán coordinarse con las fiscalías, los centros de atención a víctimas, y las organizaciones de la sociedad civil para asegurar la adecuada canalización de las mujeres a estas viviendas.

C. Tercer Nivel Preventivo: Reinserción Social y Prevención de la Reincidencia de la Violencia Contra la Mujer

I. Reforma para transitar al paradigma de la Seguridad Ciudadana.

Se propone una transformación integral del sistema penitenciario que permita la transición hacia un paradigma de seguridad ciudadana, alineado con los principios establecidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Para materializar esta transición, es fundamental garantizar la correcta y óptima salvaguarda de los ejes rectores de la reinserción

social: el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte.

Estos ejes deben ser implementados de manera efectiva y sostenida dentro de los centros penitenciarios, asegurando que no solo se cumplan como obligaciones legales, sino que se conviertan en herramientas reales de rehabilitación y reintegración social. Al fortalecer las estructuras y programas que promuevan el desarrollo personal y social de los internos, se reducirá la reincidencia y se contribuirá de manera directa a la seguridad ciudadana. Esta transformación implica un enfoque integral que considere la modernización de las instalaciones, la profesionalización del personal, y la colaboración interinstitucional para garantizar que los derechos fundamentales de los internos sean respetados y promovidos.

Este nuevo paradigma no solo busca castigar, sino rehabilitar y reintegrar a los individuos en la sociedad de manera positiva y constructiva, consolidando un sistema penitenciario que sea un verdadero instrumento de seguridad pública y bienestar social. Esta propuesta se materializaría con las siguientes reformas de ley:

1. Reforma propuesta: Artículo 1, de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). Incluir explícitamente el objetivo de la Ley como instrumento para fortalecer la seguridad ciudadana, destacando que la reinserción social efectiva de las personas privadas de la libertad es un componente fundamental para la reducción de la reincidencia y, en consecuencia, para la mejora de la seguridad pública.
    - Artículo 1, de la LNEP. La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; III. Regular los medios para lograr la reinserción social efectiva, enfatizando que esta es un componente esencial para la reducción de la reincidencia y la mejora de la seguridad pública, y IV. Servir como un instrumento fundamental para el

fortalecimiento de la seguridad ciudadana, mediante la implementación de programas que garanticen la reinserción social integral de las personas privadas de su libertad, asegurando que estos programas se conviertan en herramientas reales de rehabilitación y reintegración social.

Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley.

II. Creación de un Sistema Criminológico Inteligente (SCI)

1. Adición propuesta: Se propone la creación de un Sistema Criminológico Inteligente (SCI) que funcione de manera integral y omnipresente, similar al concepto de un panóptico digital. Este sistema deberá fiscalizar y evaluar continuamente tanto al sistema penitenciario en su conjunto como a las personas privadas de la libertad. Su objetivo será garantizar que las políticas de reinserción social, respeto a los derechos humanos, educación, salud, deporte y apoyo laboral se implementen de manera efectiva y adaptativa, contribuyendo así a la prevención de la reincidencia.

- Artículo 29 Bis. - Título Segundo, Capítulo I, De la Información en el Sistema Penitenciario, LNEP: El Estado implementará un Sistema Criminológico Inteligente (SCI), que operará como un panóptico digital, con una función integral, continua y omnipresente. Este sistema fiscalizará y evaluará de manera adaptativa los ejes rectores de la reinserción social y la prevención de la reincidencia delictiva. El SCI estará diseñado para ajustar sus intervenciones de acuerdo con las necesidades individuales de las personas privadas de la libertad y las demandas sociales específicas de cada contexto penitenciario. Además, garantizará la correcta implementación y efectividad de las políticas relacionadas con la educación, salud, deporte, apoyo laboral, y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Al operar de manera similar a un panóptico digital, el SCI promoverá una vigilancia constante y una adaptabilidad que permitirá reducir significativamente la reincidencia y

contribuir a la seguridad pública, sin menoscabar los derechos fundamentales de los internos.

III. Fortalecimiento y Remodelación de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social

1. Propuesta: Modernizar y remodelar los centros penitenciarios y de reinserción social, dotándolos de tecnología de vanguardia para garantizar la seguridad, eficiencia operativa, y condiciones de vida dignas para los internos. Este proceso incluirá la construcción y adecuación de comedores, la implementación de celdas individuales, especialmente diseñadas para el aislamiento de delincuentes acusados de delitos graves, y la integración del Sistema Criminológico Inteligente (SCI), el cual estará conectado a toda la infraestructura tecnológica para optimizar la gestión, vigilancia, y rehabilitación de los internos.
    - Artículo 6 Bis.- Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP): El Estado llevará a cabo un proceso integral de fortalecimiento y remodelación de los centros penitenciarios y de reinserción social, equipándolos con tecnología de vanguardia y asegurando que las instalaciones sean modernas, seguras y dignas. Esto incluirá la construcción de comedores adecuados, celdas individuales para la separación de internos según la gravedad de sus delitos, y la conexión del Sistema Criminológico Inteligente (SCI) a toda la infraestructura tecnológica para mejorar la seguridad y la rehabilitación.

VI: Colaboración Interinstitucional para la Educación en Centros Penitenciarios y de Reinserción Social

1. Propuesta: Establecer la colaboración entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el sistema penitenciario para garantizar la oferta educativa en los niveles básico, medio superior y superior dentro de los centros
    - Artículo 34 Bis. - Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). El Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en coordinación con las autoridades penitenciarias, garantizará la oferta de programas

educativos de nivel básico, medio superior y superior dentro de los centros penitenciarios y de reinserción social.

V. Colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previción Social (STPS)

1. Propuesta: Establecer la colaboración entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el sistema penitenciario para proporcionar capacitación laboral y garantizar oportunidades de empleo para los exinternos.
    - Artículo 14 Bis.- Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). El Estado, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en coordinación con las autoridades penitenciarias, garantizará la oferta de programas de capacitación laboral en los centros penitenciarios y de reinserción social, creando convenios con empresas para asegurar la inserción laboral de los exinternos y que estos tengan un empleo al momento de alcanzar su libertad.

VI. Colaboración con con el Instituto Nacional Electoral (INE)

1. Propuesta: Establecer la colaboración entre el INE y el sistema penitenciario para reactivar los derechos civiles y políticos de los exinternos y facilitar la recuperación de su credencial de elector.
    - Artículo 25 Bis.- Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) El Estado, en colaboración con el INE, garantizará la reactivación de los derechos civiles y políticos de los exinternos, asi como su nueva y actualizada Identificación Nacional Electoral (INE) al momento de obtener su libertad.

VII. Colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)

1. Propuesta: Establecer la colaboración entre la CONADE y el sistema penitenciario para desarrollar e implementar programas deportivos que promuevan la salud física y mental de los internos.
    - Artículo 32 Bis.- Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). El Estado, en colaboración con la CONADE, garantizará la implementación de

programas deportivos dentro de los centros penitenciarios y de reinserción social, orientados al desarrollo físico y mental de los internos.

VIII. Colaboración con la Secretaría de Salud

1. Propuesta: Establecer una colaboración estratégica entre la Secretaría de Salud y el sistema penitenciario para asegurar que los internos reciban atención médica integral y que se les proporcionen alimentos nutritivos y seguros, todo ello en instalaciones adecuadas que cumplan con los estándares de calidad.
    - Artículo 34 Ter.- Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP): El Estado, en colaboración con la Secretaría de Salud, garantizará la prestación de servicios de salud integral en los centros penitenciarios, así como la supervisión rigurosa de la calidad de los alimentos y de la infraestructura de los comedores, asegurando que estos cumplan con las condiciones necesarias para preservar la salud y el bienestar de los internos.

XI. Enfoque en la Higiene y Privacidad en Áreas Sanitarias

1. Propuesta: Modernizar y adecuar la infraestructura sanitaria en los centros penitenciarios para garantizar la privacidad, dignidad, y condiciones higiénicas adecuadas para todos los internos. Este enfoque incluye la renovación de instalaciones como duchas, baños y otras áreas sanitarias, asegurando que cumplan con estándares de calidad y privacidad que respeten los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Además, se implementará el Sistema Criminológico Inteligente (SCI) para monitorear estas áreas y asegurar su correcto uso y mantenimiento.
    - Artículo 30 Bis.- Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP): El Estado llevará a cabo un programa de mejora integral de la infraestructura sanitaria en los centros penitenciarios, garantizando que las instalaciones, como duchas y baños, ofrezcan condiciones de privacidad, dignidad y salubridad adecuadas para todos los internos. Asimismo, el Sistema Criminológico Inteligente (SCI) será

implementado para monitorear y asegurar el uso eficiente y el mantenimiento de estas áreas.

X. Restricción del Uso y la Posesión de Dinero en Efectivo

1. Propuesta: Implementar la prohibición del uso de dinero en efectivo dentro de los centros penitenciarios, estableciendo un sistema de cuentas electrónicas controladas para los internos, con el objetivo de garantizar la transparencia en las transacciones y minimizar las oportunidades de corrupción. El Sistema Criminológico Inteligente (SCI) será responsable de la fiscalización y evaluación continua de este sistema, asegurando su efectividad y transparencia.
    - Artículo 19 BIS.- Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP): Queda prohibido el manejo de dinero en efectivo dentro de los centros penitenciarios. Todas las transacciones realizadas por los internos se efectuarán a través de cuentas electrónicas controladas, bajo la supervisión del Sistema Criminológico Inteligente (SCI), que fiscalizará y evaluará el sistema para garantizar la transparencia, la seguridad y la reducción de actos de corrupción.

XI. Gestión de Ropa y Lavandería

1. Propuesta: Implementar un sistema centralizado de gestión de ropa y lavandería en los centros penitenciarios, asegurando que todos los internos tengan acceso a ropa limpia y adecuada de manera regular, bajo condiciones que respeten su dignidad y bienestar. El Sistema Criminológico Inteligente (SCI) será responsable de monitorear y evaluar la eficiencia y efectividad de este sistema, garantizando su correcta operación y adaptación a las necesidades de los internos.
    - Artículo 32 Bis.- Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP): El Estado garantizará la implementación de un sistema centralizado de gestión de ropa y lavandería en los centros penitenciarios. Este sistema, supervisado por el Sistema Criminológico Inteligente (SCI), asegurará la provisión regular de ropa limpia y adecuada a los internos,

manteniendo estándares de higiene y dignidad, y optimizando los recursos para garantizar una gestión eficiente y equitativa en todas las instalaciones.

XII. Programa de Actividades Recreativas y Espirituales

1. Propuesta: Implementar y fomentar programas recreativos y espirituales en los centros penitenciarios, diseñados para mejorar la salud mental y emocional de los internos, proporcionando un espacio para el desarrollo personal y el fortalecimiento de su bienestar integral. El Sistema Criminológico Inteligente (SCI) será responsable de monitorear y evaluar la eficacia de estos programas, asegurando su impacto positivo en la rehabilitación de los internos.
    - Artículo 35 Bis.- Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP): El Estado, en colaboración con diversas organizaciones, promoverá e implementará programas recreativos y espirituales en los centros penitenciarios, destinados a fortalecer la salud mental y emocional de los internos. Estos programas estarán diseñados para ofrecer oportunidades de desarrollo personal, reflexión y bienestar integral, contribuyendo de manera significativa a su rehabilitación y reinserción social. El Sistema Criminológico Inteligente (SCI) supervisará y evaluará la implementación y efectividad de estos programas, garantizando que cumplan con sus objetivos de mejorar el bienestar de los internos.

XIII. Derogación del Artículo 281 del Código Penal del Estado de México y Modificación del Capítulo II sobre Homicidio

1. Propuesta: Derogar el artículo 281 del Código Penal del Estado de México, que actualmente tipifica el feminicidio, e incorporar las circunstancias de género como agravantes en los artículos 241 y 242 del Capítulo II sobre Homicidio. Esto asegurará que las circunstancias específicas de género se consideren en la pena, sin la necesidad de mantener un tipo penal separado.
    - Articulo 281.- Código Penal del Estado de México (CPEM): Derogado.

- Artículo 241.- Código Penal del Estado de México (CPEM): Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Se sancionará como homicidio a quien, a sabiendas de que padece una enfermedad grave, incurable y mortal, contagie a otro o le cause la muerte. Además, se considerarán agravantes del delito de homicidio las siguientes circunstancias específicas de género:

  -I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

  -II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia;

  -III. Existan antecedentes, datos o medios de prueba de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

  -IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

  -V. Existan datos o medios de prueba que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

  -VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

  -VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público;

  -VIII. El homicidio se cometa como resultado de violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo una persona conocida o desconocida, y sin ningún tipo de relación previa con la víctima.

- Artículo 242.- Código Penal del Estado de México (CPEM): El delito de homicidio se sancionará en los siguientes términos:

  -I. Al responsable de homicidio simple, se le impondrán de diez a quince años de prisión y de doscientos cincuenta a trescientos setenta y cinco días multa. Cuando el homicidio se cometa contra una persona en ejercicio de la actividad periodística o persona defensora de derechos humanos, se le

impondrán de quince a veinticinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos cincuenta días multa.

-II. Al responsable de homicidio calificado, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa. Esta pena se aplicará también en los casos donde concurran las agravantes de género señaladas en el Artículo 241.

-III. Al responsable de homicidio cometido en contra de su cónyuge, concubina, concubinario, ascendientes, descendientes consanguíneos en línea recta o hermanos, teniendo conocimiento el inculpado del parentesco, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa.

-IV. Al responsable del homicidio de dos o más personas, en el mismo o en distintos hechos, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa.

-V. Al responsable del delito de homicidio con ensañamiento, crueldad o de odio manifiesto motivado por discriminación, aversión o rechazo a la víctima por su condición social o económica, religión, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual o identidad de género de la víctima, se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa.

Disposiciones adicionales:

-Además de las sanciones mencionadas, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, así como los inherentes a la patria potestad, tutela o curatela, guarda y custodia sobre las y los hijos.

-La pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea una mujer menor de edad, embarazada o discapacitada, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.

Bibliografía

ACKERMAN, John M., Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel, Escamilla Trejo, Miguel, Jurado Zapata, Israel (coords.). "Las derechas en México: democracia y disputas político-culturales en México y el mundo." Ciudad de México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Universidad Nacional Autónoma de México, 2022. Disponible en: *https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Las_derechas_en_Mexico.pdf.*

ADAMOVSKY, Esequiel. "Más allá de la vieja izquierda: seis ensayos para un nuevo anticapitalismo." Argentina: Prometeo, 2007. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=A0S5dn8q86cC&printsec=frontcover&dq=anticapitalismo&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwj187i867-EAxXSEUQIHcxRDiQQ6wF6BAgGEAE.*

ADORNO, Theodor W. "Rasgos del nuevo radicalismo de derecha." España: Penguin Random House, 2020. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=WmXJDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=radicalismo+de+derecha&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwihkYeyqLuEAxU6mGoFHV3cCaYQ6wF6BAgNEAE.*

AGUILERA Gómez, Manuel. "México: ¿neoliberalismo de izquierda? Las profundas manifestaciones de la crisis." Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2021. Disponible en: *http://132.248.170.14/publicaciones/CID/C26.pdf.*

ALANÍS Boyzo, Rodolfo. "Historia de la Revolución en el Estado de México (1910-1920)." México: Fondo Editorial Estado de México, 2015. Disponible en: *https://ceape.edomex.gob.mx/sites/ceape.edomex.gob.mx/files/Historia%20de%20la%20Revolucion_baja%20resolucion.pdf.*

ALLPORT, Gordon W. *La Naturaleza del Prejuicio*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1971.

ÁLVAREZ Díaz de León, Germán, Montenegro, Núñez, María del Carmen, Martínez, José Manuel. "Apuntes acerca de dos escuelas criminológicas: clásica y positivista." México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. Disponible en: *https://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Apuntes_acerca_de_dos_escuelas_criminologicas_Clasica_y_positivista_Alvarez_Diaz_Montenegro_Nunez_Manuel_Martinez_TAD_7_8_9_sem.pdf.*

ARISTÓTELES. *Política*. Trad. Manuela García Valdés. España: Gredos, 2022.

ARMSTRONG, Paul, B. *Lecturas en Conflicto: Validez y Variedad en la Interpretación*. México: UNAM, 1992.

BARATTA, Alessandro. "Política criminal: entre la política de seguridad y la política social." en *Delito y seguridad de los habitantes*, editado por Isaías Carranza, 89-110. México, D.F.: Editorial Siglo XXI, Programa Sistema Penal Derechos Humanos de ILANUD y Comisión Europea, 1997. Disponible en: *https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/05/doctrina46549.pdf.*

BOBBIO, Norberto. “Derecha e Izquierda: Razones y Significados de una Distinción Política.” Trad. Alessandra Picone. 8ª ed., Madrid: Taurus, 1996. Disponible en: *https://tomasdeaquino.cl/upfiles/documentos/02052016_1113am_57278ab45b772.pdf.*

BOURDIEU, Pierre. "Capital cultural, escuela y espacio social." Trad. Isabel Jiménez. 2ª ed., México: Siglo XXI Editores, 1998. Disponible en: *https://www.u-cursos.cl/facso/2017/1/TS01023/1/material_docente/bajar?id_material=1700641.*

BOURDIEU, Pierre. "Poder, derecho y clases sociales." 2ª ed., Trad. María José Bernuz Beneitez, Andrés García Inda, María José González Ordovás y Daniel Oliver Lalana. Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, 2001. Disponible en: *https://erikafontanez.com/wp-content/uploads/2015/08/pierre-bourdieu-poder-derecho-y-clases-sociales.pdf.*

BRAGA Costa, Réne Morais. "A industria das fake news e o discurso de ódio." Trad. propia. En Delitos políticos, libertad de expresión y discurso de odio, editado por Rodolfo Viana Pereira, vol. 1, 45-78. Belo Horizonte: IDDE, 2018. Disponible en: *https://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/bitstream/handle/bdtse/4813/2018_braga_industria_fake_news.pdf?sequence=1&isAllowed=y*.

BUCHANAN, Allen, Copp, David, Fletcher George, y Sue, Henry. "Autodeterminación y secesión." España: Gedisa, 2014. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=xDkIBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=derecho+de+autodeterminación+nacional&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjX55eN9syFAxV5O0QIHeieBWIQ6wF6BAgJEA.*

BUTLER, Judith. "El género en disputa: el feminismo y la subversión de identidad." Trad. María Antonieta Muñoz. Barcelona: Paidós, 2007. Disponible en: *https://www.lauragonzalez.com/TC/El_genero_en_disputa_Buttler.pdf.*

CANTOR, Norman F. "Civilization of the middle ages." Reino Unido: Harper Collins, 2015. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=d1rHCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=The+civilization+of+the+Middle+Ages+:+a+completely+revised+and+expanded+edition+of+Medieval+history,+the+life+and+death+of+a+civilization&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjF_cDilc2HAxVlJUQIHdnZG9UQ6wF6BAgIEAE.*

CARRANZA, Isaías (Coord.). "Delito y seguridad de los habitantes." México, D.F.: Editorial Siglo XXI, Programa Sistema Penal Derechos Humanos de ILANUD

y Comisión Europea, 1997. Disponible en: *https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/05/doctrina46549.*

CASTELLS, Manuel. *Networks of outrage and hope*. U.K., Cambridge: Polity Press, 2ª ed., 2015.

CHINCHILLA, Laura, y Vorndran, Doreen. "Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe: Desafíos e innovación en gestión y políticas públicas en los últimos 10 años." Washington DC: Banco Interamericano de Desarrollo, 2018. Disponible en: https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2018/11/LChinchilla_SegCiud_Nov2018_FINAL.pdf.

CHRISTIE, Nils. "La industria del control del delito: ¿La nueva forma del holocausto?" Prólogo de Eugenio Raúl Zaffaroni, Buenos Aires: Editores del Puerto, 1993. Disponible en: *https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/02/doctrina40689.pdf.*

COBO, Cristóbal, y John W. Moravec. "Aprendizaje invisible: Hacia una nueva ecología de la educación." Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2011. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=gRm1NfSWWqsC&printsec=frontcover&dq=aprendizaje+invisible&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjj9NqJtcWHAxWzLkQIHTYUAq0Q6wF6BAgIEAE.*

COHEN, Joshua. "Deliberation and Democratic Legitimacy." en *Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics*, editado por James Bohman y William Rehg, Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press, 1997. Disponible en: *http://www.sze.hu/~smuk/Nyilvanossag_torvenyek_CEE/Szakirodalom/Deliberat%C3%ADv%20demokr%C3%A1cia/deliberative%20democracy%20book.pdf.*

COPI, Irving M., Carl Cohen, y Kenneth McMahon. *Introduction to Logic*. 14ª ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2014.

DE BEAUVOIR, Simone. "El segundo sexo." París: Kayleigh BCN, trad. Alicia Martorell, 1949. Disponible en: *https://perio.unlp.edu.ar/catedras/comyddhhlic/wp-content/uploads/sites/152/2020/08/7-De-Beauvoir-Simone-El-segundo-sexo.pdf.*

DEWEY, John. "Experiencia y educación." Trad. de Lorenzo Luzuriaga, edición y estudio introductorio de Javier Sáenz Obregón, Madrid: Biblioteca Nueva, 2004. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1qIP3juN0yFlmTUZVb88tNOqdebr4-P53/view?usp=drive_link.*

DIANA E. H. Russell y Nicole Van de Ven, eds. "Crimes against women: Proceedings of the International Tribunal." 3ra ed., Berkeley, California: Russell Publications, 1990. Disponible en: *https://www.dianarussell.com/f/Crimes_Against_Women_Tribunal.pdf.*

DIJK, Teun A. van. "Ideología y discurso: Una introducción multidisciplinaria." España: Ariel, 2003. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=Nz4iy0RNuTYC&printsec=frontcover&dq=van+Dijk,+Teun+A.,+Ideología+y+Discurso:+Una+Introducción+Multidisciplinaria&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwic-ISpq7GHAxXdJEQIHf8JBToQ6wF6BAgIEAE.*

FERNÁNDEZ Pérez, Jorge, Barajas Arroyo, Guadalupe, y Yañez Barroso Laura. "Profesión, ocupación y trabajo: Eliot Freidson y la conformación del campo." Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2022. Disponible en: *https://comunicacion-cientifica.com/wp-content/uploads/2023/02/083.-PDF-Profesion-ocupacion-y-trabajo.pdf.*

FERRAJOLI, Luigi. "Derechos y garantías: La ley del más débil." 4ta. edición, Trad. Perfecto Andrés Ibáñez, y Andrea Greppi, España: Trotta, 2008. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1DsJV075Ma59Y-4zsDMb_6E58PtbSYLaL/view?usp=sharing.*

FOUCAULT, Michel. "Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión." Trad. de Aurelio Garzón del Camino, Argentina: Siglo Veintiuno, 2002. Disponible en: *https://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf.*

FREIRE, Paulo. "Pedagogía del oprimido." Buenos Aires: Siglo XXI Argentina Editores, 1972. Disponible en: *https://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf.*

FRIEDMAN, Milton. *Capitalismo y libertad*. Trad. de Cristina Casabón, España: Deusto, 2022.

FRIEDMAN, Milton. *Neo-Liberalism and its Prospects*. Trad. de Esteban Leiva, USA: Farmand, 1951.

GARCÍA Canal, María Inés. "El imposible duelo." Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género, 2014. *Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1MLSkPfjamVS1piXNSh1vKHY9nRa4LiR-/view?usp=drive_link.*

GARCÍA Pablos de Molina, Antonio. *Tratado de Criminología*. Valencia: Tirant lo Blanch, 3ª Ed., 2003.

GARLAND, David. *La cultura del control: Crimen y orden social en la sociedad contemporánea.* Traducción de Máximo Sozzo, España: Gedisa-México, 2005.

GERDA Lerner. "La creación del patriarcado." USA: Crítica, 1986. Disponible en: *https://redmovimientos.mx/wp-content/uploads/2020/07/La-creaci%C3%B3n-del-patriarcado-Lerner.pdf*

GOFFMAN, Erving. Internados: “Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales.” Trad. de María Antonia Oyuela de Grant, Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2001. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/15p4AWvZl4WEGa7tX3fMhq8RwwYeTVRfP/view?usp=drive_link.*

GOLDBERG, Steven. "Why men rule: A theory of male dominance." USA: Open court, 1993. Disponible en: *https://zlibrary.to/dl/why-men-rule-a-theory-of-male-dominance.*

GONZÁLEZ Fernández, José Antonio. "La seguridad pública en México," en Peñaloza, Pedro José Garza Salinas, Mario A. (coords), *Los desafíos de la seguridad pública en México*, México: Universidad Iberoamericana, 2002. Disponible en: *http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/9387.*

GONZÁLEZ Rodríguez, Patricia Lucila. "La policía de investigación en el sistema acusatorio mexicano." México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2016. Disponible en: *http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/12290.*

GOODFELLOW, Ian, Bengio, Yoshua y Courvilleet, Aaron. "Deep Learning." Cambridge: MIT Press, 2016. Disponible en: *http://imlab.postech.ac.kr/dkim/class/csed514_2019s/DeepLearningBook.pdf.*

GRIFFIN, Roger. "The nature of fascism." Great Britain: Routledge, 2003. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=QS9TAQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Griffin,+Roger.+%22The+Nature+of+Fascism%22&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiGnMSZlLuEAxXLmGoFHZ2lBxkQ6wF6BAgNEAE.*

HABERMAS, Jürgen. "Facticidad y validez: Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso." Trad. de Manuel Jiménez Redondo, Madrid: Trotta, 2010. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1C0sqnC7i5Obt1LdZrOUaoXZbcC5s6C2a/view?usp=drive_link.*

HAFKIN Pleck, Elizabeth. "Domestic tyranny: The making of American social policy against family violence from colonial times to the present." USA: University of Illinois Press, 2004. Disponible en: *https://books.google.com.mx/books?id=zN2A2shTz6YC&printsec=frontcover&dq=Domestic+Tyranny:+The+Making+of+Social+Policy+against+Family+Violence+from+Colonial+Times+to+the+Present+pdf&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjg2dvuvM2FAxW64ckDHYRaCB0Q6wF6BAgGEAE.*

HEPP, Andreas. Jarke, Juliane y Krampet, Leif. “New Perspectives in Critical Data Studies: The Ambivalences of Data Power.” Switzerland: Palgrave Macmillan, 2022. Disponible en:

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/57022/1/978-3-030-96180-0.pdf#page=67.

HIRSCHI, Travis. "Causes of delinquency." Nueva York, Estados Unidos: Routledge, 2017. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1o1Z0y-prwvSmCe7T3LcCPn3jS2eZzJye/view?usp=sharing.*

HOLLAND, John H. "Complexity: A very short introduction." Oxford: Oxford University Press, 2014. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=lmygAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Holland,+John+H.+Complexity:+A+Very+Short+Introduction.+Oxford+University+Press,+2014,+pdf&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiFzLWn89aHAxUZJUQIHTxNE9oQ6wF6BAgGEAE.*

HOLLAND, John H. *El orden oculto: De cómo la adaptación crea la complejidad.* Trad. de Alexander Esteban Torres, México: Fondo de Cultura Económica, 2004.

JEAN Watkins, Gloria. "Feminist theory: From margin to center." Trad, de Ana Useros Martín, 3ª ed., Nueva York y Londres: Routledge, 2015. Disponible en: *https://traficantes.net/sites/default/files/TDS_map61_Hooks_web_baja.pdf.*

JUÁREZ Parra, Gloria Roxana. *Para conocer a las fuerzas armadas de México*. México: Secretaría de Educación Pública, 2016.

JUNGNITZ, Ludger. Lenz, Hans-Joachim. Puchert, Ralf. Puhe, Henry y Walteret, Willi. “Violence Against Men: Men’s Experiences of Interpersonal Violence in Germany.” Bonn: Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, 2004. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1ajZSvKO_1pj3zWgz-7X94SgmXbjfZR_M/view?usp=drive_link.*

KANOUSSI, Dora (comp.). "El pensamiento conservador en México." México: Plaza y Valdés, 2002. Disponible en: *https://books.google.com.mx/books?id=AXJL1Nbv0sgC&pg=PA11&dq=dora+kanoussi&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiByff_p7uEAxXSkWoFHfYbBdoQ6wF6BAgEEAE.*

KANT, Immanuel. "Fundamentación de la metafísica en las costumbres." Trad. de Manuel García Morente, 8ª ed., Argentina: Espasa-Calpe, 1946. Disponible en: *https://www.google.com.mx/books/edition/Fundamentaci%C3%B3n_de_la_metaf%C3%ADsica_de_las/lEZeAAAAcAAJ?hl=es-419&gbpv=1&pg=PA5&printsec=frontcover.*

KANT, Immanuel. "Teoría y praxis." Argentina: El Cid Editor, ISBN versión ePub 978-1-4492-7518-1, 2014. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=BRLmDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=immanuel+kant&hl=es-*

419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi1yo2P2aSFAxV7IEQIHRZjCDsQ6wF6BAgMEAE.

KANT, Immanuel. *Crítica de la razón práctica.* Trad. de J. Rovira Armengol, Buenos Aires: La Página S.A., 2003.

KASER, Max., Knütel, Rolf., Lohsse, Sebastian., "Derecho privado romano." España: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2022, disponible en: *https://books.google.com/books?id=H9CIEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Derecho+privado+romano&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwivkZWQhIyJAxVKIEQIHdSIKYAQ6wF6BAgLEAE.*

KELSEN, Hans. *Teoría pura del derecho.* Trad. de Roberto J. Vernengo, México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

KREIMER, Roxana. *El patriarcado no existe más*. Buenos Aires: Galerna, 2020.

KRUG, Etienne G., Dahlberg, L. Linda, Mercy, A. James, Zwi B. Anthony, y Lozano, Rafael. "World Report on Violence and Health." Ginebra. Organización Mundial de la Salud, 2002. Disponible en: *https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf?sequence=1.*

KUHN, Thomas S. "La estructura de las revoluciones científicas." Trad. de Agustín Contin, 1ª ed. en español, México: Fondo de Cultura Económica, 1971. Disponible en: *https://materiainvestigacion.files.wordpress.com/2016/05/kuhn1971.pdf.*

LA CASA del Encuentro. "Por Ellas... 5 años de Informes de Femicidios, Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Marisel Zambrano." Buenos Aires. La Casa del Encuentro. ISBN 978-987-45156-0-5, 2013. Disponible en: *https://www.diariofemenino.com.ar/documentos/PorEllas.pdf.*

LACLAU, Ernesto. "La razón populista." Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 2005. Disponible en: *https://enriquedussel.com/txt/Textos_200_Obras/Aime_zapatistas/Razon_populista-Ernesto_Laclau.pdf.*

LAGARDE y de los Ríos, Marcela. "El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia." en *Mujeres globalización y derechos humanos*. 2ª ed., Maquieira d'Angelo Virginia (coord.). España: Universidad de Valencia. 2010.

LEFORT, Claude. "Democracy and Political Theory." Cambridge: Polity Press. 1988. Disponible en: *https://epdf.mx/democracy-and-political-theory.html.*

LEFORT, Claude. "The Political Forms of Modern Society: Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism." Cambridge: MIT Press, 1986. Disponible en: *https://epdf.mx/the-political-forms-of-modern-society-bureaucracy-democracy-totalitarianism.html.*

LEFORT, Claude. *La Incertidumbre Democrática: Ensayos Sobre lo Político*. Edición de Esteban Molina, Barcelona, Anthropos Editorial, 2004.

LOMAS, Carlos. *¿El otoño del patriarcado? Luces y sombras de la igualdad entre mujeres y hombres*. España: Ediciones Península. 2008.

LÜDERSSEN, Klaus. "*Einführung in die Probleme, Kriminologie*." Alemania: Baden-Baden Nomos. 1984. citado en García Pablos de Molina. Antonio. *Tratado de Criminología*. Valencia. Tirant lo Blanch. 3ª ed. 2003.

LYON, David. "Surveillance Studies: An Overview." Cambridge, Polity Press, 2007. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=_dTHJgh3-f0C&printsec=frontcover&dq=Lyon,+David,+%E2%80%9CSurveillance+Studies:+An+Overview,%E2%80%9D+trad,+propia,+Cambridge,+Polity+Press,+2007&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjNvOfht9mHAxVrJUQIHZL2NeEQ6wF6BAgGEAE.*

LYON, David. "The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life." Alemania: Polity Press. 2018. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=WJNcDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=David+Lyon,+en+The+Culture+of+Surveillance:+Watching+as+a+Way+of+Life&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwik-biV4N-HAxXI5MkDHW5VLpoQ6wF6BAgLEAE.*

MACHILLOT, Didier. *Machos y machistas: Historia de los estereotipos mexicanos*. México: Grupo Planeta. 2017.

MARTÍ, Salvador y Gomà, Ricard. "Creadores de democracia radical: movimientos sociales y redes de políticas públicas." España: Icaria. 2002. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=WBFQfqLwrMkC&printsec=frontcover&dq=MART%C3%8D,+Salvador+y+Gom%C3%A0,+Ricard.+%E2%80%9CCreadores+de+democracia+radical:+movimientos+sociales+y+redes+de+pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas.%E2%80%9D+Espa%C3%B1a.+2002.&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi1kO-JwqKIAxWTH0QIHacqPO8Q6wF6BAgIEAE*

MARX, Karl. "Grundrisse: Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Borrador) 1857-1858." España: Siglo XXI. vol. 1. 2007. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1N82MprDcqaAwzzVbFGZcvFg443yfi4UU/view?usp=drive_link.*

MOHL, Robert von. *Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechts-Staates*. Alemania: bei Heinrich Laupp. 1832.

MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Barón de. "El espíritu de las leyes." Reino Unido: Cambridge University Press. 1989. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=__F8xEX8uw8C&printsec=frontcover&dq=Montesquieu&hl=es-*

419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiD4uuq98CGAxVoIUQIHSGJA4wQ6wF6BAgKEAE.

NICOLÁS Márquez, Agustín Laje Arrigoni. *El libro negro de la nueva izquierda: Ideología de género o subversión cultural*. Buenos Aires. Grupo unión. 2016.

NILS Christie. “La industria del control del delito: ¿La nueva forma del holocausto?” Trad. de Sara Costa, 2ª ed. Buenos Aires: Editores del Puerto. 1993. Disponible en: *https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/02/doctrina40689.pdf.*

NORRIS, Pippa. "Derecha radical." España: Akal, 2009. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=-tmLcQ2Cy-YC&printsec=frontcover&dq=radicalismo+de+derecha&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwihkYeyqLuEAxU6mGoFHV3cCaYQ6wF6BAgKEAE.*

OLIVARES Ferreto, Edith. "Análisis político: Condiciones sociolaborales de los cuerpos policiales y seguridad pública." México: Friedrich Ebert Stiftung, ISBN: 978-607-7833, 2010. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1gqafvcPzTiUsMX7fvtjUMv3-ELcLevIW/view?usp=drive_link*

ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas (ONU). "La mujer y el derecho a una vivienda adecuada." New York y Ginebra: ONU, 2012. Disponible en: *https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.11.2_sp.pdf.*

ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). "Global Study on Legal Aid: Global Report." Vienna: United Nations, 2016. Disponible en: *https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/LegalAid/Global_Study_on_Legal_Aid_-_FINAL.pdf.*

PARSONS, Talcott. “La estructura de la acción social: Estudio de teoría social con referencia a un grupo de recientes escritores europeos.” Trad. de Juan José Cadallero y José Castillo Castillo. Madrid: Ediciones Guadarrama, 1968. Disponible en: *file:///C:/Users/vo/Downloads/Teoria_Economica_Texto_8_Parsons_Talcott.pdf.*

PASQUALE, Frank. "The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information." Estados Unidos: Harvard University Press, 2015. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=ll3rBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=The+Black+Box+Society:+The+Secret+Algorithms+That+Control+Money+and+Information&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiEmIHJ3dGHAxWTHUQIHe-nBHYQ6wF6BAgFEAE.*

PÉREZ Carrillo Agustín, Massimo, Pavarini y Tagle, Fernando Tenorio. “La prevención delictiva en un ambiente de conflicto social.” en *Seguridad Pública Tres puntos de vista convergentes*. México: Coyoacán. 2006.

PERRY, Walter L., McInnis, Brian, Price, Carter C., Smith, Susan, y Hollywoodet, John S. "Predictive Policing: The Role of Crime Forecasting in Law Enforcement Operations." Santa Monica: RAND Corporation, 2013. Disponible en: *https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR233.html.*

PITA González, Alexandra, y Marichal Salinas, Carlos. “Pensar el antiimperialismo: Ensayos de historia intelectual latinoamericana, 1900-1930.” México: El Colegio de México AC, 2012. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=D-QeAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=antiimperialismo&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiGzNOgl8CEAxXMMEQIHWFHDloQ6wF6BAgMEAE.*

PLATÓN. “República.” Trad. por Conrado Eggers Lan. Madrid: Editorial Gredos, 1988. Disponible en: *https://posgrado.unam.mx/filosofia/pdfs/Plat%C3%B3n_Rep%C3%BAblica.pdf.*

PONCE Adame, Esther, Lucatello, Simone, Huacuja Acevedo, A. Luis, y Velázquez Flores, Rafael. “Teoría y práctica de la cooperación internacional para el desarrollo: Una perspectiva desde México.” Ciudad de México: Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2018. Disponible en: *https://www.institutomora.edu.mx/Docencia/Cooperacion/SiteAssets/SitePages/Admisiones/Teoría%20y%20Práctica%20de%20la%20CID.%20México%20(Ponce,%20Huacuja%20y%20Lucatello).pdf.*

POPPER, Karl Raimund. "La miseria del historicismo." Trad. de Pedro Schwartz. Digitalizado por Titivillus, 2023. Disponible en: *https://proletarios.org/books/Popper-Miseria_del_historicismo.pdf.*

PUTNAM, Hilary. "Minds and Machines." In Sidney Hook (ed.), *Dimensions of Mind: A Symposium*. New York: University Press, 1960. Disponible en: *https://e-l.unifi.it/pluginfile.php/914635/mod_folder/content/0/lezione%207%20-%20Putnam%20-%20Minds%20and%20Machines.pdf?forcedownload=1.*

RAMÍREZ de Garay, Iván. "El lenguaje de la derecha radical europea." México: Colegio de México, 2008. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=REUNa-2P5IQC&printsec=frontcover&dq=radicalismo+de+derecha&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwihkYeyqLuEAxU6mGoFHV3cCaYQ6wF6BAgIEAE.*

RIVERA Beiras, Iñaki (coord.). "Política criminal y sistema penal: Viejas y nuevas racionalidades punitivas." Barcelona: Anthropos, 2005. Disponible en: *https://www.academia.edu/29125193/_Politica_Criminal_Y_Sistema_Penal_Rivera_I%C3%B1aki.*

RODRÍGUEZ Manzanera, Luis. "Criminología." 2ª ed. México: Editorial Porrúa, 1981. Disponible en: *https://yorchdocencia.files.wordpress.com/2014/06/criminologc3ada-rodrc3adguez-manzanera-luis.pdf.*

RODRÍGUEZ, Araujo Octavio. "Derechas y ultraderechas en México." España: Orfila Valentini, 2020. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=1VkmEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=radicalismo+de+derecha&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwihkYeyqLuEAxU6mGoFHV3cCaYQ6wF6BAgMEAE.*

ROXIN, Claus. "Derecho Penal: Parte General." Trad. de Diego Manuel Luzon Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal. 2ª ed. España: Civitas, 1997. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1IkwMDp2C4G9Tz41u4PXiHgMdgIog5S4H/view?usp=sharing.*

RUIZ Resa, Josefa Dolores. "Los derechos de los trabajadores en el franquismo." España: Dykinson, 2015. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=-azRCQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=los+derechos+de+los+trabajadores&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi0wJWOgcCEAxXhJkQIHft2AxAQ6wF6BAgNEAE.*

RUSSELL, Diana E. H. "Feminicidio: una perspectiva global." Editado por Roberta A. Harmes. Ciudad de México: UNAM, 2006. Disponible en: *https://books.google.com.mx/books?id=Aq1yKJQFjLYC&printsec=frontcover&dq=diana+russell+feminicidio+pdf&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjftJqmnP-HAxVtLUQIHWcyPAUQ6wF6BAgFEAE.*

RUSSELL, Stuart J., y Peter Norvig. "Artificial Intelligence: A Modern Approach."4ª ed. UMwepper Saddle River NJ: Pearson, 2020. Disponible en: *https://dl.ebooksworld.ir/books/Artificial.Intelligence.A.Modern.Approach.4th.Edition.Peter.Norvig.%20Stuart.Russell.Pearson.9780134610993.EBooksWorld.ir.pdf.*

RUSSELL, Stuart J., y Peter Norvig. "Inteligencia Artificial: un enfoque moderno." 2ª ed. Madrid: Pearson Educación, 2004. Disponible en: *https://luismejias21.files.wordpress.com/2017/09/inteligencia-artificial-un-enfoque-moderno-stuart-j-russell.pdf.*

SAINI, Ángela. *El patriarcado: Los orígenes de la dominación masculina*. España: Editorial Kairós, 2024.

SEN, Amartya y Foster, James E. *La desigualdad económica*. España: Fondo de Cultura Económica, 2001.

SHOTWELL, Peter. *Go! More Than a Game.* Ucrania: Tuttle Publishing, 2011.

SIMONS, Henry C. "A Positive Program for Laissez Faire (Some Proposals for a Liberal Economic Policy)." U.S.A.: Universidad de Chicago, 1934. Disponible en: *https://archive.org/details/1934-simons-a-positive-program-for-laissez-faire-some-proposals-for-a-liberal-economic-policy.*

SMITH, Adam. "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations." Trad. de Carlos Rodríguez Braun. Londres: Titivillus, 1776. Disponible en: *https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/1%20La%20riqueza%20de%20las%20Adam%20Smith.pdf.*

SMITH, Adam. "La riqueza de las naciones." Trad. de Carlos Rodríguez Braun. Madrid: Titivillus, s.f. Disponible en: *https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/1%20La%20riqueza%20de%20las%20Adam%20Smith.pdf.*

STARK, Evan. "Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life.". Reino Unido: Oxford University Press, 2007. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1GbqPpzhq5olH5cU0RZuQBRaZRytLUu9y/view?usp=drive_link.*

STIGLITZ, Joseph E. "The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future." New York: Norton & Company, 2012 .Disponible en: *https://resistir.info/livros/stiglitz_the_price_of_inequality.pdf.*

VALENCIA Carmona, Salvador. "El municipio mexicano: génesis, evolución y perspectivas contemporáneas." México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2008. Disponible en: *https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/elmunicipiomexicano.pdf.*

VAN Dijk, Teun A. *Ideología y Discurso: Una Introducción Multidisciplinaria.* 2ª ed. Barcelona: Editorial Ariel, 2008.

VELA Barba, Estefanía. "La discriminación en el empleo en México." México: Instituto Belizario Domínguez, Senado de la República, 2017. Disponible en: *https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5862/8.pdf.*

VID. Kennedy, David M. "Disuasión y prevención del delito. Reconsiderando la expectativa de Pena." Barcelona: Marcial Pons, 2016. Disponible en: *https://www.marcialpons.es/media/pdf/9788416212903.pdf.*

WEBER, Max. "La política como profesión." Editado por Joaquín Abellán, Madrid: Biblioteca Nueva, 2007. Disponible en: *https://teoriapoliticaseminario.home.blog/wp-content/uploads/2019/12/max-weber-2007-política-como-profesión-1.pdf.*

WELSH, Brandon C., y David P. Farrington. "The Oxford Handbook of Crime Prevention." U.S.A.: Oxford University Press, 2014. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=ZRo1DQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=W*

elsh,+Brandon+C.,+y+David+P.+Farrington.+The+Oxford+Handbook+of+Crime+Prevention.+Oxford+University+Press,+2012.&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwimgrXpodmHAxVmL0QIHTVsIa4Q6wF6BAgJEAE.

WIENER, Norbert. "Cybernetics: Or, Control and Communication in the Animal and the Machine." 2ª ed. Reino Unido: M.I.T. Press, 1961. Disponible en: *https://books.google.com.mx/books?id=NnM-uISyywAC&pg=PR4&dq=Wiener,+IN.+(1948).+%22Cybernetics:+Or+Control+and+Communication+in+the+Animal+and+the+Machine.%22+MIT+Press.&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwi6wcHp8tGHAxVAHEQIHeNgCowQ6wF6BAgHEAE.*

WOODHOUSE, Keith Makoto. "The Ecocentrists: A History of Radical Environmentalism." U.S.A.: Columbia University Press, 2018. Disponible en: *https://books.google.com/books?id=D0tBDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ecologismo+radical&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwjT-7LTi8CEAxW6KUQIHXr6CvwQ6wF6BAgKEAE.*

ZINN, Howard. *A People's History of the United States*. Nueva York: Harper Perennial, 1980.

ZÚÑIGA Rodríguez, Laura. "Nociones de Política Criminal." España: Universidad de Salamanca. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/14esrXPe5Yn_qVAjuEiv7Zv9F--OIorYp/view?usp=drive_link.*

Hemerografía

ALBERTO, Milo. "Olas del feminismo: etapas y evolución de la lucha de género que encabezan las mujeres." *Revista National Geographic en español*, Televisa S.A. de C.V., 8 de marzo de 2023. Disponible en: *https://www.ngenespanol.com/historia/olas-del-feminismo-cuantas-son-y-cuales-son-las-diferencias-entre-ellas/.*

ÁLVAREZ León, José Antonio. "Construcción de la imagen de la seguridad o control social multidimensional." *Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM*, vol. 3, no. 5, 2007. Disponible en: *http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/posder/cont/5/cnt/cnt5.pdf.*

ANGWIN, J., Jeff Larson, Surya Mattu, y Lauren Kirchner. "Machine Bias: There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks." *ProPublica*, 2016. Disponible en: *https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing.*

AROCHI, Ximena. "Tras años de abuso físico, mujer mata a su esposo, en Iztapalapa." *Proceso*, México, 6 de febrero de 2024. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/justicia/2024/2/6/tras-anos-de-abuso-fisico-mujer-mata-su-esposo-en-iztapalapa-323498.html.

BBC News Mundo. "Feminicidio de Ingrid Escamilla: la indignación en México por el brutal asesinato de la joven y la difusión de las fotos de su cadáver." *BBC News Mundo en línea,* 11 de febrero de 2020. Disponible en: *https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51469528.*

BBC News Mundo. "Incendio en Ciudad Juárez: identifican a los 39 fallecidos y ordenan la detención de 6 personas por la tragedia en un centro de detención de migrantes." *BBC News Mundo en línea*, 29 de marzo del 2023. Disponible en: *https://www.bbc.com/mundo/noticias-65132769.*

BRANTINGHAM, P. J., & Faust, F. L. "A conceptual model of crime prevention." Sage Journal, in Crime & Delinquency, vol. 22, no. 3, pp. 284-296, 1976. Disponible en: *https://doi.org/10.1177/001112877602200302.*

BUENROSTRO Briseño, Raúl Javier. "Prevención De la violencia contra la mujer: una crítica multinivel desde la política criminal." *RDP Revista Digital de Posgrado*, no. 9, febrero 2024. Disponible en: *https://revistardp.aragon.unam.mx/index.php/RDP/article/view/74.*

CHAPPELL, Cathryn A. "Post-secondary correctional education and recidivism: a meta-analysis of research conducted 1990-1999." The Journal of Correctional Education, vol. 55, no. 2, 2004. Disponible en: *http://www.antoniocasella.eu/nume/Chappel_2004.pdf.*

COHEN, L. E., & Felson, M. "Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach." *American Sociological Review,* vol. 44, no. 4, 1979.

Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1cLRVFoqF0B4pBEUjhvEytr5b7WW8JCNl/view?usp=drive_link.*

CONNELL, Raewyn, and James W. Messerschmidt. "Hegemonic masculinity: Rethinking the concept." *Gender and Society*, vol. 19. no. 4: pp.829-859, 2005. Disponible en: *https://xyonline.net/sites/xyonline.net/files/2019-08/Connell%2C%20Gender%20in%20World%20Perspective%2C%202nd%20Edition%20%282009%29.pdf.*

CUETO, José Carlos. "La mataviejitas: Lo que descubrí cuando investigué el caso de la asesina que recibió la condena más larga de la historia de México." *BBC News en línea*. Disponible en: *https://www.bbc.com/mundo/noticias-56980069.*

DUWE, Grant, and Susan McNeeley. "Just as good as the real thing? The effects of prison video visitation on recidivism." *Crime & Delinquency,* vol. 68. no. 1, Los Angeles, CA: SAGE Publications, 2021.

FERNÁNDEZ, Ana María. "Femicidios: La ferocidad del patriarcado." *Revista Nomadías,* no. 16, Santiago, Chile, Universidad de Chile, 2012. Disponible en: https://nomadias.uchile.cl/index.php/NO/article/download/24957/26310/81323.

FERRER-Pérez, Victoria A., y Bosch-Fiol, Esperanza. "El Género en el análisis de la violencia contra las mujeres en la pareja: de la 'ceguera' de género a la investigación específica del mismo." *Anuario de Psicología Jurídica*, vol. 29, 2019. *Disponible en: https://doi.org/10.5093/apj2019a3.*

GALTUNG, Johan. "Violence, peace, and peace research." *Journal of Peace Research*, vol. 6. no. 3, 1969. Disponible en: *https://doi.org/10.1177/002234336900600301.*

GIRALDO, Octavio. "El machismo como fenómeno psicocultural." *Revista Latinoamericana de Psicología*, vol. 4. no. 3, pp. 295-309. ISSN: 0120-0534, 1972. Disponible en: *https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80540302.*

GLATZEL, Gustavo A. "Clases diversas en las escuelas de Estados Unidos: La importancia de una educación inclusiva." *Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva*, vol. 10. no. 2. pp. 79-98. 2017. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6545216.pdf.

GOLDFARB, Sally F. "The Supreme Court, the Violence Against Women Act, and the Use and Abuse of Federalism." *Fordham Law Review*, vol. 71, no. 1, 2002. Disponible en: *https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=3851&context=flr.*

GONZÁLEZ, Sara y Barrientos Nieto, Omar. "Jóvenes Construyendo el Futuro 2024: Requisitos, Cuánto Pagan y Cómo Inscribirse al Programa." *El País*, 10 de enero de 2024. Disponible en: *https://elpais.com/mexico/2024-01-10/jovenes-construyendo-el-futuro-2024-requisitos-cuanto-pagan-y-como-inscribirse-al-programa.html.*

GUZMÁN Camacho, José Juan. "El ejercicio del derecho al olvido en México." *Revista Estudios en Derecho a la Información*, no. 16, UNAM, julio-diciembre 2023. Disponible en: *https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8913366.*

HARO Martinez, Alma Angelina, y Taddei Bringas, Isabel Cristina. “Sustentabilidad y economía: la controversia de la valoración ambiental.” Toluca: Economía, sociedad y territorio, vol. 14, n. 46, pp. 743-767, 2014. Disponible en: *http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-84212014000300007&lng=es&nrm=iso.*

HIKAL Carreon, Wael Sarwat. "Prevención social del delito a través de los derechos humanos: un vínculo ignorado." *Revista Criminología en línea*, 2011, vol. 53, n. 1. Disponible en: *http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082011000100005&lng=en&nrm=iso.*

INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Defunciones por Homicidio: Enero a Junio de 2023 (Preliminar).” *Comunicado de prensa número 25/24,* 23 de enero de 2024. Disponible en: *https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/DH/DH2023_En-Jn.pdf.*

INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.” *Comunicado de Prensa Núm. 485/22*. México: INEGI, 2022. Disponible en: *https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/endireh/Endireh2021_Nal.pdf.*

INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023.” *Comunicado de Prensa Núm. 546/23*. México: INEGI, 2023. Disponible en: *https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENVIPE/ENVIPE_23.pdf.*

JESÚS Zavala. "Mujer asesina a su novio dentro de su casa en Cuautlancingo, Puebla." *Telediario*, México, 3 de noviembre de 2023. Disponible en: *https://www.telediario.mx/policia/mujer-asesina-a-su-novio-en-cuautlancingo-puebla.*

JOHNSON, Austin. Hill, Ivy. Beach-Ferrara, Jasmine. Rogers, Baker A. y Bradford, Andrew. "Common barriers to healthcare for transgender people in the U.S. Southeast*." International Journal of Transgender Health*, vol. 21, no. 1, 2020. Disponible en: *https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15532739.2019.1700203.*

LIOMAN Lima. "Feminicidio de Ingrid Escamilla: por qué el asesinato de la joven ha provocado protestas en México." *BBC News Mundo en línea*, 16 de febrero de 2024. Disponible en: *https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51518716.*

MARTÍNEZ Rangel, Rubí y Ernesto Soto Reyes Garmendia. "El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina." México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2012. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n37/n37a3.pdf.

MARTÍNEZ, Martha. "Reclama Oposición afectación ambiental con Tren Maya." *Periódico Reforma en línea*, 30 de noviembre de 2023. Disponible en: *https://www.reforma.com/reclama-oposicion-afectacion-ambiental-con-tren-maya/ar2719763.*

MELGOZA Rocha, Alejandro. "Ecatepec, el Lugar Más Peligroso para las Mujeres en México." *Agencia Anadolu*, 16 de octubre de 2018. Disponible en: *https://www.aa.com.tr/es/mundo/ecatepec-el-lugar-m%C3%A1s-peligroso-para-las-mujeres-en-m%C3%A9xico/1283510.*

MINKEBERG, M. "The renewal of the radical right: Between modernity and anti-modernity." *Government and Opposition*, vol. 35, no. 2, 2000. Disponible en: *https://is.muni.cz/el/1423/podzim2005/SOC765/um/Radical_Right_in_CEE.pdf.*

PÉREZ Contreras, Ma. de Monserrat. "Comentario a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: Convención de Belem do Pará." *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nueva serie, año XXXII, núm. 95, mayo-agosto de 1999. Disponible en: *https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/download/3601/4346/4357.*

ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud. "La violencia contra la mujer es omnipresente y devastadora: la sufren una de cada tres mujeres*." Comunicado de prensa conjunto.* OMS, 2021. Disponible en: https://www.who.int/es/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence.

PONTÓN Cevallos, J. "El populismo: ¿una amenaza a la democracia en América Latina? Un diálogo con Kurt Weyland." *Revista de Ciencias Sociales*, Iconos, no. 55, pp. 163-168, 2016. Disponible en: *https://www.redalyc.org/pdf/509/50945652008.pdf.*

POOLE, Linda J. "Educar y promover el rechazo a la violencia." *Milenio*, México, 28 de octubre de 2013. Disponible en: *https://www.oas.org/es/CIM/docs/Poole_Todas.pdf.*

PREDIERI, Alberto. "Estado y mercado: La ósmosis como elemento cualificador y legitimante." Trad. de Elvira Ascención. *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, no. 17, enero-abril, pp. 9-68, 1994. Disponible en: *https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1051362.pdf.*

REDACCIÓN/GH. "Mujer mata a su esposo con más de 66 puñaladas en Jalisco." *El Imparcial*, México, 19 de octubre de 2023. Disponible en: *https://www.elimparcial.com/mexico/2023/10/19/mujer-mata-a-su-esposo-con-mas-de-66-punaladas-en-jalisco/.*

RODRÍGUEZ Alcázar, Javier. "La noción de 'seguridad humana': sus virtudes y sus peligros." *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, Chile, Edalyc, vol. 4, núm. 11, 2005. *Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30541114.*

SOLÍS, Fernando. "Edomex, primer lugar nacional en feminicidios durante 2023." *El Sol de México*, México, 7 de enero del 2024. Disponible en: *https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/edomex-primer-lugar-nacional-en-feminicidios-durante-2023-11249225.html#:~:text=De%20acuerdo%20a%20cifras%20de,feminicidio%20de%20enero%20a%20noviembre.*

STEPHANIE Brewer. "Corte IDH ordena a México eliminar arraigo y modificar prisión preventiva." *Washington Office on Latin America*, 2023. Disponible en: *https://www.wola.org/es/analisis/corte-idh-mexico-eliminar-arraigo-prision-preventiva/.*

SUN. "Así es el plan de Sheinbaum para consolidar a la GN como parte de la Sedena." *Periódico digital: INFORMADOR.MX*, 24 de junio de 2024. Disponible en: *https://www.informador.mx/mexico/Asi-es-el-plan-de-Sheinbaum-para-consolidar-a-la-Guadia-Nacional-como-parte-de-la-Sedena-20240624-0063.html.*

SWIM, Hyers, Cohen y Ferguson. "Everyday Sexism: Evidence for Its Incidence, Nature, and Psychological Impact From Three Daily Diary Studies." *Journal of Social Issues*, U.S.A. Vol. 57, No. 1, 2001. Disponible en: *https://www.researchgate.net/publication/232570669_Experiencing_Everyday_Prejudice_and_Discrimination.*

Legisgrafía

ARCHIVO Histórico y Memoria Legislativa. "Boletín: Alcanzando la paridad de género: una lucha histórica." México, Senado de la República; LXIV Legislatura, 2023. Disponible en: *https://micrositios.senado.gob.mx/AHyML/files/Boletin_80_Alcanzando_la_paridad_de_genero_una_lucha_historica.pdf.*

ASAMBLEA General de las Naciones Unidas. “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.” Adoptado el 16 de diciembre de 1966. Disponible en: *https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights.*

BOLÍVAR, Simón. “Carta de Jamaica, México.” Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2021. Disponible en: *https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/Carta_de_jamaica%20.pdf.*

COMISIÓN Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir.” CEPAL, 2010. Disponible en: *https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/85bd1b9a-8da1-4679-98b3-487f16f2606e/content.*

COMISIÓN Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos (OEA).” ISBN 978-0-8270-5431-8, 2009. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1GsTwMyISBa-rET9HITYVHpq14CxIKcQM/view?usp=drive_link.*

CONGRESO de la Ciudad de México. “Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.” Ciudad de México, Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 2019. Disponible en: *https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cdf1d09f332b91ca90a141c0980805a02fa6a7cf.pdf.*

CONGRESS of the United States. “Tributes Delivered in Congress for Barbara A. Mikulski.” Washington D.C.: Government Printing Office, 2012. Disponible en: *https://www.govinfo.gov/content/pkg/CDOC-112sdoc6/pdf/CDOC-112sdoc6.pdf.*

CONGRESSIONAL Research Service. "Family Violence Prevention and Services Act (FVPSA): Background and Funding." USA, Congressional Research Service, 2022. Disponible en: *https://sgp.fas.org/crs/misc/R42838.pdf.*

CONGRESSIONAL Research Service. "The 2022 Violence Against Women Act (VAWA) Reauthorization." USA, Congressional Research Service, 2023. Disponible en: *https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47570/2.*

CONSEJO de Europa. “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.” Estambul. 2011. Disponible en: *https://rm.coe.int/1680462543.*

CONSEJO General del Poder Judicial. "Guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género." Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 2022. Disponible en: *https://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20ACTIVIDAD%20JUDICIAL/ESTUDIOS%20Y%20ENCUESTAS/ESTUDIOS/FICHERO/20221013%20Gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20para%20la%20toma%20de%20declaraci%C3%B3n%20de%20v%C3%ADctimas%20de%20violencia%20g%C3%A9nero.pdf (fecha de consulta: 3 de agosto de 2024).*

CORTE Interamericana de Derechos Humanos. "Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, Sentencia de 7 de noviembre de 2022, (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 470." San José, Costa Rica: CIDH. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1GxvosBrVK6zVmGCmFTnPBtaYAp7YI8jO/view?usp=sharing.*

CORTE Interamericana de Derechos Humanos. “Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México.” Serie C No. 205, 2009. Disponible en: *https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf.*

CUARTA Conferencia Mundial sobre la Mujer. “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.” Beijing: Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995. México, Gobierno federal. Disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/10288/3CONFERENCIA_MUNDIAL_MUJER_BEIJING_1995.pdf.*

FERNÁNDEZ L., Guillermo. "Los conceptos de Seguridad Ciudadana y Seguridad Humana." Asesoría Técnica Parlamentaria, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, junio 2023. Disponible en: *https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/34315/2/GRID_GF_Seguridad_Humana_y_Seguridad_Ciudadana.pdf (fecha de consulta: 15 de julio de 2024).*

FISCALÍA General de Justicia del Estado de México. "Oficio Ecatepec (Número de NIC: CGO/JMA/00/MP1184/03959/22/12, Número de NUC: CHA/CGO/IMA/009/350268/22/12)." 2022. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1fAWEZxcORVdZPC5KJJ4PrgmvPfgw8D-u/view?usp=drive_link.*

FISCALÍA General de Justicia del Estado de México. "Oficio Neza (Número de NIC: CGO/JMA/O0/MP184/03959/22/12, Número de NUC: CHA/CGO/JMA/009/350268/22/12)." 2022. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1RCeIqlSLltPLKMnrJ66m7aOOEc3xiyOz/view?usp=drive_link.*

GALLARDO Ch., Gonzalo. “Sostener Cuidar: lineamientos para el apoyo socioemocional en las comunidades educativas.” Santiago de Chile: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, 2021. Disponible en: *https://www.unicef.org/chile/media/5701/file/Sostener%20cuidar%20.pdf#:~.*

GASTÉLUM Bajo, Diva. “Consejo de Europa.” México, Senado de la República LXII Legislatura, s.f. Disponible en: *https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-10-23-1/assets/documentos/Informe_Sen_Gastelum_Roma.pdf.*

GRUPO de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO). “Primer Informe de Evaluación de GREVIO sobre las Medidas Legislativas y de Otra Índole que Dan Efecto a las Disposiciones del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).” España, Strasbourg: Consejo de Europa, 2020. Disponible en: *https://violenciagenero.igualdad.gob.es/marcoInternacional/informesGREVIO/docs/InformeGrevioEspana.pdf.*

INSTITUTO de Formación Profesional (IFP). "Convocatoria de Ingreso al Cargo de Agente a la Policía de Investigación: Carrera de Técnico Superior Universitario en Investigación Policial." Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 2017. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1bqqdSAqTuEDym5ImQcBakop7hazy5oJR/view?usp=drive_link (fecha de consulta: 29 de julio de 2024).*

INTER-American Commission of Women. “Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas (Femicidio/Feminicidio).” Washington D.C., Organization of American States, 2018. Disponible en: *https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/leymodelofemicidio-es.pdf.*

INTERNATIONAL Development Law Organization. “Justicia para las Mujeres: Informe del Grupo de Alto Nivel, Nueva York.” ONU Mujeres. 2019. Disponible en: *https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Justice-for-women-High-level-group-report-es.pdf.*

LARS Møller, Heino Stöver, Ralf Jürgens, Alex Gatherer y Haik Nikogosian. "Health in Prisons: A WHO Guide to the Essentials in Prison Health." Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2007. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/107829/9789289072809-eng.pdf?sequence=16&isAllowed=y.

MÉXICO. “Código Penal del Estado de México.” Última reforma 05-04-2024. Disponible en: *https://appsma.edomex.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2024/05/codvig006.pdf.*

MÉXICO. “Código Penal Federal.” Última reforma 17-04-2024. Disponible en: *https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf.*

MÉXICO. “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Última reforma 22-03-2024. Disponible en: *https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf.*

MÉXICO. “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. Última reforma 26-01-2024. Disponible en: *https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf.*

MÉXICO. “Ley General de Educación.” Última reforma 07-06-2024. Disponible en: *https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf.*

MÉXICO. “Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.” Última reforma 25-04-2023. Disponible en: *https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf.*

MÉXICO. “Ley Nacional de Ejecución Penal.” DOF 16 de junio de 2016. Disponible en: *https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf.*

MINISTRY of Social Development. “Family Violence Funding Approach: Building a Sustainable Future for Family Violence Services.” New Zealand: Ministry of Social Development, 2019. Disponible en: *https://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/work-programmes/initiatives/family-and-sexual-violence/family-violence-funding-approach.pdf.*

NACIONES Unidas. "Carta de las Naciones Unidas." 26-06-1945, San Francisco. Disponible en: *https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/carta_nu.pdf.*

NACIONES Unidas. "Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer," New York, USA, ONU Mujeres, 2018. Disponible en: *https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/62/UNW_CSW61_Brochure_SP-WEB%20Final.pdf.*

NACIONES Unidas. "Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer 19 de junio a 2 de julio de 1975, Ciudad de México," México, Naciones Unidas, s.f., disponible en: *https://www.un.org/es/conferences/women/mexico-city1975.*

NACIONES Unidas. "Conferencias mundiales sobre la mujer," ONU Mujeres, s.f., disponible en: *https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women.*

NACIONES Unidas. "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer." ONU, New York, USA, 1979. Disponible en: *http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf.*

NACIONES Unidas. "Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)." Naciones Unidas, 2015. Disponible en: *https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf.*

NACIONES Unidas. "Declaración y Plataforma de Acción de Beijing." ONU Mujeres, 2014. Disponible en: *https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf.*

NACIONES Unidas. “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).” Adoptadas por la resolución 70/175 de la Asamblea General, el 17 de diciembre de 2015. Disponible en: *https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf.*

ORGANIZACIÓN de los Estados Americanos. “Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Pacto de San José, Costa Rica").” Firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Disponible en: *https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm.*

PODER Judicial del Estado de México (PJEM). "Sentencia de Procedimiento Abreviado en la Carpeta Administrativa 873/2013." Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, 2014, p. 1. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1Wcuc_l3Zp_DPnN58nvwSK73WqVEtm_z-/view?usp=sharing.*

PROCURADURÍA General de Justicia del Estado de México (PGJEM). "Noticia Criminal 2581/13." Gobierno del Estado de México, 2013, p. 13. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1TJ-NgiIBagvTyr-q-NC-x3pjSW01QE01/view?usp=sharing.*

REYES Chávez, Estephanye. "Carpeta de investigación (Número de NIC: CGO/JMA/00/MP1/184/03959/22/12, Número de NUC: CHA/CGO/JMA/009/350268/22/12)." Centro de Justicia para las Mujeres Amecameca, 2022. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/10-VPicR_5qU5PI4T3t510TVxnwiZgQB5/view?usp=drive_link.*

SECRETARÍA de Gobernación, Secretaría de la Función Pública, e Instituto Nacional de las Mujeres. "Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual." México, Diario Oficial de la Federación en línea, 3 de enero de 2020. Disponible en: *http://cerotolerancia.inmujeres.gob.mx/docs/protocolo.pdf.*

SECRETARÍA de Hacienda y Crédito Público. "Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024." México, SHCP. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1lEgNUKGY7jRCqtVybRakn8PGsUdnn8Yk/view?usp=sharing.*

SECRETARÍA de Seguridad del Estado de México. "Constancia de Asistencia al Curso: Formación Inicial para Policía de Investigación (Activos)." Lerma, Estado de México, agosto de 2019. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1Ppeq1dv1vdOy_Eozavh5rATWFkPAw7NR/view?usp=sharing.*

SECRETARÍA de Seguridad del Estado de México. "Lineamientos de Actuación de la Policía de Género para los Municipios del Estado de México." Publicado el 20 de julio de 2023, Sección Primera, Tomo: CCXVI No. 14. Disponible en: *https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2023/julio/jul201/jul201a.pdf.*

SECRETARÍA de Seguridad y Protección Ciudadana. "Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional." Ciudad de México, SSPC, septiembre de 2023. Disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/915856/CE_2023_08.pdf.*

SECRETARÍA de Seguridad, Gobierno del Estado de México. “Historia.” Disponible en: *http://sseguridad.edomex.gob.mx/seguridad-infantil/conce-aces/historia#:~:text=En%201826%20se%20cre%C3%B3%20un,poblaci%C3%B3n%20en%20caso%20de%20incendios.*

SECRETARÍA General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA). "Abriendo caminos, construyendo igualdad: 95 años de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)." OEA, ISBN: 978-0-8270-7617-4, 2023. Disponible en: *https://www.oas.org/es/cim/docs/95a_CIM_ESP.pdf.*

SECRETARIADO Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). "Programa Rector de Profesionalización 2024." México, SESNSP, 2024. Disponible en: *https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/884930/DGAT_Actualizacio_n_PRP_22_Enero_2024.pdf.*

SEPÚLVEDA, Magdalena. "De la retórica a la práctica: el enfoque de derechos en la protección social en América." Naciones Unidas, 2014. Disponible en: *https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/35912/S2014131_es.pdf.*

TAMAYO Campos, Mariza. "Pre denuncia (Folio: PREDENUNCIA/WEB/0095628/20/11)." Fiscalía General de Justicia del Estado de México, 2020. Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/15W244kBqwMnqIZPMwijsXTVQyBDDWuOl/view?usp=drive_link.

U.S. Department of Housing and Urban Development. "Housing Needs of Survivors of Human Trafficking Study." Trad. propia, USA, Office of Policy Development and Research, 23 de febrero de 2024. Disponible en: *https://www.huduser.gov/portal/portal/sites/default/files/pdf/Housing-Needs-of-Survivors-of-Human-Trafficking-Study.pdf.*

Filmografía

EDUCACIÓN Humana Coaching Integral. "Desmontando la agenda oculta desde el lenguaje, con Carmen Jiménez Huertas, Carlos Senra & Luis Palacios." Video, 5 de marzo de 2021. Disponible en: *https://www.youtube.com/watch?v=VQd1RqlDB7M.*

IUS Canal Multimedia. "#ElMundoDelDerechoPenal: Narcodelincuencia Globalizada." Video, 14 de junio de 2023. Disponible en: *https://www.youtube.com/watch?v=gR44EkBbM-0&t=46s.*

BRISENO, Raúl. "La violencia de género en México." Video, 21 de mayo de 2024, min. 59:04. Disponible en: *https://www.youtube.com/watch?v=PDtwiJy32Kk.*

EMMERICH, Roland. 10,000 AC. Película, USA, 2008.

SHEINBAUM, Claudia. "Mi sueño es que todos los niños y niñas que van a escuela pública tengan una beca." Video, 21 de noviembre de 2023. Disponible en: *https://www.youtube.com/watch?v=D4BloX17z6w.*

GALVEZ, Xochitl. "Quiero que salir adelante sea mucho más fácil." Video, 30 de diciembre de 2023, 0:49 min. Disponible en: *https://www.youtube.com/watch?v=dwR1_Mg1Jb4.*

ZALLA, Christopher. Radical. Película, México, 2023.

Otros materiales: Sitios web, recursos digitales, blogs, conferencias, presentaciones, entrevistas y/o exposiciones.

ARCHIVO General de la Nación. 210 Años de los Sentimientos de la Nación *Exposición*. Ciudad de México, México, 27 de septiembre del 2023. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1bA15BaruHMwPqUXiabG7zHIB403lfT-g/view?usp=drive_link.*

ARTEMISIA Gentileschi. Judith Slaying Holofernes, 1620, Florencia, Italia, Galería de los Uffizi, visita virtual disponible en: *https://www.uffizi.it/gli-uffizi.*

ASOCIACIÓN Americana de Psiquiatría. Guía De consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 2013. Disponible en: *https://www.eafit.edu.co/ninos/reddelaspreguntas/Documents/dsm-v-guia-consulta-manual-diagnostico-estadistico-trastornos-mentales.pdf.*

BAN, Ki-moon. "Ban: Los derechos humanos y el Estado de Derecho son vitales para el desarrollo." Naciones Unidas, 2014. Disponible en: *https://news.un.org/es/story/2014/06/1303491.*

BAN, Ki-moon. "Memoria Del Secretario General sobre la labor de la Organización." Naciones Unidas, 2012. Disponible en: *https://www.un.org/es/sg/speeches/reports/68/report-growth.shtml.*

BUENROSTRO Briseño, Raúl Javier, Irineo León, Alejandra Rosario, Mena Valdez, Olivia Lizbeth, Moreno Acosta, Nadia Marisol, López Rodríguez, Marcela, Trejo Constantino, Wendy Rubí. "Elementos Estructurales en el ámbito de la política criminal." *Conversatorio*, México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México, 2024. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/186-NtMGGoseo7daGB2K6lKGtmPEACil1/view?usp=drive_link.*

BUENROSTRO Briseño, Raúl Javier. "Liga Zoom - Entrevista." *Mensaje de correo electrónico a Coordinación de Políticas Públicas*, Fiscalía Central Para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, 18 de septiembre de 2023. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1E1qmlboUWWKr0DuyuZGJmaP1GFuERbFT/view?usp=drive_link.*

BUENROSTRO Briseño, Raúl Javier. "Solicitud De Entrevista a Mtra. Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, Fiscal Central de Atención a Delitos Vinculados a la Violencia de Género." 11 de septiembre de 2023. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1ebMrKv2Sh6hY8YL1uS7XsxEiL7DwpawL/view?usp=drive_link.*

CALIXTO Márquez, Roberto. "Narco Delincuencia globalizada." *Conferencia*, presentada en las Jornadas de Política Criminal, México, UNAM, Facultad de Estudios Superiores Aragón, 28 de abril de 2023. Cartel disponible en:

https://drive.google.com/file/d/13hRckaDWYdR2PKTSUd8ImiTU8pcPKiTh/view?usp=drive_link.

CALIXTO Márquez, Roberto. "Visiones Criminológicas del delito y del delincuente." *Presentación*, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Maestría en Política Criminal. Disponible en: *https://docs.google.com/presentation/d/16o-Ch_E8G98umA7XmzJ1EVx8fP7w7Yf-/edit?usp=sharing&ouid=103952795350638508265&rtpof=true&sd=true.*

CARRARA. *La Piedad*, 2006-2012, Ciudad de México, Museo Soumaya, [Réplica a partir del mármol de Michel Ángelo Buonarroti, esculpido entre 1498-1499, ubicada en la Santa Sede, Ciudad del Vaticano].

COMISIÓN Nacional de Derechos Humanos México. "Caída Del Muro de Berlín." CNDH México, s.f. Disponible en: *https://www.cndh.org.mx/noticia/caida-del-muro-de-berlin-0.*

ESPINOZA Reyes, Verónica. "Lucha Política y educativa en la defensa del artículo 3º constitucional." *Entrevista*, México, 2024, 1:50 min. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1JPwagQEUpmbnjhg34UTIFSGgl0roWrG0/view?usp=drive_link.*

FARHA, Leilani. “Resumen Del informe de la Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada.” A/HRC/31/54, ONU, 2024. Disponible en: *http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AnnualReports.aspx.*

FISHER, Bonnie S. "Violence Against Women and Family Violence: Developments in Research, Practice, and Policy.” Washington: Department of Justice, 2004. Disponible en: *https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/199701.pdf.*

GAES, Gerald G. "The Impact of Prison Education Programs on Post-Release Outcomes." *Ponencia presentada en la Reunión de la Mesa Redonda sobre Reintegración*, 31 de marzo - 1 de abril de 2008. Disponible en: *http://www.antoniocasella.eu/nume/Gaes_2008.pdf.*

GOBIERNO de México. Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, México, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2018. Disponible en: *https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/pdf.pdf.*

HARPER, Douglas. *Online Etymology Dictionary*, 2023. Disponible en: *https://www.etymonline.com/word/violence.*

HIDALGO, Rosie. "Violence Against Women Act: Milestones Achieved and the Road Ahead." *Blog post*, USA, Office on Violence Against Women (OVW) U.S. Department of Justice, miércoles 13 de septiembre de 2023. Disponible en: *https://www.justice.gov/ovw/blog/violence-against-women-act-milestones-achieved-and-road-ahead.*

INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023.” México: INEGI, 2023. Disponible en: *https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2023/doc/cnsipef_2023_resultados.pdf.*

INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los Ámbitos Federal y Estatal (CNSIPEE-F) 2023.” México: INEGI, 2023. Disponible en: *https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/CNSIPEE-F/CNSIPEE-F2023.pdf.*

INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021.” México: INEGI, 2021. Disponible en: *https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf.*

INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Tasa de abandono escolar por entidad federativa según nivel educativo, ciclos escolares seleccionados de 2000/2001 a 2022/2023.” México: INEGI. Disponible en: *https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educacion_11_c6aa7c65-4d89-4eaf-972e-431727fc686d.*

INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía. "Población de 15 años y más por entidad federativa según condición de alfabetismo." *Programas de información en línea*, México: INEGI 2020. Disponible en: *https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Educacion_Educacion_02_fa5c35ea-9385-41f0-86df-bf2bbfc929e3.*

INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía. "Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema." *Sistema de consulta en línea*, México: INEGI, 2023. Disponible en: *https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6200116867&tm=8#D6200116867#D6200116870.*

INSTITUTO para la Economía y la Paz. “Resumen Índice de Paz México 2024.” México: Institute for Economics and Peace, 2024. Disponible en: *https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2024/05/MPI-ESP-2024-briefing-web.pdf.*

LORENZ, Edward N. "Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas?" *Conferencia*, Presentado en la American Association for the Advancement of Science, 29 de diciembre de 1972. Disponible en: *https://static.gymportalen.dk/sites/lru.dk/files/lru/132_kap6_lorenz_artikel_the_butterfly_effect.pdf.*

MELGOZA Rocha, Alejandro. "Ecatepec, el Lugar Más Peligroso para las Mujeres en México." *Agencia Anadolu*, 16 de octubre de 2018. Disponible en:

https://www.aa.com.tr/es/mundo/ecatepec-el-lugar-m%C3%A1s-peligroso-para-las-mujeres-en-m%C3%A9xico/1283510

MÉXICO Evalúa. "Crece la cifra negra de la violencia sexual: en 2021, el 99.7% de los casos no se denunciaron." México, 2022. Disponible en: *https://www.mexicoevalua.org/crece-la-cifra-negra-de-la-violencia-sexual-en-2021-el-99-7-de-los-casos-no-se-denunciaron/.*

NACIONES Unidas. "La violencia de género es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo, 2023." Disponible en: *https://unric.org/es/la-violencia-de-genero-segun-la-onu/.*

NAKAHODO Rivera, Antonio Cholley. "Narco Delincuencia Globalizada." *Conferencia*, presentada en las Jornadas de Política Criminal, México, UNAM, Facultad de Estudios Superiores Aragón, viernes, 28 de abril de 2023. Cartel disponible en: *https://drive.google.com/file/d/13hRckaDWYdR2PKTSUd8ImiTU8pcPKiTh/view?usp=drive_link.*

NATIONAL Network to End Domestic Violence. "Family Violence Prevention and Services Act," USA, 2023. Disponible en: *https://nnedv.org/content/family-violence-prevention-services-act/.*

ONU Mujeres. "Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, 2023." Disponible en: *https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence.*

ONU Mujeres. "Violencia digital contra las mujeres y las niñas." México: UN Women Office Publishing, 2023. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1JzKd6r95puasYBiqHgf9oOTLhU9dMHEd/view?usp=drive_link.*

ORGANIZACIÓN Mundial de la Salud. "Violencia contra la mujer, 2021." Disponible en: *https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women.*

ORGANIZACIÓN Panamericana de la Salud. "Violencia contra la mujer, 2023." Disponible en: *https://www.paho.org/es/temas/violencia-contra-mujer.*

ORGANIZACIÓN para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). "Education at a Glance 2011: OECD Indicators." OECD Publishing, 2011. Disponible en: *https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/eag-2011-en.pdf?expires=1714341302&id=id&accname=guest&checksum=168832849713E899B104171497C4535F.*

PROFESOR de bachillerato. "El impacto del neoliberalismo radical implementado en el primer nivel preventivo." *Entrevista*, México, 2024, 1:26 min. Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1Lj0LkOyoicyGGATwaJWeLo2QCHeco3EN/view?usp=drive_link.

PROFESORA de primaria. "El interés superior de la niñez en la educación primaria." *Entrevista*, México, 2024, 5:53 min. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/185DkyCmVGoSllCNzyZgKoBtU3tzAke7W/view?usp=drive_link.*

PROFESORA de secundaria. "Análisis empírico del primer nivel preventivo de violencia en secundarias." *Entrevista*, México, 2024, 4:51 min. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1Tw-xmnFlTxGrrY0eQBsbTl_g_aCrbnzI/view?usp=sharing.*

PROFESORA militante. "El rol del SNTE en la política y la prevención de la violencia contra la mujer." *Entrevista*, México, 2024, 3:56 min. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1kShyJBEtB49yi-asnPnOUiPg1yjIG0CA/view?usp=drive_link.*

PROGRAMA de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). "Informe sobre Desarrollo Humano 1994." México: Fondo de Cultura Económica, 1994. Disponible en: *https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1994escompletonostats.pdf.*

PROGRAMA de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). "Informe sobre Desarrollo Humano 2013: El ascenso del Sur, Progreso humano en un mundo diverso." Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013. Disponible en: *https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2013essummary.pdf.*

PROGRAMA de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). "Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: Diagnóstico y Propuestas para América Latina." Nueva York: PNUD, 2013. Disponible en: *https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/informe-regional-de-desarrollo-humano-2013-2014.*

REYES Chávez, Estephanye. "Carpeta de investigación (Número de NIC: CGO/JMA/00/MP1/184/03959/22/12, Número de NUC: CHA/CGO/JMA/009/350268/22/12)." Centro de Justicia para las Mujeres Amecameca, 2022. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/10-VPicR_5qU5PI4T3t510TVxnwiZgQB5/view?usp=drive_link.*

SALGADO Ruiz, Henry. "El Plan Colombia, una política de (in)seguridad humana para las poblaciones del Putumayo." Bogotá D.C., marzo de 2004. Disponible en: *https://reliefweb.int/report/colombia/el-plan-colombia-una-pol%C3%ADtica-de-inseguridad-humana-para-las-poblaciones-del.*

SECRETARÍA de Seguridad del Estado de México. "Constancia de Asistencia al Curso: Formación Inicial para Policía de Investigación (Activos)." Lerma, Estado de México, agosto de 2019. Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1Ppeq1dv1vdOy_Eozavh5rATWFkPAw7NR/view?usp=sharing.

STEPHANIE Brewer. "Corte IDH ordena a México eliminar arraigo y modificar prisión preventiva." Washington Office on Latin America en línea, 2023. Disponible en: *https://www.wola.org/es/analisis/corte-idh-mexico-eliminar-arraigo-prision-preventiva/.*

TECHOPEDIA. "Meta AI Chatbot Now Available on WhatsApp: Here's How To Use It." Techopedia, 23 de julio de 2024. Disponible en: https://www.techopedia.com/news/meta-ai-chatbot-now-available-on-whatsapp-heres-how-to-use-it (fecha de consulta: 1 de agosto de 2024).

THE World Justice Project. "Rule of Law Index 2022." USA, World Justice Project, ISBN: 978-1-951330-52-1, 2022. Disponible en: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global.

UNAM. 2ª Edición Nuevos Paradigmas de la Política Criminal en México, "Conversatorio Nuevos Paradigmas de la Política Criminal en México." Organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, Aula Magna del Edificio de Posgrado, 6, 8 y 9 de mayo, 2024. Flyer disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1mUoJaxaOyG122ieYMYv1yCNTesRUN6rv/view?usp=sharing.*

UNESCO. "Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education: All Means All." Paris: UNESCO, 2020. Disponible en: *https://reliefweb.int/attachments/ac4efd7d-f76f-31ec-8bb4-9eade7a12d56/Global%20Education%20Monitoring%20Report%202020%20-%20Inclusion%20and%20education%20-%20All%20means%20all%20%5BEN%5D.pdf*.

UNIVERSIDAD Autónoma del Estado de México (UAEMEX). "Licenciatura en Seguridad Ciudadana." *Archivo PDF*, México, UAEMEX. Disponible en: *http://denms.uaemex.mx/exporientavirtual/wp-content/uploads/2024/04/Seguridad_Ciudadana_20241.pdf.*

VELARDE Flores, Cecilia Lorena y Velázquez Contreras, Lorenia. "Microcréditos y autonomía económica de las mujeres en situación de pobreza: un análisis bibliométrico." *Región y sociedad*. 2023, vol.35 [citado 2024-07-02], e1719. Disponible en: *http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252023000100101&lng=es&nrm=iso, Epub 02-Jun-2023, ISSN 2448-4849.*

VIRIDIANA. "Violencia telefónica." *Entrevista*, México, 2023, 0:36 min. Disponible en: *https://drive.google.com/file/d/1M2JIrPoaE1gM3cp7cR8TtxeyTOTSq8Ga/view?usp=drive_link.*

WASHINGTON State Institute for Public Policy. "Evidence-Based Adult Corrections Programs: What Works and What Does Not." Olympia, Washington State: Institute for Public Policy, 2006. Disponible en:

https://www.wsipp.wa.gov/ReportFile/924/Wsipp_Evidence-Based-Adult-Corrections-Programs-What-Works-and-What-Does-Not_Preliminary-Report.pdf.

WEISBURST, Emily. "Safety in Police Numbers: Evidence of Police Effectiveness from Federal COPS Grant Applications." USA, 2017. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2845099.

WHITE House. "Release of the National Plan to End Gender-Based Violence: Strategies for Action." *Informe*, Washington DC, White House, 2023. Disponible en: *https://www.whitehouse.gov/gpc/briefing-room/2023/05/25/release-of-the-national-plan-to-end-gender-based-violence-strategies-for-action/.*

WILLIAMSON, John. "A Short History of the Washington Consensus." Trad. propia, New York, *Initiative for Policy Dialogue*, 2007. Disponible en: https://policydialogue.org/files/publications/papers/Ch_2.pdf (fecha de consulta: 19 de agosto de 2024).

WILSON, Woodrow, y Daniels, Josephus. "Woodrow Wilson: Speeches, Inaugural Addresses, State of the Union Addresses, Executive Decisions & Messages to Congress." Chequia: Good Press, 2023. Disponible en: https://books.google.com/books?id=rxPmEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=woodrow+wilson&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwiMvJqN68yFAxUuHkQIHSJ2DGIQ6wF6BAgEEAE.

ZAVRŠNIK, A. “Criminal justice, artificial intelligence systems, and human rights,” *ERA Forum 20*, 2020. Disponible en: *https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00602-0.*